



Revista **Europea**

DE HISTORIA de las

**I**DEAS POLÍTICAS  
y de las  
Instituciones Públicas



REVISTA EUROPEA DE HISTORIA DE LAS IDEAS  
POLÍTICAS Y DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

NÚMERO 1

MARZO-2011

*UNIVERSIDAD DE MÁLAGA*

La «Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas» es una publicación electrónica de periodicidad semestral, que incorpora el sistema de referees por pares para la edición de los artículos. Dicho criterio no se aplica a la sección de recensiones, bajo el control del director y de la vicesecretaria de redacción. Las lenguas de publicación son el español, francés, inglés, italiano, alemán, polaco, portugués, holandés, catalán, húngaro, croata, búlgaro y sueco. Asimismo, se acompañarán resúmenes y palabras clave en dos lenguas de las anteriormente indicadas. Esperamos que el surgimiento de este medio sea el inicio de una larga cadena de encuentros con ustedes amigos lectores y que, a la postre, la información que difundamos se convierta en una aportación en bien de la comunidad.

#### CÓMO PUBLICAR EN LA «REVISTA EUROPEA DE HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS Y DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS»

Los autores interesados deben enviar sus textos en formato .RTF o .DOC a: [seghiri@uma.es](mailto:seghiri@uma.es) acompañado de un resumen de su curriculum vitae. Para el envío de las recensiones, pueden dirigirse a [mjpelaez@uma.es](mailto:mjpelaez@uma.es) o [mag@uma.es](mailto:mag@uma.es). Para recensiones pueden remitirse los libros y revistas a Manuel J. Peláez. Historia del Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Málaga. Boulevard Louis Pasteur, 24. 29071 Málaga (España) o a Miriam Seghiri. Depto. de Traducción e Interpretación. Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Teatinos s/n. 29071 Málaga (España).

Los artículos y las recensiones habrán de versar sobre las materias específicas de la revista siempre con una matriz jurídica o política, no metafísica, ni teológica, ni filosófica, pero sí iusfilosófica (Historia de las Ideas Políticas, Instituciones Públicas de la Antigüedad, Derecho Público Romano, Derecho Público Germánico, Derecho Público Musulmán, Historia del Derecho Internacional Público y de los Tratados, Historia de las Administraciones Públicas, Historia del Derecho Administrativo, Historia del Constitucionalismo, Historia del Estado, Historia de las ideologías y de los movimientos nacionalistas y secesionistas, Historia de la Ciencia de la Administración, Historia de los modelos republicanos como racionalización democrática, Historia de la lucha de clases, Historia de los Partidos Políticos, Historia de las declaraciones de derechos humanos), entendiéndose que el marco cronológico abarca desde la Grecia clásica hasta la caída del Muro de Berlín. Respecto a las ideas políticas no se hace eco del neomarxismo, del neocontractualismo, del neocorporativismo y del neoliberalismo, ni de aquellas otras ideologías políticas de los últimos 35 años.



*La Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas* es una revista académica, electrónica, editada y mantenida por el Grupo eumed●net de la Universidad de Málaga.

**EQUIPO TÉCNICO DE EDICIÓN**

**EDICIÓN EJECUTIVA**

Juan Carlos Martínez Coll

**RESPONSABLE DE EDICIÓN**

Miriam Seghiri

**MAQUETACIÓN EDICIÓN ELECTRÓNICA**

Luana L. Chirila

**ISSN 2174-0135**

© Los autores de los artículos y las reseñas son responsables de los contenidos expresados en los mismos. La redacción de la revista, por la amplitud de procedencias geográficas, diversidad de temáticas cultivadas y diferencias lingüísticas de sus miembros, no se identifica con los juicios puestos de manifiesto por los colaboradores de la misma.

© eumed.net

© Maquetación y responsable de edición: Miriam Seghiri

© Diseño de portada y secciones: María del Mar España García-Hidalgo

## CONSEJO DE REDACCIÓN

ANTONIO ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ

*Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Málaga (España). Presidente del Consejo de redacción de la Revista.*

GÉRARD D. GUYON

*Catedrático emérito de Historia del Derecho, de las Instituciones y de los hechos sociales y económicos. Universidad Montesquieu. Burdeos IV (Francia). Vicepresidente del Consejo de Redacción.*

JOSÉ MARÍA PÉREZ COLLADOS

*Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad de Gerona (España). Responsable deontológico y árbitro único de conflictos de la Revista.*

LEONARD ŁUKASZUK

*Catedrático de Derecho Internacional Público. Fue Vicepresidente del Tribunal Constitucional de la República de Polonia. Universidad de Varsovia (Polonia).*

SYLVIO NORMAND

*Catedrático de Derecho de bienes y de Historia del Derecho del Canadá. Universidad Laval, Québec (Canadá).*

ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN

*Catedrático de Derecho Romano. Universidad Autónoma de Madrid (España).*

MARIE SANDSTRÖM

*Catedrática de Historia del Derecho. Universidad de Estocolmo (Suecia)*

BJARNE MELKEVIK

*Catedrático de Metodología Jurídica y Filosofía del Derecho. Universidad Laval, Québec (Canadá).*

THOMAS GERGEN

*Profesor de Derecho internacional privado, Derecho comparado e Historia del Derecho de la Universidad de Saarlandes, Saarbrücken (Alemania).*

TADEUSZ WASILEWSKI

*Catedrático de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Administración. Universidad Nicolás Copérnico. Toruń (Polonia).*

GLORIA CORPAS PASTOR

*Catedrática de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga (España) y de Tecnologías de la Traducción de la Universidad de Wolverhampton (Inglaterra).*

GÁBOR HAMZA

*Catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Romano de la Universidad Eötvös Loránd. Budapest (Hungría).*

HORST DIPPEL

*Catedrático de Historia de Inglaterra y de los Estados Unidos de América. Universidad de Kassel (Alemania).*

STAMATIOS TZITZIS

*Director de Investigaciones del Centro Nacional de la Investigación Científica. Instituto de Criminología. Universidad Panthéon Assas. París II (Francia).*

JEAN-LOUIS CLÉMENT

*Profesor del Instituto de Estudios Políticos. Universidad Robert Schuman de Estrasburgo (Francia).*

GEORGE PENCHEV

*Catedrático de Derecho administrativo y del medio ambiente. Facultad de Derecho. Universidad de Plovdiv (Bulgaria).*

JEAN-LUC CHABOT

*Catedrático emérito de Ciencia Política. Universidad Pierre-Mendes-France de Grenoble (Francia).*

HARRY E. VANDEN

*Catedrático de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad del Sur de Florida, Tampa (Estados Unidos).*

HENRI R. PALLARD

*Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho. Universidad Laurentiana. Sudbury, Ontario (Canadá).*

ANTONIO JORDÀ FERNÁNDEZ

*Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona (España).*

MARÍA SALAZAR REVUELTA

*Catedrática de Derecho Romano. Universidad de Jaén (España).*

HELENA CARVALHÃO BUESCU

*Catedrática de Literatura comparada. Universidad de Lisboa (Portugal).*

MARIA PAOLA MITTICA

*Profesora de Filosofía del Derecho. Universidad Carlo Bo' de Urbino (Italia).*

MANUEL J. PELÁEZ

*Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad de Málaga (España). Director de la Revista.*

JOSÉ CALVO GONZÁLEZ

*Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de Málaga (España). Director adjunto de la Revista.*

MARÍA BELÉN MALAVÉ OSUNA

*Profesora Titular de Derecho Romano. Universidad de Málaga (España). Jefa de redacción de la Revista.*

MARÍA ENCARNACIÓN GÓMEZ ROJO

*Profesora Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad de Málaga (España). Subdirectora de la Revista.*

MARÍA DEL CARMEN AMAYA GALVÁN

*Profesora Colaboradora de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga (España). Subdirectora adjunta de la Revista.*

JORGE JESÚS LEIVA ROJO

*Profesor Titular de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga (España). Supervisor de redacción de la Revista.*

MIRIAM SEGHIRI

*Profesora acreditada como Titular de Traducción e Interpretación. Universidad de Málaga (España). Vicesecretaria de la Revista.*



## ÍNDICE DE CONTENIDOS

### ARTÍCULOS

The Constitutional Court in Poland at the beginning of its activity Leonard Łukaszuk y Marek Jan Łukaszuk.....	1
Un nouveau Droit public international au milieu du XVI <sup>e</sup> siècle : « <i>La Philosophie Civile et d'État</i> » de Jean D'Arrérac Gérard D. Guyon .....	25
Perché in cattolici non possono non dirsi liberali Lorenzo Scillitani .....	43
Montesquieu en Hongrie Gábor Hamza .....	53
De Yara a Madrid: La Spagna di José Martí Italia Maria Cannataro .....	55
Sobre la crisis del constitucionalismo en la II República española Jerónimo Molina Cano.....	89
Emerging Constitutionalism in Eastern Europe and Christianity Gábor Hamza .....	103
Itinerario vital y doctrinal de Domingo de Soto: implicación político-social desde la ortodoxia Sixto Sánchez-Lauro .....	113
A Novel Trend in Research on Ancient Rome: Development Procedures and Town Planning Laws of The Romans Belén Malavé Osuna .....	137
Le Catholicisme comme Religion Politique en France Jean-Louis Clément.....	149

### RECENSIONES

A. A. V. V., <i>Direito e informação. I encontro nacional de Bibliotecas jurídicas</i> , Coimbra Editora, Lisboa, 2007, 112 págs Guillermo Hierrezuelo Conde .....	159
Antony Adolf, <i>Peace. A world history</i> , Polity Press, Cambridge, 2009, 285 págs. Bogumil Maria Termiński-Mrowiec.....	161
Christian Andrès (coord.), <i>Autour de l'Espagne des Validos (1598-1645)</i> , Centre d'Études Hispaniques d'Amiens, Paris, 2009, 147 págs. Guillermo Hierrezuelo Conde .....	164

Greta Austin, <i>Shaping Church Law Around the Year 1000. The Decretum of Burchard of Worms</i> , Ashgate, 2009, XII, 344 pàgs.	
Thomas Gergen .....	168
[I]. Montserrat Bajet Royo, <i>El jurament i el seu significat jurídic al Principat segons el Dret general. Edició de la "Forma i pràctica de celebrar els juraments i les eleccions a la ciutat de Barcelona en el segle XV"</i> , "Seminari permanent i interuniversitari d'Història del Dret Català Josep M. Font Rius", Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2009, 198 pàgs.	
Guillermo Hierrezuelo Conde .....	169
[II]. Montserrat Bajet Royo, <i>El jurament i el seu significat jurídic al Principat segons el Dret general. Edició de la "Forma i pràctica de celebrar els juraments i les eleccions a la ciutat de Barcelona en el segle XV"</i> , "Seminari permanent i interuniversitari d'Història del Dret Català Josep M. Font Rius", Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2009, 198 pàgs.	
Gérard D. Guyon .....	171
Vincent Bernaudeau <i>et alii</i> , <i>Les praticiens du droit du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Approches prosopographiques Belgique, Canada, France, Italie, Prusse</i> , Presses Universitaires de Rennes II, Rennes, 2008, 351 pàgs.	
Guillermo Hierrezuelo Conde .....	173
Jeffrey A. Bowman, <i>Shifting Landmarks. Property, Proof, and Dispute in Catalonia around the year 1000</i> , Cornell University Press, Ithaca (NY)/Londres, 2004, XV, 279 pàgs.	
Thomas Gergen.....	178
Paloma Bravo, <i>L'Espagne des favoris (1598-1645). Splendeurs et misères du "valimiento"</i> , Presses Universitaires de France, Paris, 2010, 2 <sup>a</sup> ed. y tirada, 207 pàgs.	
Susana Grohe .....	180
Jane Burbank y Frederick Cooper, <i>Empires in World History. Power and the Politics of Difference</i> , Princeton University Press, Princeton, 2010, 496 pàgs.	
Bogumil Maria Terminski-Mrowiec.....	187
José Calvo González, editor de <i>León Tolstói, lúcido fulgor. Centenario del fallecimiento</i> , Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Málaga, 2010, 85 pàgs.	
Manuel J. Peláez.....	192
José Calvo González, <i>Octroi de sens. Exercices d'interprétation juridique-narratif</i> , Les Presses de l'Université Laval, Collection Dikè, Québec, 2008, 141 pàgs.	
Concepción Inmaculada Núñez Martínez .....	194
Orazio Cancila, <i>Storia dell'Università di Palermo dalle origini al 1860</i> , Editori Laterza, Firenze, 2007, 695 pàgs.	
Guillermo Hierrezuelo Conde .....	197
Italia Maria Cannataro, <i>L'America di José Martí. Razza e identità</i> , Ediciones Rubbettino Università, Soveria Mannelli, 2010, 216 pàgs.	
María Cristina Toledo Báez .....	199

Estanislao Cantero, <i>La contaminación ideológica de la historia. Cuando los hechos no importan</i> , Libros libres, Madrid, 2009, 309 págs. Gérard D. Guyon .....	201
Luís R. Cardoso de Oliveira, <i>Droit légal et insulte morale. Dilemmes de la citoyenneté au Brésil, au Québec et aux États-Unis</i> , trad. de Elizabeth Maria Speller Trajano, Les Presses de l'Université Laval, Québec, 2006, 164 págs. Patricia Zambrana Moral .....	202
Emilio Castelar, <i>La fórmula del progreso. Discursos</i> , edición y estudio preliminar "El Republicanismo liberal y la idea de progreso: Emilio Castelar", a cargo de José Luis Monereo Pérez, Comares, Granada, 2010, 198 págs. Guillermo Hierrezuelo Conde .....	205
Gloria Corpas Pastor, <i>St. Raymond of Pennafort: A critical edition and English translation</i> , Comares, Granada, 2010, LXXXVIII + 147 págs. Manuel J. Peláez.....	207
Antonio Fernández de Buján, <i>Derecho Público Romano</i> , Thomson-Civitas, Pamplona, 2010, 13ª edición, 432 págs. José Luis Zamora Manzano .....	210
Francisco Giner de los Ríos, <i>La persona social. Estudios y fragmentos</i> , ed. y estudio preliminar "El organismo social de Giner de los Ríos", a cargo de José Luis Monereo Pérez, Comares, Granada, 2008, 260 págs. María Encarnación Gómez Rojo.....	215
María Encarnación Gómez Rojo, <i>Historia del Derecho e historiografía jurídica contemporánea en Francia, Italia y Alemania</i> , Eumed, Málaga, 2009, 375 págs. Patricia Zambrana Moral Miriam Seghiri.....	217
Enrique González Matas, <i>Los Estados Unidos del Mundo. Un ideal de siglos ya posible</i> , Editorial Arguval, Málaga, 2010, 160 págs. Enrique del Pino .....	220
Enrique González Matas y José Martín Pinto, <i>Malagueños en la Institución Libre de Enseñanza. Una revolución cultural sin precedentes</i> , Arguval, Málaga, 2010, 222 págs. María Encarnación Gómez Rojo.....	222
Gérard D. Guyon, <i>Chrétienté de l'Europe. Fondations juridiques</i> , con "Estudio preliminar" de J. Joblin, Ediciones Dominique Martin Morin, Bouère, 2010, 351 págs. María Cristina Toledo Báez .....	225
Gérard D. Guyon, <i>Le choix du royaume. La conscience politique chrétienne de la cité (I<sup>er</sup>-IV<sup>e</sup> siècle)</i> , con Estudio preliminar de Roland Minnerath, Ediciones Ad Solem, Ginebra, 2008, 454 págs. María Cristina Toledo Báez .....	228

Gábor Hamza, <i>Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechts-ordnungen und die römischrechtliche Tradition</i> , Eötvös Universitätsverlag, Budapest, 2009, 826 págs.	
Lajos Vékás.....	230
Hermann Heller, <i>Las ideas políticas contemporáneas</i> , traducción a cargo de Manuel Martínez Pedroso, Edizioni Comares, Granata, 2005, pp. XXXVII + 153.	
Manuel J. Peláez	
Miriam Seghiri.....	233
Claude Lévi-Strauss, <i>Lezioni giapponesi. Tre riflessioni su antropologia e modernità</i> , Introducción y traducción de Lorenzo Scillitani, "Prólogo" de Salvatore Abbruzzese, Rubbertino Editore, Catanzaro, 2010, 148 págs.	
Guillermo Hierrezuelo Conde .....	236
Diemut Majer, <i>Frauen-Revolution-Recht. Die großen europäischen Revolutionen in Frankreich, Deutschland und Österreich 1789-1918 und die Rechtsstellung der Frauen, unter Einbezug von England, Russland, der USA und der Schweiz</i> , St. Gallen, Zürich, 2008, 479 págs.	
Thomas Gergen.....	238
Martial Mathieu y Patricia Mathieu, <i>Histoire des institutions publiques de la France. Des origines franques à la Révolution</i> , Presses universitaires de Grenoble, Grenoble, 2008, 202 págs.	
Guillermo Hierrezuelo Conde .....	240
Bjarne Melkevik, <i>Tolérance et modernité juridique</i> , Les Presses de l'Université Laval, Québec, 2006, 147 págs.	
Guillermo Hierrezuelo Conde .....	242
José Luis Monereo Pérez, <i>La democracia en crisis: Harold J. Laski</i> , Ediciones El Viejo Topo, Madrid, 2005, 135 págs.	
Luis Ángel Triguero Martínez.....	244
José Luis Monereo Pérez, <i>Los orígenes de la Seguridad Social en España. José Maluquer y Salvador</i> , Colección Trabajo y Seguridad Social, Comares, Granada, 2007, 352 págs.	
Luis Ángel Triguero Martínez.....	247
Rafael Palomino Lozano, <i>Religión y Derecho comparado</i> , Prólogo de Rinaldo Bertolino, Iustel, Madrid, 2007, 417 págs.	
Guillermo Hierrezuelo Conde .....	251
Ignacio Peiró Martín y Guillermo Vicente y Guerrero, eds., <i>Estudios históricos sobre la Universidad de Zaragoza</i> , Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2010, 430 págs.	
María del Carmen Amaya Galván.....	255
Jean-Jacques Raynal, <i>Histoire des grands courants de la pensée politique</i> , Hachette Supérieure, Paris, 2006, 2 <sup>nd</sup> edition, 160 pp.	
María del Carmen Amaya Galván	
Manuel J. Peláez.....	259

Félix Rebollo Sánchez, <i>Antonio Machado entre la Literatura y el Periodismo</i> , Editorial Fragua, Madrid, 2008, 104 págs. <i>María Encarnación Gómez Rojo</i> .....	262
Félix Rebollo Sánchez, edición Benito Pérez Galdós, <i>Santa Juana de Castilla</i> , Colección Druida, Editorial Fragua, Madrid, 2010, 79 págs. <i>Miriam Seghiri</i> .....	264
Félix Rebollo Sánchez, <i>Literatura y periodismo en el siglo XXI</i> , Editorial Fragua, Colección Druida, Madrid, 2011, 260 págs. <i>Cristina Castillo Rodríguez</i> .....	265
Alejandro Rodríguez Carrión, Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, José Calvo González and María José Casado Cañero, <i>In Theatro librorum. Fondo antiguo en la Biblioteca de la Facultad de Derecho</i> , Faculty of Law, University of Malaga, 2009 [2010], 213 págs. <i>María del Carmen Amaya Galván</i> .....	267
Eduardo Sanz y Escartín, <i>El Estado y la Reforma Social</i> , Colección Crítica del Derecho, Sección Arte del Derecho, Editorial Comares, Granada, 2010, 220 págs. <i>Luis Ángel Triguero Martínez</i> .....	270
Alexander K. Schmidt: <i>Erfinderprinzip und Erfinderpersönlichkeitsrecht im deutschen Patentrecht von 1877 bis 1936</i> , Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht 31, Mohr Siebeck, Tübingen, 2009, 300 Seiten. <i>Thomas Gergen</i> .....	272
[I]. María Teresa Tatjer Prat, <i>La Audiencia Real en la Corona de Aragón. Orígenes y primera etapa de su actuación (s. XIII y XIV)</i> , Col·lecció d'estudis d'història del dret, "Seminari permanent i universitari d'història del dret català Josep M. Font Rius", Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2009, 263 págs. <i>Gérard D. Guyon</i> .....	274
[II]. María Teresa Tatjer Prat, <i>La Audiencia Real en la Corona de Aragón. Orígenes y primera etapa de su actuación (s. XIII y XIV)</i> , Col·lecció d'estudis d'història del dret, "Seminari permanent i universitari d'història del dret català Josep M. Font Rius", Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2009, 263 págs. <i>Alejandro Martínez Dhier</i> .....	276
Marek Tracz-Tryniecki, <i>Myśl Polityczna i Prawna Alexisa de Tocqueville</i> , Księgarnia Akademicka, Kraków, 2009, 440 págs. <i>Bogumil Maria Terminski-Mrowiec</i> .....	286
Andrzej Wierzbicki, <i>Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku</i> , Centrum Europejskie Natolin-Wydawnictwo Trio, Warszawa, 2010, 267 págs. <i>Bogumil Maria Terminski-Mrowiec</i> .....	289
Rectificación de Guillermo Hierrezuelo Conde a la recensión del libro de Juan Francisco Baltar Rodríguez, <i>El Protonotario de Aragón. 1472-1707. La Cancillería aragonesa en la Edad Moderna</i> , Zaragoza, colección "El Justicia de Aragón", 2001, 415 págs. <i>Guillermo Hierrezuelo Conde</i> .....	294



## THE CONSTITUTIONAL COURT IN POLAND AT THE BEGINNING OF ITS ACTIVITY

Leonard ŁUKASZUK\* y Marek Jan ŁUKASZUK\*\*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

**Leonard Łukaszuk\* y Marek Jan Łukaszuk\*\*** (2011): "The Constitutional Court in Poland at the beginning of its Activity", en *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, n.º 1 (marzo 2011), pp. 1-23. En línea: <http://www.eumed.net/rev/rehipip/01/llmj1.pdf>.

**ABSTRACT:** In the present article it will be described the Constitutional Tribunal in Poland as Constitutional Court since its establishment in 1982. It will be described i) the basic tasks of the Constitutional Court from 1986 to 1989, ii) the organization of works and the Constitutional Court's Proceedings, iii) the main cases examined by the Constitutional Court –as a contribution to the protection of human and civil rights in Poland and iv) the essential problems of the activity of the Constitutional Court from 1986 to 1989.

**KEY WORDS:** Constitutional Court, Poland, Parliament of Poland.

**RESUMEN:** El presente artículo se dedica al Tribunal Constitucional de Polonia como Corte Constitucional desde su establecimiento en el año 1982. De este modo, se describirán i) la principales competencias de la Corte Constitucional desde 1986 a 1989, ii) las actas del la Corte Constitucional polaca, iii) los principales asuntos examinados por el Tribunal Constitucional y que han contribuido a la protección de los derechos civiles y humanos en Polonia y iv) los principales problemas sufridos por dicho Tribunal Constitucional polaco de 1986 a 1989.

**PALABRAS CLAVE:** Tribunal Constitucional, Polonia, Parlamento de Polonia.

### 1. Introduction

The Constitutional Tribunal in Poland as Constitutional Court<sup>1</sup> was established upon the Act of 26<sup>th</sup> March 1982, amending the Constitution of Poland. After several years of discussions and legislative works, the organization of this Court, its competences and procedure was regulated in the

\* Leonard Łukaszuk, LL.D., Ph.D., Professor of International Public Law. University of Warsaw.

\*\* Marek Jan Łukaszuk, Master of Law, graduated at the Faculty of Law Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. After the 2 years postgraduate professional courts' study, he passed the State exam at the Polish Ministry of Justice as made possible to obtain the court's judge post. He serves for 22 years at the Polish Ombudsman Office.

<sup>1</sup> In June 2010 the Polish Constitutional Tribunal celebrated its 25th anniversary of the establishment of this first Polish Constitutional Court. This event is an occasion to present a short history of the first four years of its activity /1985-1989/. See: Konferencja w 25 rocznicę powstania Trybunału Konstytucyjnego. Ewolucja funkcji zadań Trybunału Konstytucyjnego – założenia a ich realizacja (referaty wprowadzające). Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 10 czerwca 2010 r.

Constitutional Tribunal Act of 29<sup>th</sup> April 1985. The Resolution of the Sejm (Parliament of Poland) of 31<sup>st</sup> July 1985, the Detailed Mode of Proceedings Before the Constitutional Tribunal regulated additionally. According to the above Act, this Court initiated its activity on the 1<sup>st</sup> January 1986.

The Constitutional Tribunal as a Constitutional Court was discussed as an important factor of implementation of legal reforms in Poland. Most of political documents and statements from the 80<sup>th</sup> contributed to the initiative for establishing such a Court in Poland and stressed the need of raising legality and constitutionality of the State authorities' activity, especially in the area of legislation.

One of these initiatives had been stated that it was purposeful to establish such legal institutions which would ensure conformity of legal acts with the Constitution and which would define the need for establishing the Constitutional Tribunal as deal with securing constitutional position of the citizen within the State and the right of citizens to self-government and self-dependency in various fields of social life. A draft to establishment of the Constitutional Tribunal was an important component of the process of changing relationships between the State and the citizen in Poland this in fact being an essence of the restoration process in Poland as initiated in 1981. The Constitutional Tribunal served to strengthen rights and freedoms of citizens and to ensure observance of principles of equality before law and social justice. It was confirmed by the Constitutional Tribunal decisions taken during its four-years activity<sup>2</sup>.

Often the decisions of this Court were more extensive as it expected the then State's authorities. Activity of this Court was the real manifestation of both: full independence of the other State's organs and full independence of the judiciary. Some decisions of the Constitutional Court were inconvenient to the organs of the than Polish Government and very difficult to approve by it. The similar situation was in the first period of activity of the first Polish Commissioner of Civil Rights (Ombudsman), which started in 1988.

Legal character of the Constitutional Tribunal in Poland was often discussed within the Polish legal doctrine. Its relative appraisal was connected not only with the nature of its decisions, but also taken into account its position in respect to other organs of the State, composition of the Court and the legal status and full independence of its judges as well as a mode of the proceedings.

The assessment of the Constitutional Tribunal as a Court of particular kind, was supported by such arguments as: adjudicating legal disputes, mainly on the grounds of the Constitution and passing its decisions after carrying out the proceedings according to principle of adversary trial system.

Other opinions considered the Court as nearing the model of judicial application of law, however constituting an institution *sui generis* with respect to legally appointed tasks and the way of their performing. This statement was based on the comparison of theoretical model of juridical application of law *vis a vis* to a model of administrative application of law.

---

<sup>2</sup> See e.g. a comprehensive study – an analysis of the two-years activity of this Court: « Le Tribunal Constitutionnel de la République Populaire de Pologne (Sa situation dans le regime, sa competence, sa procédure et sa pratique) » par K. Działocha et A. Patrzalek (...) "Société de Législation Comparé", Journées 1989, pp. 119–140. See also: Constitutional Tribunal. A selection of the Polish Constitutional Tribunal's Jurisprudence from 1986 to 1999, compiled by Jerzy Oniszczyk, consultation by Professor Janusz Trzciński, Warsaw, 1999.

It is necessary to stress that the Constitutional Court not only determined the legal consequences of the facts recognized and proved but also adjudicated upon conformability of legislative acts to the Constitution and other acts to the Constitution and legislative acts. Decisions made by the Court referred both to compatibility of procedure and competence of passing an act, and also to contents of the controlled normative act, i.e. concerned relation between the compared legal rules, which not required proving in the judicial model of application of law. Legal consequences of the Constitutional Court's decisions concerned binding force of the controlled normative act, therefore caused different sanction than as a judicial model. The Constitutional Court's decisions, otherwise than in case of the common courts verdicts, served to assurance of cohesion of the system of binding law.

The third group of opinions called in question the judicial character of the Constitutional Court and called it as a quasi-judicial organ or an organ of control of judicial character. It was assumed that the dissimilarity of functions of the Constitutional Court differentiated legal validity of its decisions to legislative acts and other acts and the fact that the Court was placed in Chapter 4 of the Constitution, together with the Supreme Board of Supervision, Commissioner of Civil Rights and the Tribunal of the State, and not in Chapter 7 dealing with the courts of common law not allowed to accept the thesis that the first Polish Constitutional Court was a court or constitutional court.

However the mode of proceedings before this first Constitutional Court in Poland was more characteristic for the courts and its decisions concerning conformability of basic normative acts with the Constitution or normative acts such as heaving a binding force *erga omnes*.

## 2. Basic Tasks of the Constitutional Court in the years 1986-1989

The Constitutional Court's authority in accordance with the contents of Article 33a of the Constitution was to give decisions on consistency with the Constitution of laws and other normative acts issued by the supreme and central organs of the State. Decisions of the Court about discordance of laws with the Constitution was a subject to examination by the Sejm.

From the above mentioned Constitutional Court Act (Art. 1) it followed that it will also issue decisions on accordance with the Constitution or legislative acts – of normative acts issued by the both supreme and central State's administrative agencies and by other supreme and central State organs. The Court also examined contents of an act, competence of the said organs to define law making activity and to preserve the legislative mode of issuing an act. This concerns both published and unpublished acts, but exclusively law-making norms. The Constitutional Court had an influence in this way on the law making process according to the rule of law principle and on accordance with the Constitution.

In the amendment of the Polish Constitution in 1989, the competence of the Constitutional Court in Poland was completed. In conformity with Art. 30 sec. 1.4. of the former provision of Polish Constitution the former Council of the State should provide universally binding interpretation of the laws in Poland. This task was entrusted the Constitutional Court. This Court was obliged to interpret the law only. Beside that, before signing it himself – the President of Poland had a possibility – within one month– submit a motion to the Constitutional Court to



pronounce judgment on accordance with the Constitution of the law resolved by the Sejm.

From the contents of the Constitutional Tribunal Act it followed also a special kind of activity of the Court. Namely – a study (in the sense of subsequent control) of normative acts and, in connection with this, its decisions issued in a mode upon the above Act. The Court, was obliged to present to the Sejm and to other competent legislative organs its comments on lacunas and infringements in the laws issued – to ensure the cohesion of the system of law in Poland. This research activity – in its specific understanding – was also a starting point and in a sense a foundation for the adjudication activity. The Law on the Constitutional Tribunal had also stated that the research on law cannot be limited to individual cases. Single normative acts or specific norms were studied from the point of view of the principles of the whole system of law in Poland, and its cohesion was also considered.

The Court not only controlled the constitutionality of the normative acts in force but also presented general remarks on the state of law and information on the regulations necessary for implementation of principal constitutional norms.

Thus the main functions carried out by the Constitutional Court was as follows:

1. Decisions on cases brought to the Court by authorized subjects – that is, motions on the conformity of normative acts with the Constitution and with other legislative acts.
2. Decisions in connection with the sending in of legal questions by authorized organs on the accordance of specified legal acts.
3. Presentation to the proper State's organs proclaiming laws its comments on ascertained lacunas and infringements in law.
4. Universally binding law interpretation.
5. Presenting to the Sejm annual information on essential problems resulting from the activity and adjudication of the Court<sup>3</sup>.

Basic directions of activity of the Court – was comprised as belowe:

1. Adjudication activity resulting from the motions and legal questions addressed to the Court by authorized subjects and formulated by the Court's own initiative.
2. Activity of a research nature aimed to disclosing lacunas and ascertained infringements in the law, the removal of which is essential to ensure the cohesion of the legal system in Poland.
3. Analysis of decisions issued by the Court and real problems resulting from the decisions given.
4. Activity of an organizational character aimed at ensuring organizational and material conditions for the work of the Court.

The first experiences of the adjudication activity and the internal organizational work of the Constitutional Court allowed to outline in a suitable manner certain imaginatively generally sketched foundations of procedure and organization projected and accepted, in the period of initial activity of the Constitutional Court. In the light of not only intellectual but also practical experience it was possible to claim that accepted model of the foundation of the

---

<sup>3</sup> As a new task of the Constitutional Court was also expected the registration of political parties in Poland – according to the procedure as established in proper draft law prepared by the Sejm.

functioning of the court as regards general principles and procedure itself was positively verified. First decisions of the public trials before the Constitutional Court were favorably received by public opinion, the general and professional press and also by the lawyers' milieus in Poland. The signals received from the press of legal profile in connection with decisions of the Constitutional Court noted among other things, that Court's activity served to strengthening of legality.

### 3. Organization of Works and the Constitutional Court's Proceedings<sup>4</sup>

#### 3.1. Organization of works of the Constitutional Court

Works of the Court, as composed of 12 members<sup>5</sup>, was directed by the President with assistance of the Vice-president. Judges of the Court /10/ were organized in the three problem groups by their own choice, according to their legal specialization. They were following groups of:

1. Problems of constitutional and administrative law, problems of procedure of creating and improving law.

2. Problems of civil law, agricultural law, labour law, law on public economic activity, and financial law.

3. Problems of penal law, petty offenses and problems of the agencies of legal protection. This division of work of the judges evolved as a result of discussions by themselves of their own experiences and those of the Supreme Court. It favored to improve of specialization. The groups of judges conducted and initiated analytical works, in cooperation with experts in legal sciences. Work of the benches of judges was also supported by the Judicial Decisions Bureau of the Constitutional Court as specializing both in analyses and issuing Court's decisions by the highly qualified lawyers.

---

<sup>4</sup> Such issue was also presented in the Polish Constitutional Court's Report by Leonard Łukaszuk, Kazimierz Działocha and Czesław Bakalarski – as co-authors of this report to the 7<sup>th</sup> Conference of the European Constitutional Courts at Lisbon, 26-30 April 1987. The theme: Constitutional Jurisdiction in the context of State Powers, Regarded under the Sorts, Contents and Effect of the Constitutionality of Juridical Rules. See also: A. Gwiżdż, « Le controle de la constitutionnalité du droit modèle Polonais en 1986 », *Annuaire international de justice constitutionnelle*, vol. II (1986), pp. 587–598; J. Morand-Deville, « Le Tribunal Constitutionnel de Pologne », *Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, 1987, no 1, pp. 173-190 (Avec annexe : Loi du 29 avril 1985 sur le Tribunal Constitutionnel); R. Machaczek, Z. Czeszejko-Sochacki, "Die Verfassungsgerichtsbarkeit in der Volksrepublik Polen", *Europäische Grundrechte Zeitschrift*, 14 Juli 1989, 16 J. g. Heft 11/12, pp. 269-284; L. B. Łukaszuk, "Kierowanie pracami Trybunału Konstytucyjnego w pierwszym okresie jego działalności", in *Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia*, Warszawa, 2001; K. Klafkowska-Waśniowska, "Poznański wkład w tworzenie Trybunału Konstytucyjnego. Alfons Klafkowski i Mieczysław Tyczka", in *Kronika Miasta Poznania. Prawnicy*, Poznań, 2008, pp. 267–280.

<sup>5</sup> First Constitutional court's composition as elected by the Diet (Sejm) in 1985 – properly to 4 /a/ and to 8 /b/ years terms was as follows: a) Alfons Klafkowski, president, professor titular of public international law; Kazimierz Buchała, judge, professor titular of penal law; Natalia Gajl, judge, professor titular of financial law; Adam Józefowicz, judge, doctor of civil law; Andrzej Kabat, judge, doctor of law; Stanisław Paweła, judge, professor of penal law; b) Leonard Łukaszuk, vice president, professor titular of international public law and philosophy of law; Czesław Bakalarski, judge, doctor of penal law; Kazimierz Działocha, judge, professor titular of public law; Henryk Groszyk, judge, professor titular of philosophy of law; Henryk de Fiumel, judge, professor titular of private international law; after his death in 1986 on the some term was elected Maria Łabor-Soroka, judge, Master of civil law; Remigiusz Orzechowski, judge, Master of law.

A particular care was taken to proper preparation of the Court's trials – regards both to a substance of cases and its methodical treatment. This was accompanied by a close study of matters which was considered also as problems even indirectly associated with it. Often scholar research approach to the whole Polish system of law was made also from the point of view of some methods of legal comparison.

A care was also taken to show key problems for the quality of law, their cohesion and accordance with the Constitution and law and also both lawful making into a law (enactment) and perform of law.

The Constitutional Court while examining cases, took a care in particular of the constitutional principles of observation of the cases of lawfulness of making laws.

The Court also took care that the authority of the good law should be strengthened, and both a quality and effectiveness of the function as it performs – maintained. The Court in its work shaped new measures adequate to the rank of its tasks and the role and of its style of activity, while investigated, interpreted and decided in difficult and complex legal and social problems, with due deliberation and equal respect for the litigant parties. The professional qualifications of the Constitutional Court judges were rather comprehensive ones, and were connected with the necessity to study many current legal problems, like those that result from signals by the organs performed laws, from citizens, as reported by the press, and also from the reports on the state of law in Poland prepared by the Council of Legislation and from another scholarly and consultative bodies.

Each of the cases examined by the judges often such in a comprehensive socio-legal study, required a considerable preparation by the judges of the Court. Elaboration of the preparatory materials and then justification of the decision included often several dozen of pages. The judges made efforts to improve their professional competences.

It was concern of judges to make a suitable definition of the subject-matter of the problems to be examined by the Constitutional Court in the light of the binding legal regulations – its priorities in relation to the real necessity to perfect the existing system of law in Poland and remove discordances of the legal rules with the Constitution and with other laws and decrees approved by the Sejm. This was thus a problem of the Constitutional Courts' own initiative, a need of right choice of problems, on the basis of investigations and their own enquiries and the signals coming in from outside – i.e. complaints from citizens, press criticism, observations signaled by Sejm deputies and by the scholars of legal sciences and derivated from the common court's jurisdiction.

### 3.1.1. *General provisions of the proceedings*

The above-mentioned provisions of the Constitutional Tribunal Act were binding since 1<sup>st</sup> January 1986. The procedure before the Court was additionally regulated by the Resolution of the Polish Parliament (Sejm) of 31<sup>st</sup> July 1985, on the Detail Mode of Proceedings before the Constitutional Court (Journal of Law No 39, item 184).

The Constitutional Court was appointed exclusively to exert control over conformability of normative (legislative) acts of State organs with the Constitution in the range determined both by the Constitution and the Constitutional Court Act.

Initiation of proceedings before the Court took place on the grounds of a motion (abstract control), legal questions (quasi substantial control) or the Court's own initiative (abstract control).

Motions for adjudicating the conformability of a legislative acts with the Constitution or other normative acts with the Constitution or a legislative acts was sent to the Constitutional Court, by:

1. The Sejm's Presidium, the Sejm's committees or 50 deputies, the President of Poland, the Tribunal of State, the President of the Supreme Board of Supervision, the Council of Ministers or the Prime Minister, First President of the Supreme Court, President of the Chief Administrative Court, Commissioner of Civil Rights, Prosecutor General.

2. The regional people's councils or their presidia, the General Commission of Cooperation of the Socialist Youth Unions, competent statutory organs of national trade unions organization, inter-union organizations, socio-vocational organizations of private farmers and other trade unions organizations.

3. Churches and another religious unions – according to the Art. 11 Sec. 3 of the, freedom of Conscience and Religion Guarantees Act of 17<sup>th</sup> May 1989 (Journal of Law No. 29, item 155).

The subjects specified in the second and in the third group were entitled to submit motions only in case when the questioned legislative act or another normative act pertained to matters falling within their terms of reference defined in legal regulations. Moreover such motions was submitted as to a particular preliminary control (preliminary consideration by the Constitutional Court at a hearing closed to the public, by a single judge so appointed by the President of the Court). The Court quashed the proceedings when the motion failed to meet the requirements set by provisions of the above Act or when it is obviously unfounded or misaddressed. However, an appeal against such decision submitted to the Court was considered as an appeal at a hearing closed to the public, conducted by three judges.

In the case of normative acts concerning National Defense and the Armed Forces of Poland as well as and the State security, motions for adjudging their conformability to the Constitution or legislative acts was sent only by: the Presidium of the Sejm, the President of Poland, the Council of Ministers and the National Defense Committee.

The Constitutional Court Act provided that the above specified motions of submitters were sent do the Court on their own initiative or after analysis of the citizens' complaints and motions. Therefore, though the citizens were not entitled to submit motions directly to the Constitutional Court, they however had an indirect influence upon the attitude and the activity of the Constitutional Court and of the organs and social organizations specified in the above Act as those being entitled to put forward the motions to the Constitutional Court for adjudging conformability of normative acts with the Constitution or legislative acts. A single letter or complaint was sufficient to initiate the proceedings, if it was well founded.

Legal questions were submitted to the Constitutional Court in connection with ongoing proceedings falling under the jurisdiction of the States' organs, if judgment in such proceedings was contingent upon the answer to such a question.

Legal questions was submitted to the Constitutional Court by the First President of the Supreme Court, President of the Chief Administrative Court, as

well as by supreme and central organs of the State administration. The specified organs submitted legal questions in connection with ongoing proceedings before the organs supervised by them, though such limitation was not clearly provided by the Act. Therefore in reality the First President of the Supreme Court put forward legal questions in connection with ongoing judicial proceedings and the President of Chief Administrative Court, as well as specified supreme and central organs of the State administration – in connection with ongoing administrative proceedings, in the cases of minor offences and in cases of proceedings before the financial adjudicating organs in cases of fiscal offences and infringements.

While answering the legal question the Constitutional Court adjudicated either non-conformability of a legislative act with the Constitution or other normative act with the Constitution or legislative act, to which the question referred, or it adjudicated its conformability. In case of adjudicating non-conformability of a legislative act with the Constitution or of other normative act with the Constitution or a legislative act the suspended proceedings was restarted after bringing about conformability of the act with the Constitution or a legislative act by the organ which had passed the act or after loss of binding force by the said act.

As instituting legal proceedings out of the Constitutional Court's own initiative it was taken on the ground of a decision made at a closed sitting in a bench as proper for adjudication upon a specific type of normative act (three or five judges). Motions concerning such a case the President of the Constitutional Court put forward on the grounds of analysis of complaints and motions of the citizens, information obtained from other organs and also as result of presentation of suitable opinions by the benches in other cases.

The Constitutional Court adjudicated upon conformability of statutory law and other normative acts of supreme and central State organs to the Constitution. Thus all the statutes passed by the Sejm and decrees with binding force of statutes, approved by the Parliament (legislative acts) as well as all "other normative acts", passed by the supreme and central State organs, mainly by the Government and organs of State administration fell under the competence of the Constitutional Court. Provisions of the Constitution and of the Constitutional Tribunal Act not specified the names of the "other normative acts" ("acts introducing legal norms"). It means that not only the acts specified in the Constitution, but also acts of imprecise normative character mainly instructions, directives, general documents etc., independently of their form, if *de facto* they made law, were under competences of the Constitutional Court.

The following acts were beyond the Court's competence:

1) Normative acts of local State organs (people's councils and local organs of State administration). It had assumed that a supervision over these organs activities by superior organs was a sufficient assurance of legality of these acts.

2) Resolutions of the Sejm (including the regulations of the Sejm), having a specific character, as not normative in principle.

3) International agreements. Exclusion of international agreements out of the Constitutional Court's competence resulted from the fact that there was a *lacuna* in the Constitution concerning the relation of international law to national law. Therefore control of the Constitutional Court over international agreements was not appointed until this *lacuna* was not filled. This problem was settled within the new Constitution in 1997.

It was a characteristic feature of the Polish Constitutional Tribunal Act, that:

(a) The Constitutional Court adjudicated upon constitutionality of normative acts in force on the day as a decision was passed. The loss of binding force of a normative act prior to decision passed entails discontinuation of proceedings with respect to such an act. Therefore the Polish Constitutional Tribunal Act not allowed – similarly to the majority of such solutions in other countries – the initial (preventive) control<sup>6</sup> over drafts of the acts. However it allowed for the institution of proceedings before the Constitutional Court before the already promulgated normative act entered into force, or before a decree with the binding force of a statute, approved by the Parliament of before the acts only passed entered into force, if the provisions of law do not require their obligatory promulgation, therefore in the period of *vacatio legis*. The only exception concerned the decrees with the binding force of statutes, which was sued after they have been approved by the Sejm.

(b) Provisions of the Constitutional Court Act in principle, applied in respect to those legislative and normative acts, which were promulgated, approved (e.g. decrees with the binding force of a statute) or enacted (if promulgation is not compulsory) after the date the Act entered into binding force, i.e., 1<sup>st</sup> January 1986. However proceedings before the Constitutional Court was instituted in respect to these legislative acts as well as other normative acts, which were enacted before the date on which the Constitutional Court Act entered into force, but were promulgated, approved by the Sejm (when decrees with the binding force of statutes were concerned) or entered into binding force after the amendments to the Constitution of Poland of 26<sup>th</sup> March 1982 (art. 35 sec. 1 and 2) entered into force. Otherwise the Constitutional Court was not authorized to make decisions or to institute proceedings in respect to the questioned act. However in such cases the Constitutional Court was authorised to undertake other steps within the signaling function vested in it, in order to remove irregularities from within the system of law.

(c) There was a significant limitation of procedural character in respect to all the normative acts submitted to the Constitutional Court's control: the Act not allowed a consideration of those motions for institution of the proceedings before the Constitutional Court, which were submitted after five years following publication of an act or approval of a decree with the binding force of a statute or enactment (Art. 21) and, where acts enacted before the date on which the Constitutional Tribunal Act entered into binding force were concerned – after five years since the date the Act entered into force. Submitting a motion after the above periods had passed results in a refusal of consideration of the motion, and the Constitutional Court was obliged only to direct a motion to the organ which issued an act covered by the motion, and when such a motion concerned a decree – to the Sejm.

The above time limitations of the Constitutional Court competences introduced by the Constitutional Tribunal Act was understood as a protection of stability of law, and as the activity of the Constitutional Court was mainly directed towards the future. The limitations were also explained by the fact that Poland had so far both no traditions and experience in extra parliamentary control over the constitutionality of law.

---

<sup>6</sup> Similar were the President's motions according to the Art. 1 sec. 1 point 1 and art. 3 point 1 of this Act – only.

Conformability of normative acts with the Constitution (in large sense), was explained as conformability directly with the Constitution (in strict sense) or as conformability with the statute (legislative act) made the criterion of the Constitutional Tribunal control over normative acts.

It resulted from the provision of the Constitution: "Constitutional Court adjudicated upon conformability..." (Art. 33a sec. 1) and from the procedural provisions of the Resolution of the Parliament of 31<sup>st</sup> July 1985 that the justified doubt as to conformability (claim of non-conformability) was the material as premised of submitting the normative act to the Constitutional Court control; therefore was not possible to submit an act to control in order to dismiss *a priori* a possible, future charge of non-conformability, thus obtaining the state of *res iudicata*. There was the principle of presumption of conformability of the acts controlled by the constitutional Court with the acts holding the hierarchically higher status.

However the criterion of constitutionality and legality referred to normative acts other than legislative acts. It is assumed that the control of legality included also conformability of the acts of lower rank than a statute to ratified international agreements; in Poland such agreements were granted the binding force of a statute. Adjudicating upon conformability of a legislative act with the Constitution or of other normative act with the Constitution or a legislative act, the Constitutional Court examined both the contents of such act (substantial conformability) and the competence and fulfillment of the required statutory mode of passing the act (formal conformability); the Court's decision referred to the whole act or to its separate provisions (Art. 2 of the Act). The Constitution not allowed to control the normative acts from the point of view of other criteria, e.g. purposefulness, pertinence etc.

### 3.1.2. *Contents and effectiveness of the Constitutional Court decisions*

Decisions of the Constitutional Court were of substantial character because they adjudications containing statements as to conformability of the considered normative act with the Constitution (constitutionality) or a legislative act (legality) or as to non-conformability of a normative act with the Constitution (non-conformability) or of a legislative act (illegality). Therefore in the Polish law was only dichotomous division of Constitutional Court decision in respect to their contents.

The most important in the Polish law was a division of the Constitutional Court decisions with respect to the type of normative acts to which such decisions relate both to decisions concerning legislative acts and decisions concerning other normative acts. They differed significantly in respect of legal effectiveness.

Besides the competence consisting in adjudging as to constitutionality and legality of a normative act, the Constitutional Court also had so called the signaling competence. According to Art. 5 of the Constitutional Tribunal Act presented to the Sejm and to other competent legislative organs its comments on ascertained infringements and lacunas in law when elimination of which is indispensable for assuring coherence of the system of law in Poland. The above mentioned duty of the Constitutional Court to direct the motions for instituting proceedings, submitted after the 5 year period from the appointed moment has passed, to the organ which passed an act covered by the motion (art. 21) as well as information about both activities and decisions of the Constitutional

Court submitted to the Sejm, according to Art. 31 of the Act, was a statutory but not the only form of performance of that function by the Constitutional Court. In order to enable the Constitutional Court to fulfill its duties imposed by the quoted Art. 5 the Constitutional Tribunal Act imposed upon the State organs (specified in Art. 22 sec. 1) a duty of informing the Constitutional Court about all the discordances of legislative acts with the Constitution and other normative acts with the Constitution or legislative acts (Art. 33 sec. 2), signaled by the adjudicating organs. The scholarly opinions and comments on the Constitutional Tribunal Act seen as an important legal instrument also assisted the juridical function of the Constitutional Court and as softening its statutory limitations in its signaling competence.

From the point of view of legal effectiveness of the constitutional Courts decisions one should distinguish as follows:

1) Decisions of absolute legal effectiveness, that was decisions adjudicating non-conformability of the normative acts of lower rank both with the Constitution or with a legislative act. Their legal effectiveness was implemented by the measures specified in Art. 9 of the Constitutional Tribunal Act, in particular: the organ which had passed the normative act amended such an act with no delay or abrogated such act in its entirety or a part not later than within three months since the receipt of the Constitutional Court decision in such a case. In case of non-conformability between an act and the Constitution or a legislative act, such an act was not eliminated within the above time limit. The said act lost its binding force with the elapse of that time limit within the scope specified in the decision of the Constitutional Court.

2) Decisions of relative legal effectiveness, that was decisions adjudicating conformability of the questioned normative act with the Constitution or legislative act (affirmative decisions). They were of a declaratory character, because they not changed the existing law. However, they had the importance of legal interpretation, as universally binding. They were not only formally effective but also substantially effective (uninfringeable). They made as conform with Constitution interpretation of legal impediments for the Constitutional Court, which adjudicated in each case in a proper bench – three or five judges or in full bench, independently, to change the earlier adopted opinion. The Constitutional Court decision in a definite case was uninfringeable, but it not created any principles of adjudicating which would be binding for the Court.

3) Decisions having a character of legal remonstrance and directed at amendment or abrogation of the legislative act by the Sejm. They were decisions stating that the legislative act under consideration (a statute or a decree with the binding force of a statutes) was non-conformable to the Constitution. Differently to other decisions of Constitutional Court, adjudicating non-conformability of other normative acts with the Constitution or legislative acts, the decisions adjudicating non-conformability of statutes with the Constitution was always considered by the Sejm. If the Sejm considered the decision justified, it introduced the required amendments into the act covered by decision as abrogated it in its entirety or in part. If, however, the Sejm considered the act covered by the decision conformable with the Constitution it dismissed the decision of the Constitutional Court by a resolution taken by qualified majority of 2/3 votes in the presence of at least half of the total number of deputies, i.e. in the mode adopted for amendments to the Constitution. The



case covered by the decision dismissed by the Sejm was not again subjected to the proceedings before the Constitutional Court (*ne bis in idem* principle).

All decisions of the Constitutional Court were final upon the Art. 27 sec. 1 of the Constitutional Tribunal Act. It means that they gained binding force since the moment of pronouncement and in result the legislative organ (the original addressee of the decision) conformed an act to such a decision; failure in conforming to the decision led to the loss of binding force by the normative act in question on the grounds of the decision itself. Only in respect to statutes and decrees with the binding force of a statute the Constitutional Court decisions, were binding in that sense that they created an obligation for the Sejm to consider them.

The Polish Constitutional Tribunal Act allowed for reconsideration of the case (Art. 27 sec. 2 and 3 of the Act). This however had a limited range and concerned only to decision was submitted to the Constitutional Court only by strictly specified organs, namely: the Prime Minister, the Council of Ministers and the President of Poland – as respect to definite group of normative acts – those as enacted by supreme and central organs of State administration or of the President of Poland as well as by other supreme and central organs which were not organs of State administration. Submission of the legally effective motion for reconsideration of a case quashes the negative principle of the proceedings, i.e. judgment possessing validity in law (*res judicata*), resulted in suspension of carrying out the decision in a case, to which the motion concerned. The motion was considered by the Constitutional Court in its full bench. Reconsideration of a case had not a character of instance control of the decision nor restarting of the proceedings, but consisted in renewed consideration of the motion by the Constitutional Court in its full bench.

Such solution, mostly unknown in other countries, was motivated by not quite clear conception of the system of the sources of law on the grounds of the former Polish Constitution, which mainly concerned normative acts of lower rank than statutes; it was also motivated by a fact that the Constitutional Court generally adjudicated in bench of 3 judges (as far as acts of lower rank are concerned), or 5 judges (when the case concerned legislative act) and exceptionally, in particularly complicated cases in a full bench of the Constitutional Court.

The Polish Constitutional Tribunal Act not adopted the generally applied in other countries principle of abrogation of unconstitutional act since the moment of making decision; the adopted solution was characterized by a certain graduation of influence upon the organ which issued the act towards its elimination from the system of binding law.

The decision adjudging no conformability of a legislative act with the Constitution not abrogated the questioned act nor it obliged to its abrogation in a definite time limit. It was considered by the Sejm no later than within a six month from the day of the delivery of the Court's decision. The date of possible loss of binding force by the Sejm.

In respect to decisions adjudging of the acts of lower rank than a statute as not conform with the Constitution, a principle of their effectiveness *pro futuro* was adopted. The organ which issued the act covered by the decision introduced immediately the required amendments or abrogated it in entirety or in part, however not later than within three months since the Constitutional Court's decision was delivered. If the organ failed to do so in the appointed time limit, the act loosed its binding force with the elapse of the term. In particularly

justified cases the Constitutional Court suspended application of the act in its entirety or in part with the day of pronouncing the decision till an organ which issued the act, which was adjudged by the Court as nonconstitutional, carried out the decision.

### 3.1.3. *Proceedings in the cases of the universally binding law interpretation*

According to the Article 11a of the amendment to the Polish Constitutional Tribunal Act from 29<sup>th</sup> May, 1989 (Journal of Law No 34, item 178) this Court was obligated to binding interpretation on the law in Poland, on the motions submitted by the President of Poland, the Prime Minister, the First President of the Supreme Court, the President of the Chief Administrative Court, the Commissioner of Civil Rights and the Prosecutor General<sup>7</sup>.

The Constitutional Court ascertained the universally binding law interpretation considered by its full bench to pass a resolution, which was published in the Polish Journal of Law.

The detailed provisions of the mode of proceeding in such cases concern was adopted by the full bench of judges of the Constitutional Court.

## 4. *The Main Cases Examined by the Constitutional Court – As a Contribution to the Protection of Human and Civil Rights in Poland*

The examination by the Constitutional Court of the first cases were as the result of social initiative i.e., one from the motion of the Voivodship People's Council (Wrocław), and the second one – from the motion of the Executive Committee of the National Council of PRON (The Patriotic Movement of National Rebirth), and the third – from the motion of the Trade Union of the Employees of Tourism. Essential in these cases and the following ones that were examined, was the fact that their being brought before the Constitutional Court was very important. These cases were an expression of the concern of various social lay participants namely, agencies of local self-government, and the new trade union movement "Solidarność" (Solidarity) for the quality of law, for law – compliance in proclaiming the norms of law and also concern for the proper understanding of the principles of social justice.

These initiatives – which can be seen also in the newly sent in motions to the Court – were an expression of an indication of development of democracy and also of the shaping of new forms of development in Poland. This confirmed public conviction of the fact that the Constitutional Court was necessary, that was an organ that really worked.

What problems resulted from the first decisions of the Constitutional Court?

The cases examined so far in the field of legal statutory regulations, as of lower acts, being in conformability with the statutes and with the provisions of the Constitution, had resulted as public opinion, for they concerned important social problems, e.g. as decisions on the costs of exploitation and repairs to be paid by owners of flats in large blocks of flats or education for sobriety and the measures as taken to prevent alcoholism.

These cases had aroused public interest in problems of the law making by the State organs in accordance with the Constitution and observance of the

---

<sup>7</sup> In the year 1989 – 5 motions have been submitted to the Constitutional Court by the President of Poland and by the Commissioner for Civil Rights. (Ombudsman).

principles of law-abidance by the supreme and central State administrative agencies while it created laws.

The cases examined so far showed very clearly the urgent necessity to put in order in a complex way the principles and procedures, organization and methods of making laws, for instance, the removal of options in the field of sub-delegations (delegated legislation).

And so, hearings before the Constitutional Court reminded of the need to observe and consistently apply the basic principles of legal making of a good law. Already in its first case, the Court's decision formulated a motion on the need for an active shaping of intellectual development both in the law-making activity of the State organs and in the process of enacting these laws.

Some important problems as concerning the perfecting of law and observance of the principles of law-abidance by the State organs, were signaled by letters sent by citizens to the Constitutional Court.

Public opinion was particularly interested in the first case examined by the Court, concerning exploring payments for flats purchased from the State. Thus, almost one-quarter of the letters sent among others by pensioners, were an expression of support for the decision of the Court and also of concern that laws should be made in accordance with the Constitution and also for their stability, so that citizens could feel secure in the sense of the reliability of a legally established order.

Although the Constitutional Tribunal was a novelty in the Polish system of the State agencies which had operated since the 1<sup>th</sup> January 1986, it had already won authority and esteem in Poland and considerable interest abroad. The Court's achievements and first experiences were covered in detail both by the press and by other publications in Poland and abroad, Western Europe included.

What was less known however, both in Poland and abroad, was the Court's significant role and scope of practical activity that concerns protection of civil and human rights. At the same time, this permeated practically all of the Court's decisions and suggestions<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> This issue was presented by Professor L. Łukaszuk as the pronouncement at the international colloquium organized on May 25–26, 1989 in Paris by the French Conseil Constitutionnel on: "The Declaration of Human and Civic Rights and the jurisprudence" – on the theme: The human and civic rights in the decisions of the Constitutional Tribunal of Polish People's Republic with particular consideration to the principle of equality, pp. 5–18; See also: Conseil Constitutionnel. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la jurisprudence. Colloque des 25 et 26 mai 1989 au Conseil Constitutionnel, Presses Universitaires de France, Paris, 1989, pp. 241–246; Interventions de Personnalités étrangères (...) Leonard Łukaszuk, Vice-president de Tribunal constitutionnel Pologne, Henryk Groszyk, Membre du Tribunal constitutionnel de Pologne; Prof. zw. dr hab. Leonard Łukaszuk, Uniwersytet Warszawski, Les droits de l'homme et du citoyen dans la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel de la République Pologne, en consideration particulière du principe d'égalité, in: *Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej*. Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski – Przewodniczący (...), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania, Przemyśl 2000, pp. 373–386. See also: «The Concept of Protection of Human and Civic Rights According to the Principles and Rules of the both the International and Constitutional Law. The example of Poland» by Leonard Łukaszuk (...) presented at the 14<sup>th</sup> World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy on Enlightenment. Rights and Revolution in Legal and Social Thought, Edinburgh, Scotland, August 1989, pp. 16–28; K. Działocha, "Die Gleichheit vor dem Recht in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes in Polen", *Ost-Europa Recht*, 35 Jhg. (Marz 1989), 1/89, pp. 12-20; L. Łukaszuk, "Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

As a result of activities of the Constitutional Court in close co-operation with the Commissioner for Civil Rights, the Chief Administrative Court and the Prosecutor General the rights of some groups of citizens had been extended. This was done either through abrogation or inducing of abrogation of a number of executive legal acts, most of them concerning enactments: against the legislator's (that is, the Sejm) intentions, those acts limited such rights to a varying extent, were defective, faultily prepared as regards the legal solutions adopted, inconsistent with the principles of law-making as that were in force in Poland, and sometimes also with the Constitution.

As a result of the Court's activities in the years 1966–1988 – 257 provisions of 54 normative acts (i.e.: 4 acts of the Sejm, 25 enactments<sup>9</sup> of the Council of Ministers and of ministers, 6 resolutions of the Council of Ministers, 6 executive regulations (Arreté)<sup>10</sup> of the minister and one statute of the social organization of nationwide importance) were directly examined during proceedings before the Court, and 127 among those provisions were quashed or radically changed. They concerned also 46 cases of the rights of many groups of citizens, and the proceedings resulted in a considerable extension of those rights.

Examining those cases, the Court reverted to the relevant international legal regulations, including the Universal Declaration of Human Rights, the Covenants of Human Rights, the International Labour Organization convention on trade unions, the convention on non-discrimination of women, and to the bilateral agreements signed by Poland. This was the Court's regular procedure.

The cases hitherto examined by the Court concerned matters of great importance for the society and protection of civil rights. The reason for their being brought before the Court by the competent subjects (that is, by the definite State agencies, and by the social and socio-vocational organizations (trade unions) as representing the citizens was the imputed inconsistency of the normative acts with the Constitution and legislative acts. The charges were also supported by the Prosecutor General who took part in the proceedings before the Constitutional Court.

A certain regularity can be noticed in the Constitutional Court's activities so far, which consisted in a clear predominance of motions submitted by social organizations. Of the 54 motions submitted to the Court from without in the years 1986–1988, half of them came from that source, and the remaining part of motions and questions on points of law – from the Chief Administrative Court and from the Commissioner of Civil Rights, the Prosecutor General and as Constitutional Courts' own initiative. It should be explained here that in the Polish legal system the citizens in the years 1986–1989 had not possibility to institute actions before the Constitutional court directly through the motions as they submit. On the other hand, they had a direct access to the Court through the complaints and motions which they can submitted both to that body and to other State agencies. Such complaints and motions from the citizens, their

---

Narodów Zjednoczonych a zagadnienie ochrony praw obywateli w działalności Trybunału Konstytucyjnego w Polsce”, *Nowe Prawo*, No 7/8 (1988), pp. 3–18 (The Universal Declaration of Human Rights and the protection of individual rights in the practice of the Polish Constitutional Court). See also: Leonard Łukaszuk, “Practical reason in legislation and models of constitutional jurisdiction in Europe”, *The Journal of East and West Studies*, Yonsey University, Seoul, Republic of Korea, Vol. 21, No. 2 (October, 1992), pp. 69–83.

<sup>9</sup> Legally binding ordinances (reglement).

<sup>10</sup> Orders.

justification examined by the Court, lead to proceedings instituted by the Court on its own initiative which happened in the years 1986–1989 in 11 cases.

Another way of gaining access to the Court involved a situation when the competent authorities of socio-vocational organizations or local self-governments (provincial people's councils) was inspired by the citizens to submit motions to the Court. According to the system it was in force in Poland notifications of faulty legal provisions, including those that encroached on the rights of citizens, were submitted upon the appropriate procedure by common courts through the Supreme Court, and by the Chief Administrative Court. Such motions in the citizens' interest was also submitted to the Constitutional Court by the Commissioner for Civil Rights, as a novelty in Poland from 1988. As was shot by the practice this was an appropriate system which had won approval both in Poland and abroad. In the countries where constitutional courts operated, it was estimated as more effective.

Moreover, large number of complaints and motions that were submitted by citizens to the Court Constitutional and concerned the activity of the State administrative agencies expressed a great interest of society. In 1986, there were 576 such a motions, in 1987 – 750 and in 1988 – 591. All motions was examined or conveyed to competent agencies for further examination; they also served as a basis for the proceedings of the Court's on its own initiative and for notification of the problems. This way, the citizen had access to the Court, and can influenced on the shaping of its decisions including those directed at a better protection of rights of citizens and individuals.

The above mentioned first case examined by the Constitutional Court which met with a broad social response was moved for the Voivodship People's Council in Wrocław. The motion called in question the constitutionality of provisions of the Act of April 29<sup>th</sup>, 1986, on land control and expropriation of real estate, and of the related ordinance of the Council of Ministers. Two basic questions were raised. The ordinance of the Council of Ministers prohibited any changes of contents of notarial contracts negotiated prior to the introduction of the Act concerning rates for use and management of private-owned flats bought by citizens from the State. The ordinance greatly raised the rates established in such contracts. Thus a civil act, a contract of sale in this case, was changed *ex parte* by administrative decisions, the parties concerned were not consulted in any way. The contention concerned about 107 thousand of citizens. The Constitutional Court examined the case in all its hearings twice (first in a bench of three, and then in its full bench as a composition of twelve judges), and heard experts in different branches of law, to find that the contested provisions, in their part concerning the flat rate of payment due from owners of flats, went beyond the statutory authorization. Moreover, equalizing tenants and owners as regards liabilities, the dependence between their respective duties and performances left out of account, the examined provisions were inconsistent with the constitutional principle of the citizens' equality before the law.

Other cases examined by the Court concerned the following issues: the constitutional principle of equality before the law of all citizens irrespective of sex in the sphere of access to higher education, infringed by the order of the Minister of Health and Social Welfare (Official Journal of the Ministry of Health and Social Welfare 1985, No. 2, item 6) which provided for proportional limits of men and women to be admitted to medical colleges; the limitation by acts of a lower rank, inconsistently with provisions of the appropriate statutes, of the right

to practice a profession in the sphere of licensing individuals to run public transport firms; and the limitations in the sphere of entering persons on the list of counselor's trainees despite of list of counselor's trainees despite of their meeting the requirements as regards the length of employment.

The faulty provisions were abrogated and the citizens' infringed rights thus were reestablished.

The Constitutional Court's notifications concerning faulty provisions and lacunas in the law were based on facts established while examining cases, on the Court's own analyses of the law in force, and on the citizens' and their organizations' complaints and motions as to the activity of administrative agencies, submitted to the Constitutional Court. For example, the Court notified to the Minister of Science and Higher Education of the fact that the provisions he passed infringed the principle of equality before the law, established preferences for persons who graduated from secondary schools abroad on admission to the first year of intramural studies.

Acting on its own initiative and on a subsequent motion of the Commissioner of Civil Rights, the Constitutional Court instituted proceedings that concerned the consistence of ordinance of the Minister of Labour, Wages and Social Affairs of February 22<sup>th</sup>, 1984 on the principles of paying out old-age and disability pensions in the case of their concurrence with pensions from foreign institutions (Journal of Law No 13, item 57) with the provision of Art. 73 of the Act of 14<sup>th</sup> December 1982 on old-age pensions for employees and their families (Journal of Law, No 40; item 267 with subsequent changes) and with Art. 67 Sec. 2 and Art. 5 point 5 of the former Constitution of Poland, as to the principles of equality and justice.

The discussed ordinance, lacking legal grounds (going beyond the limits of statutory authorization) and passed inconsistently with the Constitution, reduced the amount of domestic old-age and disability pensions in the case of their concurrence with similar foreign performances. As the Minister of Labour, Wages and Social Affairs quashed the contested ordinance, the Constitutional Court discontinued proceedings in that case (decision Ref. No. Uw. 3/87).

On motion of the President of the Chief Administrative Court, the Constitutional Court examined the consistence of Art. 4 sec. 1 point 3 b of the Prime Minister's ordinance of 31<sup>st</sup> October, 1983, on performance of hotel, camping, and tourist services by units of non-socialized economy (Journal of Law, No. 62, item 285) which provided for different requirements as to the practice in the case of persons with higher education as compared with those who finished other types of schools, with Art. 67 sec. 2 of the Constitution which established the principle of the citizens' equality before the law. Since 15<sup>th</sup> October 1988, the Prime Minister changed the contents of the resolution removing the doubts as to constitutionality of the discussed provision, the Court discontinued the proceedings (decision Ref. No. U. 12/88).

Decisions hitherto taken by the Constitutional Court in the examined cases fully confirmed the adopted procedure of appraising the consistence of legal acts with the Constitution and of acts of a lower rank with statutes also from the point of view of protection of the citizens' rights. Particular important here was the procedure called as the quasi-concrete (and not abstract) supervision of legal norms which was connected with cases pending before the Chief Administrative Court that concern faulty decisions of the State administrative agencies appealed against by the citizens. The fact that the Court's bench

examined the dossier of a case in connection with which a question on a point of law has been submitted to that Court, and that the parties to the proceedings had the possibility to give the appropriate explanations, created an important legal measure. Owing to that measure, citizens who were the parties to proceedings can present their standpoint directly or defend themselves against administrative agencies that apply towards them legal provisions which were inconsistent with the Constitution or statutes. This was therefore directly related to protection of civil rights. It opened for the citizen an indirect access to the Court before which he can question a legal provision that aroused his doubts; the same way, also of the Court's opinion as to the consistence of the contested legal acts was presented to the citizen.

The Constitutional Court was created in order to strengthen the constitutionally defined legal order and the observance of the principles of equality before the law and of the citizen's rights and liberties. This direction, consistently followed by the Court, became in practice an important guarantor of the citizens' individual rights. This was evidenced both by the statutory range of the Court's powers in the field of investigation of constitutionality and consistence with statutes, and by the broad variety both of the State and social subjects authorized to initiate proceedings before the Court provided by the Action of the Constitutional Court.

The judicial review applied by the Court concerned the consistence of law with all provisions of the Constitution that defined the basic rights, liberties, and duties of citizens, including those provided by the Universal Declaration and Covenants on Human Rights, personal rights and liberties (individual and collective) and socio-economic rights. In the Polish system of law the only statute limited the citizen's rights, basing on the defined powers included in the act. The chief State administrative agencies passed normative acts in order to execute such statutes. Those acts were examined by the Court in particular: from the point of view of the observance in those acts of the citizens' constitutional and statutory rights and duties and the principles of law-making based on the rule of law, including the principles of consultation of draft regulations, among others with social bodies, that were provided by law.

Although the Polish model of proceedings before the Constitutional Court provided for either the institution of the so-called constitutional action against administrative decisions or decisions of courts, nor the so-called popular action (*actio popularis*), an appropriate protection of a Polish citizen's rights, whether constitutional or statutory, was guaranteed by the provisions on proceedings before the Constitutional Court. Many subjects, both the generally authorized State agencies and the competent statutory agencies of many social organizations whose authorization concerned matters that fall under their competence and the resulting infringements of rights and interests, submitted motions to the Court on their own initiative or as a result of analysis of complaints and motions they were received from the citizens. Thus the citizens were provided an influence on the above-mentioned initiatives and their directions. Also the above-mentioned institution of questions on points of law concerning its constitutionality and legality and submitted to the Constitutional Court in connection with proceedings before the Chief Administrative Court as initiated by means of citizens' complaints against the decisions of administrative agencies, served the protection of the citizens' rights, liberties and vital interests.

The presented legal forms and methods of operation of the Constitutional Court in Poland proved that it had among chief aims and directions of activity the task to secure on the grounds of the Polish legal system and on the Covenants on Human Rights – the rights and liberties of citizens.

##### *5. Essential Problems of the Activity of Constitutional Court in the years 1986–1989*

In the years 1986–1989, 75 cases were submitted to the Constitutional Court and 6 of which were as motions for the examination of legislative acts for their conformity with the Constitution; 48 – were motions for the examination of the accordance with the Constitution and statutes of normative acts issued by supreme State organs, and 3 was as legal questions concerning the executive accordance of normative acts issued by the supreme State administrative organs with the statutes.

Carrying out its basic tasks, the Court gave due consideration to the fact that its decisions and explanations was helpful in the practical application of law-making by the supreme State organs in the real model as given in the former Constitution, in which the Sejm was the highest organ of authority and a legislative organ, and the superior authority of laws in the whole legislative system. It was one of the basic principles of the legal system in Poland.

Hence it was essential to strengthen the principles of adherence to the Constitution and legality in the process of making normative acts, also of a lower order. Jurisdiction of the Court therefore as continued evaluation of the processes of legislation according to these principles, giving consideration to the fact that the law should be made according with the competence in this field of the Sejm and in accordance with the binding mode of public consultations. The perfection of law and order, which continued the Court, led to protection of the constitutional rights of citizens.

The motions as sent in to the Court by authorized subjects usually concerned not only materials directly questioning the legal regulations, but also both wider problems connected with the process of law-making and the functioning of State administrative agencies.

The cases in which decisions were given called for detailed and profound studies of a lot of legal materials, usually on the borderline of various fields of law – seen against the background of wider social problems and the practical activity of various State organs. The benches of judges examined the cases and passed judgments as investigated the factual and legal aspects and tackled legal problems that so far had not been dealt with by the common courts in Poland.

All motions charged discordance of the enactment regulations with the legislative acts, and even with the Constitution were complied with. This indicated that in this field of the sources of the binding internal Polish law certain imperfections were partly eliminated by the Constitutional Court.

A certain specific character of decisions issued by the Court means that this Court, as formulated its position on the constitutional conformity of certain legal norms, indirectly settled legality of norms in matters that were a subject of regulation, which in turn means that every decision had simultaneously its general and problem character. So the first period of activity of the Court cannot be evaluated only from the point of view of the number of cases as examine, but



above all, the social and economic importance of the problems should be taken into consideration.

And so, in spite of the fact that the activity of the Court – as to express it numerically – was not rich, for it embraces only a four-year's activity, one can already registered several motions of a key character, important for legislative activity of the State.

Thus to such settlements concerning principles of a key character, that was self-evidently affecting the model of the legal system in Poland one can include:

- the principle of the precedence of laws (acts) as a basic source of the rights, duties and responsibilities of citizens and subjects to legal relations who were not natural bodies corporate;
- the duty of precise and concrete formulation of authorization to issue executive norm-setting acts;
- the principle of the exact observation by supreme organs of administration the statutory scale of granting authorization to issue such acts;
- the inadmissibility of granting to other than the organs specified in the statute the right to issue executive norm-setting acts;
- the inadmissibility of regulations introducing retroaction of the law in the field of new duties or increasing the scale of duties concerning citizens and subjects to legal relations who were not natural bodies corporate.

One of the key problems in the law-making process in Poland was social consultation with trade unions and other social organizations determined by the statutes. Binding in this respect were the statutory regulations that ensure participation in these consultations of trade unions of socio-occupational organizations of farmers, youth unions and other organizations. The principle of social consultations was a constitutional principle of the legislative procedure.

In the cases examined by the Court, the failure to comply with this duty brought the decision as unlawful, and so, qualified for abrogation.

Among the cases examined by the Court was the problem of the admissibility of retroaction of the law. The principle of non-retroaction of the law was treated by the Court as an essential value, ensuring the safeguarding of the conduct of legal transactions and protection of the acquired rights by citizens. The Court expressed the opinion that departure from this principle must always be the result of the law (act), and not of an executive act.

These generalizations made on the basis of the verdicts of the Constitutional Court had importance in the process of shaping law and putting it in order. Decisions of the Court served practical purposes, and so decided of concrete cases and also –in a broader view of the problem– improvement of law. Every regulation that was examined by the Court was directed at social realities, and in connection with this, the only decisions that can be accepted were those which have strong support both in law regulations and in social realities. It was not the task of the Court to examine the problems only from the point of view of legal doctrines, although when giving its decisions it made advantage of the quite considerable scholar achievements also both of the theory and philosophy of law.

The transgressions shown by the decisions of the Court in creation of normative departmental regulations were as result mainly of insufficient knowledge of and non-application of the principles and the so-called technique of creation of law – i.e. in a legislation process. The majority of them could had

been avoided if the lawyers and other officials in ministries and other offices elaborating the draft of regulations had done their tasks properly.

The calling into being of the Constitutional Court aroused lively interest among legal and also scholar circles. The task of the Court was not an issue of settling questions of a doctrinal character, but concrete cases, however, were reckon with the influence of the decisions of the Court in shaped interpretation and the doctrine of the law.

All the court's decisions were promulgated in the *Diariusz Sejmowy* (Seym Diary) as an official publishing organ. Information and discussions on each judgment was published in the professional press and also in other press organs. The official collections of the Court's decisions were published by Constitutional Tribunal in 1987, 1988 and in 1989. Dissemination of the contents of these decisions of the Court was one of the forms of the education for the administrative legislators. The Constitutional Court offered a broad access to its decisions, considering that it was purposeful for the popularization of the new solutions both in the legal and governmental system of the State, which were an important factor in the creation of laws. Some publications worthy of attention were prepared among others, by judges of the Constitutional Court and also by the experts of the Bureau of the Court.

The calling into being and activity of the Constitutional Court in Poland also aroused wide interest abroad. In particular, representatives of other countries (i.a. Russia and Hungary) became acquainted with the tasks of the Court and its first experiences, paying special attention to its role in improving law and order and assurance of protection of the rights of citizens and the human rights at large. Delegation of judges of the Polish Constitutional Tribunal headed by its vice president, was invited to visit both the proper parliamentary commissions in Hungary and in Jugoslavia, as well as both the Constitutional Courts of Jugoslavia and Serbia, and also the Faculty of Law at University in Belgrade.

The Court also participated in some works of organizations associating constitutional courts and similar institutions in Europe. A delegation of the Court participated as a first time in the 7<sup>th</sup> European Conference of the Constitutional Courts in Lisbon in 1987, headed by the vice-president of the Court.

The four-years's work of the Court had shown that it realized properly the tasks determined by the Constitution and by the law of 29<sup>th</sup> April, 1985 on the Constitutional Tribunal: as the tasks in the field of adjudication, interpretations and evaluation of the state of the law and also presenting to the proper organs its comments on the lacunas and ascertained infringements when it had found in the examined laws, the removal of which was essential to ensure the cohesion of the legal system in the Poland. These tasks, realized to an ever wider extent, contributed to improve of law and order.

The Polish Constitutional Court took into account the hierarchy of constitutional norms and its function in the protection of fundamental rights. Sometimes arised the conflict between fundamental rights and other norms of constitutional value. The Court applied objective methods both in the hierarchize of norms by the jurisdiction, and in conciliation of conflicting (antinomic) fundamental rights with other norms of constitutional value<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> The more comprehensive analysis of this problem was presented in the Polish Constitutional Court's Report to the 8<sup>th</sup> Conference of the European Constitutional Courts to Ankara 1990, May 7-10. Theme: Hierarchy of Constitutional Norms and its Function in the Protection of Fundamental Rights. As the representatives of the Polish Constitutional Tribunal were attended

The Polish Constitutional Court had the opportunity to expound its interpretation of the constitutional principles of the contents of law the principle of equal rights, the principle of social justice, the principle of protection of acquired rights, the principle of the coherence and reliability of the system of law, the principle of non retroactivity of law and the principle of the statutory regulation of rights and duties of the citizens.

The Court's four years activity had shaped main principles of basic rights of the citizens: the principle of protection of acquired rights, and non retroactivity of law and to a smaller extent – that of interdependence of civil rights and duties.

The Constitutional Court avoided the statement of contradiction between the constitutional norms and the need to restrict one of them *in favour* of the other one.

When interpreting the so-called inner hierarchy of the Constitutional, its principles and norms - in the Court's praxis, it was believed that principles should be given priority over the other constitutional norms, because the principles expressed the system's fundamental legal contents than the other constitutional norms.

## 6. General Conclusions

The Constitutional Court in Poland in the years 1985–1989 was a non-parliamentary organ as reviewed constitutionality and legality of the laws in force. As the results of its activity were:

a) to make acts in force conform with the Constitution. In this field the Court reviewed such legality, and also on stated lack of such, through statement of facts. Amendment of the legislative act was a sole competence of the Sejm (Polish Parliament) as a highest authority of State power, including the legislation. In case of decisions of the Court stating inconsistency of a legislative act with the Constitution was a possibility to dismiss it by a qualified majority of 2/3 votes in the Sejm.

b) to preserve the constitutional hierarchy of normative acts, and particularly to observe the principle that the rights, duties and responsibility of the citizens and self-dependent legal subjects not being physical persons may be regulated solely by acts of the Sejm, with the executive provisions to such acts kept within strictly defined limits. This was a issue of significant importance in the relations between the Sejm and the Government.

c) to observe a proper democratic procedure in the preparation of normative legislation. In particular, the rights of the citizens, setting in the Constitution, rights of the citizens and their organizations should include also public consultations. In practice, in the understanding of law, the Court treated obligatory consultations of normative legislation bills as one of the elements of legality of law.

Essentially, the competences of the Court emphasized the principle that legality cannot be limited only to observance of the law but it should also encompass observance of the constitutional and legislative requirements

---

in this Conference: Professor titular Mieczysław Tyczka – president of this Tribunal, Professor titular Leonard Łukaszuk – vice president and Professor titular Kazimierz Działocha – judge, who presented the above Report.

forming the foundation for its development. This was not only a juridical, but also a social issue.

Full implementation of the Court's decisions and recommendations served to improve the legal system in Poland. Considering that legal regulations affect a variety of public and economic issues, including rights of individuals, improvement of the legal system will result in better formulation of such rights.

The Constitutional Court was a specific body, and its legal classification is not easy. In particular, irrespective of fulfilling judicial functions, it signaled and investigated, and presented to the legislative authorities its conclusions on the deficiencies and discrepancies in law, the removal of which was necessary to ensure coherence of the legal system in Poland. Therefore, the Constitutional Court was not strictly a judicial body, although some regulations concerning courts were applicable to it.

Due to the specific tasks fulfilled by the Court, the procedure was of an autonomous character, this meaning that the common court's procedure had limited application to it, mainly in the technical and organizational sphere this being limited to the normative provisions given in the Act and partly by the evidence procedure like in the civil proceedings.

The very definition of the subjects authorized to initiate proceedings before the Court was of importance. A variety of concepts were discussed. Additionally, the Court initiated proceedings on its own initiative, i.e., in result of motions submitted by the citizens.

Therefore, the circle of authorities and bodies having access to the Court has been set quite widely. However, this was not an *actio popularis*. This issue was of crucial importance. The Court dealing with legislation, exclusively, in effect served both to co-create law and protect fundamental rights of the individual.

In the research on conformability of sources of law with the Constitution and in the jurisdiction of the Polish Constitutional Court, the Constitution was regarded as a certain integral unity. It referred especially to determining the relationship of the constitutional rules regarding civil rights and liberties, with other regulations of the Constitution, which were to ensure adequate conditions for the fulfillment of these rights, among other things, through certain forms of the proper organization of the State and developing proper legislation.

Some remarks and postulates emerged from experiences of more than four-year-long activity of the Constitutional Court in Poland. They were helpful in formulating assumptions and legal solutions of a new Constitution in 1997, especially as far as civil rights and strengthening of law and order, were concerned.

In 1989, in the annual information of the Constitutional Tribunal for the Polish Sejm on major problems which emerged as a result of the Tribunal's activities, an opinion was presented, stating that the rules of the law-making process should be regulated in the Polish Constitution on a broad basis. Thus, basic assumptions and leading institutions in the law-making process, should be specified, together with the rules regarding force of the laws in question.

<p>Recibido el 8 de octubre de 2010, corregido del 26 al 28 de febrero de 2011 y aceptado el 1 de marzo de 2011.</p>
--





## UN NOUVEAU DROIT PUBLIC INTERNATIONAL AU MILIEU DU XVI<sup>e</sup> SIECLE : « LA PHILOSOPHIE CIVILE ET D'ESTAT » DE JEAN D'ARRERAC

Gérard D. GUYON\*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

**Gérard D. Guyon** (2011): "Un nouveau Droit public international au milieu du XVI<sup>e</sup> siècle : « *La Philosophie Civile et d'État* » de Jean D'Arrerac", en *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, n.º 1 (marzo 2011), pp. 25-41. En línea: <http://www.eumed.net/rev/rehipip/01/gag.pdf>.

**RESUME** : Dans la première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle, le droit international public est encore en gestation. Les grands auteurs espagnols renommés comme Suárez, Vitoria, et à plus forte raison Huig de Groot, ne sont pas encore entrés sur la scène intellectuelle juridique. On commence à s'intéresser, de manière originale, à l'idée d'État et à la conception de la souveraineté. Dans cet article on va réfléchir sur la Philosophie Civile et d'État de Jean D'Arrérac, et concrètement sur 1) la réaffirmation du réalisme juridique et de la philosophie chrétienne de la paix et 2) le pragmatisme chrétien au service de la communauté universelle du genre humain.

**MOTS CLE** : Droit public international, Jean d'Arrérac, Philosophie civile, Philosophie politique.

**RESUMEN**: Durante la primera mitad del siglo XVI, el Derecho internacional público está aún en gestación. Los grandes autores como Suárez, Vitoria o Huig de Groot aún no han entrado a formar parte de la escena jurídica intelectual. En este período, comienza a despertar interés, de manera original, la idea de Estado y la concepción de soberanía. Así, en el presente artículo se reflexionará sobre la filosofía civil y de Estado de Jean Arrérac y, más concretamente, en torno a 1) la reafirmación del realismo jurídico y de la filosofía cristiana de la paz y 2) el pragmatismo cristiano al servicio de la comunidad universal del género humano.

**PALABRAS CLAVE**: Derecho público internacional, Jean d'Arrérac, Filosofía civil, Filosofía política.

### 1. Introduction

Dans la première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle, le droit international public est encore en gestation. Les grands auteurs espagnols renommés comme Suárez, Vitoria, et à plus forte raison Grotius, ne sont pas encore entrés sur la scène intellectuelle juridique. Les études savantes n'accordent d'ailleurs que peu de place à ceux qui pourraient porter le nom de « pré-fondateurs » du droit des

\* Professeur émérite d'Histoire du Droit et Droit Romain. Université Montesquieu – Bordeaux IV.

gens. Elles en ignorent leurs noms et leurs œuvres, alors que pourtant, avant le puissant mouvement des idées politiques et religieuses qui culmine en 1630, des réflexions originales se développent dès la première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle<sup>1</sup>. Elles commencent à s'intéresser, de manière originale, à l'idée d'Etat et à la conception de la souveraineté. Elles sont particulièrement sensibles à la question des rapports des peuples entre eux, puisque ceux-ci ne peuvent plus s'établir sur la vieille loi chrétienne qui les avait gouverné et réuni pendant des siècles. Et c'est donc un sentiment d'urgence qui guide leur conduite, au moment crucial des guerres de religion qui déchirent l'Europe et opposent les *Catholiques* et les *Réformés*<sup>2</sup>.

La raison de cet oubli ou de cette indifférence des penseurs est connue. Les doctrines des canonistes et des théologiens médiévaux : celle d'Hugues de Sainte-Marie, de Vincent de Beauvais, de Gilles de Rome, et tout particulièrement celle de Saint-Thomas d'Aquin, ne cessent d'être invoquées pour analyser toujours plus profondément les droits réciproques des Etats et l'histoire du droit des gens en général<sup>3</sup>. Elles occupent encore pratiquement toute la réflexion juridique mais se trouvent en décalage avec la nature du conflit religieux interne qui déchire alors intérieurement les Etats chrétiens, avant de les opposer les uns aux autres.

C'est ce qui nous permet de constater que lorsque le magistrat bordelais Jean d'Arrérac fait paraître à Bordeaux, en 1558, un ouvrage intitulé *La philosophie civile et d'Etat, divisé en l'irénarchie et la polémarchie*<sup>4</sup>, il agit en précurseur en même temps qu'il prend place dans une lignée savante d'analyste politique et de penseur du droit international public

La lecture de son livre ne doit pas s'arrêter à des impressions superficielles qui montrent que l'auteur bordelais n'échappe pas aux reproches que l'on fait habituellement à ce genre d'œuvres qui sont en général trop moralisantes et font une place excessive à l'érudition. Presque tous les livres de cette période en témoignent. Mais le juriste et publiciste Jean d'Arrérac fait aussi preuve d'une maîtrise originale dans la manière de traiter les questions

---

<sup>1</sup> Une exception notable toutefois dans G. Livet qui, reprenant une citation de E. Nys, indique la parution, à Bordeaux, en 1558, du livre de Jean d'Arrérac intitulé « La philosophie civile et d'Etat, divisée en l'irénarchie et la polémarchie », mélange de droit public et de droit international, dans *Guerre et paix de Machiavel à Hobbes*, Paris, 1972, p. 45-46.

<sup>2</sup> Parmi la très riche bibliographie, G. Van Der Meulen, *Alberico Gentili and the development of the international Law*, Leyden, 1968 ; E. Nys, *Les origines du droit international*, Castaigne, 1894 ; du même, *Le droit de la guerre et les précurseurs de Gratien*, Bruxelles, 1882 ; J. Moreau-Rebel, « Le droit de société interhumaine et le *ius gentium* », *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de la Haye*, 1950, II, p. 481-497 ; M. Merle, *Pacifisme et internationalisme*, Paris, 1968 ; Ph. Bretton, *Le droit de la guerre*, Paris, 1971 ; J. Joblin, *L'Eglise et la violence*, Paris, 1988 et pour un dernier état de la bibliographie et des questions disputées, P. Arabeyre, *Les idées politiques à Toulouse à la veille de la réforme. Recherche autour de l'œuvre de Guillaume Benoît (1455-1516)*, Toulouse, Presses univ. Sciences Sociales de Toulouse, « Etudes d'histoire du Droit et des Idées politiques », n° 7, 2003 ; E. Gojosso, *Le concept de République en France (XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècle)*, Aix-en-Provence, Presses de l'Université d'Aix-en-Provence, CERHIPP-XIII, 1998.

<sup>3</sup> A. Vanderpole, *Les doctrines scolastiques de droit de guerre*, Paris, 1919 ; R. Regout, *La doctrine de la guerre juste de Saint-Augustin à nos jours, d'après les théologiens et les canonistes*, Pedone, Paris, 1934 ; J. Moreau-Rebel, « Le droit de société inter-humaine et le 'jus Gentium'. Essai sur les origines et le développement des notions jusqu'à Gratien », *Recueil des cours de l'Académie de Droit international de la Haye*, 1950, II, p. 481-497.

<sup>4</sup> A Bourdeaus, chez S. Millanges, in 8°.

politiques. Il connaît très bien les grands courants de la pensée philosophique antérieure et analyse, de façon clairvoyante, la nature des débats politiques de son temps. Il est également à l'aise dans l'énoncé des grands conflits théologiques.

Ces remarques introductives sont donc un plaidoyer en sa faveur. Elles justifient qu'il soit sorti d'un oubli trop complet, comme celui qui a atteint d'autres auteurs du XVI<sup>e</sup> siècle qui ont dû attendre que l'on se penche récemment sur leurs travaux pour y trouver un réel intérêt dans l'univers de l'histoire des institutions et du droit public<sup>5</sup>. Comme souvent, les grands écrivains leur font une ombre excessive. La lecture de la « *Philosophie civile et d'Etat* » montre cependant la nécessité de faire une place au magistrat bordelais parmi les auteurs d'une réflexion doctrinale qui cherche à renouveler la manière dont on doit considérer le droit des peuples, la nature et les modes d'expression du pouvoir, ses limites – particulièrement dans la guerre<sup>6</sup>. Le travail de Jean d'Arrérac doit être mis, au moins, à côté de ceux de François de la Noue avec son *Discours politiques et militaires* – 1531-1591, de Pierre de Faure de Saint-Jorri : auteur toulousain des « *Semestria* » publié en 1570<sup>7</sup>, des « *Quatre Livres sur la Guerre* » de Maître Jehan Robert (1595), du « *De Republica libri sex* » de Pierre Grégoire de Toulouse (1596) et du grand livre de Louis Turquet de Mayerne « *De la monarchie aristocrato-démocratique ou le gouvernement composé et meslé des trois formes de légitimes républiques* » imprimé en 1611 mais composé en 1591<sup>8</sup>. Toutefois, le projet initial de Jean d'Arrérac n'a pas été complètement achevé. L'auteur annonce la rédaction d'un traité complet sur la paix et la guerre, or son livre consacré à la *Philosophie d'civile et d'Etat* n'étudie, en réalité, que de la paix. Cette réserve faite, sans que l'on puisse savoir si la deuxième partie a véritablement été mise en chantier, on est tout de suite frappé par un aspect remarquable dans la pensée du magistrat du Parlement de Bordeaux, et qui en fait – de ce point de vue – un lointain ancêtre précurseur de Montesquieu : le lien étroit qui unit, dans le juriste, le théoricien de la chose publique et le praticien.

On connaît la place éminente des juristes dans la philosophie du XVI<sup>e</sup> siècle. Ce sont eux qui construisent sur des bases positives, mais avec des normes éthiques contraignantes, l'autorité du droit. Toutefois, ce qui les distingue les uns des autres, c'est le réalisme plus ou moins fort qui les guide. Or, chez le magistrat bordelais, le souci de la conciliation, de la concordance des règles, une certaine obsession de la recherche de voies médianes pour unir des courants opposés, sont constants. Ce qui compte chez lui, ce n'est donc pas le

---

<sup>5</sup> G. Cazals, *Guillaume de La Perrière (1499-1554). Un humanisme à l'étude du politique*, Thèse de droit, Université des Sciences Sociales de Toulouse I, 2003.

<sup>6</sup> Gérard D. Guyon, « La vie et l'œuvre d'un parlementaire bordelais au XVI<sup>e</sup> siècle », *Revue française d'Histoire du livre*, a. 44, tome 5 (1975), nouvelle série, p. 27 s. ; A. Pillet et alii, *Les fondateurs du droit international, leurs œuvres, leurs doctrines*, Giard, Paris, 1904.

<sup>7</sup> Cf. Fr. Holtzendorf, A. Rivier, *Introduction au droit des gens*, Paris, 1889, p. 353.

<sup>8</sup> R. Mousnier, « L'opposition politique bourgeoise à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle et au début du XVII<sup>e</sup> siècle, l'œuvre de Louis Turquet de Mayerne », *Revue Historique*, CCXIII (1955), p. 1-20. Sur François de la Noue, G. Livet, *Guerre et paix*, op.cit., p. 42, 48. La liste de ces œuvres n'est évidemment pas close avec ces quelques références, mais demande d'être complétée par les recherches de Jean Mesnard sur la philosophie politique et de Vincenzo Piano Mortari, *Aspetti del pensiero giuridico del secolo XVI*, Liguori editori, 1971, p. 21-127 et de J. Gaudemet, *Les naissances du droit*, Paris, 1999, particulièrement le chapitre 4 sur la « doctrine juridique, l'humanisme et la Renaissance ».



théoricien habile à jongler avec les divers systèmes de pensée – de l'Antiquité jusqu'à son temps. Jean d'Arrérac est en effet particulièrement ouvert au droit positif appliqué par les tribunaux. Il tient toujours, en bon praticien, à justifier juridiquement les intérêts divergents d'une affaire comme d'un point de vue, et à en dégager des solutions pratiques viables. C'est en considérant cette finalité qu'il entend transposer cette méthode, appliquée jusque là dans le domaine classique du droit et de la justice, dans celui des modes de gouvernement et de la vie politique – relations internationales comprises. C'est à ses yeux, le seul moyen possible de gouverner, en dépassant des antagonismes qui semblent irréductibles et en tout premier lieu ceux qui résultent des débats religieux.

Le penseur bordelais, en effet, ne doit pas être rangé parmi le courant pacifiste des irénistes. Il ne croit guère à la sociabilité naturelle de l'homme. Il est plutôt partisan d'un réalisme modérateur qui n'empêche cependant pas de faire appel, lorsque cela est nécessaire, aux doctrines morales : particulièrement celles qui sous-tendent l'autorité des fonctions et la grandeur de son office de juge. Sans doute n'est-il pas exempt d'un certain pathos littéraire, dans la formulation de cette conception de la tâche du magistrat. Mais au-dessous, la trame véritable de sa pensée est parfaitement claire. Sa démonstration est logique. En bon juriste, il entend se servir du droit comme de l'outil le plus propre à construire l'harmonie la plus parfaite possible d'une société humaine. Un droit qui ne peut agir que dans une société naturelle. Celle-ci est vue à la fois comme le lieu où doit opérer le droit et en tant que donnée productrice de normes communes dont Dieu a inscrit une fois pour toutes les règles générales dans son Décalogue. Bien que comme Vitoria, plus tard, il soit déjà convaincu que c'est dans cette dernière (la société de nature) que résident les éléments positifs qui donnent au pouvoir son mode d'être et d'agir.

Ainsi donc le juge et le penseur ne sont jamais séparés chez d'Arrérac. Il en donnera des preuves supplémentaires dans un autre travail<sup>9</sup>.

Ces points soulignés, il ne faut pas non plus exagérer l'originalité de cette attitude. L'optimisme raisonné qui le caractérise ne lui est pas spécifique. Il est au cœur des grandes questions qui agitent les œuvres de tous ceux qui réfléchissent sur le droit public, depuis le XIII<sup>e</sup> siècle, à la suite de Saint Thomas, selon une méthode qui allie la foi en Dieu et la raison, et qui traitent de la paix, la guerre, l'Etat, la souveraineté des princes, la diplomatie<sup>10</sup>. Cependant, il faut insister sur ce qui distingue les ouvrages du milieu du XVI<sup>e</sup> siècle des œuvres précédentes : c'est qu'ils sont écrits sous la pression des événements.

Il faut ajouter aussi à ces points, qu'il y a également, dans cette nouveauté, une question de méthode : les juristes sont plus familiers que les autres penseurs des mécanismes des institutions. Ils sont plus proches du réel et, plus facilement que les théologiens qui ont dominé longtemps la pensée politique, il leur est possible de proposer des solutions concrètes et de les imposer. En outre, leur humanisme – qui apparaît parfois tellement modeste, sur le plan de l'architecture philosophique, qu'il est considéré avec un certain mépris par les

---

<sup>9</sup> *De la juridiction et des juges où il est amplement traité de tout ce qui appartient à la connaissance des juges tant ecclésiastiques que séculiers*, publié à Bordeaux chez G. Lacourt, en 1625.

<sup>10</sup> C. Lazzeri, D. Reynie, *La raison d'Etat: politique et rationalité*, P.U.F., (coll. Recherches politiques), Paris, 1992.

« vrais philosophes » – les amène à confronter les divers systèmes juridiques avec le droit romain qui leur est très familier car ils en font encore un usage judiciaire constant<sup>11</sup>. Pour Bordeaux, on peut écrire, à propos de la cour du Parlement de Bordeaux qui doit être rattachée largement aux *Pays de droit écrit*, que l'application du droit romain relève d'une pratique jurisprudentielle habituelle. Les juges bordelais sont, jusqu'à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, obsédés par la recherche d'une actualisation des règles romaines. Le non usage du droit romain est, à leurs yeux, la conséquence d'une mauvaise compréhension de la règle par le juge, plutôt que la conséquence du caractère anachronique qu'elle pourrait révéler. À ce titre, les magistrats sont aussi intéressés par les grandes philosophies morales de l'Antiquité : ils sont donc à la fois, archéologues et juristes. C'est dans cet esprit qu'ils se rallient, presque unanimement, à la vieille discipline cicéronienne du « *ius in artem redigere* ». Leur art consiste à trouver dans le droit une discipline méthodique et à poursuivre la recherche de l'unité juridique. C'est ce dont témoigne également leur patiente et opiniâtre attitude à l'égard de la rédaction et de l'uniformisation des coutumes<sup>12</sup>.

Tous ces caractères sont très identifiables chez Jean d'Arrérac, particulièrement dans l'aspect majeur de son livre relatif au droit des gens. Les problèmes posés concernent l'objet final du droit. Tout d'abord, dans l'énoncé de trois questions cruciales :

- Où trouve-t-on, dans le droit, les éléments qui permettent d'assurer à l'Etat, à la société, aux formes de gouvernement, une pérennité qui ne risque pas d'être remise en cause dans les événements qui agissent sur les peuples ou qui touchent à la succession des monarques. Ceux qui rallieraient tous les suffrages, et seraient communs à tous les pays ?

- En ce qui concerne les relations entre les peuples, ceux-ci doivent-ils vivre en parfaite autarcie politique, économique, culturelle ? Doivent-ils se fermer totalement sur eux-mêmes ou au contraire : « *entrer en société* » sous l'égide d'un droit commun, un *jus gentium* qui les réunirait naturellement, sans qu'ils eussent besoin de procéder à des modifications de leur droit interne au prix d'abandons insupportables ?

- Comment cette relation doit-elle se constituer et quelle doit être la place des juristes et quel rôle vont y jouer la diplomatie et la guerre ?

À ces interrogations, le juriste bordelais Jean d'Arrérac apporte deux séries de réponses.

La première prend la forme d'une réaffirmation du réalisme juridique et de la philosophie chrétienne de la paix qui doivent dépasser les limites canoniques classiques du droit de la guerre.

La deuxième insiste sur la nécessité d'une évolution des idées et sur un pragmatisme chrétien au service de la communauté universelle du genre humain.

---

<sup>11</sup> D'Arrérac en est un exemple clair, avec son ouvrage sur les *Pandectes ou digestes du droit romain et français*, Simon Millanges, Bordeaux, 1601.

<sup>12</sup> Sur l'aspect plus général du phénomène coutumier, voir en dernier lieu X. Martin, *Vie et destinée des Coutumes françaises: essai de synthèse (1454-1804)*, Conférence Cour de cassation, 3 mars, 2004.

## 2. La réaffirmation du réalisme juridique et de la philosophie chrétienne de la paix

Le juriste bordelais répond à cette première interrogation en partant de l'existence d'un impératif essentiel: la paix. Elle doit être le but ultime poursuivi les communautés humaines, les Etats. Par sa fonction et la nature de son autorité, le magistrat est un homme de paix. Sa fonction se trouve par là-même portée à son apogée. Il est ministre de la paix, prêtre de la concorde. Cela est très clairement exposé lorsque d'Arrérac écrit « *Le droit des gens, c'est la garantie de l'harmonie* » et fait référence à la vieille conception augustinienne de la « *pax ordinata concordia* »<sup>13</sup>.

La paix est donc la concorde réglée. Mais elle est aussi, pour lui, une notion juridique fondamentale. Elle est l'achèvement du droit, sa réalisation parfaite<sup>14</sup>. Plus tard, Jean Bodin utilisant le même langage, parlera des juristes comme des « *conservatores pacis* ». Car ce sont eux : les officiers de justice et de finances, les militaires, les diplomates qui construisent sur une « base positive, mais avec des normes éthiques, ce réalisme intégral qui reconnaît l'autorité du droit »<sup>15</sup>. Cependant, leurs interventions ne s'inscrivent pas dans la même signification ni la même portée que celles qui conduisaient l'action de leurs illustres devanciers médiévaux. En effet, les hommes du Moyen Âge revendiquaient pour la religion un rôle exclusif d'inspiration et de juge de l'action politique, sociale, économique, culturelle. Rien n'échappait à la norme religieuse qui englobait, par sa finalité ultime, dans un ordre ontologique intangible, l'être même du droit et de la justice. Le magistrat ne pouvait qu'en être que simplement l'interprète, encore mieux le serviteur.

Chez Jean d'Arrérac, un examen superficiel semble montrer que l'équilibre des puissances paraît s'émanciper de l'orbite strictement religieuse qui avait été la sienne. Comme cela a été retenu par des études qui anticipent constamment sur les idées des jus-naturalistes du XVII<sup>e</sup> et plus encore celles des philosophes des Lumières. Mais ce n'est pas le cas. Sa finalité reste inchangée. C'est seulement la mise au point de l'harmonie devant présider à la paix qui acquiert une plus grande autonomie. Certes, Arrérac n'est pas le seul à s'interroger. Chez les publicistes du droit international, la question est posée de bonne heure. Car depuis l'apparition des grands débats théologiques internes à la foi chrétienne, depuis les querelles politiques et les conflits armés qui les ont suivis, la résolution de la paix est devenue cruciale. Elle est non seulement plus actuelle mais aussi plus essentielle, du fait de l'affirmation croissante des nations et de l'absolutisme politique. En effet, dans le même temps qu'elles compromettent l'idée de nations chrétiennes réunies dans une forte et exclusive unité religieuse, les guerres de religion entraînent, paradoxalement, un regain en faveur de la religion, assorti d'une obligation à la tolérance. Car, si l'on prend l'exemple des Français, les contraintes nées de l'impossibilité de trouver un terrain d'accord, sur le plan théologique et ecclésial, les obligent, malgré tout, à tolérer en leur sein l'existence d'une autre confession religieuse. Ainsi se trouve

---

<sup>13</sup> *La philosophie civile et d'état*, op. cit. p. 56-57.

<sup>14</sup> Voir le tome consacré à « La Paix », dans le *Recueil de la société Jean Bodin*, Bruxelles, 1961-1962.

<sup>15</sup> Ph. Mesnard, *L'essor de la philosophie politique à la fin du XVI<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1951, p. 676-677.

créée la nécessité d'établir une base juridique par le moyen de laquelle ces rapports conflictuels seraient réconciliés.

Ce sont ces conditions internes qui constituent, pour Jean d'Arrérac, des sortes de prémisses pour une analyse nouvelle des relations entre les Etats. En effet, si le caractère absolu de la souveraineté ne peut pas s'opposer au pluralisme religieux, sans risque d'éclatement du corps social et conduire même à la guerre civile, il ne peut pas non plus faire obstacle à la multiplicité et au développement des autres Etats, avec qui la puissance publique doit finalement entrer en relation.

C'est alors que l'intervention et la renaissance du *jus gentium* apparaît comme inéluctable.

Il ne faut cependant pas croire que l'auteur bordelais va jusqu'à imaginer qu'il y a une identité de mouvement entre le renoncement à l'organisation d'une société universellement supérieure aux Etats – du type chrétienté médiévale ou théocratie pontificale – et la recherche d'une communauté de principes (entre des groupes nationaux constitués et renforcés dans la règle finale du « *cujus regio ejus religio* », selon laquelle les peuples doivent suivre la religion du Prince). Cette pensée lui est étrangère. Il se situe, de toute façon, à l'écart des théories idéalistes dont les humanistes de la Renaissance se sont faits une spécialité, en pseudo-continuateurs des théologiens médiévaux, et qui n'hésitent pas à puiser dans un héritage protéiforme (biblique, platonicien, cicéronien), pour donner de nouvelles bases à la société, et pour qui les normes morales valent plus que les règles juridiques<sup>16</sup>.

Bien au contraire, le parlementaire bordelais appartient pleinement au courant réaliste. Il ne croit pas que la paix soit une vertu donnée. Elle n'est même pas l'apanage d'un Prince vertueux qui pourrait triompher de tout, en vertu du legs de la royauté davidique qui lui a été transmis et qui a trouvé dans le *rex christianissimus* une forme et des manifestations renouvelées<sup>17</sup>. Presque sceptique sur ce point, et en tout cas profondément pragmatique, d'Arrérac tient la guerre, la violence, les conflits entre les intérêts des hommes comme des phénomènes inévitables, de même que la maladie, la famine et la mort. L'observation de l'histoire, ainsi que celle du présent l'a convaincu qu'il s'agit là d'un état permanent de l'humanité. Les guerres sont inscrites dans le cœur de l'homme, et sans s'appuyer excessivement sur la lettre de la Bible, il note qu'elles doivent tout autant aux conséquences de la faute originelle qu'à celles de la liberté humaine dont la créature de Dieu ne sait que faire un mauvais usage, sans la foi qui la guide. Ces considérations théologiques classiques réaffirmées, elles ne l'éloignent cependant pas de la réalité la plus concrète. Son jugement est tranché: il tient les français pour un peuple belliqueux.

Il va aussi au-delà, et développe son analyse d'une manière si large que le lecteur se trouve entraîné à voir dans les fondations de son étude de la guerre, une conception presque moderne de la paix et de la guerre, de nature biologique et sociologique<sup>18</sup>.

La guerre est, on le sait, dans la tradition canonique, un mode de résolution des conflits. C'est toutefois un instrument qui ne doit être utilisé qu'en toute

---

<sup>16</sup> Pour une utile comparaison, cf. Y. Jeanclos, *Les projets de réforme de Raoul Spifame*, Droz, Paris, 1977.

<sup>17</sup> Y. Sassier, *Royauté et idéologie au Moyen Âge*, Paris, 2002, spécialement : l'idéologie de la paix royale, p. 290 s.

<sup>18</sup> M. Merle, *Pacifisme et Internationalisme*, op. cit. p. 12-14, 20-26.

dernière extrémité. C'est ce qui ressort de la maxime augustinienne « *Pacem debet habere voluntas, bellum necessitas* » qui a été insérée dans le *Décret* de Gratien et est reprise textuellement par les auteurs médiévaux jusqu'au XVII<sup>e</sup> siècle<sup>19</sup>. Chez Saint-Thomas, la paix est la tranquillité de l'ordre, non du désordre<sup>20</sup>.

Le but de la guerre contient cette idée. Il s'édifie autour de deux notions cardinales telles que les formulent les canonistes et les scolastiques : la « *restitutio* et la *vindicatio* ». Mais une question nouvelle vient s'y greffer rapidement. Elle est liée aux problèmes nés autour de la différence de religion. La foi n'est pas seulement créatrice d'harmonie et de concorde. Elle a aussi un aspect dogmatique qui peut l'entraîner à être intolérante vis à vis des autres croyances. Poussé dans ces conséquences extrêmes, leurs adeptes – surtout s'ils appartiennent à une seule et même nation – peuvent être précipités dans des conflits armés qui s'apparentent alors à la guerre civile. Cette question est essentielle dans sa nature même. Elle le devient plus encore au XVI<sup>e</sup> siècle, à cause du conflit théologique et ecclésial qui déchire les catholiques et les protestants. Ces débats religieux radicalisés, s'ajoutent, dans le même temps, aux mouvements qui atteignent les idées relatives à la guerre. Ceux-ci incluent alors une nouvelle réflexion sur la légitimité de la guerre pour cause de religion.

Ces antécédents canoniques occupent une place importante, mais ils ne sont pas les seuls à être récupérés et transmués dans la nouvelle pensée de cette première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle. Il existe des exemples littéraires dont les plus célèbres sont « *Le livre du corps de policie* », de Christine de Pisan, au début du siècle précédent<sup>21</sup>. Il parle des vertus et des mœurs liées à la guerre « *et n'est autre chose guerre et bataille qui est faite à juste querelle ne mais la droite exécution de justice pour rendre le droit là où il appartient* ». C'est encore un thème traité par Honoré Bonet dans « *L'arbre des batailles* », consacré pour l'essentiel au droit de la guerre et qui a été composé entre 1384 et 1387<sup>22</sup>. Pour ce moine bénédictin du prieuré de Salon de Provence, la bataille vient de Dieu, mais aussi du droit des gens du droit de nature. Et il figure parmi les références dont fait état le juriste bordelais.

Si l'on prend d'abord les listes canoniques des causes de guerre, il est patent qu'on y trouve toujours l'inscription d'une relation entre la guerre et le droit dans la notion de guerre juste. Le vocabulaire latin utilisé le montre clairement : l'*injuria* est une violation du droit – le verbe *vindicare* signifie punir une injustice – le *justus* signifie la conformité à la justice, au droit et par extension à l'équité. Ces précisions de vocabulaire ne doivent pas être considérées comme particulières à ce domaine. Toute la pensée juridique fait état d'un souci presque mécanique qui conduit à l'existence de classifications très élaborées. On en a un exemple particulièrement intéressant qui détermine toute la réflexion pénale.

Cela explique que l'on trouve chez Henri de Suse (le cardinal Hostiensis), une véritable taxinomie réaliste de la guerre, avec sept sortes de guerres

---

<sup>19</sup> Cf. M. Rivière, *Notes sur la littérature du droit des gens avant la publication du « ius belli et pacis » de Gratien*, Bruxelles, 1883. Adde, J. Joblin, « L'enseignement du collège romain sur la justice et la pensée contemporaine », *Archivum Historiae Pontificiae*, 39 (2001), p. 105-127.

<sup>20</sup> *Somme Théologique*, secunda, secundae, quaestio XL, 1.

<sup>21</sup> Cité dans E. Nys, *Les théories politiques*, op. cit. p. 47.

<sup>22</sup> E. Nys, *L'arbre des batailles d'Honoré Bonet*, Bruxelles, 1983.

classiques. Il en fait le compte à propos des preuves pénales<sup>23</sup>. Ces découpages reposent sur une idée maîtresse : la guerre est légitime lorsqu'on peut la considérer comme un juste châtement infligé à un peuple, un Etat, qui a commis une injustice grave à l'égard d'un autre. Le caractère de gravité prend appui, à son tour, sur l'obligation de pouvoir constater l'obstination de l'auteur à refuser toute réparation. Ce point est particulièrement important, car non seulement il permet la possibilité de médiation – ce qui correspond à la *via compromissi* classique – mais il déborde la stricte mise en œuvre des instruments judiciaires institutionnels dont on sait que, plus tard, Grotius fera un large usage dans sa théorie des bons offices<sup>24</sup>.

Ces précisions apportées, le constat fait chez les auteurs du milieu du XVI<sup>e</sup> siècle, et en particulier Jean d'Arrérac, montre pourtant que cette question, si cruciale, de l'existence de deux religions dans une même nation et d'un choix possible de la part des habitants ne peut pas rentrer dans ce schéma. Plus encore, la catégorie des infidèles dont traitent les canonistes médiévaux et la guerre qui peut leur être faite (la *guerre romaine*, selon la dénomination en usage), ne peut pas être utilisée dans l'orbite idéologique nouvelle. Le droit des gens qui repose sur le droit naturel, dans la deuxième moitié du XVI<sup>e</sup> siècle, implique qu'on ne peut pas faire la guerre à ceux qui ne partagent pas la même religion, sur ce seul argument.

Ces restrictions sont essentielles. Il ne faut toutefois pas se méprendre sur leur sens qui ne relève pas nécessairement d'un humanisme généreux. Elles relèvent plutôt de l'enseignement politique. Les rois médiévaux, tout comme leurs successeurs du XVI<sup>e</sup> siècle, sont désireux de fonder sur de solides bases juridiques leurs réclamations, ne serait-ce que pour se donner l'apparence de bonne justice. Mais ils regardent aussi et davantage, d'un œil neuf, le poids que représente désormais une opinion publique (si incertaine qu'elle soit encore) à laquelle ils n'hésitent pas à faire appel. On trouve chez eux, par conséquent, le souci de faire coïncider, plus encore qu'auparavant, la volonté qui conduit leurs actes et leurs décisions elles-mêmes, avec les principes moraux du christianisme<sup>25</sup>. Car du fait de l'exacerbation des questions religieuses, le domaine de la foi est devenu une sorte de point d'ancrage sur lequel se construit l'identité politique, de la même manière qu'il est également le point de ralliement des populations et des territoires sur lesquels elles vivent et sont gouvernées. Cela conduit donc les souverains à utiliser au maximum les instruments juridiques. Ces derniers permettent de faire l'économie des thèses chrétiennes sur la guerre, si sensibles et si malaisées à manier contre des infidèles qui – à tout prendre, dans le climat encore incertain des tentatives d'union religieuses entre catholiques et protestants du milieu du siècle – n'appartiennent pas vraiment à une autre religion.

Le résultat aboutit donc à faire la guerre pour la foi, mais sans reprendre les vieux arguments canoniques médiévaux de la guerre sainte ou de la guerre romaine contre les hérétiques. On le voit bien dans le sens donné à la justice dans la guerre: ainsi, une guerre est-elle injuste, non pas tant parce qu'elle

---

<sup>23</sup> Dans la *Summa Aurea*, lib. I, Rubr. XXXIV, de Treuga et pace (bellum romanum, iudiciale, praesumptorum, licitum, temerarium, voluntarium, necessarium). Cf. A. Vanderpole, *La doctrine scolastique du droit de la guerre*, Paris, p. III.

<sup>24</sup> Haggemacher, *Grotius et la doctrine de la guerre juste*, coll. Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, Genève, P.U.F., 1984.

<sup>25</sup> J. Mesnard, *L'essor de la philosophie politique*, op. cit. p. 441.

n'est pas conforme à la justice, mais simplement, parce que des éléments juridiques indispensables à sa qualification, et en quelque sorte instrumentaux, n'ont pas été utilisés ou respectés. Par exemple, la guerre a été déclarée par une personne n'ayant pas les qualités nécessaires. Elle est dite alors non conforme au droit.

Cette manière d'envisager la guerre n'a que des avantages pour le temps présent. Elle évite de trancher, sur le fond, de la nature de la justice de la guerre. Elle permet aussi de prendre en compte la résolution de questions cruciales comme la conservation de la société ou la consistance de l'Etat : points devenus déterminants dans ce siècle d'éclatements et de dissolution du corps social, de risque de schisme dans l'Eglise et même de révolution contre le pouvoir royal<sup>26</sup>. Jean d'Arrérac se tient en accord avec son contemporain Francisco de Vitoria en définissant les conditions de la guerre sur le plan de la forme et d'une sorte de « *ius in bellum* » interne. C'est à dire qu'il accorde une place essentielle à la manière convenable de combattre – selon les règles du droit. Il pose ainsi, de son côté, la question de la nécessité d'introduire le droit de la guerre dans le « *ius proprium gentium* » et déclare nettement que la différence de religion ne peut être une cause de guerre juste<sup>27</sup>. Comme Vitoria encore, il invoque saint-Thomas d'Aquin et tous les principaux docteurs scolastiques<sup>28</sup>.

C'est un héritage commun à beaucoup d'auteurs (A. Gentilis, Covarrubias). Il est construit sur deux éléments.

Le premier point relève le rôle du Prince, c'est à dire la place que la souveraineté, l'Etat occupent en tant que conducteurs de la guerre. Par sa fonction et la nature même de son état, le Prince est obligé d'être le juge du bien commun. Ce qui contient inéluctablement la question de la paix ou de la guerre.

Le second point insiste sur la proclamation d'un « *ius humanae societatis* ».

Ces deux points seront au centre des arguments du discours philosophique politique qui connaît alors une nouvelle renaissance. Le premier, bien connu, sera particulièrement développé dans les ouvrages de Jean Bodin et de Guillaume Postel, ainsi que chez leurs continuateurs : Guy Coquille, Loyseau, Guez de Balzac qui étaient tous partisans du caractère absolu de la souveraineté<sup>29</sup>.

Le deuxième point mérite lui-aussi une attention spéciale. Il s'agit chez la majorité des auteurs qui se font l'écho des voix des représentants de l'Eglise, lors du concile de Constance de 1417, de prendre en compte la nouvelle définition de la société internationale. Car ils se situent dans un moment crucial de l'histoire où les limites de l'univers connaissent de profonds changements.

---

<sup>26</sup> Là où le Prince chrétien triomphe aisément, le « mauvais souverain » doit nécessairement échouer. H. Koensberger, *L'Europe au XVI<sup>e</sup> siècle*, Sirey, Paris, 1970, p. 283.

<sup>27</sup> Suárez, *De legibus*, IV, *De pace*, C.S.I.C., Madrid, 1973, p. XLVIII, LXIII. Dans une importante bibliographie, F. Arias de Valderas, *De la guerra y de su justicia e injusticia*, Madrid, 1932, ainsi que la grande étude sur les théologiens espagnols de A. Melquiades, *Historia de la teología española*, F.U.E., Madrid, tome 1, 1983, p. 579-735 (627, 629). Enfin, plus récemment, les *Actas de las II jornadas hispánicas de Derecho natural*, Cordoba, 14-19 de septiembre de 1998, M. Ayuso (editor), Publ. Obra Cajasur, Córdoba, 2001, spécialement, p. 153-165; 353-380.

<sup>28</sup> « Je ne connais personne qui soutienne l'opinion contraire » *De jure belli*, 10, 11, 12.

<sup>29</sup> J. Rouvier, *Les grandes idées politiques des origines à Jean-Jacques Rousseau*, Bordas, Paris, 1973, p. 287.

Elles reculent et englobent des peuples nouveaux, et, par conséquent, atteignent la vieille chrétienté qui formait (en y incluant naturellement l'Empire) l'orbe où se définissait les rapports des chrétiens avec les autres peuples. Ceux-ci ne pouvaient jadis être inclus dans le droit commun. Il en résultait que les relations avec ces étrangers au monde chrétien ne pouvaient être que réglées par un pur arbitraire ou de simples rapports de fait : d'indifférence ou d'hostilité selon les cas.

### 3. *Le pragmatisme chrétien au service de la communauté universelle du genre humain*

Les raisons et les données de cette nouvelle vision du monde sont complexes. Y figurent des éléments de nature anthropologique, mais aussi des règles juridiques. Ce qui caractérise ce changement de perspective, c'est qu'il est d'abord dépassionné. L'homme est vu réellement en société dans une perspective qui, à la fois repose sur la vieille tradition politique aristotélicienne, et qui incluse désormais, de façon plus décisive, l'histoire. Il est même pris en compte à partir de considérations qui incluent désormais l'histoire, la nature et les caractéristiques particulières à chaque société. Ce n'est plus seulement l'homme nu dans sa relation privilégiée avec Dieu, isolé de son contexte vivant. Ce qui a autorisé des auteurs à montrer que, d'une certaine manière, la pensée laïque aurait pénétré ce domaine des idées<sup>30</sup>. Sans nous attarder sur ce point, il est clair que le résultat sur le plan du droit – même le droit qui gouverne les relations entre les peuples – est que celui-ci n'est plus séparable du contrat. La promesse des engagements : qu'elle soit fondée sur la vieille *aequitas canonica* ou l'*aequitas naturalis*, est essentielle à la nature des rapports noués entre les contractants. La fidélité humaine, et son corollaire qui oblige à ce que le lien qui relie les hommes entre eux, selon la nature, et que la règle *pacta sunt servanda* exprime juridiquement, font partie intégrante d'éléments techniques grâce auxquels les obligations sont devenues plus sûres.

La conséquence majeure qui en résulte est que le *ius inter gentes* qui doit régler maintenant les relations entre les Etats souverains, est fondé sur la reconnaissance et le maintien, coûte que coûte, d'un minimum d'échanges<sup>31</sup>. Cette véritable loi s'impose, alors même que les passions nationales, les conflits religieux s'exacerbent et que croissent les fanatismes les plus destructeurs. Elle doit demeurer envers et contre tout. Pour Jean d'Arrérac, ces questions reçoivent une solution exempte de toute ambiguïté.

Selon le juriste bordelais, il convient de rechercher et de respecter, dans et à travers les différentes religions, le lien humain le plus concret possible. C'est ce qui lui fait écrire : « *même l'idolâtrie est du droit des gens* »<sup>32</sup>. Cependant, il reste attaché aux anciennes leçons médiévales qui n'établissent pas les religions sur un même plan. Certaines d'entre-elles sont supérieures aux autres, en raison de la vérité qui s'y trouve incluse et qui ne supporte pas de comparaison. Car il ajoute dans le même temps que la vraie religion est du droit de nature. De même que « *le vrai droit naturel est le souverain bien de l'homme*

---

<sup>30</sup> J. Joblin, "L'evoluzione storica dei movimenti de la pace", *Civiltà cattolica*, 1984, II, p. 336-349.

<sup>31</sup> J. Moreau-Rebel, *Cours de l'Académie de droit international*, op. cit. p. 546-588.

<sup>32</sup> *La philosophie...* op. cit. p. 64.



à vivre selon les lois de Dieu »<sup>33</sup>. Et conscient des risques d'un œcuménisme vague et destructeur, il souligne que les religions ne sont pas identiques, ni nécessairement porteuses d'une vérité commune et que le christianisme les transcende toutes. Ceci posé, il lui paraît indispensable de limiter les conséquences de la guerre religieuse. Elle est non seulement une guerre idéologique, mais aussi une guerre civile. C'est pour ces raisons qu'il veut écarter le droit de butin, car il est fondé sur des règles qui ne s'appliquent qu'aux conflits entre étrangers.

C'est la thèse ingénieuse que mit en honneur Alciat. Celui-ci, bien qu'éloigné vers la fin de sa vie des conflits politico-religieux français, reste très attaché à leur solution pacifique. Il considère ces luttes comme de véritables guerres civiles qui sont à ses yeux encore plus meurtrières et fratricides. Ce qui montre qu'il agit encore en héritier de l'École des Bartolistes<sup>34</sup>.

La question des ruses de guerre n'est pas absente non plus de la réflexion du magistrat du Parlement de Bordeaux. Ces ruses sont toujours permises. Elles le seront encore jusqu'à la fin du siècle, puisque, entre 1589 et 1593, de nombreux traités continuent de les autoriser : par exemple ceux de Raymond de Beccarie, de Bernard de Loque, d'Emery de Sainte-Rose, de Jehan Robert. Certaines de ces œuvres sont écrites par des juristes qui appartiennent eux-aussi au prestigieux corps des conseillers des Parlements<sup>35</sup>. Les raisons essentielles de cette pratique s'enracinent dans le legs des anciennes *lettres de Marque* et les lettres de représailles qui contiennent un *ius concedandi repraesalia* considéré comme appartenant au droit des gens. Car, ainsi que l'écrit d'Arrérac, il existe dans la guerre une responsabilité solidaire : « *ce qui est dû par un corps est dû par chacun des membres dont il est composé* », et parce que enfin, les représailles ne rompent pas la paix. On trouve déjà dans le droit romain l'idée que la ruse utilisée contre l'ennemi est un *dolus bonus*<sup>36</sup> et les canonistes, à sa suite, l'ont toujours admis. C'est ce qui explique que les traités techniques sur la guerre rédigés, entre 1550 et 1600, s'accordent entre eux sur ce point.

Dans les conflits qui opposent les catholiques et les protestants, les restrictions spécifiques déjà notées ne s'appliquent pas dans cette matière. Au contraire, la défense de religion les justifie plus encore. Il s'agit en effet de protéger la chose publique, l'honneur de Dieu et de la foi, comme le souligne vigoureusement d'Arrérac<sup>37</sup>.

Lorsqu'on aborde la question plus précise des rapports internationaux dans le cadre de la mise en œuvre de la paix par le droit, on constate que l'auteur insiste fortement sur le fait que c'est ce qui permet aussi de mettre de l'ordre dans les royaumes; conditionne à la fois la protection des nations et celles des alliances. L'expression moderne « relations internationales » n'apparaît évidemment pas dans les termes utilisés par le juriste. Et l'on doit rester prudent, dans l'interprétation, sous peine d'anachronisme. Mais il est incontestable que les relations entre les États sont étudiées, dans beaucoup

---

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 52, 54.

<sup>34</sup> *De verbo significatione libro quattuor*, lex 118 « *hostes hi sunt* », cité par E. Nys, *Les origines*, op. cit. p. 238.

<sup>35</sup> « *Les ruses et cautèles de guerre* », « *Les instructions sur le fait de la guerre* » et surtout les « *Quatre livres du droit de la guerre* ».

<sup>36</sup> *Digeste* 4, 3, 1, 4 (*de dolo malo*) « *adversus hostem latronemve* ».

<sup>37</sup> *La philosophie...* op. cit. p. 74.

d'écrits, dès la première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle, sous une forme beaucoup plus globale que si elles étaient situées dans une seule relation personnelle – c'est à dire dans un strict rapport au monarque qui gouverne –, ou même en tenant compte des caractéristiques dynastiques. Les nations se forment. Il y a un net recul de la Chrétienté. C'est à dire, dans la perspective adoptée par Jean d'Arrérac, un partage de l'Europe en deux camps qui deviennent très vite antagonistes et cette partition – en passe de devenir aussi géographique – est irrémédiable à partir de 1560<sup>38</sup>. Cette rupture d'une mentalité pluriséculaire, au cours de laquelle la théologie et la philosophie politique avaient tant insisté sur les éléments qui concourraient à l'instauration et à la sauvegarde de l'unité, bouleverse toute l'idéologie dominante.

Ce problème soulève évidemment la question de sa véritable reconnaissance par les contemporains, et il est difficile de trancher sur ce point. Il est cependant nécessaire au chercheur de l'inclure dans son analyse. L'union entre les peuples n'est plus le fondement de la conception même du monde (telle qu'elle s'incarne dans l'*orbis christianus*) et de la forme revêtue obligatoirement par les institutions. Il y a vraisemblablement une correspondance entre l'acceptation de cette déchirure du « manteau sans couture » et l'émergence croissante des nationalismes. Comme le note, avec une certaine effusion, le juriste bordelais, le chant de la patrie commence. Il est encore centré sur la personne du monarque, car écrit-il: la patrie « *C'est tout l'Etat du Royaume, auquel nous devons charité, amour, obéissance, comme aussi au Roy qui en est le chef* »<sup>39</sup>.

L'attachement au souverain est ainsi une des composantes d'un sentiment nouveau auquel se mêle celui du terroir natal<sup>40</sup>. Jean d'Arrérac est très marqué par ce courant d'idées. Il rejoint le camp des passionnés de la nation française. C'est pour lui une souffrance supplémentaire de voir se diviser une communauté que la nature, la religion et l'histoire ont tellement rapprochée et unie. Pour ceux-là dont il fait partie, c'est encore plus fondamentalement inacceptable dans un même Etat.

Unique est la nation, uniques devront être l'Etat et le droit. Pour le juriste bordelais, le point de départ de cette nouvelle conception de la communauté est et reste chrétien. Aucun doute n'est permis. Il a pris corps au XV<sup>e</sup> siècle dans les classifications des théologiens, et dans les débats d'Ecole qui ont opposé le réalisme et le nominalisme<sup>41</sup>. Mais à y regarder d'un peu plus près, la notion d'« *orbis christianus* » cesse d'être la seule référence, par suite de l'apparition d'une nouvelle communauté: la « *communitas orbis* ». Or ce regroupement est d'une tout autre nature. Il n'est plus exclusivement fondé sur ce qui réunit les disciples du Christ – considérés dans la conception évangélique paulinienne des Nations, sa catholicité et son universalité singulière. Sa caractéristique en est plus « *laïque* », moins œcuménique et ecclésiale. Ce sur quoi l'on insiste maintenant : c'est la notion d'une communauté réelle et universelle du genre humain<sup>42</sup>.

---

<sup>38</sup> A. Corvisier, *Précis d'Histoire moderne*, Paris, 1971, p. 11, 120.

<sup>39</sup> *La philosophie...* op. cit. p. 65.

<sup>40</sup> Jean d'Arrérac est aussi l'auteur d'un panégyrique de Bordeaux dans lequel il mêle l'amour de la terre qui l'a vu naître et l'idée de patrie, et qui a été publié par nos soins dans la *Revue française d'histoire du livre*, a. 44 (1975), p. 211-216.

<sup>41</sup> Cf. A. Melquíades, *Historia de la teologia española*, op. cit. p. 611.

<sup>42</sup> *Ibidem*, p. 624.

L'on sait que les théologiens de l'École de Salamanque ont été les premiers à poser, par l'intermédiaire de Francisco de Vitoria, le véritable fondement du droit international, ainsi que, par réaction, celui de la patrie. Ils ont pris à la lettre le texte de l'Évangile : « *Euntes docete omnes gentes baptizantes* »<sup>43</sup>. C'est d'ailleurs dans ce sens, que la foi est appelée à être, par l'intermédiaire du monarque, le sens et la figure de la communauté. Cela explique le soin que ces théologiens apportent à en préciser les contours et les exigences politiques. Ils les relient aux nouvelles données économiques, au droit, à la philosophie morale qu'ils élaborent dans le même temps.

À l'évidence, la stature du juge du Parlement de Bordeaux est beaucoup moins élevée. Parce que l'action de ces penseurs est facilitée par le prestige social qui les entoure et qui est beaucoup plus grand en Espagne qu'en France, mais aussi en raison de l'étroite imbrication, dans leurs œuvres, d'une rectitude théologique alliée à la construction d'une doctrine juridique cohérente et même parfois déterminante – ce qui fait défaut au « précurseur bordelais » qui manque de connaissances dans ce domaine. L'ensemble donne à la pensée hispanique ultérieure (celle des *Tratadistas* et ses continuateurs), entre le XV<sup>e</sup> et le XVI<sup>e</sup> siècle, la maîtrise d'une nouvelle illustration du rationalisme chrétien<sup>44</sup>. Ces grands théologiens et juristes espagnols sont bien les devanciers des philosophes des Lumières. À condition, à tout le moins, qu'on pose à ces derniers toute une série d'interrogations au sujet de cet héritage qu'ils oublient de mentionner, alors que leur dette est immense, ou qu'ils trahissent délibérément<sup>45</sup>.

La question de l'équilibre des relations entre les peuples est une des plus connues. Mais il faut donner la paternité de ces thèmes aux vrais auteurs, et mettre au net la chronologie. Car la précocité de l'apparition de la thèse est remarquable. À Bordeaux, elle prend forme dans les études sur le droit d'ambassade rédigées par Nicolas Bohier, président du Parlement au tout début du XVI<sup>e</sup> siècle<sup>46</sup>, puis dans les œuvres d'Étienne Dolet, Secrétaire de l'Ambassade de France à Venise et surtout chez Jean Bruneau, professeur à l'Université d'Orléans. La définition bien connue de Jean Bodin « *l'équilibre gît en contrepoids de puissance* », bien que ne figurant pas dans la lettre même dans ses ouvrages, est déjà celle de Jean d'Arrérac. Pour lui, c'est la puissance des Princes qui constitue la limite des royaumes, pas celle des territoires nés de l'histoire ou offerts par la géographie. Et l'on doit fonder les rapports des peuples sur cette donnée<sup>47</sup>. Cette idée sera la grande thèse de la diplomatie

---

<sup>43</sup> *Matthieu* (28-19)

<sup>44</sup> Chez ces juristes on trouve à la fois une théorie de l'ordre naturel et une recherche de la « vis de sociabilidad ». Cf. Venancio de Carro, *La teología y los teólogos-juristas*, Salamanca, 1944, p. 481. Voir, pour une actualisation plus récente, les travaux de M. Ayuso Torres, *Después del Leviathan. Sobre el Estado y su signo*, Dykinson, Madrid, 1998 (spécialement pp. 46-68) et ceux publiés dans la fondation Elías de Tejada,

<sup>45</sup> Cf. les mises au point des Actes du colloque de Chantilly sous la direction de L. Girard et L. de Vaucelle, *Les jésuites à l'âge baroque (1540-1640)*, J. Million, 1996 et l'article de C. Héry, « Jésuites et théologie politique à l'âge baroque. Suárez à la recherche de l'ordre sans fin », *Conflits culturels, Revue d'Étude politique*, n° 12 (2003), n° 2, p. 89-104.

<sup>46</sup> Sur N. Bohier "Boerius", G. Guyon, « Un arrêtiiste bordelais: Nicolas Boerius (1469-1539) », *Annales de la faculté de droit et des sciences sociales et politiques et de la faculté des sciences économiques*, Centre d'études et de recherches d'histoire institutionnelles et régionales, n° 1 (1976), p. 17-44.

<sup>47</sup> *La philosophie...*op. cit. p. 177.

d'Ancien Régime, même si elle repose sur des composantes internes variables. Ce sera tantôt l'union des faibles contre un puissant, ou encore l'égalisation des rapports de forces. Elle se retrouvera aussi chez la plupart des publicistes du droit international à la fin du XVI<sup>e</sup>, jointe alors à des essais tendant à légitimer la résistance à l'Etat dont la croissance et la puissance inquiète et nécessite de manière urgente d'instaurer des contrepoids.

Si l'on reprend ces études et ces propositions, on s'aperçoit qu'elles sont imprégnées d'un fort pragmatisme. Elles ne sont pas le produit d'une idéologie, mais plutôt d'une simple constatation des faits, de réalisme. Jean d'Arrérac, bien qu'il affirme sa haute conception de la monarchie, ne croit pas que cela autorise celle-ci à refuser d'entretenir des rapports avec d'autres peuples ou les Etats. Là aussi, il ne se contente pas d'une attitude absolutiste, ni de se placer à un strict niveau moral, sous couvert de référence au droit naturel<sup>48</sup>. Pour lui, il convient toujours de rester sur un plan concret, de rechercher et d'appliquer à tout ce qui peut apparaître comme des tensions, des mécanismes de régulation par l'intermédiaire des techniques du droit. Il ne faut pas se contenter – ainsi que le déclarent les théoriciens continuateurs de l'humanisme chrétien – de dégager seulement des normes morales qui permettraient d'humaniser la société et d'adoucir les conflits. Comme Sully qui en est proche, le juriste bordelais veut stabiliser les forces, les rivalités. Il veut équilibrer les puissances mais il ne va pas jusqu'à imaginer de mettre sur pied une sorte d'organisme international.

Il convient également de s'interroger sur la position qu'occupe d'Arrérac par rapport à ceux qu'on appelle à son époque les *Républicains*. Il est difficile de savoir s'il a été lié, comme Etienne de la Boétie, à ceux qui cherchent à faire école autour de la défense des idéaux de liberté et d'égalité dont chaque homme est porteur, par sa nature même, et qui entendent les placer au centre des institutions universelles divines, donc communes, tout en s'inspirant à la fois des exemples de l'Antiquité et des thèses de la Réforme<sup>49</sup>.

Le magistrat bordelais s'écarte ainsi des options radicales du « *Discours de la Servitude volontaire* » écrit vers 1549 et qui sera réédité par les Calvinistes en 1570 sous le titre de *Contr'un*<sup>50</sup>. Il est plus proche des *politiques* lorsqu'il parle souvent de « *la loi de nature en la raison humaine* »<sup>51</sup> et envisage de limiter les pouvoirs du roi qui doit se conformer au droit de nature et au droit des gens. Car écrit-il : « *c'est lui qui est la matrice et la fontayne des vrays lois* »<sup>52</sup>. De la même manière, l'idée de contrat le rapproche de Michel de l'Hospital, d'Etienne Pasquier, de François Pithou et de François de La Noue, lorsqu'il indique que « *la loy doit être réciproque entre le Prince et ses sujets* »<sup>53</sup>. Ainsi, il n'y a pas de grande différence entre cette idée que l'on qualifierait aujourd'hui de 'contractualiste' et celle que l'on retrouve encore chez La Boétie qui insiste sur ce point et sait bien le poids politique que représente le peuple, dans cette

---

<sup>48</sup> Ce phénomène est assez particulier à la France, selon M. Merle, pour qui la science juridique est prisonnière d'une attitude trop absolutiste, *Pacifisme et internationalisme*, op. cit. p. 26, 32.

<sup>49</sup> M. Baudrillart, *Tableau des théories politiques au XVI<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1953, p. 48, 68-73.

<sup>50</sup> La Boétie, *Discours de la servitude volontaire*, Paris, Flammarion, 1983. On peut lire avec profit, pour la connaissance de l'atmosphère de passion et de persécutions au Parlement de Bordeaux entre 1530 et 1563, la belle introduction de S. Goyard-Favre, p. 21-28.

<sup>51</sup> *La philosophie...* op. cit. p. 151.

<sup>52</sup> *Ibidem*, p. 242.

<sup>53</sup> *Ibid.*, op. cit. p. 255.

entreprise de consentement au pacte de gouvernement et à sa nature spéciale qui n'est ni un *pactum associationis*, ni un *pactum subjectionis*<sup>54</sup>.

Jean d'Arrérac, malgré des positions parfois fermes sur les Réformés et les normes théologiques qui les séparent des catholiques (la papauté, les rites, les sacrements, la solennité des liturgies le droit canonique), n'est pas un extrémiste. Il n'appartient pas au parti des catholiques royaux qui regroupe des membres de la noblesse et une large fraction du clergé, après la Déclaration de Saint-Cloud du 4 août 1589 dans laquelle Henri de Navarre promettait le maintien de la religion catholique et la tenue d'un concile. Il est encore moins un monarchomaque catholique.

Ses options doivent être replacées dans le contexte local bordelais, où l'influence des communautés protestantes se fait vigoureusement sentir<sup>55</sup>. Et lorsqu'il se rallie à Henri IV, dans le chaos de la guerre civile, c'est pour asseoir plus concrètement sa réaffirmation de l'autorité dans l'Etat. Elle est à ses yeux indispensable. Sans elle, rien qui rassemble le pouvoir de faire la loi, rien qui permette de la faire respecter et de juger conformément à l'esprit de justice. Ce sont d'ailleurs ces grandes questions touchant à la nature du pouvoir qui agitent la fin du siècle. C'est dans ce sens qu'il faut prendre l'adresse par laquelle il salut le Béarnais « *un roy auquel il semble que Dieu ayt départi plus de graces qu'à tous ses prédécesseurs* »<sup>56</sup>. On peut certes y voir un paradoxe, assez commun chez de nombreux auteurs de cette période: entre des démonstrations loyalistes monarchiques et une sorte de *contractualisme* encore flou qui sert de base à la dénonciation des abus, de l'arbitraire, des détournements d'autorité – le tout sans remettre en cause un principe monarchique qu'il convient de rendre inébranlable.

Cela dit, il reste encore une question importante à souligner car elle s'inscrit, elle-aussi, dans la réflexion sur le droit de la nature et des gens: la nature des liens existant entre le pouvoir civil et la religion.

On connaît les trois formes au moyen desquelles se définissent leurs rapports: la collaboration fonctionnelle, la théocratie pontificale, la soumission indirecte. Les grands penseurs jésuites espagnols Suárez, Vitoria développeront l'idée que l'acceptation mutuelle est essentielle, et qu'elle doit reposer sur un respect mutuel.

Il semble que la solution française des penseurs politiques soit identique. C'est en tout cas celle de Jean d'Arrérac. Pour lui, la religion doit continuer d'inspirer la vie publique et civile, mais elle ne doit pas en être totalement juge. Dans cet esprit, le juriste bordelais commence d'abord par distinguer soigneusement les sources de la juridiction. Il établit son équation en mettant en relation les deux souverainetés : la juridiction royale qui est souveraine et la juridiction ecclésiastique pontificale. En séparant les deux pouvoirs, il met aussi en question l'autorité du Pape. Mais d'Arrérac est prudent. Il ne tranche pas complètement de l'autorité du concile. Il se contente de renvoyer à Nicolas de Cuse et à Bellarmin<sup>57</sup>. Or, on le sait, le premier est partisan des thèses de l'autorité du concile œcuménique sur le Pape et l'autre, dans ses

---

<sup>54</sup> *Discours sur la servitude volontaire*, op. cit. p. 102.

<sup>55</sup> S. Pacteau, *Les protestants et Bordeaux*, Mollat, Bordeaux, 1999.

<sup>56</sup> *La philosophie...*op. cit. p. 66.

<sup>57</sup> *La philosophie...*op. cit. p. 596.

« *Controverses* », inspire un renouveau de la théorie du pouvoir indirect pontificale - même dans les affaires temporelles.

Il est clair que le bordelais veut ainsi souligner deux types de limites internes et externes de la souveraineté. En premier lieu, lorsqu'il traite de la nature et de la capacité du pouvoir politique, Jean d'Arrérac ne l'établit pas sans un certain nombre de contre poids nécessaires. Il n'utilise pas les expressions relatives à la théorie des freins (religieux, policiers –les ordonnances du royaume– le respect de la loi). Mais, en bon juge appartenant à la Cour Souveraine bordelaise, il n'oublie pas le rôle du Parlement. Il écrit que la monarchie doit être réglée, sinon les rois « *s'ils passent par dessus les lois et la raison, ils dépouillent en cet acte de la royauté (et) malgré leurs pouvoirs, par leurs édits créent des matières de moindre qualité que celle du droit naturel* »<sup>58</sup>.

Quant aux limites externes, il entend par là celles qui ressortent du *ius gentium*, du droit des gens. L'absoluité de la souveraineté trouve donc un obstacle naturel dans l'existence des autres Etats et des relations que le roi est obligé – ne serait-ce que par la géographie et les contraintes de l'ordre normal de la vie, de nouer avec eux. Ce réalisme qui revêt chez lui une forme accusée tranche avec les conceptions existant, d'une façon générale en France, et l'idée qu'on se fait de la monarchie, depuis le Moyen Âge, qui interdit de voir dans les autres Etats de véritables puissances autonomes<sup>59</sup>.

Ces quelques remarques sont encore trop générales. Mais elles montrent toutefois que le juriste du Parlement de Bordeaux n'est pas un simple compilateur. Les thèmes de son livre témoignent d'un intérêt largement partagé en Europe pour les questions politiques, et en particulier pour tout ce qui touche à la souveraineté et au droit des gens. Sans doute n'a-t-il pas la puissance systématique de l'esprit d'Albéricus Gentilis, ni le génie universel de Guillaume Postel (avec son *De orbis terrae concordia* – publié en 1543). Mais son travail montre la nécessité de vérifier, chez les juristes, la manière dont s'est faite la transmission de l'héritage canonique et politique médiéval – celui de la philosophie du droit thomiste, en particulier – dans la nouvelle pensée politique en germe au cours du XVI<sup>e</sup> siècle. Période où un réalisme modérateur chrétien prend à la fois appui sur les thèses qui veulent faire du droit le conservateur des sociétés humaines, nécessaire à l'équilibre, à la durée, à la consistance de l'Etat et aussi sur les idées nouvelles qui prônent une universalité formelle et juridique, base du droit public international moderne.

Recibido el 15 de octubre de 2010 y aceptado el 6 de noviembre de 2010.

<sup>58</sup> *Ibidem*, p. 38, 84.

<sup>59</sup> J. Krynen, *Idéal du prince et pouvoir royal à la fin du Moyen Âge*, Paris, Picard, 1981.





## PERCHÉ IN CATTOLICI NON POSSONO NON DIRSI LIBERALI

Lorenzo SCILLITANI\*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

**Lorenzo Scillitani** (2011): "Perché in cattolici non possono non dirsi liberali", en *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, n.º 1 (marzo 2011), pp. 43-51. En línea: <http://www.eumed.net/rev/rehipip/01/ls/pdf>.

**ABSTRACT:** Nel quadro di un esame complessivo del contributo dei cattolici alla ricostruzione della società italiana all'indomani della Seconda Guerra Mondiale –e con specifico riguardo all'apporto della cultura politica e giuridica cattolica alla elaborazione della Carta Costituzionale del 1948–, non si può fare a meno di rilevare un dato di una certa, significativa rilevanza: i cattolici italiani hanno messo mano alla creazione di istituzioni politiche ispirate ai principi delle democrazie liberali classiche, realizzando nella *prassi*, politica ed economica, istanze che, a livello teorico, essi non hanno saputo o voluto compiutamente e sistematicamente elaborare. Quando infatti si pensa ai cattolici impegnati nella vita politica italiana del dopoguerra, riesce più facile l'accostamento del sostantivo «cattolicesimo» agli aggettivi «sociale», «democratico», «popolare», che non all'aggettivo «liberale».

**PAROLE CHIAVE:** Democrazie liberali classiche, Cattolici italiani, Seconda Guerra Mondiale, Fascismo, Liberalismo, Costituzione di 1948, Partito popolare, Democrazia cristiana, Alcide De Gasperi, Sergio Cotta, Gennaro Sasso, Antonio Rosmini, Giuseppe Capograssi, Guido Gonella, Claude Lévi-Strauss.

**RESUMEN:** En lo que respecta a la contribución de los católicos en la reconstrucción de la sociedad italiana tras la Segunda Guerra Mundial –y con especial referencia a la aportación de la cultura política y jurídica católica con vistas a la elaboración de la Constitución del 1948, de la Italia republicana salida del referendum de 1946–, no se puede más que subrayar un dato de significativa relevancia: los católicos italianos han contribuido a la creación de instituciones políticas inspiradas en las democracias liberales clásicas, realizando en la *praxis*, tanto política como económica, instancias que, a nivel teórico, no han sabido o querido elaborar de forma completa y sistematizada. De hecho, cuando se piensa en los católicos que se dedicaban a la vida política italiana en la postguerra resulta más fácil vincular el sustantivo «católico» con los adjetivos «social» o «democrático» que con el adjetivo «liberal».

**PALABRAS CLAVE:** Democracias liberales clásicas, Católicos italianos, Segunda Guerra Mundial, Fascismo, Liberalismo, Constitución de 1948, Partito Popolare Italiano, Democrazia cristiana, Alcide De Gasperi, Sergio Cotta, Gennaro Sasso, Antonio Rosmini, Giuseppe Capograssi, Guido Gonella, Claude Lévi-Strauss.

\* Lorenzo Scillitani è professore di Filosofia del Diritto presso l'Università degli Studi del Molise (Italia).



Nel quadro di un esame complessivo del contributo dei cattolici alla ricostruzione della società italiana all'indomani della Seconda Guerra Mondiale –e con specifico riguardo all'apporto della cultura politica e giuridica cattolica alla elaborazione della Carta Costituzionale del 1948–, non si può fare a meno di rilevare un dato di una certa, significativa rilevanza: i cattolici italiani hanno messo mano alla creazione di istituzioni politiche ispirate ai principi delle democrazie liberali classiche, realizzando nella *prassi*, politica ed economica, istanze che, a livello teorico, essi non hanno saputo o voluto compiutamente e sistematicamente elaborare. Quando infatti si pensa ai cattolici impegnati nella vita politica italiana del dopoguerra, riesce più facile l'accostamento del sostantivo «cattolicesimo» agli aggettivi «sociale», «democratico», «popolare», che non all'aggettivo «liberale».

Eppure, è un fatto storico incontrovertibile che la scelta di campo, che l'Italia ha operato dalla parte dell'Occidente già nel 1946 – in occasione delle prime libere elezioni svoltesi sul territorio nazionale<sup>1</sup> –, è stata resa possibile da cattolici apertamente schierati su posizioni liberali, sotto le insegne della Democrazia cristiana. L'intervento decisivo di *questi* cattolici, a cominciare da De Gasperi, chiaro nella collocazione 'atlantica' di un partito destinato a governare ininterrottamente l'Italia fino ai primi anni '90, non risulta altrettanto esplicito nelle premesse teorico-culturali, almeno in quelle dichiarate. Per cui è difficile, ancor oggi, riconoscere nella Democrazia cristiana la forza politica che più coerentemente, sul piano della politica internazionale come sul piano della politica interna (economica, piuttosto che culturale), ha portato avanti le istanze del liberalismo.

Eppure, l'essere cattolici, per quei dirigenti dell'Italia postbellica che l'hanno portata, almeno fino alla metà degli anni '70, ad essere una delle prime potenze economiche al mondo, ha voluto dire anche, nel contempo, essere *liberali*. Lo riconosceva già, in un dialogo con Gennaro Sasso di una decina di anni or sono, Sergio Cotta, il quale, parafrasando la celebre formula crociana del *Perché non possiamo non dirci 'cristiani'*, proponeva la sua *Perché il cattolico può dirsi liberale*, e si chiedeva: "può o forse deve?"<sup>2</sup>. Cotta estendeva la sua considerazione del cattolicesimo politico italiano all'intera sua tradizione storica, soffermandosi sul dubitativo.

Non sembri una forzatura raccogliere la proposta di Cotta sviluppandola nel senso di una possibile identificazione di fondo, sostanziale, del cattolicesimo politico – o per lo meno di quel cattolicesimo politico che ha discusso le scelte, e le ha operate, incidendo nella storia politica italiana – col liberalismo.

Militano a favore della presente tesi – certo non politicamente 'corretta', ma scientificamente non priva di ragioni – elementi culturali che possono per ora soltanto essere indicati, se non accennati. Tra questi, in primo luogo merita attenzione un elemento di riflessione *filosofico*: se c'è una posizione che pensa l'individuo umano non come oggetto della comunità, della società o dello Stato, ma come *soggetto*, titolare di diritti irriducibili a qualunque istanza sovraindividuale, questa posizione è espressa dal *cristianesimo*.

---

<sup>1</sup> Cfr. M. Polanyi, *The Logic of Liberty*, The University of Chicago Press, Chicago, 1980, pp. 108-109 e 198-199, cit. in P. Nêmo, *Quatre thèses au sujet des rapports entre libéralisme et christianisme*, 'contrepoint', aprile 2005, pp. 7-8.

<sup>2</sup> S. Cotta, *Noi cattolici non possiamo non dirci liberali*, 'liberal', 16/1996, p. 31.

Ciò che fa dell'Occidente una civiltà unica nel suo genere (lasciamo perdere se superiore o inferiore ad altre) è questa infinita accentuazione della soggettività dell'individuo, che filosoficamente si chiama con un solo nome: *libertà*.

L'attributo di *persona*, riconosciuto in capo al soggetto umano, altro non significa che questo: che l'uomo è un individuo libero, cioè non riducibile né ai fattori biologici della sua appartenenza ad una specie, né ai fattori storico-sociali della sua appartenenza ad un gruppo, che questo coincida con la famiglia, con la stirpe o con la nazione. Non è un caso che un pensiero, una dottrina come il liberalismo – nelle sue versioni filosofica, politico-giuridica, economica – si sia sviluppata proprio nel solco storico tracciato dall'Occidente cristiano. Anzi, si potrebbe dire che il liberalismo esalta quegli aspetti che risultano originalmente legati al pensiero cristiano. Come tutte le idee che derivano da una religione, il liberalismo, in alcune sue espressioni, esaspera alcuni di questi aspetti; ma ciò che importa trattenere è che, senza il cristianesimo, il pensiero, come l'economia, liberale sarebbero impensabili. Se addirittura si dovesse ridurre all'osso l'identificazione della natura del liberalismo, probabilmente lo si assimilerebbe al cristianesimo stesso, per quella centralità che vi assumono la posizione e il ruolo dell'individuo personale, con la sua specifica 'dignità'.

Fatta questa breve premessa teorica, che meriterebbe approfondimenti problematici in sede di una riflessione più articolata, occorre pertanto sgomberare il campo da un possibile equivoco: quando si parla di cattolici liberali – o di liberalismo cattolico –, non si parla di qualcosa di contraddittorio, come se l'esperienza del cristianesimo, e più in particolare del cristianesimo cattolico, fosse poco o nient'affatto compatibile col nucleo teorico del liberalismo. Sembra molto più semplice invocare l'aggettivo 'cattolico' a coronamento di solidarismi (o persino di socialismi) più o meno pronunciati in senso comunitario (se non statalistico). Sembra meno problematico, culturalmente e moralmente, ridurre il cattolicesimo politico ad una forza impegnata *innanzitutto* a promuovere la solidarietà.

Eppure, non si tratta, in questo caso, di un'esclusiva del cattolicesimo, e del cristianesimo in generale. Anche altre culture mettono, in un modo o nell'altro, l'accento sui doveri di solidarietà verso gli altri, in un quadro che rende gli individui umani più o meno funzionali ad istanze che li trascendono. In nessun caso, tuttavia, il potere – religioso, culturale, politico che sia – viene come tale messo in discussione nella sua assolutezza. Ciò avviene, in maniera particolarmente nuova e incisiva, col cristianesimo, il quale afferma il valore infinito del soggetto umano nella sua individualità, e con ciò stesso contesta e limita, almeno in linea di principio, le pretese di assolutezza di qualunque potere. Il cattolicesimo, per parte sua, potenzia questa affermazione rendendo possibile la *separazione* della Chiesa dallo Stato<sup>3</sup>, realizzando, quantunque in una maniera non sempre lineare, uno dei postulati fondamentali di ogni rivendicazione autenticamente liberale: l'autonomia del temporale dallo spirituale (e viceversa).

E' solo per un malinteso, storicamente risalente alle vicende che hanno segnato l'unificazione dell'Italia risorgimentale, che l'incontro fra cattolicesimo e liberalismo si è rivelato tanto infecondo, sul piano culturale, trascinando il dibattito tra gli intellettuali nelle secche di polemiche tra 'cattolici' e 'laici', dove i

---

<sup>3</sup> Cfr. J. Ratzinger, "Libertà e liberazione", *Il Nuovo Areopago*, n° 3 (1986), p. 20.

primi sono diventati sinonimo di 'conservatori' e i secondi di 'progressisti'. Si è dimenticato che la laicità è un carattere eminente dell'essere cattolico, e si è spesso confuso il 'laico' con il 'liberale', come se l'essere tale fosse per principio incompatibile, ed inconciliabile, con l'essere cattolico. Invero, se la società italiana è una società occidentale cristiana, laica e liberale, lo deve ad una linea di pensiero che rimonta a Sant'Agostino<sup>4</sup>, prosegue con Erasmo da Rotterdam, passa per Antonio Rosmini, e giunge fino a noi attraverso uomini come Giuseppe Capograssi. Questa linea, il contributo della quale resta purtroppo sotto traccia rispetto ad altre linee di pensiero, è culturalmente più consistente e feconda delle circostanze storiche che, dalla questione romana in poi, hanno prodotto l'equivoco di una divergenza – se non di un insanabile contrasto – di principio tra cattolicesimo e liberalismo.

Ed è infatti dalla fecondità di questa linea che emerge il dinamismo creativo col quale i cattolici hanno saputo guidare l'Italia alla riconquista delle libertà perdute, e alla sua ricollocazione nell'area delle grandi democrazie occidentali. Lo dimostra, sia pure parzialmente, e nonostante i compromessi che fanno apparire la Costituzione italiana del 1948 un testo poco 'liberale', l'impegno col quale i Costituenti cattolici hanno condiviso l'affermazione del primato della persona, con i suoi *diritti inviolabili* (art. 2), e la sua *libertà inviolabile* (art. 13), a cominciare da quella religiosa (art. 19). In generale, tutte le libertà che la Costituzione proclama e tutela, dalla libertà di parola e di stampa (art. 21) alla libertà di educazione (art. 30 e 33), alla libertà di iniziativa economica (art. 41), presuppongono quella irriducibilità del soggetto individuale di diritto allo Stato che il cattolicesimo, *in quanto* pensiero liberale (senza virgolette, perché trattasi di genuina istanza liberale), ha introdotto nella Storia.

Lo stesso diritto di libera associazione (artt. 18 e 49), per quanto non sufficientemente sorretto da un'idonea enunciazione del principio di *sussidiarietà*, procede dall'idea che solo individui *liberi* possano reciprocamente riconoscersi al punto da dar vita a quel tessuto di società civile che rende dinamiche le istituzioni culturali e politiche di uno Stato di diritto. Anzi, la libertà di associazione rappresenta da sola la smentita di un liberalismo che voglia proporsi come individualismo (più o meno libertario): il primato del soggetto individuale implica la sua capacità di mettersi insieme con altri soggetti individuali, smontando così la pretesa del potere di mettere insieme i 'sudditi'. La nozione di cittadinanza così intesa nasce da questa istanza cattolico-liberale. Il potere non può 'associare' individui, può soltanto sottometterli: quantomeno nella critica del potere, i cattolici non possono non dirsi ... liberali.

Rispetto alla linea di cultura politica che è sembrata prevalere tra i cattolici del dopoguerra, e che risponde ai nomi di Dossetti, La Pira, Fanfani, la posizione cattolico-liberale risulta minoritaria, o almeno messa in ombra. Resta il fatto, incontestabile, che *storicamente* essa ha vinto: l'allineamento dei democratici cristiani italiani sulle scelte fondamentali di politica economica capitalistica, seppure temperata da misure tipiche del *welfare*, ha consentito all'Italia un periodo di prosperità mai conosciuto prima, al riparo di un'alleanza strategica con gli Stati Uniti d'America che ha garantito un lungo periodo di pace. Il punto è che, tanto per fare un esempio, personaggi di primo piano di questa impostazione politica, come Guido Gonella, celebrati come esponenti

---

<sup>4</sup> Cfr. L. Dumont, *Saggi sull'individualismo*, Milano, 1993, p. 39 ss.

del liberalismo italiano di orientamento cattolico, hanno condiviso *praticamente* decisioni di stampo liberale, pur senza avallarle in una prospettiva teorica. Se si leggono alcuni degli interventi più significativi di Gonella, autore di saggi filosofici impegnativi<sup>5</sup>, se ne trae l'impressione di una generale adesione ai principi del personalismo cristiano, accompagnata dalla enfattizzazione di elementi desunti dalla tradizione del socialismo democratico.

È come se i cattolici liberali italiani, attraverso i loro rappresentanti più consapevoli, avessero 'sopportato' senza molta convinzione la loro appartenenza al campo liberale, magari ritenendola motivata ultimamente da necessità contingenti di carattere (geo)politico, restando alla ricerca di una 'terza via', alternativa al comunismo come allo stesso capitalismo (di fatto assimilato al liberalismo).

Non si è voluto riconoscere nel liberalismo una filiazione diretta del cristianesimo: questo potrebbe spiegare una diffusa reticenza ad accettarlo come espressione di un pensiero politico originale dei cattolici (per lo meno dei cattolici 'militanti'). Ha prevalso l'interpretazione del liberalismo quale ideologia della borghesia; ha prevalso una certa lettura del Maritain di *Umanesimo integrale* sulla lettura del Maritain delle *Riflessioni sull'America*<sup>6</sup>; ha prevalso l'influenza di un pauperismo, e di un populismo, che hanno avuto facile gioco nel rendere subalterna buona parte della cultura politica cattolica pre-bellica al mito dell'Italia 'proletaria e fascista', anti-comunista come anti-capitalista; in continuità con questa convulsione ultimamente anti-democratica, ha prevalso, in molte correnti del pensiero cattolico del dopoguerra, una acritica accettazione degli ideali propugnati dalla sinistra rivoluzionaria, che ha portato alla elaborazione di tesi riconoscibili nel cosiddetto catto-comunismo. La *realtà* di un obiettivo, sensibile progresso delle condizioni materiali (economiche, sanitarie, scolastiche) del popolo è stata registrata come il risultato di un'alterazione dei processi di trasformazione della società, che avrebbero dovuto seguire percorsi maggiormente rispondenti alle esigenze spirituali ed etiche di una coscienza formata ai principi della dottrina morale e sociale della Chiesa.

Sintomatico, in questa prospettiva, è il modo in cui è stata considerata la proprietà privata: quando i Costituenti cattolici hanno sottoscritto il dettato costituzionale che ne assicura la 'funzione sociale'<sup>7</sup>, non hanno fatto altro che rinnovare, moderandola, l'idea di una antropologia (filosofica) del diritto dell'individuo che è pensato in subordinazione al diritto collettivo (pubblico) di cui sarebbe titolare, in ultima analisi, la società (statualmente identificata).

La diffidenza con la quale si guarda alla proprietà – alla quale si è voluto avvicinare tutt'al più, per renderla meglio accetta a certa sensibilità cattolica, l'aggettivo 'personale' – è rivelativa di un atteggiamento intellettuale che si estende ad una 'svalutazione' dell'autonoma capacità umana di intraprendere, e di produrre ricchezza. Se il problema degli intellettuali e dei politici cattolici è, in

---

<sup>5</sup> Cfr. G. Gonella, *La persona nella filosofia del diritto*, Milano, 1959; *Le tribolazioni della democrazia*, Roma 1978; *Dalla guerra alla ricostruzione*, Roma, 1983; *Il discorso delle 27 libertà*, Verona, 2003.

<sup>6</sup> Cfr. J. Maritain, *Umanesimo integrale*, Torino, 1962 e Id., *Riflessioni sull'America*, Brescia, 1960.

<sup>7</sup> In generale, circa il contributo dei cattolici all'elaborazione della Costituzione del 1948, si veda G. Garancini, *I cattolici e la Costituzione*, Cinisello Balsamo, 2005. Per un quadro storico complessivo dei rapporti fra i cattolici italiani e lo Stato unitario cfr. F. Traniello, *Religione cattolica e Stato nazionale. Dal Risorgimento al secondo dopoguerra*, Bologna, 2007.

primo luogo, la equa redistribuzione delle ricchezze, vuol dire che il momento della creazione di queste ricchezze è stato già 'bypassato', nella persuasione che esso non riguardi direttamente, giudicandola, e coinvolgendola in un impegno etico-pratico costruttivo, la coscienza cristiana. Vale la pena ricordare che, fuori dall'area della cristianità, l'umanità non ha mai conosciuto una condizione di prosperità, e di avanzamento culturale e scientifico, come quella che ha interessato l'Occidente, una prima volta limitatamente all'Europa medievale dei liberi Comuni (in parte favoriti dalla Chiesa contro le pretese dell'Impero), una seconda volta con lo sviluppo impetuoso del mondo libero in età moderna e contemporanea. E' sorprendente notare come tutto questo sia considerato quasi come un corpo estraneo all'organismo della cattolicità: ne è un sintomo la perdurante squalificazione ideale della società, e dell'uomo, borghesi come sottoprodotti di un'etica protestante che, se si segue l'interpretazione di Weber, avrebbe esasperato le pretese di autonomia dell'individuo in chiave di affermazione ideologica.

L'opera di Michael Novak smentisce clamorosamente questo assunto<sup>8</sup>, peraltro duro a morire a causa della persistente riluttanza di non pochi dei responsabili della intellettualità cattolica ufficiale a fare i conti con la propensione alla libertà che il cristianesimo ha inesorabilmente eretto a punto qualificante e decisivo per giudicare il pensiero e l'azione degli uomini nella Storia, chiamati a decidere tra il bene e il male, nello spirito di una verità che, promanando da Dio, viene prima di qualunque altra cosa, ma che, essendo *per* l'uomo, è annunciata allo scopo di renderlo libero.

Non mancano, tuttavia, coloro i quali, riprendendo la linea ideale che parte da Sant'Agostino, riconoscono nel liberalismo non solo una dottrina fra le altre, ma un'*esperienza* di creatività economica, sociale, culturale che è improntata a quel solido insegnamento realistico della Chiesa che riconosce, nell'umanità segnata dal peccato (*lapsa* ma non *corrupta*), una uguale tendenza alla virtù, al lavoro per il bene proprio e per il bene comune, come al male.

Tutte le dottrine politiche diverse dal liberalismo sono accomunate dal progetto di creare le premesse di una società 'da costruire': è il dover essere, in tal caso, a prevalere sulle oggettive condizioni di realizzabilità di un progetto di trasformazione sociale.

Paradigmatiche di questi tentativi di ingegneria sociale sono le utopie rivoluzionarie, a sfondo socialista, nazionalista, religioso o razziale. Il realismo liberale, in tal senso molto più prossimo al realismo di marca cristiana, prende atto dell'essere dell'uomo, della sua finitezza, di cui fa parte sia la coscienza dei propri limiti sia una spinta egoistica che però, se incanalata, ad esempio, dalle logiche della socialità spontanea del mercato, può tradursi nella produzione di benefici a vantaggio di moltitudini. Del resto, se c'è qualcosa che accomuna cristianesimo – cattolico, soprattutto – e liberalismo, si tratta di uno sguardo sull'uomo che non vuole immediatamente farsi dottrina, proprio perché si trova in presa costante con l'esperienza.

Difatti, il liberalismo ha riportato i suoi maggiori successi proprio lì dove non si è prefisso di ottenere, programmaticamente, dei risultati: l'elevazione delle condizioni di vita del popolo americano non è stata ricercata come obiettivo

---

<sup>8</sup> Cfr. M. Novak, *Lo spirito del capitalismo democratico e il cristianesimo*, Roma, 1987; *L'etica cattolica e lo spirito del capitalismo*, Torino, 1999.

ideologico, ed è stata tanto più efficace quanto meno è stata voluta. Questo comune atteggiamento realistico presuppone una *fiducia nell'uomo* che non è dato riscontrare nelle ideologie rivoluzionarie: anche queste mostrano fiducia nell'uomo, ma a condizione che prima cambino le strutture che, in un modo o nell'altro, lo 'alienano'. Questa ansia di cambiamento rende tali ideologie maggiormente attraenti per masse disperate o risentite. E i giovani spesso vengono anch'essi sedotti dal fascino di ideali che spostano sul male esterno la carica negativa che interessa già il cuore di ogni uomo.

La prospettiva di eliminare il male esteriore – nei suoi aspetti sociali, politici, economici – può anche esercitare un'attrattiva e suscitare un entusiasmo giovanile, ma non è destinata a durare. La rivoluzione liberale inaugurata dal cristianesimo dura da duemila anni. La rivoluzione democratica nata dal suo seno è entrata vittoriosamente nel XXI secolo dopo aver piegato i regimi autoritari e totalitari che vi si opponevano. Si tratta di rivoluzioni che si sono sviluppate quasi senza che i loro autori lo volessero: non quindi per una pulsione utopistica, ma per un'intrinseca attitudine a mutare il corso degli avvenimenti nella direzione di una sempre più netta affermazione del principio della libertà (su questo la lezione di Hegel resta insuperata).

Ora, nel momento in cui la sfida al liberalismo è portata non più sul terreno economico (la Cina e molti Paesi del Terzo mondo hanno di fatto adottato il sistema del libero mercato, sebbene in cornici istituzionali ancora non democratiche) o su quello politico (non si vedono all'orizzonte sistemi politico-istituzionali o progetti politici ideali alternativi alle democrazie liberali, e in questo ha ragione Francis Fukuyama<sup>9</sup>), ma su quello etico-religioso (col profilarsi, in particolare, di una Rinascita islamica che ripropone, anche con metodi violenti, il primato della sottomissione a Dio sulla libertà dell'individuo), che è il suo terreno di origine, emerge con tutta evidenza l'*antropologia* che costituisce il presupposto del liberalismo.

L'idea di un limite strutturale della condizione umana è entrata nel mondo con l'esperienza esistenziale della *colpa*, elaborata dalla tradizione ebraica, e con la dottrina cristiana del *peccato originale*. L'accentuazione di questi due elementi, di forte connotazione morale, quale si determina nel protestantesimo, ha fatto sì che il liberalismo assumesse, nell'area protestante, una più pronunciata caratterizzazione; ma la storia del liberalismo viene da più lontano: essa passa per la cosiddetta Rivoluzione papale di Gregorio VII<sup>10</sup>, e affonda le radici nelle intuizioni e nelle riflessioni dei grandi pensatori della cristianità.

Una delle difficoltà, forse la principale, che ancor oggi impediscono di pensare una sostanziale coappartenenza di cristianesimo, cattolicesimo e liberalismo risiede in un insufficiente approfondimento del livello, antropologico-filosofico, al quale si attesta il pensiero della libertà: lo *spirito* del liberalismo, nelle sue valenze teoretiche, prima che pratico-politiche o pratico-economiche, resta impensato.

A questo esito concorre anche una mancata riflessione sull'implicazione più propriamente *giuridica* dell'antropologia filosofica che è alla base del liberalismo: lo dimostra, per esempio, la sorte toccata ai *diritti dell'uomo*, che in certi casi vengono invocati in opposizione al cristianesimo, e che sempre più

---

<sup>9</sup> Cfr. F. Fukuyama, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Milano, 1992.

<sup>10</sup> Cfr. P. Berman, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna, 1998; R. Brague, *La loi de Dieu. Histoire philosophique d'une alliance*, Paris, 2005; P. Nèmo, *Che cos'è l'Occidente*, Soveria Mannelli, 2005.

spesso vengono criticati per la loro supposta 'astrattezza' rispetto alle concrete esigenze, culturali o economiche, rappresentate dalle collettività particolari. In realtà, il linguaggio di un *diritto* dell'uomo, identificabile come espressione capitale della sua identità di soggetto, si può parlare in maniera pregnante all'interno della tradizione cristiana: è uno dei motivi che rendono impensabili, a meno di profondi mutamenti strutturali di concezione e di prassi, un liberalismo (se non politico o economico, per lo meno 'giuridico') islamico, confuciano, buddista, induista. È nella prospettiva aperta dal cristianesimo che diventa accessibile al pensiero l'idea di una *sovranità dell'uomo-cittadino*<sup>11</sup>, che la Rivoluzione francese ha consacrato 'laicamente', distaccandosi dalla matrice religiosa, ma che la Rivoluzione americana ha conservato nei suoi significati originari, con un riferimento a Dio che non si confonde con un imprecisato Essere supremo di ragione. D'altronde, l'attuale deriva scienziata di un certo approccio alle questioni relative alla manipolazione genetica – e farmacologica – del vivente (umano) mette capo, per molti versi, ad un fraintendimento della libertà 'liberale', che si rovescia nel suo opposto – la tirannia delle opinioni scientifiche – quando si assolutizza. Il problema è che la libertà, in sé, è un assoluto, ma il liberalismo è l'espressione di una libertà che, per potersi tradurre nella realtà di una condizione umana strutturalmente limitata, non può non rendersi sperimentabile *relativamente*. Se, infatti, il liberalismo, nella sua versione politica, è quel modo di pensare e organizzare la società in funzione non del potere (politico, economico, religioso, scientifico), ma dell'individuo, riconosciuto nella infinita *pluralità* delle sue espressioni, è coesistente alla libertà secondo il liberalismo la sua relatività: come dire che la libertà, che è un assoluto, non è assoluta nelle sue manifestazioni, perché è plurale, perché è *libertà*<sup>12</sup>.

Una libertà 'pelagiana', priva cioè del senso del peccato – e della grazia –, ossia priva di scrupoli morali e religiosi, si capovolge nel suo contrario: nello spossessamento dell'uomo della sua facoltà sovrana di giudizio e di scelta. Una libertà che resta consapevole – anzi, che diviene sempre più consapevole – dell'antropologia religiosa che la sottende mantiene aperte sulla scena della Storia le possibilità del bene e della giustizia.

È per questo che il liberalismo, nel suo nucleo razionale, *non* è un utilitarismo: esso anzi, proprio perché è intrinsecamente pluralista, genera *regole* con le quali rende possibile l'ordine. Così merita di essere declinata l'affermazione di Montesquieu per cui la libertà non è fare ciò che si vuole ma – in una società dove vi sono leggi – è poter fare ciò che si deve volere, nonché (parallelamente a quanto propugnato da un Locke e da un Tocqueville) nel non essere costretti a fare ciò che non si deve volere<sup>13</sup>.

La morale cattolica è esigente, ma non perfettistica: in questo suo legare la *libera* condotta al dovere e ad un ordine regolato di relazioni, mostra maggiori consonanze con l'etica liberale classica di quante non ne registri presso altre etiche. Il titolo della presente riflessione, formulato come una provocazione a pensare, traduce semplicemente il tentativo di rileggere il contributo *effettivo* dei cattolici alla vita politica e istituzionale dell'Italia democratica alla luce di un

---

<sup>11</sup> Cfr. S. Cotta, "L'imperativo della divisione dei poteri", in AA. VV., *Cambiare la Costituzione?*, Roma, 1997, p. 248.

<sup>12</sup> Cfr. C. Lévi-Strauss, *Riflessioni sulla libertà*, in Id., *Lo sguardo da lontano*, Torino, 1984, pp. 334-344.

<sup>13</sup> Cfr. Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, a cura di S. Cotta, Torino, 1965, p. 273.

principio – la libertà – che appartiene alla tradizione liberale non meno di quanto appartenga a quella cattolica, malgrado fraintendimenti e mistificazioni di vario genere ne abbiano offuscato le comuni, profonde radici.

*Recibido el 24 de octubre de 2010, corregido el 3 y 4 de abril y aceptado el 5 de abril de 2011.*







Gábor HAMZA \*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

**Gabor Hamza** (2011): "Montesquieu en Hongrie", en *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, n.º 1 (marzo 2011), pp. 53-54. En línea: <http://www.eumed.net/rev/rehipip/01/gh.pdf>.

RESUME : Charles-Louis de Sécondat, Baron de la Brède et de Montesquieu (1689–1755), le grand philosophe, juriste et l'éminent penseur politique des Lumières, considéré comme l'un des 842 meilleurs juristes universels dans ouvrage collectif coordonné par Rafael Domingo. Ce bref article explique son temps à Vienne et à l'Hongrie. Montesquieu, quand il est retourné en France, a écrit « Mémoires sur les Mines de Hongrie et Hartz ».

MOTS CLE : Hongrie historique, Montesquieu, Vienne, Bratislave, Earl James Waldegrave.

ABSTRACT: Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu y de la Brède, es un jurista universal que ha sido recogido entre los 842 mejores de todos los países y de todos tiempos en la conocida obra colectiva coordinada por Rafael Domingo. Se indica en este breve artículo su estancia en Viena y en el territorio norte de la Hungría histórica. Montesquieu a su regreso a Francia redactó unas « Mémoires sur les Mines de Hongrie et Hartz ».

PALABRAS CLAVE: Hungría histórica, Montesquieu, Viena, Bratislava, Earl James Waldegrave.

Charles-Louis de Sécondat, Baron de la Brède et de Montesquieu (1689–1755), le grand philosophe, juriste et l'éminent penseur politique des Lumières, après avoir écrit les *Lettres persanes* (1721) a commencé à s'intéresser à connaître sur place la vie et les coutumes de différentes peuples (ethnies). Quand son ami, Earl James Waldegrave (1684–1741) a été nommé émissaire (ambassadeur) à Vienne, à la cour de l'empereur du Saint Empire Romain (*Sacrum Romanum Imperium*) Charles VI (en Catalogne : *arxiduc Carles d'Àustria*) et – en même temps – roi de Hongrie sous le nom Charles III (1711–1740), Montesquieu l'y a accompagné. Ils sont probablement partis de Paris le 5 avril 1728 et ils sont arrivés à Vienne les premiers jours de mai. Il a passé quelques semaines dans le nord de la Hongrie historique (ce qui constitue de nos jours le territoire de la République slovaque), après, il était de nouveau à Vienne le 26 juin, qu'il a quittée le 9 juillet. Dans ce contexte on peut mentionner le fait que son père comme soldat (officier) de l'armée du duc Conti a été en Hongrie en 1685.

Malheureusement, les notes de son voyage en Hongrie (celle historique) ne restaient pas, mais de retour en France, il a rédigé les *Mémoires sur les Mines de Hongrie et Hartz*, dans lesquels on trouve des informations sur la Hongrie. Il

\* Professeur de Droit romain et Droit constitutionnel à la Faculté de droit, Université Eötvös Loránd (Budapest).

a sûrement visité la Diète – Parlement (en latin : *Diaeta*) à Pozsony (en slovaque : Bratislava, en allemand: Pressburg, en latin : Posonium, en français: Presbourg), après Körmöcbánya (en slovaque : Kremnica, en allemand : Kremnitz, en latin : Cremnicium), Besztercebánya (en slovaque : Banská Bystrica, en allemand : Neusohl, en latin : Neosolium) et Újbánya (en slovaque : Nová Baňa, en allemand : Königsberg, en latin : Regiomontanum), c'est-à-dire les villes importantes de la Haute Hongrie (en hongrois : Felső-Magyarország), plus précisément quelques-unes de celles-ci.

Dans les notes mentionnées ci-dessus on trouve les passages suivants « En Hongrie il ne faut que semer les grains dans la terre et les céréales poussent. Les terres n'étant pas cultivées si bien en Hongrie, les terres labourées s'y reposent plus. » Ou bien : « Il y a trois lieux de grande importance en Hongrie: Eszék (en croate : Osijek, en allemand : Esseg) qui se trouve au confluent de la Drave et du Danube ; Belgrade (en hongrois : Nándorfehérvár) et Temesvár (en roumain : Timișoara, en allemand : Temeschwar) ; Orsova (en roumain : Orșova) au bord du Danube est muni de batteries de canon qui empêchent les turcs de gagner du terrain. »

<i>Recibido el 25 de febrero de 2011 y aceptado el 10 de marzo de 2011.</i>
---



## DE YARA A MADRID: LA SPAGNA DI JOSÉ MARTÍ

Italia Maria CANNATARO\*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

**Italia Maria Cannataro** (2011): "De Yara a Madrid: la Spagna di José Martí", en *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, n.º 1 (marzo 2011), pp. 55-88. En línea: <http://www.eumed.net/rev/rehipip/01/imc.pdf>.

**ABSTRACT:** L'esperienza spagnola fu fondamentale per la formazione politica di Martí. L'adesione giovanile al krausismo rappresentò la scelta di un percorso di liberazione dell'uomo che diventava il protagonista assoluto della nuova filosofia, una nuova divinità che si sostituiva alla vecchia fede cristiana. Krause gli offriva i primi elementi metodologici per la costruzione di una realtà come quella americana. Gli anni in Spagna furono, dunque, essenziali per lo sviluppo lineare del suo pensiero nel quale l'elemento di continuità era rappresentato proprio dalla scelta liberale.

**PAROLE CHIAVE:** Spagna, Krausismo, Liberalismo, Identità, America

**RESUMEN:** La experiencia en España fue fundamental para la formación política de José Martí. La aceptación del Krausismo fue un medio para dejar libre al hombre que, así, se situaba como protagonista de una nueva filosofía y creaba una nueva divinidad en substitución de la fe cristiana. Krause daba a Martí los primeros elementos metodológicos para construir una nueva realidad: la de América. Los años españoles fueron, pues, esenciales para el desarrollo coherente de su pensamiento. El elemento clave fue precisamente el liberalismo.

**PALABRAS CLAVE:** España, Krausismo, Liberalismo, Identidad, América.

### 1. *Introduzione*

Quando José Martí giunse in Spagna, nel gennaio 1871, trovò uno stato sconvolto da un trentennio di disordini politici che si trascinarono dai primi anni Quaranta, cioè dall'inizio del regno di Isabella II.

Le sconfitte in Marocco e in Messico, avevano determinato la caduta della monarchia nel settembre del '68, nel 1869 le Cortes avevano votato una Costituzione di stampo liberale e monarchico e nel 1871 la corona fu affidata ad Amedeo d'Aosta, che la mantenne fino al 1873. Incapace di affrontare i problemi interni del paese e quelli esterni (come per esempio la prima guerra

\* Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche e Politiche. Università degli Studi di Messina, Sicilia (Italia).

per l'indipendenza di Cuba, scoppiata nel 1868) Amedeo era stato deposto nel febbraio 1873, lo stesso anno fu proclamata la prima repubblica<sup>1</sup>.

Martí visse direttamente la fase iniziale della guerra dei dieci anni. Allo scoppio del conflitto, il giovane José pubblicò il suo primo articolo di carattere politico *O Yara o Madrid*, sull'unico numero de *El diablo cojuelo*, in queste quattro pagine c'era tutta la passione politica di Martí nel ribadire la necessità di una lotta senza appello contro il dominio spagnolo<sup>2</sup>.

Dopo un anno esatto dall'inizio della lotta, nell'ottobre del 1869, egli venne arrestato dalle autorità spagnole con l'accusa di apostasia e condannato al carcere. Grazie all'intervento della madre, dopo qualche mese gli fu concessa la possibilità di continuare gli studi e trasferito, in esilio, in Spagna. Il contatto con la madrepatria gli avrebbe aperto nuove vie di comprensione della realtà politica che lo circondava. L'indipendenza cubana cominciava a sembrargli inscindibile da una valutazione più ampia delle altre realtà latinoamericane, formalmente ormai indipendenti dalla penisola iberica in realtà, però, ancora segnate dall'esperienza coloniale.

Un giudizio sull'esperienza della repubblica spagnola non esiste nelle riflessioni di Martí<sup>3</sup>. Le sue considerazioni sono contenute negli articoli della "Revista Universal" nel 1875 o nella "Opinión Nacional" nel 1881 e riguardavano la conduzione della politica spagnola negli anni successivi alla restaurazione dei Borbone, cioè dal 1874 in poi<sup>4</sup>.

In quegli anni Martí, non ancora ventenne, conobbe da dentro la realtà di una madrepatria che non riconosceva come tale.

I primi mesi dell'esilio trascorsi in carcere e poi l'esperienza dell'Università (qui si laureò infatti, nel 1874, in Giurisprudenza) lasciarono, a Martí, due visioni diverse e fondamentalmente, antitetiche della metropoli: quella di un paese colonizzatore e tirannico e quella di una significativa comunione culturale con il popolo spagnolo ed europeo in genere. Il rispetto per la tradizione del vecchio continente rimase un tratto caratteristico delle sue riflessioni anche quando, come editorialista della "Opinión Nacional", avrebbe scritto numerosi pezzi sulla politica europea, pur avendo ormai spostato il baricentro dei suoi interessi in America.

Questo lavoro è dedicato proprio alla breve ma significativa esperienza spagnola del giovane Martí, alla vita universitaria e ai primi contatti con il liberalismo europeo.

---

<sup>1</sup> Cfr. J. Vicens Vives, *Profilo della storia di Spagna*, Einaudi, Torino, 1960, pp. 144-145.

<sup>2</sup> J. Martí, *Obras Escogidas*, 3 vols., a cura del Centro de Estudios Martianos, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2000, T I, pp. 11-13.

<sup>3</sup> Cfr. C. Vitier, *España en Martí* in C. Alemany – R. Muñoz Haedo (a cura di), *José Martí – Historia y literatura ante el fin del siglo XIX*, Casa de las Américas, La Habana, 1997, pp. 15-31.

<sup>4</sup> Cfr. J. Martí, *Obras Completas*, a cura del Centro de estudios martianos, 27 vols., Editorial Ciencia Sociales, La Habana, 2004, T. 14. Il tomo 14 e il tomo 15 sono dedicati agli articoli sull'Europa. La spiegazione di questo atteggiamento di Martí potrebbe trovarsi in un'affermazione di Georgina Alfonso, per la quale sia i valori etici di Martí che le sue aspirazioni umaniste, durante gli anni '70, furono considerati – dallo stesso rivoluzionario cubano – esclusivamente come un mezzo per risolvere i problemi della sua isola e non come uno strumento di analisi della società umana in generale. Questo lo portava ad un distacco inevitabile, almeno durante questi anni, dai problemi socio-economico-culturali che non riguardassero direttamente Cuba, cfr. G. Alfonso, "José Martí, Integridad ética y política para una axiología revolucionaria" in *Revista cubana de ciencias sociales*, n. 29 (1994), pp. 37-43.

L'adesione giovanile alla filosofia krausista rappresentava per il cubano che aveva lottato per la libertà della sua isola, la scelta di un percorso di liberazione dell'uomo che diventava il protagonista assoluto di una nuova filosofia, una sorta di nuova divinità che si sostituiva alla vecchia fede cristiana e alle sue verità che attraverso la scolastica avevano, secondo Martí, contribuito alla schiavitù morale e culturale dell'America di ceppo ispanico. Il krausismo gli offriva i primi elementi metodologici per la costruzione di una realtà nuova come quella americana: quella era una filosofia che coglieva l'uomo nella sua concretezza, e aveva tra le sue specificità l'empirizzazione della conoscenza e la negazione del teismo che a Martí serviva per liberarsi dalla tradizione scolastica individuata come causa di arretratezza della sua America.

Gli anni in Spagna furono dunque essenziali nello sviluppo lineare del suo pensiero nel quale l'elemento di continuità era rappresentato proprio dalla scelta liberale che cominciava a concretizzarsi proprio in quel periodo.

La prospettiva liberale che il krausismo spagnolo aveva assunto nella prima repubblica gli aveva conferito una matrice politica oltre che filosofica. L'impegno culturale e istituzionale di Sanz del Río e di Giner e de Labra aveva infatti contribuito ad una rielaborazione della metafisica di Krause. La revisione della politica coloniale prevista proprio da de Labra aveva in un primo tempo acceso e poi frustrato le speranze di Martí che proprio in quegli anni stava scoprendo il suo essere americano e cominciava a porsi il problema dell'alterità nel complesso sistema identitario della colonia.

In Spagna infatti si formò in Martí il convincimento di essere parte di un'altra identità, il suo americanismo nacque nel momento in cui comprese che la coscienza nazionale cubana era solo una parte di un'altra realtà, quella americana. Essere cubano voleva dire, innanzi tutto, essere un americano. L'esilio e l'esperienza spagnola segnarono perciò un confine strategico per la vita e il pensiero di Martí: le questioni dell'isola avrebbero costituito, da allora in poi, solo una parte delle sue riflessioni che gli studi spagnoli avrebbero reso più complesse.

## 2. La Spagna repubblicana e Krause

Nel periodo degli studi universitari Martí entrò in contatto con le idee del tedesco Karl Krause, allievo di Hegel ma fortemente critico nei confronti di alcuni presupposti del suo pensiero tanto da avvicinarsi ai circoli della sinistra hegeliana. La sua filosofia si diffuse in Spagna grazie alla traduzione di *Urbild der Menschheit* (1811) fatta da Julián Sanz del Río alla fine degli anni '50 dal titolo *Ideal de la humanidad para la vida* (1860)<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Heredia Soriano, *El krausismo español*, in [www.ensayistas.org/critica/krausismo](http://www.ensayistas.org/critica/krausismo), 2005, p. 1. Fonte A. Heredia Soriano, *El krausismo español – Cuatro ensayos de historia de España*, Edicusa, Madrid, 1975, pp. 75-150. «Julián Sanz del Río, professore titolare della cattedra di Metafisica all'Università di Madrid, fu incaricato dal Ministero dell'Educazione [in realtà Ministero di Fomento], durante il governo di Isabella II, di diffondere in Spagna una filosofia pratica, capace di contribuire al progresso nazionale in tutti i settori. Dopo essere arrivato in Germania, proprio con l'idea di approfondire le dottrine neokantiane, si convinse che il pensiero di Krause fosse perfettamente assimilabile alla vecchia tradizione umanista spagnola». Sull'argomento cfr: M. García Castellón, *Influencia krausista en el abolicionismo español del siglo XIX: la Sociedad Abolicionista española (1865-1887)*, in [www.ensayistas.org/critica/krausismo](http://www.ensayistas.org/critica/krausismo), enero 2004, pp. 1-2. Fonte M. García Castellón, "Influencia krausista en el abolicionismo español del

Il governo di Isabella II che aveva alternato momenti di moderato liberalismo e di regressione oscurantista, non era riuscito a superare la confusione in cui si dibatteva la vita nazionale e la sua mancanza di vitalità politica, culturale e istituzionale. Da qui l'impegno politico dei krausisti versione originale del vecchio cristianesimo illuminato<sup>6</sup>.

La filosofia krausista aveva un fondo morale rigeneratore, con un netto predominio della ragione etica per quanto riguarda la perfettibilità dell'uomo e della società<sup>7</sup>. A tal fine si richiedeva all'individuo una virtù altruista e razionale di base giudaico-cristiana, si accentuava l'unità sociale di fronte all'egoismo e al lucro, si propugnava l'educazione delle masse, i diritti delle donne, il lavoro organizzato, il rispetto delle norme di diritto internazionale e la trasparenza della vita pubblica<sup>8</sup>.

Il krausismo spagnolo portava anche un profondo apprezzamento per il rispetto dell'intimità e della coscienza personale<sup>9</sup>. Effettivamente era questo che si evinceva dalle intenzioni di Sanz del Río quando, nel 1852, scriveva ad un ipotetico lettore della *Ciencia analítica*: «quello che lei potrà qui ritrovare è solo una riflessione fondamentale, di tipo scientifico o un modo di vedere le cose e la scienza che lei potrà applicare liberamente, secondo le occasioni, la

---

siglo XIX: la Sociedad Abolicionista española (1865-1887)", *Actas de la XI Annual Afrohispanic literature and culture conference in Diaspora*, 2001, pp. 158-165.

<sup>6</sup> «Se è ormai certo che il krausismo era inseparabile da una metafisica di grande respiro teorico e sistematico (...) e il suo ero lo spirito di una filosofia pratica (...), in effetti l'apparato tecnico del messaggio krausista fu abbandonato dopo la morte di Sanz del Río (1869). Lo stesso Salmerón, una delle menti filosofiche più dotate della scuola, sentì fin dal 1870 la necessità di una riorganizzazione dei principi ispiratori. Grazie alla sua opera i programmi pedagogico, giuridico, politico, religioso e sociale rivestirono una maggiore importanza (...). In funzione della espansione e consolidazione dello spirito krausista (...) possiamo dividere la sua traiettoria storica in vari periodi: fondazione e sviluppo (1854-1868); apogeo e decadenza (1868-1875); trasformazione e consolidazione istituzionale (1875-1881); espansione e fecondità istituzionale (1881-1936); emarginazione e silenzio (1939-1975). (...) Con la rivoluzione del settembre del 1868, si inaugurò l'epoca dorata del krausismo storico, il cui splendore si mantenne praticamente intatto fino alla caduta della prima repubblica. Durante questo periodo i krausisti godettero di un grande seguito sociale e di un forte potere politico. Circostanze di cui approfittarono per infuire, soprattutto, nella riorganizzazione dell'insegnamento e (...) nell'orientamento generale del paese. Quando Martí giunse in Spagna, il krausismo si trovava nel suo secondo periodo di sviluppo, quello dell'apogeo e dell'inizio della decadenza (1868-1875)», *ivi*, pp. 9-10, 11-16.

<sup>7</sup> J. L. Abellán (a cura di), *Historia del pensamiento español de Séneca a nuestro días*, Espasa, Madrid, 1996, p. 405.

<sup>8</sup> *Ivi* pp. 408-410. In quegli anni il monaco Fernando Castro, appoggiato dal ministro per il Fomento e da Sanz del Río, iniziò presso il rettorato dell'Università centrale, a Madrid, un ambizioso programma, il cui spirito e le cui aspirazioni consistevano essenzialmente nella "deificazione" della scienza e della cultura: «da ora in avanti – dichiarava – la scienza e l'istruzione, elevate a potere e a società fondamentale, saranno sovrane nella loro sfera quanto la chiesa e lo stato. La libertà di insegnamento sarà uno dei timbri più gloriosi della nostra rigenerazione attuale (...). Per il fatto stesso che c'è libertà dobbiamo ricercare ordine e sistema nella scienza (...). Associarci con l'intento comune di promuovere conferenze che diffondano, fuori dal recinto, le conoscenze umane. Questi sono i mezzi principali che spero approverete, per migliorare lo stato intellettuale e morale del nostro popolo: migliorare fino a che la libertà si appagherà nell'amore verso la patria e le istituzioni». Cfr., A. Heredia Soriano, *op. cit.*, pp. 11-13; il virgolettato è contenuto in F. de Castro, *Discurso leído en la solemne apertura del curso académico de 1868 a 1869 in Revista de la Universidad de Madrid*, Madrid, 1869, pp. 22-30.

<sup>9</sup> Cfr: E. Díaz, *Estudio preliminar – Gumersindo de Azcárate, Minuta de un testamento*, Ediciones de cultura popular, Barcelona, 1967, pp. 17-19.

professione o l'interesse scientifico nei confronti di questo o di quell'assunto»<sup>10</sup>. Per queste caratteristiche la dottrina poteva apparire estremamente rivoluzionaria. Tuttavia il krausismo spagnolo costituì un'ideologia tipicamente borghese. Essa auspicava una trasformazione sociale "armonicamente evolutiva", mai radicale, basata sull'educazione morale degli individui che scalzasse l'oppressione delle antiche oligarchie, comprese quelle militari<sup>11</sup>.

Lo schema filosofico del sistema krausista prevedeva, in definitiva, l'esistenza di un principio certo per tutti: l'Io, il quale, attraverso un processo di analisi di tipo dialettico, arrivava ad una verità ultima, fondante, che era l'Essere assoluto – Dio.

Elemento costitutivo della filosofia di Krause era certamente quello religioso con una evidente impronta "panenteista" così come la definisce López Morillas: Dio era posto a fondamento delle cose terrene e, contemporaneamente le superava e le risolveva<sup>12</sup>. Da questo concetto derivava la convinzione che le azioni umane tendessero ad elevare l'uomo stesso verso Dio e che, perciò, natura e spirito umano trovavano la loro unità proprio nell'idea di Dio<sup>13</sup>. Il pensiero di Krause era costituito da una dialettica di armonia e non di lotta, egli non escludeva dal suo sistema il fenomeno religioso anzi lo considerava una pietra miliare<sup>14</sup>. La religione – per Krause – era «la conoscenza e l'amore di Dio in una fedele subordinazione; è l'aspirazione dell'uomo ad essere assimilato. Dio è forma fondamentale e realizzabile dell'uomo e dell'umanità. La religione è una istituzione fondamentale nella società umana»<sup>15</sup>.

Il "midollo religioso" della filosofia krausista<sup>16</sup> si basava su una serie di riflessioni che avevano per oggetto la dottrina cattolica. L'approccio filosofico alla religione prevedeva un'accezione squisitamente razionale di Dio e

---

<sup>10</sup> P. de Azcárate – J. Sanz del Río, *Documentos diarios epistolario*, Tecnos, Madrid, 1969, p. 174. Lo stesso concetto fu espresso venticinque anni dopo da Nicolás Salmerón, discepolo prediletto di Sanz del Río, che descriveva così l'indole e le aspirazioni del maestro: «se volessimo, in poche parole, caratterizzare l'opera iniziata e compiuta con tanta perseveranza, religiosità e modestia, del nostro maestro comune, basterebbe, a parte la sacra condizione della libertà di coscienza, consegnare le seguenti note: sentimento universale, indagine riflessiva e sistematica, professione di scienza come maestra di vita. Quanto detto, lungi dal creare rigidi modelli di scuola e di esporre una dottrina composta da ciò che le vecchie usanze imposero come dogmatiche conclusioni, perseguiva il sano proposito di inseguire la ignava ratio, rinvigorire e dirigere il pensiero per investigare la realtà con il proprio sforzo (...), senza il timore della intolleranza secolare, senza arroganti presunzioni e senza odio di setta». N. Salmerón, *Discurso pronunciado en la solemne inauguración del curso académico de 1857 a 1858*, Imprenta Nacional, Madrid, pp. IX-X.

<sup>11</sup> A. Heredia Soriano, *op. cit.*, p. 4. «In realtà – aggiunge l'autore – il krausismo fu un ricco e dilatato movimento umanista che cercò di dare chiarezza politica al vecchio riformismo spagnolo di ceppo cristiano. In definitiva, da un punto di vista socio-storico, il krausismo consistette principalmente in un ampio compromesso che, uomini di diverse tendenze politiche, filosofiche e religiose, fecero con i valori della modernità», *ibidem*.

<sup>12</sup> «Il Panenteismo è un intento di sintetizzare il "Panteismo" e il "Deismo": l'uno tende a divinizzare il mondo, l'altro enfatizza l'indipendenza degli atti morali dell'uomo. Nel "Paneteismo" il mondo non sta fuori da Dio (deismo) ne tantomeno è Dio (panteismo) ma è in Dio e mediante Dio. Dio è, pertanto, fondamento e superamento del mondo», J. López Morillas, *El Krausismo español*, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1956, pp. 69-70.

<sup>13</sup> *Ivi*, pp. 9-39.

<sup>14</sup> *Ivi*, p. 5.

<sup>15</sup> K. Krause, *Ideal de la humanidad para la vida*, a cura di J. Sanz del Río, Imprenta de Martínez García, Madrid, 1873, parte I, par. 27, in [www.cervantesvirtual.com/autores](http://www.cervantesvirtual.com/autores).

<sup>16</sup> Cfr. E. Díaz, *Filosofía social del krausismo en España*, Edicusa, Madrid, 1973, p. 57.



convertiva il fondamento metafisico della religione in riflessione sul sentimento che ne era alla base<sup>17</sup>. I krausisti, rifiutando la religiosità puramente formale del mondo isabelliano, diretta da una chiesa giudicata troppo gerarchizzata, ruppero formalmente con Roma dopo l'approvazione da parte del Concilio Vaticano I del dogma dell'infallibilità papale, che cozzava con la filosofia di Krause, tutta basata su di una profonda religiosità interiore, maturata dall'individuo<sup>18</sup>.

Il fine filosofico dei krausisti era quello, di trasformare il credo *quia absurdum* della fede imposta e ciecamente accettata, nella formula più liberale e laica della *fides quaerens intellectum*<sup>19</sup>; per questo lo stesso Krause ricorreva a modelli tipicamente cristiani come nei *Comandamentos para la humanidad*<sup>20</sup>.

La formula del "razionalismo armonico" rappresentò certamente uno degli elementi più originali del Krausismo. Carlos Soetzer lo definì «razionalismo positivo e costruttivo, unificante, attraverso il quale Krause tentò di costruire una nuova società basata sull'amore, sulla bellezza, sul consenso e sull'armonia»<sup>21</sup>. Il Krausismo fu una filosofia umanista, per l'uomo per il suo stesso sviluppo, un fine da realizzare attraverso la formazione dell'individuo da mettere al servizio della società<sup>22</sup>. Krause si propose di contribuire così alla creazione dell'"uomo nuovo". Il suo impegno filosofico non riguardò, nello specifico, la ricerca sullo sviluppo delle forme di governo, bensì uno studio sulla creazione del miglior tipo di uomo. Per questi motivi, insieme al desiderio espresso di assimilare l'uomo a Dio, l'*Ideal* fu collocato nell'indice vaticano dei libri proibiti, su pressione della Chiesa spagnola, scandalizzata dal contenuto panteista e razionalista della nuova dottrina filosofica. Secondo Krause, «l'uomo ha un obbligo etico: fare la sua parte per la perfettibilità del mondo», la sua filosofia doveva servire proprio a sottolineare e a valorizzare ogni singolo individuo. Per questo i Krausisti si dedicarono con successo al rinnovamento dell'educazione nelle scuole e nelle Università sulla scia di una filosofia basata sull'etica della perfettibilità umana<sup>23</sup>.

Dal punto di vista della vita politica attiva, i krausisti che, di fatto, furono inseriti nel governo fin dalla rivoluzione del 1868 e più ancora furono protagonisti nella prima repubblica, si fecero promotori della difesa delle libertà: libertà di coscienza, fondamento delle altre libertà, libertà politica, d'insegnamento, religiosa, di associazione e riunione, di pensiero, oltre che

---

<sup>17</sup> Vid. Teresa Rodríguez de Lecea, *El krausismo en latinoamérica*, in [www.ensayistas.org/criticagenerales/krausismo](http://www.ensayistas.org/criticagenerales/krausismo), p. 8. Fonte T. Rodríguez de Lecea, *El krausismo en América latina*, Fundación F. Ebert – Instituto Fe y Secularidad, México, 1989, pp. 21-46.

<sup>18</sup> *Ivi* p. 9. «In fondo i krausisti si proposero solo di correggere il fanatismo, la superstizione e l'intolleranza» precisa Soriano; A. Heredia Soriano, *op. cit.* p. 6. Salmerón a questo proposito scriveva: «Non è religione la fede passiva e cieca in determinate rappresentazioni della suprema relazione tra Dio e uomo, né la pratica servile e meccanica di riti, cerimonie e culti che degenerano in (...) superstizione e (...) idolatria»; N. Salmerón, "Prólogo" in G. Tiberghien, *Estudios sobre religión*, Imprenta Hernández, Madrid, 1873, p. VIII.

<sup>19</sup> E. Díaz, *op. cit.*, pp. 58-59.

<sup>20</sup> K. Krause, *op. cit.*, parte III, par. 24.

<sup>21</sup> C. Soetzer, *Karl Christian Krause and his influence in Hispanic World*, Bohalau Verlag, Colonia, 1998, p. 12.

<sup>22</sup> *Ivi*, p. 185.

<sup>23</sup> R. Gott, *Karl Krause and the ideological origins of the cuban revolution*, Occasional papers, n. 28, University of London, London, p. 5.

dell'abolizione della pena di morte<sup>24</sup>. Accanto all'aspetto metafisico la dottrina ebbe, perciò, anche un forte spirito di filosofia pratica, che si espresse nei programmi politici preparati sulla scia degli interessi filosofici, ispirati alla libertà e ad un forte senso del dovere e del servizio pubblico.

L'incapacità di reggere le sorti del governo e di fare fronte alle richieste di trasformazioni sociali in Spagna furono le cause che portarono i krausisti al fallimento politico, che si concretizzò nel colpo di Stato del 3 gennaio 1874 e che pose fine all'esperienza della repubblica.

### 3. *Dallo spirito della nazione al corpo della nazione: la politica coloniale spagnola*

Il percorso intrapreso dal krausismo spagnolo presuppose, durante gli anni della repubblica, una recezione, una sintesi e una proiezione della modernità diverse dall'eurocentrismo imperante nel resto dell'Europa continentale<sup>25</sup>. Se è certo che questa filosofia non restò esente dalla tentazione di sistematizzare e di semplificare la realtà, la sua concezione armonica del mondo mirava a reagire ad ogni forma di esclusivismo perseguendo l'integrazione di realtà diverse ben oltre un vano ecletticismo. In questo senso i krausisti spagnoli profilavano un universalismo maggiormente influenzato dalla diversità che, pur conservando una certa vocazione eurocentrista non sfociava in un riduzionismo adattato alla cultura cristiano-germanica o in uno sfrenato espansionismo coloniale. Krause e i suoi allievi erano certamente condizionati dalla loro epoca e quindi non potevano fare a meno di identificare l'Europa come il midollo della civiltà, né di attribuirle il ruolo di tutore nello sviluppo delle relazioni con il resto del mondo. Quel ruolo, però, non era legato ad una logica puramente espansionista e belligerante, ma ad una comprensione organica e illimitata della sociabilità che aveva come protagonista assoluto l'essere umano e la sua piena realizzazione. Nel contesto krausista l'Europa era il seme non il fine di un universalismo la cui realizzazione passava per il riconoscimento teorico dell'alterità che il vecchio continente doveva favorire ma non dominare o canalizzare in base ai propri interessi particolari.

L'imperativo krausista dell'umanità portava con sé una sorta di freno di fronte a concezioni apertamente eurocentriste della universalità nutrite di figure filosofico-giuridiche discriminatorie orientate all'annullamento della differenza e all'esaltazione del diritto di conquista e del colonialismo. L'Europa, leggiamo nel testo di Sanz del Río, è chiamata «a essere l'educatrice di altri popoli (...) da lei

---

<sup>24</sup> A. Heredia Soriano, *op. cit.*, pp. 6-7. «In politica – scriveva Sanz del Río – il filosofo rispetta e obbedisce alla costituzione positiva del suo popolo; accetta lealmente e liberamente le sue conseguenze con sentimento puro verso il bene pubblico e, per mezzo di questo, verso il bene umano; avendo come fine la costituzione di una patria universale. Contribuisce (...) con tutti i mezzi legittimi al progresso e alle riforme, migliora la Costituzione, secondo il principio della tolleranza in tutte le sfere della società politica. (...) Pertanto rifiutiamo l'intervento del potere ecclesiastico nella vita pubblica e allo stesso modo rifiutiamo l'intervento del potere civile fuori dalle (...) proprie competenze (...). Lo stato deve lasciare agli sforzi individuali tutto quello che si può fare da sé senza danno, né contro il diritto pubblico né contro il privato».

<sup>25</sup> Per un quadro sulla filosofia krausista e la modernità si veda: E. M. Ureña, *El krausismo como filosofía de la modernidad*, in H. Biagini (a cura di), *Orígenes de la democracia argentina. El trasfondo krausista*, Fundación F. Herbert-Ed. Legasa, Buenos Aires, 1989, pp. 163-174; A. Sánchez Cuervo, "Las ilustraciones del krausismo", in *Cuaderno de historia de las ideas*, vol. 8 (2007), pp. 151-163.

proviene il tutto da cui ha origine e si sviluppa la storia umana, in essa si è sviluppata per prima l'idea della civiltà universale»<sup>26</sup>. Di fatto, proseguiva, in Europa «i popoli dovevano inevitabilmente formare la prima unione giuridica e politica» alla quale erano chiamati ad associarsi «i popoli dell'Asia e dell'Africa» mentre a proposito delle terre aldilà dell'Atlantico doveva formarsi: «Non senza l'influsso dell'Europa, uno Stato ben organizzato e supremo in America. Allora potranno unirsi, antico e nuovo mondo in una società suprema di popoli. Compiuto questo atto i popoli della terra, educati e messi alla prova dalla lotta dei secoli, sigleranno una definitiva alleanza nel mare delle isole e con questa unione comincerà un nuovo periodo della vita»<sup>27</sup>. In questo senso, in base all'eurocentrismo moderato di Krause, il nuovo mondo era destinato ad unirsi alla marcia civilizzatrice diretta dall'Europa in termini di partecipazione e non di alienazione.

La partecipazione diretta, invocata da Krause, comportava, in linea teorica, una separazione netta con l'idealismo tedesco. Secondo l'idea di società krausista gli individui si integravano progressivamente in unità sociali superiori che rendevano possibile la realizzazione dell'umanità nella sua organicità e, allo stesso tempo, esprimevano la condizione particolare dei singoli che la componevano. Nazioni, popoli, unità di popoli potevano e dovevano per Krause: «Realizzare in sé un uomo e una vita superiore» progredendo «verso il compimento del suo fine, solo allora, in base all'idea comune di umanità, si possono considerare come una unità e una totalità organica; solo allora, in base alla legge dell'associazione umana possono realizzare ogni fine particolare secondo un'unica idea del tutto e una giusta relazione con gli altri»<sup>28</sup>. Questa idea unica, questa relazione giusta erano appunto i criteri elementari per l'ubicazione delle Americhe nell'organismo mondiale. Questo “tutto” non scompariva nel nucleo cristiano-germanico in linea con l'ermeneutica hegeliana, ma era appunto il “mare delle isole”.

Nel contesto del krausismo spagnolo non troviamo una presenza più esplicita della questione americana. Unica eccezione gli scritti di Rafael de Labra<sup>29</sup>.

Labra fu l'iniziatore degli studi coloniali in Spagna, senza i pregiudizi determinati dalla vocazione europeista dei suoi contemporanei la questione coloniale e il problema americano cessava di essere una preoccupazione locale e diventava protagonista della discussione sull'identità spagnola nella modernità. Per Labra la questione coloniale «non è e non può essere una questione isolata né un problema locale» ma «un problema della nazione spagnola»<sup>30</sup>. La politica coloniale di Labra si mantenne in linea con l'ortodossia liberale dell'epoca: la colonizzazione veniva intesa in termini di “esteriorizzazione” o espansione della civiltà. L'idea era basata sulla convinzione dell'esistenza di diversi gradi di cultura, ma non sullo specifico interesse privato di un singolo Stato a proposito della sua espansione geopolitica. Egli definiva la colonizzazione come: «L'impegno di quei popoli che per affermare una loro caratteristica e definire la loro personalità nel concerto delle società avanzate, sentono la necessità di uscire dal guscio per diffondere il loro

---

<sup>26</sup> K. Krause, *op. cit.*, parte II, p. 12.

<sup>27</sup> *Ivi*, pp. 13 e ss.

<sup>28</sup> *Ivi*, pp. 18 e ss.

<sup>29</sup> M. D. Domingo Acebrón, *Rafael M. de Labra. Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, Europa y Marruecos en la España del Sexenio democrático*, CSIC, Madrid, 2008.

<sup>30</sup> M. D. Acebrón, *Rafael María de Labra*, AECI, Madrid, 1997, p. 70.

spirito e arricchire la loro vita realizzando, attraverso attraverso quest'opera di esteriorizzazione la grande fatica di unire il passato con il futuro e portare a nuova vita le esperienze di secoli»<sup>31</sup>. La colonizzazione era allora «uno dei modi necessari di esteriorizzazione di un popolo per tanto, dal principio alla fine, obbedisce alla legge generale del progresso e alle condizioni storiche caratteristiche (interne ed esterne) di un popolo»<sup>32</sup>.

In seguito Labra passava a considerare un secondo aspetto del problema: l'interesse nazionale previsto dalla politica coloniale. L'aspetto "civilizzatore" della colonizzazione prediligeva sopra ogni cosa «l'interesse dell'umanità e il progresso universale»<sup>33</sup>. Da qui la necessità di «cambiare il modo di considerare la natura, il carattere e il senso della colonizzazione»<sup>34</sup> la quale doveva abbandonare "l'idea dell'impero" e il fine della "dominazione"<sup>35</sup> solo così essa non sarà un mero interesse né una missione speciale dello Stato, «ma un'opera di espansione individuale e sociale che i governi devono solo favorire in certe condizioni e per certi effetti»<sup>36</sup>. La colonia non era, pertanto, «un mercato né ha una vita esclusivamente economica, né i suoi individui possono dimenticare di essere cittadini, né i suoi governi possono rivestire il carattere di una compagnia di commercio, né i suoi cittadini e i suoi campi possono assomigliare ad una grande caserma o ad un immenso accampamento»; è, al contrario, una società in cui gli individui e le istituzioni «devono corrispondere ad un ideale umano»<sup>37</sup>.

Le differenze etniche non giustificavano, secondo Giner, l'esclusione di alcune razze dall'idea di umanità: «Quello che costituisce la persona non è il grado di cultura (...) ma la possibilità di trasformare la coscienza razionale in pensiero e vita attiva, possibilità che non si nega a nessuna razza. I diritti umani fondamentali sono, in linea di massima gli stessi per tutti. La differenza nello sviluppo intellettuale, morale, e affettivo riguarda solo la facoltà di mettere in pratica le proprie qualità e può favorire lo sviluppo di una relazione tutelare sia tra le razze che tra gli individui, tra le nazioni e le istituzioni sociali. In questa relazione le civiltà più avanzate guidano le meno fortunate per il loro bene e il bene di tutti e per la miglior realizzazione del proprio destino. A questo intento rispondono le missioni di propaganda religiosa, intellettuale, morale, economica e industriale inviate ai popoli selvaggi con l'obiettivo di iniziarli ai primi rudimenti della civiltà: il dovere di tutela è inseparabile dalla superiorità»<sup>38</sup>.

La relazione coloniale era dunque: «Un vincolo di protezione e dipendenza tra due nazioni che costituiva un caso speciale di tutela sociale. Non si fonda, nel caso della madrepatria, sul presunto potere assoluto delle civiltà più avanzate sulle altre, esse devono, anzi, tutelare senza convertire la protezione in tirannia e devono, inoltre favorire la pienezza della realizzazione della vita della colonia anticipando, così, il momento dell'indipendenza»<sup>39</sup>.

---

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 113.

<sup>32</sup> R. M. de Labra, *La colonización en la historia. Europa en América*, 2 vols., Librería de San Martín, Madrid, 1878, vol. I, p. 50.

<sup>33</sup> *Ivi*, p. 29.

<sup>34</sup> *Ivi*, p. 73.

<sup>35</sup> *Ivi*, p. 75.

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 89.

<sup>37</sup> *Ivi*, p. 86.

<sup>38</sup> F. Giner de los Ríos, *Resumen de filosofía del derecho*, 2 vols., Imprenta de Julio Cosano, Madrid, 1926, vol. I, pp. 52-53.

<sup>39</sup> *Id.*, *Principios de derecho natural*, La lectura, Madrid, 1916, p. 272.

Giner disegnava una visione della colonizzazione che toccava direttamente le tensioni e le ambiguità dell'organicismo giuridico krausista, a cominciare da quelle che delimitavano la relazione tra i principi universali essenziali e i principi specifici relativi all'epoca, al contesto o ai popoli e che riguardavano i rapporti tra identità e alterità e tra diritto naturale e diritto positivo. Il diritto positivo era, secondo Giner, una autentica applicazione pratica o realizzazione storica del diritto naturale, l'autentica vita giuridica, legati l'uno all'altro: «Per questo considerati i concetti nella loro pienezza, diritto naturale e diritto positivo non sono se non una medesima cosa (...). In altri termini: tutto il diritto naturale è positivo»<sup>40</sup>. Questo implicava una distinzione tra fatti giuridici giusti, quelli assimilabili al diritto positivo, e ingiusti o «antinaturali» in quanto contrari al «corso normale delle cose stesse»<sup>41</sup>. Questa ingiustizia si poteva a ragione individuare tanto nel regime oppressivo istaurato dal dispotismo coloniale come anche nella supposta barbarie di quei popoli che vivevano al margine del diritto naturale. Nel primo caso la colonizzazione sarebbe stata un fatto indesiderabile, nel secondo caso il contrario in quanto perseguiva un sistema di civilizzazione conforme al diritto naturale. Da questi principi anche per Labra, il dovere della metropoli spagnola di «dirigere quelle società che abbiamo messo al mondo e nei confronti delle quali siamo responsabili almeno fin quando la loro vita terrena non abbia acquisito piena robustezza e i loro problemi caratteristici non siano risolti e la loro vita non abbia assunto certe condizioni che ancora tardano a realizzarsi»<sup>42</sup>.

Erano due le soluzioni che Labra individuava nella questione della libertà di Cuba: l'assimilazione o l'autonomia. In entrambi i casi era prevista «l'idea dell'intervento della metropoli negli affari della colonia fino alla sua completa educazione»<sup>43</sup>.

La giustificazione della colonizzazione in termini di espansione morale e di civiltà comune alla matrice liberale europea assunse, nei krausisti spagnoli una connotazione particolare che permetteva loro di anteporre il diritto sostanziale della persona ad ogni tipo di discriminazione. Il termine razza sembrava identificarsi con quello di popolo più che con una determinata specie antropologica. Questo nuovo ruolo dei diritti della persona, elevando i cosiddetti «gradi di cultura» ad elementi di oggettivazione dello spirito, impediva ai krausisti di giustificare *in toto* il colonialismo pur senza mai favorire l'indipendenza. Questo fu il grande equivoco che coinvolse anche il giovane Martí.

#### 4. *L'immanentismo krausista*

La relazione tra Martí e la filosofia krausista rispecchiò in pieno i complicati rapporti esistenti tra la Spagna e le colonie<sup>44</sup>. Il momento era cruciale sia per la

---

<sup>40</sup> *Ivi*, pp. 169-174. «Considerati i concetti nella loro pienezza – scrive Giner – il diritto naturale e il diritto positivo sono la medesima cosa cioè sono il diritto nell'unitaria, omogenea, infinita, assoluta e immutabile natura espressa nel graduale vario ed organico sviluppo della storia». Sull'argomento si veda: E. Díaz, *La filosofía social del krausismo español*, Fernando Torres, Madrid, 1983.

<sup>41</sup> *Ivi*, p. 171.

<sup>42</sup> M. D. Domingo Acebrón, *Rafael M. de Labra*, cit., p. 39.

<sup>43</sup> *Ibidem*, p. 66.

<sup>44</sup> Alcuni degli studi più recenti sull'esperienza spagnola di Martí negano una ricettività meramente acritica, da parte dell'allora giovane studente cubano, del krausismo. Per la Arpini e la Giorgis la scelta del krausismo «non corrispose alla scelta di un modello filosofico ben

madrepatria che per i sudamericani perché le loro relazioni culturali investivano l'atavico problema della ricerca dell'identità: i paesi latinoamericani cercavano un cammino appropriato alle loro peculiarità di paesi nuovi, la Spagna, che era sul punto di perdere il suo impero coloniale, cercava di ritrovare il suo ruolo nello scacchiere internazionale. Così, secondo la Rodríguez de Lecea, i rapporti tra il pensiero spagnolo e quello latinoamericano ricondurrebbero a un tronco comune, del quale il krausismo era unicamente uno degli elementi<sup>45</sup>.

In realtà la percezione del comune destino storico – politico tra la madrepatria e il Sudamerica è poco evidente, almeno nel pensiero dei liberali americani. Costoro, compreso Martí, erano alla ricerca di una identità che la Spagna aveva loro negato, i krausisti, ispiratori della Costituzione repubblicana, fornivano suggestioni liberali di grande fascino ma, nella pratica, non redassero alcun progetto di decolonizzazione per Cuba, unica colonia rimasta, concentrandosi, dopo la fine dell'impero, nella ridefinizione delle linee di politica interna. La comune origine liberale del governo spagnolo e di quelli latinoamericani non ci consentono di accomunare i destini soprattutto in considerazione del fatto che gli americani adottarono il liberalismo come un "rimedio" alla politica della Spagna.

Il pensiero di Krause offriva, però, alcuni elementi che consentivano a Martí di rovesciare il rapporto tra la colonia e la madrepatria attraverso un percorso di liberazione dalla tradizione e dalle convenzioni filosofiche e culturali ad esso legate. L'approccio metodologico alla conoscenza basato sulla "relazioni tra le cose"<sup>46</sup> forniva la possibilità di valutare empiricamente la realtà, liberandola dall'astrattezza tipica della filosofia hegeliana che era il riferimento primario di quei liberali che in Europa erano ancora impegnati nella costruzione degli Stati nazionali. La logica astratta di Hegel aveva condotto l'uomo allo smarrimento, bisognava dunque ricondurlo alla concretezza. Qui interveniva appunto la filosofia di Krause che, attraverso la rivalutazione dei sensi e delle relazioni, fondava la vera conoscenza, quella che traeva origine dall'esperienza. La critica ad Hegel non escludeva il ricorso, da parte dei krausisti, alla dialettica intesa come attuazione della realtà e così una delle caratteristiche principali delle riflessioni di Martí fu proprio la capacità di sintetizzare l'aspetto spirituale e

---

definito ma, piuttosto, alla necessità di rompere con una tradizione speculativa che giustificava e manteneva lo schema della dominazione (la scolastica)». Anche per Mercedes Serna «non si poteva parlare di un'influenza radicale del krausismo sullo scrittore cubano, ma di certe affinità che si plasmarono attraverso diversi criteri pedagogici, religiosi, filosofici e artistici». Ugualmente per Rodríguez «più che un krausista in filosofia, Martí assimilò le posizioni di quella scuola per quello che era compatibile con la sua già presente etica del dovere e del servizio», cfr: A. Arpini, L. Giorgis, "La presencia del krausismo en Hostos y Martí", in *Boletín de historia*, FEPAI, año 8, n. 16 (1990), p. 5; M. Serna, "Algunas dilucidaciones sobre el krausismo en José Martí", in *Cuadernos hispanoamericanos*, n. 521 (1993), p. 137; P. P. Rodríguez, *De las dos Américas*, Centros de estudios martianos, La Habana, 2002, pp. 9-10. Poco convinti dell'influenza di Krause su Martí sono anche Schulman, Béguez César e Portuondo. Soetzer ritiene che l'interesse di Martí per Krause non andasse oltre l'aspetto etico, Turton sottolineò, invece, quanto la fondamentale promessa di un nuovo mondo, tipica della cultura Krausista avesse profondamente influenzato il giovane cubano cfr: I. Schulman, *Símbolo y color en la obra de José Martí*, Gredos, Madrid, 1960; J. Béguez César, *Martí y el Krausismo*, Compañía editora de libros y folletos, La Habana, 1944; J. A. Portuondo, *Letras Cubanas*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1982; P. Turton, *José Martí, architect of cuban freedom*, Zed books, London, 1986.

<sup>45</sup> Cfr. T. Rodríguez de Lecea, *op. cit.*, p. 2.

<sup>46</sup> J. Martí, O. C., T. 21, pp. 367-369.

quello fisico, quello morale e quello materiale, attitudine corrispondente a una ben determinata visione del mondo, che aveva le sue radici proprio nel “panenteismo” Krausista che il cubano assimilò perfettamente, così come fece proprio l’impulso riformatore e umanitario<sup>47</sup>.

Dunque l’approccio con l’idealismo spagnolo si rivelò spontaneo e poi c’era il forte senso dell’etica di quella filosofia, un tema universale a cui aggrappare il desiderio di libertà per Cuba. L’etica era uno degli aspetti più caratteristici del krausismo e aveva come oggetto l’essenzialità di Dio. L’oggetto dell’etica krausista consisteva proprio nello «studiare e analizzare – scriveva Martí – il mezzo attraverso il quale il bene supremo, concepito proprio come attributo di Dio si realizza nel genere umano»<sup>48</sup>. Metafisica e etica restavano in questo modo legate in una coerente teoria di tipo immanentista, tipica della filosofia idealista, che puntava al perfezionamento umano.

Nell’opera di Martí troviamo idee che sembravano far eco al concetto di “panenteismo”: «Tutto è analogo –scriveva – di più tutto è identico; e così come si sale al monte fino alla vetta più alta, così talvolta in una verità sola, in un germe solo, si concentrano tutte le forme di vita. L’Universo è una ammirabile parola, sommario di tutta una filosofia: L’unità nella diversità, la diversità nella unità»<sup>49</sup>; troviamo anche riflessioni che riguardavano l’elevazione spirituale e morale verso l’idea di Dio e la concettualizzazione di Dio come Bene Supremo: «L’uomo è il piede di un corpo infinito che la creazione ha inviato in terra (...) in cerca di suo padre, corpo proprio»<sup>50</sup>, e ancora «Dio esiste (...) nell’idea del bene (...). Il bene è Dio»<sup>51</sup>. In Martí, come nei krausisti, la visione armonica e sintetizzatrice dell’Universo caratterizzava il resto delle idee – politiche, sociali, economiche - e tutte convergevano in un progetto le cui caratteristiche principali erano la conciliazione, la solidarietà, la fraternità universale e la relazione armonica tra natura e spirito. Per Martí, come per i krausisti, l’uomo era la suprema sintesi finita all’interno della quale convergevano le opposizioni della natura e dello spirito. Egli rispecchiava le sue convinzioni in questa “relazione costante e armonica”, nella sua stessa esistenza<sup>52</sup>.

Se Martí non era attratto dalla dimensione religiosa in genere<sup>53</sup>, il desiderio di “assimilazione” a Dio dei krausisti era comunque presente nella sua opera, egli infatti affermava: «l’intelletto è la facoltà di osservare, elaborare e trasmettere, in quanto pensa, riceve impressioni, in quanto sente (...) e in quanto si muove. Essenza e catena tra uomo e Dio, i cui lacci sono spinosi e sono ogni volta più corti. Catene lunghe sono quelle che servono agli uomini per arrivare a Dio.

---

<sup>47</sup> M. I. Méndez, *Martí*, Fernández y Cía., La Habana, 1941, p. 220.

<sup>48</sup> J. Martí, *O. C.*, T. 14, p. 132.

<sup>49</sup> *Ivi*, T. 20, p. 88.

<sup>50</sup> *Ibidem*, p. 82.

<sup>51</sup> *Ivi*, T. 1, p. 35.

<sup>52</sup> «Io non affermerei la relazione costante e armonica dello spirito e del corpo, se io stesso non ne fossi una conferma» *ivi* T. 20, p. 132; e ancora sull’argomento: «l’io è l’universo medesimo, e l’universo medesimo non è altro che l’io. Dalla parte più piccola al tutto, e nel tutto, la parte più piccola. Così è il sistema. Relazione assoluta tra un essere e un altro, in una maniera tale che tutti risultino identici e tutti costituiscano una grande identità», *ivi*, p. 37.

<sup>53</sup> Cfr. J. Martí, *O. C.*, T. 21, pp. 16-17; T. 6, p. 226 e *ivi*, p. 42, dove a proposito della percezione della religione affermava: «non conosco abbastanza delle religioni per dire che appartengo ad una di esse».

L'uomo cammina verso Dio»<sup>54</sup>. Nessuna concessione Martí faceva però al trascendente.

La religiosità in Martí è una credenza senza adorazione, sia in Dio che nell'ordine trascendente cattolico. Questa visione rappresentava un aspetto preliminare della concezione della storia pronta a convertirsi in un ordinamento costituito da tappe che si succedevano progressivamente: uno schema evoluzionista all'interno del quale il moderno succede alle strutture sociali, la ragione alla fede. E questo concetto diventava il supporto filosofico delle intenzioni politiche di Martí: la modernizzazione etica dell'America latina e la libertà della sua Cuba<sup>55</sup>. Cominciava a farsi strada un aspetto che sarebbe stato caratteristico dei suoi scritti della maturità: lo schema evoluzionista che avrebbe perfezionato negli anni americani.

Il principio metodologico dell'armonia nella diversità delle cose umane<sup>56</sup>, che caratterizzò il pensiero e l'azione di Martí, aveva dunque un chiaro e diretto riferimento nella filosofia di Krause<sup>57</sup>. La ricerca di un'unica verità a fondamento e direzione della realtà umana non aveva assunto né una dimensione escatologica di tipo cristiano né una coscienza religiosa come quella dei krausisti spagnoli. In quest'ottica l'idea dell'armonia diventò per Martí l'ispirazione e il risultato della sua ricerca sul ruolo dell'individuo nella società<sup>58</sup>. In base ad una linea tracciata dalla filosofia krausista, per Martí «il primo dovere dell'uomo è pensare a se stesso»<sup>59</sup>; l'affermazione andava interpretata come una dichiarazione di superiorità del genere umano di fronte alla trivialità del mondo<sup>60</sup>. La frase «il primo dovere dell'uomo è riconquistarsi»<sup>61</sup> era la conferma della necessità per l'uomo di individuare se stesso come fine ultimo,

---

<sup>54</sup> *Ivi*, T. 21, p. 17.

<sup>55</sup> Cfr. E. Ichikawa Morin, "José Martí y una metafísica de la historia", in *Anuario martiano*, n. 19 (1996), pp. 195-196, «Il cattolicesimo muore – scriveva Martí – la ragione sociale dei vecchi secoli della Chiesa lascia il suo posto alla ragione sociale del secolo della libertà (...). La fede cieca scompare in onore della ragione. Il rettore del libro cattolico se ne va, la causa immensa occupa il suo posto tra noi». J. Martí, *O. C.*, T. 9, p. 29.

<sup>56</sup> «Esistono cose distinte e ciascuna è una verità. C'è armonia tra le verità, ma non si può dire che tutte le cose siano una», J. Martí, *O. C.*, T. 21, p. 55.

<sup>57</sup> Nel pensiero di Krause la filosofia dell'armonia reggeva le sorti del mondo: «l'idea suprema di umanità armonizza in sé tutte le diversità di sesso, età (...), educazione (...), stati e professioni (...), interessi politici. L'idea di umanità chiede all'individuo che sia uomo per sé e che miri con spirito attento per tutta la sua vita (...) a coltivare le sue facoltà e le sue forze, per realizzare in sé tutta l'umanità nella quale si fonda la sua dignità morale», K. Krause, *op. cit.*, Introducción, par. V.

<sup>58</sup> «L'uomo, retto dal principio filosofico dell'armonia, fu per Martí non solo una guida per la sua vita e per il suo pensiero ma convertì tutto questo anche in un principio metodologico basilare per la sua logica», P. P. Rodríguez, *op. cit.*, p. VI.

<sup>59</sup> José Martí, *O. E.*, T. I, p. 103.

<sup>60</sup> F. Varona Domínguez, "Humanismo martiano: individuos grupos humanos y sociedad", in *Homomagnó*, n. 2 (2002), p. 5. «Dal pensiero martiano emana tolleranza e rispetto per ogni uomo così come convinzione nei confronti della lotta sostenuta contro l'egoismo e per il benessere di tutti. L'umanismo di Martí porta ad una armonia tra individuo e società, perché non solo tiene in considerazione il popolo e la massa ma anche le relazioni stabilite tra gli uomini (...). Non c'è nell'umanismo di Martí il sociocentrismo tipico delle dottrine socialiste né l'assolutizzazione dell'individuo tipico del capitalismo», *ibidem*.

<sup>61</sup> J. Martí, *O. C.*, T. 4, p. 270.



mediante il recupero della sua dignità attraverso l'uso della ragione quale facoltà esclusiva dell'essere umano<sup>62</sup>.

L'uomo di Martí, dunque, acquistava la sua dimensione solo nella società e questa esisteva solo in quanto costituita da uomini in relazione tra loro. Dunque l'uomo e la società si compenetravano, contribuendo a formare l'uno l'identità dell'altro<sup>63</sup>. Il primo, il più importante degli oggetti sensibili viveva e conosceva la realtà che lo circondava attraverso le relazioni affettive. L'amore non era, per Martí, un semplice sentimento, ma una passione rivelatrice dell'esistenza, un mezzo per entrare in contatto con i suoi simili e realizzarsi nella società<sup>64</sup>.

L'individuo, come singolo e nella società, occupava un posto privilegiato nell'umanesimo di Martí come forza animatrice e come perno della sua stessa realizzazione<sup>65</sup>, perciò il suo era sostanzialmente un uomo "in attività"<sup>66</sup> alla ricerca continua dell'equilibrio tra la sua dimensione razionale e quella materiale o storica. Questo aspetto gli permise, di svolgere una critica basata sullo sviluppo di "alternative alla realtà"<sup>67</sup>, volta a superare l'aspetto metafisico e antistorico della filosofia idealista europea, pur senza metterne in dubbio l'impianto.

Martí ammetteva l'esistenza di una verità ultraterrena: «La verità trascendente esiste, scriveva, però non esiste nell'ordine intellettuale umano. Sì, esiste in qualche ordine, indubbiamente deve esistere, superiore al nostro, più sintetico, più univoco, più armonico, nell'ordine post umano e infra umano; nell'ordine intellettuale universale, esattamente come tutti i figli vanno al padre e tutti i rami al tronco e tutti i raggi al sole e tutte le scienze vanno ad una scienza

---

<sup>62</sup> «Dove vive la ragione fiorisce la fede nell'armonia dell'universo» J. Martí, O. C., T. 1, p. 163. Bisogna ricordare che i Krausisti, in Spagna, si fecero pionieri di una forte spinta alla diffusione capillare dell'istruzione diventando gli artefici di una nuova direzione pedagogica, cfr: J. J. Morillas, *op. cit.*, pp. 96 e ss.

<sup>63</sup> Cfr. F. Varona Domínguez, *Humanismo*, cit., pp. 4, 6. «Da una lettura dell'opera di Martí viene alla luce soprattutto il peso che egli stesso concede alla società umana, al popolo, ma la sua enorme attenzione per l'universale non gli fa disprezzare il singolare, cioè l'individuo, dinamico e creatore, nel quale coesistono il generale e il particolare. Martí riconosce e attribuisce un significato sia all'universale che al particolare e alle loro reciproche relazioni. Il fondamento teorico di questa caratteristica appare in uno dei suoi postulati, secondo il quale l'universale è l'uni-vario, ossia il vario nell'uno (...). Queste parole riflettono una sua nozione di universo integro caratterizzato dall'unità e dal riconoscimento di ognuno nelle componenti del tutto», *ivi*, p. 6.

<sup>64</sup> J. Martí, O. C., T. 4, pp. 123-131.

<sup>65</sup> F. Varona Domínguez, "Valores morales y humanismo martiano: composición armónica" in *Homomagnó*, n. 2 (2002), p. 1. «L'individuo occupava un posto privilegiato nell'umanesimo di Martí, come forza animatrice di realizzazione umana, indipendenza intellettuale, ricerca di mezzi, creazione di condizioni per la realizzazione dell'essere umano, e fonte di azione sociale per il progresso».

<sup>66</sup> R. Pupo, "La relación ético-política en el pensamiento de José Martí", in *Homomagnó*, n. 2, 2002, p. 3. A proposito dell'azione nel pensiero di Martí, Varona aggiunge: «l'opera di perfezionamento di individui e società non è angelicale, ma è diretta a conseguire e conservare i risultati ottenuti da una imprescindibile armonia tra gli individui, i gruppi umani e la società tutta», F. Varona Domínguez, *Humanismo*, p. 6.

<sup>67</sup> Cfr: R. Fernández Betancourt, *Elementos para una lectura filosófica de José Martí: Crítica a la filosofía europea*, in [www.ensayistas.org/filosofos/marti](http://www.ensayistas.org/filosofos/marti), cap. I «le critiche che Martí svolge alla filosofia europea si incentrano sull'accusa di essere, in sostanza, una filosofia metafisica; non perché Martí non riconosca validità e legittimità ai problemi umani nell'ordine metafisico, ma perché intende che la metafisica europea, essendo un risultato della ragione speculativa e antistorica hegeliana, ha cercato con troppa foga trovare una scienza astratta e trascendentale».

e tutte le verità vanno ad una verità, tutti i mondi vanno verso l'universale sublime e armonico mondo di Dio»<sup>68</sup>.

La verità metafisica, in quanto tale, non poteva dunque essere compresa dall'intelletto umano perché esterna alle sue categorie<sup>69</sup>. Le uniche verità che l'uomo era in grado di analizzare erano, per Martí le verità "concrete": «Nell'uomo c'è una forza pensante che non si realizza e non si sviluppa senza cose pensabili. L'io è sovrano perché esiste il non io. Dall'azione dell'io sul non io e da quella reciproca, inferiore però inevitabile del non io sull'io nascono le verità concrete che portano alla verità assoluta»<sup>70</sup>.

L'impianto formale della filosofia idealista rimaneva, strategicamente, a fondamento del ragionamento, ma a Martí interessava sottolineare l'assenza del «Principio assoluto delle conoscenze umane che Fichte cerca con tanto affanno»<sup>71</sup>, da ciò derivava la convinzione dell'assenza di una verità fondamentale umana interpretata come identità universale, così come prevedeva l'idealismo tedesco. L'identità universale che Martí vedeva rappresentata nella filosofia di Schelling costituiva, perciò, l'elemento teleologico e assoluto che intendeva confutare<sup>72</sup>.

Martí partiva dal presupposto che «L'io individuale è l'origine di tutte le conoscenze individuali. Non è l'unica origine. L'origine è l'essere che le riceve, le giudica e le esamina»<sup>73</sup>.

Da questi presupposti concludeva: «Esistono diversi tipi di realtà, e ciascuno di essi è una verità, e tutti i generi costituiscono generi diversi di verità. C'è armonia tra le verità, perché c'è armonia tra le cose, però da questa armonia non si può dire che tutte le cose siano una»<sup>74</sup>.

Questo personale approccio all'idealismo, mediato dal krausismo, lo portò a concepire una filosofia basata sull'osservazione della direzione delle cose umane: «La filosofia che si completa con la scienza si preoccupa di vedere verso dove va la vita umana e come si può influire su di essa»<sup>75</sup>. In questo modo il Martí uomo d'azione e trasformatore della realtà diventava il protagonista della filosofia latinoamericana dell'ultimo scorcio del XIX secolo.

La duplice critica all'astrattezza dell'idealismo hegeliano e all'ortodossia religiosa avevano, per lui, una radice comune: la scoperta di una filosofia rinnovata, una filosofia che fosse finalmente un pensiero dell'uomo per l'uomo. Essa subentrava, quindi, alla religione sostituendola, al Dio trascendente della fede essa preferiva l'uomo, proponendosi come un umanesimo radicale che nacque proprio negli anni spagnoli a contatto con il krausismo.

##### 5. Il problema della libertà e la liberazione dalla Spagna

Martí aveva dimostrato, in quegli anni, di avere acquisito un forte senso della diversità tra Cuba e la Spagna, cosa che lo portò a inserirsi a pieno nel novero dei pensatori latinoamericani dell'Ottocento che, per via delle circostanze, erano

---

<sup>68</sup> J. Martí, O. C., T. 21, p. 53.

<sup>69</sup> «Non esiste una verità trascendentale nell'ordine intellettuale umano», *ibidem*.

<sup>70</sup> *Ivi*, pp. 53-54.

<sup>71</sup> *Ivi*, p. 56.

<sup>72</sup> «Quello che è Dio per i cattolici è l'identità per Schelling», *ibidem*.

<sup>73</sup> *Ivi*, p. 58.

<sup>74</sup> *Ivi*, p. 55.

<sup>75</sup> *Ivi*, T. 13, p. 193.

spesso obbligati ad agire per ricercare soluzioni urgenti ai problemi di una realtà in cambiamento<sup>76</sup>. Il materialismo critico di Krause diventava così, per necessità, ontologico, l'esperienza sensoriale lungi dal rimanere contemplativa si rivelava, per Martí e in genere per i liberali latinoamericani, attiva nella realtà. Questa "filosofia risolutiva"<sup>77</sup> il cubano la sviluppò a pieno nel periodo dei viaggi in America Latina, che lo portarono a conoscere i problemi della sua America, ma i primi elementi, come abbiamo visto, li apprese in Spagna. La forza creatrice che l'attività umana doveva avere nell'affrontare e risolvere i problemi era l'anima intorno alla quale giravano tutte le sue idee<sup>78</sup>, la realtà circostante era il luogo in cui le idee e le azioni prendevano corpo e dotavano l'umanesimo martiano di universalismo.

Il popolo non era in Martí un sistema di classi sociali, ma una "nazione" che progredisce. Non che ignorasse l'esistenza delle classi sociali o di gruppi di potere, ma la sua aspirazione a costruire uno Stato indipendente non poteva trovare i presupposti nelle differenze e nelle separazioni in quanto il fine ultimo non poteva che essere l'unità di tutti i cubani: «Così si diventa uomini – scriveva – trasformandosi in un intero popolo»<sup>79</sup>. Il popolo diventava, quindi, un concetto di innegabile centralità nel suo pensiero a riprova dell'importanza data alla socialità umana. La sua frase «L'uomo, da solo, vive come un disperato»<sup>80</sup>, sottolinea come l'unità tra l'individuo, e i suoi simili, fosse, per Martí, l'unico mezzo per la realizzazione del continuo progresso della specie umana, e la via esclusiva per il raggiungimento della totale indipendenza della patria e la liberazione dell'umanità.

L'umanesimo, l'universalismo e l'etica dell'azione gli permisero di trascendere, nelle sue considerazioni etiche sulla libertà, i confini nazionali, per estenderli a tutti gli uomini<sup>81</sup> e lo convinsero che le relazioni tra gli uomini si sarebbero dovute svolgere in un clima di assoluta armonia e di pieno riconoscimento del particolare nell'universale, e viceversa, secondo gli insegnamenti di Krause<sup>82</sup>.

Il recupero del ruolo dell'individuo come fine ultimo delle proprie azioni, che Krause effettuò senza mezzi termini, determinando la rottura con l'idealismo hegeliano<sup>83</sup> e la composizione armonica tra individuo e società erano elementi comuni sia al pensiero di Krause che a quello di Martí. La libertà di coscienza, elemento cardine della filosofia dei krausisti, costituì uno degli assiomi fondanti del liberalismo di Martí anche dopo l'esperienza spagnola.

Le libertà, pietre miliari della politica krausista, nella colonia cubana però stentavano ad affermarsi, tanto che nel 1869 ne *El diablo cojuelo* Martí scriveva: «Questa cosiddetta libertà di stampa, prima sperata e negata e ora

<sup>76</sup> Cfr., J. L. Gómez Martínez, "Pensamiento latinoamericano: una aproximación bibliográfica", in *Cuadernos salmantinos de filosofía*, n. 8 (1981), p. 402.

<sup>77</sup> La filosofia risolutiva – scrive Betancourt – è la filosofia rivolta alla soluzione dei problemi pratici. Cfr. R. Fernández Betancourt, *Elementos*, cit., cap. II.

<sup>78</sup> «Fare è il miglior modo di dire», J. Martí, *O. C.*, T. 7, p. 197.

<sup>79</sup> J. Martí, *O. C.*, T. 6, p. 314.

<sup>80</sup> J. Martí, *O. C. T.* 3, p. 279.

<sup>81</sup> *Ibidem*; P. P. Rodríguez, *op. cit.*, pp. 44-45.

<sup>82</sup> Cfr. F. Varona Domínguez, *Umanismo*, cit., p. 4; «non sia mai che un uomo sia nemico o contrario all'umanità»; J. Martí, *O. C.*, T. 20, p. 37.

<sup>83</sup> T. Rodríguez de Lecea, *op. cit.*, p. 26: «la coscienza individuale, punto di partenza nodale del sistema di Krause, si perde nel sistema hegeliano a beneficio di una verità assoluta della quale l'individuo è solo parte, il cittadino è sottomesso agli interessi dello stato».

concessa, non permette di esprimere tutto quello che si vorrebbe»<sup>84</sup> e lo stesso succedeva per la libertà di riunione<sup>85</sup>. Queste libertà che, Martí legava all'esercizio della coscienza personale e che erano alla base della rivoluzione del '68 spagnolo, a Cuba non venivano riconosciute.

I limiti del governo krausista si rivelarono infatti in tutta la loro gravità anche nell'anno della repubblica proprio nei rapporti tra Spagna e la colonia. I krausisti partivano dal presupposto che «le leggi e i principi ispiratori – scrive Catellón – dovevano avere una doppia lettura, una per la madrepatria e una per le colonie, o più semplicemente, si ammetteva la possibilità che certi principi ritenuti basilari rimanessero sospesi per via dell'arbitrio dei Capitani Generali»<sup>86</sup>. Lo stesso Labra, come abbiamo visto, aveva tentato di superare sul piano teorico questa ambiguità, con tutta evidenza però nella pratica di governo diritto naturale e diritto positivo non coincidevano, almeno nei rapporti con la colonia.

La doppia lettura nell'esercizio dei diritti fondamentali difficilmente poteva essere ricondotta a quella che era l'idea originaria del diritto e dello Stato di matrice Krausista.

Per Krause il diritto rappresentava una «Proprietà di relazione (...) non un oggetto che può essere comprato o venduto; i diritti sono inerenti alla natura umana. Si può dire che essi siano imprescrittibili, cioè duraturi nel corso del tempo e, derivando dalla stessa natura umana, sono superiori alla volontà del legislatore al quale al quale non tocca concederene, rifiutarene, ne tantomeno limitarne arbitrariamente il suo esercizio»<sup>87</sup>.

Da questa considerazione sul diritto derivava un criterio di giustizia che comprendeva a pieno l'idea della dignità umana, della libertà e dell'uguaglianza. Questo concetto sottintendeva una concezione relativamente pluralista del diritto stesso. Anche se la sua origine era assoluta e il suo sistema di valori e di fini poteva essere considerato "in assoluto", da questo nucleo centrale si potevano individuare espressioni diverse e molteplici del diritto stesso. Per tanto nessun criterio di giustizia poteva essere considerato in assoluto. L'uomo dunque, per Krause, realizzava l'idea di diritto solamente in un "contesto giusto" riconoscibile e solo all'interno di una pacifica convivenza con altri soggetti o con altri popoli<sup>88</sup>.

Martí assimilò quest'idea del diritto e, nel 1873, in piena esperienza repubblicana, a Madrid, pubblicò il "foglietto" *La República española ante de la revolución cubana*, in cui mostrava proprio la contraddizione che esisteva tra l'idea del diritto krausista e la politica ufficiale della repubblica che continuava a negare la libertà al popolo cubano. A questo proposito scriveva: «Nella vita pratica delle idee, il potere non è altro che il rispetto di tutte le manifestazioni della giustizia, e, quando l'attaccamento alla giustizia scompare, vita insensata, odiosa vive il potere. Non deve essere rispettata la volontà che comprime

---

<sup>84</sup> J. Martí, *O. E.*, T. I, p. 11.

<sup>85</sup> *Ivi*, p. 12; a proposito della libertà di riunione, l'ironia di Martí si appuntava sulle riunioni degli aristocratici criollos cubani, composte da individui sempre pronti a non schierarsi mai e a mantenere «un occhio a Yara e uno a Madrid», *ivi* p. 11; nel senso che costoro non facevano mistero del proprio disinteresse per la causa cubana e anche durante la guerra dei dieci anni si mantennero sempre estranei alle faccende politiche e con la mano tesa verso la Spagna ad aspettare l'esito della guerra.

<sup>86</sup> M. García Castellón, *op. cit.*, p. 7.

<sup>87</sup> Cfr. A. Oviedo García, "Martí y el Krausismo jurídico español", in *Revista cubana de filosofía*, n. 8 (2005), pp. 18-34.

<sup>88</sup> K. Krause, *op. cit.*, pp. 320 e ss.

un'altra volontà; sulla scelta libera, sulla scelta saggia e cosciente, sullo spirito che anima il corpo sacro dei diritti, sul verbo generatore delle libertà, si alza oggi la repubblica. Si potrà mai imporre una volontà a chi l'ha già espressa per mezzo del suffragio? Potrà mai rifiutare tutto questo la volontà unanime di un popolo quando per volontà di un popolo libero e unito volontà si alza?»<sup>89</sup>.

L'esistenza della colonia negava, quindi, secondo Martí, la realizzazione del diritto, ossia impediva la convivenza tra le diverse volontà che il krausismo riteneva necessaria per la completa realizzazione della giustizia. L'esistenza di una madrepatria in cui la colonia non si riconosceva, di una organizzazione coercitiva i cui diritti si basavano sull'egoismo impediva, secondo Martí, la piena realizzazione della perfettibilità umana attraverso il dispiegamento della ragione espressa tramite la libera e cosciente volontà. Questo processo avrebbe dovuto svolgersi all'interno di una organizzazione statale espressa dalla libera volontà dei cubani, un nuovo Stato nazionale che si sarebbe fatto garante del processo evolutivo dell'uomo come essere sociale e, all'interno del quale, si realizzava l'incontro tra la dimensione razionale dell'uomo stesso e quella materiale, così come previsto dall'etica krausista, erede fedele della tradizione liberale illuminata.

Ne *El diablo cojuelo*, ancora durante l'esilio spagnolo, Martí tornava sull'argomento scrivendo: «Se venisse a Cuba un capitano generale che, burlandosi del paese, della nazione e della vergogna, le rubasse due milioni di pesos (...), si dovrebbe riflettere molto prima di pubblicare la notizia che offende la reputazione del rispettabile rappresentante borbonico nelle Antille»<sup>90</sup>. In questo modo sottolineava anche come la tanto decantata libertà di stampa, concessa per legge nell'isola, in realtà non aveva valore. Si può facilmente comprendere la situazione se si prende in considerazione il fatto che Krause non fu propriamente un convinto rivoluzionario, nella sua visione l'individuo non mutava il destino comune dell'umanità<sup>91</sup>, e a proposito delle rivoluzioni in atto in tutta Europa in quel periodo, si espresse in questi termini: «Osservando lo stato attuale di queste rivoluzioni, comparandole con la legge umana nella quale si dovrebbero fondare, riconosciamo che si trovano ancora in una fase infantile, che distano ancora tanto dal fine buono che si propongono di compiere (...), che operano ancora in forma incompleta e confusa. Questa infanzia delle rivoluzioni come crisi periodiche della storia (...), la irregolarità del loro corso, la confusione dei motivi, l'ingiustizia nei mezzi, l'inefficacia dei risultati, dureranno fino a che gli uomini e i popoli lasceranno la vana presunzione di guadagnare sul destino dell'umanità e si riconoscano non come i creatori ma come collaboratori del destino comune, limitandosi ad osservare e a seguire le leggi umane nel passaggio da una storia imperfetta a una più piena e positiva, operando non come quello che distrugge ma come quello che costruisce la sua propria storia (...). Allora le rivoluzioni corrisponderanno alla legge su cui si fondano e formeranno una crisi periodica, il dolore passeggero di una nuova vita nella storia stessa»<sup>92</sup>.

---

<sup>89</sup> J. Martí, *O. E.*, T. I, p. 53.

<sup>90</sup> J. Martí, *O. E.*, T. I, p. 12.

<sup>91</sup> K. Krause, *op. cit.*, parte I, par. X.

<sup>92</sup> *Ibidem*.

La sua dottrina perciò non conteneva in sé nessun credo di rottura ma una integrazione di tipo borghese che prevedeva anche l'assoggettamento di una società ad un'altra nello sviluppo graduale del progresso umano<sup>93</sup>.

L'esperienza krausista si rivelò comunque fondamentale per la riflessione sulla politica liberale del continente americano che Martí sviluppò negli anni successivi. Il potere della ragione e la libera istruzione per tutti erano, come abbiamo visto, elementi del pensiero krausista e per Martí furono un'occasione importante di riflessione prima dell'approccio alla teoria positivista che anzi si rivelò uno sbocco naturale del suo pensiero.

Il suo umanesimo patriottico<sup>94</sup> però non poteva prescindere dalla realtà di Cuba e dalla considerazione che i valori morali di un popolo ne riproducevano sempre lo spirito e le condizioni in cui prendeva forma l'identità nazionale. Per tutta questa serie di considerazioni la politica krausista nel suo paese non aveva sortito gli effetti sperati.

Nel 1865, all'interno dell'Accademia di giurisprudenza di Madrid, si era formata la Società abolizionista spagnola<sup>95</sup>. In quest'organo, l'ispirazione umanista dei suoi componenti si esprimeva concretamente nella richiesta di abolizione, all'interno delle colonie spagnole, della schiavitù.

Intanto a Cuba, un'economia sostanzialmente preindustriale aveva lasciato intatto il sistema durante tutto il corso del XIX secolo, nonostante il trattato del 1815 con l'Inghilterra<sup>96</sup>. I padroni latifondisti tenevano sotto scacco il governo di Madrid con la continua minaccia di una rivoluzione secessionista o dell'annessione agli Stati Uniti, cosa che avrebbe permesso loro di continuare indisturbati la tratta degli schiavi. Intanto il commercio di zucchero, alla metà del secolo, andava aumentando e con esso, in maniera proporzionale, la tratta dall'Africa<sup>97</sup>. Questa questione fu sollevata alla fine degli anni Sessanta quando il ministero delle colonie ultramarine fu affidato al moderato, simpatizzante del pensiero di Krause, Cánovas del Castillo e la presidenza della società abolizionista fu affidata al cubano Fernando de Castro, il quale si fece promotore della pubblicazione di una rivista, *El Abolicionista*, in cui dava spazio al dibattito sulle libertà<sup>98</sup>. All'interno del movimento krausista cubano il tema

---

<sup>93</sup> Cfr. M. García Castellón, *op. cit.*, p. 2.

<sup>94</sup> F. Varona Domínguez, *Valores*, cit., p. 2.

<sup>95</sup> Sulla società abolizionista si veda P. Arroyo, "La sociedad abolicionista española, 1864-1886", in *Cuadernos de historia moderna y contemporánea*, n. 3, Madrid, 1982; M. García Castellón, *op. cit.*

<sup>96</sup> Rispetto alla schiavitù nelle colonie, la Spagna aveva ratificato nel 1815 un trattato con l'Inghilterra, con il quale, a partire da quella data, veniva dichiarato illegale tutto il traffico degli schiavi nelle colonie; cfr., W. Kaufmann, *La política británica y la independencia de la América Latina, 1804-1828*, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1963, pp. 83-109. «Nel 1817 il governo spagnolo venne persuaso dagli inglesi, i quali dopo il 1815 dominavano politicamente e commercialmente la penisola, ad abolire formalmente la tratta degli schiavi con decorrenza dal 1820. Gli spagnoli avrebbero ricevuto quattrocentomila sterline per compensare coloro che potevano subire perdite a causa dell'abolizione (...). Il rifornimento degli schiavi però tra il 1815 e il 1820 crebbe oltre ogni aspettativa arrivando, in questi cinque anni, a toccare quota centomila, assai più di quanti ne erano stati importati nell'intero periodo antecedente al 1790», H. Thomas, *Storia di Cuba, 1762-1970*, Einaudi, Torino, 1973, pp. 75-78.

<sup>97</sup> Cfr. *ivi*, pp. 89-155; sullo schiavismo a Cuba cfr. M. Moreno, *Cuba – España, Historia común*, Crítica, Barcelona, 1995; I. Balboa, "Colonización y poblamiento militar versus independencia, Cuba 1868-1895", in *Rabita*, n. 17 (1995), pp. 121-138.

<sup>98</sup> Cfr. T. Rodríguez de Lecea, *op. cit.*, p. 10.

dell'indipendenza dell'isola venne però spesso ignorato se non addirittura rifiutato.

Emilio Castelar, cubano, membro della giunta direttiva, affermò nel 1870: «lo lavorerò con tutte le mie forze, con le mie parole, con tutto ciò che serve, per conservare integro il territorio nazionale»<sup>99</sup>, intendendo come unico territorio nazionale quello della Spagna e di Cuba; lo stesso parlamentare Rafael de Labra, che tanto attivo era stato nel promuovere l'abolizione della schiavitù a Cuba, precisava che proprio l'abolizione della schiavitù avrebbe evitato una rivoluzione nell'isola, come quella haitiana del 1802. La schiavitù infatti era causa di una morte lenta e dolorosa nelle piantagioni, a questo destino gli schiavi avrebbero preferito sicuramente una morte gloriosa in una battaglia per l'indipendenza, come era successo ad Haiti.

L'abolizione veniva quindi identificata come uno dei rimedi per evitare una scissione del territorio nazionale e per porre fine alla guerra dei dieci anni<sup>100</sup>.

Lo stesso Krause, abbiamo già visto, aveva ammesso l'esistenza di popoli cosiddetti minori e aveva scritto a questo proposito: «Un popolo minore, che non sa gestirsi con la sua libera volontà, cade (...), secondo una legge della storia, sotto le dipendenze di un popolo maggiore, più colto, più forte e avanzato nell'arte politica. Questa dipendenza può essere fruttuosa per i popoli sottomessi quando in questi sveglia il loro senso morale e, con questo, il sentimento della loro personalità politica. Però questa dipendenza si converte in dannosa e antiumana quando (...), per via dell'abuso del popolo conquistatore, il popolo conquistato è materialmente aggregato ad uno stato straniero per essere assorbito in esso»<sup>101</sup>.

Si delineava per costoro un destino che, secondo la Rodríguez de Lecea, era assimilabile a quello delle colonie spagnole<sup>102</sup>, contravvenendo, di fatto, ai propri postulati.

Stando così le cose, durante il ministero di Salmerón, le Cortes rifiutarono più volte di concedere l'indipendenza a Cuba. Dopo la pace dello Zanjón, nel 1878, la legge spagnola avrebbe riconosciuto l'autonomia delle Antille senza tuttavia garantire il rispetto delle libertà fondamentali.

## 6. Lo Stato Spagnolo e la patria cubana

Il contatto in chiaroscuro con la realtà spagnola della seconda metà dell'Ottocento fu, per Martí, l'occasione per sperimentare direttamente i canoni europei del principio di nazionalità: la tradizione, l'educazione, la lingua e l'integrità territoriale<sup>103</sup>. Gli anni sereni degli studi a Madrid e a Saragozza lo convinsero della necessità di ricominciare il dialogo con gli spagnoli, sulla scia di Bolívar<sup>104</sup>. Questo processo culturale lo portò ad accogliere i modelli

---

<sup>99</sup> Emilio Castelar, citato *ibidem*.

<sup>100</sup> Rafael de Labra, a proposito della guerra dei dieci anni, scriveva: «uno dei mezzi migliori per porre fine all'insurrezione cubana è la prospettiva offerta ai negri che, nel seno della società contro cui combattono, possono godere di una libertà di molto superiore a quella che possono ottenere dalla ribellione». R. de Labra, *La abolición y la sociedad abolicionista española en 1873*, Madrid, 1874, pp. 27-28.

<sup>101</sup> K. Krause, *op. cit.*, parte II, par. 78.

<sup>102</sup> T. de Lecea, *op. cit.*, p. 11.

<sup>103</sup> Cfr. F. Chabod, *L'idea di nazione*, Laterza, Bari, 1995, pp. 62-63.

<sup>104</sup> Fu proprio Simón Bolívar che, fin dal 1819, riconobbe la necessità di dover fare i conti con il passato come qualcosa di ancora attivo nella realtà presente, tanto da considerare le tradizioni,

nazionali europei e a farli propri nella fase di elaborazione delle problematiche dell'identità cubana<sup>105</sup>.

Nel 1873, durante la sua prigionia nelle carceri spagnole, scriveva: «Patria è qualcosa di più che oppressione, qualcosa di più che un pezzo di terreno senza libertà e senza vita, qualcosa di più che un diritto di possesso con la forza. Patria è comunità di interessi, unità di tradizioni e di fini, fusione dolcissima e consolatrice di amore e speranze»<sup>106</sup>. La rievocazione di aspetti europei tipici del periodo delle rivoluzioni liberali e dell'affermazione di principi di nazionalità era evidente. L'aspetto volontaristico che in Europa aveva caratterizzato i processi di identificazione nazionale, da Rousseau ai giacobini, fino alle lotte condotte dai patrioti italiani<sup>107</sup>, era presente anche negli scritti di Martí, a conferma della permeabilità della sua coscienza americana nei confronti della cultura europea. Se quel percorso aveva avuto successo in Europa, sarebbe stato funzionale anche alle realtà latinoamericane<sup>108</sup>.

Proprio gli aspetti tipici della coscienza nazionale degli europei, ammirati e condivisi da Martí, diventarono, in quegli anni, il motivo della rivendicazione di indipendenza per la sua terra: tranne la lingua infatti nulla poteva far pensare che Cuba e la Spagna potessero essere considerate una sola nazione: «I cubani – scriveva – non vivono come i peninsulari, la loro storia non è quella dei peninsulari (...). Si sviluppano grazie a commerci differenti, hanno relazioni con paesi diversi e si riconoscono in usanze differenti. Non ci sono aspirazioni comuni, né fini identici, né li uniscono cari ricordi (...). Lo spirito cubano (...) lotta vigorosamente contro la dominazione spagnola»<sup>109</sup>.

Anche i principi fondanti della nuova repubblica spagnola costituivano, per Martí, la speranza e contemporaneamente la delusione dolorosa di una promessa non mantenuta di libertà. «La repubblica – scriveva – nega il diritto di

---

opportunamente modificate, la base dei progetti di sviluppo futuri. Cfr. J. L. Gómez Martínez, *op. cit.*, p. 408. Il ruolo pacificatore di Bolívar nel rapporto tra le colonie ormai indipendenti dell'America del Sud e la Spagna viene sottolineato anche da Leopoldo Zea, il quale nota come nei progetti bolivariani le reciproche relazioni tra i popoli iberici avessero come filo conduttore la creazione di una comunità e non di una società anonima di interessi. Cfr. L. Zea, *El pensamiento*, cit. *El pensamiento bolivariano*.

<sup>105</sup> Leopoldo Zea, a proposito dei modelli occidentali e dei loro rapporti coi paesi non occidentali (Africa, Asia e America Latina), scriveva: «i popoli dell'America di ceppo iberico reagirono all'impatto con l'occidente con armi occidentali. Una di queste era stato il nazionalismo (...). Il nazionalismo è stato lo strumento più efficace di incorporazione del mondo non occidentale al mondo occidentale». Cfr. L. Zea, *América*, cit., pp. 37-53, 85, 87.

<sup>106</sup> J. Martí, *O. E.*, T. I, p. 57.

<sup>107</sup> Cfr. *Ivi*, p. 70. Sulle similitudini tra l'azione rivoluzionaria di Martí e quella di Mazzini si veda: E. Santovenia, *Dos creadores; Martí y Mazzini*, Trópico ed., La Habana, 1936. Apertamente in contrasto con la definizione di Martí come una sorta di Mazzini cubano è invece Roberto Massari, il quale a questo proposito scrive: «se Martí avesse avuto solo caratteristiche culturali e psicologiche di un patriota nazionale si sarebbe limitato a lottare per la liberazione di Cuba e per il suo consolidamento economico nell'arco antillano, eventualmente a spese delle repubbliche vicine. Ma egli elabora invece, nella propria mente e negli scritti, un disegno antimperialistico del blocco dell'espansione nordamericana verso il Sud del continente». R. Massari, «Il pensiero politico di José Martí», in Id. (a cura di), *Storia di Cuba, società e politica, dalle origini alla rivoluzione*, Edizioni Associate, Roma, 1968, pp. 59-60.

<sup>108</sup> Ne *La República española ante de la revolución cubana* Martí scriveva: «viva Cuba spagnola, se lo desidera, altrimenti viva Cuba libera!», J. Martí, *O. E.*, T. I, p. 56; a conferma dell'essenzialità che l'aspetto volontaristico occupava nel suo pensiero a proposito del processo di liberazione nazionale di Cuba.

<sup>109</sup> *Ivi*, p. 57.



conquista, diritto di conquista fatto valere su Cuba dalla Spagna. La repubblica condanna quelli che la opprimono, diritto di oppressione e di sfruttamento e di persecuzione accanita che la Spagna ha perpetuato su Cuba (...). La repubblica si solleva sulle spalle del suffragio universale, della volontà unanime del popolo e Cuba si solleva allo stesso modo»<sup>110</sup>.

Per il giovane cubano, la libera espressione della volontà popolare, sarebbe dovuta essere l'aspetto caratterizzante della nuova repubblica spagnola: «Sul suffragio libero, sul suffragio cosciente e istruito - scriveva - sullo spirito che anima il corpo sacro dei diritti (...) si costituisce oggi la nuova repubblica spagnola»<sup>111</sup>. Ma il progetto della nuova Spagna tradì le sue aspettative: «Saluto la repubblica che oggi trionfa - scriveva a tal proposito - come la maledirò domani quando una repubblica ne soffocherà un'altra, quando un popolo libero comprimerà la libertà di un altro, quando una nazione che si dichiara libera soggiogherà e sottometterà un'altra nazione che vuol provare ad esserlo. Se la libertà dalla tirannia è tremenda, la tirannia delle libertà ripugna, strema, spaventa»<sup>112</sup>.

Un altro elemento cardine del nazionalismo europeo, l'integrità territoriale, nelle relazioni tra Cuba e la metropoli non poteva esser fatto valere. Invocata nella sala del Parlamento della repubblica spagnola come anello di congiunzione con il vecchio e glorioso Impero e come sigillo sul valore della nuova repubblica, l'integrità territoriale, nella questione di Cuba, non poteva essere - secondo Martí - validamente sostenuta, perché «l'Oceano Atlantico distrugge questo ridicolo argomento»<sup>113</sup>.

Per Martí una nazione non era, infatti, una comunità di individui creata casualmente, ma una «strettissima comunione di spiriti, creata attraverso radici profonde, relazioni tra individui, odori penetranti di dolori comuni, gustosissimo vino delle glorie patrie, anima nazionale che si diffonde nell'aria e, con essa, respira e va a riposare nelle viscere attraverso i sottili e formidabili fili della storia, uniti comr l'epidermide alla carne»<sup>114</sup>.

Proprio per via di queste definizioni Paul Estradé afferma che «in Martí si può facilmente notare come si parli molto più di patria che di nazione»<sup>115</sup>. La nazione di Martí non era, infatti, solo sentimento ma anche e soprattutto volontà. Cessava di essere proiettata nel passato per proiettarsi nell'avvenire, non era più, semplicemente un "ricordo storico", ma un progetto per il futuro e, attraverso l'espressione della volontà popolare, passava da un piano puramente culturale a uno politico. In Martí la patria esisteva ancor prima della realizzazione dell'indipendenza e della costituzione dello Stato nazionale<sup>116</sup>.

La "Nazione" diventava così la "Patria", e la patria diventava una nuova divinità nel mondo moderno: «Il culto è una necessità per i popoli - scriveva in

---

<sup>110</sup> *Ivi*, p. 55.

<sup>111</sup> *Ivi*, p. 53.

<sup>112</sup> *Ibidem*.

<sup>113</sup> «Integrità nazionale! E le volte della sala del popolo risuonano unanimi: integrità! Integrità!», J. Martí, *O. E.*, T. I, p. 29; *Ivi*, p. 57.

<sup>114</sup> J. Martí, *O. C.*, T. 13, p. 157.

<sup>115</sup> P. Estradé, *José Martí, los fundamentos de la democracia en Latinoamérica*, Aranjuez, 2000, p. 364.

<sup>116</sup> Nel 1892 Martí sull'argomento avrebbe scritto: «La dimostrazione dei nostri costumi e delle nostre caratteristiche è innanzi tutto un dovere politico di estrema importanza, un dovere di conservazione nazionale» J. Martí, *O. C.*, T. I, p. 447. A Cuba esistevano, dunque, elementi di forte identità nazionale aldilà della presenza di uno Stato nazionale.

occasione della festa nazionale messicana del cinque di maggio – l'amore non è altro che la necessità di credere: c'è una forza segreta che anela sempre a qualcosa da rispettare e in cui credere. Estinto, per fortuna, il culto irrazionale, comincia ora il culto della ragione. Non si crede più nelle immagini della religione, il popolo ora crede nelle immagini della Patria. Da culto a culto (...). Le feste nazionali sono necessarie e utili. I popoli hanno la necessità di amare qualcosa di grande, di porre in un oggetto reale la loro forza, le loro credenze, il loro amore. Niente si distrugge senza che qualcosa d'altro si crei. Estinto il culto del mistico si favorisca, si animi, si proietti il culto della dignità e dei doveri. Si esalti il popolo: la sua esaltazione è una prova di grandezza»<sup>117</sup>.

Il modello organico previsto dall'originario progetto krausista, sembrava corrispondere pienamente alle aspettative di Martí, per il quale il fine e il destino comune di un'organizzazione sociale non potevano manifestarsi attraverso una concezione contrattualista che, secondo il giovane cubano, disegnava una società priva di valori condivisi<sup>118</sup>.

Per i krausisti, l'individuo rappresentava il fulcro della teoria dell'organizzazione sociale. L'unione intersoggettiva in comunità di diversa natura (famiglia, municipio, regione), rappresentava la struttura della nazione. Nell'organizzazione sociale krausista, i membri, individualmente e, ciascuno con i propri fini, si univano spontaneamente per raggiungere un fine superiore che, abbracciando il destino dei singoli individui, lo comprendeva nel destino nazionale.

Sull'istruzione, sull'educazione e sul diritto si fondavano le basi per la nuova società nazionale.

Lo Stato era, per i krausisti, il garante della realizzazione dei fini ma non il creatore della morale e del diritto, funzione che invece spettava alla nazione, intesa come popolo o comunità di individui. Lo Stato aveva un ruolo, dunque, fondamentalmente secondario rispetto a quello della nazione, per i krausisti spagnoli lo Stato era, infatti, solo «un "modo" che la società sceglie per rappresentare se stessa»<sup>119</sup>.

L'idea che Martí aveva dello Stato e delle istituzioni non differiva molto da quella dei krausisti: «Il governo – scriveva – è la direzione delle forze della nazione in modo che gli individui possano compiere degnamente i propri fini e utilizzino, con i maggiori vantaggi possibili, tutti gli elementi di prosperità del paese»<sup>120</sup>.

Le sue idee sullo Stato e sulla nazione, formatesi, almeno fino alla metà degli anni '70, sul sistema Krausista, rappresentavano, in un certo senso, il modo con cui il giovane cubano tentò di superare la rigidità della dottrina dello Stato etico hegeliano che risultava essere, ai suoi occhi, poco funzionale alla liberazione nazionale cubana perché avrebbe affidato allo Stato spagnolo le sorti della nazione cubana. Per formare una comunità di interessi e di speranze, come lo stesso Martí scriveva, era necessario partire da una base giusta fondata sull'educazione e sul diritto. Non sarebbe stata necessaria alcuna imposizione perché la società avrebbe dato luogo spontaneamente e organicamente alla trasformazione desiderata attraverso un piano progettato e messo in atto da

---

<sup>117</sup> J. Martí, *O. C.*, T. 6, p. 195.

<sup>118</sup> P. Estradé, *op. cit.*, pp. 360 e ss.

<sup>119</sup> A. Oviedo García, *op. cit.*, pp. 32-34

<sup>120</sup> J. Martí, *O. C.*, T. 8, p. 369.

tutti i cittadini. Questa nuova condizione avrebbe lentamente e definitivamente mutato l'attitudine coloniale dei cubani: «La nazione che pretenderà di essere fondata frettolosamente su basi nuove – scriveva – si sentirà appagata dalla politica del dondolo, oppure, muovendosi progressivamente, si porrà in condizione di reggersi aperta, generosa e costante»<sup>121</sup>.

Le idee espresse da Krause nei suoi scritti sulla questione delle relazioni tra Stati non sembravano affatto pericolose agli occhi di Martí. Anche se il filosofo tedesco, da principio, era incline ad accettare i presupposti hegeliani quando affermava che una nazione rappresentava una identità peculiare in opposizione alle altre, la sua dialettica lo conduceva però alla creazione di un organismo nel quale tutte le nazioni si univano giuridicamente secondo la propria volontà per costituire un ente dotato di una personalità superiore, attraverso il quale si sarebbero realizzati sia i fini comuni sia le aspettative di ciascuno di essi considerati singolarmente all'interno di una federazione di Stati per compiere il fine più elevato, cioè quello dell'umanità<sup>122</sup>. Come si può osservare le suggestioni kantiane prendevano il posto, nelle conclusioni, delle influenze di Hegel<sup>123</sup>. Per questo motivo il progetto dell'*Ideal* non sembrava essere rappresentativo del dominio di uno Stato sugli altri, ma era il simbolo del perfetto funzionamento di una federazione di Stati che non prevedeva il sacrificio delle singole peculiarità e della volontà di autodeterminazione.

Martí stesso, a conferma della totale fiducia nel disegno di Krause, a proposito del ruolo delle istituzioni nell'ambito delle relazioni internazionali, scriveva: «Il governo di un popolo è l'arte di andare a ricercare le sue realtà anche se rappresentano lotte o preoccupazioni, per riportare il popolo per la via più breve possibile, alla condizione unica della pace che è quella in cui non esiste un diritto inferiore ad un altro»<sup>124</sup>.

L'esistenza della colonia cubana, però, minava alla radice il discorso di Krause e lo scritto *La República española ante de la revolución cubana*, come abbiamo visto, ne sottolineava la contraddizione.

Gli elementi tipici del romanticismo europeo presenti nell'opera di Martí stanno a dimostrare l'esempio umano di un dirigente cui l'impegno politico non ha impedito di assumere tutti i caratteri della sua epoca<sup>125</sup>. Questi aspetti, Martí dimostrava di averli pienamente interiorizzati fin dagli anni dell'impegno giovanile a La Avana, quando – nel breve poemetto in versi *Abdala* – scriveva: «l'amore per la patria non è l'attaccamento ridicolo alla terra che calpestanto i nostri piedi, è l'odio invincibile verso chi la opprime, è il rancore eterno verso chi la attacca»<sup>126</sup>.

---

<sup>121</sup> *Ivi*, pp. 369-370.

<sup>122</sup> K. Krause, *op. cit.*, pp. 378-379.

<sup>123</sup> I. Kant, *Per la pace perpetua*, (1795), in N. Bobbio – L. Firpo – V. Mathieu (a cura di), *Scritti politici di Immanuel Kant*, Classici UTET, Torino, 1965, pp. 283-317.

<sup>124</sup> J. Martí, *O. C.*, T. 7, p. 171.

<sup>125</sup> Cfr. R. Massari, *op. cit.*, p. 21.

<sup>126</sup> J. Martí, *O. E.*, T. I, pp. 14-25. Il poemetto, scritto espressamente per la patria (questo era il sottotitolo), si sviluppava in otto scene, le più significative erano quelle in cui si riproducevano i dialoghi tra la madre Espirita e il figlio Abdala: la prima timorosa per l'eventuale morte del figlio in battaglia, il secondo desideroso di immolarsi per la patria. A questo proposito Pérez e Ortiz sottolineano come gran parte delle sequenze descritte nel poemetto fossero in realtà riproduzioni della vita dello stesso Martí e degli scontri con i propri familiari, dovuti alla scelta effettuata da Martí di dare il proprio contributo, nonostante la giovane età, nella guerra dei dieci

Il concetto romantico dell'odio e dell'amore e la lotta tra i due opposti sentimenti, assumevano, così, connotati storico-morali. Nel poema *Abdala* il finale è inevitabile, la guerra contro la Spagna "madre filicida" che aveva lasciato tuttavia nei cubani «radici più profonde che in qualsiasi altro paese ispanoamericano, per cui la lotta di Cuba altro non era che una lotta di conquista della famiglia»<sup>127</sup>. Nel caso di Martí questo era vero sia dal punto di vista dei legami familiari (era infatti figlio di un ufficiale dell'esercito spagnolo), sia a livello di tradizioni visto che non negò mai di conservare «un affetto ardente per le mie due patrie, ma non l'odio e l'ingiustizia che le hanno rovinate»<sup>128</sup>.

Proprio su questa dicotomia di sentimenti, pone l'accento Vitier, il quale ha configurato questa prima parte del pensiero martiano su due piani differenti ma correlati «la patria e la colonia (...). *Abdala* è la prefigurazione del conflitto fondamentale di Martí, lanciato sull'altare della patria, *El Presidio político* è la testimonianza e la denuncia che irrompono nella coscienza diretta e abissale della colonia»<sup>129</sup>. In questa fase dello sviluppo della sua coscienza politica il legame con la Spagna era quindi molto forte, tanto che il periodo della colonizzazione veniva, ancora, considerato da Martí il punto di inizio della storia civile e politica della sua Cuba. Nei suoi primi scritti infatti non vi era alcun accenno all'esistenza nelle colonie di una storia, di tradizioni e di culture diverse da quella spagnola e, anzi, sembra che il riferimento diretto ed esclusivo alla storia spagnola delle colonie gli potesse far trovare il filo conduttore tra la Spagna e l'indipendenza cubana<sup>130</sup>.

In base a questa lettura la lotta dei cubani poteva essere paragonata nella visione di Martí alle rivolte dei comuneros nella battaglia di Villar del 1521<sup>131</sup>, a proposito della battaglia, Martí affermava: «la Spagna difese la libertà con ardore, prima che nelle altre guerre d'Europa»<sup>132</sup>. Le rivolte del Settecento e dei primi dell'Ottocento in Sudamerica venivano perciò considerate da Martí, la logica conseguenza di quell'episodio e il prologo delle guerre di indipendenza dirette dai *criollos*<sup>133</sup>.

C'era dunque una storia di ribellione in Spagna che «si trasmetteva, si rivitalizzava e si fondeva con l'America»<sup>134</sup>. Una linearità di sviluppo nazionale che era frutto dello svolgimento lineare e progressivo della storia e rappresentazione di un dato grado particolare dello sviluppo dello spirito.

---

anni; cfr. V. Pérez – G. Ortiz, *José Martí, Visión de un hombre universal*, Pablo de la Torriente ed., Barcelona, 1990, pp. 36-37.

<sup>127</sup> C. Vitier, *España*, cit., p. 98.

<sup>128</sup> J. Martí, citato., *Ibidem*.

<sup>129</sup> C. Vitier – R. Fernández Retamar (a cura di), *Martí*, ERREMME, Roma, 1995, p. 49.

<sup>130</sup> Cfr. *ivi*, p. 101.

<sup>131</sup> «Gli spagnoli accolsero bene Carlo V, ma subito apparve chiaro che non avrebbero tollerato di venire trattati da sudditi fiamminghi: esigevano che le cariche in Spagna fossero assegnate a spagnoli e che la politica fiscale del sovrano non aumentasse il prelievo di denaro in Spagna da spendere in Germania. Le comunidades di Castiglia e di Valencia si ribellarono (...). (...) Il movimento fu sconfitto perché la nobiltà rimase fedele al re e per la mancanza di capacità tattica sul piano militare da parte dei rivoltosi (...). I comuneros furono sconfitti da Carlo V, come Carlo I di Spagna, il 23 aprile 1521», J. Vicens Vives, *op. cit.*, p. 113, 115.

<sup>132</sup> J. Martí, citato in C. Vitier, *España*, cit., p. 100.

<sup>133</sup> *Ivi*, p. 107.

<sup>134</sup> *Ibidem*.

La lettura di Vitier, però, ignora un elemento essenziale dell'americanismo di Martí: la necessità di creare una identità nuova per la sua gente, l'unica via da seguire era quella della ricerca di una filosofia di rottura con il passato e con il mondo coloniale. Lo svolgimento lineare e progressivo della storia di tipo hegeliano non poteva essere funzionale alle scelte di Martí al quale serviva, invece, una strada nuova da percorrere per la costruzione di uomini nuovi. I riferimenti alla storia della Spagna: i *comuneros*, l'impero di Carlo V, contenuti ne *La República española ante de la revolución cubana*, il calore e l'affetto con cui il giovane parla del popolo spagnolo, tanto da definire "fratricida" la guerra in corso a Cuba, avevano un valore emozionale e non rappresentavano un percorso filosofico di liberazione<sup>135</sup>. Tra Cuba e la Spagna, in realtà, per Martí, non esisteva una comunanza reale di costumi, di aspirazioni, di scopi e di ricordi: «L'abisso che già divideva la Spagna da Cuba – scriveva - si è riempito, per volontà della Spagna di cadaveri»<sup>136</sup>. La gratitudine per una terra che gli aveva indirettamente dato i natali, per un governo che, da esule, gli aveva consentito di portare a termine i suoi studi, la naturale vicinanza nei confronti di una terra che era parte della storia di Cuba, non devono trarre in inganno. La matrice liberale di Martí è posta al servizio del tentativo di conciliazione di due identità molto diverse: quella spagnola e quella latinoamericana e non poteva che prescindere dal concetto di storia universale come manifestazione dello spirito universale e da qualsiasi omologazione con il pensiero hegeliano<sup>137</sup>. La critica all'universalizzazione della storia di Hegel, che arrivava da alcuni suoi allievi, tra cui Krause, aveva già fornito a Martí, nonostante le delusioni subite dal governo spagnolo, la strada per la redenzione dell'America di ceppo iberico. La collocazione dell'uomo al centro della realtà e l'esaltazione della sua esclusiva qualità, la ragione, erano gli strumenti di cui servirsi per raggiungere la completa libertà a cui quella parte di continente ancora aspirava.

La frattura tra la madrepatria e la colonia era, almeno dal punto di vista sentimentale, ricomposta, ma l'aspettativa disattesa di una libertà che giungesse a Cuba attraverso le spinte provenienti dall'Europa diede a Martí la definitiva consapevolezza che le esperienze del vecchio continente non potevano avere effettiva relazione con la storia della sua isola. Bisognava quindi cercare altre soluzioni che gli consentissero di occuparsi della questione cubana, di quella «porzione di umanità che abbiamo più vicino e in cui ci è toccato nascere»<sup>138</sup>.

Ormai la fase di "innamoramento" di Martí per il liberalismo di Krause si stava esaurendo, e il giovane cubano, libero dalle carceri spagnole, si stava liberando anche dalla retorica del tedesco.

Tracce importanti dell'esperienza spagnola sarebbero rimaste nel suo pensiero come capisaldi indelebili: l'esercizio della ragione, l'importanza dell'educazione e della conoscenza, la centralità della dignità umana, tutto

<sup>135</sup> «Se odiassi qualcuno in Spagna odierei me stesso», J. Martí, O. C., T. 1, p. 6.

<sup>136</sup> J. Martí, O. E., T. I, p. 10.

<sup>137</sup> Sul concetto di storia come progresso unico e rettilineo del mondo cfr. G. F. Hegel, *Lezioni sulla filosofia della storia*, a cura di G. Calogero – C. Fatta, La Nuova Italia, Firenze, 1941, pp. 207-209; sull'omologazione di Martí con il pensiero hegeliano cfr. C. Vitier, *España*, cit., p. 101, sulla storia universale come manifestazione dello spirito universale cfr. G. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, (1821), a cura di V. Cicero, Bompiani, Milano, 2006.

<sup>138</sup> J. Martí, citato in F. Varona Domínguez, *Valores*, cit., p. 3.

questo lo apprese in Spagna, si trattava di trasportare questi valori in quella parte di America che ne aveva più bisogno: l'America latina.

La soluzione della questione cubana era perciò legata all'etica del servizio e al culto di una delle grandi ricchezze umane, la ragione, come egli stesso ebbe modo di ribadire: «la soluzione della questione cubana ha il suo senso per coloro che ispirano il loro patriottismo alle necessità della loro patria e alla ragione»<sup>139</sup>.

Il periodo spagnolo gli permise di approfondire il concetto dell'etica del servizio di cui aveva fatto esperienza negli anni dell'adolescenza a Cuba, per questo il contatto con la filosofia krausista fu essenziale. Martí rimase particolarmente colpito dal ruolo che la razionalità rivestiva in quella realtà e, più in generale, in certi ambienti culturali che prepararono il contesto dell'esperienza della repubblica in Spagna. Proprio questa esperienza, nonostante la delusione per l'azione dei krausisti, lo convinse che la ricerca dell'indipendenza per il suo paese dovesse passare attraverso la ricerca di altri presupposti, più squisitamente "americani" che gli consentissero di recuperare aspetti identitari propri del nuovo continente e, quindi, anche della sua isola.

L'instabilità di un'epoca di transizione lo avrebbe portato lontano dalle formalità filosofiche delle aule universitarie.

Intanto, a Cuba, il massacro della guerra continuava. A novembre del 1874, dopo essersi laureato, Martí cominciò a sbrigare le pratiche per raggiungere in Messico la famiglia che, allo stremo delle forze aveva abbandonato La Avana. Nel febbraio del 1875 Martí era di nuovo in America. Per due anni restò in Messico, a Veracruz seguì da lontano il triste epilogo della guerra dei dieci anni.

Durante la guerra la considerazione degli ufficiali *criollos* sulla società cubana cambiò radicalmente.

La guerra non si concluse con la sollevazione degli schiavi e, perciò, non si materializzò il vecchio timore dei *criollos* e dei bianchi circa la fine della "razza cubana". Al contrario, molta gente di colore, schiavi o liberi, partecipò alla guerra a fianco dell'esercito dei rivoluzionari e, durante la conduzione della lotta, sembrarono sparire le animosità tradizionali<sup>140</sup>. Proprio a questo periodo si può far risalire la trasformazione della struttura sociale cubana.

Per la nuova generazione di abitanti della colonia, nati nell'isola, divenne inevitabile concepire il lento svilupparsi di una società multi-etnica che prevedeva il confronto con gli afrocubani e gli indigeni<sup>141</sup>. La guerra stava

---

<sup>139</sup> J. Martí, O. C., T. 1, p. 99-108; sull'argomento Martí scrisse anche: «le sorti e il progresso della patria non devono poggiarsi su ideali poco sublimi e del tutto frivoli», José Martí citato in H. Piñera Llera, *op. cit.*, p. 451.

<sup>140</sup> Sul problema della relazione tra i *criollos* cubani e gli afro-cubani si veda: A. Helg, *Our right full share, the afrocuban struggle for equality, 1886-1912*, Chapel Hill & London 1995; A. Ferrer, "Social aspects of cuban nationalism: race, slavery and guerra Chiquita, 1879-1900", in *Cuban Studies*, n. 21 (1991), pp. 37-56; Id., "Rustic man, civilized nation: Race, culture and contention in the eve of Cuba independence", in *Hispanic American Historical Review*, vol. 78, n. 4 (1998), pp. 663-686; C. Naranjo Orovio – A. García González, *Racismo e inmigración en Cuba en el siglo XIX*, Aranjuez, 1996; A. García González, "Ciencia, racismo y sociedad en Cuba: 1878-1895", in C. Parceró Torre y María (a cura di), *Cuba y Puerto Rico entorno al 98*, Valladolid, 1998.

<sup>141</sup> Sul nazionalismo criollo si veda: M. L. García – C. Naranjo Orovio, "Intelectualidad criolla y nación en Cuba, 1878-1898", in *Studia Histórica, Historia contemporánea*, 1997, pp. 185-195; Id., "Hispanización y defensa de la integridad nacional en Cuba, 1868-1878", in *Tiempos de América*, n. 2 (1998), pp. 71-92.

cambiando le relazioni sociali nell'isola. La composizione sociale a Cuba era stata, nel corso dell'Ottocento, profondamente influenzata dall'altalenante andamento economico e dalle scelte strutturali di latifondisti in conseguenza della crisi del modello schiavista.

Nel periodo tra il 1857 e il 1863, alcuni piantatori, benché fossero naturalmente ancora prigionieri dei loro pregiudizi, continuavano a sperare che la manodopera salariata potesse finalmente sostituire la schiavitù. In realtà, la maggior parte dei latifondisti dello zucchero e del tabacco erano scontenti della resa degli schiavi e, ormai da tempo, andavano alla ricerca di fonti alternative di manodopera, come quella costituita dai vagabondi o dagli stranieri irlandesi o cinesi<sup>142</sup>. Una chiara dimostrazione della crisi che attraversava il regime schiavista a Cuba intorno alla metà del secolo, si percepisce proprio negli sforzi fatti per tentare di sostituire, anche se solo in parte, il lavoro degli schiavi con altre forme più o meno dissimulate di servitù.

Fin dal 1817, il governo spagnolo aveva tentato di sopperire alla cronica scarsità di braccia per il lavoro con la concessione della *Real Cédula* che prevedeva la cessione di terre a coloni bianchi disposti ad andare nell'isola a incentivare la produzione agricola e garantiva loro gli stessi diritti di cui godevano gli spagnoli oltre alla naturalizzazione dopo cinque anni<sup>143</sup>. L'esperimento ebbe scarso successo tra le altre ragioni perché le autorità, con il passar del tempo, si adattarono, sempre più apertamente, al cosiddetto equilibrio razziale che consisteva nel mantenere nell'isola una certa proporzione tra bianchi, neri, liberi e schiavi. Questa particolare scelta politica facilitava la Spagna nella gestione del suo dominio politico<sup>144</sup>. I progetti legati all'immigrazione assunsero quindi un carattere distinto: non ci si dedicò più alla ricerca di coloni, ma di braccianti. Costoro arrivavano a Cuba non come uomini liberi ma come servi. Fu proprio nella seconda metà del secolo che si ricorse all'espedito della servitù contrattuale con la quale si cercò di sostituire la manodopera africana, sempre più cara, con quella proveniente dall'Europa e dall'Asia.

L'impiego di manodopera libera o contrattualizzata comunque non rimpiazzò il sistema degli schiavi di colore almeno fino alla guerra dei dieci anni. Questa situazione, strettamente legata all'adozione del modello schiavista e ai commerci di uomini, principalmente con l'Africa, rimase immutata fin quando non iniziò una forte trasformazione tecnico-organizzativa che liberalizzò la coltivazione della canna da zucchero lasciandola in mano ad agricoltori più o meno indipendenti<sup>145</sup>.

In realtà gli effetti sulla società cubana di una politica che mirava a modernizzare il sistema economico e a trasformare le dinamiche dei rapporti sociali furono molto profondi, anche se non ebbero significativi effetti nell'ambito

---

<sup>142</sup> Thomas fa cenno ad un esperimento effettuato nella piantagione di zucchero di Pedro Morillas, che aveva come fine di mostrare che la manodopera bianca era in grado di lavorare duramente come quella negra. H. Thomas, *op. cit.*, p. 135.

<sup>143</sup> Jorge Castellanos-Isabel Castellanos, *Cultura afro cubana*, Universal, Miami, 1990, pp. 31-32; sull'argomento cfr: F. Erénchun, *Annales de la isla de Cuba, diccionario administrativo, económico, estadístico y legislativo*, La Habana, 1858, pp. 1051-1055.

<sup>144</sup> *Ibidem*; sull'argomento cfr. R. Scott, *La emancipación de los esclavos en Cuba, la transición al trabajo libre 1860-1899*, Centro de estudios martianos, La Habana, 2001.

<sup>145</sup> A. Santamaría García – C. Naranjo Orovio, "Historia social de Cuba, 1868-1914, Aportaciones recientes y prospectiva", in *Nuevo mundo, mundos nuevos*, n. 2 (2002), p. 3.

del mercato interno e internazionale dell'isola: verso il 1860 il numero dei negri e dei mulatti, in proporzione ai bianchi, era diminuito così che per la prima volta in sessant'anni si trovarono a Cuba più persone bianche che negre e mulatte messe insieme<sup>146</sup>. Questa condizione era dovuta ad un complesso fenomeno socioculturale legato alla scelta di favorire una immigrazione funzionale ad una politica che poneva al centro delle sue preoccupazioni quella della razza. Il processo di modernizzazione produttiva che l'isola aveva vissuto nella prima metà del secolo, aveva favorito la nascita di una classe di *hacendados* creoli<sup>147</sup>, desiderosi di prendere le distanze dal potere coloniale spagnolo, ma legati a questo per la fornitura di schiavi e l'ottenimento di crediti. Consapevoli che una eventuale futura lotta per l'indipendenza sarebbe stata accompagnata dall'emancipazione, l'élite cubana sosteneva progetti riformisti, che prevedevano la cessazione della tratta e consideravano l'estinzione graduale della schiavitù. In ogni caso nessuno di questi programmi prevedeva l'inclusione dei neri nella futura nazione<sup>148</sup>.

Le tensioni legate alla politica demografica nell'isola raggiunsero il loro culmine tra il 1856 e il 1862, quando furono pubblicati due lavori: *Proyecto o Representación respetuosa sobre inmigración Africana*, ad opera di José de Frías e *Examen del proyecto de colonización africana en la isla de Cuba* di Juan Poey.

Entrambi gli scritti si basavano sulla apparente adesione alla politica abolizionista in quanto gli autori si dichiaravano favorevoli alla sostituzione del lavoro degli schiavi con quello "libero", ma, in realtà, sottintendevano un mal celato razzismo di fondo. Sia Frías che Poey credevano nella superiorità assoluta della razza bianca tanto per le capacità intellettive quanto per le potenzialità di sviluppo culturale ed etico, donde la conclusione che solo la razza bianca avrebbe potuto essere utile a Cuba nel processo di "vero" incivilimento.

Nel 1865, poi, fu convocata la *Junta de información*. L'Organo avrebbe dovuto pronunciarsi, grazie al supporto di quaranta deputati, venti eletti a Cuba e Portorico, gli altri provenienti dalla Spagna, sui poteri di controllo della madrepatria sulle Antille. Non era per la verità un gran passo in avanti, ma, comunque, gli spagnoli riconoscevano ufficialmente la necessità di produrre un cambio nella struttura politica di quelle colonie<sup>149</sup>. La politica demografica occupò, ancora una volta, un ruolo di primo piano. I Deputati ribadirono che

---

<sup>146</sup> H. Thomas, *op. cit.*, p. 139. A proposito della presenza di popolazione di colore a Cuba nel XIX secolo, c'è da sottolineare come negli anni quaranta si fosse invertito il rapporto tra la popolazione Bianca, in precedenza maggioritaria, e la popolazione di origine Africana, libera e schiava. Nel 1846 i bianchi costituivano infatti il 47,4% della popolazione, mentre il 52,6% era composta da persone di colore libere e da schiavi, cfr: R. Scott, *op. cit.*, p. 28.

<sup>147</sup> Il termine creolo si riferisce alle persone di origine spagnola nate nelle Americhe. In epoca coloniale questa differenza fu molto importante socialmente e politicamente, in quanto gli incarichi dell'amministrazione coloniale erano riservati alle persone provenienti dalla madrepatria.

<sup>148</sup> Cfr C. Naranjo Orovio – A. García González, *Racismo e inmigración en Cuba en el siglo XIX*, Aranjuez, 1996.

<sup>149</sup> Sull'argomento cfr: M. P. Alonso Romero, *Cuba en la España liberal (1837-1898), génesis y desarrollo del régimen autonómico*, Centro de estudios políticos y constitucionales, Madrid, 2002; J. Alvarado Planas, "Las Juntas para las reformas de las leyes y administración ultramarinas en el siglo XIX", in I. Monal (a cura di), *Constitucionalismo y Codificación en las provincias de Ultramar. La supervivencia del antiguo régimen en España del XIX*, Madrid, 2001, pp. 197 e ss.



«Per nessuna ragione poteva essere messa in dubbio la maggiore propensione della razza bianca a soddisfare le primarie necessità di ordine e di tranquillità cui aspira un popolo colto e adatto al progresso»<sup>150</sup>. Alla razza bianca bisognava garantire il predominio morale a Cuba rispetto a tutti gli altri elementi “ostili”. Si sarebbe dovuto porre, quindi, un freno all’incremento della razza di colore nelle Antille e promuovere piuttosto, con tutti i mezzi legittimi, lo sviluppo e la moltiplicazione di quella bianca.

Le indicazioni della *Junta*, però, non prevedevano la necessità di *limpiar* la popolazione, di privarla di quegli elementi non omogenei dal punto di vista razziale, così come indicato solo pochi anni prima da illustri esponenti della politica antillana<sup>151</sup>. Piuttosto la tendenza era quella di *unificar* i neri, i mulatti, i *criollos* e i bianchi, evitando di marcare, così, gli elementi di contrasto interrazziale: «Crediamo fermamente – riportava il documento ufficiale della *Junta* - che l’interesse dei bianchi, a Cuba, porti ad elevare lo spirito e le nobili aspirazioni della razza di colore, avvicinandola a sé, per quanto ciò sia possibile, e evitando di degradarla con odiose esclusioni»<sup>152</sup>. Questa difesa della dignità morale della gente libera di colore segnò un momento decisivo nel processo di integrazione nazionale: i leader liberali, a Cuba, cominciarono ad abbandonare il vecchio atteggiamento esclusivista e proclamavano la loro adesione ad una politica più spiccatamente interetnica, pur senza pronunciarsi a favore dell’abolizione immediata e definitiva della schiavitù.

Quello schiavista non fu l’unico modello socioeconomico che si diffuse a Cuba durante il corso del XIX secolo<sup>153</sup>. Il governo spagnolo, per esempio, favorì lo stabilimento definitivo del colono bianco oltre che attraverso i metodi prima citati, anche tramite la distribuzione di terre incolte a favore dei soldati fedeli alla corona. Questa scelta avrebbe permesso al settore dell’élite più illuminato e con idee più avanzate di formare una classe media e di *blanquear* la popolazione. Con l’inserimento nel circuito economico di quei terreni, adibiti a coltivazioni minori insieme a quelle classiche dello zucchero, del tabacco e del caffè, si tentò di far fruttare anche quelle terre che fino ad allora erano rimaste incolte. L’immigrazione e il controllo dell’isola da parte dell’esercito spagnolo, specialmente nelle zone poco popolate, la creazione di colonie militari e la concessione di terre ai soldati al fine di farli rimanere a Cuba, furono la causa del ritardo e dell’effettivo fallimento dell’indipendenza<sup>154</sup>.

---

<sup>150</sup> Información de la Junta citato in J. Castellanos – I. Castellanos, *Cultura afrocubana*, Universal, Miami, 1990, p. 132.

<sup>151</sup> Il riferimento è ad Antonio Saco, rappresentante di primo piano del riformismo cubano, cfr. J. Castellano – I. Castellano, *op. cit.*, pp. 40-52.

<sup>152</sup> Documento citato in J. Castellano – I. Castellano, *op. cit.*, p. 134.

<sup>153</sup> M. Moreno, *Cuba – España, Historia común*, Crítica, Barcelona, 1997, p. 72. L’autore ipotizza addirittura che la società cubana fosse diventata schiavista, tra il XVIII e il XIX secolo, più per necessità di manodopera che per reale convinzione, *Ivi*, pp. 79 ss., M. Paz, “Algunas reflexiones sobre el bandolerismo en Cuba”, in C. Naranjo – T. Mallo (a cura di), *Cuba, la Perla de las Antillas*, Doce calles, Aranjuez, 1994, pp. 163-166; H. Hernández González, “La emigración canaria a Cuba en la primera mitad del siglo XIX”, in *Studia historica – Historia contemporánea*, n. 15 (1997), pp. 71-83; A. García González, “Ciencias y racismo en la enseñanza de la biología en Cuba”, in *Cuba*, cit., pp. 479-496.

<sup>154</sup> I. Balboa, “Colonización y poblamiento militar versus independencia Cuba, 1868-1895”, in *Rabita*, n. 17 (1998), pp. 121-138. C. Naranjo Orovio, “Pensamiento científico y revolución en Cuba a finales del siglo XIX”, in *Progensia*, n. 34 (1998), pp. 97-110.

Il problema della schiavitù e della razza fu comunque determinante nella società cubana della seconda metà del secolo. Per risolvere la questione della mancanza di manodopera, per accelerare il processo di *blanqueación* della popolazione e spagnolizzarla, al fine di ridurre il peso dei neri e puntellare il dominio coloniale, disturbato dal movimento abolizionista, il governo di Madrid decise di favorire l'immigrazione e controllarne la composizione<sup>155</sup>. La *negritud* e il *blanqueamento* furono elementi di grande peso in questo tipo di società e ne condizionarono l'evoluzione demografica e la stessa configurazione socioculturale visto che si trattava di una nazione ideata da una ristretta élite ma rifinita dal lento incorporarsi della popolazione di colore alla vita civile e politica del paese dopo l'abolizione della schiavitù nel 1886. Questa partecipazione dei neri alla società civile, insieme all'uguaglianza dei diritti, aprì teoricamente un nuovo fronte per le relazioni sociali e diede luogo ad un gioco politico nel quale la razza ricoprì un ruolo centrale fino a determinare le azioni e la propaganda dei governanti cubani<sup>156</sup>.

### 7. Il ritorno in America

Il dramma *Patria y libertad*, scritto per celebrare la festa dell'indipendenza in Guatemala, fu una delle prime occasioni in cui Martí, appena tornato in America, affrontò l'argomento, riassumendo quelli che, secondo lui, potevano essere i limiti di una società multirazziale e proponendo alcune soluzioni. La passività era l'elemento che più temeva e che gli faceva dubitare della possibile adattabilità degli indigeni alla realtà dei bianchi. La necessità di amalgamare il paese, all'interno di un'unica ideologia, gli pareva la soluzione migliore, per la quale ricorse alla metafora del matrimonio<sup>157</sup>.

Nel dramma il principale protagonista era Martino, un "meticcio dall'anima fiera" che decideva di dare in sposa sua sorella a quello spagnolo coraggioso che sarebbe stato capace di morire in difesa dei diritti degli americani. Alla fine dell'opera sarebbe stato lo stesso Martino a contrarre matrimonio con una indigena.

Lo scritto, oltre a riprendere il tema dell'unità spirituale tra i latinoamericani e gli spagnoli, contiene anche il tema della conciliazione tra le razze: il matrimonio tra l'indigena e il meticcio segnava l'alleanza razziale con cui Martí intendeva, metaforicamente, completare il patto fondativo della nuova repubblica.

Doris Sommer segnala, a proposito dello scritto di Martí, come questi matrimoni interrazziali servissero, nel periodo post-indipendentista, in America Latina, a consolidare il ruolo delle trionfanti ideologie liberali e per cercare un consenso comune a livello nazionale. Questa speranza in un futuro che

---

<sup>155</sup> Sull'immigrazione spagnola si veda: E. Hernández Sandoica, *La política colonial española y el despertar de los nacionalismos ultramarinos*, in J. P. Fusi – A. Niño (a cura di), *Antes del desastre. Orígenes y antecedentes de la crisis del 98*, Biblioteca nueva, Madrid, 1997, pp. 115-132; S. Palazón, "La inmigración española a Cuba durante el siglo XIX", in S. Palazón – C. Saiz Pastor (a cura di), *La ilusión de un Imperio, las relaciones económicas hispanocubanas en el siglo XIX*, Murcia, Universidad de Alicante, 1998, pp. 49-75. Nel periodo compreso tra il 1840 e il 1850, l'incentivo all'immigrazione bianca era stato uno dei grandi scopi ai quali tendevano i notabili de La Habana, che avevano organizzato la Junta de Fomento, ed erano stati offerti premi a quei piantatori che avessero insediato delle famiglie di bianchi sulle loro proprietà. Cfr. H. Thomas, *op. cit.*, p. 197.

<sup>156</sup> A. Santamaría García, *op. cit.*, p. 2.

<sup>157</sup> J. Martí, O. C., T. 13, pp. 144-156.

avrebbe dovuto implicare una unione tra differenti etnie era figlia di una serie di movimenti rivoluzionari di matrice liberale, nati ai primi del XIX secolo che definivano la cittadinanza come qualcosa di inclusivo, sorvolando sui particolarismi di razza e di cultura<sup>158</sup>.

Proprio questa è l'idea di base dell'opera di Martí, infatti nel finale, il protagonista esclamava: «Patria libera (...) Coana (...) mia sposa\ L'immensa processione si alza\ segna la felice rotta del futuro\ vedo già l'avvenire che avanza velocemente\ Già vedo l'avvenire ampio e sicuro\ I discendenti saranno uomini liberi\ del tuo amore e del mio»<sup>159</sup>.

L'unione interraziale implicava, pertanto, un patto politico e la sicurezza della pace e del benessere per tutti. Prevedeva inoltre che l'indigeno non si riconoscesse come l'effettivo centro della nazione né come l'unico soggetto di diritto, ma che esso stesso diventasse parte di una patria da costruire insieme ai bianchi e ai meticci.

Poco dopo la composizione del dramma, Martí pubblicò nel 1882 un articolo per la *Opinión Nacional* di Caracas, in cui tradusse in spagnolo la conferenza tenuta da Ernest Renan nello stesso anno dal titolo: *Qu'est que c'est une nation?*. Le idee espresse dal filosofo francese non potevano che colpirlo molto favorevolmente.

Nella conferenza, infatti, Renan esprimeva un concetto di nazione molto vicino a quello di Martí: «Avere glorie comuni nel passato, una volontà comune nel presente, aver fatto grandi cose, volerne fare altre, ecco le condizioni essenziali per essere un popolo. Si ama in proporzione dei sacrifici consentiti, dei mali sofferti. Si ama la casa che si è fabbricata e si trasmette (...). La nazione, come l'individuo, è il giungere ad un fine di un lungo passato di sforzi, di sacrifici, di devozioni (...). Nel passato una eredità di gloria e rimorsi, nel futuro uno stesso programma da realizzare (...). L'esistenza di una nazione è un plebiscito quotidiano. (...) La sofferenza in comune unisce più che la gioia. In quanto a ricordi nazionali, i lutti valgono più dei trionfi, perchè impongono doveri, comandano la sforzo comune. (...) Una nazione è un'anima, un principio spirituale. Due cose che in realtà sono una cosa sola, una è nel passato, l'altra nel presente. Una è il comune possesso di una ricca eredità di ricordi, l'altra è il consenso attuale, il desiderio di vivere insieme, la volontà di continuare a far vivere l'eredità ricevuta. Il culto degli antenati è, fra tutti, il più legittimo, gli antenati ci hanno fatto ciò che siamo (...). Aver goduto, sofferto, sperato insieme: ecco ciò che vale più che le dogane comuni, e frontiere conformi alle idee strategiche; ecco ciò che si comprende nonostante la diversità di razze e di lingue»<sup>160</sup>.

Anche per Martí la commistione di storia e di libera espressione della volontà popolare rappresentava, come abbiamo visto, l'unica solida base su cui fondare una nazione<sup>161</sup>.

---

<sup>158</sup> D. Sommer, *Foundational Fictions: the National romances of Latin America*, University of California Press, Berkeley, 1991.

<sup>159</sup> J. Martí, *O. C.*, T. 13, p. 151.

<sup>160</sup> E. Renan, *Che cos'è una nazione?*, a cura di S. Lanaro – G. De Paola, Donzelli editore, Roma, 2006, pp. 7-9.

<sup>161</sup> Nel 1875, nel commentare una collezione privata di oggetti e manoscritti sulla storia messicana così scriveva: «Attraverso l'interesse continuo per le cose della patria si alimenta la vita nazionale», J. Martí, *O. C.*, T. 6, p. 233.

Il modello nazionale proposto da Renan, inoltre, si opponeva a qualsiasi esclusione, nel processo di formazione nazionale, basata sull'etnia e sulla razza come nel caso del modello tedesco.

Nel commentare la conferenza di Renan, Martí sottolineò con grande insistenza questo passaggio e scrisse: «Non è la storia umana – dice Renan – un capitolo di zoologia. L'uomo è un essere morale e razionale. La libera volontà sta in cima alle suggestioni dello spirito di razza. Una nazione è un'anima, un principio spirituale elaborati dal passato, con una vita nel presente, e tutti gli uomini insieme, con menti sane e cuori generosi possono creare la coscienza morale che costituisce una nazione»<sup>162</sup>.

La corrispondenza tra il pensiero di Martí e quello di Renan era pressochè totale, sia l'uno che l'altro concordavano sul fatto che una nazione non dovesse essere considerata un fatto immutabile nel tempo, bensì una realtà soggetta a cambiamenti storici e a quelli legati alla volontà umana<sup>163</sup>, entrambi inoltre guardavano con sospetto alle politiche di annessione ritenute contrastanti con lo spirito delle nazioni, spirito che determinava il destino delle forme nazionali in tutti i territori<sup>164</sup>.

A dispetto delle affinità, però, la traduzione spagnola di Martí alterava l'originale francese sulla questione della lingua, caratteristica secondaria nella definizione dell'identità nazionale per Renan, elemento cardine per Martí. Per il cubano, ormai in quegli anni stabilito negli Stati Uniti, la lingua rappresentava una invisibile ma definita caratteristica di una nazione, come già, ai primi dell'Ottocento fu per Fichte<sup>165</sup>. L'individuazione di una lingua nazionale era il suo tentativo di definire una forma di collettività unificante nella eterogenea formazione sociale della "sua America"<sup>166</sup>. Questa lettura che Martí dava all'opera di Renan dimostra quanto il cubano investisse nella considerazione della lingua spagnola come mezzo di riconoscimento per l'etnia pan-latina.

Il commento di Martí si concludeva con l'affermazione secondo cui le razze non determinavano le identità nazionali. Una affermazione che voleva, soprattutto, essere una critica sferzante verso la borghesia liberale latinoamericana, che intendeva costruire i nuovi popoli attraverso l'innesto di razze ritenute superiori come quella anglosassone. Per Martí, invece, la collettività nazionale delle Americhe non poteva che implicare una mescolanza di culture, storie ed esperienze che, in qualche modo, potessero porre quelle realtà in relazione con l'universo umano, tracciando, così, un percorso che lo avrebbe portato a definire il concetto di identità nazionale in stretta connessione con quelli di libertà e umanità e, per la prima volta, di razza, elemento fondamentale nella definizione di società e di politica nei suoi anni americani.

---

<sup>162</sup> Id., O. C., T. 14, pp. 449-450.

<sup>163</sup> *Ivi*, p. 450; E. Renan, *op. cit.*, p. 15.

<sup>164</sup> *Ivi*, p. 451; *Ivi*, p. 21.

<sup>165</sup> J. G. Fichte, *Discorsi alla nazione tedesca*, (1807), a cura di G. Rametta, Laterza, Roma-Bari, 2003; sull'argomento cfr. M. P. Paternò, "Dalla rivoluzione francese alla nazione tedesca, il 1806 di Johann Gottlieb Fichte", in F. M. Di Sciullo (a cura di), *Anni di svolta*, pp. 21-23.

<sup>166</sup> Sul ruolo della lingua nazionale nell'opera di Martí cfr. L. Lomas, "José Martí between nation and empire: Latin Cultural critic at the intersection of the Americas", in *The Cuban Republic and José Martí*, (a cura di M. A. Font – A. W. Quiroz), Lexington books, Lanham, Mariland, 2006, pp. 115-128. È interessante notare che nella sua conferenza, Renan faceva appello proprio alla condivisione della lingua tra America Latina e Spagna per sottolineare come, nonostante l'elemento apparentemente uniformante i due territori non costituissero una nazione. E. Renan, *op. cit.*, p. 12.

La sussidiarietà tra i concetti di nazione e razza appariva, nel pensiero di Martí, ormai del tutto evidente. L'esperienza spagnola aveva amplificato l'aspetto "ibrido" della sua tradizione ispano-americana, la Spagna infatti era meticcica prima ancora dell'impresa americana, nei primi conquistadores che raggiunsero il nuovo mondo si fondevano la cultura e la tradizione di popoli diversi: i celtiberi, i fenici, i romani, gli ebrei, i germani e i musulmani<sup>167</sup>. La storia degli spagnoli offriva a Martí un ponte attraverso il quale superare le contraddizioni della politica dei krausisti. La sensibilità meticcica acquisita in quel periodo lo traghettò verso la ricerca di una filosofia di "rottura" con il mondo coloniale, verso cioè il positivismo che avrebbe conosciuto e apprezzato negli anni americani.

La formula dei «nuovi ordini determinati da nuove influenze» con cui Spencer descriveva i popoli nuovi del nuovo mondo<sup>168</sup> non poteva che attrarre il giovane cubano. Si andava così creando lo spazio per lo sviluppo di una civiltà diversa da quella europea: l'America.

L'elemento razziale diventava, così, essenziale nella definizione dell'identità di un popolo nuovo. Nell'America del XIX secolo, infatti, il confronto tra le etnie era diventato il principale tema del dibattito politico. Il problema dell'indipendenza, della libertà e della nazionalità assumevano, grazie alla questione razziale connotati tipicamente americani. Martí lo aveva capito già in Spagna, nella vecchia Europa il suo spazio americano aveva assunto un significato non solo geografico ma anche culturale e politico<sup>169</sup>.

*Recibido el 26 de octubre de 2010, corregido del 2 al 5 de noviembre de 2010 y aceptado el 29 de noviembre de 2010.*

---

<sup>167</sup> Sull'argomento si veda: M. Picón Salas, *De la conquista a la independencia*, México, 1969, pp. 105-106.

<sup>168</sup> «Nei casi in cui conquistatori e conquistati si uniscono tra loro in matrimonio (...) le tendenze contrarie verso tipi sociali differenti, invece di coesistere in individui distinti coesistono nello stesso individuo. Il mezzosangue, ereditando da una linea di antenati le disposizioni per un certo genere di istituzioni e, dall'altra linea disposizioni per un altro genere di istituzioni, non è adatto né all'uno né all'altro. Da alcuni esempi si potrebbe concludere che una società formata da uomini intimamente affini, in cui il conquistatore eventualmente si mescola con il conquistato, è adatta al progresso». H. Spencer, *Principi di sociologia*, a cura di F. Ferrarotti, C. Ciancio, UTET, Torino, 1998, 2 vols., vol. I, p. 671.

<sup>169</sup> Sul tema dell'identità americana e la questione della razza nel pensiero di Martí si veda: I. M. Cannataro, *L'America di José Martí. Razza e identità*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010.



## SOBRE LA CRISIS DEL CONSTITUCIONALISMO EN LA II REPÚBLICA ESPAÑOLA

Jerónimo MOLINA CANO\*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

**Jerónimo Molina Cano** (2011): "Sobre la crisis del constitucionalismo español en la II República española", en *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, n.º 1 (marzo 2011), pp. 89-102. En línea: <http://www.eumed.net/rev/rehipip/01/jmc.pdf>.

**ABSTRACT:** This paper shows that one of the causes of failure of the Second Spanish Republic was the poor technical constitutional. The Spanish constitutionalism of the 30's, led by Nicolas Pérez Serrano, was not able to rationalize the constitutional order, preventing unlawful and revolutionary drift of the Republican regime.

**KEY WORDS:** II Spanish Republic, Spanish Constitutionalism; Boris Mirkin-Guétzevitch, Nicolás Pérez Serrano.

**RESUMEN:** Este artículo trata de poner en relieve que una de las causas del fracaso de la II República española fue la deficiente técnica constitucional. El constitucionalismo español de los años 30, liderado por Nicolás Pérez Serrano, no fue capaz de racionalizar el ordenamiento constitucional, impidiendo la deriva antijurídica y revolucionaria del régimen republicano.

**PALABRAS CLAVE:** II República española, Constitucionalismo español, Boris Mirkin-Guétzevitch, Nicolás Pérez Serrano.

I. Este artículo fue presentado originalmente como una comunicación al Congreso Internacional *La política durante la II República (1931-1936). Nuevas perspectivas de estudio*, celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid el 26 y el 27 de noviembre de 2009. El marco de nuestro trabajo es el de una investigación mucho más amplia sobre los "juristas de Estado" españoles, muchos de ellos, generalmente, cultivadores del Derecho político y constitucionalistas. Hasta ahora, con unas pocas excepciones (Nicolás Pérez Serrano, Eduardo L. Lloréns), nos hemos ocupado de los juristas de Estado de la postguerra vinculados, en mayor o menor medida, con el desarrollo político y constitucional de las Leyes fundamentales y su exégesis y comentario (Javier Conde, Luis del Valle, Jesús Fueyo, Gonzalo Fernández de la Mora, Rodrigo

\* Profesor Titular de Política Social de la Universidad de Murcia y Director de la revista *Empresas políticas*.

Fernández Carvajal)<sup>1</sup>. La razón última de estos trabajos tiene que ver con la advertencia de que el Derecho político y constitucional, desempeñando un papel estabilizador de las sociedades políticas, resulta muchas veces despreciado o bien considerado en planos subalternos en la historiografía política y social. No siempre se tiene en cuenta al valorar los acontecimientos políticos que los textos constitucionales y la propia doctrina constitucional son, ante todo, *expresión* de la vida política de un pueblo: de sus aspiraciones y afirmaciones (Preámbulos), ideología (parte dogmática), conflictos (transacciones constitucionales), distribución del poder (parte orgánica), etc. Del mismo modo que una constitución bien trabada, prudente y sabia puede contener los elementos corruptores operantes en toda sociedad política, una constitución arbitraria, sectaria o ideologizada, alejada en suma de la realidad del país al que se le da, puede desatar las fuerzas centrífugas y disolventes del orden político.

El publicista ruso Boris Mirkine-Guétzevitch acreditó suficientemente esta opinión al discurrir sobre las causas de la transformación en dictaduras de muchos regímenes constitucionales avanzados surgidos después de la I Guerra mundial: «Las causas de esta crisis de la democracia son múltiples, y el estudio de ellas no corresponde solamente a la técnica constitucional. El historiador y el sociólogo son quienes deben pronunciarse sobre las causas de la crisis actual de la democracia; pero la técnica jurídica ha de ser también oída, pues si bien no le es posible considerar todas las causas de tal fenómeno, debe indicar *ciertas causas*, que corresponden a su dominio [...] En varios países donde el régimen democrático no pudo subsistir, los autores de las nuevas constituciones han cometido graves errores. La distribución mal equilibrada de competencias y la primacía excesiva del Legislativo [...] han sido una de las causas de la quiebra del régimen republicano y democrático». Mirkine-Guétzevitch remacha que «los errores *técnicos* de los autores de las nuevas Constituciones no son sino una de las causas de la crisis de la democracia»<sup>2</sup>.

A continuación se propone una interpretación *metapolítica*<sup>3</sup> del régimen republicano (descomposición política y social de un régimen pluralista) y de la doctrina constitucional sobre la que se sustentó (constitucionalismo del *Interbellum*).

La obra de Mirkine-Guétzevitch fue, desde luego, una de las más influyentes entre los constitucionalistas cuyos libros eran leídos con enorme interés por aquellas calendas. Así, su vocación técnica –el neoconstitucionalismo, solía decir, es la *técnica* de la libertad– influyó una enormidad sobre la Ciencia del

---

<sup>1</sup> Para simplificar la relación bibliográfica remito a los índices de la revista que, respondiendo a esta inquietud científica, ha venido publicando los estudios aludidos desde 2002: *Empresas políticas* (Murcia).

<sup>2</sup> Los subrayados son del autor. Véase B. Mirkine-Guétzevitch, *Modernas tendencias del Derecho constitucional*, Reus, Madrid, 1933, pp. 16-17. La obra del solitario del Derecho político, Carl Schmitt, mucho menos atenta que la de su colega de la Universidad de París a los aspectos científicos y metodológicos del Derecho constitucional, acusaba también esta idea directora: las constituciones de los años 20, en las que, según Mirkine-Guétzevitch, se opera la racionalización del poder propia del Estado de Derecho, *expresan* según el jurista alemán la voluntad política de un pueblo (constitución en sentido positivo). Véase C. Schmitt, *Teoría de la constitución*, Alianza, Madrid, 2001.

<sup>3</sup> Un *status quaestionis* de la *metapolítica*, punto de arriba del *realismo político*: C. Gambescia, *Metapolítica. L'altro sguardo sul potere*, Il Foglio, Piombino, 2009.

Derecho constitucional de Nicolás Pérez Serrano. Pérez Serrano, ejemplo de objetividad jurídica, fue el capitán de un valioso grupo intelectual agrupado en torno a su cátedra y la *Revista de Derecho Público*. La *Protoescuela del Derecho constitucional español* de los años 30, de haber cuajado, hubiese podido coadyuvar eficazmente a las reformas que la Constitución de 1931 requería. La cuestión no es baladí cuando el Derecho constitucional, por la fuerza de los hechos, se convierte en un conjunto de disposiciones *normativas* para encauzar una transformación más o menos ideológica de la realidad social.

A diferencia de la constitución de 1876, que no había merecido un comentario sistemático, la nueva norma fundamental española llamó muy pronto la atención de los juristas europeos, que le dedicaron numerosos estudios. También en España aparecieron libros tan importantes como los de Luis Jiménez de Asúa<sup>4</sup>, Presidente de la Comisión parlamentaria redactora del Proyecto de constitución, y Nicolás Pérez Serrano<sup>5</sup>. Aunque mucho menos conocido, me parece superior a ambos el tomo de Antonio Royo Villanova, catedrático de Derecho administrativo en la Universidad Central y miembro de las constituyentes por la minoría agraria: *La Constitución española de 9 de diciembre de 1931*<sup>6</sup>. Merecería también la atención en una exposición sistemática de los fallos del constitucionalismo republicano tres obras de alcance muy diferente: *Anarquía o Jerarquía*<sup>7</sup>, de Salvador de Madariaga; *Necesidad de una política nacional*<sup>8</sup>, del abogado y publicista extremeño Juan Muñoz Casillas; y *Los defectos de la Constitución de 1931*<sup>9</sup>, de Niceto Alcalá-Zamora, Presidente de la República.

Unas Cortes *centradas*<sup>10</sup> y alejadas del doctrinarismo estéril tal vez hubiesen sabido mantenerse fieles al llamado *Estatuto jurídico del Gobierno* de la República, publicado el 14 de abril y cuya comparación con el texto de la Constitución resulta elocuente, al menos en sus artículos 3º, 4º y 5º: «3º. El Gobierno provisional hace pública decisión de respetar de manera plena la conciencia individual, mediante la libertad de creencias y cultos, sin que el Estado en momento alguno pueda pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas. 4º. El Gobierno provisional orientará su actividad, no sólo en el acatamiento de la libertad personal y cuanto ha constituido en nuestro régimen constitucional el Estatuto de los derechos ciudadanos, sino que aspira a ensancharlo, adoptando garantía de amparo para aquellos, y reconociendo como uno de los principios de la moderna dogmática jurídica el de la personalidad sindical y corporativa, base del nuevo derecho social. 5º. El Gobierno provisional declara que la propiedad privada queda garantida por la

---

<sup>4</sup> *Proceso histórico de la Constitución de la República española*, Reus, Madrid, 1932.

<sup>5</sup> *La Constitución española. Antecedentes, texto, comentarios*, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932. Muy poco después apareció en Francia *La nouvelle constitution espagnole. Le régime constitutionnel en Espagne: évolution, textes, commentaires*, Sirey, París 1932, de Adolfo Posada, traducción española, Madrid, INAP, 2006.

<sup>6</sup> Imprenta Castellana, Valladolid, 1934.

<sup>7</sup> Aguilar, Madrid, 1935.

<sup>8</sup> Bosch, Barcelona, 1936.

<sup>9</sup> R. Espinosa, Madrid, 1936. Nueva edición: *Obra completa. Los defectos de la Constitución de 1931 y Tres años de experiencia constitucional*, Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Priego de Córdoba, 2002.

<sup>10</sup> Véase M. Ramírez, *Las reformas de la II República*, Madrid, Tucar 1977, espec. cap. 3, 4 y 6. También del mismo: *La Segunda República setenta años después*, CEPC, Madrid, 2002.



ley; en consecuencia, no podrá ser expropiada si no por causa de utilidad pública y previa la indemnización correspondiente. Mas este Gobierno, sensible al abandono absoluto en que ha vivido la inmensa masa campesina española, al desinterés de que ha sido objeto la economía agraria del país y a la incongruencia del derecho que la ordena con los principios que inspiran y deben inspirar las legislaciones actuales, adopta como norma de su actuación el reconocimiento de que el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra»<sup>11</sup>. El Estatuto del Gobierno proclamaba la transitoriedad de la nueva instancia ejecutiva y la autolimitación de su poder, así como la obligación de resignar sus poderes ante las constituyentes, sometiendo a las mismas su actuación. Ello no obstante, el artículo 9º permite al gobierno someter los derechos reconocidos en el artículo 4º a un «régimen de fiscalización administrativa». «Si se compara este documento –escribía Royo Villanova– con el contenido jurídico de la constitución se explicará la prontitud con que se dibujó bien pronto un divorcio innegable entre la actuación de las Cortes Constituyentes y los verdaderos sentimientos de la opinión nacional»<sup>12</sup>.

Los errores del nuevo régimen, ochenta años después, son bien conocidos. Especialmente desgraciado fue el tratamiento constitucional que se le dio a la religión católica, a la Iglesia católica y, en especial, a las órdenes religiosas que «estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado»<sup>13</sup>. Pero las interferencias ideológico-políticas que operaron sobre la constitución no tuvieron cuenta y muchas de ellas, en conjunción con la cuestión religiosa, determinaron el destino del nuevo régimen: la creación de las regiones autónomas, la socialización de la propiedad, la omnipotencia de un parlamento de tendencia convencional, la debilidad del Presidente de la república, la rigidez del procedimiento de reforma constitucional, etc. Para lo que ahora interesa resultará suficiente recordar aquí la creación del desafortunado Comité de Responsabilidades Políticas de la República. Hemos de precisar que dicho comité, constitucionalizado por la disposición transitoria 2ª de la constitución, dio carta de naturaleza al afán de revancha política: no hay régimen nuevo que renuncie a justificarse en un proceso inquisitorial contra el régimen removido. Lo que no se entiende es el absurdo constitucional de la Ley de 27 de agosto de 1931 (Comisión de Responsabilidades)<sup>14</sup> para establecer una farsa jurídica que desembocó en el Acta acusatoria de las Cortes constituyentes de 26 de noviembre de 1931<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> *Gaceta de Madrid*, 15 de abril de 1931.

<sup>12</sup> A. Royo Villanova, *La Constitución española de 9 de diciembre de 1931*, pp. 9-10.

<sup>13</sup> Art. 26 de la constitución de 1931. La enrevesada redacción tenía como objetivo apuntar a la Compañía de Jesús sin mencionarla expresamente, pues a alguno de los constituyentes se le ocurrió que los jesuitas podían cambiar su denominación para eludir la disolución constitucional. Sobre la cuestión religiosa: Fernando de Meer, *La cuestión religiosa en las Cortes constituyentes de la II República*, Eunsa, Pamplona 1975. Del mismo: *La Constitución de la II República*, Eunsa, Pamplona, 1978, espec. cap. V.

<sup>14</sup> *Gaceta de Madrid*, 28 de agosto de 1931.

<sup>15</sup> A pesar de su mala prensa, la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931, constitucionalizada como la Ley del 27 de agosto citada, tenía *a priori* mayor justificación política. Los abusos gubernativos que se cometieron al amparo de esta Ley, asimilada por Jiménez de Asúa a una ley penal excepcional, se apartan de mi tema. Cfr. la sobria crítica a la constitucionalización de esa ley de N. Pérez Serrano, *La Constitución española*, pp. 239-242.

En suma, la constitución republicana, con independencia de su sesgo ideológico, nunca fue el dechado de virtudes que señalaron juristas como Mirkin-Guétzevitch. Un análisis objetivo desde la pura técnica legislativa y constitucional ofrece un balance muy negativo: artículos superfluos, otros redundantes y algunos vacíos de contenido. No pocos, también, contradictorios entre sí<sup>16</sup>.

II. Casi todos los regímenes políticos europeos confluyeron, desde los años 20, en los tres grandes mitos políticos del momento: la dictadura, la tecnocracia y el corporativismo. Ni siquiera los regímenes democráticos serían entonces ajenos a la racionalización del parlamentarismo, reclamándose el fortalecimiento del poder ejecutivo en aras de la eficacia. Las tendencias dictatoriales se acusan pues también en las democracias clásicas, poniéndose de manifiesto la tendencia a un ejecutivo fuerte. Lo mismo sucede con la corrección del poder de los parlamentos monocamerales y la introducción de Consejos Técnicos o Cámaras senatoriales.

La II República no pudo ser ajena a estas novedades y todas, de una forma u otra, gravitaron sobre los trabajos de las Cortes constituyentes. Las razones políticas del fracaso de aquel experimento político –que no se explica únicamente por los rifirrafes de los debates parlamentarios<sup>17</sup>– hay que escudriñarlas en la cuesta abajo política de España desde el siglo XIX.

Javier Conde<sup>18</sup>, en uno agudo ensayo de interpretación de la Guerra civil y la Dictadura franquista, escribe que la Guerra contra el francés incorporó súbitamente a España al proceso de *nacionalización del mando*, de dimensión europea. Pero la monarquía resultó finalmente incompatible con la nacionalización del poder, pues esto conllevaba también la *nacionalización de la legitimidad política*. La solución radical republicana, más que solucionar el problema nacional vino a agravarlo, pues su gran proyecto nacionalizador o europeizador chocó con los antagonismos sociales y el separatismo regional. En este sentido, los factores polemógenos por excelencia que operaban aquellos años, la *clase* y el *hecho diferencial*, aniquilaron la idea nacional e hicieron inviable un Estado normal<sup>19</sup>. Pero la nacionalización del mando coincidió también con su *despersonalización* (Estado de derecho), proceso que en España avanzó hacia la constitución de un “Estado demoliberal socializante de signo pluralista”<sup>20</sup>. Conde, que había adoptado las categorías político-

---

<sup>16</sup> En ello coinciden Royo Villanova y Pérez Serrano. En la crítica de este último, sin embargo, prima la contención del constitucionalismo como técnica desapasionada y *despolitizadora*. Magnífico complemento de uno y otro es el ya citado libro de Alcalá-Zamora, asiento de sus meditaciones de varios años sobre la práctica constitucional.

<sup>17</sup> En el estudio de los debates constituyentes resulta decepcionante comprobar que el buen juicio de ponentes como Royo Villanova o el mismo Alcalá Zamora, haciendo valer este su *auctoritas*, no siempre surtió efecto frente a opiniones de verdaderos orates. Hubo quien durante la discusión del artículo 26 propuso la desnaturalización de todos los miembros del clero (enmienda rechazada). No hubo tanta fortuna con el artículo 30, en el que se estableció que el Estado no podría suscribir convenios o tratados internacionales para la «extradición de delincuentes político-sociales»... Ni siquiera pudo remediar el dislate el presidente de la Comisión el penalista Jiménez de Asúa.

<sup>18</sup> Sobre esto véase mi Estudio preliminar a J. Conde, *Introducción al Derecho político actual*, Comares, Granada, 2006.

<sup>19</sup> J. Conde, “La idea actual española de nación”, en *Escritos y fragmentos políticos*, t. I, IEP, Madrid, 1974, pp. 341-342.

<sup>20</sup> J. Conde, “Espejo del caudillaje”, en *Escritos y fragmentos políticos*, t. I, p. 369.

constitucionales de Carl Schmitt y razonaba en la inmediata postguerra como un crítico decisionista de la II República, denunció que este régimen, monopolizado por un Derecho político neutral y agnóstico, había degenerado en una “nomocracia despersonalizada”<sup>21</sup>. Ese fue el “plano inclinado”<sup>22</sup> por el que se deslizó, hasta la guerra civil, la forma política que había venido a sustituir, en un proceso entrecortado, a la Monarquía hispánica: el Estado<sup>23</sup>.

III. La nueva constitución española despertó un gran entusiasmo entre muchos publicistas europeos<sup>24</sup>. Especialmente llamativo fue el interés de Mirkin-Guétzevitch, que en el capítulo que añadió a la edición española de su *Les nouvelles tendances du Droit constitutionnelle*<sup>25</sup> afirmaba que «esta Constitución, desde el punto de vista de la *técnica constitucional moderna* –de la *técnica de la libertad*, que es para nosotros la base del Derecho constitucional– representa un imponente y armonioso edificio del Estado democrático. Desde el punto de vista de la técnica constitucional, hay que reconocer que la moderna Constitución española es una interesante síntesis de las nuevas tendencias del Derecho constitucional de la post-guerra»<sup>26</sup>.

Pero su vinculación con la ley fundamental de 1931 es todavía más estrecha, pues «la nueva Constitución española ha sido para el autor de esta obra un acicate científico en el sentido de que muchas ideas constitucionales defendidas en nuestras obras anteriores a la promulgación de la Constitución de 1931, han sido formuladas con una gran elegancia jurídica en diferentes artículos de la referida Constitución»<sup>27</sup>.

En efecto, los lazos de Mirkin-Guétzevitch con la academia jurídica española se estrecharon al principiar la década de los 30, pues además de la traducción de sus obras<sup>28</sup> y sus colaboraciones en la *Revista de Derecho Público* son frecuentes sus visitas a la Universidad Central, en donde impartió varios años un ciclo de conferencias<sup>29</sup>. En la Universidad Internacional de Verano de Santander leyó también tres conferencias (julio de 1934) sobre “El

<sup>21</sup> J. Conde, “Espejo del caudillaje”, *op. cit.*, p. 119.

<sup>22</sup> J. Conde, *Representación política y régimen español*, Subsecretaría de Educación Popular, Madrid, 1945, p. 84.

<sup>23</sup> El Estado es una de las cuestiones disputadas de la historia de España. No me puedo detener aquí en su estudio. Remito a Dalmacio Negro, *Sobre el Estado en España*, Marcial Pons, Madrid, 2007. Cfr. J. Molina, “El Estado nacional español de Javier Conde”, en *Empresas políticas*, nº 12, enero-junio de 2009.

<sup>24</sup> Valgan como muestra las referencias a la literatura europea las reseñadas por Nicolás Pérez Serrano “Varios estudios sobre la nueva Constitución española”, en *Revista de Derecho Público*, nº 19-20, 1933.

<sup>25</sup> Marcel Giard, París 1931.

<sup>26</sup> B. Mirkin-Guétzevitch, *Modernas tendencias del Derecho constitucional*, p. 221.

<sup>27</sup> B. Mirkin-Guétzevitch, *op. cit.*, p. 245. Véase también su prólogo a esta edición española, en donde señala algunos de los jalones de su relación intelectual y personal con los juristas españoles que «he comunicado en esta época agitada de la vida española mis concepciones de la democracia y del Derecho constitucional republicano», *op. cit.*, p. XV.

<sup>28</sup> B. Mirkin-Guétzevitch, *Las nuevas constituciones del mundo*, Editorial España, Madrid, 1931; *Derecho constitucional internacional*, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1936. Sobre España: en colaboración con E. Reale, *L’Espagne. Documents de politique contemporaine*, Delagrave, París, 1933; y en colaboración con H. Lévy-Ullmann, *La vie juridique des peuples: Espagne*, Delagrave, París, 1934.

<sup>29</sup> Véase el resumen del ciclo sobre “El régimen parlamentario en las democracias modernas. Conferencias del profesor Mirkin-Guétzevitch” (3, 4 y 5 de abril de 1933) elaborado por G. Bayón para la *Revista de Derecho Público*, nº 16, 1933.

poder ejecutivo durante los quince últimos años”, cuyo pensamiento director era «la primacía del poder ejecutivo como necesidad técnica de la democracia moderna»<sup>30</sup>.

La doctrina jurídica constitucional de Mirkine-Guétzevitch<sup>31</sup> comprende tres afirmaciones fundamentales: la unidad del Derecho público; la racionalización del poder y la concepción del Derecho constitucional como una técnica de la libertad. En su opinión, la unidad del Derecho público interno y el Derecho internacional no es sólo una cuestión lógica, como preconiza la escuela de Kelsen, sino expresión de un desarrollo histórico desvelado por un “método histórico-empírico”<sup>32</sup>. Este principio *unitario* «descansa sobre la unidad de la conciencia jurídica y sobre la unidad empírica de la evolución histórica»<sup>33</sup>. En la cabeza de este movimiento internacional se encontraba, a su parecer, la constitución republicana, que «por primera vez en la historia constitucional del mundo moderno [...] ha puesto en armonía su texto constitucional con el Pacto de la Sociedad de Naciones y el Pacto Briand-Kellogg»<sup>34</sup>.

El principio de la racionalización del poder viene a ser como una formulación de la técnica de un Estado de Derecho. Esta forma de Estado no ha de ser una *antropocracia*, sino una *ratiocracia*<sup>35</sup>. Esta *racionalización* caracteriza el movimiento neoconstitucional de la postguerra, poniéndose de manifiesto en la racionalización del poder legislativo, del federalismo, del ejecutivo y los reglamentos de necesidad, de los partidos y hasta del control de la constitucionalidad de las leyes<sup>36</sup>.

IV. Adicto a la “técnica jurídica” constitucional, Mirkine-Guétzevitch recordaba que «en la elaboración de las nuevas constituciones, la ciencia jurídica ha representado un gran papel. Aunque dichos textos hayan sido el resultado de diversos compromisos políticos, de acuerdo entre los partidos, el cometido de la *técnica jurídica* es, sin embargo, muy importante. Los teóricos del Derecho ejercieron su influencia esforzándose en varios países en redactar un texto en el que aplicaban las más modernas doctrinas. En Alemania, por ejemplo, la Constitución se debe, en gran parte, a H. Preuss; en Austria, al notable publicista de Derecho público, Hans Kelsen»<sup>37</sup>.

---

<sup>30</sup> B. Madariaga y C. Valbuena, *Universidad Internacional de Verano de Santander. Resumen de sus trabajos en el curso de 1934*, UIMP, Santander, 2000, p. 174. Véase también la entrevista concedida por el jurista ruso a la prensa regional montañesa y recogida en B. Madariaga, *La Universidad de verano de Santander (1933-1936)*, Ministerio de Universidades e Investigación, Madrid, 1981, pp. 315-317.

<sup>31</sup> Interesante: F. Fernández Segado, “El constitucionalismo de entreguerras. Reflexiones al hilo de la obra de Mirkine-Guétzevitch”, en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, nº 4, 1985.

<sup>32</sup> B. Mirkine-Guétzevitch, *op. cit.*, p. 52.

<sup>33</sup> B. Mirkine-Guétzevitch, *op. cit.*, p. 54.

<sup>34</sup> B. Mirkine-Guétzevitch, *op. cit.*, p. 221. Se refiere a los artículos 77 y 6 de la Constitución de 1931.

<sup>35</sup> La contraposición que alienta detrás de los dos neologismos es la misma apuntada por Carl Schmitt al distinguir entre el modo de pensamiento jurídico decisionista y normativista. Véase C. Schmitt, *Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica*, Tecnos, Madrid, 1996.

<sup>36</sup> B. Mirkine-Guétzevitch, *op. cit.*, *passim*.

<sup>37</sup> B. Mirkine-Guétzevitch, *op. cit.*, p. 7. Y más adelante vuelve a insistir: «si el texto de la Constitución es prácticamente el resultado de compromisos parlamentarios, de acuerdos políticos entre los partidos, sólo la técnica científica del Derecho puede suministrar fórmulas

En el Anteproyecto de constitución, redactado por la Comisión Jurídica Asesora, desempeñaron un gran papel juristas de la talla de Ángel Ossorio y Gallardo (Presidente de la Subcomisión), Adolfo González Posada, Alfonso García Valdecasas, Manuel Pedroso y Antonio de Luna. A la vista está que, con independencia de su ideología, se esforzaron por elevar al Gobierno provisional un texto políticamente equilibrado y técnicamente coherente. Como es sabido, el gobierno no hizo suyo el articulado de la Comisión Jurídica Asesora<sup>38</sup> y el proyecto fue utilizado simplemente como material de consulta por la Comisión *política* nombrada por las Cortes y encargada de elaborar un nuevo texto. Destaca en ella el reparto de las vocalías por criterios partidistas: 5 socialistas, 4 radicales, 3 radical-socialistas, 2 de la minoría catalana, y sendos representantes de Acción Republicana, Organización Republicana Gallega Autónoma, Partido Federal, Partido Progresista (nueva denominación de Derecha Liberal Republicana), Agrupación al Servicio de la República, minoría vasco-navarra y grupo agrario<sup>39</sup>.

A pesar de los defectos del texto aprobado finalmente por las constituyentes, un parlamento centrado y prudente hubiese podido contener la deriva ideológica de la constitución. Pero las Cortes constituyentes quisieron prolongar su vida hasta quedar agotadas en el desarrollo legislativo de lo que, al menos una parte importante de las mismas, consideraba la realización de un programa revolucionario de mínimos. No cabía, así, esperar demasiado de la custodia constitucional del Tribunal de Garantías<sup>40</sup>, un colegio de políticos que rara vez estuvo a la altura de las circunstancias, ni tal vez de la doctrina constitucional. En cualquier caso, con una fe encomiable en la ciencia del Derecho constitucional, de la que él fue precursor en España, Nicolás Pérez Serrano, precisamente en unas acotaciones al proyecto de Tribunal de Garantías, se declaraba, como jurista, apostado «en la esfera serena de la técnica, que no quiere decir apartamiento pedantesco de la realidad, aunque tampoco se contente con ser pedrea inconsiderada de doctas opiniones ajenas»<sup>41</sup>.

En el segundo párrafo del prefacio de *La constitución española* esmaltó Pérez Serrano las condiciones de la crítica y la exégesis constitucional. Al reclamar una “interpretación decorosa y digna” de los preceptos de la Ley fundamental de 1931 escribió el mejor de los epítomes españoles de la Ciencia del Derecho constitucional: esta debe caracterizarse, en su opinión, por el

---

adecuadas y precisas. Gracias a la colaboración de los juristas es como el proceso de la racionalización del poder ha alcanzado la máxima expresión», *op. cit.*, p. 42.

<sup>38</sup> Grave error del gobierno, que resignaba así sus facultades directoras ante unas constituyentes que aspiraban a ser, además, una cámara convencional.

<sup>39</sup> Sobre los diversos proyectos de constitución: Fernando de Meer, *La Constitución de la II República*, cap. II. En los apéndices de esta obra pueden consultarse el Anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora y el Proyecto de la Comisión parlamentaria.

<sup>40</sup> Del Tribunal de Garantías decía F. Sosa Wagner no hace mucho que «no podía salir más que una jurisprudencia para el olvido [...] Un sonrojante silencio ha caído sobre aquella obra». F. Sosa Wagner, “El Tribunal de Garantías y otras añoranzas”, en *El Mundo*, 12.IX.2008. Referencias inexcusables sobre este asunto: M. Bassols Coma, *La jurisprudencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República española*, CEC, Madrid, 1981; R. M<sup>a</sup> Ruiz Lapeña, *El Tribunal de Garantías Constitucionales en la II República Española*, Bosch, Barcelona, 1982. Cfr. *El libro de actas del Tribunal de Garantías Constitucionales*, ed. de Jorge Urosa Martínez, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Madrid, 2002.

<sup>41</sup> N. Pérez Serrano, “El proyecto de Tribunal de Garantías y el recurso de inconstitucionalidad”, en *Revista de Derecho Público*, nº 13 (1933), p. 7.

*respeto, la imparcialidad, la independencia y la preocupación técnica.* Creo que merece la pena reproducir aquí su pensamiento, pues las ideas de Pérez Serrano irradiaron sobre todos sus emprendimientos científicos, así como sobre sus discípulos y colaboradores.

Escribe Pérez Serrano: «Respeto, porque entre nosotros es, por desgracia, harto usual la censura violenta a cualquier obra ajena, sin tener en cuenta todo el esfuerzo enorme que exige el más mínimo empeño creador. Imparcialidad, porque el autor no quisiera tampoco adoptar la posición, tradicional en nuestra Patria, de panegirista incondicional, o detractor sistemático, antes bien estima que las cosas tienen por sí un valor, y que a él, y no a banderías o partidismos, debe atenderse para formar juicio. Independencia, en cuanto que esta misma posición, objetiva, neutral, acaso por igual desagradable para los extremismos de uno y otro bando, puede ser garantía de criterio razonable, ya que no habrá de influirlo el deseo de halagar, ni habrá de cohibirlo el temor del enojo sectario. Finalmente, preocupación técnica, porque el autor prefiere examinar de modo sereno, a la luz de la doctrina contemporánea, la estructura y el régimen que implanta nuestra nueva Ley fundamental; pero, bien entendido, que en su opinión, el Derecho público está dominado por dos ideas capitales, a saber, la hipervaloración de la forma en punto al aspecto externo, y la garantía de la libertad como preocupación de contenido»<sup>42</sup>.

Pérez Serrano no se apartó ni un milímetro de ese austero programa científico en sus numerosos estudios sobre la constitución de la República y otras Leyes fundamentales, como la portuguesa, la austríaca o, ya después de la guerra, la argentina, la alemana y la francesa. Ello, naturalmente, imprimió un soberbio timbre académico a la obra en la que, acaso con la excepción de su póstumo *Tratado de Derecho político*<sup>43</sup>, más empeño puso: la *Revista de Derecho Público*, un denso cuaderno mensual con temas de Derecho penal, administrativo y político, en sus diversas ramas y especialidades (enjuiciamiento penal, derecho municipal, derecho electoral y parlamentario), que se publicó desde enero de 1932 a julio de 1936 (54 fascículos)<sup>44</sup>.

No publicó la *Revista de Derecho Público* un ideario o declaración similar; sin embargo, sus expectativas científicas están condensadas en el cuadernillo que para dar a conocer la nueva publicidad se cosió a algunos de los libros publicados por la Editorial Revista de Derecho Privado, a la sazón propietaria de la serie. En el contexto del cambio de régimen y de “renovación profunda y amplísima” del Derecho público, la labor de la revista, en un texto sin firma que tiene, sin embargo, el sello de Pérez Serrano, se dice inspirada en una triple preocupación: «1ª, mantener un rigor constante en el examen técnico de las cuestiones, estudiándolas a la luz de criterios estrictamente científicos, que para nada tengan en cuenta partidismos de ningún género, siempre reñidos

---

<sup>42</sup> N. Pérez Serrano, *La constitución española*, pp. IX-X.

<sup>43</sup> Civitas, Madrid 1984. En esta obra hay un equilibrio casi perfecto entre la concepción enciclopedista del Derecho político hispano y la ciencia del derecho constitucional europeo. Desgraciadamente, esta concepción doctrinaria de la ciencia jusconstitucional no ha tenido en España seguidores que hayan sabido continuar o desarrollar sus presupuestos. Esto, desde luego, no puede contarse en el haber del neoconstitucionalismo español.

<sup>44</sup> Sobre esta publicación precursora de gran nivel: G. Guillén Kalle, *La “Revista de Derecho Público” (1932-1936). El idea de la Segunda República*, Isabor, Murcia, 2004. Sobre la revista de Pérez Serrano no conozco más estudios o referencias que ésta. Para una valoración crítica de este libro, en términos generales positiva: J. Molina, “El ideal de la Segunda República”, en *Razón Española*, nº 132, 2005.

con el culto sincero a la Verdad; 2ª, no abstraerse nunca, sin embargo, aislándose en la torre de marfil de unos conceptos de laboratorio o de cátedra que resulten inservibles en la práctica profesional o divorciados del Derecho vivido a diario, y 3ª, cultivar con singular esmero aquella nota de cosmopolitismo, o si se prefiere, de universalidad, que caracteriza al Derecho público, y que obliga siempre a tender la vista por el mundo, sin detenerse exclusiva, ni siquiera predominantemente, en las peculiaridades localistas, más propias del Derecho privado».

Esta revista reunió, junto a maestros como Luis Jiménez de Asúa, José Gascón y Marín o Recaredo Fernández de Velasco, a un grupo muy prometedor de jóvenes juristas: letrados de cortes, profesores auxiliares e incluso catedráticos de Universidad. La relación detallada de todos ellos no dirá nada al lector no especializado en la historia del Derecho público español, pero es seguro que el especialista no quedará indiferente a los nombres de Gaspar Bayón, Luis Legaz Lacambra, Francisco Ayala, Miguel Cuevas, Héctor Maravall Casesnoves, Gonzalo Cáceres Crosa, Vicente Herrero, José Luis Santaló, Francisco Elías de Tejada, Eugenio Pérez Botija o Manuel García-Pelayo<sup>45</sup>.

V. Por razones de espacio no puedo abordar aquí exhaustivamente el tratamiento que la mencionada *Revista de Derecho Público* dio a los problemas constitucionales del régimen republicano<sup>46</sup>. Tampoco el comentario pormenorizado del texto constitucional de «los dos primeros libros españoles sobre la Constitución según las reglas del arte»<sup>47</sup>, los ya citados de Jiménez de Asúa y Pérez Serrano. Excede también el alcance de estas páginas glosar y apostillar otros tres libros también mencionados al principio: los de Madariaga, Royo Villanova y Muñoz Casillas.

El fracaso del constitucionalismo republicano lo fue también de los partidos y la sociedad a la que representaban. La opinión de los *juristas de Estado* y constitucionalistas del grupo de Pérez Serrano, el más representativo de todos ellos, no fue tenida en cuenta porque la República encalló muy pronto en la ideología de los partidos más radicales. Pero el drama de la frustración de la

---

<sup>45</sup> Este grupo, que en otro lugar he denominado *juristas del 27*, se disgregaría después de la guerra, siguiendo la mayoría caminos que divergían de su vocación de aquellas horas. Sobre casi todos ellos pueden consultarse las útiles y documentadas biografías publicadas en M. J. Peláez (Dir.), *Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos*, Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Málaga, Zaragoza-Barcelona, 2005-2008, 3 t. Sobre las condiciones de esa promoción de juristas nacidos en la primera década del siglo XX: J. Molina, “*El Estado nacional español de Javier Conde*”, *loc. cit.*, pp. 50-51.

<sup>46</sup> Merece la pena resaltar, además del ya citado de Pérez Serrano sobre el Tribunal de Garantías y su estudio sobre si “¿Necesita refrendo el veto presidencial?” (*RDP*, nº 39, 1935), los de S. Álvarez Gendín sobre “Federalismo y autonomismo” (*RDP*, nº 6, 1932); G. Bayón sobre “El derecho de disolución del parlamento” (*RDP*, nº 19-20, 1933); J. Álvarez de Toledo sobre “La Iglesia católica en la constitución” (*RDP*, nº 19-20, 1933); L. Legaz Lacambra sobre “Las garantías constitucionales en el Derecho internacional” (*RDP*, nº 22, 1933); F. Gómez del Campillo sobre “La responsabilidad criminal de Presidente de la República en nuestra legislación vigente” (*RDP*, nº 33, 1934); Vicente Herrero sobre “La sentencia sobre la Ley catalana de contratos de cultivos” (*RDP*, nº 36, 1934) y “Sobre el nuevo reglamento de las Cortes” (*RDP*, nº 40 -parte I- y nº 41 -parte II-, 1935); y Segismundo Royo Villanova sobre “El Estado integral” (*RDP*, nº 45, 1935).

<sup>47</sup> En la reseña de M. Cuevas a *Proceso histórico de la Constitución de la República española*, de L. Jiménez de Asúa: *Revista de Derecho Público*, nº 7-8, 1932.

inteligencia jurídica arrancó idealmente con la improvisación de un derecho penal de excepción para encausar y condenar a “D. Alfonso de Borbón de Habsburgo-Lorena”. Le puso colofón trágico a la anarquía política la incapacidad de los gobiernos radical-cedistas, desde noviembre de 1933, para impulsar la reforma constitucional.

VI. La Ley de 27 de agosto de 1931 estableció los términos en que la Comisión de Responsabilidades de las Cortes constituyentes depuraría y exigiría responsabilidades por los actos políticos o de gestión ministerial que «hubiesen causado grave daño material o moral a la Nación, concretadas en las cinco categorías siguientes: a) Alta responsabilidad de Marruecos. b) Política social de Cataluña. c) Golpe de Estado de 13 de septiembre de 1923. d) Gestión y responsabilidades políticas de las Dictaduras. e) Proceso de Jaca»<sup>48</sup>.

La Comisión de Responsabilidades tenía la autorización de las constituyentes para operar con total libertad, «reclamar directamente cuantos antecedentes y elementos estimaran necesarios» (art. 5º), con la única limitación de las previsiones de la ley habilitadora del procedimiento y determinados artículos de la Ley de Enjuiciamiento criminal (art. 4º). Una vez concluido el expediente en el que se reconocería el derecho a la defensa de los acusados, la Comisión debía elevar sus conclusiones a la Cámara, señalando en cada caso a que tribunal debía trasladarse la causa, salvo que las Cortes decidieran, haciendo acepción de la calidad de las personas, conocer por sí mismas de un encausamiento concreto.

En un artículo publicado en el nº 2 de la *Revista de Derecho Público*: “El Derecho penal vigente en la República española”, justificaba Jiménez de Asúa la Ley de Responsabilidades, pues el Código penal de 1870 resultaba inadecuado para juzgar los abusos de la monarquía, pues «los crímenes de los Reyes no se hallan en el sólito catálogo de los Códigos, sino definidos en el archivo de la historia, que es Código más alto e inapelable [...] Alfonso de Borbón y Habsburgo Lorena no infringió las concretas normas de vida cotidiana, sobre las que se han definido los preceptos comunes del Código penal, sino aquella norma política de fidelidad a la Carta magna del Estado, cuyo quebrantamiento constituye el delito de alta traición»<sup>49</sup>.

En efecto, el fallo de las Cortes del 26 de noviembre de 1931 declaró «culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue Rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico de su país»<sup>50</sup>.

La pena, “de sabor medieval”, consistía en la *Friedlosigkeit*, en la pérdida de la paz jurídica, pudiendo aprehenderlo cualquier ciudadano español que lo

---

<sup>48</sup> Ley de 27 de agosto de 1931 (*Gaceta* del 28 de agosto), art. 1º.

<sup>49</sup> L. Jiménez de Asúa, “El Derecho penal vigente en la República española”, *loc. cit.*, p. 41. Un año antes, en abril de 1930, preguntado sobre «¿Cómo han de hacerse efectivas las presuntas responsabilidades de la Dictadura?», declaraba preferir la vía revolucionaria para exigir responsabilidades, pero en su defecto apelaba a la “costumbre constitucional” según la cual la acusación recaía en el Congreso y el enjuiciamiento en el Senado: “Contestación de D. Luis Jiménez de Asúa”, en *Política*, nº 4, 1930, pp. 114-115.

<sup>50</sup> Acta acusatoria de 26 de noviembre de 1931 (*Gaceta* del 28 de noviembre de 1931).



encontrara en territorio nacional<sup>51</sup>. La sentencia establecía también la pérdida de “todas sus dignidades, derechos y títulos” y la incautación de sus bienes. El prurito legalista de aquel “tribunal de políticos”<sup>52</sup> hace difícil no recordar la glosa anotada en su diario por Carl Schmitt el 17 de julio de 1947: «*Maxima non curat praetor*. Los griegos dieron muerte a Sócrates y los judíos a Jesucristo con arreglo a un proceso judicial. Los romanos, en cambio, el pueblo del derecho, mataron a su hombre más grande, Julio César, sin someterlo a ese tipo de proceso. Ahí está su grandeza»<sup>53</sup>.

Contra los argumentos del Comité de responsabilidades y la doctrina Jiménez de Asúa cabe, por lo demás, recordar la doctrina política esgrimida por José Antonio Primo de Rivera en su alegato a favor de Galo Ponte: «una constitución suspendida y muerta *no resucita*, de modo que nadie pudo, después de 1923, delinquir contra ella. Así, les recordaba: ¿No suena esta tesis en vuestros oídos con familiar autoridad? Debéis reconocerla, porque fue la misma que sostuvieron los revolucionarios españoles contra los últimos Gobiernos de la Monarquía. Cuando éstos, frente a la agitación revolucionarias, acusaban a aquellos de delinquir contra la Constitución, los revolucionarios invocaban el argumento que yo invoco ahora: desde el golpe de Estado, nadie ha podido delinquir contra la Constitución, porque la Constitución, rota, no existe; las constituciones no pueden resucitar»<sup>54</sup>.

La tesis de fondo desautoriza plenariamente la actividad del Comité, al menos en lo que no tenga que ver con los cargos por una mala gestión, «reprobable bajo cualquier sistema constitucional». Carece de sentido que un órgano excepcional de la República *procese* al Jefe del Estado del régimen extinguido *por quebrantar la constitución* cuya liquidación rubricó el Decreto nº 1 del Comité revolucionario que el 14 de abril nombró Presidente a Niceto Alcalá-Zamora. No sólo es imposible, como decía José Antonio, «penar delitos contra una constitución destruida, porque al desaparecer una forma de Estado caen con ella, faltas de sujeto pasivo, las defensas jurídicas que la circundaron»<sup>55</sup>, sino que roza el esperpento jurídico que quienes han conquistado al poder por medios anticonstitucionales<sup>56</sup>, encausen a los titulares del poder derrocado con la constitución derogada *de facto*.

---

<sup>51</sup> Sorprende en un penalista “progresista” como Jiménez de Asúa la complacencia con la solución de la Cortes: «No deben escandalizarse los legistas por una pena de sabor medieval. Quien, con tendencias ancestrales, quiso que su país volviese a la Monarquía absoluta de la Edad Media, ha de ser castigado con una pena adecuada a su personalidad atávica». L. Jiménez de Asúa, “El Derecho penal vigente en la República”, *loc. cit.*, p. 41.

<sup>52</sup> Así lo denominó J. A. Primo de Rivera en su defensa de Galo Ponte, Ministro de Justicia de la Dictadura de Primo de Rivera, ante el Comité de Responsabilidades políticas: José Antonio Primo de Rivera, *Textos de doctrina política*, edición de A. del Río Cisneros, Delegación Nacional de la Sección Femenina de FET y de las JONS, Madrid, 1966, pp. 15 y 29.

<sup>53</sup> C. Schmitt, *Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951*, Duncker u. Humblot, Berlín 1991, p. 258.

<sup>54</sup> J. A. Primo de Rivera, *op. cit.*, pp. 17-18.

<sup>55</sup> J. A. Primo de Rivera, *op. cit.*, p. 21.

<sup>56</sup> «Ninguna norma constitucional preexistente asignaba a las elecciones municipales un efecto tan exorbitante como el cambio de régimen». J. A. Primo de Rivera, *op. cit.*, p. 19.

VII. Los defectos de la Constitución de 1931 debilitaron gravemente el prestigio de la autoridad<sup>57</sup>. El país, regido por una Ley fundamental receptora de doctrinas ineficaces, viejas (federalismo, anticlericalismo) y nuevas (pacifismo absoluto, colectivismo), cuando no perniciosas (omnipotencia parlamentaria)<sup>58</sup>, se hizo ingobernable desde las primeras semanas. De modo que, fijado en aquella “constitución de izquierda” un programa ideológico desarrollado por unas Cortes constituyentes que prolongaron su vida más allá de lo razonable, y bloqueado o cancelado el posible efecto rectificador, por vía interpretativa, de la jurisprudencia del Tribunal de Garantías y la doctrina constitucional, no quedaba sino el recurso, sumamente delicado, al artículo 125 de la constitución.

En esencia, este malhadado artículo, cuya pobre discusión en las constituyentes no estuvo a la altura de su inmensa importancia<sup>59</sup>, facultaba al gobierno y a una cuarta parte del Parlamento para proponer la reforma. La propuesta, que se tramitaría como una ley y requeriría para su aprobación el voto de dos tercios de los diputados durante los cuatro primeros años, y la mayoría absoluta de las Cortes a partir de ese momento, debía incluir una relación concreta de los artículos afectados por la reforma. El acuerdo sobre la reforma tenía el efecto automático de la disolución del parlamento, correspondiendo a la nueva cámara, “en funciones de Asamblea Constituyente”, decidir sobre la oportunidad de la reforma.

La obligatoriedad de convocar nuevas Cortes para sancionar la reforma constitucional hacía de la constitución un texto sumamente rígido y difícil de alterar. ¿Qué cámara, si no era en el trance del agotamiento de su legislatura, se aventuraría a quedar disuelta, perdiendo los diputados su actas y prerrogativas? Esta condición de la reforma retrasó *sine die* los planes que la oposición había proclamado en la campaña electoral del otoño de 1933. Al menos hasta la primavera de 1934 el gobierno tuvo quórum suficiente para proceder a la reforma sin tener que esperar al 10 de diciembre de 1935, «pero la enorme fuerza de inercia que supone el artículo 125»<sup>60</sup> lo hizo imposible.

El único intento serio y meditado de reforma fue el de Alcalá-Zamora, que presentó al respecto un informe, discutido por los Consejos de ministros de los días 2, 3 y 4 de enero de 1935<sup>61</sup>. La prudencia aconsejaba evitar una reforma

---

<sup>57</sup> «Intuición extraordinaria: durante un cierto tiempo los nuevos regímenes de libertad, emancipados del viejo piloto, viven de las reservas de autoridad acumuladas por el poder depuesto» (20.VIII.1948). C. Schmitt, *Glossarium*, p. 192.

<sup>58</sup> N. Alcalá-Zamora, *Los defectos de la Constitución de 1931*, pp. 26-29. Pero los dos mayores defectos de la constitución fueron, en su opinión, el *trágala* y la constitucionalización de materias sin verdadero rango constitucional, *op. cit.*, p. 36.

<sup>59</sup> N. Pérez Serrano, *La constitución española*, p. 333. Royo Villanova, por su parte, criticó la ingenuidad de una cámara que creía en la intangibilidad de la constitución: «me parece una equivocación el creer que se garantiza la estabilidad de un régimen constitucional poniendo trabas a su reforma [...] Pero, sin duda, los diputados de las Cortes Constituyentes han creído que tienen más poder y más autoridad que los que vengan a las Cortes futuras (y lo mismo creía Primo de Rivera de su misión providencial). Y así han decretado solemnemente que una Constitución, aprobada en casi todos sus artículos por la minoría de la Cámara, necesita para ser reformada el voto coincidente de las dos terceras partes de los diputados». A. Royo Villanova, *La Constitución española de 9 de diciembre de 1931*, pp. 344 y 346.

<sup>60</sup> Niceto Alcalá-Zamora, *op. cit.*, pp. 42-43.

<sup>61</sup> N. Alcalá-Zamora, *op. cit.*, pp. 245-298. Este proyecto de reforma apenas ha merecido la atención de historiadores y constitucionalistas. Lo menciona M. Ramírez en *La Segunda República setenta años después*, p. 94.

general, limitando la tarea constituyente a revisar los artículos contrastados por una experiencia negativa. La lista de los preceptos afectados no era demasiado larga, pero en todo caso, Alcalá-Zamora convenía en que la reforma, al menos, podría tener un contenido mínimo, referido a los artículos 14 (competencias del Estado), 26 (cuestión religiosa), 44 (propiedad) y 51 (introducción del Senado). Según sus previsiones, la reforma podría acordarse en noviembre, días antes de que se cumplieran los cuatro primeros años de la vigencia constitucional. Era su intención llevar a cabo una "reforma transaccional", «[aconsejando] desde luego que se hiciese a los partidos de centro, y aun de izquierda, noble y generosa invitación a que dieran sus votos, que pocos días después (el 10 de diciembre) ya no serían necesarios»<sup>62</sup>.

Después de muchas dilaciones, los mismos que afirmaban desear la reforma no hicieron nada por impulsarla. Según el propio relato de Alcalá-Zamora, a finales de abril recibió un proyecto de reforma sobre la base de uno anterior, fechado seguramente en febrero, del exministro de Instrucción pública y Bellas Artes Joaquín Dualde Gómez<sup>63</sup>. El proyecto, finalmente, fue presentado en las Cortes en junio de 1935, eligiéndose la comisión parlamentaria en julio, la cual, «dando muestra inicial de laboriosidad, acordó, por inspiración de los partidos, no reunirse hasta el otoño»<sup>64</sup>.

Su propósito de convocar una sesión extraordinaria de las Cortes para septiembre de 1935 se frustró, dándose cuenta entonces de lo que realmente pasaba: «se quería ir a lo imposible, a prolongar la vida hasta fines de 1937»<sup>65</sup>.

En el gobierno de septiembre de 1935 alentaba todavía la idea de la reforma, pero reducida ya exclusivamente al artículo 125. Aprovechando esa última oportunidad, el propio Alcalá-Zamora elaboró un nuevo proyecto, no restringido al artículo llave de la constitución, y lo remitió a la Comisión parlamentaria<sup>66</sup>. Esta Comisión, parte de unas Cortes agotadas, lejos de simplificar los debates los complicó innecesariamente incorporando otros artículos susceptibles de reforma.

A partir de diciembre de 1935 ya no habrá ocasión propicia para la rectificación constitucional. Desde ese momento, más bien, se crecieron las fuerzas disgregadoras. Además, la torcida interpretación del artículo 81, habilitadora de la destitución del Presidente de la República, agravó la omnipotencia parlamentaria y laminó de modo irreversible la posición política del Jefe del Estado.

*Recibido el 2 de noviembre de 2010, corregido del 20 al 25 de noviembre de 2010 y aceptado el 3 de diciembre de 2010.*

<sup>62</sup> N. Alcalá-Zamora, *op. cit.*, p. 44.

<sup>63</sup> Joaquín Dualde volvería al ministerio en el gobierno de mayo de 1935.

<sup>64</sup> N. Alcalá-Zamora, *op. cit.*, p. 45.

<sup>65</sup> N. Alcalá-Zamora, *op. cit.*, p. 46.

<sup>66</sup> Recogido como apéndice en N. Alcalá-Zamora, *op. cit.*, pp. 299-301.



## EMERGING CONSTITUTIONALISM IN EASTERN EUROPE AND CHRISTIANITY

Gábor HAMZA\*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

**Gábor Hamza** (2011): "Emerging Constitutionalism in Eastern Europe and Christianity", en *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, n.º 1 (marzo 2011), pp. 103-111. En línea: <http://www.eumed.net/rev/rehipip/02/gh.pdf>

**ABSTRACT:** It is a well known fact, that currently all the former socialist countries, including the former constituent republics of the former Soviet Union, are undergoing a process which is generally considered as one of the most comprehensive and far reaching overhauls of their constitutional structures during the last couple of decades of their postwar histories. Religious tolerance has never been a landmark of either Russian or Soviet legislation. Religious freedom has never entirely existed in that part of Eastern Europe. Current problems of constitutional change in Eastern Europe are closely linked to the fact that the post-war constitutional experiences in the countries of the Eastern part of the European continent were most dissatisfying.

**KEY WORDS:** Encyclicals, Gospels, Gregory The Great, Montesquieu, Property, Separation of State and Church, Social Responsibility, Soviet Union.

**RESUMEN:** En la actualidad, todos los antiguos países socialistas, incluidas las repúblicas de la antigua Unión Soviética, están sufriendo un proceso considerado como uno de los más completos y de mayor alcance en la revisión de sus estructuras constitucionales durante las dos últimas décadas de su historia de postguerra. La tolerancia religiosa nunca ha sido un punto de referencia en la legislación rusa o soviética. La libertad religiosa al completo nunca ha existido en gran parte de Europa del Este. De hecho, como veremos, los actuales problemas en cambios constitucionales en estos países están íntimamente relacionados con el hecho de que las experiencias constitucionales de postguerra en los países de la Europa del Este fueron mucho más insatisfactorias que en el resto de Europa.

**PALABRAS CLAVE:** Encíclica, Evangelio, Gregorio el Grande, Montesquieu, Propiedad, Separación entre Iglesia y Estado, Responsabilidad Social, Unión Soviética.

I. It is a well known fact, that currently all the former socialist countries, including the former constituent republics of the former Soviet Union, are undergoing a process which is generally considered as one of the most comprehensive and far reaching overhauls of their constitutional structures during the last couple of decades of their postwar histories.

---

\* Professor of Roman and Constitutional Law at Eötvös Loránd University Law of School (Budapest).

Religious tolerance has never been a landmark of either Russian or Soviet legislation. Religious freedom has never entirely existed in that part of Eastern Europe. Current problems of constitutional change in Eastern Europe are closely linked to the fact that the post-war constitutional experiences in the countries of the Eastern part of the European continent were most dissatisfying.

We are witnessing the expansion of constitutionalism in Eastern Europe. In a number of these countries the national assemblies adopted new constitutions in compliance with the far-reaching political and economic changes.

One of the characteristics of the recently promulgated constitutions is the re-emergence of the idea of the separation of powers dating back to Montesquieu. The fact that this idea has reappeared helped a great deal to separate the Church from the State. The separation of the legislative and the executive branches of power has made possible the limitation of the opportunities for interference by the State in the internal affairs of the Church. The creation of an independent judiciary is a further guarantee of the reattainment of the independence of the Church.

The constitutions of the Eastern European countries enacted after World War II defined State authority as belonging to the people and proclaimed equal rights for all citizens, including freedom of religion, speech, association and assembly.

Duties of property have been emphasized by a number of encyclicals. Suffice it to think of the encyclicals of *Rerum novarum*, *Quadragesimo anno*, *Sollicitudo rei socialis* and *Centesimus annus*. The statement made by the Pope Gregory the Great (590-604) is from this viewpoint still of considerable significance. Social responsibility of all forms of property is considered as one of the axiological principles based on Christians ideas. The same is valid for provisions to be enacted which protect the institution of marriage and family, providing for social welfare, recognizing and enforcing the right of the citizens to a healthy environment and the like.

In the new constitutional and political system of the Eastern European countries relations between the individual and society will have to be brought into harmony with each other. Christian thinkers do not regard conflicts existing between individualism and collectivism as irresolvable ones. Overemphasizing contradictions between the individual and society is unacceptable for Christian thinkers. The former way of thinking leads necessarily, as this has been the case in the period of communism, to totalitarianism. Christian concept of democracy is, without a doubt, able to establish equilibrium between individualism and collectivism. For successful constitutional engineering in Eastern Europe, after the fall of the period of totalitarianism, will be advantageous to take seriously into account the Christian concept of human freedom rooted in the Gospels.

II. It is a well known fact, that currently all the former so-called socialist (communist) countries, including the former constituent republics of the former Soviet Union, are undergoing a process which is generally considered as one of the most comprehensive and far reaching overhauls of their constitutional and legal structures during the last couple of decades of their postwar histories. The crucial changes which the constitutional and legal frameworks of the Eastern and Central European countries are undergoing cannot be separated from the previous constitutional and legal experiences in this geographical part of the European Continent.

In this respect, one should particularly take into account the question regarding continuity in legal matters in Russia and the Soviet Union. According to the statement of Stuchka «Communism means not the victory of socialist law, but the victory of socialism over law, since with the abolition of classes with their antagonistic interest,

law will die out altogether». The nihilistic approach towards law did not have, at least in the formal sense of the concept of law, any effect upon constitution-making in the Soviet state. The various constitutions of the Soviet Union i.e. Soviet Russia (1918, 1924, 1936, 1977) regulate almost exhaustively the various relations of the Soviet citizens.

It is worth mentioning the idea of socialist legality playing a considerable role in the field of the judicature throughout the history of Soviet law. The legality (*zakonnost'*) is rooted in the concept of legality known in the czarist Russia. Historically, legality meant, roughly speaking, strict obedience to the commands of the emperor and thus narrowed considerably the independence of the judiciary i.e. judicial power. This characterized also later the entire communist era of the Soviet Union *mutatis mutandis*. There were other legacies as well, like the intense formalism characterizing the Soviet law, the secrecy of legislative and judicial procedure and the dominant position of different kinds of corruption in the resolution of legal questions. As a result, constitutionalism meant by no means substantial or real constitutionalism.

III. Another characteristic feature of Russian or Soviet "constitutionalism" is that the Church has never been substantially separated from the State. The decree issued on 23<sup>th</sup> January 1918 ("Decree on Separation of Church from State and School from Church") laid down the principles (in just 13 short articles) of the relationship between Church and State. That decree based mostly on a draft made by Lenin himself has been decisive for the greater part of the communist history of Russia and the Soviet Union. It is, no doubt a striking fact that Lenin modified the title of the draft beginning with the words "Freedom of Conscience". Another fact is to be mentioned i.e. that the draft's first paragraph «Religion is the private affair of each citizen of the Russian Republic» was deleted, obviously quite intentionally, by Lenin. These two facts per se are characteristic as to the bolshevik type Church-State relationship in the recently born Soviet Russia. The State denies any kind of independence of the Church from the state at institutional level. The Church-State relationship is still characterized by the chaotic state of legislation. Suffice it to think of the Legislation on Religious Associations (*Zakonodat'elstvo o religioznykh kultah* of the Russian Socialist Federal Soviet Republic) which contains more than one hundred valid acts including departmental ones. Many of them were hardly available in other officially published sources.

Thus, on the one hand the chaotic state, on the other hand the secrecy of legislative and judicial procedure characterize the legal regulation relating to Church-State relationship. As a result the provisions of the four constitutions of Soviet Russia and the Soviet Union, the same relates to the provisions contained in the constitutions of the constituent republics, were no real guarantees against the State's interference into Church affairs. It is worth mentioning that to some extent the field of activity of the Church, with passage of time, became more and more limited. E.g. the 1918 Constitution of Soviet Russia guaranteeing the general right of religious education has been modified in a more restricted way in the text of the 1924 Constitution of the Russian Socialist Federal Soviet Republic.

Religious tolerance has never been a landmark of either Russian or Soviet legislation. Religious freedom has never entirely existed in that part of Eastern Europe. The Basic Laws of 1906 enacted in czarist Russia did not contain provisions for guaranteeing religious freedom, either.

IV. From the historical viewpoint, the situation in this respect was almost diametrically opposite in Hungary and Poland.

After the battle of Mohács in 1526 the unity of the kingdom of Hungary was lost. The central areas were invaded by the Ottoman Empire, the Northern and Western parts were called Hungary under the Habsburgs and the Eastern parts, Transylvania and the adjoining Partium, formed a new principality. Its rulers – performing a tightrope dance between the Ottomans and the Habsburgs – were able to achieve a considerable measure of independence for what remained of historical Hungary in the East. In its splendid isolation from the powerful Catholic kingdoms of the west, Transylvania was the breeding ground for various trends of the Reformation.

The law on religious tolerance was inspired by the Unitarian bishop Francis David who had a strong spiritual influence on Transylvania's young ruler, John Sigismund. He declared what was then an unprecedented freedom for small village and town communities, letting them invite preachers they liked. «No one can force them to accept someone whose interpretation of the Bible is against their understanding» – the law said. «Faith is the gift of God coming by hearing the words of God» and accordingly the faith of the landlord was no longer important. His people were free to choose their faith in line with the inner voice of their own souls.

The fact that John Sigismund, the Unitarian grandduke of Transylvania, in accordance with the decision of the Diet granted religious freedom to Catholics, Lutherans, members of the Reformed Church, and Unitarians, was unprecedented. It is to be noted that the name Unitarian gradually came into use after debates at Gyulafehérvár (now in Alba Iulia, Romania) in 1568 and at Nagyvárad (now Oradea, Romania) in 1569. In January 1568, the Hungarian parliament in the Transylvanian town of Torda declared that the followers of the four predominant religions of the realm –Roman Catholics, Lutherans, Calvinists and Unitarians– enjoy equal rights. For many years this was the most enlightened law on the freedom of thought in the world. The Transylvanian diet held at Torda gave these four established religions (*religiones receptae*) constitutional recognition in 1571, shortly before John Sigismund's death. The provisions adopted and proclaimed by the Diet of Torda were undoubtedly the first legally binding provisions providing for equal treatment of all existing denominations in history of Europe.

In all fairness we owe one more comment to this undoubtedly paramount historical event. This religious freedom in its boundless totality was short-lived. The next reigning prince of the Principality of Transylvania was the powerful Stephen Báthori, a Catholic who became simultaneously one of the most celebrated kings of Poland. Under his reign the counter-reformation started and the reformed churches of the country had to survive strong opposition.

Still, the existence and the possibility of subsequent references to the law adopted by parliament was enough to finally curb later outbursts of religious intolerance.

The idea that no one could be prosecuted for his/her religious belief was made into a legal act in Poland as early as 1572. The then Chancellor of the Kingdom of Poland, Jan Zamojsky, who was an excellent lawyer as well (he studied in Paris, Strasbourg and Padova) made the following statement: «I would give half of my life if those who have abandoned the Roman Catholic Church would voluntarily return to its vale: but I would prefer giving all my life than to suffer anybody to be constrained to do it, for I would rather die than witness such an oppression». This statement of the outstanding Catholic statesman of Poland characterizes quite well the political atmosphere relating to religious tolerance in the last decades of the 16<sup>th</sup> century's

Poland. Of particular significance is the declaration of King Sigismund Augustus, made at the session of the Diet: «I am not the King of your souls».

On behalf of these two historical facts, it is quite obvious that Christian thinking played quite a considerable role in some of the Central European countries in the domain of constitutionalism. Constitutionalism is meant, of course, in a rather broad sense of the term. The emergence of the idea of equal treatment of all denominations can be regarded *per se* as a certain kind of loosening of the connections between Church and State. That phenomenon was closely linked to the relatively “liberal” political climate in both countries. Forcible conversions to Christianity were regarded in that particular period of time (in the second half of the 16<sup>th</sup> century) as immoral and, let us add to it, illegal or “unconstitutional” (*fides ex necessitate esse non debet*). The so-called “*Monarchia Moderata*” provided the political and constitutional basis for the limited separation of Church from state reflecting basically genuine Christian way of thinking. The theoretical as well as ideological basis for it was undoubtedly of Christian inspiration. Noteworthy is in this respect in particular the memorial entitled *De potestate papae et imperatoris respectu infidelium* written by Paulus Vladimiri, who was professor of the University of Cracow. That memorial dating back to the period of time of the Council of Constance (1414-1418) contributed considerably to the process of gaining ground of religious tolerance and, one could say, of religious pluralism, although the latter term may seem at first glance a bit exaggerated.

V. Current problems of constitutional change in Eastern Europe are closely linked to the fact that the post-war constitutional experiences in the countries of the Eastern part of the European continent were most dissatisfying. The socialist-style constitutions have been, substantially, no legally binding sets of norms. They could be regarded as political-philosophical declarations thus having predominantly aspirational character. The major reason for that lied in the fact that they operated without the extra-parliamentary means of constitutional control.

Currently we are witnessing the expansion of constitutionalism in Eastern Europe, although in Hungary no new constitution has yet been adopted. In a number of these countries the national assemblies adopted new constitutions in compliance with the far-reaching political and economic changes. This refers for instance to the deletion of articles providing for the special treatment of the communist party.

Another characteristic feature of the recently promulgated constitutions is the re-emergence of the idea of the separation of powers dating back to Montesquieu. The fact that this idea has reappeared helped a great deal to separate the Church from the State. The separation of the legislative and the executive branches of power *per se* has made possible the limitation of the opportunities for interference by the State in the internal affairs of the Church. History proved that the declaration of the separation of Church and State is by far insufficient in a state based on the so-called unity of power vested, supposedly, in the people. The creation of an independent judiciary is a further guarantee of the reattainment of the independence of the Church.

VI. I would like to dwell a bit on the judicial branch of power. In most countries, a Constitutional Court has been established. In this respect, we cannot forget that that kind of political and judicial controlling organ is deeply rooted in the Christian way of political thinking. Suffice it to think of the “*Tribunale politico*” (“Political Tribune”)



conceived by the great Christian philosopher, Antonio Rosmini<sup>1</sup>. In order to defeat injustice, it is necessary to establish such an organ as proposed by Rosmini. He emphasized the extreme significance of the “Tribunale politico” in the transition from absolutism to democracy. The prominent Italian Christian philosopher regarded this political and judicial organ as the supreme power of the state guaranteeing the implementation of the political rights of the citizens. The “Tribunale politico” can, according to his view, challenge even acts adopted by the legislature. It is extremely interesting to note the impact of the Rosmini’s concept of a “Tribunale politico” is having on the functioning of the Constitutional Court e.g. in Hungary. The Hungarian Constitutional Court which has been brought into being on January 1, 1990, can be regarded with no exaggeration as an implementation of Rosmini’s idea for a “Tribunale politico”.

Judicial review, labeled by the procurator general of the Soviet Union, Vyshinsky as a “reactionary institution” is being initiated (or re-initiated) in Eastern Europe. There exists once again institutional control of the constitutionality of acts of the legislature and of the legality of administrative acts. Theoretically, the review of legality of administrative acts existed in the Soviet Union as article 58 of the 1977 Constitution provided for it (according to subsection 1 of article 58: «Citizens of the USSR shall have the right to appeal the actions of officials and of state and social agencies. Appeals should be considered in the procedure and within the period established by law»). Due to the lack of existence of administrative courts, however, this provision could hardly be implemented. Administrative tribunals are being brought into being in most Eastern European countries in compliance with either the new or amended constitutions.

The courts have regained their independence, which is an essential prerequisite for their appropriate functioning. The judges are not required to judge in compliance with their “revolutionary consciousness” as they were supposed to, particularly in the case of the lack of legal regulation. Besides constitutional declaration, real guarantees have been established on institutional level. The judge is allowed to judge according to his/her own (Christian) consciousness. There is of course no provision rendering sentencing in compliance with Christian consciousness but implicitly this is, no doubt, possible. This issue is also connected with the relationship of justice with charity<sup>2</sup>.

VII. The postwar period in Eastern Europe has been characterized by the elimination of the institutions of a civil society. In conformity with that, the State tried everything in order to destroy the institutional network of the various denominations. The negative consequences of this attitude of the state towards the various institutions (schools, hospitals, higher educational institutions etc.) run by the Church are still discernible in the Eastern European countries. Aside from this, one has to mention the destruction of the former “mediating structures” (referring to the term used by von Laue). The Church suffered in particular because of this destructive process which lasted for several decades.

The constitutions of the Eastern European countries enacted after World War II defined State authority as belonging to the people and proclaimed equal rights for all citizens, including freedom of religion, speech, association and assembly.

---

<sup>1</sup> See A. Rosmini, *Della naturale costituzione della società civile*, 1827.

<sup>2</sup> See R. Pizzorni, *Giustizia e carità*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1980.

The first post-war constitution of Yugoslavia (promulgated in 1946) guaranteed freedom of conscience and religion to all citizens (article 25) and declared the separation of Church and state. The 1946 Constitution had provision relating to freedom for religious communities to engage in religious activities for the purposes of religion. The 1946 Constitution forbade the misuse of religion for political ends. Besides that, the creation of political organizations on a religious basis was also forbidden. By virtue of these provisions the “mediating structures” of the Churches became almost entirely eliminated. The act adopted in May did not substantially improve the situation of the various religious communities. The state still had a large number of legal means to place the Church(es) under its strict control. The inclusion of the priests and their family members in the state system of insurance and the grants the state made to the various religious communities for the maintenance of their educational institutions for theological study were able to strengthen state control. All of the above measures served exclusively for the purpose of strengthening the control of the state over the Church(es) and thus were in conflict with the principle of separation of Church and State.

The curtailment of the political power of the Church can be regarded as a corollary of the separation of Church and State. It must, however, be emphasized that in a democratic state the curtailment of the political and temporal power of the Church cannot be mistaken for deprivation of the means necessary to carrying out various educational, charitable etc. activities of the Church. This is in perfect conformity with Christian ideas. In the new or substantially modified (amended) constitutions of the Eastern European countries special provisions guaranteeing the free exercise of various activities of the Church have been included. A new economic and political constitutional framework has to provide for the real possibility of various Church activities which do not conflict with the idea of separation of Church and State. The reason I refer to the early post-war Yugoslav experience is that even in a state still having diplomatic ties with the Holy See (the diplomatic relations were broken in 1952) Church-State relations were extremely troublesome on practical level.

VIII. It is in conformity with Christian ideas that a religious group has sufficient economic means to carry out its ends. The “revolutionary” changes that occurred in the field of property relations in the Eastern European countries almost entirely deprived the Church of its economic means. The liquidation of private ownership hurt the Church in particular in all these countries. Church property was taken away with no compensation under the pretext of the nationalisation of the means of production. Lenin’s idea about law («A law is a political instrument; it is politics») was implemented in particular in the process of taking away property from both individuals and Church(es). The interpretation of law by Vyshinsky («Law is no ‘enigmatic shape’ but a living reality expressing the essence of social relationships between classes») was taken quite seriously in the Eastern European countries in the post-war period. In the expropriation of ownership there was not even a legal disguise in order to embellish the pure reality (unlike the constitutional “guarantees” providing for the freedom of religion).

The major requirements concerning regulation with regard to ownership have to be adopted in the new constitutions. Property relations have to be regulated in a normative way. Second, all forms of property have to be equally protected. Third, real guarantees against the State’s interference have to be incorporated in the text of the constitution.

The Christian concept of ownership underscores the social-responsibility of property. In this respect, in particular with regard to history is worth mentioning the work of Renoux-Zagamé<sup>3</sup>. This concept is in no doubt in accordance with the requirement of moral foundation of law<sup>4</sup>.

Duties of property have been emphasized by a number of encyclicals. Suffice it to think of the encyclicals of *Rerum novarum*, *Quadragesimo anno*, *Sollicitudo rei socialis* and *Centesimus annus*. The statement made by the Pope Gregory the Great (590-604) is from this viewpoint still of considerable significance. He made clear that charitable activity towards the poor constitutes for Christians an obligation in conformity with both morality and justice. Social responsibility of all forms of property is considered as one of the axiological principles based on Christians ideas. As a result, the drafters of the new constitutions in Eastern Europe have to take this into account. The clear reference to social duties of property should be inserted in the general provisions of the constitutions of the countries of Eastern Europe as being in complete accordance with the social engagement of the Christian Church(es). The same is valid for provisions to be enacted which protect the institution of marriage and family, providing for social welfare, recognizing and enforcing the right of the citizens to a healthy environment and the like.

Christian Churches have to unfold their activities mostly in the “private sphere” on institutional level according to the new constitutions in Eastern Europe. The constitutionally guaranteed private rights of the Church will certainly encompass a growing number of activities in conformity with the manifold engagement of the latter in the civil society to be brought about in the not too distant future. Private activities of the Church cannot be subject of restraint. They must be protected by constitutional provisions. Contrary to the communist period, no limits will be put on private economic and social activities. In this respect, one has to bear in mind the instruction of Lenin to the compilers of the 1922 Russian Civil Code which is as follows: «We do not recognize anything 'private'; for us, everything pertaining to the economy is a matter of public and not private law... Hence, we must enlarge the interference of the State with the relations pertaining to 'private' law, enlarge the right of the government to annul, if necessary, 'private contracts' and to apply to private law relations not the *corpus iuris romani* (sic! G.H.), but our revolutionary concept of law». The catastrophic consequence of the implementation of the “revolutionary concept of law” is quite obvious now. Constitutional provisions guaranteeing predominance of the “*ius privatum*” will undoubtedly be in accordance with the Christian concept of law closely linked with the concept of freedom developed by Christian thinkers.

IX. In the new constitutional and political system of the Eastern European countries relations between the individual and society (the State) will have to be brought into harmony with each other. Christian thinkers do not regard conflicts existing between individualism and collectivism as irresolvable ones. Overemphasizing contradictions between the individual and society (the State) is unacceptable for Christian thinkers. The former way of thinking leads necessarily, as this has been the case in the period of communism, to totalitarianism. Christian concept of democracy is, without a doubt, able to establish an equilibrium between

---

<sup>3</sup> See M.-F. Renoux-Zagamé, *Origines théologiques du concept moderne de propriété*, Droz, Genève-Paris, 1987.

<sup>4</sup> See in this regard the works of Friedrich Adolf Trendelenburg, *Die sittliche Idee des Rechts*, Berlin, 1849 and *Das Naturrecht auf dem Grunde der Ethik*, Leipzig, 2<sup>nd</sup> ed. 1868.

individualism and collectivism. For successful constitutional engineering in Eastern Europe, after the fall of the period of totalitarianism, will be advantageous to take seriously into account the Christian concept of human freedom rooted in the Gospels. This concept could constitute the theoretical basis of a legal conceptualization within constitution-making the social, political and economic rights and duties of the citizens in Eastern Europe.

*Recibido el 5 de noviembre de 2010 y aceptado el 7 de diciembre de 2010.*





## ITINERARIO VITAL Y DOCTRINAL DE DOMINGO DE SOTO: IMPLICACIÓN POLÍTICO-SOCIAL DESDE LA ORTODOXIA

Sixto SÁNCHEZ-LAURO\*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

**Sixto Sánchez-Lauro** (2011): "Itinerario vital y doctrinal de Domingo de Soto: implicación político-social desde la ortodoxia", en *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, n.º 1 (marzo 2011), pp. 113-137. En línea: <http://www.eumed.net/rev/rehipip/01/ssl.pdf>.

**ABSTRACT:** The life course and doctrinal of the theologian-jurist Domingo de Soto, a senior member of the School of Salamanca, elapses during the heyday of the Habsburg dynasty. From his privileged vantage point of the influential Convent of San Esteban as well as his condition as professor of Theology at the University of Salamanca –enjoying a time of great prestige–, Soto creates a heavy and dense theological-philosophical-law widespread work, which would help to consolidate the reformed doctrine of the Second Scholasticism or Natural Castilian Law. Domingo de Soto also participated actively in those relevant events of his time, both national and international, that demanded the opinion and intervention of the famous dominican: acts and polemics against the social evil of pauperism and beggary in defense of the truly needy; he went to the Council of Trent as the representative of the Empire and the University of Salamanca; he participated in the draft of the Interim of Augsburg; he was appointed as confessor of Charles V; he was present in disputes between Bartolomé de Las Casas and Ginés de Sepúlveda on the American settlement; he was required several times by the Inquisition to evaluate matters regarding the Court of Faith like the thorny process of archbishop Carranza; he expressed his opinion on political issues like the clashes between Philip II and Paul IV.

**KEY WORDS:** Domingo de Soto, School of Salamanca, Political, Begging, Inquisition, Defense of the indians, Natural law, Power legitimation and limitation, University of Salamanca, Order of Preachers.

**RESUMEN:** El itinerario vital y doctrinal del teólogo-jurista Domingo de Soto, miembro destacado de la Escuela de Salamanca, transcurre durante el período de máximo esplendor de la dinastía de los Austrias. Desde su privilegiada atalaya del influyente Convento de San Esteban y bajo su condición de catedrático de Teología de la Universidad de Salamanca, coincidente con su momento de mayor prestigio, Soto genera una copiosa y densa obra teológico-filosófico-jurídica, que gozará de gran difusión y que contribuirá a consolidar la doctrina reformadora de la segunda escolástica o iusnaturalismo castellano. Asimismo, Domingo de Soto participa activamente en aquellos acontecimientos de magno interés, tanto nacionales como internacionales, que exigían la opinión e intervención del insigne dominico: actúa y polemiza ante la plaga social del pauperismo y la mendicidad en defensa de los verdaderos necesitados, acude al Concilio de Trento como representante imperial y

\* Profesor Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.

de la Universidad salmantina, participa en la redacción del *Interim* de Augsburgo, es nombrado confesor del emperador Carlos V, está presente en las controversias surgidas entre Bartolomé de Las Casas y Ginés de Sepúlveda acerca de la colonización indiana, es solicitado en diferentes ocasiones por la Inquisición para valorar asuntos concernientes con el Tribunal de la fe como el espinoso proceso del arzobispo Carranza, emite y compromete su opinión frente a cuestiones políticas como los enfrentamientos entre Felipe II y Paulo IV.

PALABRAS CLAVE: Domingo de Soto, Escuela de Salamanca, Ideas políticas, Mendicidad, Inquisición, Defensa de los indios, Iusnaturalismo, Legitimación y limitación del poder, Universidad de Salamanca, Orden de Predicadores.

## 1. Introducción

En este trabajo<sup>1</sup> que presentamos no hemos pretendido afrontar ni elaborar un exhaustivo estudio biográfico del relevante teólogo-jurista Domingo de Soto<sup>2</sup>; realmente, lo que hemos procurado mostrar es su actitud y su quehacer vital frente a determinados fenómenos políticos, sociales e ideológicos de extraordinaria relevancia en la España del Quinientos, todo ello encuadrado en el trasfondo histórico en el que se inscribe su persona y su obra. Se trata, pues, de una síntesis biográfica orientada a conocer mejor estas líneas maestras del *opus* sotiano, tanto doctrinales como fácticas, con especial referencia a los aspectos más sobresalientes en la temática político-religiosa resultante del fenómeno apuntado.

## 2. Vinculación de Domingo de Soto a la Escuela de Salamanca

Domingo de Soto nace en Segovia en 1495 (1494?) y muere en el Convento dominicano de San Esteban de Salamanca en 1560. Su nombre de pila es Francisco, que cambia por el de Domingo al ingresar en la Orden de Predicadores de Santo Domingo de Guzmán, en 1524. Hijo de “cristianos viejos”, su padre, agricultor, tenía ascendencia avulense, y su madre, segoviana, “de linaje de hijosdalgos”. El reconocimiento de sus orígenes aparece en la mayoría de sus escritos al llevar a la portada de los mismos el calificativo toponímico *Segobiensis*. Estudia latinidad en su ciudad natal. Se incorpora en 1513 al Colegio de San Ildefonso de la naciente Universidad de Alcalá en donde cursa los estudios filosóficos de Artes, graduándose de bachiller en 1516. Es muy probable que tuviese por maestro al insigne reformador agustiniano Santo Tomás de Villanueva. Después, en 1517, marcha a París para estudiar teología e ingresa en el Colegio de Santa Bárbara.

<sup>1</sup> Este trabajo forma parte de las actividades del Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, DER2008-06370-C03-03, “Teoría política, derecho y gobierno en Cataluña y Valencia (siglos XVI-XVIII)”, dirigido por el Dr. Xavier Gil Puyol.

<sup>2</sup> Contamos con una excelente biografía general de la figura de Domingo de Soto escrita por el historiador Beltrán de Heredia (Vicente Beltrán de Heredia, *Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado*, [Biblioteca de Teólogos Españoles, vol. 20], Salamanca, Instituto de Cultura Hispánica, 1960, 779 pp.).

Ya en la ciudad del Sena, Soto procura conocer a los maestros más prestigiosos y las tendencias más avanzadas del momento. Asiste a las lecciones del nominalista escocés Juan Mayr –Ioannes Maior– y a las del valenciano Juan Celaya, como antes había hecho Francisco de Vitoria, así como a las de los españoles Gaspar Lax y Antonio Coronel. Espíritu abierto a todas las influencias, Soto no podía contentarse con recibir la impronta de una única corriente, aunque estuviera aureolada por el prestigio que entonces gozaba el nominalismo, y que conocía bien por haberse formado en él, primero en Alcalá y después en Santa Bárbara. *Inter nominales nati sumus, interque reales enutriti*, consignará años después en el prólogo a su exposición filosófica de la *Isagoge* de Porfirio<sup>3</sup>. Su avidez científica le inducía a frecuentar otros centros, como el Colegio internacional dominicano de Saint-Jacques, en donde su futuro hermano de religión y colega Francisco de Vitoria explicaba, como bachiller sentenciario, no las *Sentencias* de Pedro Lombardo, según hacían otros maestros, sino la *Summa* de Santo Tomás.

Las preocupaciones de Vitoria por la renovación de métodos y la revitalización de la teología, fueron impregnando el inquieto espíritu de Domingo de Soto. Es un hecho que estos encuentros parisienses con Vitoria fueron decisivos para el futuro del segoviano. «La figura de Domingo de Soto –escribe Jaime Brufau– está íntimamente ligada a la de Francisco de Vitoria. Fue una de las primeras conquistas del autor de las Relecciones *De Indis*, durante su profesorado en París; más tarde habría de tenerlo como compañero de claustro en las aulas salmantinas, y, una vez muerto, como su sucesor en la cátedra de Prima de Teología. Juntos participaron en la labor docente del *alma mater* y en los asuntos del claustro universitario, juntos colaboraron en la formación de sus alumnos y de sus hermanos de hábito en el Convento salmantino de San Esteban, juntos mantuvieron con firmeza posturas que les dictaba su conciencia. Compartiendo una misión idéntica, los dos trabajaron en la consecución de un mismo ideal»<sup>4</sup>.

Este ideal, constante denominador común de ambos teólogos-juristas, sería la restauración de la teología escolástica en una perspectiva vital, proyectándola hacia los problemas morales, filosóficos, económicos, jurídicos y políticos de su tiempo y que encontraban su ámbito estimulante en el seno de la Universidad salmantina. Así se comprende mejor y más adecuadamente la producción científica de Soto que culmina en su monumental tratado *De Iustitia et Iure*<sup>5</sup>.

No hay que perder de vista la impronta nominalista de Soto. A pesar de su posterior adscripción a la línea tomista, que otrora imprimiera el P. Juan Hurtado de Mendoza a los estudios del Convento dominicano de San Esteban de Salamanca, no deja de mantener elementos de talante nominalista que significan estímulos hacia la realidad concreta e individualizada y que en él supusieron una conexión viva y constante con la circunstancia histórica en la que se hallaba inmerso.

La incidencia del nominalismo en el plano del saber no estaba ausente en los métodos y procedimientos de argumentación de la época hasta tal punto que no pocas veces resultaba difícil discernir entre doctrina y formulismo metodológico. Con todo, el nominalismo contaba en su favor el haber suscitado nuevos puntos de vista en diversos ámbitos, como el de la física y el de la ética, en los que estaban presentes valores positivos que podían enriquecer la teología escolástica como

---

<sup>3</sup> *In Dialecticam Aristotelis commentarii*, Salmanticae, Ioannes de Giunta excudebat, 1543 (1544).

<sup>4</sup> Jaime Brufau Prats, "Humanismo y derecho en Domingo de Soto", en Jaime Brufau Prats, *La Escuela de Salamanca ante el descubrimiento del Nuevo Mundo*, [Biblioteca de Teólogos Españoles, vol. 33], Salamanca, San Esteban, 1989, p. 61.

<sup>5</sup> *De Iustitia et Iure, Libri decem*, Salmanticae, excudebat Andreas à Portonariis, 1553 (1554).



nuevas aportaciones. Nada tiene de extraño que en un espíritu como el de Domingo de Soto quedasen, como herencia de su primera formación, elementos de talante nominalista, menos acusados en cuanto a la doctrina y con más peso en lo referente al método y a los procesos discursivos.

Soto, una vez graduado de maestro en Artes y habiendo estudiado dos años de teología en París, aparece de nuevo a fines de 1519 en Alcalá como colegial mayor en San Ildefonso, en donde continuará sus estudios teológicos inacabados, ejerciendo simultáneamente la docencia filosófica. En el Colegio, las cátedras de Artes solían ofrecerse a los colegiales mayores durante un quadrenio. Soto, en el verano de 1520, ganará una cátedra de Artes, que regentará hasta 1524. Por estas fechas, los nominalistas conservaban una clara preponderancia en la Universidad complutense; con todo, Domingo de Soto, inclinado al tomismo pero todavía no identificado plenamente con él, será uno de los primeros en combatir a los nominales complutenses, introduciendo una exposición más razonada de Aristóteles.

Durante este período en Compluto, Soto se verá envuelto en una serie de agitaciones internas acaecidas dentro de la comunidad de la que formaba parte. Como es sabido, después de la muerte de Cisneros, el Colegio de San Ildefonso y la Universidad entera se hallaban envueltos en luchas partidistas, rencillas y disputas entre diversos bandos. Existía una tendencia partidaria del control del emperador Carlos, a la que se oponía otra deseosa de una autonomía total, y entre ambas quedaba otra moderada en la que se encontraba Soto. Al estallar la revolución de las Comunidades de Castilla, Alcalá, dependiente de Toledo y ofendida por los despojos que Carlos V había hecho, a título de patrono, de la hacienda que Cisneros legó al Colegio, apoyó mayoritariamente a los comuneros<sup>6</sup>. Este hecho, una vez sofocado el movimiento revolucionario, movió a la Universidad a enviar, en misión de paz y para cerrar cicatrices, a Domingo de Soto como persona neutral y de prestigio, para que se entrevistara en Guadalajara con el duque del Infantado. Y cuando, por desavenencias con el pueblo de Alcalá, la Universidad complutense intentó trasladarse a Salamanca, será el conciliador segoviano el que, con este fin, intervenga directamente, visitando la ciudad del Tormes en 1522.

Pensaba Soto ascender en el magisterio y llegar a ocupar una cátedra de Teología; pero, inclinándose hacia la vida religiosa, una vez terminado el quadrenio de su cátedra colegial, aunque sin haber finalizado aún sus estudios de teología, marchó en 1524 al Monasterio catalán de Montserrat, intentando ingresar en la Orden de San Benito. Serán los mismos monjes de Montserrat quienes le aconsejen su ingreso en la Orden de Predicadores, considerando que el carácter de ésta estaba más próximo a la actividad docente, a la que Soto se sentía particularmente llamado. En efecto, llegado a Castilla, tomó el hábito de Santo Domingo e inicia su noviciado a principios del verano de 1524 en el Convento de San Pablo de Burgos, profesando en esta misma casa un año después. Su acta de profesión religiosa solemne lleva la fecha de 23 de julio de 1525.

Ya fraile dominico, continuó Soto su magisterio enseñando lógica en el Convento burgalés. Sin embargo, a fines de este año sería trasladado, también como profesor, al Convento de San Esteban de Salamanca. Las motivaciones de este cambio parecen girar en las pretensiones de la Orden dominicana de ocupar cátedras universitarias de mayor realce. Habiendo quedado vacante la cátedra de Vísperas de Teología en la Universidad salmantina, Soto hará oposición a ella frente al

---

<sup>6</sup> Joseph Pérez, *La revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521)*, 3ª edición, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 1979, pp. 323-325.

agustino Alonso de Córdoba, obteniéndola con brillantez el 22 de noviembre de 1532; el 14 de noviembre había obtenido el grado de licenciado en Teología. El otorgamiento del magisterio se fijó para el mes siguiente; el 8 de diciembre, actuando Francisco de Vitoria como padrino, recibía el birrete doctoral en Salamanca. Con ello, finalizaba sus estudios teológicos iniciados en París y continuados en Compluto, sumando el magisterio o doctorado de teología al que ya tenía de filosofía o artes obtenido en las Universidades alcalaína y parisina.

Con la obtención de la cátedra de Vísperas en el Estudio General salmantino, que ocuparía durante dieciséis años, Domingo de Soto quedó constantemente vinculado al prestigioso Colegio universitario dominico de San Esteban, pionero en el ámbito teológico y el mejor caladero de profesores de la Facultad de Teología de la Universidad desde su nacimiento en 1381; no obstante, su vinculación a la ciudad del Tormes venía produciéndose ya desde finales del año 1525, si se exceptúa el curso de 1528-29, en el que Soto se trasladó a Burgos para atender de cerca a la impresión de su primer libro, el *Compendium Summularum*<sup>7</sup>, comentario a las *Summulae* de Pedro Hispano. Después, permanecerá en Salamanca hasta su muerte, acaecida en 1560, dedicado a la docencia universitaria (primero en la cátedra de Vísperas, después en la de Prima), a su densa y copiosa obra escrita y a sus funciones religiosas como fraile.

Su estancia en Salamanca se verá interrumpida únicamente por aquellos acontecimientos político-religiosos de magno interés, tanto nacionales como internacionales, que exigían la opinión del insigne fraile dominico. Así, Soto acude al Concilio de Trento, a petición del Emperador y del príncipe heredero Felipe. Su controversia, surgida en estas fechas entre él y el dominico italiano Ambrosio Catarino sobre la gracia y la justificación, está en conexión directa con la preeminencia alcanzada por Soto en la Asamblea tridentina, y que, a la vez, le granjeó una abierta hostilidad del partido italiano. En los inicios de 1548, en plena Dieta, se traslada a Augsburgo, llamado por Carlos V para que se incorpore a los trabajos y negociaciones entre imperiales y representantes del Papa para la redacción del *Interim*, en búsqueda de una solución definitiva respecto del reformismo luterano. En agosto de este año, Soto se convierte en confesor del Emperador, radicalizándose las discrepancias del dominico con los enviados papales, ya existentes desde Trento. No fueron gratificantes para el pacífico Soto estos momentos en la Corte imperial. Ante las constantes intrigas y tergiversaciones palatinas, abandona voluntariamente su influyente puesto de confesor para regresar, en 1550, a Salamanca; aunque antes de su marcha, el César le ofrece el obispado de Segovia, pero Domingo de Soto lo declina y regresa a su refugio salmantino, a su Convento y a su Universidad. En la ciudad castellana sería recibido como gran triunfador, saliendo a su encuentro el Claustro universitario, el Cabildo Catedral y las autoridades municipales.

En esta última década de su vida, estando en su retiro salmantino, otros acontecimientos diversos requirieron la intervención del teólogo-jurista segoviano, como las controversias surgidas entre Bartolomé de Las Casas y Ginés de Sepúlveda acerca de la conquista del Nuevo Mundo, que desembocaron en las Juntas de Valladolid de 1550 y 1551, o las diferencias y enfrentamientos entre Felipe II y Paulo IV.

También su prestigio le involucró en la esfera del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Ya en 1540, el Santo Oficio había encargado a Soto el control de las

---

<sup>7</sup> *Summulae*, Burgis, in officina [...] loa[n]nis iunte [sic], 1529.

librerías salmantinas con el fin de evitar la divulgación doctrinal protestante; pero es entre 1550 y 1560 –década de gran represión inquisitorial– cuando el teólogo salmantino va a verse constantemente solicitado por el Tribunal de la fe. Domingo de Soto participa en algunos de los asuntos más graves y delicados que en este período se trataron, tales como las deliberaciones y calificación, en 1550, de las proposiciones heterodoxas del prestigioso predicador sevillano Juan Gil –conocido como Dr. Egidio– y la consiguiente reconciliación del mismo, llevada a cabo solemnemente en la Sevilla de 1552; en la *Censura* de biblias de 1554; en las sospechas inquisitoriales sobre el franciscano Miguel de Medina a causa de ciertos matices de sabor luterano en sus escritos; o en la censura que Soto redactó a los *Comentarios sobre el Catechismo cristiano* del también dominico Bartolomé Carranza de Miranda, arzobispo de Toledo, entre 1558 y 1559.

El peso de los años y de sus actividades<sup>8</sup>, unido a los achaques de la gota que padecía, iban minando sus fuerzas. Moría el 15 de noviembre de 1560 en el Convento salmantino de San Esteban después de haber ocupado su itinerario humano e intelectual un lugar relevante en el período de máximo esplendor de la Monarquía hispánica, período coincidente con las primeras décadas de andadura de la Inquisición como herramienta y reflejo de la intolerancia hacia la heterodoxia.

### 3. Período salmantino anterior a Trento

Vicente Beltrán de Heredia, gran conocedor de Domingo de Soto, le sitúa en Salamanca a finales del año 1525, basándose en una declaración posterior del mismo Soto de que en ese año «vino a vivir a la dicha casa e monasterio», cuando estaba en los cimientos su maravillosa iglesia actual<sup>9</sup>. A partir de esta fecha la vinculación salmantina de Soto es plena, pudiendo distinguirse dos etapas claramente diferenciadas: la primera, que abarcaría desde 1525 hasta su salida para Trento, en 1545, y la segunda, que oscilaría entre 1550 –regreso de Soto a la ciudad del Tormes– y 1560 –año en que se produce su óbito–. Durante la primera etapa, objeto de este apartado, Soto se dedicó fundamentalmente a la enseñanza teológica en el Convento de San Esteban, primero, y después, una vez ganada la cátedra de Vísperas, en la Universidad castellana, alternando la función docente con la publicación de destacados escritos de diferente índole.

A lo largo de este cuarto de siglo anterior al Concilio de Trento, coincidente con la primera etapa salmantina de Soto, se produce un gran impulso en el renacimiento de la Escolástica, superando el movimiento nominalista y manteniendo diálogo fecundo con las nuevas líneas del pensamiento renacentista que, a comienzos del siglo XVI, parecían bloquear el escolasticismo aristotélico. Esta reavivación de la Escolástica estuvo particularmente vinculada a la Orden de los Predicadores, que produjo conocidos comentadores de Santo Tomás, como los italianos Tomás de Vio - Caietanus– o Francesco Silvestris y otros eminentes teólogos españoles, como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano y Domingo Báñez. Es indudable que el Concilio de Trento contribuyó a dar un nuevo y poderoso impulso a la renovación del pensamiento escolástico reforzando la labor realizada por los dominicos años antes. Hubo otros elementos que contribuyeron a esta prolongación

---

<sup>8</sup> A esta proyección externa, ha de añadirse su compromiso en la gestión del reputado e influyente Convento de San Esteban en el que fue prior de 1540 a 1542, de finales de 1544 hasta 1547 (aunque lo ejerció poco, dada su incorporación a Trento en 1545) y, por tercera vez, de abril a noviembre de 1560.

<sup>9</sup> Vicente Beltrán de Heredia, *Domingo de Soto. Estudio biográfico documentado*, ed. cit., p. 67.

de la vida del escolasticismo, en su época postridentina, como la Compañía de Jesús, que dio personajes de gran talla como Francisco de Toledo, Luis de Molina, Gabriel Vázquez, Roberto Bellarmino o Francisco Suárez<sup>10</sup>.

Antes del cambio llevado a cabo por Vitoria, la cátedra de Vísperas, en Salamanca, compartía con la de Prima la exposición de los libros del Maestro de las Sentencias. Con la sustitución de la obra de Pedro Lombardo por la *Summa* –hecho que provocó grandes protestas alegando que se violaban los Estatutos universitarios–, la doctrina de Santo Tomás no sólo quedaba preeminente en la cátedra vitoriana de Prima, sino también en la de Vísperas con la entrada de Soto como catedrático de la misma en 1532. En el curso de 1539-40 se ordena que, según los Estatutos universitarios dados el año anterior, en las cátedras de Prima y de Vísperas se “leyese” por las Sentencias. Soto, en la de Vísperas, continuó de hecho dando preferencia al orden y método de Santo Tomás, aunque para cumplir la ley universitaria diera también cabida, aunque de modo muy formal, al Maestro de las Sentencias continuando así hasta 1545, año en que abandona la Universidad para asistir al Concilio.

Y si la labor sotiana en las aulas salmantinas durante estos años pretridentinos es, junto a la de Vitoria, de vital importancia de cara a la restauración de la Escolástica, no alcanza menor importancia la producción literaria que el dominico segoviano llevará a cabo. A diferencia de Francisco de Vitoria, reacio a dar a la imprenta las obras salidas de su genio, su fiel colaborador y continuador Domingo de Soto quiso complementar su obra dedicando tiempo y esfuerzo a la redacción de libros y tratados que habían de ser dados a la imprenta y que, de esta manera, prolongaban y ampliaban la labor docente en las aulas salmantinas.

Soto es un escritor enormemente prolífico. Su creación literaria, publicada en su mayor parte en vida del autor, se centra especialmente en escritos de origen académico. El período pretridentino, ve aparecer una porción de obras de Soto, de carácter filosófico, como son el comentario a las *Sumulas* de Pedro Hispano (*Compendium Summularum*), en 1529<sup>11</sup>, el comentario a la *Dialéctica* de Aristóteles (*In Dialecticam Aristotelis: Isagogen Porphyrii ac Aristotelis Categorías et De Demonstratione*), en 1543 (1544)<sup>12</sup>, y el comentario a la *Física* de Aristóteles (*Super octo libros Physicorum commentaria y Super octo libros Physicorum quaestiones*), impresa circa 1545<sup>13</sup>. Adapta la forma de comentario a los libros que estaban en uso en las aulas universitarias y, a juzgar por el número de ediciones, tales comentarios tuvieron por mucho tiempo un gran predicamento en el ámbito intelectual.

---

<sup>10</sup> «El siglo XVI –dice Jaime Brufau– fue el siglo de oro de la Universidad de Salamanca y Francisco de Vitoria y Domingo de Soto tienen el mérito de figurar entre los principales artífices de crecimiento del prestigio del antiguo Estudio General. No poco contribuyó al desarrollo de la Escuela de teólogos-juristas de Salamanca el modo de enseñanza dado en la Universidad; a él debemos varias de las obras de Domingo de Soto. Una de las innovaciones de gran importancia fue la introducida por Vitoria, al usar como base de sus explicaciones la *Summa Theologica* de Santo Tomás, aunque conservando un respeto reverencial al *Libro de las Sentencias*, de Pedro Lombardo» (Jaime Brufau Prats, *El pensamiento político de Domingo de Soto y su concepción del poder*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1960, pp. 8 y 9).

<sup>11</sup> La edición de las *Summulae* de 1529 en Burgos va a ser profundamente revisada y ampliada en la segunda edición que Soto publica en Salamanca en 1539 (1540).

<sup>12</sup> *In Dialecticam Aristotelis commentarii*, ed. cit.

<sup>13</sup> *Super octo libros Physicorum Aristotelis commentaria*, Salmanticae, Ioannes Giuntau, [ca. 1545] y *Super octo libros Physicorum Aristotelis quaestiones*, Salmanticae: Ioannes Giuntau, [ca. 1545]. La obra se publicó incompleta por causa de la marcha de Soto al Concilio de Trento, completándose en la edición de 1551.

Puede parecer extraño que Soto, regentando la cátedra de Vísperas en Salamanca, se preocupase por estudios de carácter filosófico y científico. Razones muy poderosas debieron influir en su ánimo entre las que han de contarse las constantes peticiones de sus superiores, el interés de las Universidades de Alcalá y Salamanca por fortalecer los decadentes estudios de Artes y el éxito de la edición burgalesa de las *Súmulas* en 1529. Grande debió ser el esfuerzo que supuso para Soto tener que remitirse a sus pasados años de docencia filosófica en Alcalá. Se ha achacado a estos escritos falta de cohesión y de esmero, que presentan un sabor marcadamente terminista y que adolecen de poca acomodación al espíritu de Santo Tomás, al que conscientemente se adscribía. Pero esto no empaña la influencia que ejercieron, especialmente en el desarraigo del nominalismo en la Universidad de Salamanca<sup>14</sup>.

Entre las demás obras de Soto, escritas con anterioridad al Concilio, destaca el opúsculo *Deliberación en la causa de los pobres (In causa pauperum deliberatio)*<sup>15</sup>. Este pequeño tratado, editado simultáneamente en latín y en castellano, tiene un origen circunstancial extraacadémico por la confluencia de hechos sociales y políticos del momento. La carestía de trigo, debido a las malas cosechas de 1540 y años posteriores, potenció el espectro del hambre, institucionalizándose aún más el pauperismo. Ante esta plaga social, la Corte se sintió obligada a tomar severas medidas sobre el control de la mendicidad (reformas de las denominadas “políticas de pobres”). El todopoderoso cardenal Tavera pidió a Soto y al benedictino Robles (alias Juan de Medina) que le enviasen sus reflexiones ante el pauperismo que azotaba a la Castilla del momento.

Domingo de Soto, basándose probablemente en su elección sobre la limosna, dada en 1542-43, y cuyo texto no se conserva, acaso por el hecho de haber sacado a la luz el citado opúsculo, redactó éste en un brevísimo espacio de tiempo, publicándose en 1545. En él, hace una decidida y persuasiva defensa del derecho de los verdaderos pobres a pedir y a vivir de la caridad. La vagancia –afirma Domingo de Soto– es algo ilícito y prohibido para los que pueden trabajar. Los verdaderamente pobres, los que realmente tienen necesidades que no pueden satisfacer de otro modo, tienen derecho a mendigar, derecho que no se les debe privar de ejercitar en ningún sitio, a menos que se les provea de otro modo de lo necesario. La publicación posterior de las reflexiones de Robles, no coincidentes con las de Soto, encendió una fuerte polémica (algo muy habitual en el ámbito intelectual de la época), generándose un enriquecedor debate ideológico referencial sobre este grave problema social<sup>16</sup>.

Las medidas solicitadas por Soto van encaminadas a responsabilizar al Poder público de los problemas sociales, superando la actitud medieval, que quería solucionarlo con iniciativas voluntarias de amor y generosidad. De cuestión moral y religiosa, el pauperismo y la mendicidad se van a transformar en una cuestión

---

<sup>14</sup> La investigadora segoviana M<sup>a</sup> del Pilar Cuesta nos puntualiza que las *Súmulas* gozaron de 11 ediciones únicamente en la centuria del Quinientos, la *Dialéctica* se editó 13 veces, el *Comentario a los Físicos*, 9 ediciones y 8 las *Cuestiones sobre los Físicos*, durante el mismo período (M<sup>a</sup> del Pilar Cuesta Domingo, *Domingo de Soto y su obra*, Segovia, Colegio Universitario de Segovia, 1996, pp. 82, 83).

<sup>15</sup> *Deliberación en la causa de los pobres*, Salamanca, en la oficina de lua[n] de lu[n]ta, 1545. *In causa pauperum deliberatio*, Salmanticae: in officina loa[n]nis Giuntae, 1545.

<sup>16</sup> M<sup>a</sup> del Pilar Cuesta Domingo, “La obra literaria de Domingo de Soto, *qui scit Sotum scit totum*”, en Mariano Cuesta Domingo [coord. y ed.], *Domingo de Soto en su mundo*, Segovia, Colegio Universitario “Domingo de Soto”, 2008, pp. 244-245.

política. Lo cual enlaza con la preconizada intervención del Poder en el ámbito de la ortodoxia religiosa, intervención que lleva un sello inconfundible de defensa de la situación política vigente.

Por último y dentro de la producción literaria de Soto en este período, es preciso dedicar una especialísima atención a sus relecciones universitarias. Los catedráticos titulares, además de las explicaciones ordinarias (*lectiones*) de la materia, estaban obligados por ley a dar una relección (*relectio*) anual. Esta relección había de versar sobre uno de los temas asignados o contenidos del curso, relección que venía a complementar y a profundizar, fuera del contexto habitual de la clase, dichas lecturas ordinarias. La relección, que debía darse anualmente por cada catedrático, tenía una duración de unas dos horas y solía efectuarse al final del año académico. Si por una circunstancia justificada un profesor no podía darla, se aplazaba para el próximo curso, sin exonerarle de la obligación de dar también la correspondiente al mismo; en caso contrario, era sancionado con una multa.

En esta disertación o conferencia académica el catedrático de cada disciplina exponía, como hemos dicho, de acuerdo con su propia perspectiva personal y con mayor profundidad, algunas de las partes explicadas o relacionadas con la materia concerniente al año académico en curso; pero ello daba ocasión a que pudiera hacerlo sobre cualquier otro punto doctrinal de interés en ese momento, buscando una conexión por lejana que fuera con la materia del año. Recordemos el paradigmático caso de la relección vitoriana *De Temperantia*, en la que Vitoria, preguntándose si es lícito comer carne pasa a cuestionarse si puede comerse carne humana, como hacen los indios del Caribe, y que implicaba el problema de si podía impedirse esta práctica por la fuerza y consiguientemente el de los justos títulos de conquista del Nuevo Mundo.

De ahí, la gran importancia que las relecciones podían llegar a tener en cuanto a creatividad o aportación doctrinal y científica por parte de sus autores, a la vez que suponen fuentes históricas inestimables para conocer el pensamiento de estos intelectuales universitarios sobre temas que, normalmente, incidían sobre la más palpitante actualidad. Ejemplo cercano lo encontramos en las celebérrimas relecciones *De Indis* del padre Vitoria o en cualquiera de las relecciones de Domingo de Soto.

Mientras ocupó la cátedra de Vísperas, Soto pronunció diez relecciones<sup>17</sup>, recogidas y atesoradas como textos manuscritos, aunque publicadas en su mayoría es estas últimas décadas<sup>18</sup>. Para ilustrar lo expuesto, recurramos a una de las relecciones sotianas impartidas, a la relección *De haeresi*. Las explicaciones sotianas del curso ordinario 1538-1539 versaron, de hecho, sobre la *Prima Secundae*, qq. 90-114, que tratan sobre la ley (qq. 90-108) y sobre la gracia (qq. 108-114), y sobre la *Secunda Secundae*, qq. 1-22, que tratan sobre las virtudes de la

---

<sup>17</sup> Está en curso de publicación la edición crítica de todas las relecciones de Domingo de Soto, junto con sus opúsculos, por la editorial San Esteban de Salamanca, bajo la dirección del Dr. Jaime Brufau Prats.

<sup>18</sup> Las relecciones impartidas por Soto desde su cátedra de Vísperas son las siguientes: *De merito Christi* (curso 1533-1534), *De dominio* (1534-1535), *De indulgentiis* (1535-1536), *De sacro canone et de eius sensibus* (1536-1537), *De catalogo librorum Sacrae Scripturae* (1537-1538), *De sensibus Sacrae Scripturae* (1537-1538; con esta segunda relección quedaba al corriente por la ausencia de relección en el curso 1532-1533), *De haeresi* (1538-1539), *De ratione tegendi et detegendi secretum* (1540-1541), *De elemosyna* (1542-1543; no ha llegado hasta nosotros, aunque posiblemente fue refundida en el opúsculo *Deliberación en la causa de los pobres*); la relección del curso 1544-1545 no la conocemos y la ausencia de relección en los cursos no reflejados le supuso a Soto el ser multado por el Claustro al no cumplir con la obligación estatutaria.

fe y de la esperanza. Precisamente, la q. 11 es la que estudia directamente la herejía: *Utrum haeresis sit infidelitatis species* (a. 1); *utrum haeresis sit proprie circa ea quae sunt fidei* (a. 2); *utrum haeretici sint tolerandi* (a. 3); *utrum revertentes ab haeresi sint ab Ecclesia recipiendi* (a. 4). Con todo, Domingo de Soto, al señalar que su relección *De haeresi* corresponde a la materia de las lecciones ordinarias, afirma que sigue a Pedro Lombardo en el libro III de las *Sentencias*, dist. XXIII y siguientes, en las que trata acerca de la fe.

Esta aparente antinomia se resuelve teniendo en cuenta la praxis que se seguía en Salamanca en la aplicación de los Estatutos de la Universidad, ya que éstos mandaban que se explicase por el *Libro de las Sentencias*. Vitoria –y en su seguimiento, Soto– acostumbrado en París a seguir el orden de la *Summa*, introdujo esta práctica en sus explicaciones en la cátedra de Prima. Presentaba las correspondencias que, en la materia que tenía asignada, se daban entre las *Sentencias* y la *Summa*, pero siguiendo el orden de ésta. En el curso de 1539-40, se le impuso, de acuerdo con los Estatutos de 1538, el orden de la obra de Pedro Lombardo; la tarea le resultó sumamente fatigosa a consecuencia de lo cual cayó enfermo y, por ello, se le autorizó a seguir explicando según el orden de la *Summa*. Esto implicó que se hiciera otro tanto en la cátedra de Vísperas –entonces regentada por Soto–, por mantener correlación con la de Prima, que ostentaba Vitoria. Lo que explica la afirmación de Soto al principio de la relección *De haeresi* de que sigue a Pedro Lombardo, cuando en realidad sigue el orden de la *Summa* de Tomás de Aquino.

#### 4. Soto en el Concilio de Trento

Salvadas las dificultades entre Roma, el Imperio y Francia que habían impedido la celebración de un concilio general en años anteriores, se hizo de nuevo la convocatoria del Concilio para el año 1545. Y es durante los primeros meses de este año cuando comienzan a llegar cartas de la Corte imperial a diferentes prelados y teólogos españoles pidiéndoles su participación en Trento. Ante la enfermedad de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto recibe, el 19 de marzo, una orden del Emperador, con otra de su hijo, el príncipe Felipe, mandándole que se prepare para asistir al Concilio<sup>19</sup>. Al margen de la designación imperial, la Universidad de Salamanca escoge a Soto como su teólogo ante la asamblea ecuménica tridentina. En consecuencia, Soto suspendió sus lecciones universitarias el 23 del mismo mes para reunirse con el compañero que se le había asignado, el también dominico Bartolomé Carranza de Miranda, en Valladolid, de donde partirían hacia Italia el 5 de mayo. Soto acude, pues, a Trento en representación de Carlos V y del Estudio General salmantino.

El Concilio no comenzaría hasta el 13 de diciembre de 1545. Durante los seis meses de espera en Trento, Soto se dedicó a observar la situación que tenía ante sus ojos y a ir trazando su plan para cuando se iniciasen las tareas conciliares. Su actividad se orientó a procurar mantener buenas relaciones con los allí reunidos, atrayéndose la admiración de los teólogos escolásticos. Asimismo, intima con el vicario general de la Orden de Predicadores, Francisco Romeo, teólogo eminente, que se encontraba en Trento desde el mes de mayo. Hasta tal punto llega esta intimidad entre los dos dominicos que, cuando el padre Romeo tiene que ausentarse

---

<sup>19</sup> Al parecer, es el confesor imperial, el dominico Pedro de Soto, quien recomienda a Carlos V esta alternativa ante la probable imposibilidad de desplazamiento del padre Vitoria al Concilio.

hasta octubre de 1546<sup>20</sup>, delega en Soto como vicevicario de la Orden en las reuniones sinodales, actuando como Padre del Concilio durante este tiempo.

Las intervenciones de nuestro teólogo en los trabajos ecuménicos tuvieron lugar, bien como vocal en las Congregaciones generales, bien como miembro de las Congregaciones particulares en que se dividió el Concilio, bien en los dictámenes privados que se le pedían por parte de los cardenales presidentes. Intervino vivamente Soto en el decreto sobre el impulso a dar a los estudios bíblicos y sobre la defensa e institucionalización de la teología escolástica, tras una encendida polémica, especialmente con los italianos. Pero en donde Soto va a tener una función decisiva va a ser en la laboriosa elaboración del decreto sobre la justificación. El 28 de octubre de 1546 escribía así el embajador imperial Diego Hurtado de Mendoza al César: «Ayer se acabó de disputar el artículo de la justificación, donde se han señalado harto fray Domingo de Soto, prior de Salamanca, que fue el que guió el negocio, porque habló primero y es letrado de mayo experiencia y certeza que ninguno de los italianos»<sup>21</sup>. Y el cronista fray Juan de la Cruz escribe: «Y en las disputas y tratados que antes de la determinación del concilio se hazían por letrados, tuvo grande autoridad, y él [Soto], juntamente con un obispo de la orden de Sant Francisco, italiano, llamado Cornelio, ordenó el estilo y puso en escrito las sentencias y cánones del dicho concilio por comission de los Legados del Papa que presidían»<sup>22</sup>.

En los últimos meses de 1546, Domingo de Soto dejó de asistir, con la asiduidad anterior, a las sesiones conciliares para dedicarse a fondo a la terminación de su obra *De Natura et Gratia*. A principios de 1547, parte para Venecia para cuidar de la impresión de dicho libro, el cual no saldría a la luz hasta mayo o junio del mismo año<sup>23</sup>. Este tratado iba dirigido a los Padres del Concilio y se planteaba como objetivo fundamental el combatir los errores luteranos; la obra sotiana tiene como base inmediata el decreto sinodal sobre el pecado original (lo aborda en el volumen primero) y el de la justificación (lo trata en los otros dos volúmenes<sup>24</sup>).

<sup>20</sup> Francesco Romeo di Castiglione ha de acudir a Roma para preparar el Capítulo General electivo de la Orden de Predicadores, que le designará como Maestro General de la misma.

<sup>21</sup> Archivo General de Simancas, *Estado*, leg. 1463, fol. 158.

<sup>22</sup> *Crónica de la Orden de Predicadores*, Lisboa, 1567, lib. V, fol. 248 va.

<sup>23</sup> Fratr[is] Dominici Soto Segobiensis Theologi Ordinis Praedicatorum ad sanctum concilium Tride[n]tinum, *De natura et gratia*, Venetiis, apud Iuntas, 1547.

<sup>24</sup> Ya conocemos la trascendencia de esta temática en las controversias con los protestantes. *De Natura et Gratia* –dice M. Menéndez Pelayo– «constituye el ataque más terrible que el luteranismo padeció en aquella centuria» (*La Ciencia Española*, vol. II, Madrid, CSIC, 1953, p. 74). Una de la tesis más ampliamente tratada por Soto en este tratado es la del libre albedrío. En contra de la opinión de Lutero, el profesor salmantino defiende la existencia en el hombre del libre albedrío, tanto en el orden natural como en el sobrenatural y de la gracia. El hombre es libre y dueño de sus acciones, y se prescribe a sí mismo el fin de sus actos. El hombre –continúa Soto– posee plena libertad y potestad para aceptar o rechazar los favores de Dios y para cumplir o no los preceptos divinos. La conversión del hombre a Dios, la justificación, es un acto espontáneo y libre; y, aunque Dios justifica al hombre por medio de la gracia, sin el asentimiento y la libre aceptación y cooperación de la voluntad humana, nada se hace. En el volumen tercero del tratado, Domingo de Soto defiende que, si bien en esta vida puede el hombre tener importantes conjeturas o hipótesis de su estado respecto de Dios, sin embargo, sin una revelación especial, ningún hombre puede tener legítima y verdadera certeza de hallarse en estado de gracia. Con ello, el teólogo dominico no solamente se oponía al protestantismo, sino también impugnaba la opinión de algunos católicos que, aunque disentían de los luteranos porque confesaban que la justificación humana requiere las buenas obras además de la fe, afirmaban que el hombre puede tener plena seguridad de hallarse en gracia. Para estos católicos, el hombre puede estar seguro de que, con el auxilio de Dios, se halla en disposición para recibir la gracia y, por consiguiente, puede estar seguro de haberla recibido, ya que Dios no la niega nunca a quien se halla



## 5. Erasmismo y política imperial. La posición de Domingo de Soto

Conocida es la postura del emperador Carlos de evitar la ruptura de la unidad espiritual cristiana, coincidiendo con una de las características fundamentales del erasmismo. La Dieta de Worms (1521), la Dieta de Augsburgo (1530), el *Interim* de Augsburgo (1549) y la Paz de Augsburgo (1555) constituyen testimonios fehacientes del irenismo carolino. El apoyo de Domingo de Soto a la política irenista del Emperador, en cuanto potencial titular de la *universitas christiana*, se refleja de modo muy especial en los años 1547-1550. Éste es otro de los aspectos que nos interesa resaltar en orden a comprender mejor la actitud sotiana referida a la heterodoxia y a

---

en estas circunstancias. Esta impugnación sotiana disgustó especialmente al obispo napolitano de Minori, Ambrosio Catarino, escritor prolífico y hábil polemista. Catarino, perteneciente también a la Orden de los Predicadores, refutó a Soto en el opúsculo *Defensio catholicorum qui pro possibili certitudine praesentis gratiae disseruerunt*, editado en Venecia en 1547. En él, el dominico italiano se lamenta de que Soto escandalice a los ignorantes asegurando que existen diferencias, no sólo con los luteranos, sino incluso entre los católicos sobre puntos definidos por el Concilio. Domingo de Soto contestó con la *Apología qua R. P. Ambrosio Catharino episcopo Minoriensi de certitudine gratiae respondet*, la cual, en las sucesivas y numerosas ediciones del tratado *De Natura et Gratia*, se añadiría a modo de apéndice. En la *Apología*, Soto enuncia las diferencias de *certitudine gratiae* existentes entre las doctrinas de Catarino y las suyas. Además, argumenta cómo las tesis del teólogo humanista son inadmisibles y contrarias a lo decretado por el Concilio de Trento. Por último, responde a las razones en que se apoyaba Catarino para defender sus teorías. El italiano replicaría a la *Apología* sotiana con la obra *Expurgatio Fr. Ambrosii Catharini Peliti episcopi Minoriensis adversus Apologiam Dominici Soto*, la cual saldría a la luz a comienzos de 1548. Pero Soto ya no respondería. Esta controversia entre los dos teólogos dominicos parece ser que tenía sus raíces fuera del problema de *certitudine gratiae*. Ciertos sectores italianos manifestaron ya, desde el principio, cierta hostilidad hacia el teólogo salmantino; no le favorecía el ser un enviado imperial y un gran defensor de la teología escolástica, mientras que los humanistas italianos se decantaban por la teología positiva. Las discrepancias con algunos humanistas italianos nos muestran a un Soto aparentemente aferrado a la tradición medieval y opuesto a la gran renovación que implicaba el Renacimiento. J. Brufau Prats sopesa y justifica esta actitud sotiana. La postura del catedrático salmantino ante la corriente renacentista será, como anota J. Brufau, el mantener «la herencia medieval del espiritualismo cristiano [...], a la vez que están presentes el ansia y la preocupación por las nuevas formas de vida que cada día se distanciaban más de las medievales [...]». Soto se esfuerza por repensar la realidad de su tiempo y de su época, guardando las categorías de la transcendencia en la visión del hombre y de la dimensión universal implicada en la valoración de la personalidad» (Jaime Brufau Prats, «Humanismo y derecho en Domingo de Soto», *ed. cit.*, p. 62). Nuestro teólogo dominico intenta una rápida renovación de la Escolástica, pero «no deja de reivindicar la necesidad de la elegancia y del conocimiento en el bien decir, *linguarum peritia et cultus*, y sobre todo la renovación del contenido, librando a la Escolástica de sofismas y vanas elucubraciones metafísicas» (*ibid.*, p. 63). Para Soto, el humanismo existente «en la elegancia y el conocimiento en el bien decir» no es un fin en sí mismo, sino que está subordinado totalmente a una mayor comprensión del contenido. En el teólogo-jurista, la forma tiene únicamente un valor instrumental. Respecto del contenido, Soto pretende superar la inmanencia del Humanismo renacentista. Así pues, el hombre, desde su condición de libre, puede llegar al fin sobrenatural mediante la perfectibilidad del fin natural, si bien, para su consecución, necesita la ayuda de la fe, la cual viene a perfeccionar y complementar la labor de la razón. J. Brufau nos aclara: «Ligado así, aunque no confundido, el plano natural con el sobrenatural, la perspectiva sotiana enfoca claramente un humanismo cristiano que se podría llamar trascendente, en cuanto que postula el plano de lo sobrenatural como vía necesariamente perfecta del hombre» (*ibid.*, p. 65). Y añade: «Domingo de Soto, muy lejos de rechazar todo esfuerzo en orden a la perfección natural del hombre, postula el desarrollo y expansión de los valores humanos, en este mundo, aunque sin dejar de mirar a lo sobrenatural como consumativo de esta perfección humana» (*ibid.*, p. 66). Esta distinción de planos –natural y sobrenatural– se proyecta sobre la visión del ámbito revelado y constituye una clave para detectar, frente al luteranismo, el sentido del dogma y el criterio diferenciador de lo ortodoxo y lo heterodoxo, determinando el propio concepto de herejía que Soto había abordado en profundidad en su relección salmantina *De haeresi*.

la libertad religiosa. Ciertamente no encontramos implicaciones erasmianas en la abundante producción de Soto, lo cual puede explicarse, al menos en parte, por el hecho de que a partir de 1536 el erasmismo se encuentra en regresión y va siendo contemplado como movimiento espiritual heterodoxo<sup>25</sup>. Pero el teólogo-jurista no podía permanecer ajeno al valor positivo resultante del irenismo erasmista.

A mediados de 1547, Soto se reintegraría a Trento, precisamente cuando se había producido entre los padres conciliares una división de pareceres, deseando unos, fieles al Emperador y a su política de conciliación, permanecer en Trento, mientras que otros preferían el traslado del Concilio a Bolonia. Así venía a terminarse el primer período conciliar, aunque las actividades se prolongarán hasta 1549. Soto permanecerá en Trento hasta febrero de 1548, fecha en la que el Emperador solicita su presencia en la ciudad de Augsburgo para participar en la revisión de la fórmula del *Interim*. Carlos V deseaba solucionar siquiera provisionalmente –ya que el Concilio estaba de momento bloqueado– el problema religioso alemán; era necesario un inmediato entendimiento entre ambas partes, que cortase, o paliase al menos, la progresiva expansión de la herejía luterana. El Emperador continuaba pretendiendo materializar su sueño dorado de la unidad espiritual cristiana, la *universitas christiana*, en una línea conciliadora que concordaba con el humanismo erasmista.

El erasmista Julio Pflug fue uno de los redactores del proyecto del *Interim*, que será puesto a debate entre teólogos de ambas partes. Según J. Brufau, Domingo de Soto intervino y su aportación tuvo singular relevancia en la fijación del texto definitivo. «El *Interim* de Augsburgo conoció su mano, limando en el texto lo que él creía que no podía ser admitido en sana ortodoxia, afanándose, al mismo tiempo, por encontrar un terreno común de aceptación y diálogo para católicos y luteranos»<sup>26</sup>. Compuesto de 26 artículos, el *Interim* de Augsburgo fue publicado el 30 de junio de 1548, sin contar con Roma, como ley del Imperio. Hábilmente redactado y católico de espíritu, aunque con algunas omisiones, no contó con una acogida propicia, que tan necesaria era en aquellas circunstancias. El *Interim*, en contraste con la Paz de Augsburgo de 1555 que correspondía a inspiración diferente, constituye el último intento carolino a favor de una paz y concordia que preservara la unidad religiosa; el texto coincidía coincidiendo con los humanistas de inspiración erasmista, los cuales tendían a acomodaciones en el dogma y en la disciplina que permitieran orillar antagonismos violentos<sup>27</sup>. Se aprobó una fórmula de convivencia religiosa hasta la conclusión del concilio. «Ese fue el llamado *Interim* de Augsburgo o *modus vivendi* entre católicos y protestantes –dice Fernández Álvarez-, que trataba de dar satisfacción a las dos partes y no satisfizo a ninguna»<sup>28</sup>. Es de sobra conocido que, en estos momentos, el movimiento interno de la Reforma luterana y la efervescencia de la naciente Reforma católica predisponían más a la irreconciliación que a la conciliación, y no puede causarnos asombro el hecho de

---

<sup>25</sup> Bataillon expone con suma claridad la evolución del erasmismo en el período carolino; de un claro servicio a la política imperial en la transición de la tercera a la cuarta década de la centuria, se pasa a la persecución aislada de erasmistas, junto a la continuidad de focos de influencia, y al derrumbamiento total del irenismo y condena del erasmismo en los años cincuenta (Marcel Bataillon, *Erasmus y España*, 2ª edición, México – Madrid – Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1966).

<sup>26</sup> Jaime Brufau Prats, *Domingo de Soto. Relección "De Dominio"*, Edición crítica y traducción, con Introducción, Apéndices e Índices por..., Granada, Universidad de Granada, 1964, p. XXVI.

<sup>27</sup> Cfr. Joseph Lecler, *Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma*, t. I, Alcoy [Alicante], Marfil, 1969, p. 279.

<sup>28</sup> Manuel Fernández Álvarez, *España y los españoles en los tiempos modernos*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1979, p. 245.

que naufragara el espíritu de acercamiento sincero que la política imperial había reflejado en el *Interim*, al margen del Papado<sup>29</sup>.

En agosto de 1548, el también dominico Pedro de Soto abandonaba el cargo de confesor del Emperador, siendo nombrado para sustituirle Domingo de Soto<sup>30</sup>. Aunque Carlos V ya conocía al catedrático salmantino, su leal comportamiento en el Concilio y en la revisión del *Interim* le acrecentó aún más su óptima reputación ante el César. Con todo, Soto, enemigo de intrigas palaciegas y de ambición política, no dudaría en abandonar tan influyente cargo a comienzos de 1550. Durante el breve tiempo que ocupó el puesto de confesor, Soto mantuvo idéntica actitud de apoyo a la política de conciliación imperial<sup>31</sup>.

Ante la disputa y la tensión existentes entre el Emperador y Paulo III sobre el ducado italiano de Piacenza, el religioso segoviano no titubeó en aconsejar al Emperador medidas de defensa y en sostener que, ante la ausencia de otra alternativa, la guerra sería justa. En esta actitud campea la distinción clara para Soto entre el Papa como cabeza de la Iglesia y el Papa como soberano temporal; parecer que mantendrá posteriormente, cuando se produzcan los deplorables enfrentamientos entre Felipe II y Paulo IV<sup>32</sup>. Ni que decir tiene que esta postura sotiana reavivó la aversión de diversos italianos hacia el dominico español, como es el caso del legado pontificio ante la Corte imperial, Pedro Bertano, obispo de Farnese. Éste iniciará una campaña de difamación contra el confesor del César,

---

<sup>29</sup> Redactado el *Interim* de Augsburgo como fórmula de transacción, permitía el matrimonio de los sacerdotes y la comunión bajo las dos especies, entre otras exigencias de los protestantes. Pero este tipo de concesiones puramente religiosas no alcanzaron a satisfacer a los príncipes alemanes, que prosiguieron las hostilidades que llevarían a un último acuerdo general en 1555, en Augsburgo (Henry Kamen, *Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa moderna*, Madrid, Alianza Editorial, 1987, pp. 80, 81).

<sup>30</sup> Domingo de Soto era el tercer dominico consecutivo elegido como confesor del César, después de Diego de San Pedro y Pedro de Soto. Según Martínez Peñas, el abandono de Pedro de Soto obedeció a una cuestión moral más que al problema político de tensión con la facción opuesta encabezada por los Granvela (Nicolás Perrenot y su hijo Antonio); frente al rigorismo religioso del confesor respecto de los protestantes, Carlos V manifestaba una línea tolerante y conciliadora, exasperante para Pedro de Soto que veía inútil su condición de guía espiritual del Emperador (Leandro Martínez Peñas, *El confesor del rey en el antiguo régimen*, Madrid, Editorial Complutense, 2007, pp. 249-252).

<sup>31</sup> Jaime Brufau Prats, *op. cit.*, p. XXVI.

<sup>32</sup> Esta relación de Domingo de Soto con el Emperador, manifiesta en Trento, en el *Interim*, en la legitimación belicista frente al propio Papado (que repetirá con Felipe II), como su confesor personal o en la misma dedicatoria de su magna obra *De Iustitia et Iure* a Carlos V (tipo de relación ampliable asimismo a los principales representantes de la Escuela de Salamanca), le da pie a Lalinde Abadía para elaborar su tesis crítica sobre la simbiosis entre ideología y sistema. «Iusnaturalismo castellano y sistema decisionista radicalizado de la Monarquía Universal coinciden en el tiempo y en el espacio, existiendo, por tanto, entre ellos una conexión». Y continúa Lalinde valorando esta relación como simbiótica, «caracterizada por ser complementaria y originadora de mutuos beneficios. El sistema necesita una ideología para consolidarse e, incluso, para justificar su expansión, y la ideología necesita, a su vez, la protección del sistema para desarrollarse y permitir a sus autores el compartir el dominio» [Jesús Lalinde Abadía, «Una ideología para un sistema (*La simbiosis histórica entre el iusnaturalismo castellano y la Monarquía Universal*)», *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 8 (1979), pp. 86 y 87]. En esta línea radicalmente crítica, Lalinde elimina todo atisbo revolucionario de la Escuela. Los teólogos-juristas «estimulan la obediencia civil, legitiman el *statu quo*, son consejeros de los reyes y a ellos dedican sus obras con completa sumisión política, no reivindicando derechos políticos en los súbditos y su resistencia a la tiranía no la mantienen nunca frente a los Austrias, sino frente a los Príncipes protestantes que están enfrentados a los Austrias, en resumen, observan una política eminentemente conservadora, que les hace insustituibles colaboradores del régimen autoritario imperante en su época» (*ibid.*, p. 90).

haciéndole responsable de todas las divergencias entre Roma y el Imperio, explotando así una tendencia adversa a Soto que, desde Trento, había ido tomando cuerpo.

A esta acción de Bertano, hemos de añadir ciertas tensiones que Soto llegó a tener con el Consejo de Estado, especialmente con el cardenal Granvela (Antonio Perrenot), a causa de diferencias de apreciación sobre cuestiones de dudosa moralidad, especialmente en lo referente a materia de política económica y de impuestos. Hombre de confianza tanto de Carlos V como de su hijo Felipe II, el soberanista Granvela se movía en un plano completamente distinto al del confesor, para quien el orden moral debía de tener la primacía. También Pedro de Soto había chocado en diversas ocasiones con los Granvela. Éstas y otras rencillas y tergiversaciones cortesanas fueron minando el espíritu paciente de Soto, que decidió declinar tan alto honor y regresar a España. Martínez Peñas justifica la dimisión de Soto porque «éste y su imperial penitente no llegaron a congeniar». Maniobras políticas o cortesanas aparte, ha de buscarse en la falta de entendimiento entre confesor y confesionario, en sus diferencias de criterio las que determinaron el regreso a España de Soto. Para Martínez Peñas, no fue acertada la elección, pues si la condición de teólogo de Pedro de Soto había causado ya desavenencias con el Emperador, designar a un nuevo confesor con unas condiciones y cualidades prácticamente idénticas no parecía lo más acertado<sup>33</sup>. Sin embargo, esta separación del puesto de confesor «no tuvo –como anota Beltrán de Heredia– asomos de ruptura, quedando confesor y penitente unidos por un estrecho vínculo de afecto y de respeto»<sup>34</sup>.

#### 6. *Intervención en las controversias entre Bartolomé de Las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Trasfondo del problema y aportación sotiana*

De vuelta a España y de nuevo en Salamanca, en los inicios de 1550, Domingo de Soto no tenía en sus proyectos reanudar su labor docente ni continuar participando activamente en la dinámica que otrora la realidad político-social y religioso-cultural le había impuesto. Sin embargo, el devenir de los acontecimientos le obligó en múltiples ocasiones, durante esta última década de su vida, a perturbar sus propósitos. Uno de los acontecimientos que requerirá ahora la intervención de Soto, lo constituye el enfrentamiento entre las tesis de Bartolomé de las Casas y las de Juan Ginés de Sepúlveda acerca de la conquista y colonización del Nuevo Mundo.

Las *Leyes Nuevas de Indias*, promulgadas desde Barcelona en 1542 y completadas en Valladolid en 1545, obligaban a virar el rumbo de la colonización española en Indias, especialmente en lo referente al trato de los indígenas y la consiguiente reforma de las encomiendas<sup>35</sup>. Estas dos Reales Provisiones rimaban con el espíritu de Bartolomé de Las Casas, símbolo radical de un colonialismo más humanitario y de la utopía cristiana. Estas normas jurídicas encontraron una fuerte oposición por parte de los que veían en el triunfo de las mismas una merma para sus

---

<sup>33</sup> Leandro Martínez Peñas, *op. cit.*, pp. 268.269.

<sup>34</sup> Vicente Beltrán de Heredia, *op. cit.*, p. 236.

<sup>35</sup> Las *Leyes Nuevas* parten de planteamientos ya presentes en las *Leyes de Burgos (Ordenanzas para el tratamiento de los indios)* de 1512 y de las complementarias de Valladolid de 1513. Aunque de resultados muy escasos por la perfidia de los encomenderos, este cuerpo legislativo supuso un primer y relevante esfuerzo por consagrar los derechos fundamentales de los indios.

intereses personales, los cuales se sentían respaldados por las tesis del gran humanista y cronista imperial Juan Ginés de Sepúlveda<sup>36</sup>.

Hacia 1547 corría por España en copias manuscritas un libro de Sepúlveda, *Democrates Alter* o *Democrates Secundus de justis belli causis*. En esta obra, escrita a modo de diálogos, se justificaba a ultranza el modo con que se llevaba a cabo la conquista y colonización indiana. Aunque dividido en dos libros, el filósofo, teólogo y jurista Sepúlveda establece tres partes en el *Democrates*; en la primera, expone su visión del Derecho natural y la guerra justa; en la segunda, analiza los problemas de la conquista y colonización en las Indias; y en la tercera, se detiene en la situación jurídica de los indios, defendiendo la encomienda como el sistema ideal para su aculturación y evangelización. Las Casas se esforzó para que dicho escrito no llegase a imprimirse. Como señala I. Liévano Aguirre, para Las Casas dicha «obra era mucho más que un simple libro; era la formulación de la filosofía de los poderosos, la legitimación literaria de los abusos del fuerte contra el débil, del rico contra el pobre, del español contra el indio. Si los conquistadores habían cometido tantos desafueros en América cuando las doctrinas y las leyes condenaban sus acciones, ¿qué pasaría cuando se sintieran justificados por una doctrina, como la de Sepúlveda, que legitimaba el empleo de la fuerza contra aquellos “cuya condición natural” es que deben obedecer a otros»?<sup>37</sup>.

Remitido el libro manuscrito a las Universidades de Salamanca y Alcalá de Henares para que lo estudiaran y emitieran dictamen, éstas determinaron que no debía editarse. Sin embargo, Sepúlveda, haciendo caso omiso de las impugnaciones recibidas, escribiría la *Apología pro libro “De justis belli causis”*, en la que reafirma la tesis del *Democrates Secundus*. Es más, buscando una mayor popularización de sus ideas, el humanista cordobés extractaría, en romance, el contenido del *Democrates Secundus*, provocando la inmediata respuesta del obispo de Chiapas que lograría su prohibición<sup>38</sup>.

La controversia iniciada adquirió tales proporciones que la Corona sintió la obligación de intervenir, máxime cuando la cuestión afectaba a la licitud de los pretendidos derechos derivados de las normas del *ius belli*. De este modo, se tocaba el fondo del problema teórico entre Las Casas y Sepúlveda, a quienes distanciaba

---

<sup>36</sup> Cfr. Jaime Brufau Prats, “La aportación de Domingo de Soto a la doctrina de los derechos del hombre y las posiciones de Bartolomé de Las Casas”, en Jaime Brufau Prats, *La Escuela de Salamanca ante el descubrimiento del Nuevo Mundo*, edit. cit., pp. 105 ss.

<sup>37</sup> Ignacio Liévano Aguirre, *España y las luchas sociales del Nuevo Mundo*, Madrid, 1972, p. 69.

<sup>38</sup> Juan Ginés de Sepúlveda, *Democrates Segundo o de las justas causas de la guerra contra los indios*, Edición crítica bilingüe, traducción castellana, introducción, notas e índices por Ángel Losada, 2ª edición, Madrid, C.S.I.C., Instituto Francisco de Vitoria, 1984. Ángel Losada, en su Introducción, nos aclara la trayectoria del *Democrates*. Sepúlveda había escrito en 1533 el tratado *Democrates Primus* en el que justificaba todas las acciones bélicas llevadas a cabo por Carlos V dentro de ciertas condiciones, aunque fueran guerras religiosas. Por entonces, era materia común la discusión acerca de la justicia respecto de las conquistas en Indias. Impugnadores de tal conquista, liderados por Bartolomé de Las Casas, habían logrado imponer su criterio sin dar voz a criterios contrarios. Sepúlveda reacciona escribiendo el *Democrates Secundus*, estimulado por sus amigos, entre los que se contaba el propio Hernán Cortés. El nuevo libro venía a ser un sumario, ampliación y aplicación al caso indiano de la doctrina expuesta ya en el *Democrates Primus*. Según el autor, el *Secundus* no pretendía la impugnación de las *Leyes Nuevas*, sino una firme réplica al discurso lascasiano que «redundaba en grave deshonor de España, de su Rey, de buena parte del Ejército, de la Iglesia española y aun de la Iglesia universal» (vid. pp. XII-XIV). Según Losada, «a Sepúlveda le llegó su vejez, su muerte, y el *Democrates Secundus* seguía sin publicarse en su integridad, y así continuó hasta que, en 1892, don Marcelino Menéndez y Pelayo, rompiendo con seculares prejuicios, lo imprimió en el *Boletín de la Academia de la Historia*» (p. XXV).

ideológicamente el juicio que les merecían las llamadas “guerras de conquista” y la justificación de los títulos sobre las Indias. La polémica entre ambos no quedaba reducida al plano puramente doctrinal, sino que contemplaba primordialmente el rumbo que debía tomar la legislación y la práctica de gobierno<sup>39</sup>; una vez más, se comprobaba la escasa eficacia que estaban teniendo la *Leyes Nuevas de Indias*, como anteriormente había sucedido con las *Leyes de Burgos*.

Para solucionar este conflicto, Carlos V convocó unas Juntas integradas por teólogos, miembros del Consejo de Indias y de otros Consejos. Domingo de Soto, Melchor Cano y Bartolomé Carranza de Miranda se contaban entre los teólogos designados. Las Juntas se desarrollaron en Valladolid, en dos períodos: de agosto a septiembre de 1550 y de abril a mayo de 1551. A esta última ya no asistiría Cano por encontrarse en el Concilio.

Las Juntas de Valladolid se iniciaron con la intervención de Sepúlveda. El famoso erudito expuso elocuentemente las razones por las que se puede someter a los infieles, apoyando constantemente sus doctrinas en los clásicos. Después de oír al oponente cordobés, se concedió la palabra a Las Casas, quien había preparado para aquella histórica oportunidad el famoso tratado *Argumentum Apologiae*, consagrado a demoler las tesis del *Democrates Secundus*. Las Casas hizo una emocionante defensa de los indios americanos, los “pobrecillos indios”, como solía llamarlos. Tan pronto como finalizó el obispo de Chiapas su exposición y ante el maremagnum de opiniones de los dos contendientes, se encargó a Domingo de Soto elaborar un *Sumario*<sup>40</sup> en el que resumiese los argumentos presentados por ambas partes. En cuanto a las doctrinas definidas por Las Casas y Sepúlveda, Soto las resume así en el *Sumario*: «... han tratado y disputado esta cuestión (conviene saber) si es lícito a su Majestad hacer la guerra a aquellos Indios, antes que se les predique la Fè para sugetalos a su Imperio, y que despues de sugetados puedan mas facil, y comodamente ser enseñados, y alumbrados por la doctrina Euangelica del conocimiento de sus errores, y de la verdad Christiana»<sup>41</sup>. Sepúlveda sustentaba la parte afirmativa, afirmando que la tal guerra, no solamente era lícita sino expediente. Bartolomé de Las Casas defendía la negativa, diciendo que no solamente no era expediente, sino inicua y contraria a la religión cristiana<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> José Antonio Escudero nos resume este planteamiento: «... Las Casas fue beligerante hasta el radicalismo en la defensa de los indios y en la censura de los métodos colonizadores, llegando a cuestionar la legitimidad de la empresa americana tal como de hecho se desarrollaba. Al reprobar cualquier tipo de guerra, cree sólo en la evangelización pacífica –que ensaya incluso con desiguales resultados–, y sostiene en última instancia que la sumisión voluntaria de los indios es el único título justificativo de la incorporación de tierras americanas. Tales planteamientos chocaron frontalmente con las tesis de Ginés de Sepúlveda, defensor de los encomenderos...» (José Antonio Escudero, *Curso de Historia del Derecho. Fuentes e Instituciones Político-administrativas*, 2ª edición, Madrid, 1995, p. 634).

<sup>40</sup> El *Sumario* fue editado en Sevilla, en 1552, por el impresor Sebastián Trugillo en un volumen junto a otros textos sobre la misma temática. El *Sumario* de Soto se recoge entre el fol. 63v y el 78r y se intitula: *Este es vn traslado de vn sumario, que por comission de la Congregacion que su Magestad mando juntar en Valladolid el año cinquenta, coligio el muy Reuerendo, y doctissimo Padre Maestro Fray Domingo de Soto, de la Apología que hizo el Obispo de Chiapa, y leyó en la dicha Congregacion contra el Dotor Sepulueda*.

<sup>41</sup> *Sumario*, fol. 64r.

<sup>42</sup> José Antonio Escudero, *op. cit.*, p. 634: «Un personaje tan ilustre como Domingo de Soto, allí presente, resumió las razones de los adversarios: la ilicitud de la violencia y la admisión sólo de una “dulce y amorosa, evangélica predicación”, por parte de Las Casas; y la justificación de la intervención española por la idolatría, antropofagia y pecados contra natura de aquellas gentes, por parte del cronista Sepúlveda. La Junta no llegó a pronunciarse, reiterando y extremando luego Las

En este resumen de los debates, el teólogo salmantino se vio impedido de exponer su parecer, «aunque si tuuiera mas libertad –dice Soto en el preámbulo del *Sumario*– pudiera por ventura, según mi flaco juycio, dar a este compendio otro lustre. Empero reseruolo para quando si vuestras señorías, y mercedes fueren seruidos mandarmelo, dixere mi parecer»<sup>43</sup>. Este deseo sotiano quedaría satisfecho en el *libellum: An liceat civitates infidelium seu gentilium expugnare ob idololatriam*, escrito posiblemente entre 1553 y 1554, del que se conserva un fragmento y en el que Soto se inclina más por la tesis de Las Casas, enriqueciendo así el dictamen que hubo de emitir al finalizar la segunda serie de las Juntas, en 1551<sup>44</sup>.

También existen otros escritos sotianos que se preocupan de la evangelización en América, tales como la relección, anterior a las Juntas, *De dominio*, dada en 1534. De sumo interés para nosotros hubiera sido el opúsculo *De ratione promulgandi Evangelium*, que no ha llegado a nuestras manos y que se menciona repetidas veces como *libellum*, próximo a ser redactado, en el tratado *De Iustitia et Iure* y en los comentarios *In Quartum Sententiarum*, obras estas últimas en las que igualmente Soto se pronuncia por el problema americano.

La opinión de Domingo de Soto –recuerda Brufau– quedó como *doctrina communis* de los teólogos españoles del siglo XVI y del siguiente, perteneciesen o no a la Escuela de Salamanca<sup>45</sup>. Pero no solamente en el terreno de las ideas logró prevalecer, sino que también Soto contribuyó eficazmente a la implantación de esta doctrina en el plano político y de gobierno. «La regulación de los descubrimientos y conquistas –continúa J. Brufau– se fue orientando hacia un mejor control de los mismos por parte de la Corona. Las Ordenanzas de poblaciones dadas por Felipe II son un buen ejemplo de ello y, en varios puntos, un excelente modelo de prudencia en la labor colonizadora»<sup>46</sup>. Más que en las *Leyes Nuevas de Indias*, en las que la influencia lascasiana es palmaria, es precisamente en estas *Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias*, de 1573, en las que se reflejan más los principios del teólogo-jurista Domingo de Soto<sup>47</sup>. Las obligaciones de los encomenderos mediante disposiciones encaminadas a evitar abusos sobre los indios encomendados, la prohibición de toda guerra ofensiva por motivos religiosos, el reconocimiento de los derechos de los indios en calidad de súbditos de la Corona de Castilla... testimonian el interés de los monarcas españoles por la

---

Casas sus posiciones en los últimos años». Pensamos que esta síntesis es sumamente esclarecedora.

<sup>43</sup> *Sumario*, fol. 63v.

<sup>44</sup> «No es posible definir –dice Francisco de Icaza– si esta histórica disputa, atestiguada por quince juristas y teólogos, alguno de los contendientes consiguió el triunfo, ya que cada uno por su parte proclamó su éxito. Para Las Casas la decisión de los jueces le fue favorable, toda vez que las llamadas conquistas fueron denominadas “ilícitas e injustas” y por tanto prohibidas. Por el contrario, para Sepúlveda el veredicto le fue propicio, ya que los juristas y teólogos aceptaron como justas las guerras emprendidas por los cristianos en contra de los infieles» (Francisco de Icaza Dufour, *Plus Ultra. La Monarquía Católica en Indias. 1492-1898*, México, Porrúa, 2008, p. 114).

<sup>45</sup> Vid. Jaime Brufau Prats, “La aportación de Domingo de Soto a la doctrina...”, *ed. cit.*, pp. 110-119.

<sup>46</sup> Jaime Brufau Prats, *El pensamiento político de Domingo de Soto y su concepción del poder*, *ed. cit.*, p. 220.

<sup>47</sup> *Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias*, dadas por Felipe II el 13 de julio de 1573, en el bosque de Segovia. Esta nueva instrumentación legal, con el extremeño Juan de Ovando como presidente del Consejo de Indias, está formada por 148 capítulos y estructurada en tres secciones (descubrimientos por mar y tierra, fundación de nuevas ciudades y labor pacificadora del territorio).

protección de los habitantes del Nuevo Mundo, que comienza a materializarse en la segunda mitad del siglo XVI<sup>48</sup>.

Sin embargo, no decimos nada nuevo al afirmar que tanto la doctrina de equidad universal de Soto sobre esta cuestión, como la de Las Casas, desde la acción radical y exaltación de sus escritos, son deudoras de las teorías de Francisco de Vitoria. El espíritu de las relecciones *De Indis* (1538) y *De Iure belli* (1539) campea en las tesis de Soto y en las de Las Casas y también en las acciones de gobierno sobre el Nuevo Continente en esta nueva etapa colonizadora. La prudencia de Francisco de Vitoria, sin denostar a los indios ni a los españoles, permitió esclarecer los derechos de unos y otros y para los que exigió un recíproco respeto. Sus relecciones –dice Francisco de Icaza– «lograron conformar una doctrina, cuyos novedosos conceptos gozaron de enorme influencia en un tiempo y de manera especial entre sus alumnos que llegaron a integrar una escuela, cuyos frutos enorgullecen hoy día a Salamanca»<sup>49</sup>. La impronta del magisterio de Vitoria se refleja de manera especial en Soto, que enriquece y difunde el pensamiento de la Escuela de forma brillante y sobresaliente. La aportación sotiana a la teoría de la conquista del Nuevo Mundo alcanza de lleno a los argumentos teológico-jurídicos que se esgrimían para justificar el sometimiento de las nuevas tierras descubiertas a la Corona de Castilla y, en cierto sentido, incide en el tema que traemos entre manos, aunque el tratamiento difiera y las consecuencias prácticas tengan otro carril y desembocadura.

### 7. Soto y la Inquisición española

El primer contacto de Soto con la Inquisición tiene lugar en 1540, cuando el Santo Oficio le encargó revisar las librerías salmantinas en búsqueda de posibles infiltraciones luteranas. Con esta medida se pretendía cortar la divulgación de libros y ediciones protestantes en España. Soto, juntamente con fray Francisco del Castillo cumpliría esta orden. Entre los libros escogidos, por figurar en la lista de los reprobados, sabemos que estaba el del conocido franciscano Antonio de Guevara,

---

<sup>48</sup> Jesús Lalinde Abadía reconoce y valora positivamente la posición de Vitoria, y consiguientemente la de Soto y la de la Escuela en general, en defensa de los indios y de su libertad. Considera que Vitoria «a pesar de considerar a éstos [los indios] bárbaros, como ineptos y brutos no les niega el dominio, frente a los que pueden alegar que hay un derecho a someterlos porque son ineptos y brutos». Lalinde disculpa la visión que la Escuela tiene respecto de la inferioridad intelectual del indio «en cuanto que aparece así a los ojos de los conquistadores». Y añade que Vitoria considera a los indios «dueños a la llegada de los españoles, no pudiendo ser privados de su dominio en cuanto que el dominio es de derecho positivo [...]. Puede decirse que la posición de Vitoria y, en general, la de la escuela, ha sido favorable a la libertad del indio, mérito que no debe regatearse...» (Jesús Lalinde Abadía, *op. cit.*, pp. 129, 130). Pérez Luño nos recuerda cómo Soto desarrolló el pensamiento de Vitoria pormenorizando la distinción aristotélica entre la *servitus naturalis* y la *legalis*. La natural no debe entenderse como una forma de esclavitud. La naturaleza primitiva y ruda de los indios no les priva en absoluto de su derecho natural a la libertad, pudiendo ser señores de sus tierras y de sus bienes; y este tipo de servidumbre natural se da también entre los cristianos sin que por ello pierdan sus derechos naturales. En contraposición, Pérez Luño analiza la tesis de Ginés de Sepúlveda, la cual se fundamenta también en la teoría aristotélica de la desigualdad natural entre los hombres y en la más cercana del gran jurista regio Juan López de Palacios Rubios. Sepúlveda defiende el derecho que tiene España de someter a los indios incluso por la guerra, pues «siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros, incultos e inhumanos, se niegan a admitir la dominación de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos» (vid. Antonio-Enrique Pérez Luño, *La polémica sobre el Nuevo Mundo. Los clásicos españoles de la Filosofía del Derecho*, Madrid, Trotta, 1992, pp. 192-196).

<sup>49</sup> Francisco de Icaza Dufour, *op. cit.*, p. 115.



*Menosprecio de Corte y Alabanza de Aldea*, aunque después se le permitiese circular tras una contraorden del Tribunal de la fe<sup>50</sup>.

Aunque, durante su cargo de confesor, el Santo Oficio había recurrido frecuentemente a Soto con el fin de que apoyase los negocios inquisitoriales de resolución imperial, no hay una intervención suya importante hasta 1550 con el proceso de Juan Gil, conocido como doctor Egidio. Denunciado como “reformista” al Dr. Egidio, se convocó una junta de teólogos, entre los cuales se encontraba Domingo de Soto, con el fin de calificar las proposiciones extraídas del proceso incoado. Sabido es cómo, tras el examen de dichos teólogos, la Inquisición procede con relativa suavidad y condescendencia, buscando el menor quebranto posible del prestigioso predicador sevillano. Domingo de Soto volvería a ser consultado antes de la sentencia definitiva, encargándose también a él, según expreso deseo del propio Carlos V, la reconciliación del procesado, llevada a cabo en Sevilla, en 1552.<sup>51</sup> Para H. C. Lea, en este período existían esfuerzos proselitistas de los

---

<sup>50</sup> Vicente Beltrán de Heredia, *op. cit.*, p. 405.

<sup>51</sup> *Ibid.*, pp. 415 ss. Beltrán de Heredia nos ofrece amplia información acerca del proceso del Dr. Egidio. El aragonés Juan Gil, o Egidio, había sido discípulo de Soto en Alcalá, llegando a ser catedrático de Artes y de Teología en aquella misma Universidad. Sus ideas progresistas le hicieron salir de Alcalá, terminando, al paso de algunos años, en Sevilla, donde sus predicaciones afloraban ya un sabor luterano. Al vacar en 1548 la sede de Tortosa, el Dr. Egidio es propuesto para ocuparla; sin embargo, es en estos momentos cuando se produce su denuncia pública como “reformista”, iniciándose una minuciosa averiguación sobre el caso. De esta averiguación sale a la luz un importante foco protestante en Sevilla, que ya comenzaba a ramificarse hacia el exterior. Mientras, el Dr. Egidio es recluido en un monasterio sevillano y, ante la lentitud de las diligencias, varios de sus adeptos huyeron a Francia. El Consejo de Castilla presionaba al inquisidor general Fernando de Valdés para que acelerase el proceso y, así, poder convocar inmediatamente a distinguidos teólogos para que calificasen las proposiciones extraídas del mismo. Las deliberaciones de la junta calificadora empezaron el 4 de diciembre de 1550, terminando el 22 del mismo mes, con asistencia, entre otros, de Domingo de Soto, el franciscano Alfonso de Castro y el catedrático de Vísperas de Teología en Salamanca Juan Gil de Nava. Tras un escrupuloso examen del proceso por los teólogos, tanto el Tribunal hispalense como el Consejo procederían con relativa suavidad y condescendencia, buscando el modo de atajar eficazmente aquella infiltración herética. Se deseaba que se retractase de sus errores, para no verse en la necesidad de imponerle mayor sanción, incapacitándole del todo. Con este objetivo, Soto se desplazaría de Salamanca a Sevilla en el verano de 1552 [cfr. José Luis González Novalín, *El Inquisidor General Fernando de Valdés (1483-1568)*, vol. I: *Su vida y su obra*, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1968, pp. 182 ss.]. El Dr. Egidio abjuró *de vehementi* diez proposiciones principales con sus adherentes, todas como heréticas; retractó otras diez como falsas y erróneas y declaró otras siete ambiguas en sentido católico. «Se le condenó a un año de cárcel en el castillo de Triana, con licencia de ir a la iglesia catedral quince veces seguidas o interpoladas, según él quisiere, pero siempre vía recta; a ayunar todos los viernes del año; a confesar cada mes una vez, comulgando o no, al arbitrio de su confesor; a no salir nunca de España; a no decir misa en todo un año, y a no poder confesar, predicar, leer en cátedra ni explicar las Sagradas Escrituras, ni tomar parte en conclusiones y actos públicos por espacio de diez años» (Marcelino Menéndez Pelayo, *Historia de los heterodoxos españoles*, vol. IV, 2ª edición, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1963, p. 81). La benevolencia que Domingo de Soto manifestó en la ejecución de la sentencia, llevada a cabo el 21 de agosto, fue cuestionada por católicos que la consideraban blanda; el mismo arzobispo Carranza la contrapondrá al rigor empleado en su proceso años más tarde, siendo personajes tan diferentes. Cuatro días después del auto, escribía Soto al Emperador refiriéndole lo que se había hecho. En la carta se advierte su preocupación por si Egidio había de ser o no promovido al episcopado de Tortosa, para lo cual ciertamente no daba su voto. Él tenía al procesado por “hombre de bien”, aunque engañado, y, a su juicio, la mancha que había contraído con este proceder le imposibilitaba para todo ministerio pastoral. Carlos V desistiría de llevar adelante esta promoción y Egidio permanecería en las cárceles de la Inquisición (Vicente Beltrán de Heredia, *op. cit.*, p. 428). El Dr. Egidio siguió en el fondo tan luteranizante como antes de su retractación. La blandura con que se le trató, así como el proceder cauteloso y solapado de su persona, reanimó el foco sevillano que, en conexión con el vallisoletano y con Alemania, se amplió aún más. El mismo

herejes alemanes y de otros, pero no aparecían huellas destacables. La blandura de la Inquisición en el proceso del Dr. Egidio «demuestra que hasta entonces aún no había alarma que la estimulara a la severidad, ni causa para ella»<sup>52</sup>.

Bajo la dirección de Fernando de Valdés, el Consejo de la Suprema encargó a Domingo de Soto, en 1552, revisar todas las biblias prohibidas, sacando y anotando todos aquellos errores en ellas contenidos. Con la ayuda de otros destacados teólogos salmantinos, Soto llevó a cabo la labor encomendada, labor que sería continuada y complementada por la Universidad de Alcalá. Conjuntada y ordenada toda la documentación, Soto fue avisado por el Príncipe, a finales de 1553, para que acudiese a Valladolid, porque «agora se ha de tomar resolución en el Consejo de su Majestad de la general Inquisición en lo que ha de hacer, ansí cerca de la censura (de las biblias), como en todo lo demás que será necesario, para que de aquí adelante no se traigan a estos reinos otras depravadas. Y conviene mucho que vos os halleis presente a ello, por la cualidad de vuestra persona y por la mucha noticia que tenéis de estos negocios [...], vengáis a esta villa a entender en lo susodicho»<sup>53</sup>. Y así, finalizadas las reuniones en agosto de 1554, sin que se tengan noticias concretas sobre las mismas, se publicaba en Valladolid la *Censura generalis contra errores, quibus recentes haeretici Sacram Scripturam asperserunt*, entrando rápidamente en vigor las normas allí establecidas. Según Virgilio Pinto, la «censura no se ocupó de fijar el texto auténtico de la Biblia, sino de limpiar las ediciones de añadidos, anotaciones o comentarios que intentaban tergiversar el sentido católico de la misma»<sup>54</sup>.

Domingo de Soto también va a tener que ver, sin proponérselo, en las sospechas que el Tribunal de la fe sostuvo sobre el franciscano Miguel de Medina, debido a ciertos matices “reformistas” encontrados en su obra literaria. Los antecedentes los encontramos en un pequeño tratado sotiano elaborado en 1554 acerca de los *Comentarios* al Evangelio de San Juan, escritos por el apologético franciscano de Maguncia Juan Wild (Ioannes Ferus). La obra de Soto, *Annotationes in Commentarios Ioannis Feri super Evangelium Ioannis*<sup>55</sup>, denuncia las doctrinas y expresiones luteranizantes contenidas en el libro de Wild, llegando a hacer anotaciones sobre 67 lugares de dichos *Comentarios*. Ahora bien, Soto había procurado en todo momento salvar el prestigio del autor, al que tenía por persona

---

Egidio, aprovechándose de la confianza depositada en él por el cabildo sevillano para que le representase en Valladolid, en 1555, sobre el subsidio de la Cuarta, se entrevistaría con sus compañeros de secta en aquella ciudad, muriendo al regresar a Sevilla. Descubierta al poco tiempo la conspiración luterana de Castilla la Vieja y Andalucía, y comprometida la memoria de Egidio por las declaraciones de algunos de los procesados, abrióse nueva información, fue desenterrado su cadáver, confiscados los bienes que habían sido suyos y quemada su estatua en el Auto de fe de 1560 (Marcelino Menéndez Pelayo, *op. cit.*, p. 81). Para José Luis González Novalín (*La Iglesia en la España de los siglos XV y XVI*, vol. III-2º de la *Historia de la Iglesia en España*, bajo la dirección de Ricardo García-Villoslada, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1980, pp. 205-209), contrariando a Bataillon, las proposiciones de Egidio más que erasmismo rezuman un fuerte luteranismo; y la mitigada sentencia se debe también al prestigio de Egidio, a su sumisión humilde, a que su doctrina no se hubiese difundido *in scriptis* y que no le conocieran seguidores cualificados.

<sup>52</sup> Henry C. Lea, *Historia de la Inquisición española*, vol. III, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1983, p. 227.

<sup>53</sup> Archivo Histórico Nacional, *Inquisición*, lib. 248, fols. 58v-59 (cit. por Vicente Beltrán de Heredia, *op. cit.*, p. 411). Cfr. José Luis González Novalín, *op. cit.*, pp. 254-257.

<sup>54</sup> Virgilio Pinto, “La censura: sistemas de control e instrumentos de acción”, en *Inquisición española y mentalidad inquisitorial*, Barcelona, Ariel, 1984, p. 280.

<sup>55</sup> *Annotationes in commentarios Ioannis Feri Moguntinensis super Euanglium Ioannis*, [Salmanticae], excudebat Andreas à Portonariis, 1554.

piadosa y católica. Preocupado por el temor de molestar a los franciscanos y deseoso de atajar todo escándalo que pudiera surgir de la discordia, se expresaba de este modo en sus *Anotaciones*: «Universos per viscera Iesu Christi deprecor et obtestor, ut in causa hac propugnandi fidem, quae tantam exigit caritatis concordiam, nemo mihi adversus studio litigandi exeat; sed eadem animorum pietate permiserit, defendentes, eidem veritati omnes patrocinetur»<sup>56</sup>.

Sin embargo, el teólogo cordobés y profesor Miguel de Medina se creyó en la obligación de defender a su hermano de hábito, publicando en Alcalá, en 1558, una *Apología Ioannis Fero*, en la que impugnaba cada una de las 67 animadvertencias o pasajes anotados por Soto. La réplica del franciscano trataba de justificar a ultranza a J. Wild, fallecido en 1554, atacando ásperamente a Soto. La *Apología* sería denunciada al Santo Oficio por considerarla con errores luteranos, siendo condenada y recogida por este Tribunal. Miguel de Medina, destacado autor de la Escuela franciscana y al que le debemos su excelente obra ascético-mística *Ejercicio de la verdadera y cristiana humildad*, va a continuar en la defensa del insigne franciscano alemán, amparándose, según parece, en la protección que le dispensaba el propio inquisidor general Valdés.

El cordobés emprende el ímprobo trabajo de expurgar los escritos de Fero (J. Wild). En 1562 obtiene licencia real para imprimir los *Comentarios* de Fero. Pero sus escritos serían de nuevo denunciados al Santo Oficio. El pasar la censura gubernativa no garantizaba la inmunidad ante la censura y jurisdicción inquisitorial. Medina, incansable, vuelve a corregir y es nuevamente delatado. El infatigable apologista de Fero sería encarcelado por la Inquisición en 1572, siendo ya inquisidor general Diego de Espinosa. El reo moría en 1578 sin que su proceso hubiese finalizado todavía, aunque próximo a una sentencia absolutoria. Los cargos imputables no afectaban substancialmente a la fe.

La actuación de Domingo de Soto, que había muerto hacía 18 años, continuaba pesando en esta cuestión, si bien nunca, en vida, había tomado parte en algo relativo al franciscano cordobés. La *Apología* contra Soto fue para Medina un precedente desfavorable, una sombra que le siguió durante el resto de su vida y que, en cierto modo, incidió en las desgracias que luego le sobrevinieron. La *Apología* estuvo siempre proscrita por la Inquisición y los *Comentarios* de Juan Fero, que finalmente fueron publicados en 1578 según la edición preparada por Miguel de Medina, fueron expurgados tanto por el *Índice* de Quiroga de 1583-1584 como por el de Sandoval de 1612. El enfrentamiento entre Soto y Medina materializado en la *Apología* bien pudo ser un reflejo de las divergencias en temas de espiritualidad, metodología, fuentes teológicas... entre la Universidad de Salamanca y la de Alcalá. El humanismo bíblico complutense o el aunar teología y humanismo de su profesor Medina podían chocar con la tradicional Escuela de Salamanca y la severa ortodoxia sotiana.

Pero el asunto inquisitorial que más perturbó el ánimo de Domingo de Soto fue su obligada participación, durante los años de 1558 y 1559, en el proceso del entrañable amigo y hermano de hábito Bartolomé Carranza de Miranda, arzobispo de Toledo, a causa de la calificación que, como teólogo de gran prestigio, hubo de hacer de los *Comentarios sobre el Catechismo christiano* de Carranza. Sabido es cómo esta intervención acarrió a Soto momentos amargos, debido al apasionamiento e intolerancia que rodearon al proceso carrancista, así como a la

---

<sup>56</sup> Cit. por Vicente Beltrán de Heredia, *op. cit.*, pp. 434-435.

instrumentalización que el Santo Oficio, de manos de su inquisidor general Valdés, hizo de la imagen sotiana para derrocar al Arzobispo toledano<sup>57</sup>.

#### 8. Soto y su segunda etapa docente en la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca había conservado a Domingo de Soto como catedrático de Vísperas de Teología durante su participación en el Concilio; pero, una vez suspendido éste, se dio la cátedra por vacante al pasar su titular a ocupar el cargo de confesor del Emperador. Juan Gil de Nava, antiguo discípulo del Maestro segoviano, sería su sucesor en la cátedra. Al regresar Soto a Salamanca, en 1550, no se reintegró inmediatamente a las tareas académicas. Pero al vacar la cátedra salmantina de Prima de Teología, regentada por Melchor Cano desde la muerte de Vitoria, el Claustro universitario acordó por unanimidad pedir a Domingo de Soto que fuera él quien se hiciera cargo como titular de la cátedra, sin someterse al trámite legal de la oposición. Su paso por la cátedra de Vísperas, su obra escrita y su actuación en diversos y variados campos le habían hecho acreedor del aprecio y estima de los estudiantes y del Claustro y confirmado en su aureola de competencia y saber. La adjudicación de la cátedra de Prima mediante este procedimiento extralegal resultaba ser un homenaje que la Universidad salmantina rendía al ilustre teólogo, que ya había sido miembro de su profesorado.

Soto tomó posesión de su nueva cátedra el 27 de septiembre de 1552, iniciando sus lecciones de Prima en el mismo curso entrante. Con ello se daba continuidad al hecho de que la cátedra de Prima la regentasen de modo casi exclusivo, desde siglo y medio antes, los dominicos (excepción única la de Pedro Martínez de Osma). Soto finalizaría su actividad académica, aunque no su vinculación universitaria, en el curso de 1555-1556, amparándose en la Constitución eugeniana del Estudio General, que obligaba a los catedráticos a leer veinte años para poder gozar de la jubilación y él la había cumplido en exceso, al sumarse los años que estuvo en Trento, según lo acordado por el Claustro, a los de Vísperas.

Durante los cuatro cursos que ocupó la cátedra salmantina de Prima, el prestigio de Domingo de Soto se mantuvo incólume. Así lo testimonian sus discípulos entre los que se cuentan a San Juan de Ribera y a fray Luis de León. A lo largo de estos últimos años de docencia, el pensamiento sotiano alcanza su madurez y su formulación definitiva. La fama que Soto llegó a gozar en estos momentos –*qui scit Sotum, scit totum*, se dijo– atestigua la gran fuerza intelectual de su obra.

En esta última década de su vida, Soto continúa escribiendo obras como el estudio bíblico *In epistolan diui Pauli ad Romanos commentarii*, de 1551 en edición definitiva<sup>58</sup>; el opúsculo *De cavendo abusu iuramentorum*, de 1551, escrito para acotar los abusos de los juramentos vanos<sup>59</sup>; su breve exposición catequética

---

<sup>57</sup> El análisis de la actitud sotiana en el “asunto” de Carranza es extraordinariamente significativo para la plena comprensión del tema que traemos entre manos. No obstante, la implicación personal y teológico-jurídica a la que se ve obligado Domingo de Soto, desde el interés de ambas partes, en el proceso inquisitorial de Bartolomé Carranza y la enorme complejidad histórica de este desconcertante asunto político-jurídico-religioso, que llevó a prisión al Arzobispo, nos inclina a atenderlo con mayor profundidad, al margen de este itinerario vital y doctrinal de Soto que presentamos.

<sup>58</sup> *In Epistolam diui Pauli ad Romanos commentarii*, Antuerpiae: in aedib. Ioan. Steelsii, 1550.

<sup>59</sup> *De cauendo iuramentorum abusu ad laudem diuini nominis institutio*, Salmanticae: excudebat Andreas à Portonariis, 1551.

*Summa de la doctrina christiana*, de 1552<sup>60</sup>; su catecismo *Tratado del amor de Dios*, inédito hasta 1780<sup>61</sup>, o sus relecciones como catedrático de Prima de Teología<sup>62</sup>

Pero la gran creación del maestro salmantino es su celeberrimo tratado teológico-filosófico-jurídico *De Iustitia et Iure*, aparecido en 1553<sup>63</sup> pero ampliado y revisado en 1556<sup>64</sup>; las siguientes ediciones, que fueron numerosísimas (hasta 33 ediciones en el siglo XVI), reproducen siempre la segunda impresión como edición príncipe. Esta obra supone una monumental síntesis jurídico-moral y el fundamento más sólido de la reputación científica de Soto. En ella, condensa sus años de estudio, magisterio y experiencias y sistematiza el pensamiento moral de la época dentro del marco tomista y de las directrices de la Escuela de Salamanca. El maestro salmantino va a ser el primero en escribir un tratado moral como obra independiente. En él se pueden distinguir tres grandes partes: los tres primeros libros se centran en los fundamentos de la moral, de la ley eterna, natural y humana y del Derecho como objeto formal de la justicia; la segunda parte está dedicada a la justicia conmutativa y a los actos y vicios contrarios a la misma (el dominio y su violación, injusticias forenses, usura e injusticia en los contratos y cambios de moneda...); y los libros VII al X versan sobre la virtud de la religión como parte potencial de la justicia (votos, juramento, adjuración, simonía, deberes de los obispos y sacerdotes...).

A este tratado clásico de filosofía del Derecho, hay que añadir otra obra teológica de gran envergadura y última publicada por Soto: *In Quartum Sententiarum*, comentarios al libro cuarto de las sentencias de Pedro Lombardo en dos tomos, el primero en 1557-1558<sup>65</sup> y en 1560 el segundo<sup>66</sup>, obra que también va a gozar de una gran difusión. Con ello, la carrera intelectual de Domingo de Soto llegaba a su cénit, convirtiéndose en uno de los personajes más representativos de la Escuela de Salamanca.

Recibido el 17 de enero de 2011. Admitido el 14 de febrero de 2011

<sup>60</sup> *Summa de la doctrina christiana*, Salamanca: A. de Portonaris, 1552.

<sup>61</sup> *Tratado del amor de Dios*, En Madrid: por Blas Roman, [1780].

<sup>62</sup> Durante los cuatro años académicos que Domingo de Soto ocupó la cátedra de Prima de Teología (1552-1553 al 1555-1556), solamente leyó una relección, o posiblemente dos; no nos consta que la impartiera en el curso 1552-1553 al no conservarse el registro de cuentas; tampoco dio la relección reglamentaria en el curso 1553-1554, ya que se le dispensó; sí la leyó en el año 1554-1555, con el título *An judaei cognoverint Christum esse filium Dei naturalem*, de la que solamente se conserva un fragmento; y, por último, en el curso 1555-1556 no la impartió (vid. Vicente Beltrán de Heredia, *op. cit.*, pp. 316-317).

<sup>63</sup> *De Iustitia et Iure, Libri decem*, Salmanticae: excudebat Andreas à Portonariis, 1553 (1554).

<sup>64</sup> *De Iustitia et Iure, Libri decem*, Salmanticae: expensis Ioannis Morenae..., 1556.

<sup>65</sup> *In Quartum Sententiarum tomus primus*, Salmanticae: excudebat Ioannes à Canova, 1557 (1558).

<sup>66</sup> *In Quartum Sententiarum tomus secundus*, Salmanticae: excudebat Andreas à Portonariis, 1560.



## NOVEL TREND IN RESEARCH ON ANCIENT ROME: DEVELOPMENT PROCEDURES AND TOWN PLANNING LAWS OF THE ROMANS

Belén MALAVÉ OSUNA\*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

**Belén Malavé Osuna** (2011): "A Novel Trend in Research on Ancient Rome: Development Procedures and Town Planning Laws of The Romans", en *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, n.º 1 (marzo 2011), pp. 137-147. En línea: <http://www.eumed.net/rev/rehipip/01/bmo.pdf>.

**ABSTRACT:** Researchers have virtually ignored the legal aspects of town planning in Roman times and we intend to approach the research from a contemporary conceptual and methodological framework, and, for this reason we have articulated the project around the following interdependent subjects, which are currently accepted as the components of Urban Development Law: spatial cohesion, town planning, housing and the environment. Therefore, it should be emphasized that Roman Urban Development Law distinctly evolved towards a social configuration thus providing the constant tension between private and public interests.

**KEY WORDS:** Town Planning Laws of The Romans, Spatial Cohesion, Town Planning, Housing, Environment.

**RESUMEN:** El aspecto jurídico del urbanismo romano ha sido tradicionalmente olvidado, por lo que es necesario abrir las investigaciones futuras hacia las materias interdependientes e integradoras del Derecho urbanístico: la ordenación territorial, el urbanismo, la vivienda y el medio ambiente, siempre desde esquemas conceptuales y metodológicos actuales, para constatar la marcada evolución del derecho de propiedad romano hacia una configuración de corte social que evidencia la tensión entre el interés privado y el interés público.

**PALABRAS CLAVE:** Derecho urbanístico, Ordenación territorial, Urbanismo, Vivienda, Medio ambiente.

Traditionally, different knowledge sectors have studied Ancient Rome's urban development procedures: Architecture, Engineering, Economics, Ancient History, Art History, etc. However, researchers have virtually ignored the legal aspects of town planning in Roman times, not only in Spain, but elsewhere<sup>1</sup>.

The actual denomination Roman Urban Development Law (*Derecho Urbanístico Romano*, DUR as per English acronym), is neither mentioned in the authorized bibliography at all, nor in the publications that somewhat basically and at times

\* Senior lecturer in Roman Law, University of Malaga, Spain.

<sup>1</sup> This article has been prepared within the framework of the excellence project PO8-SEJ-3923 awarded by the Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa –Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología–, Junta de Andalucía (*Regional Administration of Innovation, Science and Enterprises, General Secretariat for Universities, Research and Technology, Andalusian Regional Government*).

superficially deal with the subject. This might possibly be due to the fact that Ancient Rome doctrine dared not take that step forward. There are powerful reasons for doing so, as we intend to demonstrate. In fact, as we shall disclose later on, one of our main objectives is to confirm the existence of a DUR which is extremely rich and varied, deeply valuable and of real significance nowadays. It confirms once and for all that this sector of the Ancient Roman public law rulings was autonomous, while being included in Roman Administrative Law (*Derecho Administrativo Romano*.)

Furthermore, we intend to approach research from a contemporary conceptual and methodological framework and, thus, we have articulated the project around the following interdependent subjects, which are currently accepted as the components of Urban Development Law (*Derecho Urbanístico*): Spatial Cohesion, Town Planning, Housing and the Environment. In essence, our intention is to approach the study of these divisions simultaneously, as they are intimately related despite maintaining their own specificity.

The regulations and evolution of the territorial organization of the Romans will be incorporated in the sphere of Spatial Cohesion, our priority being to confirm its adjustment to present day objectives of interregional balance, rational use of territory and improvement of the quality of life.

Under the heading Town Planning we shall research the town plans of this sector found in the sources consulted, and also the way in which urban planning was regulated, particularly when referring to Public Works.

Under the section Housing, we will include all the legislation on mansions (*domus*) and buildings of rented housing (*insulae*.)

Finally, under the heading Environment, our objective is to analyse all the rules which dealt with the care and conservation of natural and cultural aspects of the environment, understood in its widest sense.

All in all, we believe that the methodology proposed will facilitate a possible –and very necessary– transfer, through the normal channels, of the results obtained in the framework of this project to the present-day knowledge society.

Several important reasons for carrying out this study are justified briefly below.

In the first place, there are no studies on Ancient Roman Urban Development Law either in Spain or elsewhere, although some very valuable scientific contributions partially touching on certain aspects related to the legal regulation of Roman town planning do exist. Secondly, there is no systematic organization of the data, and therefore, it needs to be designed *ex novo*. Consequently, we are faced with another task of no lesser importance: organizing and systemizing Ancient Rome's legal-urban heritage from a present day legal perspective which will permit the transfer to our society of the results obtained. In fact, the DUR does not have the organic or systematic characteristics which one would expect to find today in any sector of legal knowledge. The rules, provisions and urban regulations of Rome are disperse, vague and are contained in extremely varied legal and extra-legal sources.

Furthermore, we must invalidate, or at least qualify, the traditionally accepted thesis which portrays the rights over land and buildings by owners in Rome as indisputable or hardly limited. This can be seen in many of current reference books on Urban Development Law which, when approaching the historical precedents of town planning, agree on the total and unlimited character of Roman private ownership. However, this statement is only partially true.

It is precisely this widespread opinion that has led to existing works on Roman town planning legal rulings being written from the perspective of *ius privatum*. However, we believe that the *ius publicum* aspect of this regulation should be

granted its proper status and be considered equal to the traditional aspect. In fact, in some historical stages of Roman Law (*Derecho Romano*), it should be considered predominant.

It is obvious that we should establish the rights to urban ownership have evolved from a liberal point of view to a social or more societal position as far as its function is concerned. In fact, while direct comparison is impossible because of the difference in era, Roman Urban Development Law, as in the case of present Urban Development Law, is the history of constant tension between private and public interests.

A final reason for undertaking this work is simply that research on Ancient Rome needs opening to other fields which are as yet been treated briefly and incompletely, and which almost always refer to Roman Public Law (*Derecho Público Romano*.) Furthermore, in the course of the Ibero-American Congress of Roman Law held in Toledo (Spain) in February 2008, the prestigious scholar of Ancient Rome, Professor Crifò, predicted in his speech on the future of research on Ancient Rome that the fundamental line of investigation would be Roman Administrative Law and its constitutive sectors. We take this to mean that this includes DUR. (The speech may be read in [www.aidrom.com](http://www.aidrom.com).) Nevertheless, it must be said that during the last decade in Spain, Professor Antonio Fernández de Buján, Chair of Roman Law at the Universidad Autónoma de Madrid and an irrefutable expert on the matter, has repeatedly made this statement.

Returning to the first point. No comprehensive project analysing the legal organisation of land use by the Romans has been carried out before. Doctrinal contributions dealing partially with the subject have existed since the 19<sup>th</sup> century, and include very valuable works but which only minimally address the question of Roman town planning and its legal regulation. In these interdisciplinary studies, town planning analysis is only looked at from different aspects of social knowledge and therefore neglects to interpret and expound the legal system concerning town planning<sup>2</sup>.

Following the order proposed at the beginning, Spatial Cohesion would be the first thematic block to be researched. Actually, according to the European Charter on Spatial Planning dated 20 May, 1983 spatial cohesion can be defined as «the spatial expression of economic, social, cultural and environmental politics of the whole of society». In addition, the same document makes mention of its primordial objectives

---

<sup>2</sup> For an overview on Town Planning, we recommend the following works:

D. Serrigny, *Droit public et administratif romain*, Paris, 1862.

T. Mommsen, *Le Droit Public romain*, French translation, Girard, Paris 1894, reprint, 1984.

F. Castagnoli et al., "Topografia e urbanistica di Roma", *Storia di Roma* 22, Bologna, 1958.

A. García y Bellido, *Urbanística de las grandes ciudades del mundo antiguo*, Madrid, 1985.

J. Guillén, *Urbs Roma* 1, Salamanca, 1977.

A. Fernández de Buján, *Derecho Público Romano. Recepción, Jurisdicción y Arbitraje*, 10<sup>th</sup> ed., Madrid, 2007.

L. Homo, *La Roma imperial y el urbanismo en la Antigüedad*, Spanish Translation, Almoína, Mexico, 1956.

A. Pelletier, *L'Urbanisme romain sous l'Empire*, Paris, 1982.

G. A. Mansuelli, "La città romana nei primi secoli dell'impero. Tendenza dell'urbanistica", in ANRW 2, 12.1, 1982.

G. A. Mansuelli, "Città e architettura nella Roma Imperiale", in *Analecta Romana Instituti Danici*, Supplementa 10, Roma, 2004.

L. Spera, *Paesaggio suburbano di Roma dall'Antichità al Medioevo*, Roma, 1999.

L. Spera, *Urbanizzazione delle Campagne nell'Italia antica*, Roma, 2002.

D. G. Favro, *The urban image of Augustan Rome*, Cambridge, 1996.

L. Storoni Mazzolani, *L'idea de città nel mondo romano*, Firenze, 1994.



which include encouraging a balanced development between regions, responsible management of natural resources, protection of the environment, improvement of the quality of life - in short, the rational use of the territory.

To return to Roman Law, it must be said that significant research has been done on spatial cohesion and the basic units of organisation. Municipalities, colonies and provinces existing between I BC, when all Italy became part of State territory, and III AD when the last important territorial reorganisation took place, have been thoroughly investigated, although more as part of its general administrative organisation than from the specific objective we have in mind<sup>3</sup>.

Town Planning, the second subject, is closely related to spatial cohesion and public environmental responsibilities, although as we shall see, its range is more limited because it is directed solely towards the organisation of land use and building in the city. One of the cornerstones of modern town planning and the Urban Development Law that regulates this, as we are aware, is its strategy. Consequently, questions relating to town planning<sup>4</sup> strategy must be approached under this heading as will be shown in our proposed work schemata, which includes everything related to city works and public buildings.

Under the third heading, Housing, we intend to show that this is another cornerstone of Roman Urban Development Law. Related to present day Urban Development Law, we are of the opinion that property controlled or regulated for

---

<sup>3</sup> Summary of selected works:

F. Abbot and A. C. Johnson, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton, 1926.

C. H. Saumagne, *Le droit latin et les cités romaines sous l'Empire. Essais critiques*, Paris, 1965.

A. D'Ors, *Epigrafía jurídica de la España Romana*, Madrid, 1953.

E. Taddei, *Roma e suoi municipi*, Roma, 1972.

Several authors, *Atti del convegno internazionale sul tema: i diritti locali nelle provincie romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo*, Roma, 1974.

S. Mackie, *Local administration in roman Spain A.D. 14-212*, Oxford, 1983.

Several Authors, *Roma y las provincias. Realidad administrativa e ideología imperial*, Madrid, 1994.

L. Rodríguez Ennes, *Gallaecia: romanización y ordenación del territorio*, Madrid, 2004, Prologue by A. Fernández de Buján.

J. M. Alburquerque, "La administración provincial, colonial, municipal y la justicia en la Hispania romana" (*Provincial, colonial and local administration and the law in Roman Hispania*), 1, *Revista General de Derecho Romano*, 2006.

E. García Fernández, *El municipio romano*, Madrid, 2001.

J. F. Rodríguez Neila, *Sociedad y Administración local en la Bética romana*, Córdoba, 1981.

B. Salmieri et al., *Colonie romane nel mondo greco*, Roma, 2004.

G. Purpura, "La provincia romana d'Asia, i publicani e l'epigrafi di Efeso", in *IURA*, 53, 2002, pp. 177-198.

M. C. Parra, "La centuriazione e l'occupazione del territorio", in *Civiltà dei Romani. La città, il territorio, l'impero*, Milano, 1990, pp. 83-98.

<sup>4</sup> Selection of existing works:

A. Guarini, *La finanza del popolo romano. Trattato storico-legale*, Napoli, 1841.

A. Choisy, *L'art de bâtir chez les Romains*, Paris, 1873.

E. De Ruggiero, *Lo Stato e le opere pubbliche in Roma antica*, Torino, 1925.

A. Chastagnol, *La préfecture urbaine a Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960.

P. Lavedan and Hugueney, *Histoire de l'Urbanisme 1, Antiquité*, Paris, 1966.

Y. Janvier, *La Législation du Bas-Empire romain sur les édifices publics*, Aix en Provence, 1969.

R. De Fresquet, « Principes de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Rome et à Constantinople jusqu'à l'époque de Justinien. Des limitations apportées par les lois au droit de propriété tant dans l'intérêt général que dans l'intérêt privé », dans *RHD* 6, 1860, pp. 97-132.

Some other recent works included in *Analecta Romana Istituti Danici, Supplementa 27*, ed. L'Erma:

– *Architettura e pianificazione urbana nell'Italia antica* (ed. Lorenzo Quilici et al.), Roma, 1997.

– *Urban space and urban conservation as an aesthetic problem. Lectures presented at the international conference, Rome 1997, 23-26 October, 2000*, edited by A. Algren-Ussing.

certain social needs deserves a special approach. Needless to say, housing, and the issues surrounding it, is intrinsically related to town planning and urban strategy. Furthermore, we know what is now understood by 'adequate housing', as laid down in the *Istanbul Declaration on Human Settlements* of 1996. Having adequate housing means «more than just a roof under which to shelter. It also means having privacy, adequate space, accessibility, proper security, right of occupancy, stable and durable structure, sufficient lighting, heating and ventilation, a basic infrastructure which includes water supply, drainage and sewage disposal, quality environment factors and health related issues, suitable location near work and basic services at a reasonable cost». All in all, from the Declaration one can conclude that housing alone is not sufficient and that human development must include adequate surroundings and a network of minimum basic public services.

Romans' town planning history and that of other ancient cities similarly built is rightly seen as the history of «a permanent struggle with the obstacles of limited space and a growing population on the one hand, and on the other, the imbalance between the needs of the population and the emperor's projects». Ancient Rome's growing population dwelt fundamentally in two different types of housing: noble mansions and buildings of rented housing, although lack of living space forced the use of other places as homes. In this section, we will analyse Roman rulings regulating owners' rights and duties related to their property<sup>5</sup>.

As regards the Environment, the environmental consequences of human activity – including land use procedures– are a major priority for the current Administrations, but concerns about the environment are certainly not new, as we intend to demonstrate in this research work. It should be stressed that section 45 of the Spanish Constitution is devoted specifically to this question and states, in the first place, that citizens have rights and duties to an adequate environment. Nevertheless, the Establishment's role is crucial to enhancing quality of life through rational use of natural resources with the support of the "essential community solidarity". This document does not intend to define, even in broad terms, the concept of Environment, although two irreconcilable tendencies of the doctrinal limits of this notion have been established: that which portrays the Environment in the widest sense (natural, cultural, surroundings –historic-artistic heritage–) and another strictly limited to natural resources. Present-day Administrative Law doctrine is prone to exclude the wide notion because it is in line with the spirit of two sections of the

---

<sup>5</sup> Below, a sample of the most significant works on the subject:

U. Brasiello, *Corso di diritto romano. La estensione e le limitazioni della proprietà*, Milano, 1941.

P. Bonfante, *Corso di diritto romano 2. La proprietà 1*, Milano, 1958.

V. Scialoja, *Teoria della proprietà nel diritto romano 1*, Spoleto, 1933.

P. Garnsey, "Demolition of houses and the Law", in *Studies in Roman property*, Cambridge, 1976.

E. J. Phillips, "The Roman Law on the Demolition of Buildings", in *Latomus*, 32, 1973.

E. Levy, *West Roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia, 1951.

L. Lusignani, "Le limitazioni della proprietà in diritto romano", in *il Filangieri*, 23, 1898.

A. M. Patault, « Réflexions sur les limitations au droit de propriété à Rome jusqu'à la fin de la République », dans *RHD* 55, 1977.

M. Sargenti, "Due senatoconsulti di politica edilizia nel primo secolo dell'impero e tecnica normativa", *Studi in onore di Sanfilippo*, 5, Milano, 1984.

W. Simshäuser, "Socialbindungen des Eigentums in römischen Bauwesen der späteren Kaiserzeit", *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino* 4, Napoli, 1984, pp. 1,793-1,814.

C. Saliou, *Les Lois des bâtiments. Voisinage et habitat urbain dans l'Empire Romain. Recherches sur les rapports entre le droit et la construction privée du siècle d'Auguste au siècle de Justinien*, Beyrouth, 1994.

Spanish Constitution specifically devoted to historical-artistic heritage and town planning and housing<sup>6</sup>.

Considering Roman Law, we have decided to use as a starting point the aforementioned wider notion of Environment because it appears to be the one inferred in the written sources consulted, such as Vitruvius' Treatise *De Architectura*. These mention woods, gardens and parks<sup>7</sup> and wide avenues down which to stroll; encouragement of social life in forums, *porticae* and baths. We should also give special mention to Ancient Rome's legal protection of the natural landscape, specially coast and country, and to material resources (mainly historical-artistic heritage), observed in the different legal sources which should be studied and analysed.

There is yet another important issue at stake, denounced in texts by ancient Latin writers: the over-exploitation of natural resources<sup>8</sup>. They openly condemned widespread insalubrious conditions, including noxious fumes and stale air, and any other activities detrimental to the natural growth of lush woodland or the breeding of livestock and fish farming.

This investigation should be approached in line with the arguments common to the historical-critical methodology framework, widely accepted as the theoretical basis of any research on Ancient Rome. Besides, the unique character of the subject of our investigation (a historical set of rules no longer in force) leads us to consider all sources available, both legal and extra-legal, which may contain any piece of information on the legal aspects of Rome's town planning. We will also outline the concept of Roman Urban Development Law from an inductive procedure from its inspiring principles and after exploring the subject areas that frame our investigation. We propose the following outline schedule for future research:

---

<sup>6</sup> Vid. E. García Luque, "Los beneficios fiscales y el medio ambiente. Análisis de la deducción por inversiones en instalaciones medioambientales" (*Tax benefits and the Environment. Analysis of deductions on investment in Environmental Facilities*), en *Revista Valenciana de Hacienda Pública*, Palau 14, n.º 30, 1997, pp. 68-87; "Apuntes y breves propuestas sobre la fiscalidad ambiental en Andalucía" (*Notes and brief proposals on Environmental Taxes in Andalusia*), en *Revista Información Fiscal*, n.º 49, 2002, pp. 125-151; "La protección del medio ambiente en las empresas de economía social y su promoción fiscal: los primeros pasos de un incipiente régimen fiscal especial para las empresas socialmente responsables" (*Environmental Protection in Social Economy Companies and Progress on Taxes – entry-level of an incipient tax regime dedicated to socially sensitive companies*), 27 CIRIEC International Conference, Seville, September 2008.

<sup>7</sup> On green areas in general, consult R. Rodríguez López, *El Huerto en la Roma antigua. Su problemática urbanística y agraria*, Madrid, 2008.

<sup>8</sup> Below, some works on the matter:

Several authors, *Sordis urbis. La eliminación de residuos en la ciudad romana*, Roma, 1999.

P. Cassetti and M. Fagiolo, *Roma. Il verde e la città: giardini e suazi verdi nella costruzione della forma urbana*, Roma, 2002.

P. Grimal, *Les jardins romains*, Paris, 1984.

B. Gauthiez, *Espace urbain. Vocabulaire et morphologie*, Paris, 2003.

L. Farrar, *Ancient roman gardens*, Sparkford, 2001; *Gardens of Italy and the Western Provinces of the Roman Empire*, Oxford, 1996.

C. Arena, *Il verde a Roma. Dall'hortus alla villa*, Roma, 1983.

V. Sirago, *Storia agraria romana*, Napoli, 1995.

L. Allodi and C. Snider, *Dal giardino dell'Eden al verde Della metrópoli. Dal giardino di ieri al ruolo del verde nelle città di oggi*, Milano, 1992.

N. Purcell, "The roman garden as a domestic building", in *Roman domestic buildings*, Exeter, 1996.

J. L. Zamora, *Precedentes romanos sobre el Derecho ambiental: la contaminación de aguas, canalización de las aguas fecales y la tala ilícita forestal*, Madrid, 2003.

1. Ancient Rome's urban development procedures: Overview. Recognition of Greek influences<sup>9</sup>.

2. Study and analysis of Roman Urban Development Law:

2.1. Spatial Cohesion: types and models of organization. Basic units. Development and evolution. Evaluation of adequacy to interregional balance objectives, rational use of territory and quality of life enhancement. Urban Development Law and spatial cohesion in Hispania, with special consideration of Roman Andalusia.

2.2. Town Planning. Spatial cohesion plans and guiding principles analysis. Cities: works and public buildings. Major public works, promotion and financing. Private works for public use. Plot building potential. Building and maintenance. High ranking management, technical and safekeeping staff.

2.3. Housing. Legislation on houses and buildings of rented housing. Urban issues and legal solutions. Regulations on distances, maximum height, preservation and stability. Measures against land speculation. Renting policies. Urban constraints: infringement and penalties.

2.4. The Environment. Urban planning and the environment. Natural surroundings and cultural environment. Protecting the environment. Preserving cultural habitats, particularly historical-artistic heritage.

3. Organization and systematization of the legal heritage of Ancient Rome relating to town planning. Proposal and design of a systematic organization of its contents.

4. Formulation of a concept. The concept of Roman Urban Development Law. Justification and informative criteria. Inclusion in the general framework of Roman legal rulings.

The proposed research project would enable the obtention of the following results:

— Advancement of research on Roman Public Law, in particular Roman Administrative Law. In fact the Roman doctrine itself accepts that Roman Public Law, and Roman Administrative Law in particular, have traditionally been forgotten or inadequately studied. As a result, we believe that the new lines of Roman investigation should not be dictated by researcher's or team's preferences but above all by the need to open new and unexplored channels.

— Consideration of DUR as a singular entity within Roman public law rulings. Indeed, we believe that, while including it in Roman Administrative Law, the category of DUR and its distinguishing features must be consolidated, once and for all, as an autonomous sector of Roman public law rulings. Furthermore, according to García de Enterría and Parejo Alfonso «town planning inevitably manifests itself through legal rulings which we can identify under the conventional name of Urban Development Law». Moreover, the Spanish Supreme Court (*Tribunal Supremo*) ruling of 10 May 1983 states «Urban Development Law is, in its entirety, an eminently public law, and is a prominent segment incorporated into Administrative Law where the Government plays the leading role on all levels and specifically in planning, while restricting the involvement of private individuals to that of mere collaborators».

— Encouragement of the doctrinal debate and development of stable communication and exchange channels in order to advance legal science.

The particular features of the research proposed require the involvement of various legal and some non-legal disciplines of which Roman Law is obviously the principal but we should not forget the Greek precedent in Ancient Rome's urban development procedures. Although cognizant of this precedent, research done has

---

<sup>9</sup> For a general overview on the Law, *vid.* J. Palao, *El sistema jurídico ático clásico*, Madrid, 2007.

been scant and undervalued. It will be necessary to incorporate some studies on Greek philology into the research to aid analysis of the epigraphic sources which contain data on town planning regulations in the Greek *polis*<sup>10</sup>. It will also be very useful to have confirmation through the History of Law and Institutions (*Historia del Derecho y las Instituciones*) of the transmission, through history of Roman town planning rules in Spain and in other countries within the Ancient Rome's sphere of influence<sup>11</sup>.

The same may be said of modern Administrative, Financial and Tax Law (*Derecho Administrativo, Derecho Financiero y Tributario*). The investigation should be developed bearing in mind modern systematic criteria as there is no doubt it justifiably belongs within the scope of present-day studies of Administrative Law and, more precisely, within the scope of Urban Development Law<sup>12</sup>. Then again, we are aware that Roman Town Planning has important legal-financial implications. Research of the rulings relating to public works and buildings, using exceptional criteria, is essential to analyse their financing and the organs of power issuing the budget allocations. For this reason, we believe it appropriate to research present-day legal-financial and tax rulings<sup>13</sup>.

We believe that the foregoing shows the need for multidisciplinary research and also the possibility of transferring the results to different fields of social studies such as History or Art History and even to certain technical fields such as Architecture. This feature, known as transversality, is positively valued in research projects that have been requested.

Relating to the field of Roman Law, we would like to highlight the following research work: B. Malavé, "Código Teodosiano 15,1 y la interdicción de obra nueva respecto a los edificios públicos" (*Teodosian Code 15,1 and interlocutory injunction against further construction of public buildings*), en *Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación*, 19-20, 1996. *Legislación urbanística en la Roma imperial. A propósito de una Constitución de Zenón (Urban*

---

<sup>10</sup> Professor Inés Calero specialises in translations into Spanish of inscriptions relating to some Greek cities. For instance, in the case of awarding land and houses to settlers in Kefalonia, Calero publishes: "Los órdenes sucesorios en Derecho griego. Un testimonio etolio (IG IX 1(2))" (*Order of succession or descent in Ancient Greek Law. An Aetolian Testimony*), in *Akten der Gesellschaft für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte*, Köln, 2003. Her book *Las leyes de Gortina* was much acclaimed by the doctrine. Other research works dealing with Ancient Greek Law include *La capacidad jurídica de las mujeres griegas en la época helenística. La epigrafía como fuente*, Malaga, 2004.

<sup>11</sup> For example, we know that in Portugal until 1755, the year of the great earthquake which almost destroyed Lisbon, an extensive and detailed Byzantine ruling included in the Justinian Code (C. 8,10,12), known as the *Constitution of Zeno*, was still in force. This was precisely the subject of the congress "250 anos de legislação urbanística. Ordem e caos na formação e expansão da cidade portuguesa", held in the Lisbon Law Faculty in 2005 in which I was privileged to present the paper "La ley imperial de Zenón: un antecedente histórico singular" (*Zeno Imperial Law – a unique historical precedent*).

<sup>12</sup> Professor I. González Ríos, has published the following monographs: *El dominio público municipal. Régimen de utilización por los particulares y compañías prestadoras de servicios*, Granada, 2001; *Bienes de uso público municipal I. El sistema viario urbano*, Granada, 2002; *Bienes de uso público municipal II. El subsuelo, el vuelo y los espacios libres y zonas verdes*, Granada, 2002.

<sup>13</sup> Y. García Calvente, "La protección del derecho a una vivienda digna a través del sistema tributario" (*Protection of the right to Decent Housing via the Tax System*), en *Estudios de Derecho Financiero y Tributario en Homenaje al Prof. Calvo Ortega*; "El nuevo régimen especial en el Impuesto de Sociedades de entidades destinadas al arrendamiento de viviendas" (*New special regime of Corporation Tax for companies engaged in Renting*), en *Consultor inmobiliario*, 46, 2004; "Fiscalidad de las cooperativas de vivienda" (*Taxation in Housing Cooperatives*), *Consultor inmobiliario*, 58, 2005; chapter on cooperatives in *Fiscalidad de las Entidades de Economía Social*, ed. Civitas, 2005.

*Law in Imperial Rome. Speaking of the Constitution of Zeno*), Malaga, 2000; “Régimen jurídico del Urbanismo en Derecho Romano” (*Urban Legal System in Roman Law*), en *Portalderecho. Programa de Derecho Romano*, at [www.iustel.com](http://www.iustel.com), 2002; “La prohibición de legar materiales unidos a los edificios y Partidas 6,9,13” (*Prohibition to bequeath materials attached to buildings and Seven Parties 6,9,13*), *Actas del IV congreso iberoamericano de Derecho Romano*, 2, Vigo, 1998; “Las contribuciones forzosas de los particulares a las obras públicas” (*Individuals’ obligatory contribution to public Works*), en *Revista General de Derecho Romano*, 4, at [www.iustel.com](http://www.iustel.com), 2005; *Régimen jurídico financiero de las obras públicas en el Derecho Romano Tardío: los modelos privado y público de financiación (Legal and Financial System of public Works in Late Roman Law: Private and Public Financial Models)*, Dykinson, Madrid, 2007; “El problema de las construcciones privadas parasitarias y abusivas: su regulación y represión en el Bajo Imperio Romano” (*The issue of private parasitic and abusive constructions: control and constraint during the Decline of the Roman Empire*), published by *Studi Urbinati*, 74, Urbino, 2007; A. Fernández de Buján. His book *Derecho Público Romano (Roman Public Law)*, 576 pp., Civitas, Madrid, 12 editions: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, reprinted in 2004, 2005, 2006, 2007 and 2008. He has also directed the publication *Derecho Administrativo Histórico (Historical Administrative Law)*, Santiago de Compostela, 2005, and contributed with his own work on pages 119 to 155. We would like to mention some of his most significant writings on spatial cohesion and town planning, which include the following articles: “De la Iberia Griega a la Hispania romana” (*From Greek Iberia to Roman Hispania*), in *Homenaje a Díez Picazo*, Madrid, 2004 and “La administración provincial romana” (*Roman Province*), en IURA, Nápoles, 2004, or the foreword to L. Rodríguez-Ennes, *Gallaecia: romanización y organización del territorio (Gallaecia: romanization and territorial organization)*; J. M. Alburquerque, “A propósito de la protección o defensa del uso colectivo de las cosas de dominio público: especial referencia al interdicto *ne quid in loco publico fiat*” (*A propos of protection or defense of collective usage of public assets: special reference to the provisional order granting possession or retention of disputed property ne quid in loco publico fiat*), en *Problemática del Derecho Romano ante la implantación de los nuevos planes de estudio*, Jaén, 1999; “A propósito de las providencias administrativas urgentes: los interdictos en Derecho Romano” (*A propos of Urgent Administrative Orders: Provision Orders in Roman Law*), en *Derecho y Opinión*, Córdoba, 1995-96; *La protección o defensa del uso colectivo de las cosas de dominio público: Especial referencia a los interdictos de publicis locis (loca, itinere, viae, flumina, ripae)* (*Protection or defense of collective use of public assets: especial reference to the provisional order granting possession or retention of disputed property publicis locis (loca, itinere, viae, flumina, ripae)*), Dykinson, Madrid, 2002; “Una reciente aproximación al Derecho Público Romano” (*A recent rapprochement to Roman Public Law*), en *Revista de Estudios Jurídicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales*, Jaén, 1998; “Consideraciones en materia de protección vial: El interdicto *ne quid in via publica itinereve publico fiat, quo ea via idve iter deterius sit fiat* (D.43.8.2.20)” (*Considerations on road safety: provisional order ne quid in via publica itinereve publico fiat, quo ea via idve iter deterius sit fiat*), en *Derecho y Opinión*, 6, Córdoba, 1998; “Algunas observaciones sobre la influencia de la experiencia administrativa romana en el actual sistema jurídico español” (*Comments on the influence of the Roman administrative experience in the current Spanish Law System*), *Iuris Tantum*, 10, México, 1999; “Experiencia administrativa romana: algunas manifestaciones del poder de los magistrados romanos con relación al uso público de los bienes de dominio

público” (*The Roman Administrative Experience: some examples on the power of magistrati according to public usage of public assets*), en *El poder estatal y local: Problemas jurídicos. Rusia-España*, Univ.Voronézh-Rusia, 2000; “Las orillas de los ríos públicos en Derecho Romano: tratamiento interdictal y jurisprudencial (D. 43,12,1,5)” (*Public River Banks in Roman Law – an approach based on Provisional Orders and Precedents*), en *Derecho y Opinión*, 9, 2001; “Publicidad de los ríos en Derecho Romano. Perspectiva interdictal y criterios jurisprudenciales (D. 43,12,1)” (*Public Rivers in Roman Law. An approach based on Provisional Orders and Precedents*), en *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (RJUAM)*, 7, 2002; “El cauce y las orillas de los ríos públicos en Derecho Romano. Visión interdictal y jurisprudencial (D. 43,12,1,7 y D. 43,12,1,5 y D. 43.12.1.5)” (*River Beds and River Banks in Public Rivers. An overview based on Provisional Orders and Precedents*), en *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña* 7, 2003; “Protección de bienes de dominio público: Experiencia administrativa romana” (*Public Asset Protection – the Administrative experience in Ancient Rome*), en *Derecho Administrativo Histórico*, 1, Santiago, 2005; “Notas acerca de la *utilitas publica*” (*Comments on the common good –utilitas publica*), *Revista General de Derecho Romano*, 5, www.iustel.com, 2005; Ponte, *Régimen jurídico de las vías públicas en Derecho Romano (Legal System of Public Roman Roads in Roman Law)*, Dykinson, Madrid, 2007; “La defensa de las vías públicas romanas. Interdictos especiales para la protección del disfrute de vías públicas” (*Defense of Public Roman Roads. Special Provisional Orders to Protect Use of Public Roads*), en *Revista General de Derecho Romano*, 9, www.iustel.com, 2007; “Normas romanas y vías públicas” (*Roman Norms and Public Roads*), en *Xornadas e Seminarios: Derecho Administrativo Histórico*, 1, Escola Galega de Administración Pública, 2005; “La búsqueda de la seguridad y el orden en las calles de Roma” (*A Search for Security and Order in the Streets of Ancient Rome*), en *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, 9, 2005; “Guardianes y custodios de las calzadas romanas: el *curator viarum*” (*Roman Road Guardians and Safekeepers – the curator viarum*), en *Personalidad y capacidad jurídicas* Córdoba, 2005; “La financiación de las *viae publicae* romanas” (*Financing of Roman viae publicae*), en *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, 8, 2004; “Caracterización de las vías públicas romanas: estructura, construcción y accesorios de una calzada” (*Roman Public Road Features – Structure, Construction and Accessories of a Roman Road*), en *Revista General de Derecho Romano*, 3, www.iustel.com, 2004; “Los agentes constructores de las vías romanas de carácter público. El recurso a la *locatio-conductio* para adjudicar los trabajos de alzamiento” (*Roman Public Road Builders. Resorting to locatio-conductio to award a contract for public services and maintenance*), en *Revista General de Derecho Romano*, 2, www.iustel.com, 2004; C. Jiménez Salcedo, “Algunas reflexiones sobre urbanismo en Derecho Romano”, en *Iuris Tantum (Reflection on Town Planning in Roman Law)*, en *Revista de la Facultad de Derecho*, Universidad Anahuac-Mexico, 2001; also available at *Revista General de Derecho Romano*, www.iustel.com, 2007; “Algunas observaciones a propósito de la responsabilidad por daños causados por ruina de edificios” (*Comments on Liability resulting from Damages caused by Collapsing Buildings*), en *Iuris Tantum*, dated 2004, aforementioned; E. Pendón, *Régimen jurídico de la prestación de servicios en Derecho Romano (Legal System concerning Rendering of Services in Roman Law)*, Dykinson, Madrid, 2002. Further works worth mentioning by the same author: “Afectación y titularidad del dominio público en Roma” (*Ownership and holding of Title of Public Domains in Ancient Rome*), in the

book *Problemática del Derecho Romano ante la implantación de los nuevos planes de estudio*, Jaén, 1999; “Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de algunos tipos de aguas” (*Considerations on the Legal Nature of certain kinds of Water*), en *El Derecho de Familia y los derechos reales en la romanística española* Huelva, 2000; M. Salazar, *Evolución histórico-jurídica del condominio en el Derecho Romano (Historical and Legal Evolution of Common Ownership in Roman Law)* Jaén, 2003, in which relationships between neighbours are looked into on the grounds of co-ownership, including the issue of dividing walls. It also studies the evolution of *refectiones aedificiorum* in Justinian Law overcoming the traditional prohibition to undertake necessary refurbishments on the buildings or dividing walls without co-owners’ consent; “Análisis de la copropiedad romana a través de las acciones divisorias” (*Analysis of Co-ownership in Ancient Rome through Dividing Actions*), in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato* Napoli, 2003; R. Rodríguez López, *Las obligaciones indemnizatorias en el Derecho Público Romano (Obligation to Compensate in Roman Public Law)* Almería, 1996; the following chapters: “Política urbanística en la Novela III de Mayoriano” (*Urban Policy in Majorian, Novel III*), en *Problemática del Derecho Romano ante la implantación de los nuevos planes de estudio (Questions posed on Roman Law by the Introduction of the new Curriculum)*, Jaen, 1999; *La responsabilidad por daños en bienes públicos: Indemninati reipublicae satisfacere debere (Damages Liability on Public Assets – Indemninati reipublicae satisfacere debere)*, en *La responsabilidad Civil. De Roma al Derecho moderno*, Burgos, 2001; the article “Problemática urbanística y agraria del huerto (C. III-II AC)” (*Urban and Agricultural Issues relating to Orchards (C. III-II BC)*), *Revista General de Derecho Romano*, 9, www.iustel.com, 2007.

<p><i>Recibido el 18 de noviembre de 2010, revisado el 2 y 3 de diciembre de 2010 y aceptado el 16 de diciembre de 2010.</i></p>
--







## LE CATHOLICISME COMME RELIGION POLITIQUE EN FRANCE

Jean-Louis CLEMENT\*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

**Jean-Louis Cément** (2011): "Le Catholicisme comme Religion Politique en France", en *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, n.º 1 (marzo 2011), pp. 149-157. En línea: <http://www.eumed.net/rev/rehipip/01/jlc.pdf>.

**ABSTRACT:** How political concepts which were built up by Counter-revolutionary school were able to graft on French Catholicism since the Revolution of 1789? The historical investigation proves that positivist or socialist theorists were indebted to Joseph de Maistre and Louis de Bonald for their religious prophecies and their theory upon relations between temporal power and spiritual power. These ideas became French catholic ideas with the Saint-Simon socialist school and the Roman Catholic priest de La Mennais and the writers as Honoré de Balzac, George Fonsegrive or Paul Bourget. Upon these influences, the French Catholic left-wing put the political principle of reality in the society and not in the human person.

**KEY WORDS:** History, Political Ideas, France, Catholicism, XIX & XX Centuries.

**RESUME :** Comment des concepts de philosophie politique qui ont été élaborés par la pensée contre-révolutionnaire, ont-ils pu se greffer sur le catholicisme français depuis la Révolution de 1789 ? L'enquête historique montre que les théoriciens positivistes ou socialistes sont redevables des prophéties religieuses de Joseph de Maistre et Louis de Bonald pour expliquer le lien entre le spirituel et le temporel. La vulgarisation de ces idées dans le catholicisme français a été faite par l'abbé de La Mennais et ses liens avec l'école socialiste de Saint-Simon, par des romanciers comme Honoré de Balzac, George Fonsegrive ou Paul Bourget. Ces idées forment le terreau du catholicisme progressiste français. Il place, comme dans les théories socialistes, le principe de réalité dans la société et non dans la personne humaine.

**MOTS CLE :** Histoire, Idées politiques, France, Catholicisme, XIX<sup>ème</sup>-XX<sup>ème</sup> siècles.

### 1. Introduction

Éric Voegelin (1901-1985) est un politologue autrichien qui prit le chemin de l'exil en 1938. Il migra aux Etats-Unis où il continua une carrière d'universitaire. Quelques semaines avant l'*Anschluß*, il avait publié un opuscule intitulé *Die politischen Religionen* qui est à l'origine de son exil. Il montre dans cet ouvrage que la racine de l'État se trouve dans la nature profonde de l'homme, mais il ajoute que cette racine se nourrit de la conception que se fait l'homme du principe de Réalité. Il s'en suit que

---

\* Jean-Louis Clément est maître de conférences d'Histoire à l'Université de Strasbourg (Institut d'Études Politiques). Ses travaux historiques portent sur les relations existant entre les philosophies politiques, le droit et la notion républicaine d'État. Dernier ouvrage publié : *Les assises intellectuelles de la République 1880-1914*, Paris, La Boutique de l'Histoire, 2006.

l'État traduit concrètement ce principe de Réalité dans les lois qui organisent la vie publique et sociale. A partir de cette hypothèse, il soutient que l'État totalitaire est fondé sur une gnose intramondaine qui aspire à racheter, à guérir un corps social supposé gangrené. L'État totalitaire s'octroie une fonction messianique et rédemptrice<sup>1</sup>. Les recherches philosophiques et historiques ont relevés, depuis lors, le caractère cultuel revêtu par le nazisme et le communisme. Le premier use d'un vocabulaire magique (*Heil*) ou religieux (« *Le précieux sang allemand* ») le second transforme la procession des icônes en défilés derrière le portrait de Staline et l'iconostase en galeries de portraits des ouvriers les plus méritants dans le hall d'entrée des usines.

La disparition des deux idéologies totalitaires du XX<sup>ème</sup> siècle a-t-elle emporté, par la même occasion, toutes les gnosés intramondaines susceptibles d'ériger l'État moderne ? Quelques réflexions émises par Henri de Lubac (1896-1992), dans sa dernière grande étude, laissent entendre qu'il s'est constitué un catholicisme mis au service d'une gnose intramondaine qui aspire à réguler toutes les activités humaines<sup>2</sup>.

Il faudrait un livre épais pour répondre avec pertinence et nuances à cette question. En quelques pages, il ne sera possible que de crayonner l'ébauche d'une réponse. En effet, cette instrumentalisation du catholicisme commence dans les affres de la Grande Révolution et se développe lentement depuis cette date à telle enseigne que notre temps présent ne fait que réaliser *hic et nunc* une gnose intramondaine élaborée dans la tradition des Lumières. Les penseurs contre révolutionnaires posent les principes d'une nouvelle relation entre politique et catholicisme que les pères de la « pensée réorganisatrice » s'approprient avec un talent subtil. Cette annexion est le levain du catholicisme social et du progressisme catholique contemporain.

## 2. A l'origine de la gnose

Éric Voegelin, quand il écrit : « *il n'existe pas aujourd'hui de penseur important du monde occidental qui ne sache [...] que ce monde se trouve dans une grande crise [...] et qui ne sache que la guérison ne peut être amenée qu'à travers un renouvellement religieux, que ce soit dans le cadre des Églises historiques ou en dehors d'elles* »<sup>3</sup>, semble avoir une réminiscence. En 1796, un émigré savoyard en Russie, Joseph de Maistre (1753-1821), écrivait, dans les *Considérations sur la France*, cette phrase dont l'écho a traversé ces deux derniers siècles enclins au millénarisme : *Il me semble que tout vrai philosophe doit opter entre ces deux hypothèses : ou qu'il va se former une nouvelle religion, ou que le christianisme sera rajeuni de quelque manière extraordinaire* »<sup>4</sup>.

Ce mot eut un grand retentissement chez les élites nées de la tourmente révolutionnaire. Celles-ci, taraudées par le « mal du Siècle », sont d'autant plus torturées par la question religieuse qu'elles cherchent le moyen de clore l'ère des « émotions populaires ». Les penseurs contre révolutionnaires étudient la question de la religion, du catholicisme en particulier, en évacuant – c'est un principe premier–

---

<sup>1</sup> Éric Voegelin, *Les religions politiques*, Paris, Cerf, 1994, 118 p.

<sup>2</sup> Henri de Lubac, *La postérité spirituelle de Joachim de Fiore* tome II de *Saint-Simon à nos jours*, Paris, Éditions Lethielleux ; Namur, Culture et Vérité, 1981, p. 435 à 450.

<sup>3</sup> Éric Voegelin, *Les religions...* op. cit., p. 25.

<sup>4</sup> Joseph de Maistre, *Considérations sur la France*, Préface d'Alain Peyrefitte, Paris, Imprimerie Nationale, 1994, p. 85.

la notion de personne confondue, une fois pour toute, avec l'individualisme radical de Jean-Jacques Rousseau. Maistre écrivait: « *La constitution de 1795, tout comme ses aînés, est faite pour l'homme. Or, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie, des Français, des Italiens, des Russes, etc. [...]: mais, quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie; s'il existe, c'est bien à mon insu*<sup>5</sup>. Louis de Bonald (1754-1840) surenchérit en écrivant la même année : *l'homme n'existe que pour la société, et la société ne le forme que pour elle : il doit donc employer au service de la société tout ce qu'il a reçu de la nature et tout ce qu'il a reçu de la société, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a.* »<sup>6</sup>. Cet auteur établit le lien politique et religion en limitant le ressort de cette dernière à sa fonction sociale : *La société intellectuelle ou religieuse a pour but la conservation de l'homme social par la répression des volontés dépravées; la société politique a pour objet la conservation de l'homme social par la compression des actes extérieurs de ces mêmes volontés [...]*<sup>7</sup>. Par voie de conséquence, la science politique qu'il élabore, n'a plus besoin d'une anthropologie de la personne, de laquelle il se méfie par jansénisme. Elle a besoin d'une « physique sociale » : « [il] nous manque un ouvrage qui remonte aux premiers principes des sociétés et qui en lie le développement à leur histoire et à la connaissance de l'homme »<sup>8</sup>. La pensée contre révolutionnaire posait les fondements d'une « temporalisation » du catholicisme par sa transmutation en religion sociale. Le dénigrement de la notion de personne fut possible en raison de l'humanisme pessimiste janséniste. Il fut tel que, au XX<sup>ème</sup> siècle, l'historien et théologien Louis Capéran (1882-1962) confondait individualisme et personnalisme<sup>9</sup>.

Le style d'une part, les raisonnements complexes d'autre part, auraient limité l'audience de ces théories s'il ne s'était trouvé un écrivain de génie pour fonder la trame de ses romans sur ces doctrines. Honoré de Balzac (1796-1850) introduit les idées de Bonald dans les romans de la *Comédie Humaine*. Dans l'épilogue de la *Cousine Bette* (1847), le docteur Bianchon répond à l'interrogation de la baronne Hulot sur la cause des troubles que vient de traverser sa famille. Le médecin répond en des termes que n'aurait pas reniés Louis de Bonald :

*Du manque de religion, [...], et de l'envahissement de la finance, qui n'est autre chose que l'égoïsme solidifié. L'argent autrefois n'était pas tout, on admettait des supériorités qui le primaient. Il y avait la noblesse, le talent, les services rendus à l'État; mais aujourd'hui la loi fait de l'argent un étalon général, elle l'a prise pour base de la capacité politique [...] les héritages perpétuellement divisés obligent chacun à penser à soi dès l'âge de vingt ans. Eh bien ! Entre la nécessité de faire fortune et la dépravation des combinaisons, il n'y a pas d'obstacle, car le sentiment religieux manque en France, malgré les louables efforts de ceux qui tentent une restauration catholique* »<sup>10</sup>.

Petit à petit, le public cultivé de la bourgeoisie française apprenait à considérer le catholicisme sous l'angle de son utilité sociale immédiate. L'éclectisme, philosophie

<sup>5</sup> Joseph de Maistre, *Considérations...* op. cit., p. 96. C'est Maistre qui souligne.

<sup>6</sup> Louis de Bonald, *Théorie du pouvoir politique et religieux*, Paris, Union Générale d'Édition 10/18, 1966, p. 21 [première édition : 1796].

<sup>7</sup> Louis de Bonald, *Théorie du pouvoir...* op. cit., p. 50.

<sup>8</sup> Louis de Bonald, *Théorie du pouvoir...* op. cit. Cité in Jean Bastier, « La Bible et la Réaction. Louis de Bonald », in Yvon Belaval et Dominique Bourrel (dir.), *Bible de tous les temps tome 7*, Paris, Beauchesne, 1986, p. 701.

<sup>9</sup> Louis Capéran, *Foi laïque et foi chrétienne La question du surnaturel*, Paris-Tournai, Casterman, 1937, p. 12.

<sup>10</sup> Honoré de Balzac, *La cousine Bette présenté par Roger Nimier*, Paris, Le Livre de Poche, 1963, p. 419.

officielle de la Monarchie de Juillet, ne pouvait que renforcer cette idée utilitariste puisque Victor Cousin (1792-1867) considérait que la philosophie devait succéder à la religion: « *la dernière victoire de la pensée sur toute forme, sur tout élément étranger* »<sup>11</sup>.

### 3. *Temporel et spirituel dans le socialisme utopique*

Les fondateurs de la pensée réorganisatrice furent reconnaissant à Bonald d'avoir : *profondément senti l'utilité de l'unité systématique* »<sup>12</sup>. Ces penseurs, qui se voulaient, paradoxalement, les ennemis de Jean-Jacques Rousseau, adhéraient à sa conception du lien entre la religion et l'État. Le promeneur solitaire le définit ainsi: « [...] *la loi chrétienne est au fond plus nuisible qu'utile à la forte constitution de l'État [...] Tout ce qui rompt l'unité sociale ne vaut rien. Toutes les institutions, qui mettent l'homme en contradiction avec lui-même, ne valent rien* »<sup>13</sup>. A la différence des Montagnards –excepté le cas de Robespierre, dévot de l'Être Suprême– qui ont cherché à abattre les religions, les socialistes, qualifiés d' « utopistes » par Karl Marx, ont cherché à gommer la différence entre le temporel et le spirituel.

Barthélemy Prosper Enfantin (1796-1864), qui fut le guide de l'Église saint-simonienne, écrit au début des années 1830 : « [...] *l'humanité a un avenir religieux [...] la religion de l'avenir sera plus grande, plus puissante que toutes celles du passé [...] elle dominera l'ordre politique mais [...] l'ordre politique sera dans son ensemble, une institution religieuse, car aucun fait ne doit plus se concevoir en dehors de Dieu, ou se développer en dehors de sa loi* »<sup>14</sup>. Le catholicisme « rajeuni » par l'abbé Félicité de La Mennais (1782-1854) et son groupe verse aussi dans une confusion identique à celle de l'école saint-simonienne, aux leçons de laquelle venaient les disciples de l'abbé. La Mennais a fait sien cette idée que « *le christianisme et l'humanité sont une même chose* »<sup>15</sup>. Avec un tel principe, la tension entre le spirituel et le temporel cessait. Le social devenait le seul principe de réalité et l'unique principe spirituel.

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), qui, pour sa part, n'a jamais cherché à fonder une religion nouvelle comme les Saint-simoniens, ne distinguait pas, à l'instar du Père Enfantin, le temporel du spirituel. Grand lecteur de la Bible, il en possédait un exemplaire qu'il annotait dans les marges. En vis-à-vis du chapitre XXII (15-21) de l'évangile de saint Mathieu, dans lequel Jésus dit: « *Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu* », le père de l'Anarchie écrit :

*La réponse que fait ici Jésus rentre dans celle que nous lui verrons plus bas faire à Pilate : 'Mon royaume n'est pas de ce monde' ; là, comme ici, il ne fait que céder à la force ; là commence cette séparation du spirituel et du temporel, développée par saint Paul (Rom. XIII 1-sq) et qui aboutit à la reconnaissance de toute tyrannie, à la théorie du droit divin. Dès lors, en effet, que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, que c'est celui de l'esprit, tandis que le royaume de César est celui de la*

<sup>11</sup> Victor Cousin cité in Henri de Lubac, *La postérité spirituelle...* op. cit., p. 8.

<sup>12</sup> *Exposition de la doctrine saint-simonienne 1829* cité in Jean Touchard, *Aux origines du catholicisme social. Louis Rousseau 1787-1856*, Université du Maine, 1998, p. 233.

<sup>13</sup> Jean-Jacques Rousseau, *Du Contrat Social*, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, p. 174 [première édition : 1762].

<sup>14</sup> Barthélemy Prosper Enfantin, *Doctrine saint-simonienne Exposition*, Paris, Librairie Nouvelle, 1854, p. 251.

<sup>15</sup> Henri de Lubac, *La postérité...* tome 2...op. cit., p. 74. Lettre de La Mennais à Charles de Coux 21 mai 1834.

force, auquel tout chrétien doit se soumettre comme à une chose établie de Dieu, il n'y a plus de raison pour le fidèle de s'occuper de la chose publique ; il doit obéissance. La théorie du droit d'insurrection est antichrétienne, de même que le principe de la souveraineté du peuple. Jésus par là se coupe en deux et se réduit à néant<sup>16</sup>.

Héroult d'une lecture temporelle de l'Évangile, Proudhon écrivait, dans *La Voix du Peuple* du 4 novembre 1849 : « Religion et Société sont termes synonymes : l'Homme est sacré par lui-même comme s'il était Dieu. Le catholicisme et le socialisme, identiques pour le fond, ne diffèrent que par la forme »<sup>17</sup>.

Auguste Comte (1798-1857) ne chercha pas à se donner une culture théologique similaire à celle de Proudhon. Toutefois, dans sa théorie des âges de l'Humanité, rompant avec le mépris des philosophes du XVIII<sup>ème</sup> siècle à l'endroit du Moyen Âge, il admire la capacité de cette époque monothéiste à créer l'Ordre dans la Société :

« La nature absolue de la philosophie théologique qui présidait à cette comparaison [Antiquité – Moyen Âge], empêchait même de supposer l'existence ultérieure d'aucun terme nouveau, puisqu'elle représentait le régime catholico-féodal comme doué d'une perfection définitive, au-delà de laquelle on plaçait seulement l'utopie religieuse sur la vie future »<sup>18</sup>.

Cette quête d'un salut dans l'au-delà est la cause originelle du caractère antisocial du catholicisme, lequel a ouvert la voie à l'âge métaphysique, plus apte à détruire qu'à construire :

« Aux yeux de la foi, surtout monothéique, la vie sociale n'existe pas, à défaut d'un but qui lui soit propre ; la société humaine ne peut alors offrir immédiatement qu'une simple agglomération d'individus, dont la réunion est presque aussi fortuite que passagère et qui, occupés chacun de son seul salut, ne conçoivent la participation à celui d'autrui que comme un puissant moyen de mieux mériter le leur, en obéissant aux prescriptions suprêmes qui en ont imposé l'obligation »<sup>19</sup>.

Fidèle à la pensée de Maistre, Auguste Comte sait combien est nécessaire l'unité spirituelle pour faire se mouvoir la Société, conçue comme une entité autonome et supérieure aux individus. Par la séparation du spirituel du temporel, le catholicisme a su maintenir, un temps, une certaine cohérence sociale par le biais de la charité dont l'effet, sur le long terme, était annihilé, en dépit de tous les efforts, par la rivalité du Sacerdoce et de l'Empire<sup>20</sup>.

#### 4. La greffe sur le catholicisme et ses fruits

Claude-Henri de Saint-Simon et son plus fidèle disciple, Barthélemy-Prospér Enfantin, avaient tenté de fonder une religion sociale dans l'attente de la Femme-Messie ; les meilleurs élèves quittèrent le cénacle, comme Michel Chevalier. Auguste Comte, ancien secrétaire de Saint-Simon et farouche adversaire des Saint-simoniens, se promut, à la fin de sa vie, fondateur de la religion de l'Humanité ; Émile

<sup>16</sup> Œuvres complètes de P.-J. Proudhon *Écrits sur la religion Introductions et notes de Théodore Ruyssen*, Paris, Librairie Marcel Rivière et Cie, 1959, p. 355 note a.

<sup>17</sup> Œuvres complètes...op.cit. p. 193.

<sup>18</sup> Auguste Comte, *Discours sur l'ensemble du positivisme Présentation par Annie Petit*, Paris, Garnier-Flammarion, 1998, p. 101 [première édition : 1848].

<sup>19</sup> Auguste Comte, *Discours sur l'Esprit positif*, Paris, Librairie Philosophique Joseph Vrin, 1995, p. 183 [Première édition : 1844].

<sup>20</sup> *Cours de Philosophie Positive fin de la 57<sup>ème</sup> leçon* reproduite in Auguste Comte *Science et politique les conclusions générales du Cours de Philosophie Positive*, Paris, Pocket, 2003, p. 267.

Littré (1801-1881) cessa ses visites au maître et donna une lecture athée de son message. La nouvelle religion ne vint pas. Le rajeunissement extraordinaire du catholicisme ? L'encyclique *Mirari Vos* du 15 août 1832 condamnait l'expérience de l'abbé de La Mennais, qui n'envisageait la religion que dans son rapport avec la société et le politique. Fallait-il donc douter de la prophétie de Joseph de Maistre ?

Un saint-simonien, André-François Bourgeois (1813-?), élabora, dans les années qui suivirent, une synthèse entre l'antique catholicisme et le Nouveau Christianisme. Il y rétablissait une sorte de distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, lesquels, dans son langage pseudo-mystique, sont appelés le Verbe et la Chair. Il y récuse le Jansénisme et il y définit le christianisme comme : « *la doctrine du Verbe incarné (...) qui ne réprouve pas mais éprouve la chair pour la sanctifier et s'unir à elle (...) Le vrai christianisme n'est plus cette doctrine de mort qui représente son Christ humilié dans son esprit (...)* »<sup>21</sup>. La répétition excessive de l'adjectif « temporel » indique clairement l'instrumentalisation des dogmes. Ceux-ci ne sont plus appelés à soulever une partie du voile qui recouvre le mystère de Dieu ; ils sont appelés à participer à la « *réhabilitation de la Chair* », en d'autres termes à une réorganisation de la Société afin de mettre un terme à l'exploitation économique de l'homme par l'homme ou de la femme par l'homme par le moyen de l'association universelle et du droit d'aînesse restaurée dans une société devenue une grande manufacture<sup>22</sup>. La distinction du spirituel et du temporel subsiste à la condition que le premier soit au service du second. La Société est l'unique principe de Réalité.

Cette voie tracée par un obscur disciple du Père Enfantin fut suivie par le pape du Nouveau Christianisme qui chercha une conciliation avec La Mennais après l'avoir dénigré<sup>23</sup> et par Philippe Buchez (1796-1865) qui fut le théoricien d'un christianisme en attente de la révélation sociale qui parachèvera sa doctrine de Progrès<sup>24</sup>. Le sociologue Frédéric Le Play (1806-1882) s'inscrit dans la tradition intellectuelle du saint-simonisme: ses théories ont façonné des générations de prêtres par l'entremise de ses disciples nommés enseignants à l'Institut Catholique de Paris. Auguste Comte, pour sa part, caressa en 1856 le projet de rallier à sa religion les meilleurs éléments de l'« *ancienne théologie* » représentés par les pères de la Compagnie de Jésus. Seul Proudhon, après un retour sur lui-même dans la dernière partie de sa vie, rendit au spirituel son autonomie par rapport à la Société et non par rapport à la Personne, notion que l'on ne trouve jamais sous sa plume.

Par des voies aussi multiples que variées, l'élite du catholicisme français, soucieuse d'apporter sa pierre à la restauration d'une Société ébranlée par onze révolutions en moins d'un siècle, s'imprégna de ces théories : le comte Albert de Mun a lu Auguste Comte; au début du XX<sup>ème</sup> siècle, les jeunes catholiques s'enflamment à la lecture des romans sociaux de George Fonsegrive (1854-1917), vulgarisateur d'un néo saint-simonisme, ou de ceux de Paul Bourget (1862-1935), un disciple de

---

<sup>21</sup> André-François Bourgeois, *Le christianisme temporel Aux Saint-simoniens et aux Saint-simoniennes Sur la nécessité et la possibilité de rallier la doctrine de Saint-Simon à la foi chrétienne et au Christianisme temporel annoncée dans les Écritures*, Paris, Imprimerie d'Éverat et Cie, 1837, p. 21 et 22.

<sup>22</sup> André-François Bourgeois, *Le christianisme temporel...* op.cit., p. XIII et XVI.

<sup>23</sup> Henri de Lubac, *La postérité...* tome 2..., op. cit. p. 74.

<sup>24</sup> *Ibidem* p. 92 et 94.

Frédéric Le Play qui fut séduit aussi par le néo proudhonisme de Georges Sorel (1847-1922)<sup>25</sup>.

Cette influence se traduit par une vision sociale des dogmes qui est d'autant mieux acceptée qu'elle a perdu le caractère abrupt des jugements d'Enfantin. Le Play les fit admettre par la bourgeoisie catholique. Il arrive à minorer avec urbanité la valeur des dogmes, tout en se gardant de circonscrire la sphère du religieux à la sphère sociale :

« *Il ne s'agit plus seulement d'insister sur le dogme et d'affirmer, par des discours ou par des écrits, la supériorité du principe; il faut encore rendre cette supériorité manifeste par des actes et par la coopération au progrès moral des sociétés. Assurément, ce serait abaisser la religion que de lui assigner pour fin principale le bien-être temporel des croyants (...) Les catholiques, qui dans ces derniers temps ont appliqué toutes les forces de leur intelligence à combattre les protestants, auraient pu faire un plus utile emploi de leurs talents et de leur science* »<sup>26</sup>. Le fond de la pensée est une adaptation de cette imprécation d'Enfantin écrivant en 1831 : « *nous dirons que les catholiques gallicans ou jansénistes, ultramontains ou jésuites, que les protestants luthériens ou calvinistes, sociniens, épiscopaux ou presbytériens, indépendants, quakers, méthodistes, etc., etc., n'ont pour point de ralliement que des dogmes tellement insignifiants à leurs propres yeux, malgré le prix qu'ils y semblent y mettre, que les différences qui existent entre ces dogmes, différences qui les séparent complètement dans leurs pratiques religieuses, n'en introduisent aucune dans leur conduite individuelle ou politique* »<sup>27</sup>.

Minoration du dogme dont on trouve la trace dans les romans sociaux de George Fonsegrive. La notion de péché originel est dévaluée par cet auteur soucieux de créer une démocratie qui ne soit pas frappée au coin du paternalisme inscrit dans une tradition figée du légitimisme de la tradition populaire<sup>28</sup>.

L'apologétique fut, elle aussi, profondément marquée par la révélation du Nouveau Christianisme. Celui-ci donne une explication générale de l'histoire du catholicisme en des termes qui montrent combien celle-ci est déterminée par les conditions matérielles: dès l'introduction de la « Bible » saint-simonienne, il est possible de cueillir cette affirmation : « *nous qui prétendons que l'unité papale n'a fait naître l'opposition protestante que parce que le catholicisme ne comprenait pas en lui tous les modes de l'activité humaine, et d'étayer, dans les longs développements, cette thèse « historique » : Si le christianisme n'a pas pu parvenir à s'emparer exclusivement de la direction sociale, c'est que son dogme était incomplet; c'est qu'il n'avait point compris la manière d'être matérielle de l'existence de l'homme, ou ne l'avait comprise, au moins, que pour la frapper d'anathème* »<sup>29</sup>. Forts de cet *a priori*, les apologistes du début du XX<sup>ème</sup> siècle, George Fonsegrive et Maurice Blondel (1861-1949), ont récusé toutes les défenses et illustrations de la foi catholique fondées sur une déduction établie à partir des Vérités révélées, au prétexte que

<sup>25</sup> Jean-Louis Clément, *La Démocratie chrétienne en France Un pari à haut risque de 1900 à nos jours*, Paris, François-Xavier de Guibert, 2005, p. 17 à 38 ; *Les assises intellectuelles de la République Philosophies de l'État 1880-1914*, Paris, La Boutique de l'Histoire, 2006, p. 132 à 134.

<sup>26</sup> Frédéric Le Play, *La réforme sociale en France déduite de l'observation comparée des peuples européens*, Tours, Alfred Mame et Fils, Libraires-Éditeurs, 1874, tome 1, p. 192 et 193.

<sup>27</sup> Barthélemy-Prosper Enfantin, *Doctrine saint-simonienne...* op. cit., p. 261. Les soulignements sont d'Enfantin lui-même.

<sup>28</sup> Jean-Louis Clément, *La démocratie chrétienne...* op. cit., p. 27.

<sup>29</sup> Barthélemy-Prosper Enfantin, *Doctrine...* op. cit., p. 2 et 394.



« Dans l'état présent des esprits, le lien économique est le plus solide des liens sociaux »<sup>30</sup> et que la réalité sociale ne peut se déduire de la Révélation.

Dans la mesure où les écoles positivistes cherchent à être fidèles au catholicisme, c'est avec l'arrière pensée de l'utiliser pour le maintien de la cohésion sociale. Charles Maurras (1862-1952) se veut d'autant plus thomiste qu'il interprète la pensée du Docteur angélique dans le sens de la sujétion nécessaire de l'individu au groupe, imitant en cela Auguste Comte<sup>31</sup>. Un même souci social anime la démocratie chrétienne dont les racines les plus anciennes puisent dans les théories de Maistre et Bonald. Quand les fondateurs du Parti Démocrate Populaire font du professeur de droit Maurice Hauriou (1856-1929) leur mentor, ils sont en quête d'une doctrine juridique qui permette à la Société de vivre et de durer et qui ne repose pas exclusivement sur la morale personnelle classique. Se voulant, selon la tradition saint-simonienne, dans le juste milieu entre l'individualisme libéral et le sociologisme excessif de Léon Duguit (1859-1928) ou de Charles Maurras, ils voient, dans sa théorie de l'Institution, une interprétation de la vie collective qui récuse l'individualisme de Rousseau et qui place la volonté individuelle comme source unique du droit. Cette volonté individuelle est frappée au coin du libéralisme, qui la conçoit comme le reflet de la volonté collective; elle ne trouve plus son principe dans la notion de droit naturel. La tradition contre révolutionnaire le refuse depuis les théories de Bonald<sup>32</sup>. Cette théorie du droit, qui est d'inspiration positiviste de l'aveu même de Maurice Hauriou, conduit d'une façon douce mais ferme à la prédominance du groupe sur la personne. Ainsi en fut-il pour le droit de propriété qui, sous l'impulsion du M.R.P., cessa, en 1948, d'être un droit personnel pour devenir un droit social, justifié par une lecture rapide de la théologie de Thomas d'Aquin non reconnue en son temps par l'épiscopat français<sup>33</sup>. Ainsi en est-il, de nos jours, des projets de dividende universel du Forum des Républicains Sociaux qui accrédite l'idée d'un revenu minimum du berceau à la tombe, en le séparant de la notion de travail. Or le droit au travail relève de la justice distributive car le travail a une dimension humaine qui va au-delà du profit engendré par lui<sup>34</sup>.

L'usage social du catholicisme a marqué durablement sa liturgie rénovée à la suite du concile de Vatican II. Le symbole de Nicée contient ces mots latins : « *Credo in unum Deum [...] et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam* ». La traduction grammaticalement correcte serait : « *Je crois en un seul Dieu [...] et [je crois] l'Église une, sainte, catholique et apostolique* ». La traduction proposée en 1947 est : « *[Je crois] à l'Église une, sainte catholique et apostolique* »<sup>35</sup> En 1975, la traduction officielle de ce même texte est la suivante : « *[Je crois] en l'Église une, sainte, catholique et apostolique* »<sup>36</sup>. L'adjonction des deux prépositions vise à

<sup>30</sup> Yves Le Querdec, *Le fils de l'Esprit*, Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1905, p. 377. Le Querdec est le nom de plume de Fonsegrive.

<sup>31</sup> Michael Sutton, *Charles Maurras et les catholiques français 1890-1914. Nationalisme et positivisme*, Paris, Beauchesne, 1994, p. 93 à 101.

<sup>32</sup> Jean-Louis Clément, « La théorie juridique de Maurice Hauriou : l'adhésion de la démocratie chrétienne 1919-1930 », in Annie Stora-Lamarre et Jean-Louis Halpérin, *La République et son droit (1870-1930)*, Colloque de Besançon 19-21 novembre 2008 (à paraître).

<sup>33</sup> Jean-Louis Clément, « Les juristes catholiques et la laïcisation du droit 1880-1946 », *Les Cahiers du Littoral*, 2 n°5, p. 147 à 156.

<sup>34</sup> *La Tribune du F.R.S.*, mars 2008, n°1, p. 2.

<sup>35</sup> *Missel quotidien et vespéral par Dom Gaspar Lefebvre*, Bruges, Apostolat liturgique, Tourcoing, Société liturgique, 1947, p. 85 et 86.

<sup>36</sup> *Missel du Dimanche présenté par Pierre Jounel Texte liturgique officiel*, Paris, Desclée, 1975, p. 373.

renforcer progressivement la sujétion du fidèle à l'autorité ecclésiastique. Ces traductions accordent une autorité magistérielle à l'Église visible que le texte primitif du symbole de Nicée (325) ne peut justifier. Derrière ces faux sens se tapit la crainte de la sédition de l'individu contre l'espèce que le judaïsme et le catholicisme portent en eux dès l'origine. En effet, les cosmogénèses babyloniennes expliquent la création de l'humanité par la volonté des dieux d'établir entre eux la paix en se déchargeant sur les hommes des durs labeurs qui furent causes de leur discorde<sup>37</sup>. A l'opposée, la cosmogénèse judéo-chrétienne place un Dieu personnel à l'origine de la création de la personne humaine faite à l'image de son Créateur qui ne le façonna point pour le suppléer dans des travaux ingrats<sup>38</sup>. Le passage de l'Impersonnel au Personnel, du tout indifférencié au particulier bien défini induit une vision du monde contradictoire avec celle du monde babylonien antique.

La dénaturation du catholicisme français en religion politique, sur une durée de deux siècles, tient à la Grande Peur suscitée par la Révolution française : celle de l'effondrement de la Société et de l'arrêt toute amélioration des conditions de vie. Des courants d'opinion dans le catholicisme français, nés de la pensée contre révolutionnaire et/ou de la pensée réorganisatrice, ont cherché à apporter leur pierre à la construction d'une nouvelle société. Pour ce faire, acceptant de voir dans la Grande Révolution un signe providentiel fondé sur des pensées chrétiennes –comme le pensait Buchez<sup>39</sup>–, ces courants entendent répondre au dilemme posé par le sociologue Émile Durkheim (1859-1917) que résume cette formule lapidaire : « *Dieu ou la Société* »<sup>40</sup> par celui-ci : « *Dieu et la Société* ». A cette fin, ces courants, qui se retrouvent autour de revues ou d'hebdomadaires comme *Sept*, *L'Aube*, *Temps Présent*, *La Vie Catholique*, *Témoignage Chrétien*, tendent à conserver l'idée de Personne en lui donnant une définition intra mondaine inspiré de la dialectique proudhonienne des antinomies irréductibles. La prise de conscience d'être une Personne résulterait de la tension naturelle existant entre l'individu et son groupe social<sup>41</sup>.

Cette vision du monde minore la portée civilisatrice du premier livre de la Genèse d'une part. Elle ne peut tolérer, d'autre part, la moindre critique émanant de l'Église enseignante tant avant qu'après la Seconde Guerre mondiale. Pour ce motif, ces courants amoindrissent l'autorité épiscopale par le moyen de « mythes » historiques. Ils inventent son manque de discernement politique<sup>42</sup>.

Recibido el 2 de diciembre de 2010, corregido del 15 al 18 de diciembre de 2010 y aceptado el 9 de enero de 2011.

<sup>37</sup> René Labat, André Caquot, Maurice Sznycer, Maurice Vieyner, *Les religions du Proche-Orient asiatique*, Paris, Fayard/Denoël, 1970, p. 28, 29, 66, 67.

<sup>38</sup> *Genèse* I 27.

<sup>39</sup> B.-J.-B. Buchez et P.-C. Roux, *Histoire parlementaire de la Révolution française ou journal des Assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815*, Paris, Paulin libraire, tome 1, volume 1, Introduction p.1.

<sup>40</sup> Raymond Aron, *Mémoires 50 ans de réflexion politique*, Paris, Julliard, 1983, p. 69.

<sup>41</sup> Robert Aron, Arnaud Dandieu, *La révolution nécessaire*, Paris, Grasset, 1933, p. 33 ; Emmanuel Mounier, *Qu'est-ce que le personnalisme ?*, Paris, P.U.F., 1947, p. 52.

<sup>42</sup> Jean-Louis Clément, « Vichy dans la mémoire catholique 1970-1997 », in Claire Andrieu et aliae, *Politiques du passé. Usages politiques du passé dans la France contemporaine*, Aix-en-Provence, P.U.P., 2006, p. 207 à 217.





A. A. V. V., *Direito e informação. I encontro nacional de Bibliotecas jurídicas*, Coimbra Editora, Lisboa, 2007, 112 págs.

ABSTRACT: Interesante información se puede encontrar en este libro sobre la reproducción de obras para uso privado, sin autorización del autor. Problemas jurídicos principales que plantea o puede ir planteando en el futuro. ¿Hasta qué punto se aplica una penalidad como consecuencia de la reproducción de libros? ¿Qué sistemas de control existen? Valor de la obra literaria y de la obra jurídica.

PALABRAS CLAVE: Fotocopias de manuales, Copia privada, Plagios, Plagiones, Información jurídica, Delitos contra la propiedad intelectual, Bibliotecas jurídicas.

Dário Moura Vicente, profesor de la Facultad de Derecho de Lisboa, hace aportaciones interesantes acerca de la copia privada y la sociedad de la información (pp. 15-27). En la generalidad de los sistemas jurídicos nacionales se permite, con ciertos límites, la reproducción de obras para uso privado de obras literarias y artísticas, sin necesidad de autorización previa de los titulares de derechos sobre esas obras. En el Derecho portugués, la reproducción de obras protegidas para uso privado sólo está permitida si no se perjudica a los legítimos intereses del titular de los derechos. Esta premisa hay que tenerla muy presente, máxime cuando en los últimos años, gracias a las nuevas tecnologías, se ha facilitado considerablemente la reproducción para uso privado, a bajo costo y con un alto nivel de calidad. En muchos países, como Francia, se ha optado por establecer una compensación equitativa por la copia privada (p. 21). Estos criterios mencionados anteriormente también se aplican a la copia privada digital. A modo de conclusión, Dário Moura propone que la normativa se oriente hacia un sistema de remuneración por actos individuales de utilización.

Eloy Rodrigues, que trabaja en los Servicios de documentación de la Universidad do Minho, se refiere al acceso libre al conocimiento (pp. 29-40). El mismo ha sufrido un auge en los últimos diez años, máxime con la disponibilidad libre en Internet de la literatura de carácter académico o científico, permitiendo a cualquiera utilizarlo, descargarlo, copiar, distribuir, imprimir o referenciar el texto íntegramente de esos documentos. En las últimas décadas la literatura científica especializada ha aumentado sus beneficios un 30%, muy por encima de los registrados en otro tipo de publicaciones. Al mismo tiempo, se ha agudizado la “crisis de los periódicos” y las graves consecuencias que las limitaciones de acceso a la literatura producen en el propio sistema científico (pp. 32-33). En realidad, las revistas de acceso libre no representan ni el 5% del total de las revistas, al menos en el momento en que se defendió por parte de Rodrigues su ponencia, ya que ese tanto por ciento ha variado considerablemente en los últimos cuatro años. Los autores deben conocer y negociar las condiciones de transferencias de sus derechos para las empresas editoras. A modo de conclusión, Eloy Rodrigues afirma que parece evidente que el acceso libre será parte del futuro de la comunicación científica, si bien necesitará que el sistema científico y académico pasen de las declaraciones de intenciones al apoyo a actos concretos (p. 39).

João Esteves Pinto, administrador de la Imprenta Nacional de la Casa de la moneda, hace una breve referencia (pp. 41-49) a la relevancia del Diario de la República (DR), que se presenta como el único diario mencionado en la Constitución de la República portuguesa, y el Diario electrónico de la República (DRE). Aunque

también hay otras leyes ordinarias que determinan igualmente la publicación en el Diario de la República de diversos actos, según sean dictados por autoridades públicas o privadas.

La figura del personal que introduce y utiliza la información jurídica, así como la de los investigadores, ha sido defendida y valorada por Luís Fábrica, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica portuguesa (pp. 51-60). Este personal debe tener los conocimientos de informática necesarios no sólo para introducir los datos en la base de datos informática, sino también para interpretar los correspondientes resultados. Por otro lado, en el proceso científico de la investigación se presenta como fundamental conocer los mecanismos de recopilación, elaboración y manejo de la información por todos los participantes (p. 52). Uno de los cambios más importantes ha sido la digitalización de las obras, tales como el Diario de la República electrónico, que ha sustituido los enormes volúmenes encuadernados, al tiempo que hacía posible una consulta más rápida, ágil y eficaz.

Un análisis sobre las bibliotecas jurídicas según la perspectiva de la investigación Histórica en la época contemporánea ha sido realizada por el jurista Luís Bigotte Chorão (pp. 61-76). La Historia del Derecho, como género historiográfico, siempre se ha presentado como una fuente insustituible de conocimiento histórico, entendido éste en el sentido más amplio. En la bibliografía jurídica, caben citar cuatro juristas portugueses, en los siglos XIX y XX: Silva Abranches, Armelim Júnior, Eduardo Rally Alves de Sá y Fernando de Arranches Ferrão (pp. 65-67). En esta bibliografía jurídica también ha alcanzado una gran relevancia la colección de disertaciones académicas presentadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra durante el s. XIX, así como los *Anais da Sociedade Jurídica*, publicados en Lisboa desde 1835.

El abogado Fernão Fernandes Thomaz comenta la relación del abogado con la información jurídica (pp. 77-86). Hay que destacar la idoneidad del Diario de la República o el Boletín del Trabajo y Empleo, como recopilaciones oficiales en sus correspondientes materias. El Estatuto de la orden de los abogados establece en su art. 82, c) y d) que el abogado debe dar a su cliente su opinión sobre el derecho y las pretensiones que éste invoca, y debe estudiar con cuidado y tratar con celo esta cuestión para utilizar todos los recursos, según su experiencia y leal saber. Pero el abogado se ha encontrado siempre con varios inconvenientes: el exceso de la información jurídica producida también por las nuevas tecnologías; parte de esa información se presenta como inútil y, por tanto, no se podrá utilizar, así como que los abogados deben contribuir de forma constante a la mejora de los medios tecnológicos ya existentes.

El profesor de la Facultad de Derecho de Lisboa Eduardo Vera-Cruz Pinto ofrece una visión particular de los aspectos deontológicos en la función de bibliotecario en la Facultad de Derecho (pp. 81-86). Una de las principales preocupaciones de los bibliotecarios ha sido la defensa del derecho del autor de aquellos que escriben libros jurídicos. Por ello, este personal debe cumplir uno de los deberes deontológicos de su profesión: proteger los autores en las bibliotecas para que estas funciones como centros de reproducción gratuita de libros que, comprados, pagan una parte de los derechos de autor. El derecho de autor representa una forma de tutelar la remuneración del trabajo intelectual (pp. 80-81). A este problema se le une el hurto de libros, que representa una pérdida incalculable para cualquier biblioteca.

Ana Maria Martinho, bibliotecaria de la Facultad de Derecho de Lisboa, comenta las competencias profesionales del bibliotecario jurídico (pp. 87-103). El bibliotecario, como gestor de información y conocimiento, técnico o profesional de documentación

e información, documentalista y muchas otras funciones, tiene como misión esencial organizar, tratar y difundir la información, de modo que pueda ser fácilmente obtenida por quien lo necesite. Para el ejercicio adecuado de todas estas funciones necesita un amplio conjunto de saberes y competencias, tanto más diversificados y especializados cuanto mayor sean las funciones desempeñadas. La información jurídica posee una importancia social, pero que debe ser reconocida, conservada y transmitida sin alteraciones, para que tenga la precisión y rigor necesarios en su correcta utilización (p. 88). El bibliotecario jurídico asume cada vez más un papel de intermediario indispensable entre las fuentes de información jurídica y los que manejan esta información, esto es, los profesionales que realizan actividades en el ámbito de Derecho. El bibliotecario jurídico deberá estar atento a las constantes actualizaciones, ya que una información incompleta o inadecuada podría causar graves daños a quien la necesita.

Este Primer Encuentro Nacional de Bibliotecas jurídicas, que tuvo lugar en Lisboa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, pretendía ser un lugar de encuentro de bibliotecarios y técnicos jurídicos, profesores, investigadores y alumnos de Derecho, abogados, consultores jurídicos, productores de información jurídica y representantes de asociaciones y representantes también de asociaciones de bibliotecarios, nacionales y extranjeros. [Recibido el 18 de diciembre de 2010].

Guillermo Hierrezuelo Conde

Antony Adolf, *Peace. A world history*, Polity Press, Cambridge, 2009, 285 págs.

ABSTRACT: Presented book provides a synthetic discussion of development of the institutional and legal conditions and the practical implementation of the concept of peace in history. It thus reflects the growing importance of research undertaken in that issue in recent years. Nowadays we are witnessing the growing importance of search for answers to fundamental question of international cooperation and international order: how to achieve and maintain a state of peace between nations? Studies on the determinants of peace seem to be an important for all the theories of contemporary international relations. The book may be interest source of knowledge for all persons interested in the history of peace, both in its individual as well as international and global dimension.

KEYWORDS: Anthony Adolf, Perpetual peace, Eternal peace, Politics.

Awarding the Nobel Peace Prize to a Chinese dissident Liu Xiaobo a few days ago, as well as the reflection on the evolution of the current shape of international politics has led me to read several monographic works, published in recent years, devoted to the question of peace in international relations. I drew a lot of attention especially to the book *Peace. A world history* by Antony Adolf, published in 2009 by Polity Press.

This book is a part of a trend of growing interest in issues of peace among the specialists in various fields of knowledge. Researches on international peace have taken a truly interdisciplinary character in recent years. They are performed not only on the basis of philosophy or law, but also, and perhaps in particular, on the basis of

political science and history. Even more important seems to be the universalisation of the idea of peace research and undertaking of studies in this field not only in Europe or the U.S.

The basic factors affecting the development of twentieth-century peace studies include the achievements of the Enlightenment and positivism, emerging theory of foreign policy and the development of science. To realize how impressive were the studies conducted in this scope, it is enough to recall the names of prominent political scientists: Raymond Aron and Jean-Baptiste Duroselle, a sociologist Johan Galtung and creator of the theory of systems – Anatol Rappoport. Based on the methodology and conceptual apparatus in various fields, they have tried to show diversity, as well as the correlates of the main factors affecting the preservation of peace. The research, conducted on the basis of social science, have focused on the analysis of the evolution of the concept of peace throughout history, and their influence on contemporary institutional arrangements (for example, the shape of international institutions – the European Union or United Nations). The dynamics of research on peace has very often been shaped by political factors. Interestingly, research in this area has best developed in the first years after the end of major military conflicts. It was so, for example, during the presidency of Wilson in the United States, in the late forties in Western Europe, or in connection with plans to revitalize the United Nations in the early nineties of the last century.

For over two years we can observe a significant intensification of scientific studies in the field of peace, led notably by American researchers. This fact can be associated with the current overvaluation in the shape of international order and global power balance. The fundamental factors influencing the development of scientific thought on the issue of peace include: 1. Attempt to redefine U.S. foreign policy from imperial hegemony and confrontation for polycentric order and cooperation; 2. Increasing institutional dynamics of the European Union; 3. The reduction in the number of international conflicts and widening the space of democracy in many countries of the world is evidenced also in the social implications (for example, reducing the number of refugees); 4. Noticeable depoliticisation and economization of international relations as well as an attempt to develop effective mechanisms of cooperation in the world of crisis times.

Anthony Adolf's book well reflects the growing importance of research on peace for the shape of contemporary discourse in the history of political ideas and public institutions. In presenting the evolution of the idea of peace in different historical periods, the author is based on three basic categories of heuristics, in which, the above mentioned notion can be understood. Among them there is an individual peace (of keeping peace between individuals), group peace (associated with maintaining peace within the community) and the collective peace (related to the maintenance of peace and cooperation between groups). Such concept of peace is therefore both an idea of political nature (a set of ideas about methods of its conservation) and an institutional and public phenomenon of a *purely* pragmatic nature (illustrated from the angle of human activities in order to preserve the peace, the history of the concept of eternal peace, pacifist movements, etc.). The approach presented by the author is therefore not restricted solely to the political aspect of this issue. Equally important appears to be the understanding of peace as an abstract philosophical idea, the result of religious motivation, or difficult to define category of ethics.

In the substantive part of the book, the author presents the development of the concept of peace as well as practical actions for sustaining peace in different

historical periods. Especially creative and cognitively interesting seems to be the analysis of the peace phenomenon in the most distant times (prehistory and antiquity). It would seem that the quest for peace is primarily the result of the socialization process as well as profit and loss achieved by us in cooperation with others. Following in the footsteps of behavioural geneticists and psychologists, however, the author makes us aware that people do not seek to inflict harm to other people and they do not seek permanent life in the Hobbesian state of nature. In another passage, the author draws attention to the development of the concept of peace in antiquity, especially devoting much space to the realities of the atomistic Greek *poleis* as well as established in the first century BC the institution of *pax romana*.

The next section is devoted to the evolution of the concept of peace in the civilizations of the East (Japan, China and India) as well as to the shaping of concept of peace in the monotheistic religions, fundamental to our culture. But it is hard to resist the impression that this part of the work itself was a bit schematic, but rather from the perspective of a historian and specialist in religion studies than a political scientist.

Critical to the historians of ideas and political institutions, we can find a references in a fragment devoted to medieval and Renaissance concepts of peace and the formation of the modern system of sovereign nation states (Westphalian order). A valuable element, quite apart from the schematic analysis of the views of Hobbes, Machiavelli, Erasmus of Rotterdam and utopian authors seems also the author's views on the importance of the concept of peace for the emerging modern international relations and diplomacy. Further fragments of major cognitive importance should be recognized in the chapters devoted to the influence of colonialism, imperialism and modern economic institutions on the development of a more modern concept of peace. We should however remember, that the fact that the negative effect of imperialism, the development of colonial states and the idealism of Versailles system for negating peace has already been pointed out by Hannah Arendt in the middle of the last century.

An extensive piece of work was devoted to the development of twentieth-century concept of peace. Next to showing the importance of the liberal concept and the importance of political factors (such as the Cold War) for the development of international peace, much space is devoted to the modern face of this phenomenon and its development prospects. In the last part of the book the author appealed, inter alia, to the importance of the globalization process and also to a very archaic Francis Fukuyama's concept on the end of history for the development of a global peace, cooperation and human rights. Let us remember that the intermingling of the two largest political phenomena: war and peace, is (despite the opposition of supporters of the liberal concepts, members of the pacifist movement, etc.) a *sine qua non* condition for the functioning of each person performing the power and political interests (whether it is a family, professional group or a superpower like China or the United States). It is clear that without the competition of various factors, forces (the specific interests, power) and conflicts characterizing them, or cooperation, politics do not exist as such.

To summarize these considerations, it is worth to identify the basic advantages and disadvantages of the present study. At the number of publication in recent years about the peace, it is getting harder to find innovative and creative works, which present in-depth approach to the elaborated topic. Among the recently published publications on peace in the context of the history of political ideas or philosophy, one



can simply mention studies by Randall Lesaffer (2004), Pierre Allan and Alexis Keller (2006), Dieter Senghaas (2007) and David Cortright (2008).

The main advantage of the publication must be regarded as an attempt to portray the institutional development of actions for peace and broad, erudition references of the author to shaping the idea of making peace in various historical periods. According to the author, the peace constitutes a kind of institution in constant state of construction, which development takes place both in political and legal, as well as cultural, ethical or religious dimension. The deliberations in the work are not limited only to the political or institutional dimension of peace, though many of the considerations in this regard are author's creative perspective on the views already presented before.

For the basic shortcoming of the work, one can also consider the little visibility of the importance of certain ideas and philosophical concepts to a later form of specific political solutions. Some reservations of a European reader may arise from simplifications in some parts of the work, applicable to certain currents of American science. Indicated elements, however, constitute a source of much debate, rather than the real disadvantages of this extremely interesting book. [*Recibido el 29 de octubre de 2010*].

Bogumil Maria Terminski-Mrowiec

Christian Andrès (coord.), *Autour de l'Espagne des Validos (1598-1645)*, Centre d'Études Hispaniques d'Amiens, Paris, 2009, 147 págs.

ABSTRACT: El estudio de los validos españoles es una temática atractiva a no más poder. Se han publicado en los últimos treinta años muchos trabajos al respecto. El presente coordinado por Christian Andrès y en el que participan, entre otros, el prestigioso hispanista galo Bartolomé Bennassar, junto a Jesús M. Usunáriz, Christian Bouzy y Manuel Borrego, se centra en algunos de estos validos. En la recensión se contrasta el presente libro con aquel que en su momento dirigiera y coordinara José Antonio Escudero López, catedrático que fue de Historia del Derecho y Académico de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación, en el que aparecieron los famosos plagios de Ignacio Ruiz Rodríguez al capítulo elaborado por Luis Antonio Ribot García, actualmente también académico de la Historia y que fue catedrático de la magnífica Universidad de Valladolid y en la presente coyuntura lo es de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (según seis rankings de calidad, la peor Universidad pública española), para el vol. 28 dedicado a «La transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción», de la «Historia de España» que comenzó a ser dirigida por Ramón Menéndez Pidal. En dicho volumen dirigido y coordinado por el citado Escudero López fue donde se consumó la deshonra de Don Juan José de Austria y Aragón. Por otro lado, se establecen categorías claras, a veces no suficientemente bien perfiladas por los estudiosos, de la distinción entre valido, privado y favorito. Además, la figura del corrupto Lerma cobra singular interés en este libro, como la del conde-duque de Olivares o la del escritor y poeta Francisco de Quevedo, aunque una reciente obra sobre Lerma (2010) anula prácticamente lo anterior.

PALABRAS CLAVE: Validos, Francisco de Sandoval y Rojas, Conde-duque de Olivares, Bartolomé Bennassar, Christian Andrès, Jesús M. Usunariz, Christian Bouzy, Manuel Borrego, Ramón Menéndez Pidal, José Antonio Escudero López, Ignacio Ruiz Rodríguez.

El estudio de Bartolomé Bennassar, profesor en la Universidad de Toulouse-Le-Mirail, trata sobre la España de los Validos, en el periodo comprendido entre 1598-1645 (pp. 15-33). En este periodo la monarquía española estuvo gobernada por esta figura, también llamados “privados” o “favoritos”, a los que el monarca delegaba el ejercicio de su poder real, y que generalmente era una personalidad que encarnaba el sistema. Desde 1598 a 1618 estuvo representada por el duque de Lerma; desde el comienzo de 1619 hasta la muerte de Felipe III en 1621 por el Duque de Uceda; desde 1622 a 1643 por el conde-duque de Olivares; y desde 1643 hasta su muerte en 1661 por el conde de Haro. El sistema de valido propiamente dicho fue introducido bajo el reinado de Carlos II (1666-1700), ante la incapacidad de este monarca para gobernar.

La coyuntura y la sensación de decadencia hizo que el duque de Lerma asumiera el cargo de valido, sobre todo a consecuencia de la gran peste atlántica acaecida entre 1597 y 1601, que agravó más si cabía el declive demográfico. En 1598, la conciencia de decadencia hizo que el sistema de valido recayera sobre Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, que introdujo en el gobierno profundas reformas. Lerma fue nombrado “caballerizo mayor” del príncipe. Desde la muerte de Felipe II, el nuevo monarca autorizó a Lerma a firmar en su nombre todas las órdenes, actos e instrucciones, lo que supuso la delegación en su persona de la totalidad del poder. De esta forma, el valido ejercía en su totalidad el poder, modificando la práctica que hasta entonces había aplicado Felipe II. La consagración de este sistema fue la famosa cédula de 1612 que ordenaba a los presidentes de todos los consejos a cumplir las órdenes del valido, atribuyéndole a la firma de Lerma el mismo valor que a la del rey. En realidad, la política de Lerma estuvo guiada por el espíritu de un lucro insaciable, basado en la corrupción como medio de acción. El reconocido hispanista Bennassar señala que «el valimiento de Lerma fue también el primer acto de retorno con fuerza de la aristocracia» (p. 23). Más tarde, el duque de Lerma le transfirió a su hijo todos sus poderes. En el periodo comprendido desde 1622 a 1643 ocupó el cargo de valido Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, el valido más interesante para los historiadores y que ha sido considerado como hombre nacido para gobernar. En 1615 fue nombrado “gentilhombre de la cámara” del infante a la edad de 10 años. Años más tarde, en octubre de 1622, Olivares fue nombrado valido de Felipe IV, haciendo famosa la frase de «todo es mío». Ocupó el cargo hasta que el 17 de enero de 1643, siendo reemplazado por Luis Menéndez de Haro y Guzmán, marqués de Carpio (1598-1661), político español y valido de Felipe IV, nacido en Valladolid el 22 de diciembre de 1598. Era hijo del quinto marqués del Carpio y sobrino del conde-duque de Olivares. Se integró en la oposición contra Olivares y, a la caída de éste en 1643, le sucedió como favorito real. Lerma y Olivares ejercieron un poder considerable y, a la vez, impreciso, lo que incrementaba aún más su influencia. El conde de Haro desempeñó el cargo de valido desde 1643 hasta 1661.

Jesús M. Usunariz, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Navarra, historiador generalista pero no jurista, nos deleita con un artículo titulado “De la *Pax Hispanica* a la guerra total: dos validos, dos políticas exteriores” (pp. 34-52). A

finales del reinado de Felipe II, Inglaterra, Holanda y Francia habían firmado su alianza contra Felipe II en Greenwich y La Haya en mayo y octubre, respectivamente, de 1596. Fue, por tanto, la situación política y económica la que obligó a Felipe II a la firma del tratado de Vervins en 1598 y a ceder el gobierno de los Países Bajos a su hija, Isabel Clara Eugenia y a su marido, el archiduque Alberto. Con Felipe III y con el duque de Lerma se produjo, entre 1598 y 1606, un giro en la política internacional española, imponiéndose una actitud conservadora frente a la política expansionista de Felipe II. De hecho, Felipe III comenzó una aproximación a Inglaterra, ante el deseo de Jacobo I Estuardo de acrecentar su imagen internacional como *Rex Pacificus*. Las negociaciones tuvieron su fin con la firma del tratado de Londres, en agosto de 1604. Mediante sus cláusulas, los ingleses renunciaron a su ayuda directa a los rebeldes holandeses, con lo que rompieron las posibilidades de reconstruir de nuevo una triple alianza contra España, y volvía a reiniciarse el comercio entre ambas naciones. El motivo del cambio de política fue, a juicio de Usunáriz, «fruto de una estrategia: la necesidad de un período de respiro que de ningún modo sería permanente, sino una transición que serviría para recuperar el empuje de los viejos tiempos» (p. 38). Pero con el transcurrir de los años, la monarquía hispánica comenzó a romper su tregua con la república neerlandesa, y se convirtió en un campo de batalla. Sin embargo, el conde-duque de Olivares intentó frenar también una guerra abierta con Francia, al tiempo que inspiraba la creación de una gran Liga en Alemania. Por otra parte, y de manera muy similar a sus antecesores, intentó evitar la conquista de nuevos territorios, que provocó el acercamiento entre Francia, Inglaterra y los protestantes.

Manuel Borrego, profesor de la Universidad del Franco Condado, detalla la función del valido en la obra del conde-duque Olivares y del escritor y poeta Francisco de Quevedo (pp. 53-72). Los últimos años del siglo XVI y la primera mitad del XVII representaron una época de crisis y graves confrontaciones en Europa. Entre las obras de Quevedo destacan, entre otras, el *Discurso de las privanzas*, escrito entre 1606 y 1609, y la *Política de Dios* (1626). Por otro lado, existen coincidencias con lo expuesto en la obra de Olivares. De hecho, el conde-duque de Olivares adoptó un plan de reformas de gran envergadura, con el único objetivo de reforzar el Estado desde el punto de vista político y económico. Así, Quevedo remitió a Olivares sus *Advertencias a la carta de Fernando el Católico*, donde manifestaba la necesidad de reforzar la autoridad real en el dominio de las relaciones exteriores. En realidad, Manuel Borrego señala que «sus *Advertencias* deben interpretarse como una defensa del duque de Osuna en un momento en el que estaba en prisión» (p. 61). Quevedo y Olivares convergieron en la necesidad de afirmar con fuerza la autoridad del rey, con la finalidad de defender sus prerrogativas y su jurisdicción. Olivares, al igual que Quevedo, exigía un total respeto a la jerarquía. Por supuesto, ambos coincidían en la necesidad de un valido trabajador, fiel y desinteresado.

Christian Bouzy, profesor de la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, destaca algunos aspectos con más detalle sobre el valido en las obras de Francisco Gómez de Quevedo y Villegas y la influencia del estoicismo y del epicureísmo en su pensamiento (pp. 73-117). La madre de este escritor universal recomendó, en el momento de su muerte, el 7 de diciembre de 1600, la protección de su familia al duque de Lerma, lo que le influyó en gran medida en su vida y en sus escritos. En su obra *El chitón de las tarabillas* (1630) escribió un discurso satírico que hacía una defensa de la política económica del conde-duque a propósito de la devaluación de la moneda de vellón. Destaca su tratado sobre el *Nombre, origen, intento, recomendación y descendencia de la doctrina estoica* (1635), y defendió el

epicureísmo en las lecturas de las *Epistulae* de Séneca. De hecho, escribió la *Defensa de Epicuro*, en 1635. Los primeros propagadores del epicureísmo fueron Lucrecio (*De rerum natura*), Cicerón (*De natura deorum*), Plutarco (*Moralia*) y Séneca (*De beneficiis*, *Epistulae*), entre otros. En efecto, para Quevedo, el privado ideal era aquel hombre en que el rey tenía una confianza absoluta.

Christian Andrés, profesor de la Universidad de Picardie Jules Verne, en Amiens, nos ofrece una visión doctrinal y teatral del valido, en la obra de Quevedo (pp. 118-138). Como venimos recordando al hilo de otras colaboraciones de este libro, Quevedo escribió mucho sobre el poder político, y, en particular, sobre el valido. Fue un gran amigo del duque de Osuna, y más que un consejero fue el *alter ego*. En su obra *Discurso de las privanzas* describía al valido desde un punto de vista ético-teórico o doctrinal. Allí se ocupaba del valimiento del duque de Lerma para analizar este fenómeno político que comenzó a adquirir cierta relevancia en la corte del siglo XVII y, sobre todo, a partir de Felipe III. Además, abogaba por que el rey o el privado no llevaran a cabo acciones que pudieran escandalizar al pueblo o causarle temor. Pero en esta obra de Quevedo también nos ofrece una perspectiva teatral del valido en la persona del Marqués de Valisero, anagrama de Olivares (pp. 129-135).

En el año 2005, en el tomo XXVII, de la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, de la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, en una sede superilustrada y reconocida actualmente por sus criterios científicos de selección, en sus pp. 459-466, llevé a cabo la publicación de una amplia, a la vez que generosa y elogiosa, recensión del libro coordinado, dirigido y planificado por José Antonio Escudero López, *Los validos*, que fue publicado por Dykinson en Madrid de 2004. Tras descubrir al cabo de un año que uno de los colaboradores más directos de Escudero en esos momentos, y que siguió siéndolo durante años, Ignacio Ruiz Rodríguez, había actuado maliciosamente y procedido a plagiar de forma manifiestamente escandalosa el capítulo elaborado por Luis Antonio Ribot García para el vol. 28 dedicado a *La transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción*, de la *Historia de España* de Ramón Menéndez Pidal, tomo publicado en Madrid por Espasa Calpe en 1993, elaboré un cotejo, que fue calificado como paradigmático, de los plagios<sup>1</sup> de Ruiz en la propia revista de Valparaíso, que puede verse con toda facilidad en la red a través del buscador Google, simplemente poniendo tres palabras: Ruiz Rodríguez & Escudero & plagios. Se ha difundido por el mundo, y según nos comenta Susana Grohe, ya tienen conocimiento de estas actividades plagiarias John H. Elliott, Bartolomé Bennassar, Carole Fink, Robert McMahan, Joseph Pérez, Geoffrey Parker, Stanley George Payne, Paloma Bravo (la catedrática de la Universidad de la Borgoña) y Hugh Thomas, a quien se le enviaron los plagios a la Cámara de los Lores por su condición de Barón Thomas de Swynnerton. Es decir, en nuestro caso tenemos ya experiencia en el tema del valimiento y no es la primera vez, ni probablemente será la última, en que nos acercamos a tan interesante institución. Sí hemos de decir que, prescindiendo del trabajo plagiado al capón, de otro que es increíblemente malo y de otro que se podría ampliar, el libro dirigido, planificado, pero no tan revisado por Escudero López ya que cada autor que colabora en el mismo cita como Dios le da a entender (contrastar cómo lo hacen Gómez Rivero –quien además trabaja poco los documentos, con mucho archivo, pues el catedrático de la Miguel Hernández es un gran defensor de lo inédito, pero con poca racionalización del uso que hace de los

<sup>1</sup> Sobre los orígenes romanos del delito plagiaro ver el artículo de Giannetto Longo, "Crimen plagii", en *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, XIII, nº 2 (1974), pp. 379-482.

textos inéditos— y el propio Escudero y, por otro lado, Carmen Sevilla y la cantidad de documentos que en texto con protocolo y final del mismo incluye Camino Fernández) y Escudero da la impresión de que no se ha preocupado de unificar criterios y de revisar textos, este libro —repetimos— editado en 2004 sobre los validos es bastante aceptable, teniendo en cuenta los publicados en España como en el extranjero. Otra cosa es sobre la figura de Felipe II, que es otro marco de referencia, donde Geoffrey Parker con su *Felipe II: la biografía definitiva* (2010) aparca sendos libros de Escudero sobre el citado monarca, y no sólo de Escudero sino de tantos otros como, por ejemplo, James M. Boyden, David C. Goodman, John Lynch, Henry Kamen con su *Felipe de España* del que hay numerosas ediciones. Parker incluso inferioriza el libro clásico por antonomasia de William H. Prescott. [Recibido el 7 de febrero de 2011].

Guillermo Hierrezuelo Conde

Greta Austin, *Shaping Church Law Around the Year 1000. The Decretum of Burchard of Worms*, Ashgate, 2009, XII, 344 págs.

ABSTRACT: Recensión de un libro de Greta Austin sobre Bucardo de Worms y su Decreto, cuya redacción se estima fue realizada entre 1008 y 1012. Son muchos los que se han ocupado ya del estudio de este canonista, pero sin duda Austin lo hace con notable rigor.

PALABRAS CLAVE: Bucardo de Worms, Derecho canónico altomedieval, Greta Austin, Patrick Corbet, Hartmut Hoffmann, Rudolf Pokorny, Wilfried Harmann.

Burchard de Worms (env. 965-1025) composa son Décret entre 1008 et 1012. Le Décret fut l'objet diverses études générales, en l'espèce, celles éditées par Hartmut Hoffmann et Rudolf Pokorny, *Das Dekret des Bischofs Burchard von Worms: Textstufen – Frühe Verbreitung – Vorlagen*, MGH Hilfsmittel 12, Munic, 1991 ainsi que Wilfried Hartmann, *Bischof Burchard von Worms 1000-1025, Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte*, Mayence, 2000. De plus, il y a des travaux sous certains aspects, tels que celui des mariages de Patrick Corbet, *Autour de Burchard de Worms. L'Église allemande et les interdits de parenté (IX<sup>ème</sup> – XII<sup>ème</sup> siècle)*, Francfort-sur-Main, 2001, recensé par exemple dans *Cahiers de Civilisation Médiévale [= CMM]*, 47 (2004), pp. 294-296.

Depuis quelques années, Greta Austin est professeur en Histoire de la Chrétienté à l'Université de Puget Sound aux États-Unis. Avec son livre qui réunit des recherches de plusieurs années, l'A. aime à apporter du nouveau sur le développement du droit et de la théologie au début du XI<sup>e</sup> siècle, encore très loin de la Réforme grégorienne. Grâce à des manuscrits jusqu'à présent inconnus, elle est en mesure de démontrer comment Burchard a essayé de créer un nouveau texte. En sélectionnant soigneusement et en compilant des canons de collections antérieures Burchard sut appliquer un nouveau système de traitement des sources utilisées son *Decretum*. Dorénavant, son œuvre fut une autorité indisputable et fut, à travers les siècles, utilisé en pratique juridique car ses règles étaient applicables à d'autres cas par une extrapolation logique.

Le fil rouge concernant la tradition des sources est évident. Réginon de Prüm (env. 840-915) qui avait déjà appris des conciles ecclésiastiques, fut réceptionné par Burchard. Nous l'avons évoqué déjà dans notre C. R. de l'édition de Wilfried Hartmann, *Das Sendhandbuch des Regino von Prüm*, Darmstadt, 2004, dans *CCM*, 51 (2008), pp. 393-394. Cela vaut également pour les canons des conciles de la paix de Dieu qui ont aussi prolongé une tradition carolingienne (voir Thomas Gergen, *Pratique juridique de la Paix et Trêve de Dieu à partir du concile de Charroux, 989-1250*, Francfort-sur-Main, 2004, rééd. 2008).

A juste titre, Greta Austin décrit méticuleusement cette tradition de l'héritage carolingien jusqu'à Burchard, érudit qui créa ainsi une certaine autorité de son propre texte. Encore faut-il dire que Burchard ne manquait pas d'inclure ses propres idées sur les canons réceptionnés (p. 229-230).

Après l'étude principale, l'A. nous présente un annexe (pp. 241-314) avec plusieurs tableaux dont un comprenant une comparaison entre des parties choisies du *Decretum* de Burchard, avec les passages parallèles des *Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis* de Réginon. Il convient finalement de mentionner la bibliographie et l'index, exhaustifs, soignés et clairs. [Recibido el 15 de noviembre de 2010].

Thomas Gergen

[1]. Montserrat Bajet Royo, *El jurament i el seu significat jurídic al Principat segons el Dret general. Edició de la "Forma i pràctica de celebrar els juraments i les eleccions a la ciutat de Barcelona en el segle XV"*, "Seminari permanent i interuniversitari d'Història del Dret Català Josep M. Font Rius", Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2009, 198 pàgs.

ABSTRACT: Importancia del juramento en la actividad política en la Cataluña anterior al decreto de Nueva Planta de 1716. La autora, Montserrat Bajet i Royo, que ha sido profesora agregada de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad Pompeu Fabra y que, en su momento, debió ser profesora titular de la misma disciplina de la Universidad de Barcelona, abre con esta monografía su jubilación universitaria, aunque sigue de hecho dedicada a la producción científica en la que siempre brilló en todo lo referente a las instituciones catalanas de los siglos XV y XVI.

PALABRAS CLAVE: Juramentos antiguos, Ceremonial, Barcelona, Montserrat Bajet, Tomàs de Montagut i Estragués.

Tomàs de Montagut, catedrático de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad Pompeu Fabra, destaca que «el Derecho catalán está integrado de forma plena y directa por la cultura jurídica europea, es decir, está configurado como un ordenamiento jurídico completo e independiente, formado por la interacción peculiar del *ius commune* romano-canónico con los *iura propria* de Cataluña» (p. 10). Además, señala que la institución del juramento se configuraba como «una garantía de acción política», es decir, como un mecanismo que garantizaba el buen funcionamiento de la compleja red jurisdiccional de Cataluña.

La noción de esta institución en su dimensión histórico-política ha estado conformada por dos elementos: la religión y el Derecho. Formalmente, el juramento consistía en repetir una fórmula oral acompañada de un gesto codificado, invocando a la divinidad, en calidad de testimonio de la verdad, de una afirmación o del mantenimiento de un cierto comportamiento en el futuro. De esta forma, generaba la obligación de respetar la fórmula pronunciada, y se configuraba como un acto eficaz que llegaba a convertirse en una garantía de acción política. Asimismo, comportaba consecuencias previstas en caso de violación de una ley: destitución del cargo, pago de una multa, etc.

En la ciudad de Barcelona fue característica, desde el siglo XIII hasta el Decreto de Nueva Planta en 1716, la coexistencia de una pluralidad organizativa. Por influencia de los pactos feudales y el sistema del *ius commune* imperaban los juramentos, que respondían a distintas exigencias y significaciones. En la Edad Media, el juramento implicaba la sujeción del monarca al ordenamiento jurídico y el compromiso de respetar leyes y libertades. En la jerarquía de los juramentos, el rey lo debía prestar, y más tarde recibía el juramento de sus vasallos, oficiales, etc. A simple vista podría parecer que el juramento era un acto mediante el cual los *consellers* prometían realizar durante un período de tiempo determinadas actividades. Pero era más, el juramento político suponía el requisito que precedía a la investidura o toma de cargo, en la medida en que por medio del juramento, los oficiales y los magistrados accedían y participaban en algún grado de la jurisdicción, es decir, ejercían la justicia del rey, ya que los oficiales reales y municipales gobernaban, administraban justicia y participaban en la elaboración de las normas.

El acto del juramento estaba tan marcado por la fe que ni los doctores ni los legisladores de la Iglesia podían obviarlo. Por otro lado, el acto de jurar del rey o de un oficial en el siglo XIII era producto de la influencia de los juristas y glosadores, tanto canonistas como civilistas, que le dotaron de la estructura y forma jurídica. Más tarde, el feudalismo le aportaría el sentir de la relación contractual y, por tanto, un influjo de la relación feudal en el ámbito público, como con acierto se ha puesto de relieve en esta obra (p. 35). En la monarquía visigoda el nuevo monarca había de prestar juramento de preservar la fe católica, de proteger a la Iglesia, de defender el reino y de gobernar con justicia. En la Alta Edad Media, el rey ya no juraba porque este acto suponía una humillación a su dignidad. A partir del siglo XI se produjo una crisis del poder público y de las estructuras feudales. Más tarde, los *Usatges* de Barcelona fijaron por escrito las condiciones y formas de los juramentos.

En la doctrina jurídica medieval, los monarcas que no tenían vínculos de fidelidad privada con otro señor adquirían plenitud de poder. En el marco del *ius commune*, el juramento estaba considerado un acto y una institución de carácter religioso. El precedente del juramento real se encontraba en la propia confirmación de los fueros, los usos y los *costums* por parte del nuevo soberano (p. 45). A partir del siglo XIII las relaciones del rey y sus súbditos debían ser ratificadas con la llegada de un nuevo príncipe con el juramento de fidelidad entre aquél y el colectivo de los vasallos organizados jurídicamente, generalmente mediante la reunión de las Cortes.

En Barcelona, el juramento al inicio del reinado era pronunciado por el monarca en el Palacio real, según consta en la descripción completa del acto celebrado en Barcelona el 22 de mayo de 1599. En este acto el monarca se comprometía expresamente a cumplir las leyes vigentes, manifestando que no las podría revocar unilateralmente. Los juramentos que efectuaba el rey en Barcelona seguían el siguiente orden: en primer lugar, el rey juraba observar los privilegios y libertades de la ciudad; en segundo término, el Derecho general del reino y los vasallos que

prestasen fidelidad; en tercer lugar, en la catedral el rey juraba como figura principal de la comunidad política (p. 57). El juramento corroboraba el pacto entre las partes que lo hubiesen celebrado. Este juramento era un signo de la sumisión del rey al Derecho creado por la comunidad política, al tiempo que estaba obligado a cumplir las leyes existentes. Este juramento mutuo formalizaba el pacto o unidad política entre el monarca y los estamentos. El príncipe no podía legislar sin los estamentos, ni podía dictar normas en contra de las constituciones generales ni otorgar privilegios en contra de los ya concedidos (p. 60). En la Edad Moderna, con el progresivo aumento del Estado, el juramento del virrey pretendía confirmarse como un instrumento para la afirmación del poder en general en la esfera pública, tanto del propio poder real como sobre el poder municipal.

Desde 1284 hasta 1714 en Barcelona correspondía a los *consellers* el mantenimiento de los privilegios, de los *costums*, de los usos, así como de las franquicias otorgadas por el rey o sus antecesores a la ciudad de Barcelona. Con su juramento, los *consellers* se obligaban a mantener dichos privilegios. Los *consellers* debían jurar defender los privilegios, así como respetar las *ordenacions* de la ciudad. A partir de 1269 el poder de los regidores municipales fue consolidándose.

Este trabajo se ha basado básicamente en tres fuentes: el libro *Consueta*, de 1396; la *Rubrica de juraments antics* y los *Llibres de Cerimonial*. En el apéndice documental se recoge asimismo la transcripción de la «forma i pràctica de celebrar els juraments i les eleccions a la ciutat de Barcelona en el segle XV» (pp. 111-191). La autora del trabajo, Montserrat Bajet, ha sido hasta hace bien pocos meses, en que se ha jubilado, docente de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha culminado su carrera académica como profesora agregada de Historia del derecho y de las instituciones. [Recibido el 25 de octubre de 2010].

Guillermo Hierrezuelo Conde

[II]. Monserrat Bajet Royo, *El jurament i el seu significat jurídic al principat segons el dret general de Catalunya (segles XIII-XVIII)*, Col·leccio d'estudis d'Història del dret 4, "Seminari permanent i universitari d'Història del dret català Josep M. Font Rius", Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2009, 198 pàgs.

ABSTRACT: Dentro del estudio de los límites de la potestad política el juramento constituye un elemento capital, a cuyo análisis en Cataluña Montserrat Bajet i Royo, profesora de Historia del derecho y hermana del afamado catedrático de Derecho eclesiástico del Estado y canonista Eduard Bajet i Royo, contribuye en el marco anterior a la pérdida de la autonomía política como consecuencia de las medidas felipistas del Borbón descendiente del Rey Sol. M. Bajet distingue con claridad entre juramento de fidelidad y juramento de lealtad.

PALABRAS CLAVE: Derecho común, Juramento de fidelidad, Juramento de lealtad, Pactismo político, Josep Maria Font i Rius, Montserrat Bajet i Royo, Tomàs de Montagut i Estragués.

Servie par une centaine de pages, et appuyée sur un appendice documentaire de 72 pages transcrivant la forme et les pratiques de célébration du serment et les élections de la ville de Barcelone au XV<sup>e</sup> siècle, la thèse du mémoire de l'Auteur est



claire, et nourrira certainement les débats politiques contemporains, particulièrement sur le continent ibérique : à savoir l'étude de la signification politique du serment dans le droit catalan. Elle démontre, avec de bons arguments, que grâce au *lus commune*, la base des droits fondamentaux de la 'constitution politique' de la Catalogne a changé. Car les droits locaux, établis sur les anciens liens vassaliques de la féodalité privée ont connu de profondes modifications à partir du XV<sup>e</sup> siècle. Ils sont désormais étayés sur des principes juridiques, que l'auteur qualifie d'objectifs, respectés et garantis par le monarque, et font l'objet d'un pacte conclu entre la Principauté, ses habitants par l'intermédiaire de ceux qui les représentent, et la couronne d'Aragon.

Montserrat Bajet Royo montre clairement qu'il existe des limites à la plénitude de pouvoir royal, et que cela provient de l'évolution de l'ensemble de l'organisation juridique. Ces contraintes et ces limites s'appliquent largement dans tout l'ordre législatif, exécutif et judiciaire (pénal principalement). Le fonctionnement de l'ensemble repose sur un équilibre complexe et fragile, mais qu'un système contractuel, peu à peu élaboré, ordonne rigoureusement. Il est à la fois universel par son ordre juridique complet et appartient pleinement à la culture du droit européenne, puisqu'il est constitué de l'insertion du *lus commune* romano-canonique et des *jura propria* catalan. Les caractéristiques juridiques et politiques des serments leur servent d'expression formelle, et c'est sur ces « *juraments* », examinés dans toutes leurs diversités, que s'appuie M. Bajet Royo, puisqu'ils constituent le nœud de l'organisation municipale de Barcelone et du fonctionnement de l'administration de la Principauté. Etudiant non seulement la forme des serments mais aussi leur contenu, l'Auteur souligne comment, entre le XII<sup>e</sup> et le XVIII<sup>e</sup> siècle, le processus de renaissance des pouvoirs publics (monarchie féodale – monarchie étatique administrative) aboutit à la construction d'un système politique fondé sur la loi générale et délimitant précisément les compétences et les fonctions des institutions et de leurs agents exerçant l'autorité. On constate ainsi que, dans l'ensemble de l'ordre politique, le *serment de fidélité* a d'abord servi une légitimité établie sur des relations privées, mais que le *serment de loyauté* qui lui succède exprime une légalité nouvelle fondée désormais sur les liens constitués à partir de la naissance et de la résidence, et considérés comme objectifs. Ces liens entre les deux pouvoirs (royal et local) sont périodiquement célébrés comme étant un pacte « constitutionnel » entre le monarque, la Principauté et ses habitants –chaque partie devant s'y soumettre selon ses statuts. Les règles qu'il instaure sont soumises à un ordre normatif supérieur s'imposant à tous– même au roi. Cette adhésion qualifiée de « contractuelle et de volontaire » implique des obligations réciproques reposant sur ce que l'Auteur nomme un « pactisme politique ».

Nul doute que la richesse et la force de l'argumentation soient convaincantes. Mais cela n'empêche pas que l'on puisse mettre en débat cette thèse qui place, précocement, le pacte juridique issu du droit privé au centre de la vie publique et du fonctionnement des institutions, à partir du XV<sup>e</sup> siècle. Et qu'il aurait été également intéressant de conforter l'étude ou de l'affaiblir, en l'approfondissant, grâce à des exemples puisés dans l'histoire politique et administrative des principaux pays européens, au premier rang desquels, et de manière territorialement plus proche, la France. [*Recibido el 23 de diciembre de 2010*].

Gérard D. Guyon

Vincent Bernaudeau *et alii*, *Les praticiens du droit du Moyen Âge à l'époque contemporaine. Approches prosopographiques Belgique, Canada, France, Italie, Prusse*, Presses Universitaires de Rennes II, Rennes, 2008, 351 págs.

ABSTRACT: Estudio de las profesiones jurídicas en Bélgica, Francia, Italia y Canadá. La mayor atención se presta a Bélgica y el norte de Francia. El marco cronológico arranca de la Baja Edad Media y llega hasta el siglo XX.

PALABRAS CLAVE: Lille, Bruselas, Brujas, Robert Brunel, Vicent Bernaudeau, Dirk Heirbaut, Frédéric-Antoine Raymond, Céline Ronsseray, Marie-Bénédicte Vincent, Françoise Muller, Sylvie Blondel.

Vincent Bernaudeau redacta la introducción a esta obra colectiva (pp. 13-22). En la misma señala que el perfil del historiador varía según la época y las estrategias empleadas por los propios actores. De hecho, ha existido un amplio debate sobre la legitimidad de los juristas para determinar sus competencias.

Dirk Heirbaut nos presenta un método para identificar a los Jueces del Derecho consuetudinario en el norte de Europa en el período de la Alta Edad Media y sigue el modelo de la historiografía de los portavoces de Cassel y de Lille en 1300 (pp. 25-43). Los prácticos del Derecho son los que hacen posible el funcionamiento de la maquinaria del Derecho. Por otro lado, el portavoz podría ser considerado como el autor intelectual del Juzgado, y, en consecuencia, serían los autores materiales de la elaboración de los principios consuetudinarios. Para ello examina a autores como Pasquier Li Borgne; Robert Brunel que participó hasta doce veces como portavoz en la elaboración de las leyes de Lille; Pierre de Sainghin, que colaboró como portavoz de la Corte de Lille; Jean de la Haie, mentor de Sainghin durante la primera etapa de su carrera, también estaba considerado como una de las figuras centrales de la región de Lille; Wautier de Douai, padre de una familia noble que adquirió fama en 1268 y que desde 1290 era el primero de una larga lista de Jueces que actuaba como portavoz de la Corte de Douai; Wautier de Reningues, portavoz de las Cortes feudales de Douai y Lille, así como Pierre du Mès y Philippe d'Ypres.

Una cuestión tan poco tratada como el tema de los procuradores en el parlamento de Toulouse, en el siglo XVIII, ha sido estudiada por Frédéric-Antoine Raymond (pp. 45-60). Los grupos profesionales del Antiguo Régimen en el tribunal de Toulouse en las deliberaciones registradas entre 1693 y 1781 y, en concreto, la autenticidad de transcripciones de los síndicos han planteado numerosos interrogantes. Pero en el período comprendido entre 1693 y 1749 existen interrupciones en las deliberaciones vertidas por los procuradores (p. 48). A finales del siglo XVII comenzó a adquirir gran relevancia la conservación de los registros que han llegado hasta nuestros días. Estas deliberaciones llevadas a cabo por los síndicos y recogidas en los registros, crearon jurisprudencia.

Céline Ronsseray realiza algunas investigaciones sobre el primer administrador colonial en la Guayana francesa en el siglo XVIII (1712-1809), territorio de la conocida leyenda de El Dorado (pp. 61-76). Luis XIV decidió que estos territorios serían autónomos en su administración judicial, y con Luis XV los intendentes conocieron su máximo apogeo. Entre 1712 y 1809 ocuparon sus cargos veinticuatro gobernadores y dos intendentes. De hecho, las colonias francesas de América tuvieron sus propios administradores. En realidad, en la Guayana se prefería al administrador colono que al oficial sin ningún tipo de vínculos personales (p. 70).

Françoise Muller recoge información sobre la alta magistratura belga del siglo XIX, existente en una base de datos (pp. 77-92). En este aspecto, hay que señalar que la historiografía belga en materia jurídica ofrece un paisaje bastante desolador, en parte a consecuencia de la escasa conservación de los archivos públicos. La base de datos la ha elaborado Muller en función a cinco aspectos: la gestión de las personas; la gestión de las funciones y las jurisdicciones; la gestión de las candidaturas; la gestión de las referencias y, finalmente, las entradas utilizadas en la búsqueda de la investigación. La metodología utilizada ha sido la categorización de los datos en campos, lo que ha posibilitado la elaboración de la propia base de datos (pp. 86-87). Para evitar la existencia de datos incompletos y contradictorios, ha tenido que concebir el programa de manera que una misma información pudiera ofrecer múltiples recursos. En las pp. 88-92 se refiere de forma concreta a la base de datos de la Corte de casación belga, jurisdicción suprema de la magistratura belga.

Marie-Bénédicte Vincent profundiza en el Estado y la modernización en la Prusia de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En concreto, se centra en una base de datos que ha incluido 306 altos funcionarios prusianos, en el período comprendido entre 1835 y 1895. De una parte Vincent estudia la sociología de las élites en el poder y de otro las relaciones del Estado con el poder civil. La historiografía ha destacado la preeminencia de las élites nobiliarias, que contribuyeron a mantener el modelo prusiano de Estado autoritario (*Obrigkeitsstaat*), que se empezó a configurar a principios del siglo XX, tras la desaparición del Estado absolutista del XVIII. Fue en 1879 cuando Prusia decidió imponer el Derecho como formación obligatoria de los altos funcionarios. En la base de datos que maneja Vincent ha tenido en cuenta variables como la generación a la que pertenecían, la religión, el origen social y la provincia de nacimiento.

Los prácticos del Derecho al servicio de la ciudad de Douai han sido objeto de estudio por parte de Sylvie Blondel en el período que va desde 1384 a 1531 (pp. 109-121). En el año 1527, Margarita, archiduquesa de Austria, regente de los Países Bajos en ausencia de Carlos V, no estaba de acuerdo con los gestores de la villa de Douai. En el período que Blondel estudia se incluyeron entre los prácticos del Derecho a los nuevos burgueses, nacidos de las nuevas aglomeraciones de Lille, Valenciennes, Tournai, etc. En concreto, destaca la aportación del linaje de la familia de los De Haucourt (p. 116) y de los Dablaing (pp. 120-121).

El tránsito de la monarquía absoluta hasta la unificación italiana (siglos XVI-XIX) y, en concreto, la casa de Saboya, que se estableció desde finales del siglo XVI hasta la unificación de la península en 1861, ha sido realizada por Francesco Aimerito (pp. 123-135). Las Constituciones reales exigían para la adquisición del título de abogado el poseer la condición de doctor en Derecho, previendo otro tratamiento para los procuradores. Desde el punto de vista social, la admisión en ambas profesiones estaba subordinada a los criterios de que fueran solventes, para evitar un eventual daño o perjuicio causado a los clientes. La posesión del doctorado confería de hecho una posición mucho más distinguida. Asimismo, el Colegio de Abogados ejercía una función disciplinaria, dictando en sus estatutos las reglas de su funcionamiento interno, representando la categoría profesional y en defensa de los intereses ante las autoridades públicas.

Serge Defois hace un análisis histórico sobre el origen profesional y social de los abogados y de la colegiación de los mismos en el período comprendido entre 1897 y 1976 (pp. 137-151). De los 57 abogados inscritos en el Colegio de Nantes de los que se conocen las profesiones de los padres, 12 pertenecían a una familia en la que el

padre era jurista. En 1914, eran 18 de los 63 individuos. Por otro lado, en el período comprendido entre 1897 y 1914, la licenciatura en Derecho era requisito imprescindible para inscribirse en el Colegio de Abogados. Entre 1920 y 1938, los abogados establecieron normas más estrictas de la profesión a fin de determinar los límites de su ejercicio, con el fin de luchar contra los “usurpadores”. En el siglo XX, a finales de los años 30, hubo tímidos intentos de apertura para la colegiación de los abogados. De hecho, en 1938, de los 69 abogados cuyos padres tenían profesión conocida, 23 eran hijos de juristas. La época comprendida entre 1939 y 1964 fue un momento de escasos cambios en la normativa, si bien se impuso una cierta apertura. No fue hasta 1960 cuando realmente se consolidó la “modernización” de los Colegios de Abogados. A partir de 1976 comenzó una progresiva inclusión de abogados de orígenes modestos que posibilitó la inclusión de esta profesión en otros ámbitos sociales.

Yannick Beaulieu nos hace una aproximación socio-histórica de la magistratura italiana durante los cuatro lustros del fascismo (pp. 153-170). Pasa revista a la historiografía más relevante: Liora Israël, Alain Bancaud, Philippe Corcuff, Jean Maisonneuve, Bernard Lahire y Michel Grossetti. Durante el régimen de Benito Mussolini, los magistrados tenían como principal función aplicar la nueva legislación fascista, comentar su doctrina, así como participar en la transformación jurídica de los conceptos políticos. De este modo, la magistratura tuvo que adaptarse a la nueva organización de las jurisdicciones y de los territorios.

El Sindicato de los Abogados en Francia existente a partir de los años setenta del pasado siglo ha sido comentado por Jean-Philippe Tonneau (pp. 171-185). El sindicalismo iniciado a finales de los años sesenta del siglo XX, ha dado lugar, entre otros, al Sindicato de la Magistratura (SM), al Movimiento de Acción Judicial (MAJ), y al Sindicato de los Abogados de Francia (SAF). Estas organizaciones profesionales se denominaron unas veces asociación, otras unión, e incluso federación, etc. A finales de los años 70 tuvo lugar una integración profesional del SAF en el Colegio de Abogados, dando lugar a la creación de una organización denominada sindicato. También se produjo una relativa unidad entre los actores judiciales (magistrados, abogados, etc.) y las organizaciones profesionales (Unión Sindical de Magistrados, SM, ANA, FNUJA, SAF), siendo conocida como el “proyecto Peyrefitte”.

David Gilles escribe sobre la conquista de Québec por las fuerzas británicas en 1759-1760 según los documentos notariales de Jean Claude –el primero de la familia en ubicarse en la colonia–, y Pierre Panet de Méru, ambos fieles al poder británico (pp. 189-207). En 1759 el asentamiento fue tomado por los británicos y, en el Tratado de París de 1763, Francia cedió formalmente la zona a Gran Bretaña, pasando la provincia de Québec a las fuerzas inglesas. Más tarde, entre 1775 y 1776, durante la guerra de Independencia de Estados Unidos, tropas coloniales intentaron conquistar la ciudad infructuosamente. La profesión de notario en Québec se caracterizaba en esta época por las dificultades financieras para el ejercicio de su cargo y por la falta de reconocimiento para desarrollar esta profesión. Pero con la llegada del sistema judicial británico a este territorio se dotó a los notarios con un primer rango.

Un estudio historiográfico de dos generaciones de abogados en los distritos de Québec y Montréal a finales del siglo XVIII e inicios del XIX ha sido realizado por Jean-Philippe Garneau (pp. 209-223). La situación existente en este territorio cambió con la conquista británica a Francia en 1760, tras la guerra de los siete años. Los británicos representaban al menos el 9% de la población colonial en 1791. En 1785 el gobierno colonial procedió a realizar una reestructuración de las profesiones

jurídicas, diferenciando entre los notarios y los abogados. En este período estudiado por Jean-Philippe Garneau existían 47 abogados colegiados en Québec o Montréal.

Una figura tan relevante como la del abogado Edmond Picard (1836-1924) ha sido estudiada por Bart Coppein (pp. 225-237). Este abogado nació en Bruselas el 15 de diciembre de 1836 en una familia numerosa, y ha sido sin duda la personalidad más brillante de la segunda mitad del siglo XIX en el mundo judicial belga. La familia de Picard pertenecía claramente a la burguesía de Bruselas, aunque no era muy rica. En el período comprendido entre 1860 y 1880 formó parte como abogado del Tribunal de apelación de Bruselas, siendo nombrado el 26 de abril de 1860 (pp. 228-230). Asimismo ocupó el cargo de abogado en el Tribunal de casación en 1880. Ocho años más tarde, Picard promovió la revista *Pandectes périodiques*.

Jean-François Tanguy nos ofrece un estudio de tres generaciones de la familia Gaillard de Kerbertin, que ocuparon cargos como magistrados franceses (pp. 239-254). El abuelo nació el 15 de julio de 1758 en Ploërmel, en pleno centro de la Bretaña, y en 1783 desempeñó el puesto de abogado ante la Corte judicial del parlamento de la Bretaña. El 22 de abril de 1795 pasó a ser Presidente del Tribunal penal de Morbihan. El padre, Fidèle Toussaint, nació en Ploërmel el 19 de mayo de 1789 y desempeñó la profesión de abogado en el Colegio de Rennes en 1810. Fue nombrado a los 41 años fiscal general ante el Tribunal de apelación de Rennes el 10 de agosto de 1830. Uno de los hijos de este último, Fidèle Pierre, su vástago más pequeño, inició la carrera como magistrado.

La magistratura bruselense tras la II Guerra Mundial ha sido el objeto de la comunicación por Eva Schandevyl (pp. 255-270). En este período descubrimos una élite urbana en pleno período de transición, que favoreció la renovación de la democracia. Esta localidad se caracterizó por la promoción social de ciertos grupos y la exclusión de otros, teniendo unas peculiaridades muy complejas. Tras la guerra, los magistrados belgas solicitaron ayuda a la clase política belga para el restablecimiento de su autoridad, a fin de hacer posible el gobierno. La mayor parte de los magistrados belgas optaron por mantenerse en una zona de neutralidad. Sólo cinco jueces fueron condenados por colaboración política, a diferencia de lo que sucedió en Francia donde la magistratura perdió mucha credibilidad a consecuencia de la guerra. Durante la ocupación alemana la magistratura belga experimentó un notable cambio. Ciertos magistrados fueron suspendidos de sus funciones, como el fiscal general de la Corte de apelación de Bruselas, mientras otros fueron arrestados y llevados a prisión. Una vez finalizada la guerra la justicia belga representó un buen ejemplo de la justicia de clase, en la medida en que numerosos estudiantes de Derecho provenían de las clases sociales más desfavorecidas (p. 261). Finaliza su estudio mencionando a la familia Cornil, perteneciente a las grandes familias de juristas y dinastías importantes entre los magistrados de Bruselas, que representaba el paradigma de una transmisión profesional, social y cultural (pp. 264-270).

Pierre-Jean Niebes se centra en los Juzgados de Paz en el Departamento de Jemappes en el período comprendido desde 1795 a 1814 (pp. 273-284). El 6 de noviembre de 1792 las armadas de la República francesa, comandadas por el general Dumouriez, consiguieron la victoria sobre las tropas austriacas. El 24 de octubre de 1795, el Comité de Salud Pública designó dos comisarios para proceder a la organización administrativa y judicial de los nuevos Departamentos. El 13 de diciembre de ese mismo año se publicó el listado de los Jueces de paz, entre ellos el del Departamento de Jemappes. El 4 de agosto de 1802, Bonaparte se proclamó primer Cónsul, y los Jueces de Paz comienzan a ser nombrados por el primer

Cónsul por un período de diez años. Bajo el Imperio, los Juzgados de Paz estaban considerados como las instancias del poder.

Christian Chêne hace un análisis de los prácticos del Derecho que vivieron entre finales del Antiguo Régimen y la Restauración, haciendo especial referencia a dos de ellos: Nicolas-Eustache Pigeau (1750-1818), nacido en Senlis en una familia pobre y que representaba el prototipo de la primera generación de profesores, y Nicolas Bellart (1761-1826) (pp. 285-297). Había que distinguir entre graduados y no graduados, es decir, entre aquellos que habían pasado por la Facultad de Derecho y aquellos que simplemente habían obtenido un reconocimiento social. Pigeau no ocultaba su oposición a la monarquía, y llegó a pasar un año en prisión tras su arresto en junio de 1793. Pigeau se autonombra a sí mismo “viejo jurisconsulto” y participó en la elaboración del Código Civil (p. 293). También reeditó de forma literal su discurso sobre el estudio de las leyes de 1784 a 1811. Por su parte, Bellart adquirió cierta notoriedad como una de las figuras principales en el Colegio de Abogados parisino y más tarde se dejó tentar por la política.

Bénédicte Rochet hace un estudio comparativo de la magistratura y de los abogados en Namur –en la actualidad ciudad de Bélgica– en el período comprendido entre 1830 y 1880 (pp. 299-313). Los archivos municipales de Namur se perdieron en gran parte a consecuencia del incendio acaecido en agosto de 1914: biografías nacionales, locales y particulares, actas de defunción, matrículas universitarias, etc. Al día siguiente de la independencia belga, Namur aparecía como una pequeña localidad de la provincia de casi 20.000 habitantes, llegando a alcanzar en 1870 la cantidad de 25.211. Aunque era reconocida como un centro administrativo, judicial, religioso y militar, la ciudad no podía enorgullecerse de grandes actividades económicas ni intelectuales. En el transcurso del siglo XIX fueron nombrados 58 magistrados en el Tribunal de primera instancia de Namur. Bénédicte Rochet también analiza la situación de los Jueces de Paz en este territorio (pp. 305-307). En cuanto a los abogados, hay que reseñar que el 63% de los mismos eran nativos de Namur.

Otro aspecto, como es el Tribunal de Comercio de París, en el período que abarca entre 1800 y 1871, ha sido desmenuzado de la mano de Claire Lemercier (pp. 315-333). Los Tribunales de Comercio franceses se han presentado, desde la Revolución, como una jurisdicción excepcional. De hecho, su competencia estaba limitada a sus materias particulares, que eran, en concreto, los actos de comercio. Los Tribunales de Comercio franceses del siglo XIX estaban integrados por los suplentes, los jueces y un presidente.

Las dificultades para crear los primeros Juzgados de Menores en Francia han sido tratadas por Éric Pierre (pp. 335-341). La ordenanza de 3 de febrero de 1945 creó la función del Juzgado de Menores. Con esta normativa se pretendía reformar la justicia de los menores teniendo como objetivo fundamental la reeducación de los jóvenes, tras la destrucción a consecuencia de la II Guerra Mundial. Esta ordenanza fue el resultado del espíritu de la Resistencia, pero también de las reformas precedentes como la ley de 1912, que ya creó el Tribunal de Menores y adolescentes, pero sin atribuirle la especialización a esta magistratura, aunque también influyeron la crisis del establecimiento de las medidas correctoras, denunciadas en los años 30 del pasado siglo. Esta ordenanza aplicó igualmente el antiguo principio de individualización de penas según el cual había que adaptar el tratamiento de los jóvenes a su personalidad. De esta forma, los años 1945-1955 fueron trascendentales para la configuración actual de los Juzgados de Menores.

Esta obra recopila las actas del coloquio internacional celebrado entre los días 14 y 16 de diciembre de 2006 en Namur (Bélgica). Vincent Bernaudeau es investigador en las Facultades universitarias Saint-Louis, en Bruselas. Por su parte, Jean-Pierre Nandrin es director del Instituto de Estudios Europeos y profesor de Historia contemporánea en las propias Facultades de Saint-Louis. También enseña Historia contemporánea en la Universidad Libre de Bruselas. Bénédicte Rochet es ayudante en el Departamento de Historia de las Facultades de Notre-Dame de la Paix, en Namur. Xavier Rousseaux es director del Centro de Historia del Derecho y de la Justicia en la Universidad católica de Lovaina la Nueva. Axel Tixhon es el encargado de los cursos en las Facultades de Notre-Dame de la Paix, en Namur. Han sido ellos los editores del libro y organizadores del Congreso que ha dado lugar a esta publicación que vio la luz en mayo de 2008. [Recibido el 18 de enero de 2011].

Guillermo Hierrezuelo Conde

Jeffrey A. Bowman, *Shifting Landmarks. Property, Proof, and Dispute in Catalonia around the year 1000*, Cornell University Press, Ithaca (NY)/Londres, 2004, XV + 279 págs.

ABSTRACT: Recoge el autor sus particulares puntos de vista sobre la Cataluña feudal del año 1000, centrándose en crisis sociales, autoridad política, movimientos populares, la Paz de Dios, condados, propiedad de la tierra y vigencia del *Liber Iudiciorum*.

PALABRAS CLAVE: Jeffrey A. Bowman, Thomas Head, Richard Landes, Chris Wickham, Dominique Barthélemy, Hans-Werner Goetz, Thomas Bisson, Thomas Gergen, Ferran Valls y Taberner, Anscari M. Mundó.

Le présent ouvrage a vu le jour dans le contexte du passage dans le nouveau millénaire (*Millenium*). L'an 1000 a été largement discuté à tous les niveaux par les médiévistes. On peut rappeler l'atmosphère de fin du monde (chiliasme), la chute de l'autorité et des institutions, les crises sociales et les mouvements populaires de grande ampleur militant pour la paix et pour la restauration de l'ordre carolingienne.

Des historiens tels que Thomas Head, Richard Landes, Chris Wickham, Dominique Barthélemy, Hans-Werner Goetz et moi-même ont pu dégager, dans le contexte d'une analyse plus approfondie de la *Pax Dei* en France, des idées sur la façon dont était aperçue l'anticipation de la fin des temps au seuil du nouveau millénaire. Tandis que certains ont souligné une véritable crise du système, d'autres ont soutenu un peu plus vigoureusement l'idée que ces crises n'étaient pas beaucoup plus importantes que les précédentes, et que les moyens de maintenir la paix connue jusque-là étaient simplement appliqués plus fréquemment et avec une plus grande intensité<sup>1</sup>. De plus, D. Barthélémy a proposé de relativiser ce moment-charnière, en l'inscrivant dans une période plus étendue (980-1060) dans son

<sup>1</sup> Sur ce débat, cf. Thomas Gergen, *Pratique juridique de la Paix et Trêve de Dieu à partir du concile de Charroux (989-1250). Juristische Praxis der Pax und Treuga Dei ausgehend vom Konzil von Charroux (989-1250)*, Francfort-sur-le-Main, P. Lang, 2004 (Rechtshistorische Reihe, 285), p. 22-32 si p. 219-227.

ouvrage *L'an mil et la paix de Dieu : La France chrétienne et féodale, 980-1060*, Paris, 1999. Quand J. Bowman parle du millénaire, il s'aligne à la tendance de ce dernier et applique la thèse du déplacement des frontières (*shifting landmarks*) et celle des luttes menées en Catalogne autour de l'an 1000 pour la revendication et la reconnaissance de la propriété foncière. Il n'est cependant pas le premier à envisager les changements dans l'histoire de la culture et du droit à partir de l'analyse de la propriété foncière; il a été précédé par Thomas Bisson, *Tormented Voices : Power, Crisis, and Humanity in Rural Catalonia (1140-1200)*, Cambridge [MS]/Londres, 1998 et de Barbara Rosenwein, *Negotiating Space: Power Restraint, and Privileges of Immunity in Early Medieval Europe*, Ithaca [NY]/Londres, 1999.

L'A. analyse le fonctionnement de la propriété foncière aux X<sup>e</sup> – XI<sup>e</sup> à Narbonne, et comment le système juridique fonctionnait dans le cas de conflits portant sur la propriété des terres. Dans la mesure où, pour la région de Narbonne –principalement les actuels Catalogne et Languedoc-Roussillon–, on trouve suffisamment de sources pouvant être exploitées, le corpus documentaire établi pour son étude s'avère justifié. La province était hors du commun en raison de l'existence des juges professionnels, du régime judiciaire mis en œuvre et de la pratique du droit écrit (droit wisigothique), alors qu'en même temps, on avait recours aux ordalies dans la résolution des conflits liés à la coutume.

J. Bowman voit dans le fonctionnement parallèle du droit traditionnel, non-écrit, et du droit écrit (et commenté par les juristes) une preuve majeure des grands changements de la « révolution féodale » autour de l'an mil (Jean Pierre Poly et Éric Bournazel). Concernant le droit, il ne se concentre pas uniquement sur la « violence » de la période du changement du millénaire, mais également à ses commentaires et à la pratique du droit wisigothique, c'est-à-dire le *Forum Iudicum* ou le *Liber Iudiciorum* (p. 35), qui était l'un des systèmes judiciaires germaniques les plus romanisés. Le fait que les formules du type *si quis* sont des preuves accablantes du caractère romain du droit méditerranéen est bien connu des médiévistes depuis les études de Michel Zimmerman, sur lesquelles J. Bowman a pu se fonder pour l'analyse de ses propres sources.

L'érudition des juges, les soi-disant *boni homines*, est prouvée grâce à l'étude de la façon dont le fameux juge de Barcelone Bonhom (*Homo Bonus*) menait à bien les procès – son manuscrit, le *Liber Iudicum Popularis* (déjà largement interprété par Ferran Valls y Taberner et Anscari M. Mundó) est cité également par l'A. Bonhom y reprenait des passages des *Sentences* et des *Étymologies* d'Isidore de Séville, un essai sur la géométrie, une liste des rois wisigoths et francs, un calendrier liturgique, ainsi qu'un vaste glossaire, la « pièce de résistance » étant une introduction au droit wisigothique (p. 84). Le travail de Bonhom contient d'utiles informations sur la manière dont le *Iudex* devait exercer ses fonctions et contribuer à esquisser le portrait du juge au XI<sup>e</sup> s. La participation de ces *boni homines* au processus judiciaire tel qu'il est prescrit dans les *Leges Visigothorum* a joué un rôle important dans la large reconnaissance et l'application des décisions de justice.

Dans l'ensemble, J. Bowman parvient à étayer sa thèse, selon laquelle les modifications des frontières et les permutations des propriétés étaient plus facilement mises en œuvre dans un cadre de droit écrit et de professionnalisation des juges. En outre, il consacre un impressionnant chapitre aux preuves présentées et aux stratégies mises en œuvre devant les tribunaux catalans au XI<sup>e</sup> s. Le travail ici accompli a le mérite d'inscrire cette thèse dans le contexte de la « révolution féodale » et du changement du millénaire. Les nombreuses *convenientiae* et les conseils de paix du XI<sup>e</sup> s. ont également permis la conciliation de différends concernant les droits



fonciers<sup>2</sup>. Parmi les nombreuses références de J. Bowman sur ce thème, on notera l'ouvrage d'Adam Kosto, *Making Agreements in Medieval Catalonia: Power, Order and the Written Word, 1000-1200*, Cambridge, 2001. Le lecteur devra également se reporter à l'étude convaincante de Gerd Althoff, *Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde*, Darmstadt, 1997, malheureusement trop peu mise à profit par l'A. Les travaux que mène J. Bowman à partir de ces sources sont moins une nouvelle contribution à l'histoire constitutionnelle de l'espace méditerranéen et à la compréhension de la seigneurie au XI<sup>e</sup> s. qu'une description précise de l'évolution du déroulement des procédures alors que le droit wisigothique alors que se professionnalisait l'institution judiciaire et que se développait l'usage de la présentation de preuves. Ce fut une condition nécessaire pour la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice concernant les propriétés et les limites foncières au XI<sup>e</sup> s., avant la « renaissance » du droit romain de Bologne. Tout historien du droit souhaite d'autres études régionales semblables, portant sur le droit foncier et judiciaire au haut Moyen Âge. [Recibido el 14 de enero de 2011].

Thomas Gergen

Paloma Bravo, *L'Espagne des favoris (1598-1645). Splendeurs et misères du "valimiento"*, Presses Universitaires de France, Paris, 2010, 2<sup>a</sup> ed. y tirada, 207 págs.

ABSTRACT: Libro dedicado al estudio de los validos, en el que Paloma Bravo-Blondeau, catedrática de la Universidad de la Borgoña y especialista en la civilización del Siglo de oro español, se mueve con una soltura literaria extraordinaria y es capaz de extraer las esencias conceptuales de otras monografías y a la vez aterriza en la literatura política de los siglos XVI y XVII con una elegancia fuera de lo común y sin incurrir en los defectos del libro sobre los validos coordinado y dirigido por José Antonio Escudero López, donde aparecen los espeluznantes plagios de Ignacio Ruiz Rodríguez.

PALABRAS CLAVE: Paloma Bravo, John H. Elliott, Geoffrey Parker, Bartolomé Bennassar, Henry Kamen, Joseph Pérez, Pierre Vilar, Pierre Chaunu, José Antonio Maravall Casesnoves, Alfonso García-Gallo, Jesús Lalinde Abadía, Francisco Tomás y Valiente, José María Pérez Collados, Plagios, Plagiones, Validos, Ignacio Ruiz Rodríguez, José Antonio Escudero López, Universidad de la Borgoña, Siglo de Oro, Conde duque de Olivares, el corrupto Lerma.

Los validos es una temática fascinante de historia política y de historia jurídica que ha dado lugar a numerosas contribuciones en los últimos años. Las figuras estelares a nivel mundial para los siglos XVI y XVII españoles continúan siendo sin duda John H. Elliott, Geoffrey Parker, Bartolomé Bennassar, Henry Kamen y Joseph Pérez, siguiendo la estela que dejaron sabios tan significativos como Fernand

<sup>2</sup> Sur les conséquences géographiques et les effets de la *Pax Dei* sur la pratique du droit, cf. Th. Gergen, "The Geographical and Practical Legal Impact of the Peace of God in Eleventh Century Aquitaine", dans *Boundaries of the Law: Geography, Gender and Jurisdiction in Medieval and Early Modern Europe* [International Legal History Conference, Exeter, 5. April 2003], éd. A. Musson, Aldershot, Ashgate, 2005, p. 21-37, en part. pour la Catalogne p. 24-25 et p. 29.

Braudel (1902-1985), Marcel Bataillon (1895-1977), Pierre Chaunu (1923-2009) y Pierre Vilar (1906-2003), quien con su *Cataluña en la España moderna* quizás haya escrito la mejor obra con diferencia publicada en el siglo XX y en todo lo que llevamos del XXI de Historia moderna española, habida cuenta de que *Séville et l'Atlantique* es en propiedad una obra de historia de América.

Es asombroso pero real que desde Inglaterra, Estados Unidos y Francia se haya estudiado con un rigor y con un método la historia institucional española de la Edad Moderna sin parangón y sin que aquí en el suelo español las instituciones políticas hayan ido capaces de ser tan profundamente alumbradas y con esa claridad meridiana con que lo han hecho otros fuera de las fronteras nacionales. Quizás los únicos que podían competir con estos investigadores en lengua inglesa y francesa ya han desaparecido. Me estoy refiriendo a Jesús Lalinde Abadía (1920-2007), quien hizo muy sugerentes afirmaciones sobre el Estado en un encuentro científico celebrado en Marbella<sup>1</sup>, aunque no vio conveniente hacerse eco de la genial frase de Friedrich Schiller: «¿Cómo puedo yo reconocer el mejor Estado? De la misma forma como tú puedes reconocer a la mejor mujer»; y, además, vuelvo igualmente mis ojos hacia las páginas escritas por José Antonio Maravall Casesnoves (1911-1986), doctor en Derecho y catedrático de Historia del pensamiento político y social español en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Madrid, luego denominada Complutense. Maravall ha sido en Francia el modernista español más reconocido, un hombre de cultura amplia, de sutilísima pluma, de observaciones inteligentes, de sosegadas afirmaciones, de insinuantes ideas, de variables valoraciones conforme iba cambiando el modo de pensar de los españoles y evolucionando el sistema dictatorial vigente. Gracias a Maravall las ideas políticas y las instituciones españolas de la Edad Moderna han tenido en Europa y en Estados Unidos de América un referente nacional carpetovetónico del que los españoles estaban tan faltos. Además Lalinde ha sido el constructor teórico con la cabeza mejor amueblada a la hora de analizar los grandes problemas de las instituciones políticas de la Corona de Aragón en los siglos XVI al XVIII. Ha habido otros como Alfonso García-Gallo (1911-1992) que han tenido proyección científica en lo atinente a las instituciones políticas modernas, pero no ha sido en la Europa culta (Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña), sino en una América quizás menos ilustrada: Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, etc., y a García-Gallo no se le veía en las grandes Universidades de EE.UU. y Canadá: Harvard, Stanford, Yale, Columbia, Berkeley, Toronto, McGill, Laval, etc. Francisco Tomás y Valiente (1932-1996) (a quien Bartolomé Clavero ha dedicado una biografía intelectual impresionante, bien informada, inteligentemente construida, con un texto de difícil lectura en el que Clavero prueba su superioridad y la de Tomás y Valiente), Benjamín González Alonso, José Sánchez-Arcilla, José María García Marín y José María Pérez Collados son cinco referentes que no pueden dejarse en el olvido, como ejemplos del buen hacer universitario en el estudio de las Instituciones políticas modernas. Hay otros que han ido a formarse en el nº 3 de la calle Trinidad de una capital de provincia española de menos de cien mil habitantes en vez de ir a Heidelberg, Bolonia, Tilburgo, Leiden y París II por solo señalar algunas Facultades de Derecho europeas reconocidas. Y, por último, hay unos cuantos que habría que proponerlos para un doctorado honoris causa por la Universidad de Santo Toribio de Mogrovejo, por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Pelotas o por

<sup>1</sup> Jesús Lalinde Abadía, "Depuración histórica del concepto de Estado", en *El Estado Español en su Dimensión Histórica*, Barcelona, 1984, pp. 17-58.

cualquiera de dos de las cuatro peores Universidades públicas italianas, las de Messina y Macerata.

El libro de Paloma Bravo-Blondeau, catedrática de la Universidad de la Borgoña y especialista en la civilización del Siglo de oro español, es un ensayo bien pergeñado. Con Youssef El Alaoui, Rica Amran y Anne Milhou, la Dra. Bravo publicó en 2004 *Autour de Charles Quint. Textes et documents*. En 2008 vio la luz la edición que hizo de las actas del Congreso *Identités nationales, identités régionales*, publicado en Dijon. También ha ilustrado a la comunidad científica de los modernistas con estudios sobre la Inquisición, sobre Quevedo, sobre Calderón de la Barca y sobre los conceptos de Imperio, Reino y Cortes en el programa político de los revolucionarios de las Comunidades de Castilla.

Bravo-Blondeau es de una elegancia a la hora de escribir extraordinaria, de una exquisitez y de un dominio de la lengua francesa que hace a la lectora de sus libros levantarse del asiento en señal de agradecimiento. Paloma Bravo es la antítesis de una chafalmejas. El *Kontrapunk* por cierto, en ámbito del valimiento, habría que encontrarlo en el capítulo que, en el libro sobre los validos dirigido por José Antonio Escudero López, escribió José Ramón Rodríguez Besné, "Crisis y quebranto político del noveno conde de Oropesa" (pp. 573-581). Difícilmente puede encontrarse una cosa peor escrita sobre los validos, y sin duda esas páginas son una deshonra para los condes de Oropesa. Además, asombrosamente al noveno conde de Oropesa lo hace fallecer en la ciudad condal el 23 de diciembre de 1787 (p. 581). Eso supondría que el susodicho conde habría vivido más de 150 años. Sin entrar en mayores consideraciones basta leerse este artículo y comprobar el estilo de documentos encadenados, de cuya transcripción habría mucho que decir, y sobre cuya admisión a la obra habría también mucho que advertir al editor de la misma. En cualquier caso, este libro, editado por Escudero López, me parece el mejor que se ha escrito sobre el conjunto de los validos hasta ahora, si lógicamente prescindimos del trabajo de Besné y del de Ignacio Ruiz Rodríguez (artículo vengativo y deshonoroso para Don Juan José de Austria y Aragón, que no era un principote), sobre el que hay cumplida información en varios lugares en Europa y en América y está publicada recensión con cotejo plagario que, en la versión electrónica de la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es fácilmente localizable con indicación de los nombres Ruiz Rodríguez & plagios & deshonra & Juan José de Austria & José A. Escudero (no como copión, sino como editor) & Países Bajos & escándalo & copiones & Hierrezuelo Conde (en este caso último como autor no del plagio, sino del descubrimiento del mismo y del cotejo). Para que se vea de una forma prístina la entidad plagaria<sup>2</sup> del caso, reproducimos tres ejemplos de los varios que recoge Guillermo Hierrezuelo en la mencionada revista chilena que son una muestra espeluznante y de una enormidad monstruosa sobre cómo se trabaja por parte de algunos o se trabajaba en la escudería, donde lógicamente hay también gente científicamente seria. En ni un solo momento se cita a Ribot, ni una sola comilla. Se plagia limpiamente. Veámoslo:

---

<sup>2</sup> Plagios hay muchos y de muchos tipos. Los he visto conceptuales, escribiendo sobre la representatividad en la lingüística de corpus por parte de quienes han redactado sobre el seguro turístico en la combinación lingüística alemán-español (2008; vigente como delito hasta 2013). También resultan curiosas algunas coincidencias de publicación de monografías sobre el turismo de salud y belleza, coincidentes temporalmente con el contenido de tesis doctorales defendidas previamente (2010).

2.a) «[...] nació en el barrio madrileño de Leganitos, el 7 de abril de 1629. Por encargo de su padre fue criado en Ocaña y recibió una esmerada educación. Normalmente, su destino, al igual que el de los otros hijos naturales del monarca, hubiera sido la carrera eclesiástica, como titular de alguna diócesis; sin embargo, por iniciativa, al parecer, del conde-duque de Olivares, deseoso de legitimar a su bastardo Julián, fue reconocido por Felipe IV en mayo de 1642 y, en 1643, se le puso casa, recibiendo el tratamiento de “serenidad”. Nombrado gran prior de la orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y León, pasó a residir en Consuegra, sede del priorato» (Ribot, 1993, p. 74).

2.b) «[...] nació en el barrio madrileño de Leganitos, el 7 de abril de dicho año. Por encargo de su padre fue criado en Ocaña y recibió una esmerada educación. Normalmente su destino, al igual que el de los otros hijos naturales del monarca, hubiera sido la carrera eclesiástica, como titular de alguna diócesis; sin embargo, por iniciativa, al parecer, del Conde-Duque de Olivares, deseoso de legitimar a su bastardo Julián, fue reconocido por Felipe IV en mayo de 1642 y, en 1643, se le puso casa, recibiendo el tratamiento de “serenidad”. Nombrado gran prior de la orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y León, pasó a residir en Consuegra, sede del priorato» (Ignacio Ruiz Rodríguez, en edición, selección y coordinación científica y académica de José Antonio Escudero López, 2004, p. 412).

4.a) «En 1656 fue nombrado gobernador general de los Países Bajos, coincidiendo con los años finales de la guerra hispano-francesa. En esta ocasión, ciertamente, no le acompañaron los éxitos militares y no tuvo buenas relaciones con los otros dos importantes generales de las tropas hispanas en Flandes: el marqués de Caracena y el príncipe de Condé. No hay que olvidar, sin embargo, que la escasez del dinero y la inferioridad numérica del ejército hispano frente al francés hacían muy difícil la actuación de don Juan en Flandes. Meses antes de la paz de los Pirineos, en marzo de 1659, Felipe IV le encomendó el mando supremo del ejército que operaba en Portugal; aquí alternó victorias y derrotas hasta 1664, pero, al igual que en los Países Bajos, no logró cambiar el rumbo de la guerra, claramente negativo para España» (Ribot, 1993, p. 75).

4.b) «[...] en 1656 fue nombrado gobernador general de los Países Bajos, coincidiendo con los años finales de la guerra hispano-francesa. En esta ocasión, ciertamente, no le acompañaron los éxitos militares y no tuvo buenas relaciones con los otros dos importantes generales de las tropas hispanas en Flandes: el marqués de Caracena y el príncipe de Condé. No hay que olvidar, sin embargo, que la escasez del dinero y la inferioridad numérica del ejército hispano frente al francés hacían muy difícil la actuación de don Juan en Flandes. Meses antes de la paz de los Pirineos, en marzo de 1659, Felipe IV le encomendó el mando supremo del ejército que operaba en Portugal; aquí alternó victorias y derrotas hasta 1664, pero, al igual que en los Países Bajos, no logró cambiar el rumbo de la guerra, claramente negativo para España» (Ignacio Ruiz Rodríguez, en edición, selección y coordinación científica y académica de José Antonio Escudero López, 2004, p. 421).

5.a) «En los últimos años de vida de Felipe IV, don Juan pretendió [...] un mayor reconocimiento por parte de su padre, solicitando, por ejemplo, plaza permanente en el Consejo de Estado, el título de infante, que implicaría su legitimación, o, cuando menos, la condición de grande de España. El rey parecía haber perdido buena parte de su confianza en él, aparte el hecho de que, demasiado influido por sus remordimientos, veía en don Juan el fruto de “las travesuras de su mocedad”. Felipe IV comenzaba a temer la excesiva ambición de su hijo, quien –según algunos autores– soñaba con una corona y llegó a sugerir al monarca su boda con la infanta Margarita. Deseoso de frenar sus ambiciones de cara a la inminente regencia, Felipe IV, siguiendo el consejo del emperador Leopoldo, le ofreció altos cargos eclesiásticos como la mitra de Toledo o el puesto del inquisidor general, propuestas que no agradaron a don Juan» (Ribot, 1993, p. 76).

5.b) «En los últimos años de vida de Felipe IV, don Juan [...] pretendió [...] un mayor reconocimiento por parte de su padre, solicitando, por ejemplo, plaza permanente en el Consejo de Estado, el título de infante, que implicaría su legitimación, o, cuando menos, la condición de grande de España. El rey parecía haber perdido buena parte de su confianza en él, aparte el hecho de que, demasiado influido por sus remordimientos, veía en don Juan el fruto de las travesuras de su mocedad. Felipe IV comenzaba a temer la excesiva ambición de su hijo, quien –según algunos autores– soñaba con una corona y llegó a sugerir al monarca su boda con la infanta Margarita. Deseoso de frenar sus ambiciones de cara a la inminente regencia, Felipe IV, siguiendo el consejo del emperador Leopoldo, le ofreció altos cargos eclesiásticos como la mitra de Toledo o el puesto del Inquisidor general, propuestas que no agradaron a don Juan» (Ignacio Ruiz Rodríguez, en edición, selección y coordinación científica y académica de José Antonio Escudero López, 2004, pp. 421-422).

Se observará que es un plagio metafísicamente perfecto, sin doblez, ni engaño, mejor dicho engañando a Dykinson y a Espasa Calpe, contándoles un cuento chino a la primera. Pero es que, a pesar de los plagios de este Ruiz Rodríguez, ese trabajo sigue siendo mejor que el de Besné. Si a esta obra se le quita, como acabamos de indicar, el artículo de Rodríguez Besné, el de Ruiz Rodríguez, el de Suárez si no lo amplía (5 páginas y media, sin una sola cita, y escritas a vuelapluma sobre cuestión tan significativa como los orígenes del validaje, y al que hay que añadirle un párrafo al final que no estaba en la primera redacción), y si se revisan a fondo los de María del Carmen Sáenz Berceo, María del Camino Fernández Giménez y María Teresa Manescau Rodríguez en los que puede haber sorpresas (¡Quiten Vd. los acentos indebidamente puestos!, aun no siendo esa la cuestión principal, porque también aparecen de vez en cuando garrulerías incomprensibles, y eso que yo no me considero latitudinaria), y se armonizan y unifican los modos de citación ya que cada autor lo hace a su manera y el editor debería ser consciente de que en los libros colectivos hay que ser pajolero/a con gracia e inteligenciando para aplicar lo que los franceses denominan el *remaniement* y el *adoucissage*, sería sin duda, a mi modesto entender, el mejor libro sobre Validos publicado en España y en Europa en los últimos cuarenta años. Animamos, por otro lado, a Guillermo Hierrezuelo Conde que tenga la valentía de que ya que ha rectificado las recensiones del libro sobre los validos, del libro de Camino Fernández Jiménez y ahora del Protonotario de Baltar en esta misma sede, respondiendo al mismo espíritu de purificación científica y de servicio a la Humanidad y al Derecho, revise y publique, si encuentra irregularidades, las rectificaciones de varias de las recensiones que vemos en su curriculum, por ej., de las siguientes obras: Javier Alvarado (ed.), *Historia de la literatura en la España del Antiguo Régimen*, vol. I, Madrid, 2000, 647 págs., publicada en la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXII (2000), pp. 561-567; Javier Alvarado Planas, *El problema del germanismo en el Derecho español. Siglos V-XI*, Marcial Pons, Madrid, 1997, 272 págs., en la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXII (2000), pp. 567-569; Manuel Aranda Mendíaz, *El Tribunal de la Inquisición de Canarias durante el reinado de Carlos III*, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 2000, 414 págs., en la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXII (2000), pp. 569-571; José Antonio Escudero, *Administración y Estado en la España moderna*, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Valladolid, 1999, 638 págs., en la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXII (2000), pp. 587-595; Ricardo Gómez-Rivero (ed.), *El Tribunal del jurado en Albacete (1888-1936)*, Albacete, 1999, 280 págs., en la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXII (2000), pp. 603-606; José Ramón Rodríguez Besné, *El Consejo de la Suprema Inquisición. Perfil jurídico de una*

*Institución*, Editorial Complutense, Madrid, 2000, 283 págs., en la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXII (2000), pp. 644-645; Javier Alvarado Planas, *Constitucionalismo y codificación en las provincias de Ultramar. La supervivencia del Antiguo Régimen en la España del siglo XIX*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, 344 págs., en la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXIII (2001), pp. 653-656; Javier Alvarado Planas *et alii*, *Temas de Historia del Derecho y de las Instituciones*, Madrid, UNED, 1999, 757 págs., en la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXIV (2002), pp. 429-433; Isabel Martínez Navas, *Gobierno y Administración de la ciudad de Logroño en el Antiguo Régimen (Ordenanzas municipales de los siglos XVI y XVII)*, Madrid, INAP, 2001, 448 págs., en la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXIV (2002), pp. 445-447; José Antonio Escudero, *Curso de Historia del Derecho. Fuentes e instituciones político-administrativas*, Madrid, 2003, 985 págs., en la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXVI (2004), pp. 626-630; Eduardo Galván Rodríguez, *Consideraciones sobre el proceso recopilador castellano*, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 2003, 201 págs., en la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXVI (2004), pp. 636-639; María Dolores del Mar Sánchez González, *La codificación penal en España: los códigos de 1848 y 1850*, Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, 453 págs., en *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXVII (2005), pp. 601-604. La escudería nunca le agradeció los servicios prestados a su principal botafumeiro y panegirista *a capillis usque ad ungues*. Ha llegado la hora de que descubra todo lo que sabe sobre los anacronismos brunnerianos y sobre los plagios de proyectos docentes e investigadores, poniéndose en contacto con fuentes solventes de Sevilla, Valencia, Santiago de Compostela, Madrid, Gerona, Málaga, etc., y principiando por acercarse a la reedición de Heinrich Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Duncker und Humblot, Berlin, 1958 y 1961, y tras leerse esos dos tomos, ir descubriendo tantas cosas, como también en otros lugares.

Paloma Bravo centra, desde las primeras líneas, la teoría del valimiento, los valores de la monarquía católica, la emergencia de los validos, la difícil distinción terminológica entre valido, privado, secretario del rey y primer ministro. A la hora de presentarnos la figura, los cometidos y competencias de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas (1552-1625), sigue sin duda los dos estudios del cuarto conde de Lerma de José Antonio Escudero y de Ricardo Gómez Rivero, quien era de la escuela del propio Escudero pero que la abandonó harto ya de felicianos y de caminantes. Sin duda, son Escudero y Gómez los que con profundidad han estudiado a Lerma, aunque Escudero es asombroso, ya que el mismo trabajo dedicado a los poderes de Lerma lo publica tres veces, primero en el homenaje a Alfonso García-Gallo, luego en un libro suyo editado en Valladolid y la tercera en esta obra colectiva por él dirigida sobre los validos. ¡Las mismas páginas y el mismo contenido! « Mon Dieu, filoutage, filouterie ! ».

Escudero precisa con suma claridad errores de González Dávila y de Leopold von Ranke (para Ranke, el «Estado es el poder»), cuya obra sobre *La monarquía española de los siglos XVI y XVII* critica. Pero, mucho cuidado, 1º) José A. Escudero recoge una idea que no es original suya sino de Francisco Tomás y Valiente de lo que se percata perfectamente Paloma Bravo y 2º) que el traductor de la obra del alemán al castellano es el habanero Manuel Martínez Pedroso (1883-1958). Es bien sabido que Pedroso hacía traducciones del alemán al español, pero a la remanguillé. Fue científicamente el escándalo de los escándalos la que llevó a cabo de *El Capital* de Carlos Marx, hasta el punto que tuvo que hacerse otra y encargársela al

catedrático de Derecho Romano Wenceslao Roces Suárez (1897-1992), un marxista auténtico sin doblez ni engaño y el mejor traductor de los clásicos del marxismo leninismo al castellano. Sobre la volatilidad de Pedroso ya se pronunciaban desde Berlín varios catalanes y madrileños en las dos primeras décadas del pasado siglo XX. Pedroso da la impresión de que algunos intelectuales orgánicos y socialistas lo tenían como un “fantasmón”, aunque eso es opinable, pues José A. Escudero acusaba a Alfonso Otero Varela (1925-2001), entre otras cosas, de « donner sur le casaquin » por la Rua do Villar (es conocida la pasión que algunos sienten « d’aimer la bouteille », pero algunos lo hacen con desproporción y otros con la elegancia de sumiller del Ritz de París con que eleva la copa, por ej., un afamado iushistoriador catedrático de una Universidad española cercana a la frontera francesa) e ignorar los fundamentos del Estado, y sin embargo el mejor constitucionalista europeo del siglo XX, Carl Schmitt (1888-1985), veía en Otero a un genio capaz de entender cuestiones que pasaban desapercibidas para muchos otros iushistoriadores del Derecho público español y alemán. Consecuentemente, lo de Pedroso es opinable, aunque son muchos los que opinan que sus traducciones del tudesco no son de recibo y no deben ser seleccionados sus productos, tan desaconsejados, por otra parte, desde la propia izquierda. Sobre ese tema basta con consultar las semblanzas que a Manuel Martínez Pedroso y a Wenceslao Roces Suárez se les dedicaron en 2006 en el *Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos*, vol. II, tomo 1º, pp. 90-91, nº 567 y pp. 408-409, nº 903. Recientemente José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de Arracó se ha pronunciado sobre la traducción de Martínez Pedroso sobre el libro de Ranke, en contraste con el valor de las traducciones de W. Roces. Puede verse en el artículo de Pérez-Prendes, “Algo más acerca de los perfiles conceptuales de la monarquía hispánica”, en *Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*, 10 (2009), p. 19-20, en nota; en su artículo (pp. 13-32) no cita en ningún momento a Escudero.

Sin necesidad de avinagrar innecesariamente esta recensión, añadiremos que la publicación en 2010 del libro de Alfredo Alvar Ezquerro, sobre el Duque de Lerma, que subtitula *Corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII*, anula prácticamente todo lo escrito hasta ahora sobre Lerma, por Escudero, Gómez Rivero, Paloma Bravo (pp. 46 a 79, quien sobre Lerma escribe con un *charme* superior al de estos dos primeros, aunque los problemas jurídico-públicos están mejor resueltos por Gómez y J. A. Escudero), Antonio Feros, John H. Elliott, y con seguridad tendrá ahora todo que contemplarse a la luz de lo que sobre Francisco Gómez de Sandoval Rojas (1552-1625) ha escrito Alvar. Lerma fue un corrupto de grado superlativo, que Alvar ubica en la historia como creador de «un subsistema amoral». Paloma Bravo, al estudiar a Gaspar de Guzmán Pimentel, conde-duque de Olivares, lo hace en la senda de John H. Elliott y de Antonio Domínguez Ortiz, resaltando su inmenso poder y su caída oficial en desgracia el 24 de enero de 1643.

Dedica además Paloma Bravo una parte importante de su libro a los discursos teóricos sobre el valimiento y a un examen de las teorías de Baltasar Álamos de Barrientos, Pedro Fernández de Navarrete, Martín González de Cellorigo, Gaspar Gutiérrez de los Ríos, Francisco de Quevedo y Mateo Renzi, entre otros.

Unas tablas y apéndices cronológicos completan la obra de P. Bravo, viniendo precedidos de unas conclusiones, en las que siguiendo a un clásico, José Laínez, llega a la calificar al valido como «un rey sin corona» (p. 157). [*Recibido el 11 de febrero de 2011*].

Susana Grohe

Jane Burbank y Frederick Cooper, *Empires in World History. Power and the Politics of Difference*, Princeton University Press, Princeton, 2010, 496 págs.

ABSTRACT: Contemporary nature of the research on changes in international relations very often brings us the necessity of a broad analysis of the historical determinants of processes observed today. The current international order, in many places there are in fact reflected in the past. Extremely helpful, therefore, seems to in-depth observation of the political, social or cultural reasons of the dynamics of evolution and functioning of the great empires throughout history (their origin, the causative agents of evolution, and the reasons for the fall). Published in 2009 by Princeton University Press book by Jane Burbank and Frederick Cooper beside difficult to overestimate educational values is also very important voice in the debate over the nature of the evolution of great empires. Mentioned book successfully continues issue has already taken in the eighteenth century British historiography, becoming a very valuable source of information for all readers wishing to understand the phenomenon of emergence and the twilight of the great empires throughout history.

KEY WORDS: Jane Burbank, Frederick Cooper, Imperialism, Empires, International politics.

Living in the era of self-determination of nations, we less and less use the concepts of hegemony, imperialism, interblock rivalry or balance of powers – which were, with relish, used a few dozen or a dozen years ago. Constrained by the norms of public international law, the modern international system today seems to us, at least an ostensibly democratic reflection of the internal order. The development of sub-regional powers is finally accompanied with in depth discussions on the shape of global leadership, the importance of economic factors in international cooperation, or on the twilight of classical forms of multilateral diplomacy. Membership in the United Nations, infeasible just a few decades ago, is now attributed to nearly two hundred countries in the world.

At the same time more and more decisions seem to be made without ordinary actors of international relations, so to speak, over their heads. Annual conferences held by the most influential countries in the world (G8 and G20) are increasingly seem to resemble the concert of powers, well-known in history. An increasing paradox is becoming the revival of *stricte* geopolitical thinking, accompanying deterritorialization and the depoliticization of contemporary international relations. It is hard to say whether over the next decades, the development of the great subregional powers and distinguished areas of influence will become a feature of the international system. But surely it becomes increasingly important to undertake in-depth scientific discussion in this regard. The perception of the dynamics of the contemporary international system based solely on economics and labour categories may prove to be unreliable. Let us remember that, just as throughout history, important factors influencing the strength of the country are also cultural, institutional, and ideological factors. The analysis of the past also seems to be necessary for understanding the contemporary nature of the ongoing changes in the international environment. It appears that none of the currently seen political processes had its precedence.

What factors seem therefore to prejudge that some empires exist for many centuries, while others, equally strong, big and rich, fall much faster? Why provincial Rome became a political hegemony with a lasting impact on the history of the centuries, while the once impressive empires of Amenhotep IV, Alexander the Great



or Carolingians had left little more than a few ruins of the once breathtaking buildings? The answers to these and many other questions is the subject of the recently published book by Jane Burbank and Francis Cooper *Empires in World History. Power and the Politics of Difference*. The presented work is not a typical factual academic monograph. Its purpose was rather to show the creation of great empires and their decline as a process. As one knows, this process was influenced by a diversity of factors. They decided not only about the life of the individual state organisms, but also about their impact on the realities of later times. Therefore, it may seem significant to ask why the achievements of some empires had become a reference point for civilization of our culture while the others had disappeared without a trace.

Another important assumption of the authors is to present the diverse nature of the great empires existing throughout history. The analysis presented in this work may therefore be a valuable source of inspiration for historians of politics or scholars of political thought and the history of public institutions. Presentation of the history of several great empires forces the political scientist to ask questions about causes of their evolution and collapse. Quest for territorial expansion, appropriation of land and conquering the surrounding communities does not always constitute a decisive factor in the formation and stability of the empire. Dreams of the leaders – from Alexander the Great to Hitler – to build an empire based solely on military superiority over its neighbours had often failed. The impact of this category of powers on future generations also seems to be limited. Based mainly on strength, the Mongols empire did not play much importance in social history of subsequent centuries.

Therefore maybe the source of persistence of the great powers and their impact on future generations should be sought in the personal characteristics of their leaders? A clear answer to that question seems to be much more complicated. For sure, strong and centralized authority is one of the key factors for the emergence and persistence of the great empires. All of the examples of great empires, known from the history, were governed more or less in an authoritarian way. However, one should note on the continuing problem of power as a factor very often inhibiting imperial ambitions of specific people. The empire of Alexander the Great or Carolingian monarchy ceased to exist in a relatively short time after the death of their authors. The actual end of the Mongol empire was the result of the collapse of the Yuan dynasty ruling the country in 1368. Despite the significant impact of great individuals, it is hard to determine that those personal factors have become a key condition for determining the degree of stability of the empire and its impact on subsequent times.

By putting the facts presented by the authors in terms closer to political discourse I can say that great empires are built primarily on the great ideas and strength standing behind them. These are the inextricably coupled with categories of ideas and powers that decide upon the creation of a great empire, its historical significance and impact seen in later times. However, can the idea (or even ideology) on its own constitute a sufficient factor influencing the stability of a given superpower? The answer to that question seems to be negative. The *sine qua non* condition for persistence of any empire is, in my view, an institutionalized set of ideas evolved within more or less developed public plane.

Even the superpowers possessing the greatest military force can turn out impermanent without having a strong public support for certain ideas, in other words: extending them to the plane of *praxis*. Roman Empire Emperors – Septimius Severus and Caracalla were well aware of that fact. Wishing to extend an important, for a

relatively narrow circle of patricians, idea of the conquest, they granted citizenship to all the inhabitants of the empire (thus, citizenship has become a form of social institutionalization and legitimization of the idea of conquest, by expanding it to wider social classes). Similar actions could also be observed in other historical periods. One should mention here, at least strong support of Chinese emperors for Confucianism, the attempts of European monarchs to subdue the religion to the monarchy or more or less successful forms of building a strong socially internalized national ideology (ranging from the French Revolution and ending at the national socialism).

Let us therefore look how the question of the origin, evolution and fall of great empires has been discussed by Burbank and Cooper. Already in the first chapter, they note that the history of great empires, presented in the book, is of more or less of selective character. The impact of a political individual on history of subsequent empires becomes the point of reference of the authors. For this reason, their analyses begins from the history of the Roman and Chinese empires, established parallel near the third century BC. Given the enduring influence of the ancient Egypt or the Hellenistic world on political history of the subsequent centuries, the research perspective proposed in the book does not seem fully justified. Within the first chapter, the authors are focusing their discussion on the identification of the empire as a form of state and a governance tool – in a word, a political phenomenon. Historical empires sometimes formed a very diverse political system, just as different where the means and methods of governance. An important subject of the analysis, taken in the first chapter, was also the growth rate of the existence of the great powers, determining whether the country will exist for ages or decay few years after the death of its creator.

The subject of analysis in the second chapter is the creation and development of two great empires of the ancient world – Rome and China. The authors see the sources of power of small Latin Rome, mainly in the smooth combination of military force with effectively acting institutions of power. Therefore, a key role in the construction of Rome's imperial position, has not been played by the change in the form of governance (from the republic to an empire), but by a successful adjustment of model of public institutions in order to adapt to the requirements of the changing political situation. However, even an efficient system of government was not able to protect the empire against the effects of mass migrations of peoples – which constituted an eco-environmental phenomenon rather than a process determined by political factors. One should also remember about the smooth reception of earlier achievements of states as one of the sources of power of the Roman Empire for almost five hundred years.

Quite different were the origins of the Chinese Empire, which begun to be formed in the third century BC. The reigning Qin Dynasty has been relatively quickly overthrown as a result of civil war. Only the smooth transfer of power by the chief Liu Bang –the founder of the Han Dynasty, which later ruled over China– has saved the country from sharing the fate of Alexander and Charlemagne. An important factor in the development of the empire became the establishment of Confucianism as the state religion (by Wudi Emperor in the years 141-87 BC). Despite some common elements affecting the dynamics of the empire's development, the political history of ancient Rome and China, however, arranged in a decidedly different way.

In another passage of the book, the authors analyse the importance of the three great empires of early medieval world: the Eastern Roman Empire, the Islamic world and the Carolingian monarchy. Despite the significant relevance of the military

supremacy over the environment, it is the religious and ideological factors that have become sources of superpower position of each of the abovementioned countries. Sources of persistence of the Byzantine Empire can be seen in well-functioning legal institutions (Code of Justinian) and in the related good governance of the extremely ethnically diversified and cosmopolitan empire. The consolidation of power in the Arab world (and also less stable union of the Carolingian monarchy) seems to be more the result of ideological and military opposition to those three countries surrounding territories.

Particularly interesting, for the political scientist, seems to be the discussion in the next chapter, on the source of power of the Mongol empire. The authors see it in the proper combination of asymmetric military advantage along with a well-working diplomacy. Some historians emphasize today the stabilizing effect of the Mongol tribes' invasions on the social history of certain regions of Europe in the next decades (the so-called *Pax Mongolica*). Despite the relatively small impact of the abovementioned empire on the political history of our continent, we can discern, however, a kind of Mongolian rite of governance even in the subsequent centuries.

In another passage, the authors focus on the history of Ottoman Empire, created at the beginning of the fourteenth century, as well as on associated growing power of the Spanish, connected with Reconquista. The source of power, as well as the greatest political achievement of the Turkish empire appears to be efficient administration as well as the absolutist model of government, built on the feudal principles (more or less successfully imitated later in Europe). The principal reason for the rise of Spain seems to be the effective inhibition of Arab expansion in the Iberian Peninsula, as well as the integration of the state.

One of the most important factors influencing the development of the great empires of the past five centuries, are colonial expansion and geographical discoveries, discussed in the next part of the book. The expansions of own reign at the expense of weaker nations is therefore a *sine qua non* condition for the development of great empires. Geographical discoveries have therefore become a source of strength of at least some countries (Spain, Portugal and the Netherlands, and - later - Great Britain), effectively inhibiting the development of less expansive coastal countries (like Italy) or geographically limited monarchies (such as Poland). However, one should remember that larger territorial expansion could be performed only by internally well-managed countries, which had no major conflicts with their neighbours (however, sometimes we have seen exceptions to this rule).

The substitute for geographical discoveries for Russia and China (and, to a certain point, to Poland as well) has become a strong political expansion over the surrounding territories of these countries. Exploration of Siberia has become for Russians a kind of prelude to a strong centralized state power and building an absolute model of governance in the eighteenth century. Also in China, one can observe the growing centralization of state power, strong isolationism, a strong border protection and an attempt of social and cultural unification of the held territory (especially during the reign of the Ming Dynasty in the period 1368-1644).

The realities of the eighteenth century, has forced European empires for stronger centralization of power, and for the protectionism of the national economy. The implementation of these principles is not possible just at the peak of power; it also requires a strong social unification over the idea of nation and citizenship. National consciousness, and the institution of citizenship, which depicts its borders, becomes a tool of the policy of absolute monarchy. Since the time of the French revolution, the ideas of citizenship and nation-state are slowly yet consistently being implemented in

most European countries (different, however, in their form, scope or manner of implementation).

In the ninth chapter, the authors draw attention to an interesting trend in the political history of the nineteenth century, or to be precise, nineteenth century geopolitics. It is the time when the two countries, taking up virtually whole continents, have started to flourish: United States and Russia. The first of these countries owes its development to the land increase policy, policy of isolationism proclaimed in 1821 and consistent and inhumane dealing with the indigenous peoples. The development of imperial Russia can be attributed to its truly geopolitical plan of expanding its ruling over the entire Eurasia, combined with the ideological conditions (especially with the idea of Pan-Slavism).

Another tool for the construction of the imperial position of the European countries has become colonialism, in the second half of the nineteenth century. Apart from purely pragmatic factors, it also accounted for the transfer of local European conflicts on an unprecedented global dimension (e.g. the famous Fashoda incident in 1898). No European country could no longer afford to stand aside these great events, therefore, Germany, Italy and even Belgium started their colonial expansion.

Spatial expansion and seizing new territories, however, was not the only imperial policy instrument of European states. An equally important tool, discussed in the eleventh chapter, has become the form of indirect influence of European countries on their closer and further international environment. An example of such processes is provided, by the aftermath of the Crimean War, interesting relations of Western countries and Japan or the division of spheres of influence in China, made in the nineteenth century.

The beginning of twentieth century was a period of major reevaluation in the than-intensified imperial rivalry. The outbreak of the First World War was *de facto* the beginning of the end of the great imperial superpowers and the period of decisive importance for the development of international order, characteristic for the international order till 1989. The result of these re-evaluations became not only the constitution of the bipolar order, but also numerous intermediate processes accompanying it. This includes decolonization and, consequently, the fall of the British Empire. Conclusions presented by the authors in the thirteenth chapter are essential for our modern perception of the international system (and therefore to the balance of powers in the world and the factors affecting them.)

The discussion on current role of states and empires in our political imagination closes the historical deliberations of the authors. It is difficult not to agree with the thesis that there are still great empires. What changes is only their arrangement and form of interaction but the desire of states to maximize their importance in the international sphere remains unchanged.

A synthetic and condensed view on great empires, presented by Burbank and Cooper, seems to me a particularly important work both for historians and political scientists, policy-makers, lawyers and scholars of international relations. The reference to specific historical examples allows for better understanding of the current re-evaluation of the international system. Because the history often repeats itself. [*Recibido el 13 de enero de 2011*].

Bogumil Maria Terminski-Mrowiec

José Calvo González, editor de *León Tolstói, lúcido fulgor. Centenario del fallecimiento*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Málaga, 2010, 85 págs.

ABSTRACT: Tolstói, a cien años de su muerte, como argumento de la exhibición de sus obras, procedentes de diversos fondos bibliográficos de la Universidad de Málaga y colección particular de alguno de sus profesores, como es el caso de José Calvo González. Muestra de casi medio centenar de títulos. Organizada en tres secciones, la gran narrativa, adaptaciones dramáticas y musicales, y crítica e interpretación. Ediciones alemanas, francesas, españolas y catalanas. Un recorrido por la literatura y el pensamiento social de autor. Se acompaña de un eruditísimo estudio preliminar sobre la recepción editorial de Tolstói en España a cargo del citado José Calvo.

PALABRAS CLAVE: León Tolstói, Pensamiento social, Ideas literarias y políticas, José Calvo González, Joaquim Casas i Carbó, Isidro Gil Gabilondo, Luis Morote Greus, Augusto Riera, Franz Oppenheimer, Gregorio García Reche, María José Pérez Garzón, Goretti Misas Gento.

Una de las cuestiones que me llamó la atención en su momento al estudiar a Franz Oppenheimer (1864-1943), el padre de la Sociología alemana y uno de los primeros que escribió sobre el pesimismo sociológico<sup>1</sup> y considerado el fundador de la Escuela de Fráncfort, es que dentro del Everest de sus publicaciones, no se olvidara de León Tolstói y publicara en *Der Tag*, de Berlín, el 25 de junio de 1903 un artículo que llevaba por título “Tolstoi als Bodenreformer”. Tolstói ha sido objeto de estudio en la dulce Francia por un sinfín de autores que han analizado no solo su literatura, sino también su pensamiento social, que es lo que a nosotros nos preocupa. No vamos a hacer un enjambre bibliográfico de lo aparecido en suelo galo sobre Tolstói, pero sí nos llaman la atención los libros de Serge Tolstoï, *Tolstoï e les Tolstoï*, Paris, 1980; Luba Jurgenson y Michel Accouturier, editores, *Tolstoï et ses adversaires*, Paris, 2008, y Gérard Abensour, editor de *Tolstoï et la Russie*, Paris, 2010.

José Calvo realiza un estudio preliminar muy denso de contenido “Sobre la edición de Tolstói en España (1887-1936). Particulares de una exposición” a la exposición bibliográfica por él coordinada y en la que ha contado con diversos colaboradores, entre ellos sin duda la más diligente y efectiva la directora adjunta de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga María José Pérez Garzón. Calvo González es un investigador conspicuo de la difusión de la obra de Tolstói en España y, en particular, en Cataluña, aunque, como acabamos de señalar, es Francia el país occidental en el que León Tolstói ha encontrado mayor acogida. Entre los traductores, lo normal era que al castellano se vertiera desde el francés. *Guerra y paz*, informa Calvo González, fue traducido del ruso al francés por la princesa Irina Paskevitch en 1879 (p. 15). Algunas de las versiones castellanas fueron calificadas por Josep Pou i Pagés, en su crítica general a las ediciones hechas por la Casa Editorial Maucci, como «traducciones mal hechas y poco fieles al original» (p. 18). August Riera se sirve de versiones francesas para traducir al castellano a Tolstói, siguiendo la línea del polaco-francés Théodore Wyżewski, pero lo realiza de forma igualmente censurable. No puede menos José Calvo que reflejar

<sup>1</sup> Franz Oppenheimer, “Soziologischer Pessimismus”, en *Die Zukunft*, 6 (1898), pp. 472-479.

el panorama mucho más crítico que le mereció a Antonio Machado lo traducido del ruso al alemán, del alemán al francés y del francés al castellano (p. 19). Calvo se permite hablar de tres tipos de traducciones: irregulares, negligentes e impresentables, aunque no explica luego en qué consisten cada una de ellas, ni en qué se diferencian entre sí.

Al margen de las traducciones al castellano hechas en Cataluña, José Calvo se detiene en las traducciones al catalán de Tolstói, indicando que se registran «desde época temprana y en importante número». Precisa Calvo el mayor relieve de las traducciones de Rossend Llates i Serrat (sus *Memòries* son impresionantes, con el finísimo sentido del humor que tenía este hombre; Calvo debería leerlas), y de Alfons Maseras i Galtès, Joan Salarès, Joan Puig i Ferrer, etc.

El catálogo de la exposición, montada por la citada Pérez Garzón, bajo el diligente control de José Calvo González, recoge piezas interesantes como las *Memorias* de Tolstói prologadas por su cuñada Tatiana Andreievna Kuzminskaia; la versión de Leipzig, en su tercera edición de *Krieg und Frieden*, con traducción de Ernst Strengé; la versión francesa de *Résurrection* de Wyżewski y la de Paul Ferrier o *La vraie vie* traducida del ruso por E. Halpérine-Kamisnky.

Respecto a los libros sobre el pensamiento de Tolstói de que se hace eco Calvo y se recogieron en la exposición, vemos interesante la traducción castellana del estudio de A. S. Goldenweiser, *El crimen como pena, la pena como crimen*, llevada a cabo desde la versión francesa por María Luisa Martínez Reus, también traductora del jurista y criminólogo polaco, catedrático de la Universidad Jagellónica de Cracovia, Juliusz Makarewicz (1854-1936). De la colección privada de José Calvo procede el folleto, quizás sea un artículo de revista aunque en el catálogo no se indica así, aparecido en Wiesbaden de Hans Freimark, *Tolstoj als Charakter. Eine Studie auf Grund seiner Schriften* de 1909, y el librito de Ernst Lübben, *Leo Tolstoj, der Führer von Jung-Russland*, Berlin y Leipzig, 1910. Se cierra el catálogo con una recientísima publicación de José Calvo, *El alma y la ley. Tolstói entre juristas. España (1890-1928)*, Sevilla, 2010, que fue presentada en San Petersburgo y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, con la presencia del Viceconsejero de Embajada rusa en España y del Vicerrector de Investigación de la Universidad en la que Calvo es catedrático de Filosofía del Derecho.

Este Catálogo, como *In theatro librorum* –detrás de ambos está J. Calvo– entra dentro de una línea de investigación muy sugerente en el mundo del Derecho y de las Ideas políticas, aunque el paradigma de catálogos, con estudios preliminares, prefacios, prólogos, artículos reducidos y extensos, centenares de ilustraciones y demás acompañamiento, ha sido el promovido por la actual Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gerona Tunde Mikes, *Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a l'edat mitjana*, Museu d'Història de Catalunya y Magyar Nemzeti Múzeum, Barcelona, 2009, 479 págs., que está prologado por el Presidente de la República de Hungría László Sólyom y por el entonces Presidente de la Generalitat de Catalunya José Montilla. Se recensionará en el próximo número de esta *Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas* a la vez que, por otro autor, en la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* de la Universidad Católica de Valparaíso. [Recibido el 4 de marzo de 2011].

Manuel J. Peláez

José Calvo González, *Octroi de sens. Exercices d'interprétation juridique-narratif*, Les Presses de l'Université Laval, Collection Dikè, Québec, 2008, 141 págs.

ABSTRACT: Se recogen en este libro, vertidos a la lengua francesa, diversos trabajos, que fueron publicados entre 1998 y 2007, por José Calvo González, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Málaga, sobre interpretación jurídica y crítica narrativista del Derecho, materias en las que está considerado como un experto internacional considerable.

PALABRAS CLAVE: Experiencia interpretativa, Narrativismo del Derecho, Seminarrativa, Interpretación judicial.

En sintonía con los desarrollos de la teoría crítica del Derecho José Calvo González, de la Universidad de Málaga, filósofo muy conocido y miembro del Consejo de redacción de la presente *Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, nos ofrece a través de la obra que nos ocupa un nuevo y sugestivo avance en dirección a una teoría narrativista del Derecho, de la que es sin duda su principal expositor y teórico en España. La precedieron en los últimos años otras como *Comunidad Jurídica y Experiencia Interpretativa. Un modelo de juego intertextual para el Derecho*, Ariel, Barcelona, 1992; *Derecho y Narración. Materiales para una Teoría y Crítica narrativista del Derecho*, Ariel, Barcelona, 1996; *El Discurso de los hechos. Narrativismo en la interpretación operativa*, Tecnos Madrid, 1993, y 1998, 2ª ed.; *La Justicia como relato. Ensayo de una semionarrativa sobre los jueces* Ágora, Málaga, 1996, y 2002, 2ª ed., o *Verdad [Narración] Justicia*, Universidad de Málaga, Málaga, 1998, en esta última como coordinador. En *Octroi de sens* reúne trabajos previos aparecidos entre 1998 y 2007, publicados en revistas de su especialidad, *Historia del pensamiento Jurídico*, *Teoría del Derecho* y *Filosofía del Derecho*, encabezados por un texto inédito y en específico elaborado para esta edición, al que titula « De l'expérience interprétative dans l'interprétation juridique, ou d'une danse immobile » (pp. 1-11). La metáfora de "danza inmóvil" es ya un primer acierto; oxímoron de la rotación sin traslación, como en el baile girostático de los derviches, danzantes ditirámicos, que concita ideas de cambio y estabilidad, adaptación y continuidad, así como la de escenografía, o mapa de su representación (« La fantaisie d'une danse immobile qui permette de penser l'idée de l'interprétation dans l'interprétation juridique me séduit uniquement en tant qu'organisation et disposition de relations spatiales, c'est-à-dire, par son caractère chorégraphique. En tant que relation spatiale avec l'entourage et le contour, la chorégraphie est la représentation immobile des processus qui, dans la structure idéale d'un espace physique –le territoire scénique– composeront le mouvement que nous appelons danse. La chorégraphie est ainsi la carte de la danse. De même, la théorie de l'interprétation est la représentation des processus qui, dans la structure d'un espace idéal –la carte dogmatique de la scène du Droit– compose le mouvement de ce que nous appelons interprétation juridique. Aussi pouvons-nous imaginer cette interprétation juridique, ainsi que la chorégraphie d'une danse, comme la figure d'une danse immobile », p. 3), sirven eficazmente al autor para demarcar la función de la tarea jurídico-interpretativa: en el espacio del Derecho el movimiento no contradice su definición estática, sino que mediante elasticidad le *otorga sentido*.

Es la danza autopoiética e intransitiva de la interpretación judicial; una figuración que expresa con fortuna ilustrativa el funcionamiento de la comunidad jurídica en su experiencia interpretativa ante fenómenos como el precedente judicial, en tanto que

progresión de lo inmóvil, o de la legalidad ordinaria en la interpretación constitucional del neoconstitucionalismo.

Así, la interpretación jurídica, que es para Calvo ante todo construcción lingüística, y a su parecer esencialmente discurso narrativo, *otorga sentido al Derecho*, lo que es bien distinto a *decidir su sentido*. Tal otorgamiento de sentido es característico de la función jurisdiccional, donde el juez como decididor y voz del Derecho –*iuris dictio*– actúa a modo de traductor –labor que José Calvo explica con mayor detalle en el último capítulo de la obra– reconstruyendo el mundo pretextual al tiempo que inventando (*ars inventio disponendi*) el horizonte postextual.

Desde este umbral y en adelante el libro se distribuye, desde una primera parte (De l'interprétation juridique), en el capítulo titulado « Que va devenir l'interprétation juridique ? » (pp. 15-24), con aportación de una serie de propuestas de futuro (Six propositions pour le troisième millénaire, lo subtitula), resumibles en su creciente valor, su carácter de recreativo, el riesgo inmanente de la sobreinterpretación, la búsqueda de sentido de lo que el A. denomina “verdades difíciles”, el abordaje de nuevos retos y la profundización en la necesaria labor justificatoria. La segunda parte (Vérité et Narration), y los dos capítulos que la organizan (« La vérité de la vérité judiciaire. Construction et régime narratif », pp. 27-51, y « Vérités difficiles : Contrôle judiciaire des faits et jugement de vraisemblance », pp. 53-90), plantean y exponen el valor verificativo de varias de las antes mencionadas propuestas.

Calvo, para quien el proceso judicial constituye el ámbito de confrontación de hechos que ya tuvieron lugar, sostiene que para la comprensión de éstos es necesaria una narración reconstructiva basada en dos presupuestos: que no existe posible discusión acerca de la “verdad” de tales hechos, pues ella quedó atrás y está perdida (nos hallamos en el proceso siempre *post res perditas*), sino únicamente sobre lo que se cuente por verdad en torno a la ocurrencia de los hechos (habremos de hablar, pues, de “estrategias narrativas” *de verdad* y de verosimilitud de lo contado por verdad), de donde el proceso, por cuanto facilita el curso ideal en la producción del relato sobre los hechos –“bastidor narrativo”, lo llama– privilegia la narrativa como forma argumental, siendo asimismo que el mismo acto y modo de narrar el relato de los hechos, de contar los hechos al narrarlos (retórica), también llegará a ser parte de la narración de los hechos.

José Calvo desemboca, provocando muy seguramente un removimiento de conciencias en muchas de las certidumbres de la teoría de la verdad procesal, en la afirmación de que la culminante “verdad judicial” posee un fuerte condicionamiento ficcional, no exento de condicionamientos de sacralidad ideológico-jurídica pero igualmente de oportunidad política; o sea, Calvo sostiene, con reciedumbre de convicción, que la verdad de lo que deciden en Derecho los jueces es *verdad judicial* y es, además, la única verdad constitucionalmente posible en torno a los hechos de acuerdo a lo probado en juicio, pero no deja de alertar que lo que cabe así contar como verdad es una verdad con pretensiones de alcance muy limitadas (*ad intra processum*) y conforme a muy concretas aspiraciones de compromiso, siendo que una coherencia con la ideología del sistema jurídico no descarta –y a veces incluye– la operatividad de criterios de oportunidad jurídica, o simplemente política, disponiéndolos en un artificio narrativo al servicio de determinadas relaciones sociales y para tutela de las necesidades de ellas derivadas.

Del resto, resulta sumamente útil el análisis que, con detallado recorrido jurídico-positivo y de derecho judicial por las fases sumarial (*prima operis fundamenta litis*) y de plenario (*litis opera*), así como en orden a particulares situaciones en la *zona límite* de la prueba, Calvo aplica al juicio de “verosimilitud” en el control judicial de



hechos y Derecho, concretando las distintas manifestaciones de la *narratio probabilis*.

A la naturaleza narrativa de los juicios de hecho se retornará igualmente en la tercera parte de la obra (Fait et Narration). Allí, y a los capítulos « Modèle narratif du jugement de fait: *inventio y ratiocinatio* » (pp. 93-104) y « Faits difficiles et raisonnement probatoire. À propos de la preuve des faits disipes » (pp. 105-128). En el primero de ellos, partiendo de una sugestión borgeana («Ya a nadie le importan los hechos. Son meros puntos de partida para la invención y el razonamiento»), en “Utopía de un hombre que está cansado”, de *El libro de arena*, 1975)

Calvo desentrañará la organización discursiva de los hechos, distinguiendo dos trayectorias: una narratividad “simple” o *fábula* (qué ocurrió; es decir, la acción de los hechos), y una narratividad “compleja” o *trama* (cómo, por qué, para qué ocurrió; es decir, los hechos en acción). Las diversas “apuestas narrativas” postuladas por las diferentes partes procesales experimentan un “ajuste narrativo” en el establecimiento judicial de los hechos (juicio de hecho contenido en el relato de hechos probados), que de exclusiva autoría judicial constituye el “triumfo narrativo” concretado en una *narratiuncula* cuyo valor es gigantesco no sólo porque esclarece y fija la ocurrencia histórica del suceso acontecido sino, sobre todo, porque se convierte en el *argumento maestro* de la fundamentación jurídica que –mediante solapamientos y combinaciones de consistencia y coherencia normativa– adscribe al cálculo consecucional de la desavenencia o el irreducible desorden entre la experiencia del mundo de los hechos naturales y la cultural vigente de los hechos en Derecho el pertinente dispositivo institucional; esto es, comporta la resemantización del conflicto que concretará o al menos posibilitará la respuesta en Derecho. Al segundo se reserva la reflexión que distingue entre “hechos fáciles” (hechos para cuya fijación no es preciso acudir a la operativa razonadora de las reglas distributivas de la prueba) y “hechos difíciles” (hechos cuyo conocimiento y determinación objetiva exige desenvolver la complejidad de razonamiento probatorio), y también, con relación a la extrema dificultad de la prueba por concurso de indicios, la metodología de su sustanciación bajo la perspectiva de la teoría narrativista del derecho como medio para el otorgamiento de sentido.

La obra se cierra en la parte presentada como Metanarratif, que alberga el capítulo titulado « Jurisdictio comme traduction » (pp. 131-139). Acudiendo a concebir la función judicial decidora del Derecho como ejercicio de traducción y luego de presentar ésta como excediendo la mera trascripción Calvo incursiona en el problema de la fidelidad traductora como artificio (*ars inventio disponendi*) y creatividad.

La fidelidad del juez a la ley, como traductor de ésta y en consecuencia la necesidad de controlar el poder de aquel se identifican como aspectos relevantes y de actualísima importancia. Calvo, que con acreditada solvencia intelectual sabe manejarse en la moderna teoría de la traducción, critica tanto los rigideces “fidelistas” orteguianas como la timidez innovadora de Boyd White en la idea de *intellectual integration* y valor de mediación interactiva entre lenguajes, mostrándose inclinado a las posiciones de W. Benjamin y G. Steiner que definen la noción de “fidelidad” como la forma reveladora que alcanza el sentido subyacente del lenguaje primitivo y puro de un texto y en virtud de la cual una traducción fiel es aquella que vivifica el texto primario mediante la tradición continuada en textos secundarios. Sobre esta base la analogía entre jurisdicción y traducción el juez, “boca” (traductora) que pronuncia las palabras de la ley, es para Calvo el artífice de la “diversión” de tales palabras, y su pronunciamiento (traducción), en tanto que metadecir

intensivo o adversativo, una dicción no más allá de las palabras de la ley (o lo que es igual, de legislador), sino que por exigencia de ellas mismas, se situaría en una posición de “para-igualdad” con ellas (o lo que es igual, con el legislador).

Concierta de este modo el A. con la pretensión de Montesquieu, que nunca buscó subordinar al juez a la letra de la ley, sino proscribir su sobreinterpretación, o sea, la extra-versión, la traducción aberrante, en definitiva, la arbitrariedad.

Hemos expuesto sintéticamente el contenido de la obra. Debe esta reseña finalizar ponderando muy positivamente la originalidad de los panoramas explorados, la excelencia metodológica de su presentación, y el tratamiento realista y experiencial practicado, siempre atento al dato jurídico positivo concreto y pertinente, y todo en no menor medida que la merecedora de un justo elogio al brillante estilo de su escritura.

Una, pues, tan provocadora como novedosa invitación a repensar, desde la línea crítica de fondo de la teoría narrativa del Derecho, substanciales aspectos del pensamiento jurídico en materia de interpretación y práctica judicial de los hechos con verdadero otorgamiento de sentido a numerosos e importantísimos problemas del Derecho moderno. [Recibido el 28 de diciembre de 2010].

Concepción Inmaculada Núñez Martínez

Orazio Cancila, *Storia dell'Università di Palermo dalle origini al 1860*, Editori Laterza, Firenze, 2007, 695 págs.

ABSTRACT: Estudio profundo y bien documentado de la Historia de la Universidad de Palermo hasta el año 1860. También se detiene en otras Universidades sicilianas como la de Messina y la de Catania. Presta particular atención a los estudios de Jurisprudencia y Medicina.

PALABRAS: Universidad, Palermo, Messina, Catania, Derecho civil, Derecho canónico, Orazio Cancila.

Palermo aún tenía la consideración de capital del Reino de Sicilia en 1434, cuando el monarca Alfonso el Magnánimo concedió a la ciudad de Catania el *placet* para la fundación de un *Studium generale*. En 1444 el papa Eugenio IV decretaba la bula que creaba el *Siculorum Gymnasium*, es decir, el ateneo catanés, con la potestad de conferir enseñanzas en Teología, Derecho civil, Derecho canónico y Medicina, manteniendo todos los privilegios de otras Universidades y, en particular, de Bolonia. Orazio Cancila considera lógico suponer que Palermo no renunciaba a tener su Universidad. Por otro lado, existían disposiciones en virtud de las cuales el acceso a los cargos públicos estaba reservado a los licenciados en las dos Universidades sicilianas (p. 20). En torno al año 1630 maduró la idea de que podía nacer una Universidad en Palermo. Efectivamente, ya en el siglo XVII, los jesuitas gozaban de la potestad para otorgar licenciaturas en Filosofía y en Teología y, en todo caso, con anterioridad a 1637. Con la expulsión de la Compañía de Jesús de los reinos de Nápoles y de Sicilia en 1767 se clausuraron los colegios de esta orden, si bien con el transcurrir de los años se restituirían todos los bienes incautados a los Jesuitas.

Un hecho relevante supuso la renuncia en 1780 por parte de Rosario Savoia a la cátedra de Medicina práctica. En febrero de 1786 se establecía la institución de una cátedra de Retórica sublime y la escisión de la cátedra de Historia natural y Botánica (p. 92). La Revolución francesa de 1789 supuso un cambio político favorable a la reforma y al desarrollo de la Academia de Palermo. En realidad, como indica Orazio Cancila, la bula del Papa Eugenio IV en 1444 no concedía a Catania ningún privilegio, tanto es así que fue Felipe IV el que concedió la posibilidad de la *laurea* tanto en Palermo como en Messina (p. 125). Según la documentación obrante, la mayor parte de las fuentes de financiación de la nueva Universidad, a fecha de 22 de agosto de 1805, procedían de la asignación de los fondos de la hacienda de la Compañía de Jesús.

La presencia del monarca Fernando y de la Corte en Palermo, capital del reino borbónico, constituía una novedad de relieve para la nueva ciudad y también para la Universidad. Durante la década de 1806-1816, el primero después de la institución de la Universidad de los estudios, que coincidía con la presencia de la Corte en Palermo, la población estudiantil se incrementó en una media anual de 460 estudiantes, lo que suponía un aumento notable respecto al decenio precedente, que había contado con una media de 277 estudiantes. Entre octubre y noviembre de 1809 el monarca aceptó la propuesta de reforma universitaria realizada por la Junta (p. 232). Hasta 1809 la Universidad de Palermo licenciaba básicamente a abogados y médicos. De hecho, el 8 de noviembre de 1809 se exigía a los estudiantes que querían ejercer la profesión de médicos conseguir necesariamente la licenciatura en la Universidad, para evitar subterfugios como el no pago de las tasas. El Decreto de 22 de enero de 1817 equiparó las dos Universidades de Palermo y de Catania a la de Nápoles, lo que confirmaba el privilegio de conferir grados doctorales en estas universidades. Esta obligación de título universitario para el ejercicio de determinadas profesiones, así como para el acceso a determinados empleos públicos hizo que el Ateneo de Palermo adquiriera nuevamente la relevancia que tuvo antaño. En el período comprendido entre 1825-1826 se inició un proyecto de reforma universitaria, que hacía referencia a los cuatro estudios tradicionales de Teología, Filosofía, Derecho y Medicina, obviando la creación de una Facultad de Ciencia Física y Matemática, como la existente en Nápoles (pp. 355-405). Pero durante algunos años, hasta 1839, dejó de hablarse de la reforma de los reglamentos de la Universidad de Palermo. En octubre de 1834, el Gobierno decidió instituir en la Universidad de Palermo la cátedra de Química aplicada a las artes. Pero uno de los principales problemas que tuvieron estas Universidades fue la cuestión de los sustitutos. Efectivamente, con la apertura del año académico 1837-1838, debía afrontarse nuevamente el tema del nombramiento de los interinos. Las enseñanzas universitarias en Palermo estaban distribuidas en cinco facultades, además del Colegio de Bellas Artes: Teología, Jurisprudencia, Ciencia Médica, Ciencia Física y Matemática, Filosofía y Literatura. De ahí la necesidad de establecer mecanismos para la selección de los docentes, así como la regulación de los exámenes y la normativa que los estudiantes debían cumplir y asumir para el buen funcionamiento de esta institución. En el aula, el docente constituía la máxima autoridad para el mantenimiento del orden y de la docencia. Otro momento importante fue cuando, con el inicio del año académico 1839-1840, se planteó el problema de la cobertura de la enseñanza de la Historia natural (p. 520).

El 12 de enero de 1848 la población de Palermo se levantó contra los Borbones, dando inicio a las revoluciones europeas. Los docentes de la Universidad de Palermo participaron en las labores parlamentarias e hicieron importantes

aportaciones al servicio de la causa revolucionaria (p. 573). De hecho, la Cámara de los Comunes votó el 13 de abril de ese mismo año la supresión de esta estirpe del trono de Sicilia. Con el retorno de los Borbones, en mayo de 1849, fue anulado el nombramiento del gobierno revolucionario, pero ya muchos docentes habían optado por la vía del exilio.

Esta obra pretende conmemorar el bicentenario de la fundación de la Universidad de Palermo. De hecho, el archivo histórico de la Universidad tan sólo ha sido recientemente ordenado en la parte más antigua. Por este motivo, el autor considera la importancia y notable consistencia de la documentación del fondo de la Consejo Superior de la Instrucción Pública y Educación y valora como fundamental la necesidad de concentrar su trabajo hasta el período de 1860. [Recibido el 12 de enero de 2011].

Guillermo Hierrezuelo Conde

Italia Maria Cannataro, *L'America di José Martí. Razza e identità*, Ediciones Rubbettino Università, Soveria Mannelli, 2010, 216 págs.

ABSTRACT: La presente recensión se centra en una obra de Italia Maria Cannataro, docente de Historia de las Instituciones Políticas en la Universidad de Messina (Sicilia). La obra que nos ocupa se organiza en torno a un objetivo claro expuesto por la autora: despojar a José Martí de la dialéctica revolucionaria de tipo marxista que no guarda ninguna relación con la realidad patente de su pensamiento y que, además, es víctima del eslogan de la revolución permanente. Asimismo, la autora se centra en el estudio de la raza y la identidad llevado a cabo por Martí en *Nuestra América* y que se basa en la consideración del mestizo que logra sobrepasar la distinción entre naciones, convirtiéndose en el elemento único y característico del nuevo continente. El americano, el hombre de «todas las razas» de Martí, no es la representación de la ausencia de las razas, sino la exaltación de la mezcla que la anula y crea una nueva.

PALABRAS CLAVE: Italia Maria Cannataro, José Martí, América latina, Revolución cubana, Régimen castrista, Raza, Identidad.

«Traigo en el corazón las doctrinas del Maestro y en el pensamiento las nobles ideas de todos los hombres que han defendido la libertad de los pueblos». Con estas palabras, en 1953 se defendía Fidel Castro en el juicio de Moncada arropándose así en el cubano José Martí; asimismo, con estas palabras comienza también *L'America di José Martí. Razza e identità*.

La autora, Italia Maria Cannataro, docente de Historia de las Instituciones Políticas en la Universidad de Messina (Sicilia), es especialista en Historia del Republicanismo y del Constitucionalismo. En lo que respecta a la figura del cubano José Martí, en 2001 Cannataro realizó una estancia de un año de duración en La Habana que le permitió profundizar en el independentismo cubano, temática sobre la cual ha publicado diversos libros y artículos de investigación.

La obra que nos ocupa, que consta de cinco capítulos, se organiza en torno a un objetivo claro expuesto por la autora con gran precisión en la introducción: despojar a Martí de la dialéctica revolucionaria de tipo marxista que no guarda ninguna

relación con la realidad patente de su pensamiento y que, además, es víctima del eslogan de la revolución permanente (p. 6). En esta línea, Cannataro se muestra contraria a que el régimen castrista canonizase a Martí como héroe mártir de la Cuba libre, lo privase de sus dimensiones ideológico-políticas concretas y se recurriese a él para mistificar el significado de la lucha por la independencia, la naturaleza de sus objetivos y la identificación de sus enemigos (p. 5).

Personaje ecléctico, Martí fue político, diplomático, periodista y poeta. Vivió poco más de 40 años y murió al inicio de una revolución que él mismo había proyectado. Martí no era ni soldado ni revolucionario, quizás no era ni el hombre de acción que él mismo afirmaba ser: era el héroe romántico del siglo XIX. En él tuvo cabida todo el bagaje cultural ideológico y político del siglo XIX: Rousseau, Fichte, Hegel, Krause, Mazzini, Spencer y Renan. Las reflexiones de Martí son el reflejo de un siglo en el que los hombres se encuentran en una constante búsqueda de la libertad en todas sus formas.

A colación de la revolución cubana, Cannataro remite al sentido otorgado a la misma por parte de Martí: «Justicia, igualdad del mérito, respeto por el hombre, igualdad de los derechos; ésa es la revolución». En suma, ninguna revolución socialista, ninguna reivindicación proletaria. Martí no asigna a la clase trabajadora ningún rol fundamental en la transformación de la sociedad cuyo ordenamiento clasista, basado en el mérito, acepta. Su revolución era una guerra de independencia nacional y no el tránsito hacia la dictadura del proletariado. El *Manifiesto de Montecristo*, con el cual Martí anunciaba la inminente revolución, más que una declaración de guerra era un proyecto constitucional en potencia, una nueva perspectiva política en tiempos de paz para Cuba (p. 7).

En este orden de cosas, cabe apuntar que el objetivo central de Cannataro de derrocar al Martí marxista viene aparejado de un estudio detallado de su vida y, sobre todo, de sus ideas políticas. En el primer capítulo sobre Cuba y el Nuevo Mundo, la autora se centra en la infancia y la juventud del cubano y en el germen de su lucha política, la cual desde sus inicios abogó siempre por el independentismo dejando de lado las otras dos corrientes presentes en la por entonces colonia española: el reformismo y el anexionismo. En este primer capítulo, la autora nos adentra en dos conceptos de vital importancia y que incluso aparecen en el título del libro: nos referimos, claro está, a la raza y a la identidad. En cuanto a la última, Cannataro especifica que la búsqueda de la identidad continental fue la constante aspiración del político latinoamericano durante todo el siglo XIX y, con este fin, se basaba en dos modelos con sus respectivas confrontaciones: Europa, que representaba la madre patria, y los Estados Unidos, que encarnaban el nuevo modelo democrático de referencia (p. 32).

Precisamente a la madre patria fue exiliado Martí en 1871, donde, tal y como se relata en el segundo capítulo del libro, dos experiencias bien distintas (por un lado, la cárcel y, por otro, la Universidad y la filosofía krausista) le ofrecen dos visiones antitéticas de la metrópoli: la visión de un país colonizador y tiránico y la visión de una comunión cultural con el pueblo español en particular y con el europeo en general. En este período se formó en Martí la convicción de ser parte de otra identidad en relación con la española, esto es, su americanismo nace en España, en el momento en el que comprende que la conciencia nacional cubana era sólo una parte de otra realidad, de la americana. Ser cubano era, antes que nada, ser americano (p. 44), de forma que va forjando así su concepto de identidad.

En el capítulo tercero, Cannataro argumenta que la vuelta al continente americano, en concreto a México, en 1875, supone un punto de inflexión en la

comprensión de la dicotomía América latina-América anglosajona y cuya solución era, a juicio de Martí, que América caminase con el positivista Spencer a un lado y el libertador Bolívar a otro. La experiencia mexicana le permite comprender la realidad latinoamericana y liberarse de la limitada dimensión de la relación colonial entre Cuba y España. De aquella época en adelante, la expresión de la identidad latinoamericana representó la clave metodológica y teórica que explica tanto el programa revolucionario como la actividad martiana durante los años finales de su vida (p. 81). Asimismo, la experiencia americana entronca también con su exilio en Nueva York en 1880, abordado en el capítulo cuarto, época en la que el liberalismo de Martí se parece más al de Hegel que al de Spencer o al de los trascendentalistas.

El capítulo quinto, dedicado a la última parte de la vida de Martí, se centra en los dos conceptos fundamentales de nuestro análisis, es decir, la raza y la identidad, tratados al detalle en su ensayo *Nuestra América*. Este escrito, paradigma del modernismo y que salió a la luz en 1891, representa el punto álgido de la protesta y del análisis martiano sobre las transformaciones históricas y culturales a las que estaba asistiendo. La identidad latinoamericana propuesta por Martí en *Nuestra América* implicaba la reformulación de la raza nueva a la que se había referido Bolívar, ya que se basa en la consideración del mestizo que logra sobrepasar la distinción entre naciones, convirtiéndose en el elemento único y característico del nuevo continente. El americano, el hombre de “todas las razas” de Martí, no es la representación de la ausencia de las razas, sino la exaltación de la mezcla que la anula y crea una nueva (p. 185).

En definitiva, estamos ante un trabajo minucioso que muestra una visión menos propagandista y más real de la biografía y, sobre todo, de las ideas políticas de José Martí. Cannataro profundiza de una forma claramente objetiva en todo el bagaje ideológico-político del héroe del régimen castrista que, paradójicamente, es también héroe para los cubanos de Estados Unidos que viven lejos de su país, sin su patria. [Recibido el 30 de enero de 2011].

María Cristina Toledo Báez

Estanislao Cantero, *La contaminación ideológica de la historia. Cuando los hechos no importan*, Libros libres, Madrid, 2009, 309 págs.

ABSTRACT: Estudio sobre la manipulación de la Historia con intereses partidistas. Presta especial atención a la España de los siglos XIX y XX, aunque también aborda otros momentos y países. Obra de talante profundamente conservador.

PALABRAS CLAVE: Manipulación política, Manipulación ideológica, Georges Orwell, Juan Vallet de Goytisolo, Revolución francesa, Risorgimento, Guerra civil española.

La manipulation de l'histoire n'est pas nouvelle. Qu'elle obéisse à des considérations politiques ou autres, il s'agit toujours, pour le Pouvoir, de prétendre contrôler la pensée et d'imposer à une société ou à des individus, une interprétation du passé conforme à ses vœux. Les historiens y ont parfois prêté leur concours et leur influence a pu être forte – consciemment ou inconsciemment : déformant les faits, en occultant d'autres. Ils ont ainsi concouru parfois à établir ce que Georges Orwell imaginait dans son livre bien connu *1984* : un Ministère de la Vérité.

Le livre du juriste et historien du droit madrilène Estanislao Cantero, déjà auteur de nombreux ouvrages dans la lignée de Juan Vallet de Goytisolo et de la Fondation Elías de Tejada, réunit des articles dispersés dans de multiples revues. Il permet au lecteur de prendre conscience de l'originalité, de la profonde et riche culture européenne de l'Auteur – notamment française et italienne. Sans doute, une bonne moitié du livre est-elle consacrée à l'Espagne du XIX<sup>e</sup> et du XX<sup>e</sup> siècle : mais les français hispanophones verront que des thèmes qui leurs sont plus familiers, comme la Révolution française ou la laïcité, sont abordés d'une manière singulière et que les questions posées rejoignent, par d'autres voies, les débats historiographiques qui ont opposé, par exemple, François Furet, Richet et les tenants de l'idéologie révolutionnaire classique (Soboul).

L'intérêt est amplifié par le fait que tous ces thèmes sont abordés dans une perspective étrangère : espagnole, qui considère, par exemple, que l'événement de 1789 est plus important dans ses résonances historiques propres – analysées dans leur influence dans les pays ibériques ou en Italie. Entre des visions déformées de l'engagement révolutionnaire, la mise à l'écart des historiens classés réactionnaires (Taine), les ambiguïtés du Risorgimento, le poids dans la culture de masse des auteurs comme Larousse, Michelet ou Renan, la nature de la fracture entre les deux Espagne à la suite de la Guerre civile, le propos de l'Auteur suit une ligne directrice qui trouvera, certes, des contradicteurs animés d'une aussi forte conviction. Mais dans l'uniformisation croissante de la pensée politique, il est intéressant et même salutaire de lire ce livre, écrit par un éminent juriste espagnol, et soutenu par un style élégant, une érudition que l'abondance et la justesse des notes servent de manière remarquable, et qu'un index détaillé permet de consulter aisément. [Recibido el 6 de octubre de 2010].

Gérard D. Guyon

Luís R. Cardoso de Oliveira, *Droit légal et insulte morale. Dilemmes de la citoyenneté au Brésil, au Québec et aux États-Unis*, trad. de Elizabeth Maria Speller Trajano, Les Presses de l'Université Laval, Québec, 2006, 164 págs.

ABSTRACT: Este libro muestra la relación entre la dimensión legal y la dimensión moral de los derechos desde una fusión de horizontes y desde la confrontación del punto de vista indígena con las nuevas situaciones. La experiencia personal del A. y su propio origen son significativas. Así, analiza la discriminación positiva como política social y su ensamblaje con la equidad y el respeto de los derechos individuales comparando la situación en diferentes países. Se aproxima al concepto de *déconsidération* como acto de agresión a los derechos de naturaleza ético-moral. Plantea la compleja relación entre democracia, jerarquía y cultura en Québec y la conexión entre comunidad política y cultura pública a propósito del debate sobre las condiciones, enunciadas por el gobierno quebequense, para integrar a los inmigrantes en la sociedad. Se remonta a los griegos para explicar la retórica como un valioso instrumento de persuasión a la hora de analizar los discursos políticos pronunciados durante la campaña del referéndum sobre la soberanía de Québec, en octubre de 1995. Compara los derechos republicanos, las identidades colectivas y la esfera pública en Brasil y en Québec. Estudia el proceso de redemocratización brasileño, que desemboca en la promulgación de la nueva Constitución en 1988.

PALABRAS CLAVE: Discriminación positiva, Equidad, Derechos colectivos, Derechos individuales, Insulto moral, *Déconsidération*, Democracia, Integración, Patriotismo constitucional, Retórica, Ciudadanía, Democracia.

Luís R. Cardoso de Oliveira es catedrático de la Universidad de Brasilia y codirector de un grupo de investigación sobre «las formas elementales de la política». Realiza en la Introducción una auténtica exposición de motivos de su obra, a la vez que justifica el origen de sus capítulos reflexionando sobre la igualdad, el papel de la esfera pública, la fuerza de los rituales en la producción y definición de las relaciones sociales y la imbricación entre el cambio de ideas y el contexto institucional. Precisa que los trabajos que incluye en el libro fueron escritos (entre agosto de 1995 y enero de 1997) para eventos específicos e independientes, aunque referidos a un tema común y representando el desarrollo y la evolución de sus ideas en torno al mismo. En su mayoría, ya han sido publicados (pp. 14-15), aunque se introducen algunas modificaciones para la presente edición con el fin de armonizar el discurso entre los ensayos. Se centran en la relación entre la dimensión legal y la dimensión moral de los derechos en una doble comparación, de un lado, en el sentido de una fusión de horizontes confrontando el punto de vista indígena con las nuevas situaciones, y de otro, en el sentido del contraste o yuxtaposición de contextos socioculturales diversos y todo ello marcado por la experiencia personal del autor en Estados Unidos y en Québec y por su origen brasileño.

El primer capítulo, se centra en la discriminación positiva como política social y su ensamblaje, no siempre fácil, con dos principios muy valorados por los Estados democráticos contemporáneos, la equidad y el respeto de los derechos individuales, así como la difícil articulación entre derechos colectivos y derechos individuales. Compara la situación en Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de los programas de discriminación positiva, con la de Québec y Brasil, concluyendo que aquélla debería contribuir a la constitución de una conciencia cívica orientada hacia un respeto más universal de los derechos, en oposición a prácticas corporativistas que favorecen los intereses de grupos particulares en detrimento de la colectividad. Una aproximación al concepto de “insulto moral” o *déconsidération* a partir de la relación entre emoción, sentimiento y cognición, se presenta en el segundo capítulo a través de una incursión en los litigios de escasa cuantía o entidad y su carácter legal y ético, siguiendo a J. Habermas y a P. Strawson. Estaríamos ante un acto de agresión a los derechos de naturaleza ético-moral que, a diferencia de las agresiones a los derechos jurídico-legales, no se puede traducir inmediatamente en evidencias materiales.

A continuación, L. R. Cardoso se detiene en la compleja relación entre democracia, jerarquía y cultura en Québec, donde el insulto o la *déconsidération* tendría lugar en un contexto caracterizado por la falta de reconocimiento de una identidad auténtica, por razones históricas, en un país, como es Canadá, de sólidas tradiciones democráticas y atento a las cuestiones relacionadas con la equidad y la solidaridad social. Aquí la agresión se situaría más en la intención de agredir que en las acciones en sentido estricto. Continuando con la situación en Québec, el capítulo cuarto se ocupa de la conexión entre comunidad política y cultura pública a propósito del debate sobre las condiciones, enunciadas por el gobierno quebequense, para integrar a los inmigrantes en la sociedad. Comienza ofreciéndonos la noción de comunidad política, a partir de la definición de Max Weber en su obra *Economy and Society*, para pasar al concepto de cultura pública común, según J. Rawls y de



patriotismo constitucional, según J. Habermas, antes de detenerse en el caso quebequense que analiza desde un texto de D. Leydet, concluyendo que las restricciones impuestas por la cultura pública común a la incorporación de valores representativos de los símbolos de identidad de determinadas comunidades políticas, constituyen una distorsión de la democracia y del proceso de racionalización de la política en la actualidad.

Así, la idea de patriotismo constitucional, como símbolo de identidad moralmente legítima frente a la comunidad política en las sociedades multiétnicas actuales, era, en principio, interesante en la medida en que acentuaba la importancia del respeto a los derechos y libertades fundamentales, junto a la idea de tolerancia. El quinto capítulo se detiene en una perspectiva más filosófica al examinar lo que el autor denomina la retórica del resentimiento y la evocación obligatoria de los sentimientos.

Un estudio comparativo entre los derechos republicanos, las identidades colectivas y la esfera pública en Brasil y en Québec es el objetivo del capítulo sexto. Para L. R. Cardoso, el proceso de redemocratización brasileño, que desemboca en la promulgación de la nueva Constitución en 1988, junto a las demandas de reconocimiento en Québec, revelan cuestiones interesantes para llevar a cabo una reflexión sobre la relación entre las identidades colectivas y la definición de los derechos de la ciudadanía en la esfera pública. Ambos casos ilustran una cierta tensión en la articulación o intersección de los derechos individuales y colectivos que se suelen asociar a identidades culturales o sociales. Así, en primer lugar, el autor se ocupa de la expansión de los derechos y de la percepción de la ciudadanía en Brasil con la mediación de cierto sindicalismo, a la hora de institucionalizar los derechos civiles, políticos y sociales por este orden; para detenerse, seguidamente, en los derechos republicanos y el interés público y en las identidades colectivas y derechos individuales, a partir de las crisis constitucional en Canadá y las diferentes visiones sobre la historia, la lengua y la igualdad. Para el A. esta comparación entre Brasil y Québec, como representantes de dos líneas de desarrollo en el contexto de las sociedades modernas, le permite llegar a dos conclusiones, de un lado, que la ausencia de una clara preocupación en la vida cotidiana frente a la aplicación de los principios universales de los derechos de la ciudadanía puede entrañar una cierta desarticulación entre la esfera pública y el espacio público y, de otra parte, que una conexión radical entre las ideas de igualdad y de uniformidad puede implicar la impermeabilización de la esfera pública frente a las demandas potencialmente legítimas como consecuencia de la institucionalización de las relaciones injustas y de una falta de respeto sistemático frente a los derechos ético-morales asociados al reconocimiento de identidades.

El A. cierra este trabajo recopilatorio con un ensayo dedicado al estudio del individualismo, identidades colectivas y ciudadanía en Estados Unidos y Québec, frente a Brasil, partiendo de que los Estados Unidos han sido una referencia comparativa recurrente para los investigadores sociales brasileños a la hora de reflexionar sobre la ciudadanía y la democracia, al que se permite añadir el caso de Québec. Efectúa Cardoso dos comentarios a modo de conclusión: 1) la invisibilidad de los “insultos morales” en Estados Unidos no evita su supervivencia ni limita su incidencia y 2) la dificultad de encontrar el carácter ilícito de los “insultos morales” en el contexto de Canadá y Québec es una barrera importante para la negociación de la crisis constitucional canadiense. [*Recibido el 19 de marzo de 2011*].

Patricia Zambrana Moral

Emilio Castelar, *La fórmula del progreso. Discursos*, edición y estudio preliminar “El Republicanismo liberal y la idea de progreso: Emilio Castelar”, a cargo de José Luis Monereo Pérez, Comares, Granada, 2010, 198 págs.

ABSTRACT: Publicación de una serie de trabajos, discursos y pequeños artículos de quien fuera gran orador y transitorio Presidente de la Primera República española Emilio Castelar sobre cuestiones políticas y sociales, que recoge José Luis Monereo Pérez, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada, en una de las colecciones de la editorial Comares de Granada.

PALABRAS CLAVE: Emilio Castelar Ripoll, Primera República española, Progreso, José Luis Monereo Pérez.

Emilio Castelar y Ripoll nació en Cádiz el 7 de septiembre de 1832 y murió en San Pedro del Pinatar en Murcia, el 25 de mayo de 1889. Representó la máxima figura del republicanismo conservador y evolucionista en España. En 1873 fue nombrado Ministro de Estado, con la proclamación de la Primera República española, y el 6 de septiembre de ese mismo año asumió la Presidencia hasta el 2 de enero de 1874, fecha en la que tuvo que dimitir a consecuencia del golpe de Estado de Pavía, siendo el último Presidente de la República. El 20 de septiembre aprobó cuatro decretos para establecer medidas de excepción: la suspensión transitoria de las garantías individuales de la Constitución de 1869; la supresión de todas las licencias de armas; la limitación estricta de la libertad de establecimiento, así como la censura de prensa. Salmerón se negó a apoyar al Gobierno de Castelar en la fatídica noche del dos al tres de enero de 1874, lo que precipitó la caída del Gobierno, otorgando un motivo explícito para el golpe militar del General Pavía contra la República el mismo 3 de enero, que ya se estaba fraguando. Después del golpe de Estado de Pavía, se constituyó el gobierno del General Serrano denominado Poder Ejecutivo de la República.

Castelar evolucionó desde la defensa del republicanismo federal hasta posiciones ideológicas de tipo centralista y más conservadoras. Tras el fracaso de la Primera República, sus posiciones se flexibilizaron asumiendo propuestas más moderadas, aunque mantuvo sus posiciones republicanas. Durante el sexenio revolucionario Castelar había mantenido una concepción federalista y descentralizadora moderada que se situaba en contraposición directa con la concepción postulada por los partidarios de la Restauración.

En todo momento defendió la legalidad republicana y la unidad de España, basándose en la fórmula de la unidad en la diversidad. A finales del siglo XIX, se asentó el posibilismo republicano, bajo el prisma ideológico-político de Castelar. Este posibilismo de Castelar le condujo a defender una posición federalista moderada y una reforma del Estado en un sentido de racionalización o modernización liberal. En su postulado rechazaba el centralismo y aceptaba la pluralidad de identidades históricas. Monereo Pérez señala que «en cierta medida para el ideario republicano de Castelar la república aparece como una especie de religión político-democrática» (p. XXX). En todo momento defendió un Estado democrático y laico, afirmando la separación entre las Iglesias y el Estado.

En el pensamiento de Castelar era innegable la influencia del idealismo alemán, y especialmente del pensamiento de Hegel y de Tocqueville. Para Castelar, y en general los republicanos históricos de nuestro país, existía un deber moral de lucha

por la idea del progreso de la Humanidad, por contribuir a la realización histórica de la ley del progreso.

En el libro *La fórmula del progreso* Castelar vinculaba república y progreso. Para él cada etapa histórica tenía su «fórmula, su idea», siendo en la sociedad moderna la edad de la justicia, del Derecho, la edad de la democracia. Su ideario para una república democrática quedaba acotado en los siguientes postulados: el Derecho, como base de la soberanía del pueblo; igualdad de Derechos políticos para todos los ciudadanos; libertad de imprenta; libertad de asociación para todos los fines de la actividad humana; sufragio universal; el jurado; inviolabilidad de hogar doméstico y de la personalidad humana; descentralización administrativa; integridad de municipio y de la provincia; inmovilidad de los empleados públicos; etc. Castelar, a diferencia de Pi y Margall, entendía que la república democrática exigía la implantación del principio de intervención pública mínima en la sociedad civil. Para ambos, la democracia imponía las garantías de libertad y la supresión de todas las formas de esclavitud y de servidumbre. Según Castelar la fórmula del progreso humano, se resolvía en las ideas básicas de que el progreso era una verdad filosófica y una verdad histórica; el progreso se presentaba como el camino permanente del hombre hacia la libertad. No obstante, para él se trataba de un progreso evolutivo de un mismo espíritu humano en su unidad a pesar de sus múltiples manifestaciones. Castelar no formuló una auténtica teoría del progreso, cada uno se limitaba a darle el contenido a su ideario político-ideológico.

En el prólogo de 1870 el propio autor manifestaba que pretendía «defender los derechos individuales y el sufragio universal, cuando todos creían que los derechos individuales eran una logomaquia, y el sufragio universal un sueño» (p. 1). Señala su autor que el absolutismo, vigente entre los siglos XIII y XVI, combatió otra forma más opresora y más bárbara, como fue la forma feudal. Pero en ese Derecho divino de los reyes no podían creer los tiempos modernos. La descomposición del absolutismo se llamaría neo-catolicismo, que proclamaba que el progreso era mentira y miraba hacia la Edad Media como paradigma a seguir (pp. 15-16). Por otro lado, la aristocracia ha decaído en todo el mundo, así como en España. De hecho, ningún partido político defendía, según Castelar, la nobleza, sino que el partido restaurador se presentaba como un partido moderado (p. 23).

La tendencia del gobierno de Bravo Murillo al absolutismo y de las oposiciones a la libertad, amenazaba un golpe de Estado o una revolución. Para luchar contra esta situación, la Unión Liberal fue liderada por O'Donnell, que estaba formada por los progresistas y moderados despechados. Pero, en realidad, la Unión Liberal representaba el aniquilamiento del régimen parlamentario, ya que la muerte de los dos partidos suponía en realidad la muerte del sistema (pp. 33-34). Por otro lado, el Partido progresista ya no podía progresar con sus ideas, y la única salida que le quedaba era convertirse a la democracia, ya que «hoy la democracia es la Fórmula de Progreso» (p. 41). En realidad, «el progreso es, como ha dicho con razón un gran escritor, la fe del siglo XIX, la gran creencia de todos sus hijos» (p. 43). Por eso Castelar defendía que «la historia del progreso es la historia de la libertad del hombre, y la historia de la libertad es toda la historia humana» (p. 44). Consideraba asimismo que «la fórmula que sea más liberal, esa es la más progresiva» y que «la fórmula más liberal, en el siglo XIX, es la democracia» (p. 51).

También afirmaba que «el alma del Derecho es la libertad» (p. 61). Pero no olvidaba que la condición de toda verdadera libertad estaba representada en la igualdad, que ha sido la gran olvidada en la historia antigua, en la antigua sociedad (p. 71). Esta libertad se dividiría en libertad de pensamiento, que se consagraba en

la imprenta, y libertad de acción, consagrada en el inviolable Derecho de asociación. Toda asociación debía ser libre, y como libre estaría fundada en el Derecho. Proponía el autor el sufragio universal, acompañado de todos los Derechos individuales, que eran sus auxiliares y su complemento. Este sería el fiel reflejo de la libertad, de la armonía de todos los grandes intereses sociales, la dignidad de los hombres, e inalterable paz en las naciones (p. 102). La democracia había puesto de manifiesto el error de creer contradictorios, enemigos, la sociedad y el individuo. Pero esta democracia no se presentaba como antirreligiosa, sino esencialmente cristiana (p. 115).

Esta obra recoge también una selección de discursos, como los pronunciados sobre el socialismo en el Ateneo de Madrid el 5 de mayo de 1859 (pp. 141-146); el referido a la idea del progreso, el 13 de mayo de 1861 en el mismo Ateneo (pp. 147-157); la libertad y el trabajo, en la Sociedad El Fomento de las Artes el 27 de junio de 1861 (pp. 159-164); a favor de la República como forma de gobierno, pronunciado en el Parlamento el 20 de mayo de 1869 (pp. 165-171); en defensa de la abolición de la esclavitud en las colonias, en el Parlamento el 20 de junio de 1870 (pp. 173-177); en defensa del sufragio universal, el 17 de febrero de 1888, asimismo pronunciado en el Parlamento (pp. 179-181); la cuestión social y la paz armada en Europa, en su discurso-conferencia dado en el Círculo de la Unión Mercantil de Madrid el 31 de mayo de 1890 (pp. 183-186), y el ensayo escrito el 25 de febrero de 1892 sobre el socialismo y los socialistas (pp. 187-198). [Recibido el 2 de enero de 2011].

Guillermo Hierrezuelo Conde

Gloria Corpas Pastor, *St. Raymond of Pennafort: A critical edition and English translation*, Comares, Granada, 2010, LXXXVIII + 147 págs.

ABSTRACT: Nos encontramos frente a la versión inglesa de la biografía de San Ramon de Penyafort, canonista y moralista, profesor de la Universidad de Bolonia, escrita por F. Valls i Taberner y publicada en castellano en 1936, 1979, 1986 y 1998, en catalán en 1996 y en italiano en 2000. A la misma preceden todos los prólogos, prefacios, introducciones y apéndices de que fue adornada, escritos por catedráticos, magistrados, frailes dominicos, archiveros, abogados, académicos y hasta un Cardenal. La traducción de los textos a la lengua inglesa desde el castellano la han llevado a cabo Gloria Corpas Pastor y Louise Ashon.

PALABRAS CLAVE: San Ramon de Penyafort, Ferran Valls i Taberner, Gloria Corpas Pastor, Martí de Riquer, Josep Maria Font i Rius, Manuel J. Peláez, José Calvo González, Llorenç Galmés, Albert Collell, Josep Maria Mas Solench, Eugeni Gay i Montalvo, Brian Ferme, Giacomo Biffi, Santo Domingo de Guzmán, Bolonia, Gregorio IX, Orden de Predicadores, Inquisición, Jaime I el Conquistador, Pere Albert, Summa de poenitentia, Derecho internacional público, Derecho de la guerra.

Acaba de aparecer la edición en inglés de la biografía de San Ramon de Penyafort de la que es autor el político, jurista e historiador Ferran Valls i Taberner (1888-1942). En 1936 Valls publicó dicha biografía en Barcelona, pero apenas tuvo difusión en ese preciso momento como consecuencia de la guerra civil en marcha y

tratándose, a mayor abundamiento, de la biografía de un santo en momentos de persecución religiosa en Cataluña. Fue a partir de 1939, cuando, concluido el proceso bélico, el librito que contenía la biografía de Valls tuvo mayor acogida en la ciudad condal al socaire de la nueva época donde todo lo que sonara a sacro, si era católico, era reverenciado. Piénsese que fue nombrado Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona el catedrático de Derecho canónico Francisco Gómez del Campillo (1873-1945), que luego sería Rector, y en la de Madrid Eloy Montero Gutiérrez (1887-1972), también catedrático de Derecho canónico.

Con ocasión de la edición de las *Obras Selectas* de Valls en 1953, en el vol. I, tomo 2º, se publicó de nuevo la biografía del santo, precedida de una breve nota del director del Archivo de la Corona de Aragón Jesús Ernesto Martínez Ferrando. El académico Martí de Riquer prologó una nueva edición por parte de la editorial Labor, que vio la luz en 1979. Riquer bien conocía a Valls y la correspondencia remitida a Valls entre 1939 y 1942 se conserva en el Archivo Particular Ferran Valls i Taberner, buena parte del mismo ya ubicado en el Arxiu Nacional de Catalunya de Sant Cugat del Vallès.

Al publicarse todo un conjunto de estudios de Valls bajo la rúbrica de *Literatura jurídica. Estudios de ciencia jurídica e historia del pensamiento canónico y político catalán, francés, alemán e italiano*, en edición de Manuel J. Peláez y José Calvo González, de nuevo aparecía la biografía de San Ramón (pp. 61-161) y se añadían unas notas, enmiendas y adiciones preparadas por Valls durante su estancia a finales de 1936 y principios de 1937 en diversas bibliotecas romanas, que pacientemente las iba recogiendo en una libreta negra (pp. 161-182). También en dicha *Literatura jurídica*, sin duda el libro más recensionado y citado de Valls con diferencia, vemos una crónica amplia sobre una conferencia de Valls en la Academia de Buenas Letras de Barcelona, de la que dejó constancia *La Veu de Catalunya* el 30 de noviembre de 1935.

Más tarde la biografía del moralista y canonista fue traducida al catalán, apareciendo en 1996 acompañada de nuevos prólogos y apéndices, a la vez que de ilustraciones a todo color. El interesado siempre era el doctor en Derecho y banquero, hijo de Ferran, Lluís Valls-Taberner i Arnó (1926-2006), impelido desde la barcelonesa Asociación de amigos de San Ramon de Penyafort, en la que Manuel Rucabado estaba sumamente activo y el gran historiador y jurista Josep Maria Mas Solench (1925-2005) se ocupaba de la parte más científica sobre el santo. Dos años después de la versión en la lengua de Verdaguer, es decir en 1998, se publicó con el mismo planteamiento que la versión catalana una edición castellana, añadiendo nueva parafernalia de textos y comentarios. En 2000 apareció en Italia un cuidado texto en la lengua de Dante con un prólogo del Cardenal Giacomo Biffi y un estudio del profesor de Historia del Derecho canónico Brian Ferme.

Lluís Valls, desde que charlé por primera vez con él en agosto de 1984 viendo un partido de tenis en una localidad de la provincia de Ávila, al hablar de su padre siempre sacaba la biografía de San Ramon de Penyafort. Fue inútil intentar disuadirle por mi parte de que su progenitor contaba con cosas más interesantes y menos expuestas al transcurso de los años y al progreso de la investigación histórico-jurídica, que la biografía del gran santo catalán. A partir de 1994 le indiqué que de San Ramon no quería saber ya nada más y solo, por peticiones expresas y reiteradas, proporcioné documentación para las ediciones de 1996 y 1998. Años más tarde especulaban Valls, Mas Solench y Rucabado la idea de una edición inglesa. Fui preguntado, pero me incliné mejor por una versión francesa o alemana.

Barajaban el nombre de un yugoslavo que traduciría al inglés el libro y después publicar el volumen en EE.UU., apoyando su difusión a través de las parroquias dedicadas a San Ramón de diversas ciudades norteamericanas. En todo ello había una cierta dosis de fantasmagoría. Quizás consciente de ello, Lluís Valls pensó que la editorial Rialp, a la que él tanto había ayudado económicamente, se podía encargar de buscar en Irlanda o Inglaterra una editorial que editara el libro. Miguel Arango, de Rialp, me comunicó que eso estaba hecho, pues contaba con muchos contactos en la pequeña isla y república. Precisé que no me interesaba el tema, máxime siendo el dichoso San Ramon y encima en inglés, pero insistió Lluís Valls que siendo el abajo firmante el que mejor conocía la obra de su padre y su archivo debía ser el que me encargara de organizar la versión en inglés, y que de la publicación en la pérfida Albión o en la católica Irlanda ya se encargaba Miguel Arango. Me puse en contacto con el departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga, en el que la entonces profesora titular y al cabo de poco tiempo catedrática de Universidad, Gloria Corpas Pastor, asumió, junto a la traductora *free lance* Louise Ashon, la traducción del castellano al inglés de la obra. Previamente hubo que verter a la lengua de Cervantes todo lo que estaba en italiano y en catalán.

El resultado es que Gloria Corpas y Louise Ashon hicieron una muy meritoria labor y recogieron traduciéndoos al inglés todos los prólogos, preámbulos, añadidos, apéndices y tres trabajos más de Ferran Valls sobre San Ramon, al margen del libro, que habían aparecido en distintos lugares y que ocupan en la presente edición las pp. 115-144. Así, en esta obra colectiva, el número de los autores es amplísimo, pues no sólo hay un prefacio de la cotraductora Gloria Corpas Pastor y responsable de la edición inglesa, sino que también son coautores con Ferran Valls i Taberner, Jesús Ernesto Martínez Ferrando, Martí de Riquer, Manuel J. Peláez, José Calvo González, Josep Maria Font i Rius, Llorenç Galmés (con un estudio muy amplio y documentado), Albert Collell, Josep Maria Mas i Solench, Eugeni Gay i Montalvo, Giacomo Biffi y Brian Ferme.

Cuando se terminó todo y solo faltaba la publicación en ese país donde lloran de alegría cuando sale el sol, nos pusimos en contacto con Miguel Arango, se le envió el texto al completo en papel y los diskettes. Arango dijo que se encargaba él y que no nos preocupásemos. Pasa un cierto tiempo sin que se solucione el tema, Lluís Valls enferma y fallece el 25 de febrero de 2006. A partir de ese momento, resulta muy difícil contactar con Arango. Al cabo del tiempo comunica que no hay interés por la editorial irlandesa en publicar ese libro. Como era un encargo directo del anterior Presidente del Banco Popular que puso toda su confianza en él, se le solicitó que como había manifestado al principio diversificase sus contactos con editoriales de las islas británicas. Desconocemos si hizo algo. Lo que sí está claro es que no comunicó nada. Pasaron los años y la editora y traductora decidió publicar, asumiendo su grupo de investigación la responsabilidad económica, en la "Colección de Estudios Ingleses" de la editorial Comares de Granada, la obra a la que se le puso por título *St. Raymond of Pennafort: A critical edition and English translation*. En cualquier caso «Nihil novum sub sole» o como decía más expresivamente un texto sagrado «Melior canis vivus leone mortuo».

La parte positiva de todo este asunto, por aquello que decía Anatole France de que « sans mensogne, la vérité périrait de désespoir et d'ennui », es que contamos por fin con una edición en lengua inglesa de una obra, en la que tanto interés en que se llevara a cabo pusieron tres personas que me resultan gratamente entrañables, Lluís Valls, Manuel Rucabado y Josep Maria Mas i Solench, tres caballeros con lo

que se podía llegar a acuerdos y bastaba su palabra, que desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros. Esperamos y deseamos que esta edición merezca tener tanta difusión y críticas científicas como tuvieron otras, de las que se escribió sobre ellas en Europa y en América y siempre elogiosamente. [Recibido el 3 de marzo de 2011].

Manuel J. Peláez

Antonio Fernández de Buján, *Derecho Público Romano*, Thomson-Civitas, Pamplona, 2010, 13ª edición, 432 págs.

ABSTRACT: En la presente reseña se destacan los aspectos y novedades de la 13ª edición del libro de Derecho público romano en el que, al margen de las etapas históricas y las fuentes del Derecho romano, se aborda el Derecho administrativo junto a la incorporación del Derecho fiscal romano, esto último como novedad, y la recepción del Derecho romano en el Derecho castellano e iberoamericano. Estamos, por tanto, ante una obra que, sin lugar a dudas, se ha convertido en el principal manual de referencia del Derecho público romano.

PALABRAS CLAVE: Derecho público romano, Formas de gobierno, Comicios, Senado, Princeps, Derecho administrativo, Antonio Fernández de Buján.

Acaba de ver la luz la decimotercera edición del manual de Derecho público romano de Antonio Fernández de Buján, Catedrático de Derecho romano de la Universidad Autónoma de Madrid, un manual que aunque procede del ambiente académico, tiene un enorme rigor científico, toda vez que se trata de un libro ameno, muy bien escrito, comprensible y sobre todo didáctico<sup>1</sup>, aspecto este último fundamental teniendo en cuenta los nuevos tiempos en los que la enseñanza universitaria experimenta una profunda renovación por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior<sup>2</sup>, y en el que los enfoques didácticos clásicos centrados en el aula y en la actividad del profesor, cambian por una metodología de enseñanza-aprendizaje<sup>3</sup> centrada en la actividad autónoma del estudiante<sup>4</sup>, a lo que contribuye

<sup>1</sup> Probablemente, la utilidad del Derecho romano está, en palabras del profesor Fernández de Buján, en relación directa con el problema didáctico de cómo enseñarlo, y en este punto parece preferible la aplicación histórica o casuística dogmática, teniendo presente que el método pedagógico consiste en el casuismo jurídico. Vid. A. Fernández de Buján, "Clasicidad y utilidad del Derecho romano", en *Boletín del Ilustre colegio de abogados de Madrid*, nº 6 (1987), pp. 56-57.

<sup>2</sup> A. Benito-Cruz, *Nuevas claves para la docencia universitaria en el Espacio Europeo de Educación superior*, Madrid 2007, pp. 17 y ss., los roles del profesor cambian y el alumno aprende haciendo mediante trabajo guiado, autónomo y el estudio, para ello sin lugar a dudas es conveniente manuales didácticos como el presente del que nos estamos ocupando en esta recensión.

<sup>3</sup> M. de Miguel Díaz, *Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias. Orientaciones para el profesorado universitario ante el espacio europeo de educación superior*, Madrid, 2009, pp. 13 ss.

<sup>4</sup> Y como señala el A. en el prólogo: «la perspectiva histórica y el análisis filosófico de las instituciones y de los sistemas jurídicos, constituyen un instrumento fundamental para preservar la libertad del jurista. El estudio aséptico del Derecho positivo, aún del vigente, en un período de elaboración conforme a criterios político-democráticos de justicia, sin una valoración histórico-filosófica, comporta el riesgo de producir en el estudiante una percepción sacralizada o dogmática de la ley, lo que daría

el A. con este nuevo manual. A ello debemos añadir los muchos motivos de encomio que suscitan las actualizaciones y revisiones que a lo largo de los años se han ido produciendo en el mismo desde su edición del año 1996. En este sentido, es menester que nuestros libros adoctrinen sobre el significado del Derecho público romano con una proyección que permita obviamente examinar un Derecho científico<sup>5</sup> y jurisprudencial<sup>6</sup> que nació, se desarrolló y se extinguió en un clima de evolución social y político interesantísimo<sup>7</sup>, contribuyendo de esta forma a conformar unas ideas bastante claras sobre lo que es y representa el dinamismo jurídico; a ello, sin lugar a dudas, contribuye este libro.

Asimismo, cabe precisar antes de analizar brevemente su contenido, que la obra incorpora todo un elenco bibliográfico sobre los avances registrados en la investigación histórica del Derecho público a los que el A. va dando en su sistemática un tratamiento riguroso y preciso, explicando en todo momento su engarce con lo común y general, donde la jurisprudencia romana dio vida a un cuerpo doctrinal que postula lo mejor de cara a aquel tiempo y al nuestro<sup>8</sup>. En esta obra, en la que el A., con amplio rigor científico y análisis minucioso y exhaustivo, como corresponde a su reconocido prestigio como romanista, aporta al estudiante, inmerso en los estudios de Grado, la visión y el contexto histórico del Derecho romano, con sus etapas históricas, las fuentes y la importancia de la tradición y recepción, desde la romanización jurídica de Hispania hasta las diferentes codificaciones tanto europeas como iberoamericanas; a lo que se añade, junto al Derecho administrativo romano, como novedad en la 13ª edición un capítulo dedicado al Derecho fiscal romano y los principios tributarios. De esta forma ofrece al estudiante el punto focal en el que ir construyendo el armazón jurídico resaltando la importancia y el valor formativo de nuestra disciplina. No pretendemos en esta reseña hacer mención de todos los aspectos y matices que contiene la obra de Antonio Fernández de Buján, y que constituye además de un ejemplo de buen hacer romanístico, un manual de referencia obligado no sólo para el romanista sino para todo estudioso del Derecho que quiera hallar en el Derecho público romano la génesis de la mayor parte de los conceptos jurídicos que se manejan a nivel constitucional, penal, procesal, jurídico-administrativo y fiscal, entre otros. En aras a la brevedad y siempre teniendo presente que en una reseña es difícil destacar todos los prolegómenos con el rigor con los que son analizados por el A., debemos precisar que el manual se estructura en veinte capítulos (pp. 31-384): Como portón de entrada al estudio de las diferentes formas de gobierno se desarrollan: los capítulos I (pp. 31-39) donde el A. se centra en el concepto, el valor actual del Derecho público romano, las etapas y sus fuentes y el II (pp. 45-75) que se dedica al estudio los métodos y la importancia del Derecho romano como elemento esencial y vínculo de unión entre el Derecho europeo y el iberoamericano.

---

como resultado una figura de experto o técnico de normas en vigor que no distaría mucho de la vilipendiada imagen del leguleyo».

<sup>5</sup> En relación a su consideración sistemática F. Cuenca Boy, *Sistema jurídico y derecho romano*, Santander, 1998, p. 61 y ss.

<sup>6</sup> A. d'Ors, *Derecho privado romano*, Pamplona, 1986, p. 27

<sup>7</sup> A diferencia de lo que ocurre en países como Francia que lo relegan a un plano común de estudio dentro de los Derechos de la antigüedad, vid. A. Fernández Barreiro, *Los estudios de Derecho romano en Francia después del Código de Napoleón*, Roma, 1970, pp. 108 ss. En contra de esto vid. Pólay, "L'insegnamento del Diritto romano nei paesi socialisti", en *Index*, 1 (1970), pp. 131 y ss.

<sup>8</sup> J. Iglesias Santos, "Defensa de los estudios romanísticos", en *Anuario de Historia del Derecho Español*, L (1980), pp. 353 ss.



Posteriormente, con rigor cartesiano, el A. va analizando de forma pormenorizada las distintas etapas del sistema constitucional romano, desde la génesis de la monarquía en el capítulo III (pp. 75-82) con las organizaciones precívicas, a la importancia de la figura carismática del rey del capítulo IV (pp. 83-90) dónde de forma sintética se analizan sus funciones, la creación del Senado y el nacimiento de los comicios por curias y centurias.

El autor continua con una aproximación a la experiencia jurídica romana en la conformación de la República en el capítulo V (pp. 91-97) como instrumental del VII, en el que se examina el tránsito de la Monarquía a la República y el antagonismo de clases entre patricios y plebeyos. Posteriormente en el capítulo VI (pp. 99-108) se estudia de forma sucinta la codificación de la Ley de las XII tablas y su elaboración por parte de los *decemviri legibus scribundis*, junto al contenido de la ley. Los capítulos VII (pp. 113-118), VIII (pp. 123-129), IX (pp. 131-142) y X (pp. 143-160) versan sobre todos los aspectos políticos, sociales y jurídicos de la República romana tras la consolidación de este periodo, con un desarrollo que el A. realiza prestando lúcida atención sobre el Senado republicano y sus competencias, las asambleas y el procedimiento comicial, todo el elenco de magistrados con sus características y funciones, para cerrar con el capítulo X centrado en las fuentes de esta etapa y la jurisprudencia con un laborioso ejercicio de síntesis, destacando los aspectos y las vicisitudes de mayor relevancia.

El capítulo XI (pp. 161-167) está dedicado a contextualizar el período comprendido entre la República y el Principado, en el que el A. hace hincapié en la expansión mediterránea y sobre todo la organización político-administrativa del territorio en municipios, colonias y provincias profundizando en la forma de anexión en base a la *lex provinciae*.

Continuando con la estructura que nos presenta el A., manteniendo el hilo conductor y manejando de forma fluida y con precisión las fuentes jurídicas y literarias, en el capítulo XII (pp. 173-189) nos habla de la cuarta forma de gobierno el Principado, la figura de Augusto como *princeps* y el periodo de esplendor de las artes y de las letras, y donde además se van marcando las notas del autoritarismo que inciden en un poder carismático que choca con la idea de la sucesión dinástica; periodo en el que el A. nos ilustra sobre los problemas de la sucesión, la Administración y el Derecho de esta etapa, haciendo hincapié en la etapa de la jurisprudencia clásica. En el capítulo XIII (pp. 195-204) se estudia la última forma de gobierno: el Dominado o Imperio absoluto junto a la influencia del Cristianismo en los órganos de gobierno hasta su promulgación a finales del siglo IV como religión oficial del Estado. Recogiéndose además por parte del A. las dos tendencias del Derecho de este periodo: la primera las disposiciones emanadas por el emperador *leges* y las obras jurisprudenciales *iura* y, por otro lado, el fenómeno del Derecho romano vulgar (*Vulgarrecht*) haciendo mención a las distintas posturas doctrinales de Pugliese y Guarino frente a la Mitteis, Levy o Wieacker.

Cierra su estudio histórico con el capítulo XIV (pp. 211-223) dedicado al imperio bizantino y sobre todo centrado en la Compilación justiniana y posjustiniana y en el análisis histórico crítico de las fuentes del Derecho romano. Al socaire de todo la línea argumental mantenida por el A. en los primeros catorce capítulos se puede apreciar una visión de conjunto de gran calidad científica de la que se aprecia como el Derecho público romano nace y evoluciona al compás de todo un amalgama de factores sociales, políticos y económicos que son sistematizados con gran precisión en el manual. Después del análisis minucioso del sistema constitucional romano y sus fuentes, Antonio Fernández de Buján introduce hábilmente el capítulo XV (pp.

227-235) dedicado al Derecho penal romano centrándose en la Ley de las XII tablas y en la etapa en la que queda asumido bajo la competencia Estatal. Bajo este prisma el A. se centra principalmente en los *iudicium populi* desde el *comitatus maximus* a procesos ante magistrados específicos como los *quaestores parricidii* o los *duoviri perduellionis*, o los tribunales penales permanentes *quaestiones perpetuae* con competencia de delitos electorales (*ambitu*), *crimen falsi*, *peculatus*, *adulterii*, *calumniae*, *iniuriis*, *maiestatis*; para cerrar el capítulo con el Derecho penal en el Principado donde aumenta la facultad coercitiva del Emperador y sus funcionarios que van a resolver los delitos en sede de la *cognitio extra ordinem*. El Capítulo XVI (pp. 241-259) versa sobre el Derecho administrativo romano, donde se nos presenta la compleja problemática de toda una línea de investigación novedosa cuyos resultados de investigación han quedado plasmados en una colección de estudios y monografías de Derecho romano en la editorial Dykinson bajo la sección de Derecho administrativo y fiscal que A. Fernández de Buján dirige.

En el manual y dado que el libro va dirigido al ámbito de la formación académica, el A. sintetiza y condensa la experiencia administrativa romana destacando la organización administrativa y las competencias de ésta que casan perfectamente con el derecho moderno: concesiones sobre el *ager publicus*, servicios públicos y urbanismo, regulación de las competencias en la Administración en materias de orden público (tráfico, policía, salubridad, abastecimiento de las ciudades).

También se examinan, entre otros aspectos, la regulación jurídico-administrativa de las vías públicas, previsión de gastos para la construcción de calzadas, caminos y los trabajos de reparación y conservación, régimen fiscal de las vías (inmunidad y bonificaciones) y el procedimiento de Expropiación forzosa por *utilitas publica*. Como novedad de esta decimotercera edición se introduce un importante capítulo XVII (pp. 267-288) en el que se analiza el Derecho fiscal romano. Así el A., que además es experto en esta línea de investigación, señala que la denominación y conformación de numerosos conceptos e instituciones del moderno derecho financiero tienen su precedente histórico en el derecho romano haciendo hincapié en sus observaciones preliminares en los conceptos de *aerarium*, *fiscus* y *thesaurus*. De esta forma el A. con una metódica capacidad de establecer relaciones rigurosas entre los distintos ámbitos de conocimiento señala que el derecho fiscal moderno es heredero del *ius fiscale* romano ya que el primero no puede ser rectamente entendido sino a través del hilo conductor que supone su proceso histórico.

Tras el análisis de la clasicidad del léxico y de los conceptos *ius fiscale*, *tributum*, *stipendium*, *debitor*, *delationis fiscale*, *onus tributi*, etc..., nos comenta como los instrumentos del derecho financiero también son objeto de regulación en el derecho romano citando (p. 271): los índices de inflación, flujos monetarios, devaluación de la moneda, prohibición de exportar armas, franquicias aduaneras, inversión de capitales, etc. Asimismo, el A. nos habla del fundamento de la imposición fiscal (pp. 272-276) que va a evolucionar al socaire de las circunstancias políticas, económicas y sociales teniendo presente que los principios informadores del sistema tributario que encuentran su génesis en reflexiones jurisprudenciales romanas, inspirando muchos de los principios recogidos en la Ley General Tributaria como: el de proporcionalidad y capacidad económica; igualdad y generalidad de la imposición, benignidad, humanidad y equidad; legalidad o reserva de ley, indisponibilidad, objetividad y seguridad jurídica, razonabilidad y utilidad común y el de preclusión (pp. 277-288).

Los tres últimos capítulos del XVIII al XX se dedican a examinar la recepción del Derecho romano. En el XVIII (pp. 293-316) el A. resume de forma clara y precisa la

recepción en el siglo XI en Bolonia en la escuela de los glosadores<sup>9</sup> y la formación del *ius commune*, y su evolución a lo largo del resto de escuelas: comentaristas, humanistas hasta llegar al *usus modernus pandectarum*, la escuela de Derecho natural del siglo XVIII hasta el inicio de las grandes codificaciones, en particular el Código civil francés y el BGB alemán de 1900 (pp. 295-307).

Asimismo, nos plantea la importancia que tiene el Derecho romano desde el punto de vista del Derecho comunitario europeo ya que el mismo está llamado a cumplir un papel importante en la previsible codificación del Derecho privado europeo por su universalidad y versatilidad, al ser éste un elemento de cohesión y de intermediación entre los diferentes ordenamientos. El penúltimo capítulo XIX (pp. 323-367) se centra en la Recepción del Derecho romano pero de forma monográfica al territorio peninsular.

A mi juicio constituye un capítulo importante e instrumental para comprender la recepción del ordenamiento jurídico romano en nuestro territorio. Para ello el A. se centra en la historia prerromana y el marco político de estos pueblos para ver la evolución tras la conquista y romanización (pp. 333 y ss.). Después de un análisis minucioso de las notables influencias del ordenamiento jurídico romano, se establecen las huellas que quedan en el ordenamiento visigodo y su relevancia en el Derecho castellano en particular: en el Código de las siete partidas, Fuero real, Leyes de Toro y la Nueva y Novísima recopilación (pp. 339-342). Se cierra el capítulo con un apunte sobre la importancia que tiene el Derecho romano como antecedente y fundamento del Derecho civil español, poniendo de manifiesto la mella y el trasunto fiel de muchas de sus instituciones.

Finalmente el A. en el último capítulo XX (pp. 373-383) aborda el estudio de la recepción del derecho romano en Iberoamérica, fenómeno marcado en gran medida por la incorporación de las Indias a la corona de Castilla y la aplicación del Derecho castellano de acusada influencia romanística a través de la ley de Partidas; éstas y otras influencias han quedado marcadas en los códigos iberoamericanos cuya redacción se prolongó entre los siglos XIX y XX, entre los que se destacan como paradigma el Chileno, el Argentino y el proyecto Brasileño de 1865 que evidentemente heredan del código de Napoleón; así también se puede afirmar que el Derecho romano constituye un factor de unidad cultural latinoamericana. Cada capítulo contiene un elenco bibliográfico que se ha ido actualizando a lo largo de las ediciones que sirve para ver las publicaciones y que ayudan al investigador a saber las monografías y artículos que versan sobre cada tema a las que se han ido añadiendo las citas correspondientes a las revistas electrónicas; de forma particular la *Revista General de Derecho Romano* del portal iustel ([www.iustel.com](http://www.iustel.com)) que dirige el propio Antonio Fernández de Buján.

Para cerrar esta obra el autor, con gran acierto, ha introducido una amplia tabla cronológica (pp. 386-399) que ayuda a apreciar los episodios y vicisitudes históricas más importantes a lo largo de las distintas etapas; también un índice analítico que permite localizar rápidamente la voz en el manual (pp. 401-420); y finalmente unos

---

<sup>9</sup> Ver sobre los primeros tiempos de las enseñanzas jurídicas y canónicas en la Universidad de Bolonia los interesantes artículos de Vito Piergiovanni, "Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi", en *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, XIV, nº 2 (1975), pp. 518-537 y Davide Emilio Cito Pagani-Cesa, "Il difficile equilibrio tra diritto locale e aspirazioni universali negli antesignani dello Studio –Peppone–: dal diritto longobardo alle Pandette", en *Una offerta científica iushistórica internacional al doctor J. M. Font i Rius por sus ocho lustros de docecia universitaria*, Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1985, pp. 63-93.

mapas (pp. 421-432) que nos permiten contextualizar la evolución y expansión del Imperio y la conformación de la provincia de Hispania.

Nos congratula podernos hacer eco de esta decimotercera edición revisada del manual de Derecho público romano de Antonio Fernández de Buján, que sin lugar a dudas constituye un trabajo ejemplar como he puesto de manifiesto en estas líneas que tratan de ser indicativas de la labor de exposición y sistematización que el A. ha hecho de forma encomiable demostrando su hábil destreza en el manejo de las fuentes jurídicas y extrajurídicas con una profunda y rigurosa disección y solidez argumentativa, haciendo al mismo tiempo una síntesis de aspectos fundamentales con enorme carácter didáctico, que dan al libro una notable coherencia interna que ayudan al que se acerca a la materia por primera vez y a comprenderla sin ningún tipo de dificultad; lo que se percibe por estar ejemplarmente documentada y escrita con un lenguaje conciso y elegante.

En definitiva, estamos ante una obra actualizada que viene a enriquecer a cualquier jurista que trate de aproximarse al estudio del Derecho público romano a lo largo de sus etapas y la recepción del mismo, con dos capítulos que hacen alusión a las nuevas líneas de investigación emergentes en los últimos años el Derecho administrativo y el fiscal romano que encuentran un estudio pormenorizado en capítulos independientes. De esta forma se aprecia en toda la obra un hilo conductor que permite una lectura ininterrumpida y amena que sirve para observar la conexión entre la investigación histórica y la dogmática actual y poder llegar a la conclusión de que en muchos casos el derecho positivo es un trasunto fiel del Derecho romano.

En conclusión, cabría afirmar, en definitiva, que el Derecho público romano de Antonio Fernández de Buján, se viene ya conformando desde hace años, por su amplísima difusión entre el profesorado y los estudiantes de enseñanzas jurídicas, y por su original y valioso contenido, como la principal obra de referencia en la romanística española. [Recibido el 31 de enero de 2010].

José Luis Zamora Manzano

Francisco Giner de los Ríos, *La persona social. Estudios y fragmentos*, ed. y estudio preliminar "El organismo social de Giner de los Ríos", a cargo de José Luis Monereo Pérez, Comares, Granada, 2008, 260 págs.

ABSTRACT: Volumen centrado en la figura y en el pensamiento del que fuera uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos. Incluye un largo estudio preliminar, del que es autor José Luis Monereo Pérez, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada, quien estudia la filosofía social y el liberalismo organicista de Giner, centrándose en temáticas relacionadas con la Ética y la Sociología, la organización y constitución política, las imperfecciones del Estado, las condiciones de la representación, el concepto de política social, el de la política financiera con sentido social, los móviles de la producción en el capitalismo y en el colectivismo y los tipos de organización colectivista, incidiendo en aspectos relacionados con el Derecho natural y con el Derecho positivo, la religión, la educación, la propiedad como institución de Derecho público, la distinción entre Derecho privado y Derecho público y entre caridad y justicia, entre otras cuestiones de indudable interés.

PALABRAS CLAVE: Francisco Giner de los Ríos, Ética, Constitución política y social, Carácter social de la Ética, José Luis Monereo Pérez.

Incansable en su tarea investigadora nos presenta en esta ocasión el catedrático granadino Monereo Pérez, dentro de la colección Crítica del Derecho, sección Clásicos andaluces del pensamiento político y jurídico, un volumen centrado en la figura y en el pensamiento del que fuera uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos, nacido en Ronda (Málaga) en 1839 y fallecido en Madrid en 1919.

Tras un estudio preliminar de casi cuarenta apretadas páginas con más de un centenar de notas a pie de página (104 en concreto), la mayoría de ellas con bastantes referencias bibliográficas a modo de síntesis sobre la filosofía social y el liberalismo organicista de Giner, Monereo se adentra como editor en las concepciones del rondeño sobre la idea de la personalidad dando a conocer al lector el análisis de Giner de los Ríos acerca de las diversas teorías sobre la misma para encaminarse después al estudio de la teoría de la persona social en los juristas y en los teólogos de su tiempo, en especial en la obra de Herbert Spencer, de Fouillée y de Schäffle, autor sobre el que profundizará en otras páginas del volumen centrándose en temáticas relacionadas con la Ética y la Sociología, la organización y constitución política, las imperfecciones del Estado, las condiciones de la representación, el concepto de política social –personas a las que se extiende, excepciones, contenido de la protección, la amplitud del principio de tutela, la jornada de trabajo, la organización representativa de la clase obrera–, el de política financiera con sentido social, los móviles de la producción en el capitalismo y en el colectivismo y los tipos de organización colectivista, para terminar con unas sugerentes obervaciones sobre el carácter social de la ética de Schäffle incidiendo en aspectos relacionados con el Derecho natural y el Derecho positivo, la religión, la educación, la propiedad como institución de Derecho público, la distinción entre Derecho privado y Derecho público y entre caridad y justicia, entre otras cuestiones de indudable interés.

El análisis de la ética de Wundt sobre las personas sociales, la sicología de la sociedad y sus formas de desarrollo ocupan buena parte del libro que estamos comentando, si bien es en el análisis del Estado y de la persona social, las relaciones entre el individuo y el Estado y las principales doctrinas tocantes a la soberanía donde se muestra más documentado Giner de los Ríos que rezuma en todas estas temáticas claras influencias krausistas.

Felicitaciones una vez más a José Luis Monereo por dar a conocer en esta colección de innegable valor político y jurídico trabajos poco conocidos de autores tan relevantes como el que en esta ocasión le ocupa. [*Recibido el 7 de marzo de 2011*].

María Encarnación Gómez Rojo

María Encarnación Gómez Rojo, *Historia del Derecho e historiografía jurídica contemporánea en Francia, Italia y Alemania*, Eumed, Málaga, 2009, 375 págs.

ABSTRACT: María Encarnación Gómez Rojo ya tiene una experiencia consolidada en el estudio de la historiografía jurídica contemporánea, contando con publicaciones desde el año 1992 sobre la materia. Se ha centrado también en cuestiones metodológicas y en el examen de los planes de estudio en Francia, Alemania y Suiza, en particular por lo que a las asignaturas histórico-jurídicas se refiere. Ha publicado también epistolarios de consagrados historiadores del Derecho de Francia, Bélgica, Italia, Alemania, España, Suiza, EE. UU., Polonia, etc. En esta ocasión recoge correspondencia inédita de catedráticos que lo fueron de prestigiosas Universidades europeas, como las de Milán, Roma La Sapienza, Toulouse, Padova, Leiden, Pisa, Nápoles, Aix-en-Provence, Pau, Montpellier, Venecia, etc. Por otro lado, Gómez Rojo ha hecho un elenco muy preciso y concreto de las que considera las 25 teorías existentes sobre lo que es la Historia del derecho y de las instituciones, apartándose de las tres tradicionales, ciencia histórica, ciencia jurídica y disciplina bifronte (defendida esta última por Josep Maria Font i Rius y Jesús Lalinde Abadía), para sumergirse en 22 más, que deduce de un amplio abanico de lecturas.

PALABRAS CLAVE: Historia del Derecho, Historiografía jurídica, Ernest Perrot, Giuseppe Salvioli, Amedeo Giannini, Carlo Guido Mor, Pier Silverio Leicht, Juliusz Bardach, Robert Feenstra, Giulio Vismara, Rafael de Altamira Crevea, Claudio Sánchez-Albornoz, Ramón Menéndez Pidal, Ennio Cortese, Antonio Marongiu, Jean-Louis Gazzaniga, Jean-Louis Mestre, Mario Grignaschi, Norbert Rouland, Jean-Marie Carbasse, Jean Gaudemet, Jean Bastier, Jacques Krynen, María Encarnación Gómez Rojo.

Cada vez se van imponiendo más los libros electrónicos. En este caso está abriendo una nueva dimensión en la consideración de la realidad diacrítica y científica, de lo que no solo supone una forma barata de dar a conocer los conocimientos, sino de difusión más amplia que a veces conlleva lo que los académicos franceses llaman la *élévation aux honneurs* al contar con un mayor número de lectores, que es un propósito claro a la hora de escribir un libro. La cultura del libro escrito ha tenido sus momentos tenebrosos. Eso ocurrió en la Italia fascista, cuando se incineraron obras de pensadores “no ortodoxos”, a la vez que «en el Coliseo, con gran pompa, se guardaba para la eternidad un *Mein Kampf*, la “biblia” del Reich de 1000 años, encuadernada en piel de terneros auténticamente arios, apuñalados por auténticos arios con largos cuchillos de acero fabricados por auténticos fundidores arios»<sup>1</sup>. Ahora ya no habrá posibilidad con estos libros electrónicos de que nazis o fascistas puedan incinerar de nuevo la cultura europea. En la presente coyunda, María Encarnación Gómez Rojo, al abrigo de la “Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales”, sostenida por el profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga Juan Carlos Martínez Coll, en eumed.net, ofrece una nueva y valiosa aportación al universo histórico-jurídico fundamentada en un análisis clarificante de lo que es la iushistoria desde un punto

<sup>1</sup> Lo describe y relata Yákov Liátker en *Descartes*, Editorial Progreso, Moscú, trad. del ruso por Camilo Pérez Cascal, 1990, p. 15.

de vista conceptual y docente en el nuevo ámbito del espacio superior europeo. Puede consultarse con fruto en <http://www.eumed.net/libros/2009b/553>.

María E. Gómez Rojo, profesora titular de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Málaga, donde enseña Historia del Derecho e Historia de las Relaciones Laborales, lleva ya mucho tiempo trabajando en cuestiones metodológicas y de enseñanza de las disciplinas históricas en sedes jurídicas francesas, alemanas y suizas. En este caso, Gómez Rojo ornamenta y decora el volumen que nos da a conocer con un aparato crítico a pie de página que supera el millar de notas y deja *électrisant* al lector de su libro, al que incorpora novedades bibliográficas centroeuropeas poco tenidas en cuenta en nuestro país. No sólo le preocupa la metodología, sino también los planes de estudio al abrigo de las reformas de adaptación a los criterios de Bolonia, seguidos en Francia e Italia, pero no en Alemania. En Italia aparecen licenciaturas de tres años, bianuales de especialidad y luego las magistrales, la primera de ellas en Jurisprudencia, de cinco años, a la vez que masters y luego programas doctorales, que substituyen al modelo precedente de *laurea di ricerca*. No obstante, la de especialidad y la magistral confieren la condición de *dottore*, no así la trianual. En Italia el Derecho romano y los derechos de la antigüedad y la Historia del derecho medieval y moderno cuentan con una considerable presencia en cuanto al número de ECTS asignados en los distintos niveles de tres años, de especialidad y magistral, que incluye también el master.

No podemos perder de vista, en el presente libro, la inclusión en esta primera parte de una exhaustiva estructuración atinente a la diferente tipología y caracterización de las consideradas 25 teorías que, según Gómez Rojo, existen sobre lo que es la Historia del derecho y de las instituciones, que a lo largo del tiempo han ido apareciendo y que están o han estado vigentes entre los “teóricos” y “teoréticos” de la Historia del Derecho con mayor o menor grado de influencia. Acompañan al libro trescientas ochenta y cuatro cartas que forman parte del Apéndice al que Gómez Rojo ha dado el título de *Epistolario histórico-jurídico y romanístico crítico y anotado del siglo XX*. Esta segunda parte del libro resalta sobre todo por la importancia de los personajes que aparecen y por el contenido que dejan traslucir las cartas. Se comienza en 1912 y se termina en 2000, con un personaje que lamentablemente nos ha abandonado hace poco con 92 años José Orlandis Rovira, catedrático que fue durante varios lustros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Las cartas que publica Gómez Rojo nos dan a conocer un material hasta el momento casi en su totalidad inédito procedente de varios archivos y donde aparecen remitentes de la valía científica de Ernest Perrot, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Montpellier; Giuseppe Salvioli, catedrático de Historia del Derecho italiano de la Universidad de Nápoles, manejando correspondencia suya dirigida a Amedeo Giannini conservada en el Archivio Centrale dello Stato, de Roma, dentro de los fondos del propio Giannini, cedidos por su hijo, y tanto este último como su progenitor considerados ambos “Juristas universales” en la obra coordinada por Rafael Domingo; Claudio Sánchez-Albornoz, Presidente del Consejo de Ministros de la República española del exilio en Buenos Aires y antes catedrático de Historia medieval de la Universidad Central, en la que fue Rector, aparte de Diputado por Ávila y en dos ocasiones Ministro de Estado en dos gobiernos fugaces; Ramón Menéndez Pidal, igualmente catedrático de la Universidad Central; Rafael Altamira y Crevea, catedrático de Historia General del Derecho español de la Universidad de Oviedo y de Historia de las Instituciones Políticas y Civiles de América del doctorado de Derecho y de

Filosofía y Letras (sección de Historia) de la Universidad Central; Carlo Guido Mor, catedrático de Historia del Derecho Italiano de la Universidad de Padua; el suegro de Mor, Pier Silverio Leicht, Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública de la monarquía italiana y catedrático de Historia del Derecho Italiano de la Universidad de Bolonia y luego de la de Roma; Juliusz Bardach, catedrático de Historia del Estado y del Derecho Polaco de la Universidad de Varsovia, un ejemplo de longevidad asombroso, que incluso contrajo nuevo matrimonio al filo de los noventa años; Robert Feenstra, catedrático de Historia del Derecho Holandés de la Universidad de Leiden; el italiano Giulio Vismara, catedrático de Historia del Derecho Italiano de la Universidad de Milán y muy conocido en España por su vinculación a Alfonso García-Gallo y a Gonzalo Martínez Díez; Ennio Cortese, catedrático de Historia del Derecho Italiano de la Universidad de Roma “La Sapienza”; Antonio Marongiu, catedrático emérito de Historia de las Instituciones Políticas de la Universidad de Roma, miembro de número de la Accademia Nazionale dei Lincei; Jean-Louis Gazzaniga, catedrático entonces de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Pau et Pays d’Adour, luego de Toulouse y actualmente “apartado del mundo” tras haber abrazado el sacerdocio en la diócesis de Niza; Jean-Louis Mestre, catedrático de Historia del Derecho, de las Instituciones y de los hechos sociales y económicos de la Universidad de Aix-Marseille y un especialista máximo en Historia del derecho administrativo, que lo estudia con una metodología en extremo jurídica bien diferente a la que en España aplican los estudiosos de las instituciones político-administrativas; Mario Grignaschi, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones Musulmanas de la Universidad de Venecia; Norbert Rouland, catedrático de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de Aix-en-Provence; Jean-Marie Carbasse, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de las Universidades de Perpiñán, París V, París II y Montpellier; el canonista, romanista e historiador del Derecho, que todo lo fue, Jean Gaudemet, I catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de París II, Panthéon-Assas; Rafael Gibert y Sánchez de la Vega, también desaparecido, que fue catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Granada, de la Complutense y de UNED, en la que aspiró a ser Rector sin conseguirlo, y del que Ramón Fernández Espinar publicará en los *Cuadernos de Historia del Derecho* una semblanza amplísima y muy documentada sobre el itinerario profesional y las publicaciones de Gibert; Emilio Bussi, Catedrático de Historia del Derecho Italiano de la Universidad de Módena; Jean-Marie Cauchies, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad Católica de Lovaina; Jesús Lalinde Abadía, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Barcelona, al que no se le ha rendido la memoria debida en esa Universidad; Josep Maria Font i Rius, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Barcelona, que se mantiene en plena forma e incluso concede entrevistas y graba programas que pueden verse en la red a sus noventa y cinco años, con la claridad y el rigor que siempre tuvo; Marek Wasowicz, catedrático de Historia del Estado y del Derecho Polaco de la Universidad de Varsovia; Jacques Krynen, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse; Jan Łopuski, catedrático de Derecho Internacional y de Derecho Marítimo de la Universidad de Toruń en la antigua Prusia oriental, hoy Polonia, que sigue escribiendo con 93 años; Jean Bastier, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse; Werner Ogris, catedrático de Historia del Derecho austríaco y alemán de la Universidad de Viena; Nobuo Hayashi, catedrático de Derecho Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad Senshu de Tokio y



discípulo nipón de Álvaro d'Ors; Mario Amelotti, catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Génova; Isidoro Soffietti, catedrático de Historia del Derecho Italiano de la Universidad de Turín y Danilo Marrara, catedrático de Historia de las Instituciones Políticas de la Universidad de Pisa por solo citar a unos cuantos cuyas misivas se publican. Se ha de señalar que los personajes, en un número considerable fallecidos, que aparecen aquí, son juristas de grandísimo relieve, pues su semblanza ha sido seleccionada en el caso de algunos en *Juristas Universales* (2004), en el *Dictionnaire historique des juristes français XII<sup>e</sup> – XX<sup>e</sup> siècle* (2007) y en el *Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos* (2005, 2006, 2008 y 2011). Los italianos aparecerán en el diccionario de juristas italianos que está preparando un equipo del que forman parte, entre otros, Italo Biorochi, Ennio Cortese y Orazio Condorelli. María Encarnación Gómez Rojo, con este libro vuelve a pisar fuerte en asuntos metodológicos, de enseñanza de la Historia del derecho y de las instituciones en Europa y en el campo de la historiografía jurídica, donde ya contaba con un artículo<sup>2</sup>, en su momento capital en la materia, dedicado a la generación barcelonesa de 1917 en la que está considerada como la mayor y mejor especialista femenina. A la vez con notable fruto ha aportado en España páginas significativas sobre Gustav von Schmoller<sup>3</sup> y Franz Oppenheimer, aunque no deja claro en ningún momento con cual de los dos queda más identificada, ni que supuso el socialliberalismo<sup>4</sup>, ni el Verein für Socialpolitik, de lo que escribirá al parecer más adelante. [Recibido el 5 de febrero de 2011].

Patricia Zambrana Moral  
Miriam Seghiri

Enrique González Matas, *Los Estados Unidos del Mundo. Un ideal de siglos ya posible*, Editorial Arguval, Málaga, 2010, 160 págs.

ABSTRACT: Enrique González Matas, que ha sido profesor de Sociología de la Universidad de Málaga y es doctor en Historia, y cuenta con un amplio número de publicaciones, nos sorprende una vez más con un libro interesante, donde plantea, partiendo de la experiencia histórica, constituir una República universal con poderes, distinta de los antiguos imperios y mejor adaptada a los tiempos que corren. Aunque el autor considera que ha llegado el momento posible, son no pocos los que resaltan los valores de lo nacional, de los hechos diferenciales, del comarcalismo y del localismo. Otra cuestión sería la de saber si es un ideal o una especulación de mentes dispersas que han dejado volar su imaginación, como los poetas o los redactores de cuentos.

<sup>2</sup> María Encarnación Gómez Rojo, "La Historiografía Jurídica en la Generación barcelonesa de 1917", en *Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación*, 18 (abril 1995), pp. 4.813-4.858.

<sup>3</sup> María Encarnación Gómez Rojo, *Historiografía Jurídica y Económica y pensamiento Jurídico-Público, Social y Económico de Manuel Reventós i Bordoy (1888-1942)*, Universidad de Málaga, Málaga, 2001, 519 pp. Reventós i Bordoy conoció a Gustav Schmoller en Berlín.

<sup>4</sup> Franz Oppenheimer, "Zur Theorie des Sozialliberalismus", en *Schmollers Jahrbücher für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft*, XXVIII (1904), pp. 359-371 y más tarde "Sozialismus oder Liberalismus?", en *Die neue Rundschau*, XXIX (1918), pp. 1.121-1.146. Pero, sobre todo, y ya póstumo su artículo, "The Gospel of Freedom", en *The American Journal of Economics and Sociology*, vol. VII, nº 2 (1948), pp. 353-367.

PALABRAS CLAVE: República Universal, Solidaridad, Imperios, Naciones Unidas, Ética mundial cosmopolita, Benedicto XVI, Estado mundial, Relaciones internacionales, Enrique González Matas.

Hace años que Enrique González Matas inició la peregrina andadura de “construir” una utopía con sello propio. Ni era la primera ni será la última de las que en el mundo son, pero, para un especialista como es él, que ya tiene en su haber varios títulos sobre la temática, aparte la que fuera tesis doctoral años ha, su pretensión de dotarla con toque personal es digna de mérito, y solo hay que fijarse en el que llamaría subtítulo del ensayo para darse cuenta de ello: “Un ideal de siglos ya posible”. He aquí la médula del asunto.

La introducción del adverbio “ya” en la frase opera enfáticamente, de modo y manera que, tal vez contra todo pronóstico, elimina una de las singularidades que toda utopía ha tenido a lo largo de la historia. Porque, para que lo fuera, tenía que ser posible al final de la escalada, por lo general impidiéndole al pensador verla realizada en vida. Que nunca se diera el caso, como así ha sucedido en siglos, es otra cuestión pero que en el que nos ocupa no tiene validez, pues el “ya” –ahora, mañana, pasado mañana– descansa en elementos fiables, es decir comprobables, como detalladamente el autor nos ilustra página tras página, al punto de hacernos creer que nos espera a la vuelta de la esquina.

Porque las alteraciones estructurales acaecidas en, sobre todo, el último siglo, han dado la vuelta al planteamiento. Hoy se dispone de lo que nunca fue posible siquiera imaginar, un astro entendido como planeta unitario en casi todas sus funciones y posibilidades, en el que las distancias (de todo tipo) han desaparecido, lo cual, al revertir en simultaneidad, da a la Tierra condición de ente en la práctica irreversiblemente intercomunicado. Cualquier comunicación, acuerdo, cuestión o fenómeno, con independencia de sus factores intrínsecos, ha dejado de ser hecho aislado, lo que involucra y concierne a todos y en todas las esferas. Esta que se podría llamar «unificación de espacio y de tiempo» es “ya” vital. Ignorarla es, a juicio del autor, error craso.

Plantea Enrique González, tras detenido recorrido por las posibilidades reales de su proyecto, las que entiende cinco amenazas terribles de las que la Humanidad debe protegerse; sepan que son: la del cambio climático, la nuclear, la del dominio del espacio, la del desorden en la economía mundial y la de los derechos de las personas. Estas espadas pendientes sobre nuestras cabezas no pueden ser combatidas, a su juicio, más que con la creación efectiva de un organismo supranacional con poderes ejecutivos suficientes, que, tal vez ingenuamente, considera factibles de desempeñar por la existente ONU, aunque previamente reformada.

Como fácilmente se comprende, entiende el autor que dichos Estados Unidos deberán responder a la idea de República, concibiendo en su seno los necesarios mecanismos útiles para la real división de poderes, defensa contra supuestos ataques desestabilizadores y, en fin, dominio de todos los resortes democráticos disponibles para evitación de rupturas y aberraciones de cualquier signo. Es evidente que el autor no quiere dejar nada al azar y da sus recetas a propósito.

Invoca y se rodea de importantísimas voces, incluida la de Benedicto XVI cuando en su encíclica *Caritas in veritate* reclama «una verdadera Autoridad política mundial», cita también, y se apoya en ellos, testimonios de reconocidos pensadores y teólogos, en un intento de, al parecer, cimentar sus tesis con lo más granado del pensamiento actual, así como otros del pasado, remontándose hasta el pensamiento

griego clásico. Es, en resumen, un condensado ensayo que, si no fuera porque los hechos que cada día nos toca lidiar, hasta apostaríamos por verlo convertido en realidad, como ya he dicho, dentro de unos días.

Como es natural, no es lugar para contravenir aspectos o afirmaciones de este Estado Mundial maravilloso, por mucho que en su intención sea difícil, por no decir imposible, sustraerse a su atavío de sueño. Todos queremos, quisiéramos, que este minúsculo hogar en el universo fuera, en efecto, una isla consciente de su papel cósmico, donde todo brillase por su blancura, franqueza y felicidad; pero este querer tropieza indefectiblemente con, hoy por hoy, gravísimas dificultades. Enrique González las conoce, y aun así insiste. Es porque está imbuido de bonhomía –su pensamiento de hombre de bien le ha guiado siempre– y no se resigna a verse envuelto en un mundo donde la maldad prevalece en amplios sectores de la población, en unos casos por falta de voluntad de dirigentes malvados, en otros por la propia incuria de amplísimos sectores humanos, en otros por la perversa manipulación que de los intereses económicos hacen quienes controlan las máquinas del poder. Contra esta situación diabólica dirige el autor su proyecto, y no con ánimo destructivo sino, todo lo contrario, dándose a contribuir en el progreso ordenado y permanente de la que llama, sin ambages, ‘sociedad mundial’. Solo fuera esto y ya merecería el aplauso y la atención de los lectores, o sea los destinatarios de su mensaje.

Pero es que, además, es un libro que está bien escrito. No es dado el autor a florituras y devaneos, que con las palabras es fácil; sus libros, y no son pocos, se “entienden”. Va a las cosas no a los nombres de las cosas. Cuenta lo que ve y asimila con la mente, a veces con el corazón, de modo que no hay hueco para el cansancio y menos el aburrimiento. En esta breve reseña quería dejar esto claro.

Por último, he dejado para el final su referencia, para mí crucial, a la moral que debiera y debe presidir todo acto humano. Porque nos dice: «esa República Universal debe tener sus más firmes cimientos en una ética mundial cosmopolita sustentada en los valores fundamentales de la dignidad inviolable de las personas, en la igualdad, la libertad, la solidaridad y la paz como vínculos unitivos de los individuos y de los pueblos». Si alguien tenía alguna duda o recelo intelectual, puede y debe quedar, con estas sus claras palabras, suficientemente apaciguado. [Recibido el 11 de enero de 2011].

Enrique del Pino

Enrique González Matas y José Martín Pinto, *Malagueños en la Institución Libre de Enseñanza. Una revolución cultural sin precedentes*, Arguval, Málaga, 2010, 222 págs.

ABSTRACT: No han perdido el tiempo los autores José Martín y Pinto y Enrique González Matas y fruto de su colaboración y de su actividad investigadora nos presentan un trabajo centrado en la Institución Libre de Enseñanza fundada en 1876 por Gumersindo de Azcárate Menéndez-Morán, Francisco Giner de los Ríos y Nicolás Salmeron. Precisamente la conexión con Málaga de la Institución a través del propio Giner y, entre otros muchos, del diputado socialista, ministro, catedrático y embajador Fernando de los Ríos Urruti, cuestión que no ha sido muy tratada hasta ahora por la doctrina que se ha ocupado de la Institución, es lo que ha

permitido a González Matas y a Martín Pinto centrarse en la importancia de la labor desarrollada por un exquisito y selecto grupo de malagueños en el seno de dicho establecimiento privado dedicado de forma primigenia a la educación universitaria fundamentada en los postulados del pensamiento de Karl Christian Friedrich Krause, introducidos en España por Julián Sanz del Río.

**PALABRAS CLAVE:** Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos, Julián Sanz del Río, Alberto Giménez Fraud, José Moreno Villa, Emilio Prados Such, Domingo de Orueta Aguirre, José María Hinojosa Lasarte, Victoria Kent Siano, Fernando de los Ríos Urruti, Enrique González Matas, José Martín Pinto.

Fruto de una muy intensa actividad investigadora nos presentan en este volumen los autores un nuevo trabajo centrado en la más que conocida Institución Libre de Enseñanza (ILE) fundada en 1876 por Gumersindo de Azcárate Menéndez-Morán (1840-1917), el almeriense que fuera Presidente de la Iª República Nicolás Salmerón (1830-1908) y por el insigne rondeño Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), ambos tres juristas y pensadores. Precisamente esta conexión con Málaga desde sus orígenes, no tratada científicamente hasta el momento por la doctrina especializada, es la que hace a González Matas y a Martín Pinto centrarse en la importancia de la labor desarrollada por un exquisito grupo de malagueños en el seno de dicho establecimiento privado dedicado de forma primigenia a la educación universitaria.

Tras el completísimo prólogo del catedrático emérito de la Universidad de Málaga, Juan Fernando Ortega Muñoz y seguido de una breve introducción donde los autores destacan tipográficamente en negrita a personajes de la talla de Alberto Jiménez Fraud (1883-1964), José Moreno Villa (1887-1955), Emilio Prados Such (1899-1962), Domingo de Orueta y Aguirre (1833-1895), José María Hinojosa Lasarte (1904-1936), Victoria Kent Siano (1892-1987) y Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949), amén del ya mencionado Giner, los investigadores acometen el primer capítulo de los ocho en que se estructura el cuerpo del volumen con los fundamentos filosóficos de la Institución Libre de Enseñanza, basados en el pensamiento de Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) cuyos postulados fueron introducidos en España por Julián Sanz del Río (1814-1869).

Bastante acertado me parece el tratamiento que otorgan González Matas y Martín Pinto a la figura del fundador de la ILE oriundo de la ciudad del Tajo, Francisco Giner de los Ríos, de quien realizan una biografía en algunos aspectos bastante detallada lo que les sirve para adentrarse en la historia de su nacimiento encuadrándola perfectamente en su marco histórico-cronológico, mostrándose los A. muy acertados en la exposición de sus principios y métodos pedagógicos haciendo especial hincapié en «su defensa de la independencia total en el ejercicio de la labor educativa, ya que pretendía alejarse de todo espíritu partidista» (p. 77), en la importancia de la figura del maestro dentro del sistema educativo, en el papel de la familia como colaboradora de la labor educativa, o en la defensa de la neutralidad religiosa en la educación. Por tanto, Martín Pinto y González Matas inciden en la concepción pedagógica integral defendida desde sus comienzos por la ILE y puesta de manifiesto en su principal órgano de difusión, el *Boletín* (BILE) por cuyas páginas se deslizan escritos de figuras nacionales –Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), Miguel de Unamuno (1864-1936), Juan Ramón Jiménez (1881-1958), Antonio Machado Ruiz (1875-1939), Manuel Machado Ruiz (1874-1947), Benito Pérez Galdós (1843-1920), Eugeni d'Ors (1882-1954) o Emilia Pardo Bazán (1851-1921),

entre otros– e internacionales como Rabindranath Tagore (1861-1941), León Tolstói (1828-1910) o Herbert George Wells (1866-1946).

Tan importante fue la labor renovadora desarrollada por la ILE que su influencia lejos de restar circunscrita únicamente al ámbito cultural privado quedó plasmada también en el campo de lo público, promovida por el manifiesto espíritu abierto a las transformaciones en todos los ámbitos de una inquieta minoría intelectual y, sobre todo, por el acceso de los liberales al poder en 1881, lo que hizo que se emprendieran diversas reformas, surgiendo al calor de la ILE diferentes organismos entre los cuales los A. destacan el Museo Pedagógico de Instrucción Primaria (1882), el Instituto de Reformas Sociales (1902), la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (1907), el Centro de Estudios Históricos (1910), la Residencia de Estudiantes (1910), la Residencia de Señoritas (1915) o el Instituto-Escuela (1918).

Tras el fallecimiento de Giner acaecida en 1915, continúa su labor al frente de la ILE el que había sido su discípulo, Manuel Bartolomé Cossío (1887-1935) y se crea la Fundación Francisco Giner de los Ríos encargada de seguir los postulados del rondeño. Señalan los autores que Bartolomé Cossío fue una figura que trató de aunar esfuerzos siendo su labor como impulsor de nuevas técnicas pedagógicas reconocida por la gran mayoría de institucionistas con independencia de su tendencias políticas.

Martín Pinto y González Matas inciden, a lo largo del volumen que estamos comentando, en varias ocasiones en que la ILE supuso una renovación educativa, cultural y social sin color político alguno determinado ni impuesto desde los puestos de dirección, tratándose de un organismo plural integrado por personalidades de diversos sectores de la cultura de diferente signo político. Es más, ni a Giner de los Ríos ni a Cossío se le pudo atribuir entonces ni se le puede adjudicar ahora, con objetividad, afiliación política concreta de ningún signo determinado y si bien es cierto que muchos institucionistas fueron afines a la República, no es menos verdad que en ciertos aspectos de las decisiones políticas de este periodo relativas a la educación, manifestaron su desacuerdo, señalando los A. que Bartolomé Cossío manifestó su oposición a la norma que imponía la prohibición de enseñar a las instituciones dependientes de la Iglesia Católica, mientras que el socialista Fernando de los Ríos se opuso a la disolución de la Compañía de Jesús y a la supresión de la enseñanza del Derecho canónico en las Facultades de Derecho. Dicho esto creo justo reconocer que en gran parte el programa educativo de la IIª República era en buena parte acorde con los postulados básicos defendidos por la ILE, entre los cuales quizás quepa destacar en esta sede la defensa de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, la igualdad de sexos en la educación y la abolición de los libros oficiales de texto, entre otras cuestiones.

La contienda civil y la posterior instauración del régimen franquista abrieron un periodo convulso lleno de dificultades operativas dentro de la ILE, señalando González Matas y Martín Pinto que, al final del curso académico 1935-1936, se vio obligada a echar el cierre a sus instalaciones, siendo declarada ilegal y confiscados sus bienes por decreto de 17 de mayo de 1940, haciéndose eco los autores que la argumentación de dicha norma para tomar tan desafortunada decisión se fundamentaba en que era «parte de la masonería internacional y responsable de una cultura anticristiana y revolucionaria» (p. 92). Nada más lejos de la realidad. A partir de este momento, la ILE seguiría funcionando en el exilio especialmente en México. Habría que esperar hasta la aprobación del Real Decreto de 27 de enero de

1978, ya durante la transición a la democracia, para que le fueran reintegrados sus bienes y vuelto a reeditar su *Boletín*.

Tras el epílogo, el volumen cierra sus páginas como todo trabajo de investigación coherente y bien estructurado con un índice bibliográfico y otro onomástico de interés para cualquier avezado en la materia.

Mis felicitaciones más sinceras a los autores por este nuevo y bien presentado trabajo de investigación, que tiene el mérito de profundizar en cuestiones a veces espinosas, con una notoria elegancia siendo un libro de fácil y amena lectura que estoy segura es ya todo un muy meritorio éxito editorial. [Recibido el 7 de febrero de 2011].

María Encarnación Gómez Rojo

Gérard D. Guyon, *Chrétienté de l'Europe. Fondations juridiques*, con "Estudio preliminar" de J. Joblin, Ediciones Dominique Martin Morin, Bouère, 2010, 351 págs.

ABSTRACT: La presente recensión se centra en una obra de Gérard D. Guyon, profesor emérito de Universidad Montesquieu de Burdeos IV (Francia), uno de los intelectuales católicos más significados dentro del panorama historiográfico francés. El autor hace entrar al lector en el proceso de formación y evolución de las instituciones jurídicas y en los valores cristianos que llevan aparejados, de forma que le permita constatar la relevancia de la religión católica en el desarrollo de Europa y de sus instituciones. El tema central de la obra que nos ocupa aborda la tendencia actual de relegar la religión, e incluso la vida espiritual, a la esfera privada debido a un multiculturalismo, presentado como ineluctable, cuya coexistencia ha de asegurar el Estado y que, como considera Guyon, podría entrañar el riesgo de impedir cualquier manifestación externa de la fe.

PALABRAS CLAVE: Gérard D. Guyon, Cristianismo, Europa, Occidente, Instituciones públicas.

En el prefacio de *Chrétienté de l'Europe. Fondations juridiques*, titulado « La tradition au défi: identité occidentale et universalisme », J. Joblin, profesor emérito de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, comienza puntualizando que la crisis de la civilización occidental y sus dificultades para adaptarse al actual mundo multicultural han sido objeto de estudio por parte de numerosos autores pero que, sin embargo, la obra que nos ocupa aporta la originalidad de hacer entrar al lector en el proceso de formación y evolución de las instituciones jurídicas y en los valores cristianos que llevan aparejados de forma que le permita constatar la relevancia de la religión católica en el desarrollo de Europa y de sus instituciones (pág. 8).

La originalidad mostrada es fruto de una erudición sin parangón. Gérard Guyon, profesor emérito de Historia del Derecho, de las Instituciones y de los hechos económicos y sociales de la Universidad Montesquieu de Burdeos IV (Francia), es uno de los intelectuales católicos de más renombre en el campo de la Historiografía del país gallo. Gran experto en la materia, ha publicado más de trescientos trabajos entre libros, artículos, comunicaciones y recensiones de la disciplina en la que ha sido y es docente, aunque fundamentalmente se ha centrado en los Derechos de la

antigüedad, Derecho romano, Historia del derecho penal e Historia de las instituciones eclesiásticas.

El tema central de la obra que nos ocupa, como hemos especificado anteriormente, aborda la tendencia actual de relegar la religión, e incluso la vida espiritual, a la esfera privada debido a un multiculturalismo, presentado como ineluctable, cuya coexistencia ha de asegurar el Estado y que, como considera Guyon, podría entrañar el riesgo de impedir cualquier manifestación externa de la fe. Dicho fenómeno obedece a dos factores: por un lado, la convicción de la sociedad política moderna de que los pueblos europeos han de eliminar todo lo que pueda recordar a la presencia del cristianismo en la historia de Europa, en el derecho y en las instituciones, incluida la Constitución Europea; por otro lado, el rechazo global de la religión (p. 214).

El libro consta de 12 capítulos, un apartado final de conclusiones, un prefacio, un prólogo y un apartado de bibliografía, aparte de un índice alfabético y de un índice por materias. Dado que la organización de los capítulos es algo desigual y, a nuestro juicio, dificulta en cierta medida la comprensión del tema central, estimamos oportuno comentar la obra a través de las tres partes principales que la conforman: una primera en la que se analizan pormenorizadamente las raíces cristianas antiguas y medievales, una segunda sobre el derecho situado entre el dogma y la historia y, por último, una tercera sobre la originalidad jurídica y política del legado cristiano. La última parte es, sin ambages, la de mayor interés para el campo de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, tal y como demostraremos más adelante.

En la primera parte, basada en la historia de la religión cristiana en la Antigüedad y en la Edad Media, Guyon declara que los primeros siglos de la cristiandad han sido el momento clave de una aculturación-enculturación en la que la fe nueva y la sociedad imperial romana se vieron profundamente transformadas. En este punto, entran en juego los Padres de la Iglesia, los grandes autores cristianos, que fueron, a la vez, vectores y testigos de estos cambios (p. 45). De acuerdo con Gérard D. Guyon, sin ellos, ni el mensaje cristiano ni la tradición sobre la cual reposa no habrían llegado hasta nosotros. Sin ellos, Roma y su civilización no habrían entrado en el cristianismo impregnándolo de reglas que incluso en nuestros días siguen vigentes. Sin ellos, Europa no habría recibido el marco normativo e institucional del cual nuestro universo es heredero (p. 78). No obstante, el autor también reconoce la valía y la aportación de las órdenes religiosas, entre las cuales concede un tratamiento especial a la orden de San Benito gracias a su eficaz medida jurídica del tiempo cristiano (pág. 82).

Si la primera parte del libro relata los inicios del cristianismo en los territorios europeos, la segunda parte está consagrada a las mieles y las hieles de la unidad católica. Fruto de una alianza entre la herencia griega, el legado romano y el evangelio, nació una civilización magnífica que desempeñó el papel de lugar de referencia de la transmisión de un modelo de valores, entre los cuales despunta el ejercicio de poder respetando la Ley de Dios (p. 156). Sin embargo, la proclamada unidad de la "Respublica christiana" se pondrá a prueba con el cisma católico-protestante, el cual provocará una división profunda de Europa en un mundo en el que la universalidad de la fe infiere en la política y postula su unidad. La aparición de las dos "Romas", esto es, la Roma del Vaticano y la Ginebra de Calvino (1509-1564), también llamada "Nueva Roma", no sólo da lugar a una separación teológica y eclesiástica, fruto del enfrentamiento de la autoridad pontifical y de la crítica al legalismo romano, sino que también implica una transformación de los aspectos

clásicos de la teoría de la subordinación del poder político al poder religioso, de la sumisión de la “potestas” de los príncipes a la “auctoritas” de los papas (p. 164).

La tercera parte del libro, dedicada a la originalidad jurídica y política del legado cristiano, constituye, como ya remarcamos, el ámbito de mayor relevancia para nuestro campo de estudio pues se centra, entre otras cosas, en las aportaciones del derecho canónico a los sistemas jurídicos de nuestro continente.

Comienza Guyon por estudiar la influencia del Derecho canónico sobre los derechos seculares europeos y argumenta al respecto que si el Derecho canónico, considerado como el culmen del Derecho romano, se ha convertido en la única fuente de derecho, única “fons legis”, se justifica por ende la convicción de que se encuentra perfectamente adaptado a la construcción de una nueva civilización europea que emule la perfección de aquella que se construyó sobre el modelo jurídico de Roma (p. 231). En consecuencia, el autor defiende una cristianización del Derecho en Europa que tiene su influencia en el seno del Derecho privado, el Derecho penal, el Derecho constitucional, el Derecho internacional público y el Derecho electoral.

En lo que concierne al apartado de conclusiones, Guyon se centra en sintetizar el análisis del libro mediante el estudio de Europa y la confrontación histórica del catolicismo, la democracia y la libertad. En cuanto al binomio fe cristiana-democracia, el autor arguye que se basa en el principio de separación entre los deberes de Dios y los del Estado resumido en el adagio «Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo», si bien aclara que, a su parecer, el catolicismo no puede estar de acuerdo con la idea de una verdad totalmente libre sin tener en cuenta la fe (p. 305).

Continúa aclarando que el católico considera que la democracia tiene una debilidad intrínseca al haber hecho desaparecer toda adhesión formal y exterior a una religión y, por extensión, a un Dios; además, considera que relegar la religión a la esfera íntima de la conciencia individual y a la práctica cultural privada comporta un profundo desequilibrio. Para terminar declara Guyon que el Derecho, incluyendo el Derecho constitucional que emerge como norma última, ya no sirve más al bien común, sino que se ha reducido a un conjunto de técnicas procedimentales abstractas o investidas de una moral circunstancial y cambiante a merced de las mayorías sucesivas (p. 319).

Comenzamos esta recensión aludiendo al prefacio de la obra y, como colofón, volvemos al mismo para exponer la solución que, según Joblin, propone nuestro autor (p. 11): invitar a los actores sociales y políticos a tomar conciencia de que las nuevas reglas destinadas a promover el universalismo y el reconocimiento de todos los hombres, sea cual sea la tradición cultural con la que se definan, pueden y deben tomar en consideración la antropología jurídica de Occidente. [*Recibido el 18 de enero de 2011.*]

María Cristina Toledo Báez



Gérard D. Guyon, *Le choix du royaume. La conscience politique chrétienne de la cité (I<sup>er</sup>-IV<sup>e</sup> siècle)*, con Estudio preliminar de Roland Minnerath, Ediciones Ad Solem, Ginebra, 2008, 454 págs.

ABSTRACT: En el libro de Gérard D. Guyon, prologado por Roland Minnerath, el autor estudia los tres primeros siglos de existencia de la religión cristiana durante el Imperio romano (del año 30 al 330) con la particularidad de que aboga por la irreductibilidad de los vínculos entre la fe y la política y muestra de qué forma el cristianismo transformó el principio de legitimación del poder en la Antigua Roma. A pesar de que la organización del contenido resulta complicada, la línea argumental expuesta por Guyon es muy clara: la conciencia cristiana, basada en sus inicios en una “elección del Reino” celeste y espiritual que cuestionaba los valores de la sociedad pagana romana, aceptó con el paso de los años un reino terrenal.

PALABRAS CLAVE: Gérard D. Guyon, Religión cristiana, Imperio romano, Legitimación del poder, Fe y política.

El estudio de los tres primeros siglos de existencia de la religión cristiana durante el Imperio romano (del año 30 al 330) se centra en los aspectos histórico-políticos de la sociedad de la época y, de forma errónea, aísla la fe en Cristo de su contexto de poder y de religión (p. 14). Sin embargo, la obra que nos ocupa, *Le choix du royaume. La conscience politique chrétienne de la cité (I<sup>er</sup>-IV<sup>e</sup> siècle)*, aboga por la irreductibilidad de los vínculos entre la fe y la política y muestra de qué forma el cristianismo transformó el principio de legitimación del poder en la Antigua Roma.

Su autor, Gérard D. Guyon, profesor emérito de la Universidad Montesquieu de Burdeos IV (Francia), es un exponente del catolicismo intelectual en la Francia laica. Lleva años colaborando en España en diversas publicaciones periódicas, homenajes, etc.

El libro, prologado por Monseñor Roland Minnerath, arzobispo de Dijon y profesor emérito de la Universidad de Estrasburgo, se estructura en tres partes principales: una primera en la que se ponen en tela de juicio los valores del mundo romano; una segunda en la que se indaga en la búsqueda de la identidad política cristiana y, por último, una tercera en la que afirma y confirma la unidad jurídica de la Iglesia. Completan la obra una introducción, un apartado de conclusiones, una lista de abreviaturas, un apartado de bibliografía general, un índice de nombres de autores antiguos, Padres de la Iglesia, Emperadores y Papas y, como colofón, un índice temático. Hemos de señalar, no obstante, que, a nuestro juicio, la organización de la obra es bastante peculiar, ya que los 25 capítulos, de extensiones muy dispares, se encadenan sin que haya quedado definido el criterio de división.

No obstante, la línea argumental expuesta por Guyon es muy clara. La conciencia cristiana, basada en sus inicios en una «choix du royaume» o “elección del Reino” celeste y espiritual que cuestionaba los valores de la sociedad pagana romana, aceptó con el paso de los años un reino terrenal gracias, por un lado, al emperador Constantino (272-337), que reconoció el cristianismo como religión privilegiada, y, por otro, al emperador Teodosio (347-395), que posteriormente le concedió el estatus de religión oficial. Aunque, ¿cómo se produjo esta evolución de secta judía perseguida a ulterior religión de Estado? ¿Se vio obligado el cristianismo a renegar de sí mismo para estrechar lazos con el poder imperial? ¿O, por el contrario, fue el Imperio el que claudicó en beneficio de la religión de Cristo?

De acuerdo con Guyon, el recorrido del cristianismo obedece a una continuidad prolongada en el tiempo y toma como eje central un concepto clave para comprender la evolución de la religión de Cristo: el valor de la “*utilitas communis*” (p. 28), del bien común, el cual incluye no únicamente elementos religiosos (el culto, la liturgia, la organización interna, la disciplina, la representación de la comunidad, etc.), sino también aspectos públicos, políticos, sociales y culturales que están impregnados de la finalidad espiritual. Por mor de la “*utilitas communis*”, los cristianos, considerados como un “*tertium genus*” o tercer género, rechazan del Imperio su “*Respublica*” o preocupación por el interés público al contener un principio de legitimación basado en valores sociales y políticos que despiertan la hostilidad de los cristianos. Dicha hostilidad se traduce en la oposición a la subordinación de la “*utilitas reipublicae*” y a sus valores más señeros: el paganismo, el evergetismo, el clientelismo, la inmortalidad del Imperio o “*Roma aeterna*”, la obediencia al poder legítimo, la guerra, el servicio militar, entre otros.

De este modo, dos actitudes generales dominan los tres primeros siglos del cristianismo en lo que concierne a la vida pública. En la primera actitud se acepta el estatus jurídico del universo romano so pena de la siguiente condición: «*Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo*». Nótese que esta sentencia aparece en la portada del libro, lo cual refrenda su relevancia en la obra. Esta afirmación supone una ruptura total con la tradición, la historia y las mentalidades romanas donde lo político y lo religioso coexisten como elementos necesarios para la “*civitas*”. Para los cristianos, los poderes políticos deben rendir cuentas a Dios, lo cual implica la aparición de nuevas relaciones entre la política y la ética en una *politeia* en la que Dios precede al poder (p. 89). La segunda actitud se basa en un sentimiento dualista que separa radicalmente el pueblo de Dios y el mundo, de ahí que surja una conciencia común de cristiandad cuyas bases escatológicas son el advenimiento del Mesías, la eliminación del Anticristo y el Juicio Final.

No hemos de obviar, sin embargo, que ciertas circunstancias históricas favorecieron la expansión del cristianismo. Nos referimos a la crisis del Imperio, que, en la segunda mitad del siglo III, beneficia a la Iglesia dado que su mensaje de salvación y su visión del Reino son mejor recibidos en la adversidad que en la prosperidad (p. 275). Además, la necesidad de restaurar la unidad moral del Imperio llevada a cabo por Diocleciano (244-311) y luego por Constantino sobre bases cristianas refuerza la visión cosmopolita del cristianismo. Consideramos oportuno remarcar que, si bien el giro constantiniano aportó armonía jurídica y política a la cristiandad, al mismo tiempo llevó aparejadas dos perspectivas que, según Guyon, cabría tildar de errores (p. 391). De una parte, el “error cultural”, mediante el cual se concibe el cristianismo como el crisol de todos los valores heredados de civilizaciones anteriores, de forma que constituiría una construcción moral superior y síntesis de filosofías y cultos antiguos. De otra parte, el “error del constantinismo”, el cual defiende que la nueva teoría del poder cristiano no sería más que el resultado de la construcción jurídica y política de un pacto que uniese la fe al poder. Esta última visión ignora los beneficios que aportaría la aceptación del Estado para el consecuente beneplácito de la nueva cosmópolis cristiana.

A juicio de Guyon, el comportamiento modelo para los primeros cristianos con respecto a Roma consiste en mantener las distancias, pero, al mismo tiempo, seguir en contacto con el medio religioso, político, social y jurídico que les rodea. Tal y como se especifica en la *Carta a Diogneto*, los cristianos son para el Imperio «lo que el alma para el cuerpo. El alma está encerrada en el cuerpo, pero lo sostiene: también los cristianos sostienen el mundo» (capítulos V y VI). La Iglesia cristiana, ni

amedrantada por el Imperio ni confundida con él, se presenta como distinta al mundo terrenal, pero consagrada a transformarlo. De este modo, a pesar de que pasen siglos y se den en circunstancias históricas diferentes, el objetivo sigue siendo el mismo y sólo ha cambiado el medio. Independientemente de que el poder político lo persiga o lo mime, el cristianismo ha de ser fiel a su vocación de testimonio y lograr hacer llegar a la *pólis* una *politeia* de un cariz distinto: el Reino de los cielos. [Recibido el 26 de noviembre de 2010.]

María Cristina Toledo Báez

Gábor Hamza, *Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition*, Eötvös Universitätsverlag, Budapest, 2009, 826 págs.

ABSTRACT: Comentario a un libro de Gábor Hamza, catedrático de Derecho romano y de Derecho constitucional en Budapest, dentro de la línea general de investigación de este autor, políglota donde los hubiera, de tratar de presentar unos orígenes comunes romanísticos en la tradición del Derecho privado y del Derecho público europeo.

PALABRAS CLAVE: Derecho europeo, Hungría, Derecho romano, Libros de Derecho, Fritz Pringsheim, Max Kaser, Gábor Hamza, András Földi, Reinhard Zimmermann, Lajos Vékás, Pierre Legrand.

Gábor Hamza's recently published book<sup>1</sup> is an imposing crowning of several ten years' standing research work which was done in the field uncovering Roman law foundations and introducing the developments of modern private law systems by the Author. The results could be already seen in the adequate chapters of the handbook of Roman law<sup>2</sup> – written together with András Földi and used also as textbook which has republished in 15 editions since 1996 – and even more expressly in Hungarian<sup>3</sup> and German<sup>4</sup> language published monographs written in the topic of the present work.

The present monograph fascinates the Reader in measures. The Author's attention covers all states of Europe, the Caucasian countries, the states of Latin America, the Republic of South Africa, Japan, China and a few eastern Asian countries too.

The book is structurally divided into four parts. The first part deals with beginning of the development of the European private law, namely the events after the breakup

<sup>1</sup> Eötvös Universitätsverlag, Budapest, 2009, 826 p.

<sup>2</sup> András Földi–Gábor Hamza, *A római jog története és intézményei* (History and Institutes of Roman Law), Budapest, 15<sup>th</sup> revised and enlarged edition, 2010, 715 p.

<sup>3</sup> Gábor Hamza, *Az európai magánjog fejlődése (A modern magánjogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján)* (Trends in the Development of Private Law in Europe. The Role of the Civilian Tradition in the Shaping of Modern Systems of Private Law), Budapest, 2002, 362 p. (Published in 2002 in German and in 2005 in French language too.)

<sup>4</sup> Gábor Hamza, *Wege der Entwicklung des Privatrechts in Europa (Römischrechtliche Grundlagen der Privatrechtsentwicklung in den deutschsprachigen Ländern und ihre Ausstrahlung auf Mittel- und Osteuropa)*, Passau, 2007, 264 p.

i.e. demise of the Western Roman Empire and the Justinian's compilation (codification). The second and third part summarize the medieval and modern conformation of the European private law and the fourth part introduces the influence of European private law traditions on the development of private law of the states outside Europe.

The Author leans on out-sized legal literature material. Albeit his resources provide an opportunity to introduce the 'law in books' and the displaying of the 'law in action' is inevitably overshadowed, the book sums up a uniquely enriched, encyclopaedic material in clear structure and pleasurable style; a not evading starting handbook for the researchers and inquirers of the private law's historical development. The Author's admitted goal is to give historical mainstay to comparing and approaching of private law of different legal systems and especially: in relation to the unification of private law (both civil and commercial) in Europe. This literary goal is formulated unequivocally in that introductory chapter which surveys the harmonisation-process of private law in Europe – in conjunction with several other scientist of distinction – on Roman law traditions squarely.

Every chapter is prefaced with a detailed and particular list of references so, the inquirer gets the handholds of legal literature for thinking onward. At the end of the work the Author summarizes the comparative and historical legal literature in 40 pages.

During the reading of the data-enriched book the unique building of the Roman private law, the cathedral of the private law takes hold of the Reader over again: with its dogmatic refinement, logical elaboration and long centuries preceding amazing development. Researches of ancient private law history have already attempted for a while to reveal the premises of the Roman private law at other ancient laws. These searching have had the results that neither the Mesopotamian or the Egyptian Empires nor the ancient Jewish states<sup>5</sup> and the Greek city-states<sup>6</sup> constituted such a private law which measureable the same as to the Romans' in its development.

The ancient Rome thus means a unique summit in the development of private law. Adapting the composition of the great German writer we can say that on the road to the private law's region of sources the Roman private law is not a «Scheinhalte ... lehmigen Dünenkulisse, die er erstrebte, neue Weiten zu neuen Vorgebirgen vorwärtslocken»<sup>7</sup> but the hitherto enlighten initial station of the two and half thousand year story<sup>8</sup>.

The question arises in the Reader once again studying Gábor Hamza's encyclopaedic book why did the common law's connection with Roman law shape so peculiar, why did common law resist the temptation of Roman law twice and –

<sup>5</sup> Cf. Max Weber, *Rechtssoziologie*, Neuwied am Rhein/Berlin, 1960, 235 p.

<sup>6</sup> In relation to ancient Greek private law and to its influence on Roman law see: Ludwig Mitteis, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, I, 1908, 12 sqq.; Fritz Pringsheim, *The Greek Law of Sale*, Weimar, 1950; idem, *Ausbreitung und Einfluss des griechischen Rechts*, Heidelberg, 1952; Max Kaser, *Das römische Privatrecht*, I, München, 1955, 160 sq.; Hans J. Wolff, „Die Grundlagen des griechischen Vertragsrechts“, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung, Rom. Abt.*, 74 (1957). Cf. Arnold J. Toynbee, *Válogatott tanulmányok* (Selected Essays), Budapest, 1971, 165 sqq. In relation to the connection regarding the beginnings of ancient Greek literary tradition to legislation see: Ritoók Zsigmond, „A Peisistratos-hagyomány és a homérosi szövegek kanonizációja” (The tradition of Peisistratus and Canonization of the Texts of Homer), in: idem: *Vágy, költészet, megismerés* (*Válogatott tanulmányok*) (Desire, Poetry, Connaissance) (Selected Essays), Budapest, 2009, 76 sqq.

<sup>7</sup> Thomas Mann, *József és testvérei, Előjáték* (Joseph & his Brothers, Foreplay), Budapest, 1975, 7 p.

<sup>8</sup> Cf. Reinhard Zimmermann, *The Law of Obligations – Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Cape Town/München 1993.

opposite to the legal systems of the European continent and created their pattern – why did not receive it.

The fact is beyond question that the common law has not received Roman law yet in that measure as those continental legal systems (e.g. Hungarian private law) which one's case we could not speak about reception. This resistance against Roman law more conspicuous inasmuch as Roman law was considered as a compass, a pattern to the systematization of common law at universities in the 12<sup>th</sup>-13<sup>th</sup> centuries. This was proved unambiguously by the works of Glanvill (12<sup>th</sup> century) and Bracton (13<sup>th</sup> century). The mentioned statesmen and at the same time legal professors (as in the 11<sup>th</sup> century Lanfrancus and Vacarius) raised on Roman law and their activity/work based on Roman law. By the help of this they wanted to constitute a system from the incoherent legal thesis/doctrine of the ancient Anglo-Saxon law<sup>9</sup>. (This fact especially notable as Roman law itself is not famous for its system either.) Moreover Glanvill and Bracton took a lot from the conceptual system of Roman law. Glanvill used at contractual law the notions e.g.: *mutuum*, *depositum*, *commodatum*, *emptio venditio*, *locatio conductio* but the doctrine attached to them did not stem from Roman law but from the ancient Anglo-Saxon law. We can take similar establishment (perhaps in even more increased measures) in connect with Bracton.

The reception of Roman law to him did not mean the borrowing of the rules but the expressions. In the aforementioned 'assault' of Roman law the British economy and society were not suited for deeper adaptation of Roman law. Contrary to the city-states of North-Italic in Britain then was not considerable (industry and) commerce which demanded developed legal instruments. For the English conditions of the 12<sup>th</sup>-13<sup>th</sup> centuries the ancient primitive law, which rooted in personal actions, was suited perfectly and at the most some systems could be borrowed from Roman law which served didactical purposes. As Holdsworth writes: «In England Roman theories of contract never took root. Bracton's book shows us that they did not fit English facts»<sup>10</sup>. At the end of the 13<sup>th</sup> century the influence of Roman law was ended practically; Roman law – even more than the two previous centuries – was forced back exclusively within the confines of university education.

In the 16<sup>th</sup> century in the reign of Henry the VIII common law got in touch with Roman law secondly when professors<sup>11</sup>, appointed by the king (*regius professor*), worked at universities of Oxford and Cambridge, beside teaching Roman law at the same time they flourished/were up and doing as personage state clerks or judges at High Court of Justice. This temptation was much the most forcible than the first, 300 years earlier: «If ever common law was in serious danger»<sup>12</sup>. According to new researches, however, the danger of the reception of Roman law was not threatened. Herein the British order of law had an important role which elemental interests attached that the self-constituted and developed 'own law' did not fall under foreign influence. The conspicuously influential, privileges heeded British lawyers described by Chaucer in the 14<sup>th</sup> century as follows: Justice he was full often in assize; By patent and by plain commission; For his science and for his high renown; Of fees and robes had he many a one<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> See Gábor Hamza, here mentioned work, 148-152 p.

<sup>10</sup> William S. Holdsworth, *A History of English Law*, III, London, 1936, 412 p.

<sup>11</sup> See Gábor Hamza, here mentioned work, 406.p.

<sup>12</sup> Holdsworth, op. cit., IV, 254. p., 283 p.

<sup>13</sup> Chaucer Canterbury Tales, verses: 315-317

Additionally the 14<sup>th</sup>-16<sup>th</sup> centuries meant the most flourishing period of the development of common law. In this time the British contractual law strengthened and was able to be in accordance with the requirements of the inchoate capitalist economy. The common law became a peculiar, autonomous system – due to the legal development of the order of law. At the turn of the 16<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> century England did not need Roman law; its extended economic demands were satisfied by the common law established in the meantime<sup>14</sup>. One of the striking examples for this developing advantage is that common law adopted the doctrine of consideration. This meant that irrespective of formal requirements and contractual type every contract – precisely: every breach of contract – was provided with judicial sanction long before continental private legal systems adopted this<sup>15</sup>. Roman law – due to the strengthening of common law – definitively remained outside the walls of private law of England.

It is beyond doubt that this isolation of common law means one of the hardest difficulties to get over. Legal unification of private law both within the European Union and European countries (still) outside the European Union has to overcome<sup>16</sup> this still existing obstacle.

A brief review is not able to evaluate properly Gabor Hamza's remarkable handbook's values. The present review tried to underscore the utmost importance of the work which serves undoubtedly as an inspiration for further research in comparing the private law of countries in Europe and outside Europe. [*Recibido el 24 de octubre de 2010*].

Lajos Vékás

Hermann Heller, *Las ideas políticas contemporáneas*, traducción a cargo de Manuel Martínez Pedroso, Granata, Edizioni Comares, 2005, pp. XXXVII+153.

ABSTRACT: El jurista Hermann Heller (1891-1933) aparece como una figura clave dentro de la Teoría del Estado y el Derecho Político durante un periodo convulso en la Europa de su época. Con la llegada del nazismo al poder Heller se exilió en España donde, todavía relativamente joven, fallecería en Madrid, ciudad a la que vino bajo la protección del entonces Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes el socialista humanista Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949), quien, tras su cese en la cartera de Educación, el 12 de junio de 1933 pasaría a ocupar la de Estado hasta el 12 de septiembre de 1933. Heller fue catedrático en las Universidades de Kiel, Leipzig y Berlín. Pertenecía al Partido Socialdemócrata alemán. La influencia de Heller en España ha sido considerable. Enrique Gómez Arboleya (1910-1959) le dedicó su tesis doctoral titulada *Rasgos fundamentales del pensamiento de Hermann Heller*, que fue defendida en la Universidad de Madrid en 1935. Dos años antes Nicolás Pérez Serrano (1890-1961) había traducido un libro de Heller de *Ciencia política*. En 1955, 1965, 1985, 1996 aparecieron otras traducciones y ediciones de Heller en lengua castellana hasta que José Luis Monereo Pérez

<sup>14</sup> Cf. Lajos Vékás, *A szerződési rendszer fejlődési csomópontjai* (Crucial Stages of Development of the Contractual System) Budapest, 1977, 39-43 p.

<sup>15</sup> *Ibidem*, 53-55 p.: *Slade's case*, 4 Co. Rep. 91a, 92b, cited by Holdsworth, op. cit., III. 444. p.

<sup>16</sup> See Pierre Legrand, "European Legal Systems Are not Converging", *International Comparative Law Quarterly Review*, 45 (1996) 52 p.

comenzó a reeditar varios de sus libros que ya estaban vertidos al castellano en 2005 y 2006 y publicó luego un estudio más amplio sobre el autor. Heller también dedicó un libro al fascismo, publicado en 1929. Lo que no tuvo apenas tiempo Heller fue de rubricar páginas definitivas de condena del Nacionalsocialismo. En cualquier caso hay una obra capital sobre el pensamiento de Heller, con diversas colaboraciones, que lleva por título «Der Soziale Rechtsstaat Gedachtnisschrift für Hermann Heller 1891-1933», Baden-Baden, 1984, 759 pp. La crítica al modelo de Estado fascista la vislumbraba Heller en el control por parte el Estado del sistema corporativo sindical, la carencia de valores y el que fascismo y catolicismo no puedan tener conciliación alguna.

PALABRAS CLAVE: Hermann Heller, José Luis Monereo Pérez, Manuel Martínez Pedroso, Enrique Gómez Arboleya, Fernando de los Ríos Urruti, Nicolás Pérez Serrano, Miguel Ángel del Arco.

Questo libro costituisce una nuova e lodevole iniziativa portata avanti da José Luis Monereo Pérez e dal celebre editore spagnolo di Granata, Miguel Ángel del Arco, promotore di una nota collana di classici del pensiero politico e giuridico. Questa volta il Del Arco è stato bravissimo. La traduzione dal tedesco allo spagnolo della prima edizione del libro di Heller, allegata a questo volume senza modifica, è stata a cura di colui che è stato Ordinario di diritto pubblico spagnolo e comparato presso l'Università di Siviglia, Manuel Martínez Pedroso, che d'abitudine prescindeva dal suo primo cognome ed era conosciuto come il professore Pedroso. Era spagnolo, ma nato a La Habana il 3 febbraio 1883 prima dell'indipendenza dell'isola di Cuba, ha studiato a Berlino ed a Madrid e si è iscritto alla massoneria ed al Partito Socialista spagnolo (PSOE), e ricopre la carica di deputato nella Seconda Repubblica. Nel 1939, dopo un breve soggiorno a Varsavia, è andato in esilio in Messico dove ha svolto attività d'insegnamento presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Nazionale Autonoma di Messico. Pedroso ha acquistato grande popolarità per le sue traduzioni dei classici del pensiero politico e della sociologia, e per avventurarsi a mettere in spagnolo *Il Capitale* di Carlo Marx, versione fatta direttamente dal tedesco e che è stata oggetto di numerose critiche. Invece, con la traduzione di Heller, ci azzardiamo ad affermare che, dato che si tratta di una materia più conosciuta dal Pedroso, è stata più azzeccata.

Il libro è introdotto da una documentata prefazione scritta da Monereo con l'argomento Hermann Heller e la costituzione politica della società. In una trentina di pagine Monereo presenta la figura ed il pensiero di Heller (1891-1933), è nato in Austria, è stato membro della SPD e ordinario a Kiel, Lipsia e Berlino e, esiliato in Spagna, è morto a Madrid il 5 novembre 1933 a causa di un colpo di cuore. Si trovava a Madrid invitato dal Ministro della Pubblica Istruzione Fernando de los Ríos Urruti (1879-1949) per svolgere insegnamenti come professore straordinario presso l'Università di Madrid. L'influenza di Heller durante il suo breve soggiorno a Spagna è stata grande su Enrique Gómez Arboleya (1910-1959), Francisco Javier Conde García (1908-1974), Antonio de Luna García (1901-1967), Salvador de Lissarrague Novoa (1910-1967) e Nicolás Pérez Serrano (1890-1967). Una delle costanti del pensiero di Heller è la sua opposizione al positivismo giuridico di Hans Kelsen e la sua difesa di una concezione dello Stato con delle premesse sociologiche che considerano lo Stato alla pari del giovane Marx come "la società in azione".

Tuttavia Heller si allontana dalla nozione di sovranità di Carl Schmitt. Heller appoggiava la Repubblica di Weimar, ma nel 1933 questo modello aveva fallito e lui

è stato espulso dall'Università per difenderlo come conseguenza della legge per la Riforma dell'Amministrazione Pubblica del 7 aprile 1933.

Il libro è un percorso corto, ma allo stesso tempo denso, attraverso il pensiero politico da Nicola Cusano, Herbert de Cherbury, Copernico, Thomasius, Bonald, De Maistre, Stahl, Fichte, Welcker, Rotteck e Hardenberg alle idee liberali del XIX secolo in Francia e in Germania, passando per i nazionalismi e concludendo con le idee politiche della Democrazia sociale nel suo confronto con la Democrazia liberale che ha raggiunto soltanto –secondo Heller– la parità giuridica formale.

Heller conclude con una breve esposizione della concezione marxista dello Stato. Heller denuncia le indegne condizioni del lavoro in Austria, Germania ed Inghilterra alla fine XIX secolo e primi tre lustri del Novecento. L'orario di lavoro in Inghilterra era fino a 18 ore per i minorenni. In Slesia, «il matrimonio, l'educazione, il pudore e la moralità sono stati distrutti dalla promiscuità di lavoro di donne, bambini e uomini consentito nel sottosuolo delle mine e dove dovevano lavorare le donne a causa della loro situazione economica» (p. 137). Le famiglie a Vienna ed a Berlino abitavano ammassati in una sola stanza. Così si può spiegare che Hermann Heller abbia appreso la seguente notizia da un giornale: «Lipsia, 11 giugno 1900. Il comunicato d'oggi della polizia mostra un aspetto della grande città: un operaio è entrato come riaffittato nella famiglia d'un altro, è diventato l'amante della moglie e, inoltre, ha abusato di una bambina di 12 anni, la figlia del matrimonio. Nel scoprirsi questo fatto, la madre della ragazza, insieme al suo amante, si sono gettati nel Saale, a Weichau, presso Grossheringen. I due corpi sono stati trovati legati insieme nel fiume» (p. 137-138).

Per Heller, tuttavia, queste masse avevano una speranza nella fraternità socialista. La lotta parlamentare non bastava. Era necessario costruire una democrazia sociale e portare a termine una rivoluzione anticapitalista per via delle nazionalizzazioni oppure delle municipalizzazione degli strumenti di produzione. Ma per Heller il marxismo non era il paradigma. E nemmeno vedeva la soluzione nel fascismo: «il mito della nazione non basta per legittimare la dittatura personale di Mussolini, giacché anche se è ben provato che l'idea nazionale è più efficace, di fronte allo straniero, che l'idea universale d'uguaglianza, non serve nell'interno, come criterio antidemocratico, per ordinare le forze politiche, nemmeno come massima determinante per l'attività legislativa, giurisdizionale e legislativa... Le idee corporative che difendono i fascisti tedeschi o italiani sono o idee democratiche o idee confuse e utopiche... L'idea fascista dello Stato corporativo invoca, come elemento importantissimo, motivi di carattere nazionale, e i fascisti tedeschi aggiungono che appartengono ad una razza determinata. È molto difficile mettere in ordine questi fattori» (p. 68-69). In questo senso, Heller segnala che la crisi del sistema parlamentare non è altra che la propria crisi dei mezzi razionalisti della democrazia (p. 69). La democrazia si basa sul fatto che l'essere umano è una creatura razionale e che è diverso dalle bestie nella sua capacità di sottomettere i suoi istinti e passioni alla riflessione, che non postula la difesa della forza brutta di tipo fisico e che non cerca la panacea politica nell'alleanza fra il Trono e l'Altare.

Il panorama finale che presenta Heller era quello di un'Europa stanca e di un invecchiamento delle idee politiche che non sono in grado di superare le crisi sociali ed economiche che sono accadute nei diversi Stati del vecchio continente. In qualsiasi modo Heller ha voluto realizzare una chiara distinzione fra idee politiche e ideologie politiche dei partiti politici. Da un'altra parte, Heller ha promulgato, come diceva il Monereo, un diritto naturale laico di contenuto variabile influenzato dalla Storia e dai cambiamenti sociali.



Ci congratuliamo per la pubblicazione di quest'opera dalla casa editrice Comares dove sono state pubblicate anche libri di Bertrand de Jouvenel, Georges Ripert, Joaquín Costa Martínez, Georges Gurvitch, Roscoe Pound, Rudolf von Ihering, Hans Kelsen, Max Weber, Piero Calamandrei, Léon Duguit, Georges Gurvitch, Harold J. Laski, Otto Kirchheimer, Giovanni Tarello, Georg Simmel, Carl Schmitt, Guido de Ruggiero e Gumersindo de Azcárate. Il nostro augurio è che si continui con questa linea. [Recibido el 7 de febrero de 2011].

Manuel J. Peláez  
Miriam Seghiri

Claude Lévi-Strauss, *Lezioni giapponesi. Tre riflessioni su antropologia e modernità*, Introducción y traducción de Lorenzo Scillitani, "Prólogo" de Salvatore Abbruzzese, Rubbertino Editore, Catanzaro, 2010, 148 págs.

ABSTRACT: Excelente iniciativa la de Lorenzo Scillitani, de traducir unos trabajos de Claude Lévi-Strauss al italiano, de sumo interés para la Antropología, la Historia social, el Derecho comparado y la Francia de la separación del Estado y de las Iglesias, que está a punto –según Lévi-Strauss– de convertirse en musulmana.

PALABRAS CLAVE: Claude Lévi-Strauss, Emile Durkheim, Lorenzo Scillitani, Antropología, Stock genético, Evolucionismo.

Salvatore Abbruzzese señala que Claude Lévi-Strauss (1908-2009) tenía una deuda con la sociología de Emile Durkheim, influido a su vez en gran medida por la ciencia positiva de la segunda mitad del siglo XX, que consideraba la cultura como fundamental en las creencias y valores, a partir de los cuales cada sujeto haría una interpretación particular del universo cultural de la sociedad de la que era parte (p. 8). Con Durkheim la sociedad estaba considerada como autoridad moral, la sede en virtud de la cual cada sujeto habría elaborado sus principios y valores y en base a los cuales cada uno sería reconocido o rechazado del grupo al cual aspiraba a formar parte. En definitiva, a través del análisis de Durkheim la cultura no se presentaría sólo como una superestructura. En realidad, el análisis sociológico de Durkheim habría sido decisivo en lo relativo a su reflexión sobre los fenómenos religiosos. Por otro lado, la sociología positivista de Durkheim se enmarcaba en la perspectiva evolucionista ya trazada por Comte. Además, cuando Lévi-Strauss divulgó su pensamiento hacía ya cuatro décadas de la publicación del texto de Emile Durkheim sobre *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, y el panorama había cambiado.

Lorenzo Scillitani destaca que la relectura de las *Lezioni giapponesi* tiene aún hoy "extrema actualidad" (p. 26). En realidad, el autor de esta obra se adelantó a su tiempo. De hecho, ha tratado cuestiones de Bioética, planteadas desde el punto de vista de la Antropología. Lévi-Strauss ha sido un autor que ha hecho época, y ha creado escuela, en la historia del pensamiento occidental contemporáneo y está considerado como el padre de la antropología estructural. Lévi-Strauss ha señalado que «Francia está en proceso de hacerse musulmana» (p. 48). De hecho, Lévi-Strauss ha propuesto la apertura de las fronteras francesas a un amplio número de

inmigrantes musulmanes (p. 51), si bien tampoco ha olvidado las religiones como el budismo y el cristianismo.

En la primera lección (pp. 63-91), Lévi-Strauss ha ofrecido un análisis, haciendo numerosas referencias al modo de vida y a la cultura japonesas, sobre la ciencia y la técnica que, consideraba, había ampliado prodigiosamente nuestro conocimiento sobre el mundo físico y biológico. Todo ello sin menospreciar el progreso de la Medicina, que había hecho posible un incremento de la población mundial (p. 64). La primera ambición de la antropología, señalaba este autor, era conseguir la objetividad. A continuación concluye que la antropología se presentaba como una ciencia nueva, nacida de la curiosidad del hombre moderno (p. 82). Haciendo referencia a la época de Motoori, los japoneses tenían sólo conocimiento directo o indirecto de China o de Corea, pero con el Renacimiento el universo humano se circunscribió al ámbito del Mediterráneo. Con el humanismo burgués del siglo XIX, la antropología dio lugar a un humanismo propiamente universal. Claude Lévi-Strauss ha destacado que en la Francia del siglo XIX, el filósofo Auguste Comte formulaba una ley de la evolución humana que distinguía tres etapas por las que habría pasado la humanidad: una religiosa, una metafísica y, en tercer lugar, una positiva y científica (p. 87). Destacaba como probable que el hombre elaborase culturas diferentes en virtud de la distancia geográfica, de las características particulares y del ambiente en que se encontrase.

En la segunda lección (pp. 93-121), analizaba las relaciones de pertenencia o no al grupo. Ha destacado que la sociedad consideraba el parentesco como anterior y exterior a la relación biológica (como la filiación de sangre). Analizando esta cuestión hacía referencia a países como Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suecia, Brasil, Japón, Sudán, etc. Las nuevas técnicas de procreación asistida, como la fecundación *in vitro*, han sido posibles gracias al progreso de la biología y han supuesto notables cambios y transformaciones en el pensamiento contemporáneo. Incluso contemplaba la posibilidad de la inseminación *post mortem*, a pesar de que los tribunales franceses la prohibían. En cuanto a la actividad económica ha destacado el autor que la sociedad humana ha llevado a cabo comportamientos muy heterogéneos. En efecto, no ha existido un modelo único de actividad económica, sino más de uno. En realidad, la agricultura, en muchos aspectos, ha representado un progreso, en la medida en que ha posibilitado una expansión demográfica (p. 105). También analiza los problemas de la industrialización de los países subdesarrollados. Para el antropólogo, las religiones han constituido un amplio repertorio de representación que, bajo la forma de mitos y de ritos, se han combinado de muy diversas formas.

En la tercera lección (pp. 123-148) ha señalado que «según la teoría evolucionista, la desigualdad de la cultura no tendría un origen biológico, sino histórico» (p. 123). Durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se ha cuestionado la influencia de la raza en la cultura. Por otro lado, los antropólogos han sustituido la noción de “raza” por la de “stock genético” (pp. 125-126). Además, la evolución humana no se ha podido considerar un subproducto de la evolución biológica, sino como algo completamente distinto. El evolucionismo, que ha dominado el pensamiento occidental, ha constituido un intento directo de reducir la diversidad de la cultura (pp. 133-134). [Recibido el 25 de diciembre de 2010].

Guillermo Hierrezuelo Conde

Diemut Majer, *Frauen-Revolution-Recht. Die großen europäischen Revolutionen in Frankreich, Deutschland und Österreich 1789-1918 und die Rechtsstellung der Frauen, unter Einbezug von England, Russland, der USA und der Schweiz*, St. Gallen, Zürich, 2008, 479 págs.

ABSTRACT: Estudio de los procesos revolucionarios y de las mutaciones sociales llevadas a cabo en Francia, Alemania y Austria desde 1789 a 1918 y su repercusiones en otros países que también atravesaron por profundas revoluciones que alteraron enormemente su paisaje político y sus instituciones. Las revoluciones significativas fueron las 1789, 1848, 1871, 1917 y 1918-1919. No se hace eco el recensionador de las «petroleras» de la comuna de París de 1871, la mayor parte de las cuales eran prostitutas.

PALABRAS CLAVE: Revolución, Francia, Alemania, Imperio austro-húngaro, Inglaterra, Rusia, Suiza.

Diemut Majer legt das Ergebnis eingehender, lange und intensiv recherchierter Forschungsarbeit vor. Ihr gelingt es, dem Leser einen Überblick über die bisher nur unzureichend untersuchte Verknüpfung zwischen Ereignisgeschichte (Revolutionen, Frauen) sowie der Rechtsstellung der Frauen und die Entwicklung der Rechtsordnung seit dem Ende des 18. Jahrhunderts bis in unsere Gegenwart zu geben. Bei dem Buch handelt es sich nicht um eine klassische Revolutionsgeschichte der Frauen, ebenso wenig um eine sehr allgemein gehaltene Rechtsgeschichte über Frauen oder gar um den waghalsigen Versuch, die Geschichte der Emanzipation aufzuschreiben.

Nein: Bei der Beschreibung der Interferenzen der Themenfelder von Recht und Frauen konzentriert sich das Buch auf zentrale und messbare Ereignisse der Geistes- sowie der Rechts- und Verfassungsgeschichte, nämlich die verschiedenen Umstürze der europäischen Gesellschaftsordnung, wie die französische Revolution von 1789, die Revolutionen von 1848 in Frankreich, Deutschland und Österreich sowie die deutsche Revolution von 1918/19. Geschickt gewählt ist ferner der Einbezug der Länder Schweiz, USA, die keine Revolutionen im eigentlichen Sinne aufweisen, deren Rechtsentwicklung indes stark von den revolutionären Geschehen in Frankreich und in Deutschland beeinflusst wurden. Da auch die Oktoberrevolution von 1917 in Russland betrachtet wird, kann die Autorin sogar gesamteuropäische Schlüsse ziehen.

Majer unterscheidet bei den Revolutionen zwei Spektren; das „linke“ Spektrum der Revolutionen, das von Kleinbürgern und Arbeitern getragen wurde und sozial orientiert war. Da dieses Spektrum die Situation der Arbeiter und sozial Schwachen durch Neuordnung der Eigentums-, Arbeits- und Lohnverhältnisse anstrebte, fanden dort auch die Frauen der Unterschichten deshalb eine Heimat, weil sie es in erster Linie waren, die ihre Familien aus sozialer Not und Missständen herausführen wollten. Nicht verwunderlich ist es daher, dass die Beteiligung und die Bedeutung der Frauen auf dem „linken“ Flügel der Revolutionen relativ groß hervortrat. Wie das Beispiel der Pariser Kommune („commune de Paris“) zeigte, ging es auch um mehr politische Mitbestimmung der unteren Volksschichten. An dieser politischen Ausrichtung, d.h. insbesondere der Aufhebung des Ständestaats, orientierte sich das bürgerliche Spektrum, welches bürgerliche Freiheits- und Gleichheitsrechte forderte. Da es die bestehende Sozialordnung ansonsten aufrecht erhalten wollte, konnten dort politisch engagierte Frauen keine oder nur sehr eingeschränkt ihre politische

Heimat finden. 1793 unterstützte der „Club der revolutionären Republikanerinnen“ die Ziele der französischen Revolution. In der deutschen Revolution von 1848/49 engagierten sich die Frauen vor allem sozial und karitativ, was den bürgerlichen Revolutionären offenbar zunächst willkommen war. Nachdem die Revolution gescheitert war, kam es 1850 zum Verbot politischer Vereine „für Frauen, Minderjährige und Lehrlinge“ bis zum Inkrafttreten des Reichsvereinsgesetzes von 1908. Die Autorin kommt zur These, dass, soweit die politische Mitbestimmung betroffen war, die Rechte der Frauen nie isoliert, sondern lediglich in Zusammenhang mit großen historischen Ereignissen, d. h. Revolutionen, Kriege, Neuordnung, verbessert werden konnten. Weder der Glaube der Aufklärung an Vernunft, Gerechtigkeit und die Forderung nach allgemeiner Gleichheit, auch nicht die Erwerbstätigkeit der Frau als solche, sondern erst ihr Einsatz im Krieg hatte dies bewirkt, als sie in der Wirtschaft die im Kriegsdienst abwesenden Männer ersetzen und damit die Existenz der Gemeinschaft sichern mussten. Bemerkenswert ist, dass Länder, die sozialen Umbrüchen nicht oder nicht in diesem Ausmaß unterlagen, das Frauenwahlrecht viel früher einführten, wie z. B. Neuseeland im Jahre 1896. Finnland führte im Jahre 1907 das allgemeine Wahlrecht für Frauen und Männer ein.

Andere Rechtsbereiche, wie das Ehe- und Familienrecht, wurden zugunsten der Frauen nur verbessert, soweit die Verbesserung mit anderen Motiven gekoppelt war, d. h. wenn diese Verbesserung auch dem Patriarchat Vorteile brachte. Beispiel gebend sind die Einführung der Scheidung im Übergangsrecht nach der Revolution von 1789 in Frankreich bzw. die Durchsetzung der Postulate der Aufklärung von der politischen Macht (d. h. dem aufgeklärten Absolutismus) von oben gegen den Widerstand der restaurativen Kräfte (Adel und Kirche).

Majer macht für den Misserfolg der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert hauptsächlich die Spaltung der Bewegung in zahlreiche Gruppierungen verantwortlich, insbesondere die sozialistische und die bürgerliche Richtung, wobei letztere in etliche Gruppen zerfiel, wie karitative, bildungs- und sozialorientierte Vereinigungen. Die Mehrheit der im Bund deutscher Frauenvereine (BdF) zusammengeschlossenen Verbände standen politischen Aktivitäten und Rechten, insbesondere dem Stimmrecht bei Wahlen skeptisch gegenüber bzw. wehrten sich aktiv dagegen. Diese These bedarf m.E. aber noch einiger Einzelstudien, ehe sie verallgemeinert werden kann.

Das Buch schließt mit dem Abdruck einschlägiger und die Thesen stützender Quellen, wie z.B. mit einem Bericht über den Zug der Marktweiber von Paris nach Versailles am 5. Oktober 1789, dem Aufruf des Zentralkomitees der Frauenunion für die Verteidigung von Paris vom 20. Mai 1871 an die Arbeiterinnen zur Gründung von Frauengewerkschaften oder schließlich mit einer Karte mit Daten über die Einführung des Wahlrechts für Männer und Frauen in den europäischen Ländern. Ein ausführliches Literaturverzeichnis sowie eine Auflistung wichtiger Personen, die in der Studie vorkommen, machen dieses Buch zu einem Werk, an dem zukünftige themenähnliche Studien anknüpfen werden. [*Recibido el 23 de octubre de 2010*].

Thomas Gergen

Martial Mathieu y Patricia Mathieu, *Histoire des institutions publiques de la France. Des origines franques à la Révolution*, Presses universitaires de Grenoble, Grenoble, 2008, 202 págs.

ABSTRACT: Comentario de un manual al uso de los estudiantes de la asignatura de Historia de las instituciones políticas francesas desde sus orígenes hasta la revolución de 1789. Sobre esa misma materia existen numerosos manuales en Francia que centran su atención en las instituciones políticas antes y después de la Revolución. Son obras claras, precisas, inteligentemente estudiadas para la comprensión de la realidad del Derecho público histórico galo. Y, por supuesto, no carentes de sex-appeal. Los anacronismos brunnerianos son infrecuentes en este tipo de manuales franceses, por estar contruidos de manera distinta a como se han escrito en España algunos cursos de Historia del Derecho.

PALABRAS CLAVE: Martial Mathieu, Patricia Mathieu, Historia del Estado, Francia.

La historia política del reino de Francia ha tenido como referencia principal las reminiscencias del Imperio romano. De hecho, en materia política, como en otras muchas materias, las instituciones del Imperio romano han sido objeto de admiración para los pueblos que le sucedieron, como los bárbaros. Efectivamente, en el Renacimiento se consideraron las instituciones romanas como una referencia ideal, el régimen providencial querido por Dios. En Roma el tránsito del régimen oligárquico de la Roma republicana a la monarquía absoluta del bajo Imperio supuso un cambio importante. En el primero de ellos, las instituciones de la República fueron asumidas por los patricios, y la ciudad estaba gobernada por un consejo aristocrático, el Senado, los magistrados y los comicios. La historia de la República estuvo marcada por la lucha entre la plebe y los patricios.

Tras los fracasos de Julio César y de Marco Antonio, el vencedor de las guerras civiles, Octavio, al que el Senado le confirió el título de Augusto, se presentó como el salvador de la República. De esta forma, concentró en sus manos, con la bendición del Senado, todas las prerrogativas. En efecto, Augusto y sus sucesores adoptaron el título de Príncipes, es decir, el "primero" de los ciudadanos, que ilustraba su voluntad de la continuidad republicana. En el Imperio los discípulos de Cristo difundieron por todo el territorio la palabra de Dios y los cristianos se agruparon en Iglesias locales, formando una Iglesia universal. Durante su reinado Constantino (306-337) dictó en el 313 d. C. el edicto de Milán, que prohibía la persecución de los cristianos. Más tarde, en el siglo IV se confirió a la Iglesia un lugar eminente en el Imperio. Ciertos autores cristianos consideraban al Emperador romano como un instrumento de la providencia divina, que permitía la difusión del mensaje evangélico y se presentaba como el intermediario hacia el reino de los cielos. Con los tiempos, el Imperio devino en una monarquía militar. De esta forma, el emperador sólo conservaba su legitimidad si salía victorioso. De hecho, los emperadores en esta época brillaban por sus cualidades de jefes militares.

Los reyes merovingios (481-751) fueron los primeros que intentaron imitar el modelo romano (pp. 27-28). La dinastía merovingia conoció su apogeo en el siglo VII, si bien en el período 613-751 comenzó el declive de la misma. Los carolingios reinaron en el período 751-987, no obstante a partir de la segunda mitad del siglo IX comenzó el declive del poder carolingio. En realidad, el reinado merovingio fue fruto de una síntesis más o menos armoniosa entre el modelo romano y la tradición germánica. Este modelo romano inspiró las relaciones entre los merovingios y la

Iglesia. La concepción de poder real y las modalidades de ejercicio de este poder marcaron esta doble influencia. La voluntad de prolongar el Imperio romano se reforzó con la conquista de las regiones fuertemente romanizadas del sudeste de Gales (p. 39). El pueblo merovingio encontró en las instituciones del Imperio romano el modelo de un poder absoluto, concentrado en manos de un monarca. De este modo, los merovingios restringieron notablemente las asambleas populares de origen germánico. La Iglesia conservó la organización establecida en el Imperio romano, basada en la autoridad de un obispo (*episcopus*). Asimismo, el territorio del reino estaría dividido en diócesis, agrupadas a su vez en provincias eclesiásticas.

Las instituciones carolingias supusieron en el siglo VII un renacimiento de la cultura romana (751-987). Aunque Carlomagno se presentaba como un nuevo Constantino, el Imperio que gobernaba era muy diferente al Imperio romano. Después de la muerte de Carlomagno (814), su hijo Luis I el Píadoso abandonó los títulos reales para no conservar el título imperial. En realidad, los carolingios tuvieron que adaptar la administración a las nuevas dimensiones del territorio que gobernaban (pp. 54-57).

La expresión Edad media representa el período intermedio que separa la antigüedad de los tiempos modernos. El desmembramiento del imperio carolingio fue el germen de la Francia medieval. El establecimiento de los señoríos se inspiró en el modelo político carolingio. La segunda mitad del siglo XI fue un período en el que el orden señorial fue restablecido por la Iglesia. En el siglo XIII, el rey de Francia era calificado de *princeps in regno suo*, y tenía la consideración de «emperador en su reino». Los primeros Capetos (987-1226), con el apogeo del poder señorial, establecieron los primeros territorios del reino; pero desde 1226 a 1515, el reinado conoció un crecimiento caótico, aunque decisivo. A los primeros Capetos le sucedieron desde Luis VI a Luis VIII.

Más tarde, en la época que comprendió desde el reinado de San Luis a Felipe, el Hermoso, se conocieron unos momentos de apogeo. Pero al final del reinado de este último monarca se inició un período de dificultad para el reinado, que abarcaba desde los últimos Capetos directos a Luis XII (1345-1515) (pp. 68-69). En el período comprendido entre 987 y 1226 se produjo la transición del orden señorial a la monarquía feudal (pp. 71-98). El orden señorial (987-1108) se caracterizó porque todo el territorio del reino se encontraba bajo el yugo del señor y la monarquía. En este poder señorial, la dimensión militar se consideraba fundamental. A cambio de la fidelidad de su vasallo, el señor se obligaba a protegerle, y en la práctica el señor confiaba tierra a sus vasallos.

Durante los Capetos, la monarquía conservó las características sagradas que adquirió durante la época carolingia. Pero la secularización de la Iglesia se acentuó con la instalación de los poderes señoriales. A finales del siglo XI, la Iglesia se reorganizó, bajo la autoridad del Papa. En el siglo XII se produjo una evolución decisiva, a consecuencia de los cambios económicos que precipitaron la desaparición del orden señorial. El rey tenía una dimensión religiosa que le distinguía de otros príncipes y de los señores. Los Capetos reforzaron su prestigio a través de leyendas y símbolos, referentes a objetos divinos.

Los tres últimos siglos de la Edad Media constituyeron una época crucial en la historia política de Francia: el nacimiento de la nación de Francia, en el sentido moderno del término. Los Capetos establecieron la idea de un poder real absoluto, estableciendo el modelo del poder imperial. En esta época la Corona se presentaba con el carácter de indisponible. En el siglo XIII, el órgano colegial de consejo (la *curia regis*) se escindió en dos formaciones: el consejo del reino (*curia in consilio*) y

el Parlamento (*curia in parlamento*) (p. 116). Los siglos XIV y XV estuvieron marcados por sucesivas crisis, que sacudieron las instituciones eclesiásticas.

Las instituciones modernas supusieron la superación del modelo romano en el período comprendido entre 1515-1789. Las guerras de religión crearon un contexto favorable para los que se oponían al régimen vigente del Estado democrático, que tuvo como máximo representante a Luis XIV. En los siglos XVI y XVII, el poder real se impuso bajo la forma de la monarquía absoluta. En el siglo XVI la asamblea de los Estados generales sometieron el poder real al control político. Desde el reinado de Francisco I hasta Luis XIV, el Estado monárquico conoció una época de caos, que se inició con las guerras de religión. Tras la salida de las crisis que se sucedieron tras los años 1560, el poder real impuso el modelo de la monarquía absoluta, que tuvo su auge con el reinado personal de Luis XIV.

Durante la asamblea de los Estados generales de 1614-1615, el tercer estado propuso la consagración del principio del Derecho divino del rey como ley fundamental. El apogeo de la monarquía absoluta, bajo el reinado personal de Luis XIV supuso la desaparición de todos los contrapoderes potenciales (p. 169). Por el contrario, los reinados de Luis XV y XVI representaron la crisis del Estado monárquico (1715-1789).

Martial Mathieu y Patricia Matheiu son docentes en la Facultad de Derecho de la Universidad Pierre-Mendès-France (Grenoble II). [*Recibido el 2 de febrero de 2011*].

Guillermo Hierrezuelo Conde

Bjarne Melkevik, *Tolérance et modernité juridique*, Les Presses de l'Université Laval, Québec, 2006, 147 págs.

ABSTRACT: Otro nuevo libro del catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Laval, el noruego Bjarne Melkevik, formado en París. No necesariamente se tiene que coincidir con la idea de tolerancia que nos presenta Melkevik, habida cuenta que tolerar es admitir el error, darle carta de naturaleza, y no son pocos los que son partidarios de que con lo que no es verdad cabe el diálogo, pero no darles la razón. Cuestión diferente es la tolerancia religiosa de la tolerancia política.

PALABRAS CLAVE: Bjarne Melkevik, Tolerancia, Multiculturalismo, Derechos humanos, Thomas Hobbes, John Locke, Pierre Bayle, Martin Niemöller.

La tolerancia hace referencia a la expresión de las opiniones, de las creencias y de las acciones relativas a la conciencia individual. Sin embargo, en las sociedades modernas democráticas y pluralistas a lo largo de los tiempos ha sufrido un proceso de ampliación del concepto y de las esferas y de la tolerancia, que han quedado patentes en determinadas actitudes como la disolución de la familia, la aparición del concubinato y otras conductas. En realidad, la intolerancia ha quedado reflejada en nuestra sociedad. La dificultad de estudiar la tolerancia desde el punto de vista de la Filosofía del Derecho estriba en las distintas acepciones de la misma. Por otro lado, con la modernidad (a partir del siglo XVI) aparecía el problema de la tolerancia tal y como lo entendemos hoy en día. Con la modernidad también se instauraron los regímenes absolutistas. Pero los primeros sistemas de pensamiento de la tolerancia,

como son los de Bayle, Hobbes, Spinoza y el mismo Locke, fueron anti-absolutistas (p. 17). Este último, que escribió sobre la tolerancia religiosa, alcanzó a comprender esta tolerancia como un paradigma también aplicable a la tolerancia política. De hecho, la preocupación principal del liberalismo era la de fundar instituciones justas, es decir, instituciones que no favorecieran a personas en detrimento de otras. El ideal de la neutralidad tendría como objetivo proteger las libertades individuales. Desde esta concepción, la tolerancia se presentaría como una lógica abstracta, normativamente universal y casi “científica” (p. 24).

El filósofo calvinista Pierre Bayle (1647-1706) fue el primero en ofrecer una concepción moderna de la tolerancia. La estrategia empleada por Bayle era la de insistir sobre el hecho que la conciencia se encontraba sometida a la jurisdicción del hombre y de Dios. En este sentido, elaboró su teoría de los privilegios de la conciencia, que se fundamentaba en que los derechos de la conciencia estaban directamente ligados al Dios mismo y, en consecuencia, todos los intereses de una sociedad civilizada debían ceder ante la jurisdicción divina. De estas afirmaciones, se deducían que las autoridades civiles y terrenales no tenían competencia propiamente dicha en materia de blasfemia y herejía. Pero la cuestión de la libertad de actuar según su propia conciencia estaba estrechamente relacionada con los privilegios de la conciencia. Sin embargo, el poder real fue, en parte, reconocido por Bayle en su carácter de absoluto. Pero para P. Bayle el Estado no podía ser neutral, en la medida en que debía aceptar voluntariamente una religión. Bayle prometía la tolerancia universal, es decir, la supremacía del principio universal de la tolerancia sobre todas las creencias no violentas y pacifistas. Pero esta posición de tolerancia entre cristianos, Pierre Bayle la trasladó también a las religiones monoteístas de los judíos y los musulmanes (que llamaba mahometanos, en el sentido no aceptado con frecuencia dentro del mundo islámico, de que la religión era de Mahoma, no de Allah). El teórico alemán Martin Niemöller (1892-1984) rompió en 1934 con la Iglesia del Reich, siendo arrestado en 1937 y encarcelado en el campo de concentración de Sachsenhausen. Años más tarde, en 1945, fue liberado.

En realidad, los Derechos humanos se han considerado como un compromiso por la tolerancia. De hecho, el multiculturalismo se ha presentado como un elemento de una cultura de tolerancia. Hay que tener muy presente en este ámbito la Declaración de los principios sobre la tolerancia de la UNESCO. La tolerancia se confirmaba para todo individuo como el derecho a decir “no”. El Derecho internacional de las minorías, tras la II Guerra Mundial, ha construido un modelo abstracto de los Derechos del hombre. De hecho, la nueva tendencia del Derecho internacional de las minorías pasaría por un doble tratamiento normativo a las minorías: la universalidad, por un lado, y por otro el reconocimiento de un privilegio a la identidad cultural (p. 77). Melkevik afirma que el Derecho de las minorías ha servido para justificar una de las guerras más sangrientas y más crueles de la historia de la humanidad. El art. 27 del Pacto internacional de los Derechos civiles y políticos de 1966 reconocía como novedad un Derecho de las minorías. También hay que tener muy presente la Convención 107, de 1957, relativa a las poblaciones aborígenes y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (pp. 82-83). Es evidente que una persona construía su identidad en un proceso evolutivo en el que existirían irremediablemente crisis y rupturas. Bjarne Melkevik nos recalca la idea de que el reconocimiento de la identidad y del privilegio de la identidad favorecía la negociación. B. Melkevik destaca que el privilegio de la identidad participaba en una profunda reestructuración de nuestra comprensión del Derecho internacional. La Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano de 1789 recogía de este



modo la estatalización, ideológica y política, de los Derechos humanos en detrimento de un posicionamiento adecuado del individuo. En este punto nos permitimos no coincidir con Melkevik.

Burke ha mantenido que los Derechos del hombre en la Declaración francesa eran moral y políticamente falsos, en la medida en que no hacían ninguna referencia a una concepción moral o política metafísicamente superior (p. 104). Por ello, distinguía entre los falsos Derechos humanos, aquellos promulgados por la Revolución francesa, de los verdaderos Derechos del hombre, que serían resultado del *common law*, o mejor, de la experiencia concreta y moral de las personas en el ejercicio de sus libertades concretas.

La crítica marxista a los Derechos humanos ha sido sutil y multidimensional. Marx siempre ha sostenido que la victoria de la noción de los Derechos del hombre tuvo lugar con la eliminación efectiva de la noción política representada en la sociedad civil. Esto se constató, según Marx, con la disolución de la sociedad feudal como sociedad política.

Bjarne Melkevik, Doctor en Derecho por la Universidad de París II y Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Laval, cuenta en su haber con una amplia bibliografía en Filosofía del Derecho, epistemología y metodología jurídicas. Entre sus obras más recientes destacan: *Horizons de la philosophie du droit* (1998 y 2004), *Réflexions sur la philosophie du droit* (2000) y *Considérations juridico-philosophiques* (2005). [Recibido el 31 de octubre de 2010].

Guillermo Hierrezuelo Conde

José Luis Monereo Pérez, *La democracia en crisis: Harold J. Laski*, Ediciones El Viejo Topo, Madrid, 2005, 135 págs.

ABSTRACT: Harold J. Laski es un intelectual de primera magnitud, que fue profesor de la London School of Economics and Political Science, un hombre de izquierdas, laborista, más tarde comunista, y de nuevo vuelto al redil del laborismo. José Luis Monereo Pérez ha publicado recientemente una de sus obras más significativas, *A Grammar of Politics* (1925), que apareció en 1932 en castellano traducida por Teodoro González García como *El Estado moderno. Sus instituciones políticas y económicas*. En 2002, Monereo recoge la traducción de González García, ahora bajo el título *La Gramática de la Política. El Estado moderno*. Monereo acompañó a su edición en Comares de un estudio preliminar documentadísimo bajo el título de «La filosofía política de Harold J. Laski». Ese mismo estudio preliminar ha aparecido ahora como un libro de Ediciones el Viejo Topo. Sería muy deseable que los estudiosos españoles de la Historia de las instituciones políticas, para enriquecerse conceptualmente, se leyeran *A Grammar of Politics*, particularmente lo que dice sobre los fines del Estado, la naturaleza del poder político, la soberanía, las formas del poder político, la organización de los ciudadanos, el Parlamento y el control de la Administración.

PALABRAS CLAVE: Harold J. Laski, Léon Duguit, Georges Gurvitch José Luis Monereo Pérez, Laborismo, Comunismo, Pensamiento político pluralista.

Queda publicada en las ediciones El Viejo Topo una obra sobre un autor clásico inglés de la filosofía política y social de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo pasado, que no es otro que Harold Laski, realizada por el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada, José Luis Monereo Pérez.

En ella, se aborda de forma monográfica y queda tratado de una manera científica muy rigurosa y analítica todo el conjunto del pensamiento social y político del protagonista de la obra. Igualmente y a la vez, se pone de manifiesto la obligada referencia y observación de todo el contexto histórico, político y social de la época por un lado, y del contexto histórico-intelectual por otro lado, quedando reflejada la influencia del pensamiento de otros autores coetáneos a Laski o bien de épocas precedentes. Todo ello para que el lector o investigador que se acerque al libro comprenda el pensamiento de este clásico en su plenitud, circunstancia que se encuentra más facilitada por el estilo sencillo, claro y directo utilizado por el autor del libro.

Para ello, nos encontramos con tres partes bien diferenciadas que van profundizando de manera paulatina pero a la vez progresivamente sobre el pensamiento político-social de Laski y su evolución con el paso de los años, así como la manifestación de ésta en las distintas obras que componen el relevante y amplio elenco bibliográfico del mismo. De esta forma, nos vamos a encontrar con una primera parte que se dedica a la filosofía política de la democracia en crisis. Una segunda en la que se va a hacer referencia a la corriente pluralista, puesto que Laski se integraba en ella, y su relación con el concepto de soberanía estatal. Y una tercera en la que se realiza un análisis de la democracia en América pero en su segundo momento, una vez que el autor que nos ocupa ha experimentado una evolución en su pensamiento.

En el primer capítulo, Monereo Pérez nos presenta una esclarecedora semblanza tanto personal como profesional de Laski que posteriormente, conforme se vaya profundizando y avanzando en la obra, va a adquirir tintes indispensables su comprensión, puesto que la trayectoria expuesta magistralmente en esta parte es fundamental para llegar a entender todo su pensamiento y sus líneas propositivas. De este modo, se nos presenta al protagonista que nos ocupa como un intelectual gran renovador de la filosofía y ciencia política de la primera mitad del siglo XX que vinculó su actividad de reflexión teórica y científica con las exigencias puestas de manifiesto por el movimiento obrero, la práctica política de la corriente laborista británica y el pensamiento socialista. Es así porque se insertó en esa línea política y defendió una democracia social en la que identificaba al socialismo con la democracia a la vez que apostaba por el parlamentarismo como vía hacia la instauración del mismo.

Es en este marco en el que como autor que se incluye dentro de la corriente pluralista negaba que en el Estado hubiese una asociación de hombres que llevase consigo una supremacía respecto al resto, con lo que niega que fuese éste una voluntad general. De esta forma, su concepción pluralista y federalizante del Estado le lleva a una filosofía política pluralista. En clara conexión, propuso la afirmación de la supremacía del Derecho Internacional sobre el derecho de todo Estado individual, abogando pues a favor de una *civitas maxima* y un derecho cosmopolita en el que los juristas deben de intentar que sus doctrinas vayan de forma paralela al espíritu de la época.

Pero es que también, en clara conexión, se encuentra dentro de la tendencia del reformismo social consecuente, ya que defendía la implantación de un capitalismo del bienestar que pusiese límites de carácter social y político al desenvolvimiento del mercado, pretendiendo el cambio de la sociedad mediante la actuación de la razón en el desarrollo económico y social dentro de una democracia social en el campo de la economía como medio para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

El segundo capítulo se encuentra dividido en dos grandes epígrafes. Uno dedicado a la soberanía y a las teorías pluralistas en el primer Laski y otro que se ocupa de la teoría del estado y la superación del pluralismo extremo en el segundo Laski.

En el primero de ellos, partiendo de la concepción del Derecho Internacional del autor, defiende que la Teoría del Estado debiera de ser una filosofía del Derecho internacional que superase la perspectiva limitada de la soberanía nacional y que prosperase hacia un orden de paz y de justicia que tuviese por fundamento y por pilares a los principios socialistas. Todo ello desde una teoría pluralista con expresiones concretas en el pluralismo jurídico y político y en la que hubo una influencia recíproca entre el pensamiento de autores de la talla intelectual y social de Léon Duguit (1859-1928) o Georges Gurvitch (1894-1965), que es explicada y desarrollada magníficamente por José Luis Monereo.

Todo ello tiene como resultado que Laski defendiese que, en una sociedad compleja, la soberanía debía de quedar descentralizada, dejando el Estado a los grupos su autorregulación en el aspecto de sus intereses económicos y sociales, con lo que se convierte en el máximo exponente de la defensa de la supresión de la teoría unitaria del Estado en el interior de sus fronteras. Esto conllevaría un constitucionalismo democrático-social en el que los distintos grupos participasen en procesos de decisión política, que deberían de ser completados, según nuestro autor, con representaciones corporativas y organizaciones profesionales, dejando el espacio de decisión estrictamente política a agrupaciones decisorias funcionales. Todo ello con la intención de poner en práctica una democracia pluralista que tuviese como principal función la integración en el sistema político institucional, a la vez que evitaría una disgregación social. Democracia que sería conseguida mediante la realización de una revolución consentida que consistía en llevar a cabo una reforma legal a través del Estado Social, auténtico y genuino eje del proceso de transformación democrático-social, como posibilidad alternativa para evitar la guerra y la confrontación a nivel mundial.

En el segundo epígrafe de este capítulo, Monereo Pérez nos muestra cómo Laski, siendo consciente de que su concepción pluralista primitiva era muy ingenua, evoluciona hacia un socialismo que presenta el matiz de la concesión de una importancia fundamental y extraordinaria a la intervención estatal, sin perjuicio, claro está, de apostar por una democracia descentralizada.

Como resultado, este pensamiento sí podía asumir la idea de un Estado Social democrático en el que imperativamente ha de destacar la función administradora de los servicios públicos y de las empresas nacionalizadas, si bien con la importante puntualización realizada en el sentido de que cada uno de los grupos sociales ampliase su ámbito mediante lo que él denomina capacidad de iniciativa continua.

Es en este contexto en el que se enmarca una de las obras maestras de Laski, *La Crisis de la Democracia*, en la que pone de relieve que todas y cada una de las instituciones democráticas, a medida que intentaban hacer doméstica la economía, se hacían incompatibles con los intereses de cada uno de los grandes grupos económicos. Y para superar esta circunstancia, de nuevo repite y se apoya en que la

única solución posible es la revolución pacífica y legal. Por tanto, es de resaltar que desde aquí es desde donde Laski va a destacar las contradicciones que tenía la democracia.

El capítulo tercero se dedica de forma íntegra al análisis realizado de la democracia en América por Laski, pero desde una perspectiva evolucionada en el pensamiento del autor. Tuvo la nada desdeñable intención de realizar un estudio total del sistema social americano, su cultura y su espíritu, pero desde una influencia de la teoría marxista del Estado y desde la visión marxiana de la formación social como un conjunto integrado condicionado por la evolución del desarrollo económico y tecnológico y la conformación de estructuras de poder. Así, va a defender que una sociedad democrática necesariamente ha de exigir el pleno disfrute del derecho al libre disenso, la defensa de las libertades civiles y religiosas y el derecho de las organizaciones obreras a la negociación colectiva, estando en el resto de ámbitos presente la igualdad por la mera circunstancia de la democracia que también debería de incrementar por sí misma el bienestar de todos los ciudadanos.

El libro se completa con un último capítulo que se dedica por completo a reseñar y destacar un elenco importantísimo de obras seleccionadas y traducciones realizadas al castellano de Harold J. Laski. De esta forma queda lo suficientemente resaltada una completa y desarrollada bibliografía que, sin duda alguna, se ve completada por las abundantes y explicativas citas a pie de página existentes a lo largo de la obra. En suma, tras las sucintas observaciones y manifestaciones puestas de relieve, podemos afirmar que estamos ante una obra de referencia obligada sobre el pensamiento de Harold Laski y a la que, imperiosamente, se ha de acudir por parte de aquel investigador y/o lector que pretenda adentrarse en el conocimiento de autores de la historia político-social del siglo pasado. [*Recibido el 26 de diciembre de 2010*].

Luis Ángel Triguero Martínez

José Luis Monereo Pérez, *Los orígenes de la Seguridad Social en España. José Maluquer y Salvador*, Colección Trabajo y Seguridad Social, Comares, Granada, 2007, 352 págs.

ABSTRACT: La figura de José Maluquer y Salvador es capital en la historia de la protección social en España, apareciendo su figura como uno de los doce padres fundadores de las Relaciones Laborales en España. José Luis Monereo Pérez le ha dedicado una particular atención. Como es sabido, se había escrito sobre los siete padres fundadores por parte de Manuel J. Peláez, pero recientemente María del Carmen Amaya Galván (enero de 2011) ha elevado su número a la docena y, según ella, serían: Jorge Salvador Maluquer, Maximiliano Arboleya Martínez, Álvaro López Núñez, Eugenio Pérez Botija, Pedro Sangro Ros de Olano, Alexandre Gallart Folch, Severino Aznar Embid, Gaspar Bayón Chacón, Luis Olariaga Pujana, Juan Uña Sarthou, Severino Eduardo Sanz Escartín y Manuel Alonso Olea.

PALABRAS CLAVE: José Maluquer y Salvador, José Luis Monereo Pérez, Paz social, Instituto Nacional de Previsión.

Se publica un nuevo volumen de la colección Trabajo y Seguridad Social de la editorial Comares que dirige el Catedrático de la Universidad de Granada José Luis Monereo, en la que están quedando aunados desde comienzos del presente siglo todo un conjunto de obras de referencia de carácter sociolaboral.

En este caso, el libro presenta una temática eminentemente social desde la perspectiva histórica, en cuanto que en ella son tratados de forma magnífica, clarividente y científica por parte del autor, tanto los orígenes del actual sistema de Seguridad Social en España, como la influencia que en ella tiene un personaje que ha pasado a la historia por ser uno de los principales ideólogos y defensores del seguro social en España, que no es otro que José Maluquer.

Así pues, nos encontramos con una obra que va a ahondar en los orígenes del Derecho social en España, en sus corrientes de pensamiento iniciales y los distintos autores que las integran desde una perspectiva comparativa y siempre teniendo como referencia el pensamiento y la acción social de José Maluquer. Es en este marco, en el que el autor realiza una especial, cariñosa y amistosa dedicatoria, tanto profesional como personal, a aquellos que han sido sus maestros: al que fuera Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Zaragoza, Juan Rivero Lamas, y a José Vida Soria, también Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada, en cuanto que ellos han sido unas de las piezas claves en el panorama nacional para la contribución a la construcción definitiva del Derecho Social del Trabajo, continuando así la labor teórica y práctica iniciada en su momento por el propio José Maluquer.

El conjunto de la obra está dividido en cuatro grandes partes. Una de carácter introductorio en la que se ponen de manifiesto un elenco de notas biográficas sobre José Maluquer. Una segunda en la que se trata el reformismo social del mismo, plasmando su pensamiento socioeconómico y político-jurídico. Una tercera en la que se aborda el sistema de seguros sociales y el papel que tuvo en ello el nacimiento del Instituto Nacional de Previsión. Y una cuarta en el que quedan puestos de relieve otros aspectos no tan conocidos, pero complementarios, del ideario y práctica social de Maluquer que le llevan a ser artífice de una completa, auténtica, verdadera y genuina política social para la época.

En el primer capítulo, Monereo Pérez realiza una semblanza de la vida, obra y pensamiento social de José Maluquer desde la perspectiva académica y profesional, así como nos presenta al mismo en cuanto instigador para la construcción de una política social para su España contemporánea y como ingeniero y artífice del Instituto Nacional de Previsión, siendo éste el antecedente del actual Instituto Nacional de Seguridad Social y reflejando, por tanto, la importancia del personaje central del libro. Consecuentemente, nos encontramos con que esta parte adquiere un rol fundamental para la posterior comprensión completa del resto de la obra.

En el amplio, extenso e intenso segundo capítulo, el Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada se ocupa de ofrecer una visión completa del pensamiento de Maluquer sobre el reformismo social, para lo que lo divide en dos apartados: por un lado trata las ideologías jurídicas y los seguros sociales y, por otro lado, aborda el significado político-jurídico que tuvo la solidaridad social en el contexto del reformismo social no sólo español, sino también europeo.

En el primer apartado, partiendo de que Maluquer no fue indiferente a la cuestión social, al igual que otros contemporáneos suyos, se nos presenta su pensamiento al respecto en cuanto liberal social cristiano próximo al catolicismo social, con lo que,

en concordancia, tenía la nada desdeñable intención de llevar a cabo una mejora de los derechos sociales de ciudadanía viendo a la igualdad como un criterio de justicia social siempre dentro de un proyecto de construcción de un régimen democrático en el que existiese un intervencionismo público mediante seguros sociales obligatorios que fuesen reflejo de la solidaridad social y de la protección de la unidad familiar. En consonancia, Maluquer era partidario de la creación de un sistema completo de previsión social pública, pero sin llegar a que se produjese una socialización completa del conjunto de instancias de provisión de las necesidades sociales, ante lo que era imprescindible que dejase un espacio de actuación al mercado y a la autonomía privada.

Así pues, la preocupación principal del personaje central del libro fue que se pusiese en práctica una previsión social enmarcada, a su vez, dentro de un programa más amplio y general de política social con la misión de regular las desigualdades sociales y siempre teniendo como marco de referencia el Estado social intervencionista como organizador de la reforma económico-social a llevar a cabo. Con esto, Maluquer se aproxima muchísimo a la realización de una reforma social desde un tipo de ingeniería social constructiva que aúna las distintas corrientes de pensamiento sobre la misma y que son expuestas magistralmente por el autor de forma breve y concisa.

Dentro de la previsión, para Maluquer, el seguro social iba a estar llamado a representar un elemento técnico imprescindible para actuar desde una especie de solidaridad social en cuanto técnica de gestión adecuada de los problemas sociales. De esta forma, queda latente la preocupación por la paz social, la estabilización del sistema y la exigencia de civilizar un sistema social que tenía el rasgo de haberse mostrado como injusto y que ponía de manifiesto la insuficiencia de la caridad y la beneficencia pública. Es frente a esta situación ante la que reclama la eficacia moralizadora de la previsión social y de la contención para realizar esta tarea de restauración social.

En el segundo apartado, el autor nos resalta el significado político-jurídico que adquirió la solidaridad social a nivel nacional y europeo para el nacimiento e inicial construcción del derecho social, haciendo especial hincapié en la descripción del conjunto de factores de índole social, política, etc., que influyeron, de las distintas corrientes ideológicas que existieron y de los diferentes modelos de Seguridad Social que ha habido, teniendo todo ello como telón de fondo a la figura de José Maluquer.

El tercer capítulo está dedicado, de forma íntegra, tanto al nacimiento de una institución social básica de la época, como es el Instituto Nacional de Previsión, como al comienzo en España del sistema de seguros sociales.

En un primer epígrafe se trata de forma exclusiva la creación del Instituto Nacional de Previsión y el desarrollo institucional y funcional que experimentó. Éste se caracterizó por ser la plasmación institucional de la reforma social, que tuvo su momento álgido en su creación en la primera década del siglo pasado, que, unido a la perspectiva legislativa que ocasionó la creación de un derecho social, estuvieron enmarcados en el fenómeno internacional de respuesta a la cuestión social.

Su aparición dio lugar a que dentro del sistema estatal del Estado Social, naciese una nueva organización administrativa vinculada a la administración técnica de los seguros sociales y a la administración laboral y a las formas institucionales de solución de conflictos. Por tanto, domina en todo ello una lógica de intervencionismo estatal corrector y de armonicismo social.

El artífice político de esta institución fue Eduardo Dato, si bien el *alma mater* ideológico fue Maluquer, en cuanto que creía necesario la creación de un organismo

que organizase el aseguramiento con sujeción al conjunto de reglas de la ciencia y práctica en la técnica del seguro. Todo ello con la misión de tutelar la paz y la concordia, por medio de las cuales quedaba incorporado el ideario solidarista, para el que el seguro social era clave en orden a garantizar un mínimo de bienestar a todo hombre en situación de necesidad poniéndose así de manifiesto su finalidad social de mejora de las clases más desfavorecidas de la sociedad.

En un segundo epígrafe, se toma por parte del autor el caso concreto del seguro de vejez para tratarlo como paradigma y eje del sistema de previsión social, siempre desde el enfoque de Maluquer. En este sentido, para él, cualquier rama del seguro era una manifestación clara y expresiva de la solidaridad. Bajo este punto de vista, va a definir el seguro sobre la vida como aquella evolución económica de la vida humana mediante la obligación solidaria de un amplio número de personas para asumir el riesgo de la duración de la vida de cada una, siempre y cuando sea determinado técnicamente según el cálculo de probabilidad y de forma proporcional a las condiciones de riesgo convenidas. Pero para conseguir éste, desarrolló una importante labor de campaña propagandística a favor de la instauración de los seguros sociales entre los distintos agentes económicos y sociales implicados, con la idea de establecer un estándar mínimo de seguros sociales obligatorios como principal cometido de la Institución de que fue artífice.

En un tercer epígrafe, se nos pone de manifiesto la influencia que tuvo en Maluquer el Regeneracionismo Costista, en cuanto que ambos, Joaquín Costa y Maluquer tenían la intención de llevar a la práctica un cuadro completo de reformas de la sociedad española en los distintos aspectos económicos, sociales, geográficos, culturales y político-jurídicos. Así, se pone de manifiesto que la concepción de regeneración que tenía era de una regeneración social en el marco más amplio de una regeneración nacional. Esto dio lugar a que el enfoque de Maluquer pueda ser matizado aún más y concretado en una filosofía social regeneracionista, en la que las cotizaciones sociales fuesen destinadas a la política social y a la mejora de las infraestructuras del país, subyaciendo así la idea social de la corrección de desequilibrios sociales en una sociedad fragmentada e imponiendo una carga social al Estado de establecer y organizar un sistema de seguros sociales, cuya máxima expresión fue la cobertura del riesgo de accidentes y el seguro popular de vejez.

El cuarto capítulo es utilizado por Monereo Pérez para presentarnos aquellos aspectos menos conocidos de Maluquer que hacen que en conjunto se le pueda ver como un ingeniero social artífice de la Política social.

Para ello, en una primera sección, se presta atención al interés que tuvo Maluquer en la Geografía social, en base a la que trata de localizar, describir e identificar los distintos tipos de estructura social que existían en los ámbitos geográficos, a la vez que le permitió abordar desde un prisma diferente la cuestión social agraria. Y, en relación, también se destaca el hecho de que al problema de la vivienda obrera Maluquer encontrase la solución en el seguro popular de vida en estrecha implicación de las Cajas de Ahorro como fomentadoras de la construcción de las mismas.

En una segunda sección, se completa la visión de Maluquer como artífice de la Política social en cuanto defensor de las inversiones estatales sociales hacia la escuela y mediante la propuesta y puesta en práctica de los Cotos de Previsión para la protección de previsión del cultivo de la tierra, puesto que pretendía facilitar a los agricultores el poder hacer frente a los costes del seguro de vejez sin necesidad de realizar aportaciones económicas individuales.

Todo este recorrido histórico y análisis del mismo carácter se completa con un capítulo que de forma específica se dedica a las fuentes bibliográficas, en el que se pone de manifiesto la importantísima labor de documentación histórica realizada por el autor mediante la consulta de fuentes históricas de primera magnitud, hecho que queda manifestado en las abundantes y esclarecedoras notas a pie de página que se realizan a lo largo del estudio. [Recibido el 28 de noviembre de 2010].

Luis Ángel Triguero Martínez

Rafael Palomino Lozano, *Religión y Derecho comparado*, Prólogo de Rinaldo Bertolino, Iustel, Madrid, 2007, 417 págs.

ABSTRACT: El Derecho Eclesiástico del Estado en España es un área de conocimiento que, en las Facultades de Derecho, se ha traducido en la sustitución de las enseñanzas del Derecho Canónico de la Iglesia Católica Romana, por un conglomerado de cosas y campos científicos que llevan a que los profesionales de dicha área escriban sobre lo divino y sobre lo humano, con desigual criterio, variable formación e irregular manejo de lenguas extranjeras (unos varias, pocos muchas y un notable grupo que solo acoge la doctrina en lengua española). Intolerable resulta que en otra vuelta de tuerca, inconcebible y execrablemente carpetovetónica, ahora se les esté en algunos lugares denominando a los profesionales de dicho sector científico bajo el rimbombante título de docentes de «Derecho y Factor Religioso». El factor era un comerciante o un empleado de las estaciones de ferrocarril. La religión católica y el resto de las religiones son una cosa muchísimo más seria para que se utilice semejante denominación que solo puede habersele ocurrido al típico garañón anticlerical de turno tras una destemplanza de vinolencia. Rafael Palomino no pertenece ni a los destemplados ni a los gurruminos partidarios del nuevo «Factor Religioso», sino que es uno de los estudiosos más serios del Derecho Eclesiástico con que contamos en el Estado español (de momento monarquía constitucional y, antes de tres lustros, esperemos, gracias a Dios, República Federalista) y contextualiza paradigmáticamente la relación entre Derecho y Religión, siguiendo de cerca la doctrina norteamericana e italiana. La alemana y la francesa no parecen interesarle demasiado. En las actuales circunstancias de fundamentalismos religiosos islámicos por un lado y por otro de una laicidad emergente de la mano de políticos ignorantes, avillanados y molondros que, en un mundo de tráfugas, disolutos y prevaricadores, arruinan económica y moralmente a los países donde gobiernan por sus erráticas políticas sociales y su desconocimiento de los más elementales conceptos de la Ciencia económica y de la Hacienda Pública, la religión debe ser un referente para la purificación de la sociedad y la idea de trascendencia asume carta de naturaleza que tranquiliza la conciencia de hombres y mujeres atribulados. El binomio Religión y Derecho es hoy más que nunca una necesidad y su enseñanza en las Facultades de Derecho, de Ciencias Políticas y Sociología y de Trabajo Social debería ser obligatoria si queremos formar ciudadanos responsables en la Europa del siglo XXI.

PALABRAS CLAVE: Religión, Derecho, Factor religioso, Derecho Eclesiástico del Estado, Libertad religiosa, Rafael Palomino, Rinaldo Bertolino, Rafael Navarro Valls.



Como Rinaldo Bertolino aclara, Rafael Palomino «se sirve de una metodología de investigación exhaustiva: conjuga el presente –jurídico o religioso– con la tradición» (p. 16), y además «se coloca frente a estas realidades que aspiran al absoluto y a lo totalizante, moviéndose desde la única realidad que considera verdaderamente definitiva, como penúltima sólo respecto del Absoluto de Dios» (p. 17). Además, el creer religioso no pierde en nada su objetividad, porque de él puede predicarse lo mismo que se dice de lo sagrado: se trata de un valor y, en cuanto tal, es completamente objetivo. Bertolino considera que la gran aportación de R. Palomino ha sido la de «pronosticar un futuro modelo europeo sobre la disciplina, caracterizado por la ausencia de toda referencia a tradiciones específicas, y cuya clave fundamental será el diálogo interreligioso» (p. 24). Entre las reflexiones más importantes del autor destacamos la necesidad de introducir en el ámbito de la juridicidad estatal una noción de religión, reconociéndole su propia y previa operatividad extrajurídica, metajurídica y parajurídica. Nos ofrece asimismo una visión panorámica cultural, social, y, en consecuencia, jurídica, que exigiría una transformación radical, frente a las nuevas exigencias del multiculturalismo. Por otro lado, Palomino Lozano destaca que el Derecho eclesiástico actual respeta en todo momento los valores expresados en la Constitución de 1978. De esta forma, se cerró la “cuestión religiosa” del pasado, superando el régimen de confesionalidad del Estado durante periodos precedentes y particularmente acusado en el siglo XX durante las dos dictaduras militares que hubo de sufrir el Estado español, la de Primo de Rivera cultural e ideológica, la de Franco con miles de muertes, tras procesos sumarísimos. Resulta incomprensible la insensibilidad del tirano del fardo ante el valor de la vida humana de las que él disponía ratificando condenas de los tribunales sin el menor atisbo de misericordia.

R. Palomino matiza que Religión y Derecho han estado siempre en continua interacción a lo largo de la Historia, predominando en determinados momentos uno sobre el otro. En occidente se ha producido una secularización del Derecho, vinculada a la monopolización de lo jurídico por lo estatal. Pero, en el Estado democrático, la religión se plantea como fenómeno social y de las libertades. El Derecho eclesiástico del Estado no es propiamente una ciencia jurídica, sino una rama o disciplina de estudio científico-jurídico. Pero aclara también que cuando aparece el término religión no es una cuestión reservada al Derecho eclesiástico del Estado, en la medida en que podemos estar ante el Derecho civil, ante el Derecho administrativo, ante el Derecho penal, etc. El concepto religión aparece asociado o inserto en el ámbito de las libertades fundamentales, aunque no toda referencia a la religión en un ordenamiento jurídico implica la idea de derecho fundamental, ya que puede darse el caso en que el bien jurídico protegido no sea la libertad en sí, sino el desarrollo de las denominadas actividades religiosas (p. 58).

En ocasiones los estudiosos de las ciencias de la religión establecen una línea divisoria entre religión y pseudo-religiones. De esta forma, han aparecido otras alternativas como las religiones de sustitución, la magia, la idolatría, el fanatismo religioso o el fundamentalismo, etc. (pp. 102-111). Rafael Palomino considera que la religión es ética, en cuanto que establece un modelo de comportamiento y promueve su seguimiento como clave de salvación o meta para la liberación del hombre. De hecho, moralidad y religión aparecen estrechamente vinculadas en el hinduismo (*dharma*). Por otro lado, en algunos casos, el propio Derecho prevé mediante alguna cláusula concreta la separación entre la esfera política y/o de la esfera de actuación estatal y la esfera religiosa. Cuando estas cláusulas no resultan suficientes se produce la tajante división.

Existe una disociación terminológica entre el texto del art. 16 de la Constitución española de 1978 y los textos internacionales y regionales en materia de libertad religiosa. Un sector doctrinal diferencia entre libertad ideológica y libertad religiosa, que se diferencian por su objeto. El pluralismo jurídico parece abrirse camino en el estudio del Derecho de sociedades pluri-religiosas, de protección de tierras de significado religioso o administración de recursos naturales compartidos. En opinión de algunos autores, ni siquiera los estándares internacionales sobre libertad de pensamiento, conciencia y religión exigen necesariamente la separación de la religión y el Estado. Por ello, Palomino propone que la opción más equilibrada apunta por establecer un marco amplio dentro del cual nos moveríamos entre la “separación benevolente” y la “cooperación” (pp. 167-168). En realidad, no hay modelos perfectos, aunque resulta interesante el modelo español (pp. 168-173).

En Estados Unidos el tradicional modo de entender la religión en el sistema legal remite a un concepto de Dios, a una idea teísta de la religión, y a una concepción institucional del culto a ese Dios, asociado con la tradición cristiana y, en su caso, judeo-cristiana de la que la civilización americana es tributaria en sus orígenes (pp. 191-255). La sentencia *United States v. Kuch* ha sido considerada prototipo de la limitación del concepto de religión o, si se prefiere, el ejemplo clásico del contorno negativo de lo que no es religión, aunque haya aspectos formales coincidentes con la misma. Las vías legales para que los grupos religiosos en los Estados Unidos puedan tener propiedades para el cumplimiento de sus fines (religiosos o conexos) pueden llegar a ser hasta doce distintos. Las Iglesias han utilizado a lo largo del tiempo muy variadas formas legales: *trust*, *nonprofit corporations*, *partnerships*, entidades asociativas específicamente religiosas, etc. La amplia fórmula propugnada por el Tribunal Supremo desde 1965 con un criterio funcional parece exigir, como contrapartida, un apoyo flexible en los criterios objetivos y externos que permitan identificar la religión, sobre todo en el ámbito organizativo.

En el Derecho español (pp. 257-353) la regulación del fenómeno religioso es, en cierto modo contradictoria. La Constitución española no recoge una definición legal de religión, siguiendo la estela del constitucionalismo comparado. En efecto, no existe un criterio legal que permita definir qué ente es una confesión religiosa para el Derecho eclesiástico español, de igual forma que no existe una definición legal de iglesia o comunidad religiosa. Palomino Lozano entiende que el art. 16 de la Constitución española plantea un mandato tridimensional, que parte de dos principios: un principio dogmático y un principio práctico. El primero pretende dar un enunciado al derecho de libertad religiosa, y el segundo un cauce de solución a la “cuestión religiosa” en España. El texto del art. 16 no ofrece de por sí ninguna orientación clara del objeto, definición o contenido de la libertad de religión y, por ende, del mismo concepto de religión. De todos modos, el art. 16.3 de la Constitución, cuando se refiere a las “creencias religiosas” y a las “confesiones”, establece la necesidad de clarificar cuáles son éstas, por contraposición a diversas expresiones de las creencias y de sus manifestaciones grupales. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 dirige de forma casi preferente el interés normativo hacia los derechos de libertad religiosa en su vertiente colectiva. De alguna forma, esto venía exigido por el principio de cooperación establecido en el art. 16.3 del texto constitucional. También analiza el autor el concepto de religión en la jurisprudencia (pp. 329-345), que establece algunos rasgos específicos de la caracterización de los conceptos como religión; fines religiosos; e Iglesias, comunidades y confesiones religiosas. La adhesión a una religión constituye un fenómeno exclusivo y excluyente. Los fines religiosos remiten a la consideración religiosa o no religiosa de

la entidad de que se trate. La jurisprudencia de la Audiencia Nacional considera que la religión constituye un fenómeno colectivo, si bien sostiene que la calificación de religión o fines religiosos, conforme a las condiciones legislativas no exige un mínimo de fieles. Por su parte, el Tribunal Supremo realiza una nueva aportación respecto de aquellos fines ajenos a lo religioso. En concreto, señala que son ajenos los “meramente científicos o culturales”, siendo indiferente que dichos fines puedan ser o no coincidentes con los de otros grupos. Indica que carecen de fines religiosos las asociaciones interconfesionales con fines humanísticos o de solidaridad. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2001 ha analizado el contenido del término fines religiosos y diferenciaba los fines religiosos de aquellos otros fines colectivos presentes en la sociedad (económicos, culturales, sociales, demoantropológicos, ecológicos, deportivos, etc.) respecto de los cuales el Estado también realiza una mínima concreción para otorgar efectos jurídicos.

En el Derecho comparado italiano (pp. 355-402) la regulación jurídico-estatal del factor religioso en su dimensión colectiva se configura como Derecho especial. Se trata de un rasgo que vendría en parte propiciado por el principio de bilateralidad que establece la propia Constitución. El ordenamiento jurídico italiano no establece un concepto de religión ni de confesión religiosa, aunque este último término se recoge expresamente en su Constitución. Pero sí se encuentran elementos accesorios, colaterales o sencillamente conceptos jurídicos en los que se reflejan propiamente qué se va a entender por religión. En efecto, la legislación italiana evita una referencia directa a una posible noción de confesión religiosa, optando más bien por una distinción de sectores: el sector de la economía productiva y el sector de la religiosidad. En efecto, la Ley de asociaciones de promoción social parece establecer una diferenciación entre política, economía productiva y promoción social o cooperación al desarrollo. Tal esquema, a juicio de R. Palomino, resultará válido hasta que nuevas formas de expresión de la religión exijan el replanteamiento conceptual de la actitud estatal (pp. 401-402). Cualquier grupo con finalidad religiosa puede constituirse y actuar en el ordenamiento jurídico italiano, sin necesidad de autorización ni registro previo. La doctrina identifica el concepto jurídico de confesión con el concepto de institución dotada de capacidad jurídica propia (p. 365). La doctrina constitucional sobre la materia religiosa se encuentra recogida fundamentalmente en tres pronunciamientos: la sentencia 467 del año 1992, la 195 del año 1993 y, por último, la 346 de 2002 (pp. 385-395).

Rafael Palomino es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y nos ofrece una visión novedosa del Derecho comparado y multidisciplinar, materia en la que son escasas las obras jurídicas que tratan este tema dentro del Estado español con tanta pulcritud. No obstante, como se observa en casi todos los componentes de la escuela de Navarro Valls, este libro de Palomino está carente de ese tono de superioridad moral, de exquisitez y finura jurídica de 30/30 e lode, con que escribía Carlo Arturo Jemolo, ni es tampoco el volcán de ideas (la mayor parte de ellas de una heterodoxia alarmante) del que fuera gran canonista y eclesiasticista de la Universidad de Bolonia Giuseppe Caputo con su sorprendente culturización del hecho jurídico-religioso. Libro magnífico este de Rafael Palomino, aunque, como es habitual en él, el laboratorio del constitucionalismo republicano y de la laicidad en Europa que es la dulcísima Francia, hija predilecta de la Iglesia, parece importarle bien poco. [*Recibido el 22 de diciembre de 2010*].

Guillermo Hierrezuelo Conde

Ignacio Peiró Martín y Guillermo Vicente y Guerrero, eds., *Estudios históricos sobre la Universidad de Zaragoza*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2010, 430 págs.

ABSTRACT: Se comentan en la presente recensión las actas de un Congreso sobre Historia de la Universidad de Zaragoza, coordinado por Ignacio Peiró Martín y Guillermo Vicente y Guerrero. La mayor atención se presta a las Facultades de Filosofía y Letras y de Derecho. A Juan Francisco Baltar cabe hacerle algunas observaciones sobre el manejo de fuentes que lleva a cabo, cosa habitual dentro de su heterodoxia investigadora, aunque ofrece una abundante información sobre los estudios de Leyes y Cánones en el siglo XVIII y es quizás el autor de la ponencia más interesante. En las actas se combinan temáticas generales con estudios de microhistoria, que no tienen por qué coincidir con que se trate de ponencias o comunicaciones. Guillermo Vicente ha anunciado la celebración de un Segundo Congreso sobre la misma temática.

PALABRAS CLAVE: Universidad de Zaragoza, Filosofía y Letras, Derecho, Diego Fraylla, Eduardo Ibarra, Juan Francisco Baltar, Guillermo Vicente y Guerrero, Archivo Histórico Nacional.

Se recogen en este volumen las actas de un Congreso, denominado primer Encuentro sobre Historia de la Universidad de Zaragoza, que tuvo lugar en La Almunia de Doña Godina, y detrás del cual están dos especialistas reconocidos en historia de la Universidad y, sobre todo, del profesorado universitario, tanto de la Facultad de Letras como de la de Derecho. Además la historiografía española y los historiadores es materia en la que Peiró Martín es un experto señaladísimo, quien en coautoría ha escrito una obra esencial de referencia, el *Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos*, un auténtico *capolavoro*. Realmente que Ignacio Peiró Martín pertenezca al mismo cuerpo de profesores titulares de Universidad que alguna historiadora docente en sede no de Letras, que lo ha sido de esa ilustrada Universidad de Zaragoza, de cuyo nombre prefiero no acordarme, resulta incomprensible desde el punto de vista de la crítica científica.

Guillermo Vicente y Guerrero es doctor en Derecho y en Filosofía y Letras y es autor de miles de páginas impresas, de reconocida calidad, que lamentablemente no le han permitido salir de su condición de iushistoriador e iusfilósofo *free lance*, mientras hay toda clase de chichos, chichas y copiones (hay varios barones y baronesas de Franckenau por ahí sueltos, entre ellos el actualmente supermediático exministro de Defensa Nacional del gobierno de Angela Merkel, Karl Theodor zu Guttenberg, que ha dado lugar a un auténtico despliegue informativo en relación con su tesis doctoral defendida en la Universidad de Bayreuth, y ya se le conoce como «el Barón de corta y pega», y se han recogido más de 80 fragmentos sin comillas con citas a la ligera en su memoria, pero citando al autor), que señorean su estatus académico funcional con trabajos cuya calidad es a veces de escándalo universal. Comentaba un conocido catedrático, que había formado parte de un tribunal de tesis doctoral sobre un tema inquisitorial, un fraile, que era la peor memoria doctoral que conocía y la peor que había tenido ocasión de juzgar, espantosamente mala, pero incomprensiblemente le dieron la máxima nota por razones claramente ajenas al mundo académico, porque era buena chica y simpática, cosa que todos daban por segura. Ya disponemos ahora en Málaga del texto mecanografiado de dicha

memoria doctoral. Mientras tanto, otros con publicaciones en Alemania, EE.UU., Francia, Italia y Hungría, y con artículos en varios idiomas, y formados en centros de elite internacionales, siguen siendo profesores contratados.

Nos hallamos frente a la publicación número 2.946 de la Institución “Fernando el Católico”, de la Excelentísima Diputación provincial de Zaragoza. Vemos las actas de un Encuentro sobre Historia de la Universidad de Zaragoza, celebrado desde el día 15 al 17 de abril de 2008. Se incluye en la presente edición un prólogo de los coordinadores (pp. 5-7), ocho ponencias (pp. 11-230), un apéndice fotográfico (pp. 233-240) y quince comunicaciones (pp. 243-427).

Magnífica factura e instrumento de trabajo utilísimo es la colaboración del ya citado Guillermo Vicente y Guerrero, que lleva por título “Bases documentales manuscritas para el análisis histórico de la Universidad de Zaragoza” (pp. 11-46). Vicente marca la hoja de ruta de cualquier investigador de la historia de la Universidad zaragozana.

Juan Francisco Baltar Rodríguez, habilitado para concursar a plazas de catedrático de Historia del derecho y de las instituciones en 2005, sin contar en aquel momento con ningún sexenio de investigación, mientras otros candidatos con dos y tres sexenios eran suspendidos inmisericórdemente, sigue siendo profesor titular de Historia del derecho de la Universidad de Zaragoza en marzo de 2011. A este libro aporta su trabajo “Las facultades de leyes y cánones de la Universidad de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII”, pp. 79-130, aunque en índice de p. 429 dice siglos XVI y XVII. No perdamos de vista que, según Concepción Gómez Roán, la segunda mitad del siglo XVII fue claramente tenebrosa, «se creía en los horóscopos, en la influencia de los planetas y, a diferencia de otros países, en España se toleraba la existencia de brujas hechiceras»<sup>1</sup> y se enriquecía Fernando Valenzuela «mediante la práctica de artes diabólicas»<sup>2</sup>. Gracias a Dios todo lo resolvió con la Restauración Antonio Cánovas del Castillo, autor por cierto de un conocido *Bosquejo histórico de la Casa de Austria en España*.

Baltar ofrece un artículo de 51 pp., con 130 notas a pie de página. En las pp. 82-83, nota 11, de su colaboración, Baltar da a conocer cuáles son las fuentes utilizadas o que dice haber utilizado, para su elaboración, haciendo la categórica afirmación siguiente: «Para este trabajo he consultado fondos del Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Consejo de Aragón, legajos 33, 34, 78, 79, 665, y Registros, n.º 544. Del Archivo Histórico Nacional, Códices, libros 232, 1188; Consejos, libros 2006, 2045, y legajos 6811 n.º 130, 6814-6816, 6821, 6822, 6826, 6833, 6836, 6844-6847, 6849, 6850, 6855, 6857, 6858, 6862-6870, 6872-6878, 13359 n.º 71, 13361 n.º 63, 13362 n.º 125, 13366 n.º 123, n.º 161, 13373 n.º 90, 13375 n.º 78, 13379 n.º 79, 17791, 50890-50896, 50899, 52559-1 y 2, 52560-52564. Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), Ms. 632, 939, 7377, 12016».

<sup>1</sup> Concepción Gómez Roán, *La causa de fray Froilán Díaz. Un conflicto de competencias en la Alta Administración Inquisitorial*, Facultad de Derecho de Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, curso académico 1995-1996, p. 74.

<sup>2</sup> Concepción Gómez Roán, *La causa de fray Froilán Díaz. Un conflicto de competencias en la Alta Administración Inquisitorial*, p. 75. Sin embargo, esta tesis no utiliza el interesante libro de Léonard-Charles-André-Gustave Gallois (1789-1851), *Histoire de l'Inquisition d'Espagne, suivi d'un coup d'œil général sur les Inquisitions européennes, suite et complément à l'Histoire de l'Inquisition d'Espagne*, 8ª ed., Imprimerie d'Ad. Blondeau, Paris, 1851, que menciona el caso de fray Froilán Díaz. Igualmente le hubiera resultado de utilidad lo que dice de Fray Froilán, P. Mis de Villars, en sus *Mémoires de la Cour d'Espagne, de 1679 à 1681*, publicadas y anotadas por A. Morel-Fatio y que vienen precedidas de una introducción del Marqués de Vogüé, E. Plon, Paris, 1893.

Resulta muy sorprendente, en primer lugar, que no se incluya en esa relación de los archivos consultados ninguna referencia a los fondos documentales del Archivo histórico de la Universidad de Zaragoza. Estamos, pues, ante un trabajo sobre “Las facultades de leyes y de cánones de la Universidad de Zaragoza en los siglos XVII y XVIII” elaborado sin ninguna consulta de la documentación histórica contenida en el archivo de la propia Universidad que constituye el objeto del estudio.

En segundo lugar, y por lo que se refiere a la utilización de los fondos documentales contenidos en los archivos mencionados en las páginas 82-83, nota 11, una vez hechas al respecto las comprobaciones oportunas, el resultado obtenido (salvo error u omisión) es que Baltar no ha consultado lo que dice haber visto porque no menciona ni una sola vez en notas a pie de página a continuación de la indicada nota 11 diversos fondos documentales que precisa allí como “fondos consultados”. ¿Para qué pretende engañar al lector? Lo desconocemos. Veamos: 1.º) Archivo de la Corona de Aragón, Consejo de Aragón, registro 544, no es citado en ninguna de las otras 129 notas a pie de página de su artículo, aparte de aquella en la que dice haberlo consultado. ¿Dónde lo cita Vd., Baltar? ¿Dónde lo ha manejado? ¿Por qué manipula la buena voluntad de las lectoras y lectores de su artículo? 2.º) Archivo de la Corona de Aragón, Códices, libro 232, no es citado en ninguna de las otras 129 notas a pie de página de su artículo. 3.º) Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajos 6811, 6814, 6815, 6816, 6821, 6822, 6826, 6833, 6835, 6836, 6844, 6845, 6846, 6847, 6849, 6850, 6855, 6857, 6858, 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 6877 y 6878 no citados en ninguna de las restantes 129 notas a pie de página de su artículo. 4.º) Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajos 13359, 13361, 13362, 13366 n.º 123, 13366 n.º 161, 13379 y 17791 no citados en ninguna de las restantes 129 notas a pie de página de su artículo. 5.º) Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajos 50890, 50891, 50892, 50894, 50895, 50896 y 50899 no citados en ninguna de las restantes 129 notas a pie de página de su artículo. 6.º) Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajos 52559-2, 52561, 52562, 52563 y 52564 no citados en ninguna de las restantes 129 notas a pie de página de su artículo. 7.º) Biblioteca Nacional, Manuscritos 632, 939, 7377 y 12016 no citados en ninguna de las restantes 129 notas a pie de página de su artículo.

Por otro lado, la ponencia de Juan Francisco Baltar carece de un aparato bibliográfico amplio y adecuado para un estudio que abarca nada más y nada menos que dos siglos. Hay bibliografía que menciona y que no cita, bibliografía que ni menciona ni cita, y que al parecer ni siquiera conoce, y alguna referencia bibliográfica equivocada. Se descubren también algunos errores en torno a personajes históricos, que confunde, que ya los confundía en otros estudios suyos anteriores, pero esa tarea será minuciosamente estudiada en un artículo que se publicará próximamente en otra revista.

Lo que sí queda claro es que el Aragón y la Navarra del tránsito del siglo XVIII al XIX ya no eran lo que fueron. Se habían poblado de truhanes y era un mundo en el que faltaban los caballeros y sobraban los escuderos. Sin embargo, hubo quienes mantuvieron el nivel como Cristóbal de Escudero, el mercader de telas de que nos habla Alfred de Serviez<sup>3</sup>, dentro de un panorama calificado como demoníaco. También en la vecina Navarra Juan de Escoiquiz tuvo problemas con sus colaterales y fámulos y por su servilismo ante el francés, y esa falta de moral pública y social, de

<sup>3</sup> Alfred-Emmanuel-Roergas de Serviez, *Le Demon du Midi, chronique espagnole*, Éditeur Charles Lachapelle, Paris, 1836, p. 131.

no respetar los acuerdos, ni los pactos, está en el origen de que Blas de Ostolaza se viera obligado a publicar un manifiesto moral<sup>4</sup>. Por contra, un personaje prácticamente desconocido, Francisco de Paula Escudero, era diputado en las Cortes de Cádiz por Navarra y ese sí respetaba los pactos de caballeros. El inglés Murray, sin embargo, sitúa el panorama con elegancia<sup>5</sup>.

Francisco Zaragoza Ayarza escribe una ponencia sobre la vida y obra de Diego Fraylla, un presbítero del siglo XVI (pp. 47-78). Este tipo de trabajo es para una comunicación, no para una ponencia pues desacredita la relevancia del encuentro, ya que nos acerca a la microhistoria y al localismo, tan mal vistos en nuestros días. El catedrático de Historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Carlos Forcadell Álvarez, aporta un trabajo reducido sobre “La Universidad liberal: Jerónimo Borao y la Universidad de Zaragoza” (pp. 131-140), en el que el personaje central Borao (1821-1878) fue Rector de dicha Universidad. Ignacio Peiró dedica su ponencia a un estudioso realmente relevante, Eduardo Ibarra Rodríguez (1866-1944), doctor en Derecho y en Filosofía y Letras, y catedrático de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad Central.

Antonio Peiró Arroyo, escritor de variadísima temática aragonesa, estudia la Universidad de Zaragoza en los años 20 del pasado siglo. Interesante lo que dice sobre los orígenes de los cursos de verano de Jaca, implantados a partir de 1926. La ponencia de Miguel Ángel Ruiz Carnicer sobre “La Universidad en la España de Franco. Reflexiones generales y algunos apuntes sobre el caso de Zaragoza” es una síntesis ideológica y política, llena de tópicos, de poco fuste científico, que se olvida de consultar fondos de archivos y en particular el de la Universidad de Zaragoza, más propia de una conferencia que se lee, que de un artículo que se escribe. La intelectualidad de izquierdas sale desprestigiada con trabajos como éste, donde no se dan datos, todo es difuso, y donde lo único medianamente serio que estudia es lo escrito por Luis del Valle Pascual (1876-1950), pero lo lleva a cabo sin profundidad, con vulgaridades, sin entrar a fondo en el substrato nazi que hay en del Valle, como hombre formado en los fundamentos de Gustav Schmoller y en el Verein für Socialpolitik, y su enlace primitivo con el krausismo español. Me parecen incluso más documentadas y sugerentes las comunicaciones de Ángel Alcalde Fernández (pp. 339-351) y Gustavo Alarés López (pp. 373-381).

Una apología de los estudios de Periodismo y Comunicación, a través de los nuevos estudios de Grado, es lo que recoge el periodista Rafael Bardají Pérez en su ponencia.

Autores de las comunicaciones son José Estarán Molinero, Ramiro Adiego Sevilla, Carlos Urzainqui Biel, Francisco Javier Ramón Solans, Luis Gonzaga Martínez del Campo, Laura Bendí Sancho, Ángel Alcalde Fernández, José María Pemán Martínez, Óscar Ortego Martínez, Gustavo Alares López, Ramiro Trullén Floría, Mari Luz Sánchez Gracia, Antonio Ortega Tello, Daniel Sancet Cueto y José María Isla Subías. Muy interesante y de impecable factura la comunicación de Ramiro Adiego (pp. 267-282), pero no tiene nada que ver con la temática del Congreso sobre historia de la Universidad, como la que le precede, salvo que el encuentro tuvo lugar, como ya hemos dicho, en la Almunia de Doña Godina. Muy bien centrados los estudios de Francisco José Ramón Solans sobre “La

<sup>4</sup> Juan Escoiquiz, *Exposé des motifs qui ont engagé en 1808 S. M. C. Ferdinand VII, a se rendre à Bayonne*, L. C. Michaud Imp., Paris, 1816, p. 70.

<sup>5</sup> Manejamos la traducción francesa del Conde Donatien de Sesmaisons, *La crise de l'Espagne*, Normant Imprimeur et Librairie, Paris, 1833. Esta obra ha pasado prácticamente desapercibida entre los estudiosos españoles de finales del XVIII y principios del XIX.

instrumentalización de la revuelta universitaria de 1808: orígenes, límites y rupturas” (pp. 295-308) y de Luis G. Martínez del Campo sobre los orígenes de la Residencia Universitaria de Estudiantes de Zaragoza (pp. 309-319).

Lujosa edición acompañada de cuadros, gráficos, fotografías, características que suelen ser propias del general buenhacer de la Institución Fernando el Católico.

Esperamos poder recensionar las ponencias y comunicaciones del II Encuentro sobre Historia de la Universidad de Zaragoza, con mayor amplitud de lo que lo hemos hecho en relación con el primero. [Recibido el 13 de febrero de 2011].

María del Carmen Amaya Galván

Jean-Jacques Raynal, *Histoire des grands courants de la pensée politique*, Hachette Supérieure, Paris, 2006, 2<sup>nd</sup> edition, 160 pp.

ABSTRACT: This book is the study of the evolution of political thought currents from ancient Greece to the so-called Third Way. Raynal, who was a lecturer in the Law Faculty of the University of Pau and Pays de l'Adour, focuses on Thomism, Liberalism, Conservatism, Socialism, Fascism, Nazism, Technobureaucracy, Ultraliberalism, Chauvinism, Colonial Imperialism, Social Democracy, Labourism, etc. It does not deal with the history of political ideas or doctrines but with ideological and political currents. Raynal's approach is different from that of other very well known handbooks in France, such as Philippe Nemo's or the one directed by Jean Touchard. The latter still being the best one and proof of that is the fact that it is still being republished in France and it has been translated into Italian, Spanish and Portuguese.

KEY WORDS: Thomas Hobbes, Jean Bodin, Edmund Burke, Harold J. Laski, Françoise Mitterrand, Carl Schmitt, Charles de Gaulle, Liberalism, Socialism, Marxism, Leftism.

The author, Jean-Jacques Raynal, lectures in the History of Political Ideas in the Law Faculty of the French University of Pau and Pays de l'Adour. The History of Political Ideas is a subject with a long tradition in France's legal studies, which is usually divided into two parts and taught in two different academic years. On the one hand, the History of Political Ideas until 1789 and, on the other, the History of Political Ideas from the Revolution until the end of the XX<sup>th</sup> century. Indeed, it is quite an ordeal to write a one-hundred-and-sixty-page handbook which covers from Pericles to the Third Way, put forth by Anthony Giddens in 1998, but we find it appropriate since it is extremely concrete and, therefore, may become a useful and clear tool for the History of Political Ideas student.

St. Augustine, St. Thomas Aquinas, Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes, Jean Bodin, Jacques Bossuet<sup>1</sup>, Edmund Burke, Louis de Bonald, Auguste Comte, Hippolyte Taine, Ernest Renan are some of the authors who parade through the first pages of this book.

<sup>1</sup> See Ombretta Fumagalli Carulli, "I fondamenti religiosi dell'assolutismo in Bossuet (La chiesa come società privilegiata e la sua libertà)", in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, XIV, n. 2 (1975), pp. 548-628.



Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca and Robert Michels's Elitist theories along with James Burham and Max Weber's Technocracy and Techno-bureaucracy, as well as Zbigniew Brzezinski's Technotronic revolution and David Easton's Cybernetic formulations applied to Politics are clearly and elegantly put forward.

Raynal cannot help but pay attention to Joseph de Maistre, who is a renown and significant figure in the areas of social thought, philosophy of Law, and history of political ideas<sup>2</sup>, being one of the greatest fighters against the godphobia inherited from the XVIII<sup>th</sup> century.

Philosophy and the Enlightenment, in what is called the assault on Absolutism, are also included with Francois-Marie Arouet Voltaire, Denis Diderot and Jean-Jacques Rousseau. He, then, reviews the crisis of Liberalism, Léon Bourgeois's Radicalism, John Maynard Keynes's Neo-Liberalism, and Raymond Aron, Karl Popper and the ultra-liberal Friedrich August von Hayek and Milton Friedman's criticism to Totalitarianism and the Welfare State.

The essentials of French and German nationalisms during the XIX<sup>th</sup> and XX<sup>th</sup> centuries, Charles de Gaulle's Nationalism and the *grandeur* of France are outlined. There are other issues succinctly pointed out by Raynal, such as Benito Mussolini's Fascist Corporatism and George Sorel's influence on his thought, Fascist Voluntarism, the Italian empire ideally trying to rebuild the Roman Empire through its colonial conquests, the rejection of Socialism, and the assessment of intermediate bodies which led to the constitution of the Chamber of Fasci and Corporations, in addition to the Chamber of Deputies and the Senate.

When Nazism is tackled, to which quite a few pages are dedicated (pp. 65-68) if we consider the brevity of the book and the fact that it covers more than two thousand years of history, attention is focused on Adolf Hitler (1889-1945), as it could be expected, on the attractiveness of his ideology in times of crisis in Germany, the principles of Nazism: one people, one State, one head (*Ein Volk, ein Reich, ein Führer*), Racism, the *Führerprinzip* and the Totalitarian State, but Dr. Goebbels is forgotten and Carl Schmitt (1888-1985), who was a professor in the University of Berlin and made the most successful legal and political achievements within Nazism, is not mentioned. Schmitt was arrested by the Russians, in April 1945, and by the Americans, in September 1946, being sent to a concentration camp. He was interrogated several times, more specifically, by Robert Kempner on three occasions in April 1947, and the Nazi Carl Schmitt avoided every single question with amazing cynicism. When he was asked by Kempner: «Did you seek to achieve a new international legal order in accordance with Hitlerian ideas?», Schmitt answered: «Not in accordance with Hitlerian ideas and not sought to achieve but diagnosed». Schmitt tried to justify that he had fallen from grace within the Nazi regime in 1936, but there were some aspects which remained unclear such as the lectures delivered by him after 1936 in Budapest, Bucharest, Salamanca, Barcelona, Coimbra, the

---

<sup>2</sup> F. L. R. Sassen, in his biographical work devoted to Joseph de Maistre, published in *Filosofisch Lexicon* (Uitgeverij. N. V. Standaard – Boekhandel, Antwerpen – Amsterdam, 1958), states the following: «De Maistre is overtuigd, dat de waarheid a.h. mensel. verstad door de Schepper in ingestort, maar dat het inzicht daarin door de zondeval is verduisterd. Dientevolge heeft de mens op theoretisch en op praktisch gebied leiding nodig. Het inzicht i.d. waarheid krijgt hij terug door de overlevering, vastgeled en tot uiting geracht in de taal, warvan God zich bedient om het mensdom te beleren. Op staatkundig gebied kan alleen de abs. monarchie voldoende leiding geven m orde en welzijn te verzekeren. de mens moet niet trachten de leiding v.d. goeddelijke voorzienigheid te begripen; deze onttrekt zich aan alle berekening v. menselijke wijsheid» (p. 178).

German Institute in Paris (which was a very significant centre for Nazi espionage, where he had been invited by Dr. Epting), etc. Schmitt described himself as an intellectual adventurer and considered a myth had been created around him: «The Dr. Carl Schmitt myth is pure myth. Carl Schmitt is quite a peculiar individual, not just a professor; he is also a composite of various other individuals. I observed this when I was interrogated by Dr. Flechteim». After avoiding Robert Kempner's impertinent questions with great intellectual ability, at a certain point of the interview, he stated: «I wanted to give the term National Socialism my own meaning», because Schmitt kept assuring that in 1936 had given up the National Socialist sin, a fact which, according to many of his publications after this date and his theories regarding the Jewish people, remains completely unclear. The Nazi Schmitt's most pristine and totalitarian political thought has been unveiled with the help of many publications from France during the last twenty years.

This handbook on the history of political thought currents pays particular attention to Islamic Totalitarian Theocracy models, which have never been included in classical French handbooks on the history of political ideas. Raynal writes about the Taliban ideology in Afghanistan, the terrorist movements linked to al-Qaida, the Iranian revolution model, and about the idea that «temporal power should darken before spiritual power» (p. 31).

As far as Socialism is concerned, Raynal points out that François Mitterrand was a Third Way, but which does not coincide at all with Anthony Giddens's idea of a Third Way between right and left, as a Social and Democratic centre. On the contrary, the French Socialism which made Mitterrand the President of the V<sup>th</sup> French Republic in 1981 was «the symbol of an alternative» of society as a whole, where there were ministers who belonged to the French Communist Party in the Government of the Republic and a significant increase in nationalization and a democratization of access to culture. It is also different from British Labour or from Harold J. Laski (1893-1950) and the London School of Economics and Political Science founders' approach to Socialism.

Obviously, Jean-Jacques Raynal's handbook is in no way comparable to the classical book on the history of political ideas, directed and coordinated by Jean Touchard<sup>3</sup>, which has been translated into Italian, Portuguese and Spanish.

And no-one could say it comes close to the history of the evolution of political ideas contained, above all, in the second volume of Philippe Nemo<sup>4</sup>'s book. Even Jean-Luc Chabot<sup>5</sup>'s work has a depth which cannot be found in Raynal's.

Other summary books such as Dimitri Georges Lavroff<sup>6</sup>'s have been widely accepted but other classical works on the subject, as is the case of Georges

<sup>3</sup> Jean Touchard *et alii*, *Histoire des idées politiques*, Presses Universitaires de France, Paris, 2006, Vol. 1, XI + 382 + XI pp. and *Histoire des idées politiques*, Vol. 2, *Du XVIII<sup>e</sup> siècle à nos jours*, Presses Universitaires de France, Paris, 2007, pp. 383-870. The first French edition of Touchard's historical and established handbook is from 1959.

<sup>4</sup> Philippe Nemo, *Histoire des idées politiques aux Temps modernes et contemporaines*, Presses Universitaires de France, Paris, 2002 (we have consulted the reprint from November 2003), 1,428 pp. The previous book, which is entitled *Histoire des idées politiques dans l'Antiquité et au Moyen Âge*, Paris, 1999, was awarded the Kœnigswarter Prize from the French Academy of Moral and Political Sciences.

<sup>5</sup> Jean-Luc Chabot, *Histoire de la pensée politique: XIX<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup>*, Masson, Paris, 1988, and his *Histoire de la pensée politique: fin XVIII<sup>e</sup> – début XXI<sup>e</sup> siècle*, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2006, 320 pp.

<sup>6</sup> Dimitri Georges Lavroff, *Histoire des idées politiques depuis le XIX<sup>e</sup> siècle*, Dalloz, Paris, Fourth edition, 155 pp.

Lescuyer and Marcel Prélot<sup>7</sup>'s book, have ennobled French research on the history of political ideas. Nevertheless, Raynal is the author of a suggestive book with a certainly original subject distribution. [*Recibido el 6 de febrero de 2011*].

María del Carmen Amaya Galván  
Manuel J. Peláez

Félix Rebollo Sánchez, *Antonio Machado entre la Literatura y el Periodismo*, Editorial Fragua, Madrid, 2008, 104 págs.

ABSTRACT: Volumen de carácter ensayístico centrado en la figura de Antonio Machado Ruiz, nacido en Sevilla y muerto en Collioure (Rosellón, Francia), mientras abandonaba España. Félix Rebollo trata de ofrecer en cuatro breves capítulos los rasgos definitorios de la obra poética del biografiado al tiempo que deja entrever las características del pensamiento político y de la filosofía social recogidas en la prosa del andaluz, en especial en diversas colaboraciones en periódicos y revistas, dejando patente la influencia que sobre Machado ejerció su estancia en la Institución Libre de Enseñanza sobre todo en su concepción pedagógica liberal.

PALABRAS CLAVE: Antonio Machado Ruiz, Institución Libre de Enseñanza, Modernismo, Generación del 98, Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, Eugeni d'Ors i Rovira, Félix Rebollo Sánchez.

Volumen de carácter ensayístico centrado en la figura de Antonio Machado Ruiz – nacido en el sevillano Palacio de las Dueñas el 26 de julio de 1875 en el seno de una familia de tradición culta y liberal, su padre era un gran jurista, Antonio Machado Álvarez (1846-1893), y fallecido en Collioure (Francia) el 22 de febrero de 1939— donde el A., en su doble calidad académica de doctor en Filología Hispánica y en Ciencias de la Información, trata de ofrecer en cuatro breves capítulos los rasgos definitorios de la obra poética del biografiado al tiempo que deja entrever las características del pensamiento filosófico, social y político recogido en la prosa del andaluz, en especial en diversas colaboraciones en periódicos y revistas.

Destaca Rebollo que, en la personalidad de Antonio Machado, es patente y fácilmente reconocible la influencia que sobre él ejerció la Institución Libre de Enseñanza donde, una vez trasladada su familia a Madrid, tuvo ocasión de completar su formación, quedando imbuido de sus principales ideales especialmente de la defensa institucionista de una concepción pedagógica integral alejada de cualquier inclinación partidista, que luego pondría en práctica en su faceta docente. Por la ILE pasaron multitud de personajes de indudable relieve para el mundo de la cultura (como he tenido ocasión de poner de manifiesto en otra de las reseñas bibliográficas publicadas en esta sede y número) entre ellos, Juan Ramón Jiménez (1881-1958) a quien Rebollo empareja en principio con Antonio Machado integrándolos, desde el punto de vista poético, dentro de un simbolismo intimista de

---

<sup>7</sup> Georges Lescuyer and Marcel Prélot, *Histoire des idées politiques*, Dalloz, Paris, Eighth edition, 1986, 942 pp.

corte modernista aunque con diferente evolución al tiempo que constata la profunda admiración del biografiado por Rubén Darío (1867-1916).

Desde el punto de vista de los recursos literarios y elementos que marcan la producción de Antonio Machado, el A. incide en la obsesión por el tiempo, en su apreciación del problema existencialista, en el amor como sufrimiento y en su apelación a Dios tras el fallecimiento de su amada Leonor, si bien es en el tratamiento de la obra en prosa del biografiado donde Félix Rebollo Sánchez se muestra mejor documentado, descubriendo al lector la importancia, no bien conocida hasta el momento, del pensamiento político y social de Machado escondido en revistas y periódicos, observando cierto parecido en este género entre Antonio Machado y Eugeni d'Ors i Rovira (1882-1954) y destacando la participación del sevillano en la aparición del periódico soriano *El Porvenir Castellano* al que desde el inicio, en clara muestra de lo aprehendido durante su estancia en la Institución Libre de Enseñanza, le da «un toque pedagógico para ilustrar a tanta gente que no podía acceder a la enseñanza media, y, sobre todo, deseaba que los libros se divulgaran en un medio más accesible como es el periódico» (p. 41).

Tras su paso literario de carácter lírico por el modernismo, la evolución de los acontecimientos en la España de finales del siglo XIX, hacen que Machado se encuadre en la llamada Generación del 98 reconociendo el A. en sus escritos una honda preocupación por el destino de España pues Machado rechaza frontalmente la política del momento que no evoluciona, la que él llama «España de charanga y pandereta», al tiempo que busca el sentido de la patria mediante un mayor conocimiento de sus problemas. Rebollo señala las frecuentes críticas del sevillano al catolicismo nacionalista coincidiendo con Unamuno, y a la política oligárquica española, mientras que alaba a los hombres de estudio y sus artículos periodísticos sirven de «motivación para los que defienden el gobierno constituido más allá de cualquier partidismo ideológico» (p. 55).

El A., que no asimila las razones por las que Machado «tuvo que marcharse de su patria en contra de su voluntad; precisamente él, que con sus escritos había contribuido a regenerar España de tanta apatía, intolerancia e incultura» (p. 56), ofrece después las consideraciones recogidas en diversos periódicos y revistas que la obra de un ya fallecido Antonio Machado mereció a autores como Francisco Umbral (1932-2007), Vicente Aleixandre (1898-1984), Dionisio Ridruejo (1912-1975), Rafael Alberti (1902-1999) u Octavio Paz (1914-1998), entre otros; señalando Rebollo que Machado fue el poeta del exilio, siendo citados sus versos en numerosas ocasiones pues en él se constataba la «sensibilidad histórica que debe iluminar la poesía» (pp. 57 y 58) ya que «Machado lo contemplaba todo a través de sus ideas políticas» (p. 59), crisol de su obra.

El bidocctor Rebollo Sánchez acredita en el libro que recensiono, síntesis de conjunto de la obra machadiana, un selecto conocimiento tanto de la lírica como, muy especialmente, de la prosa del biografiado justificada por la utilización de un interesante aparato científico, con cientos de referencias, donde rastrea cualquier huella de Machado por pequeña que sea dejando traslucir el carácter filosófico del poeta, su sentido crítico de la política española y su innegable intuición creadora influenciada por su paso por la Institución Libre de Enseñanza. [*Recibido el 16 de febrero de 2011*].

María Encarnación Gómez Rojo

Félix Rebollo Sánchez, edición Benito Pérez Galdós, *Santa Juana de Castilla*, Colección Druida, Editorial Fragua, Madrid, 2010, 79 págs.

ABSTRACT: Félix Rebollo Sánchez es un estudioso conspicuo de la literatura española del siglo XX con contenido político y social progresista. Cuenta con dos doctorados y miles de páginas impresas. En esta oportunidad se detiene en la edición de una obra de teatro con comentario preliminar y acotación de personajes, situaciones históricas y circunstancias ideológicas de una obra de Benito Pérez Galdós, *Santa Juana de Castilla*. Rebollo sigue de cerca los resultados ofrecidos en España, Francia y Estados Unidos sobre Galdós y su obra.

PALABRAS CLAVE: Juana la loca, Carlos V, Erasmo de Rotterdam, San Francisco de Borja, Benito Pérez Galdós, Félix Rebollo Sánchez.

Un clásico literario, de un enorme contenido social y ideológico, en una elegante edición llevada a cabo por Félix Rebollo Sánchez, es el pequeño resumen que se puede hacer de esta obra. Pérez Galdós no necesita presentación. Rebollo Sánchez tampoco debiera necesitarla, pero habida cuenta de que la presente recensión se inserta en una revista de historia de las ideas políticas y va dirigida fundamentalmente a profesionales de la Historia del derecho y de las instituciones, la Historia del pensamiento y de los movimientos sociales y políticos, la Ciencia Política y expertos en Traducción jurídica y política, es por lo que vemos conveniente decir algo sobre este doctor en Filología Hispánica y en Ciencias de la Información, catedrático de Lengua y Literatura de un reconocidísimo Instituto madrileño y profesor desde hace bastantes años de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense en la que imparte docencia, habiendo sido acreditado hace tres años como profesor titular de Universidad, sin que por el momento haya podido desembarcar con carácter de dedicación exclusiva en la Universidad por las celotipias y problemas que, a veces, son al caso en las pequeñas taifas cortesanas que influyen en los cenáculos del poder universitario, que no tienen necesariamente que coincidir con el estado de la ciencia.

Benito Pérez Galdós es considerado, entre otros por Félix Rebollo, como el segundo escritor más relevante en lengua castellana, cuestión ampliamente discutible desde muchos puntos de vista, aunque en cualquier caso nadie pone en duda sus genialidades literarias y la profunda crítica social que hay detrás de las mismas. Su teatro está lleno de denuncia política y de enfrentamiento al poder invitando a la reflexión.

*Santa Juana de Castilla* es un drama histórico sobre la reina Juana I la Loca, que fue estrenado en Madrid el 8 de mayo de 1918 (pp. 24 y 29). Juana contaba entre sus libros más preciados *El elogio de la locura* de Erasmo de Rotterdam, asegurándose hasta en el último momento de su vida que no era obra herética. Si lo fuera la hubiera rechazado sin duda. Galdós presenta a la madre de Carlos V en diversos escenarios y opinando sobre su madre la reina Isabel I, los comuneros, los santos, sus hijos, su nieto el futuro Felipe II, con consideraciones incluso altisonantes sobre su reino («para mí no hay más historia que la de Castilla. De esta tierra ha salido todo lo grande que existe en la humanidad») o elogiando la generosidad con pobres y desamparados de doña Juana.

La censura a Carlos V, en boca de su madre, es altisonante en grado sumo: «El César, como llaman a mi hijo desde que fue coronado en Alemania, debiera ocuparse, más que en recomendarme confesores, en administrar los negocios de

Castilla como cumple al Soberano de estos reinos. Mi hijo, desconocedor de las grandes virtudes de este pueblo, donde abundan los corazones rectos y las inteligencias despejadas, nos ha traído acá una nube de flamencos que devoran toda la riqueza, y a la postre nos llevarán a la completa ruina del suelo castellano» (p. 47).

El final es la muerte de la reina atendida por el duque de Gandía, luego elevado a los altares como San Francisco de Borja, que con su vida santa enmendó la mala imagen que dejaron sus parientes los Romanos Pontífices Calixto III y Alejandro VI.

Félix Rebollo acompaña a la edición del texto con una cuidada anotación de personajes y sucesos. La bibliografía que aporta Rebollo le permite hacer reflexiones intrahistóricas enjundiosas. Sin embargo, echamos en falta el libro de Paddy Scott<sup>1</sup> y la obra colectiva dirigida por Phyllis Zatlin<sup>2</sup>. [Recibido el 7 de febrero de 2011].

Miriam Seghiri

Félix Rebollo Sánchez, *Literatura y periodismo en el siglo XXI*, Editorial Fragua, Colección Druida, Madrid, 2011, 260 págs.

ABSTRACT: The aim of the book written by Félix Rebollo Sánchez is to offer the state of art of the relationship between literature and journalism. Although it is not the first time that the author is concerned about this known interaction, as we can see in his last book *Literatura y periodismo hoy*, his contribution with this book, *Literatura y periodismo en el siglo XXI*, is now focused on the origin of the relationship established between literature and journalism, but taking into account the recent publications and expressions arising in the first years of the XXI<sup>th</sup> century. The reader will find in the first chapter an outstanding summary of the origins and the current situation of literature-journalism relationship, from the XVIII<sup>th</sup> until XX<sup>th</sup> centuries. The second chapter is devoted to the literary movements in journalism in the second half of XX<sup>th</sup> and the first years of the XXI<sup>th</sup> centuries, stressing the most relevant publications in novel, poetry, and theatre. The author continues with a third chapter providing a detailed description of several literary magazines that have been considered the most important. The final chapter is focused on the literary review in which social aspects constitute a topic leading the main part of the magazines and newspapers. In short, this book looks at the relationship between literature and journalism in greater detail, stressing as well the importance of both of them and their mutual enrichment.

KEY WORDS: Literature, Journalism, Spanish Literary Magazines, Literary Review, Emilio Castelar, Benito Pérez Galdós, Mariano José de Larra, Leopoldo Alas Clarín, *Madrid Cómico*, *La España Moderna*, *El Porvenir*, *La Ilustración Ibérica*, *La Gaceta Literaria*, *Prometeo*, *Plural*, *Helios*, *Escorial*, *Garcilaso*, *Espadaña*, *Postismo*, *Ínsula*, *Cántico*, Félix Rebollo Sánchez.

<sup>1</sup> Paddy Scott, *Women in the novels of Benito Pérez Galdós and Eça de Queiroz*, Edwin Mellen Press, Lewiston, 2007, VIII + 300 pp.

<sup>2</sup> Phyllis Zatlin et alii/ae, *Juana of Castille. History and Myth of the Mad Queen*, Bucknell University Press, Lewisburg, 2008, 267 pp.

No es la primera vez que este autor se preocupa por el debate acerca de la relación existente entre la literatura y el periodismo. Si bien hace ya más de una década que publicó una obra cuyo título reza como sigue *Literatura y periodismo hoy*, editado por la misma editorial (Fragua), esta obra que presentamos, *Literatura y periodismo en el siglo XXI*, pasa de nuevo revista a la relación de la literatura y el periodismo, haciendo, esta vez, especial hincapié a las novedades contempladas durante estos primeros diez años del nuevo siglo.

Esta obra se vertebra en cuatro capítulos. En el primer capítulo, que lleva por nombre «Orígenes y actualidad de la relación Literatura-Periodismo», el autor realiza un excursus por los aspectos más relevantes a lo largo de la historia que han propiciado el auge y la imbricación entre periodismo y la literatura. El autor sitúa el siglo XVIII como la cuna del fenómeno literario-periodístico, esto es, de publicaciones de «carácter crítico, poético y literario más que informativo» (pág. 12)<sup>1</sup>.

Continúa con el siglo XIX en el cual la prensa literaria adquiere todo su esplendor hasta tal punto que el mismo Emilio Castelar hilvana las siguientes palabras: «no comprendo una sociedad sin ese libro inmenso de la prensa diaria». Es un siglo donde el público comienza a concienciarse de la importancia de leer el periódico y de estar continuamente informado, de tal forma que nacen las primeras prensas de opinión con carácter político e ideológico, puesto que los partidos políticos empiezan a manifestar sus opiniones, habida cuenta de la relevancia que va adquiriendo en un público cada vez mayor. Rebollo Sánchez nos revela tres grandes nombres en el seno de la prensa literaria, a saber, Mariano José de Larra<sup>2</sup>, Benito Pérez Galdós<sup>3</sup> y Leopoldo Alas Clarín<sup>4</sup>. Asimismo, el autor destaca en este siglo publicaciones del calibre de *El Europeo*, *No me olvides*, *El Artista* o *El Iris* por acoger colaboraciones literarias. Cierra este siglo con un breve apartado que versa sobre el folletín-novelas<sup>5</sup> por entregas que tuvo una relevante importancia durante la segunda mitad del siglo XIX.

En el siglo XX la «simbiosis» literatura-periodismo se hace aún más patente. El autor, además, en el marco de este siglo, nos ilustra con las distintas revistas que, si bien no dejan de tener un carácter eminentemente periodístico, el componente literario (e incluso, a veces, también el social y el creativo-artístico) se encuentra más arraigado que anteriormente. Valgan como ejemplos de estas revistas *Helios* (1903), *Prometeo* (1908), *Plural* (1925), *La Gaceta Literaria* (1927), entre otras. Para finalizar este primer capítulo, el autor pone de manifiesto la fuerte relación entre literatura y periodismo, que se hace aún más notorio a finales del siglo XX y

<sup>1</sup> Entre los primeros periódicos literarios que nacen en España el autor destaca el *Diario de los literatos en España* (1737), cuyas publicaciones eran, sobre todo, de carácter científico, filosófico y literario y con un cierto interés por reseñar todas las obras españolas y extranjeras; *Correo literario de la Europa* (1780); *Espíritu de los mejores diarios que se publican en Europa* (1787); *La Espigadera* (1790); *Diario Pinciano* (1787); *Correo Literario de Murcia* (1792); *Semanario erudito y curioso de Salamanca* (1793); *Correo de Cádiz* (1795); entre otros.

<sup>2</sup> Larra, quien, como manifiesta Rebollo, «consagra el artículo periodístico definitivamente como género literario» (p. 16), funda *El Duende Satírico del Día* (1828) y edita *El Pobrecito hablador* (1832).

<sup>3</sup> Fueron notables sus colaboraciones para el periódico *La Nación* y *Revista de España (científica, literaria y política)*.

<sup>4</sup> Calificado por el autor que la obra que reseñamos como uno de los mejores críticos literarios de esta época, Clarín, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, desarrolló su labor de redactor en distintas publicaciones como *Madrid Cómico*, *La España Moderna*, *El Porvenir*, *La Ilustración Ibérica*, entre otros.

<sup>5</sup> Como él mismo subraya en una nota, el *feuilleton* se trata de una clase de suplemento de carácter literario, aunque posteriormente aparecieron las entregas como literatura de periódico.

principios del XXI, sobre todo, en España, donde, como él mismo afirma, «siempre existió un periodismo más literario que en el resto del mundo» (p. 37).

El segundo capítulo, de título «Movimientos literarios y Periodismo en la segunda mitad del siglo XX e inicio del XXI», Rebollo se centra en los tres siguientes géneros literarios: novela, poesía y teatro, haciendo especial hincapié en las publicaciones más sobresalientes desde los años 40 del siglo XX hasta los primeros años del siglo XXI. Un aspecto notable en las publicaciones de este período fue la defensa de lo social por encima de cualquier otro aspecto. Por ello, el autor nos muestra en este amplio capítulo las distintas relaciones existentes entre novela-sociedad, poesía-sociedad y teatro-sociedad. En el siguiente capítulo, «Las revistas literarias», como su propio nombre indica, Rebollo nos ilustra con la descripción y contextualización de una serie de revistas que, si bien el mismo autor reconoce la existencia de otras muchas, fueron significativas de su tiempo. Asimismo, destaca como representantes de este bloque, las revistas *Escorial*, *Garcilaso*, *Espadaña*, *Postismo*, *Ínsula*, *Cántico*, entre otras. La obra se cierra con un cuarto capítulo dedicado a «La crítica literaria», especialmente desde los años 40. El autor, así, subraya la importancia de la literatura dentro de la crítica. Las revueltas sociales y las ideas políticas son temas que quedan impregnados en las revistas de la época, ya que la vivacidad de éstas, así como el medio por el que se divulgan y la periodicidad con la que se publican constituyen un entorno propicio para todas aquellas manifestaciones, principalmente, las de carácter social.

En suma, nos encontramos ante una obra que ahonda en la interacción ya archiconocida entre periodismo y literatura, donde el primero se alimenta de la segunda, mientras que esta segunda se aprovecha de la gran aceptación que ha tenido el primero desde sus inicios. Una obra donde el autor aúna objetividad y subjetividad, puesto que nos muestra una excelente labor de documentación de los periódicos y las revistas, que nacieron en España (con un tímido carácter literario, al principio, y fuerte consolidación del mismo conforme fueron asentándose en nuestro país) desde el siglo XVIII y que han continuado apareciendo a lo largo del presente siglo, a la par que nos revela su visión particular de las más sobresalientes en cada época. [Recibido el 28 de marzo de 2011].

Cristina Castillo Rodríguez

Alejandro Rodríguez Carrión, Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, José Calvo González and María José Casado Cañero, *In Theatro librorum. Fondo antiguo en la Biblioteca de la Facultad de Derecho*, Faculty of Law, University of Malaga, 2009 [2010], 213 pp.

ABSTRACT: This book is the result of the joint effort carried out during the first thirty years of the Law Faculty of the University of Malaga to compile an ample catalogue of ancient books on legal matters and from many different European publishing houses, published between the XVI<sup>th</sup> and XIX<sup>th</sup> centuries. Cultivated legal literature in print. Moreover, it has been an effort towards not only cultural and physical preservation of the memory of European Law against the ravages of both time and book destruction because of mistreatment, negligence or oblivion, but also to defend the archaeological, and contemporary, value of the plurality of legal dialogue throughout books. The authors of this exquisite book, as regards its paper quality and



illustrations, outline news about the historical developments of the Faculty, its library, its ancient and valuable books room, and its bibliographic collection.

KEY WORDS: Law, Europe, Book culture, Legal print, Alejandro Rodríguez Carrión, Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, José Calvo González, María José Casado Cañero, María José Pérez Garzón.

We would like to introduce a book which includes the Catalogue of ancient legal books in the Faculty of Law of the University of Malaga. It has been compiled to commemorate the thirtieth anniversary of this Faculty which started its academic activity in 1979-1980 academic year, even though the first lectures were delivered in January 1980 by lecturers who came to Malaga from different places.

This Catalogue is due to both Antonio Ortega Carrillo de Albornoz, Roman Law professor of this University, and Alejandro Rodríguez Carrión's initiative. The latter was then Dean of the Law Faculty as well as Public International Law professor, and despite having been suffering a terrible illness which ended his life, he had been devoted to managing and promoting all sorts of activities in the Faculty in the eighteen months prior to his passing and he had taken on this Catalogue as his ultimate goal. His dedication to these activities and to the Law Library was recognized by academic authorities and, as a result, since February 2010 the Library is named after him as Rodríguez Carrión Library. The plaque on which its name is engraved also depicts his particular glasses resting on an open book but this design, together with its rough material, hasn't been fully liked by some.

Rodríguez Carrión and Ortega Carrillo de Albornoz were later joined by José Calvo González, Philosophy of Law professor in the University of Malaga, a learned man in many fields, among which is a deep knowledge of ancient, rare and curious books. He is also the author of the preface to the first catalogue of ancient books of the Law Faculty in Malaga, which was published in 1990 to commemorate the tenth anniversary of this institution and was compiled by Ana María Vera Delgado and Gregorio García Reche. This time, María José Casado Cañero, director of the Law Faculty Library, with the help of María José Pérez Garzón, deputy director, have been responsible for the meticulous systematization, which can be clearly improved, of the ancient book Catalogue, which compiles 255 books, the last of which being that by Robert Watson on king Philip III, published in London in 1793.

The book has a preface, which is called "Praelectio", by Rodríguez Carrión, where we can find an outline of the history of the Faculty which focuses its attention on the evolution of the Library and on the founding of the "Dr. Antonio Ortega Carrillo de Albornoz" research room. This room had 1,632 books, published before 1900, when the preface was written (there are a few more books nowadays), and 255 of these books, published between 1505 and 1800, were selected to become part of the Catalogue. Rodríguez Carrión also deals with special donations to the collection.

Antonio Ortega offers an amusing recount of the thirty years of the Law Faculty in Malaga, which has had three different locations. According to him, the spacious building surrounded by gardens on the Teatinos campus and the fact that the teaching staff have separate offices, which are geographically distant from each other, have contributed to the improvement of relationships among different subject area lecturers since 1991.

José Calvo González, by applying his stimulating theories on the relationship between Law and Literature, outlines a few ideas regarding the convenience to preserve ancient printed books by storing them in suitable locations so as to prevent

their deterioration and make them available for consultation exclusively to specialists on the subject.

The book is full of illustrations, especially so in the “Imaginatio figuræ” section (pp. 33-103), whose authors are Ortega Carrillo de Albornoz and Calvo González.

The Catalogue, which comprises printed books up to 1800, includes publications on Civil Law, Canon Law, Justinian Roman Law, Civil Procedural Law, Criminal Law, Commercial Law, Public International Law, Maritime Navigation Law, etc. Since this review is published in a journal on the history of political ideas and public institutions, we have only selected those books related to political and administration institutions, and to political ideas, which are really scarce. Therefore, we will not deal with those books of a more general nature devoted to either Public, Private, Criminal and Procedural Law at the same time or to Public and Procedural Canon Law.

The books mentioned above are the following (the numbers in square brackets correspond to their position in the Catalogue):

1. [16]. Jacob Friedrich von Bielefeld (1717-1770), *Instituciones políticas: obra, en que se trata de la sociedad civil, de las leyes, de la Policía, de la Real Hacienda, del comercio, y Fuerzas del Estado*, translated from French into Spanish by Domingo de la Torre Mollinedo, Madrid, 1767-1772, 6 Vols.

2. [17]. Jean Blanc de Volx, *Coup-d'œil politique sur l'Europe, à la fin du XVIII<sup>ème</sup> siècle*, Paris, 1800, 2 Vols.

3. [18]. Lambert Bos (1670-1717), *Antiquitatum graecarum, praecipuae atticarum: descriptio brevis*, Leiden, 1740, 136 + 60 pp.

4. [22]. Pedro Rodríguez, Conde de Campomanes (1723-1802), *Juicio imparcial sobre las letras en forma de breve que ha publicado la Curia Romana en que se intentan derogar ciertos edictos del serenísimo señor infante Duque de Parma y disputarle la soberanía temporal con este pretexto*, Madrid, 1769, 8 + 337 + 8 + 48 pp.

5. [24]. Pierre Joseph Cantel (1645-1684), *De Romana Republica sive De re militari et civili ad explicandos scriptores antiquos*, Naples, 1763, 428 pp.

6. [43]. Anonymus, *Ordenanzas para el gobierno y régimen de la congregación de Maestros de Obras de la ciudad de Valencia concedidas por S. M.*, Valencia, 1797, 15 pp.

7. [58]. Nicolò Donato (1539-1618), *El hombre de Estado*, written in Italian, translated into French and, then, from French into Spanish, Madrid, 1789, XVIII + 440 pp.

8. [73]. Johan Paul Felwinger (1616-1681), *Dissertatio politica quam auxiliante Teo T. O. M. sub praesidio DN M. Joh. Pauli Felwinger...*, 1676, 46 pp.

9. [101]. Fernando González de Socueva Arias, *Instrucción manual para la más breve expedición de los casos prácticos, y disputas de inmunidad local: noticia histórica de su origen, progresos*, Sevilla, c. 1776, 8 + 335 pp.

10. [150, 151, 152, 153, 154 y 155]. M. de la Croix (1743-1832), *Constitutions des principaux états de l'Europe, et des États-Unis de l'Amérique*, Paris, 1791-1801, 6 Vols.

11. [163]. Louis-Léon-Félicité de Brancas, Count of Lauraguais, (1733-1824), *Dissertation sur les assemblées nationales sous les trois races des rois de France*, Paris, 1788, 103 pp.

12. [171 y 172]. Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785), *Le droit public de l'Europe, fondé sur les traités*, Genève, 1748, 2 Vols., 10 + 432 y 331 pp.

13. [250]. Vicente Vizcaíno Pérez, *Compendio del Derecho público y común de España o de las leyes de las Siete Partidas*, Madrid, 1784, 2 Vols.

The publishing of this Catalogue has been an excellent idea even though the luxurious edition whose paper grammage, being so expensive, seems inappropriate in these times of economic crisis.

The book was published in February 2010, in spite of the fact that printing was finished on 31 December 2009, as it is stated in the book. Therefore, this work can be considered as a tribute to the person who, even if it was not his original idea, made every effort to put it into practice but was unable to see it finished for Alejandro Rodríguez Carrión passed away on 13th May 2009. [*Recibido el 5 de noviembre de 2010*].

María del Carmen Amaya Galván

Eduardo Sanz y Escartín, *El Estado y la Reforma Social*, Colección Crítica del Derecho, Sección Arte del Derecho, Editorial Comares, Granada, 2010, 220 págs.

ABSTRACT: Edición de una obra de Eduardo Sanz y Escartín (1855-1939), político y teórico del Derecho social, de singular relieve incluido por María del Carmen Amaya Galván entre los Doce Padres fundadores de las Relaciones Laborales en España. Sanz ocupó por poco tiempo la cartera de Trabajo y fue Presidente del Instituto de Reformas Sociales.

PALABRAS CLAVE: Eduardo Sanz y Escartín, José Luis Monereo Pérez, Instituto de Reformas Sociales, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Doce Padres fundadores de las Relaciones Laborales en España.

Como novedad bibliográfica destacada del basto mercado editorial de comienzos del año 2010 aparece la reedición de una obra clásica que sigue engrosando cuantitativa –por su número– y cualitativamente –por su calidad– el ya de por sí amplio catálogo de volúmenes de juristas universales que en su momento realizaron obras de referencia para la ciencia jurídica, social, filosófica o económica. En este sentido, la editorial Comares tiene el prestigio de ir reeditándolas –en muchos casos con unos estudios preliminares profundos y completos elaborados por profesionales académicos de distintas universidades españolas, como es el caso– en una colección específica –Crítica del Derecho– en una sección determinada denominada acordemente –Arte del Derecho–, dirigida por José Luis Monereo Pérez. Circunstancia que ha posibilitado a esta última convertirse en punto de referencia nacional e internacional para todo aquel investigador que se precie, no sólo porque su lectura adquiere carácter necesario y fundamental por la formación intelectual y conocimientos de rigor que ofrece, sino también para tenerla en cuenta como elemento de contraste, con los que poder llegar a adquirir una adecuada perspectiva científica.

En esta ocasión se da noticia e incita a la lectura reflexionada de la obra *El Estado y la Reforma Social*, del que llegó a ser Presidente del Instituto de Reformas Sociales y Ministro de Trabajo durante el Reinado de Alfonso XIII, Eduardo Sanz y Escartín. La misma presenta dos grandes bloques bien diferenciados: por una parte, se halla un estudio preliminar a la propia obra en sí, realizado por José Luis Monereo Pérez; y, por otra parte, se encuentra la edición de la obra –también al cuidado del mismo Monereo– que da nombre al volumen de gran calidad, relevancia y brillante

exposición que nos ocupa. En el mismo son nucleares los temas del pensamiento científico, político, jurídico, económico y social del que también fue Catedrático de Economía, que en su conjunto dan nombre coherente y lógico a la obra que aquí se presenta.

El lector, antes de adentrarse en la lectura de la misma, encuentra un estudio preliminar muy completo de Monereo Pérez que, sin duda alguna, tiene la principal, única y exclusiva misión de exponer una semblanza personal, profesional y del pensamiento del autor, así como la influencia de éste. A ello contribuye el sugerente y atractivo título del mismo, *Cuestión social y catolicismo social conservador: el pensamiento reformista de Sanz y Escartín*. En la considerable extensión del prefacio, tras presentar algunos datos biográficos relevantes del mismo y poner de relieve aquellos aspectos más importantes de su trayectoria vital e intelectual, analiza pormenorizadamente el pensamiento de este autor desde la perspectiva de su constitución como representante de la vertiente reformista de la derecha moderada. En este sentido, encuadra su personalidad y pensamiento en la llamada escuela católico-conservadora reformista que, a su vez, se halla dentro de la corriente del catolicismo social. Así contextualizado, considera a Sanz y Escartín como el auténtico y genuino impulsor de este catolicismo social desde la propia obra que nos ocupa. Todo ello en un ambiente de la época que le tocó vivir al autor caracterizado por la emergencia de este mismo catolicismo social con la Encíclica *Rerum Novarum* de León XIII y la influencia que tuvo ésta en la concepción de Sanz y Escartín de la cuestión social, muy especialmente tomando como premisa de la misma su base económica y el carácter más complejo de ella —ético, cultural, antropológico, etc.—.

Realizadas estas precisiones presentadoras del estudio preliminar, el lector se encuentra con la clásica obra de Sanz y Escartín. La misma, tal y como se afirma en la introducción, es un estudio de los medios a través de los cuales puede el Estado contribuir a que se realice la justicia entre los hombres, principalmente en el orden de las relaciones económicas, y a fundar un estado de solidaridad donde predominen sin restricciones el egoísmo y la fuerza.

El desarrollo de este objetivo lo realiza el autor en veinte capítulos de extensión considerable y tratamiento político, jurídico, económico y social encomiable, que son los que componen la obra. Sucesiva y separadamente en cada uno de ellos se ocupa de: la crisis social; la sociedad y del Estado; la acción del Estado; el individualismo; el socialismo; la acción del Estado como moderadora de la extremada competencia industrial; la reforma social en los campos; la necesidad de leyes protectoras del trabajador; la limitación legal de las horas de trabajo de mujeres y niños; el trabajo nocturno y del reposo dominical; la duración del trabajo de los adultos; el seguro de los obreros; el Estado y las asociaciones para fines económicos; los impuestos en su relación con el problema social; la política comercial de los Estados en su relación con el problema social; la guerra, el fomento de intereses materiales e instrucción pública, en sus relaciones con el problema social; la religión y su virtud social; y del establecimiento de unas conclusiones significativas.

En cada uno de los mismos se fijan, a su vez, una serie de completos epígrafes que se ocupan concretamente de aspectos o dimensiones de los temas monográficos de los capítulos, en los que claramente quedan reflejadas las concepciones del autor que nos ocupa. Son significativos y relevantes, al respecto, a modo de ejemplo y respecto al orden de capítulos establecido, las páginas dedicadas a: las luchas sociales en la antigüedad y la moderna crisis social; la

naturaleza del Estado y la necesidad de una intervención eficaz del mismo; los derechos del trabajo y las leyes civiles en el marco de la acción estatal, el fundamento de su intervención en favor del proletariado; las consecuencias de las doctrinas individualistas en la vida industrial; los abusos a los que da margen el individualismo; el socialismo en la historia; la evolución y la revolución en materia de reformas sociales; la necesidad de reconstituir el haber colectivo como contrapeso al individualismo actual; el equilibrio necesario entre la propiedad individual y la colectiva; las leyes protectoras del trabajo; las huelgas como medio de mejora de la situación del proletariado y la introducción de la mujer y el niño en las fábricas; el derecho individual y el derecho social; la intervención del Estado en la duración de la jornada de trabajo; los diferentes sistemas seguidos para asegurar a los obreros contra la eventualidad de accidentes y enfermedades y contra la vejez; las leyes protectoras de la salud y del salario del obrero; los impuestos directos e indirectos y la desigualdad de condiciones sociales; el trabajo como principal factor de riqueza; el buen empleo de los recursos del Estado; la necesidad del principio religioso en las sociedades y la inevitabilidad de la reforma social.

Mención especial merece el último capítulo ya mencionado, pues se encuentra dedicado al establecimiento de un conjunto de conclusiones oportunas e ilustrativas del global de la obra, dando así mayor importancia al conjunto de las ideas y argumentos centrales fundamentales y destacadas de este libro clásico de Sanz y Escartín, poniéndose así de manifiesto la especial dimensión propositiva jurídica, política, social y económica que desde el catolicismo social representa.

Completando el volumen y, en este sentido, actualizando su reedición, se encuentran como anexo dos textos esenciales para la comprensión de la misma, el pensamiento del autor y la corriente del catolicismo social: la Encíclica *Rerum Novarum* de León XIII –Sobre la situación de los obreros– y la Encíclica *Quadragesimo Anno* de Pío XI –Sobre la restauración del orden social y su perfeccionamiento de conformidad con la Ley Evangélica–.

En suma, como conclusión a todo el conjunto, podemos decir que estamos ante un volumen de referencia y de obligada consulta para quien tenga la intención de acercarse a la historia del pensamiento político, jurídico y social. Es así porque se realiza un análisis sumamente relevante e innovador que pone de manifiesto tanto la destacada talla intelectual de Eduardo Sanz y Escartín como la influencia directa de su obra en el catolicismo social, circunstancia que incide en el carácter fundamental y básico de su lectura. [Recibido el 17 de diciembre de 2010].

Luis Ángel Triguero Martínez

Alexander K. Schmidt: *Erfinderprinzip und Erfinderpersönlichkeitsrecht im deutschen Patentrecht von 1877 bis 1936*, Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht 31, Mohr Siebeck, Tübingen, 2009, 300 Seiten.

ABSTRACT: En esta obra se hace un recorrido histórico a través de la evolución legislativa de la Ley de la Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia alemana desde su gestación, en 1877, hasta llegar a la *Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht 31*, de 1936, para lo que el autor se basa en una consulta de fuentes documentales exhaustiva. Se incide, pues, en la importancia de esta ley en el seno del nacionalsocialismo como vehículo para el fortalecimiento del poder económico y político de la Alemania de la época.

PALABRAS CLAVE: Ley de la Propiedad Intelectual, Nationalsozialismus, Kees Gispén, Seckelmann Margrit, Frente Alemán del Trabajo, Adolf Hitler, Mein Kampf.

Das in Bayreuth beheimatete DFG-Graduiertenkolleg "Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit" hat bereits einige Dissertationen hervorgebracht, die in der Reihe „Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht“ nach und nach publiziert werden.<sup>1</sup> Dazu gehört auch die vorliegende Arbeit, die vom Kaiserreich bis zum NS-Regime dem deutschen Patentrecht und seinem langen Übergang vom Anmelde- zum Erfinderprinzip nachspürt.

In seiner kurzen Einleitung skizziert Schmidt Fragestellung, Quellen und Forschungsstand. Neben gedrucktem Quellenmaterial, insbesondere den Fachzeitschriften „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“ (von 1892 bis 1895 erschienen unter dem Titel „Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz“) und „Markenschutz und Wettbewerb“ zieht der Autor nennenswerte archivalische Quellen heran, die das Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde verwahrt, so die Akten des Reichsjustizamtes, des Reichskanzleramtes und des Kaiserlichen Patentamtes wie des Reichsamtes des Innern. Für die Weimarer Zeit konsultiert er die Akten von Reichsjustizministerium und Reichspatentamt, für die NS-Zeit treten dazu die Akten der Reichskanzlei sowie der Akademie für Deutsches Recht. Nachvollziehbar ist, dass Schmidt NSDAP-Parteiakten nicht umfassend ausgewertet, ist doch ein Großteil nicht überliefert bzw. in sonstigen von ihm ausgewerteten Aktenbeständen enthalten.

Beim Forschungsstand bespricht der Autor die Arbeiten von Kees Gispén<sup>2</sup> und Margrit Seckelmann. Es ist sicherlich richtig, dass Seckelmann in ihrer Dissertation „Industrialisierung, Internationalisierung und Patentrecht im Deutschen Reich. 1871-1914“<sup>3</sup> lediglich bis zum Reformentwurf von 1913 handelt, doch schrieb sie im selben Jahr noch einen bedeutenden Aufsatz, den Schmidt zwar später, jedoch nicht schon beim Forschungsstand (S. 6-7) beim Namen nennt, nämlich: „Der 'Dienst am schöpferischen Ingenium der Nation'. Die Entwicklung des Patentrechts im Nationalsozialismus“.<sup>4</sup>

Aber nun Näheres zum Aufbau des Buches:

Die klassisch-chronologisch, in fünf Kapitel gegliederte Untersuchung Schmidts beleuchtet die Patentgesetze von 1877 und 1891, die Reformdiskussion bis zum Stettiner Kongress für Gewerblichen Rechtsschutz von 1909, sodann den Reformentwurf von 1913 und sein Scheitern 1914, ehe die Weimarer Reformvorhaben mit den Abgrenzungsproblemen von Patent- und Arbeitsrecht sowie schließlich die große Patentrechtsreform von 1936 nachfolgen. Dabei gelingt es dem Verfasser Erfinderschutz und NS-Ideologie anhand des Parteiprogramms, Hitlers „Mein Kampf“ und dessen späteren Äußerungen als Reichskanzler sowie mit Hilfe der Verlautbarungen für Erfinderschutz in der Deutschen Arbeitsfront zu charakterisieren, um letztlich das Patentgesetz von 1936 der NS-Wirtschaftsgesetzgebung einzugliedern. Das Patentgesetz zählte nicht zu den ideologisch aufgeladenen, in Sonderheit antisemitischen Gesetzen, sondern darf als

<sup>1</sup> <http://gkrw.uni-bayreuth.de/index.php?id=162> [8.4.2010].

<sup>2</sup> Über seine Monographien hinaus zuletzt von Bedeutung: Patentrecht und Schutz des geistigen Eigentums, in: Gosewinkel (Hg.), *Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur*, Frankfurt a.M., 2005, S. 267-279.

<sup>3</sup> Frankfurt a.M. 2006.

<sup>4</sup> Veröffentlicht in: Bähr/Banken (Hg.), „Wirtschaftssteuerung durch Recht im Nationalsozialismus“, *Studien zur Entwicklung des Wirtschaftsrechts im Interventionsstaat des "Dritten Reichs"*, Frankfurt a.M., 2006, S. 237-279.

Norm verstanden werden, die bereits zu Weimarer Zeiten entwickelt, aber im Reformstau unerledigt geblieben war. Es beruhte auf inländischen Reformentwürfen und ausländischen Vorbildern. Trotz weltanschaulicher Neutralität konnten es die Nationalsozialisten für sich nutzen; die Erfinder wurden gefördert, weil sie die Wirtschaftskraft Deutschlands stärkten und so mittelbar halfen, die politischen Ziele Hitlers zu erreichen. Der Nationalsozialismus umwarb die Ingenieure, rühmte fortwährend die Erfindingleistungen des deutschen Volkes (S. 207) und gab ihnen mit dem Erfinderprinzip, das das Anmeldeprinzip des Patentgesetzes von 1877 ablöste, die Möglichkeit einer materiellen Belohnung.

Der Preis dieses ausgedehnten Erfinderschutzes war die Ausweitung der Eingriffsmöglichkeiten in die Rechte des Patentinhabers. Da es Ziel war, einen "nur eigennütigen" Gebrauch von Erfindungen zu verhindern, wurden die Mittel der Zwangslizenz und des Vorbenutzungsrechts der öffentlichen Hand erweitert. Dem Regime ging es dabei gewiss um das Benennen der Erfinder als Persönlichkeiten, die dank ihrer Rassezugehörigkeit führungs- und erfindungsstark waren; aus der Rasse mussten ideologiegeschuldet Genialität und Schöpfergeist fließen, die der Volksgemeinschaft wiederum in Form von Erfindungen zugute kommen mussten. Allein der Staat als Verfechter der Volksinteressen war daher befugt, die Erfindungen für öffentliche Zwecke zu verwerten. Dies hätte sicherlich auch durch Betriebserfindungen, die die Industrie als anerkannte Erfindungsart zu festigen hoffte, gelingen können, doch zeigte die patentrechtliche Diskussion seit der Jahrhundertwende bereits in Richtung Erfinderprinzip; insoweit war diese Veränderung nur eine Frage der Zeit und hat letztlich nichts mit NS-Ideologie zu tun. Letztere gab dem Erfinder zwar die "Ehre", das Recht zur Verwertung aber dem Staat, der wiederum den gesamtwirtschaftlichen Nutzen im Auge zu behalten hatte. All dies vermag Schmidt gut herauszuarbeiten und stets quellenbezogen zu belegen (S. 201-209, 224-225, 233, 246). [Recibido el 30 de octubre de 2010].

Thomas Gergen

[1]. Maria Teresa Tatjer Prat, *La Audiencia real en la corona de Aragón. Orígenes y primera etapa de su actuación* (S. XIII y XIV), Col·lecció d'estudis d'història del dret, "Seminari permanent i universitari d'història del dret català Josep M. Font Rius", Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2009, 263 págs.

ABSTRACT: Tras veintitrés años desde que fue defendida en 1986, se ha publicado la tesis doctoral de María Teresa Tatjer i Prat, aparecida precisamente el año de su jubilación. Tatjer contaba con algunas publicaciones sobre la materia de su memoria de doctorado, pero ahora podemos conocer el texto completo de la misma. Bienvenida sea esta tesis dirigida con paciencia infinita por el benemérito Josep Maria Font i Rius, el mejor historiador del Derecho con que contamos actualmente en la Península Ibérica, y es seguro que la misma despertará más comentarios positivos que poco complacientes y circunstancialmente aniquiladores, y muchos aquilatarán la buena labor llevada a cabo por Tatjer. En cualquier caso hay que resaltar la generosidad de quien durante años ha sido el protector de T. Tatjer, Tomàs de Montagut i Estraguès, que ha asumido económicamente la edición en sede universitaria distinta de aquella en la que fue defendida y a la que

Tatjer sirvió durante años, sin que el catedrático responsable de su área de conocimiento le ofreciera oportunidad científica alguna relacionada con la edición de su memoria doctoral.

PALABRAS CLAVE: Audiencia Real de Cataluña, Justicia, Baja Edad Media, Josep Maria Font i Rius, Jesús Lalinde Abadía, Tomàs de Montagut i Estragués.

Cette thèse d'histoire du droit soutenue en 1986 a été retravaillée par l'Auteur devenu, entre temps, un spécialiste reconnu de l'histoire juridique de la Catalogne. Elle bénéficie d'un prologue élogieux du Professeur Font i Rius qui avait été à l'origine du travail. Il est clair qu'il s'agit d'une institution des plus controversée et qui est mise en cause par de nombreux historiens. De fait, son existence montre toute la complexité de l'histoire de la couronne d'Aragon au Moyen Âge, formée alors de territoires variés (Aragon, Catalogne, Corse, Sardaigne, Îles Baléares). Chacune ayant son organisation juridique propre mais où il existe une unique cour royale appelée Audiencia, à l'image de la cour existant dans de nombreux pays d'Europe – particulièrement en France avec la Cour du Roi qui connaîtra une division nécessitée par la complexité croissante des affaires publiques, prélude à la formation de la Cour de Parlement, de la Chambre des Comptes... au cours du XIII<sup>e</sup> siècle.

L'étude très soignée de M. Teresa Tatjer Prat est exposée en deux parties : d'abord la genèse, l'installation et l'évolution historique de l'Audiencia royale. Ce développement lui permet de montrer sa place dans la doctrine médiévale et son évolution jusqu'en 1387. Puis en deuxième partie vient l'analyse de la structure juridique publique du tribunal, de son personnel, sa compétence et enfin son fonctionnement. Un catalogue des sources documentaires, doublé d'un appendice et d'une riche bibliographie actualisée complètent l'étude.

La thèse illustre un problème fondamental dans l'histoire et le temps présent de la Catalogne, du fait de sa volonté autonomiste actuelle. Historiquement, on est en présence d'une institution fondamentale de la monarchie catalano-aragonaise. Elle est le lieu d'une lutte serrée entre le roi et les habitants des royaumes. Elle incarne tout à fait la nature du pouvoir royal médiéval qui ne sépare pas le gouvernement et la justice: cette dernière étant même, on le sait, l'expression majeure de la souveraineté. L'Audiencia est donc l'instrument principal qui permet au roi de remplir son office, de rendre justice et de maintenir l'ordre juridique. Son développement accompagne celui de l'administration centrale de la couronne d'Aragon et précise son champ d'action. Le sujet se situe du moment initial de la création de l'Audiencia jusqu'à son évolution en 1387. A cette date, le roi décide de créer trois vice-chanceliers qui désormais seront davantage attachés à défendre les intérêts de chacun des royaumes qu'ils servent que ceux de la couronne d'Aragon. Ces conséquences, amplifiées par la réforme administrative de l'Audiencia, rompent l'unité entre les royaumes, déjà politiquement fragile. Désormais chaque vice-chancelier préside la cour de chacun des territoires formant la couronne d'Aragon. Et l'Auteur met bien en évidence que lorsque les suppliques émanent des sujets catalans, celles-ci sont reçus par un vice-chancelier catalan qui appuie leurs prétentions lorsqu'elles s'opposent à celle de la couronne.

Dans sa forme juridique, l'Audiencia est une institution régulée par un droit organique spécifique : les *leges Palatinae* du roi Jaume III de Majorque, règles continuées dans la tradition catalane des *Ordinacions* de la maison et de la cour de Pere el Cerimoniós (1341). Il y a donc une évolution et des variantes historiques qui sont introduites peu à peu dans le texte catalan et tiennent compte des changements



affectant les relations entre le roi et les autorités représentants des populations. Le plan suivi par l'Auteur, à la fois, chronologique et synthétique, offre un panorama complet de l'institution et l'étude de l'histoire de l'Audiencia, l'analyse de ses structures (avec une véritable étude prosopographique de son personnel et de son fonctionnement) sont étayées sur des exemples précis. En particulier en ce qui concerne la compétence de la cour, en appel, selon qu'il s'agit de jugements ou d'actes de gouvernement se référant à des décisions administratives dont les parties sont mécontentes – cas des nombreux conflits entre les agents royaux et les particuliers – ou à l'inverse lorsqu'il est question d'un contrôle royaux. Dans l'étude du fonctionnement interne de la Cour, M. T. Tatjer Prat analyse en détail la forme juridique des décisions prises soit majoritairement ou unanimement, le cas des audiences itinérantes, la procédure (action, formes des débats, rédaction et notification des sentences, exécution). Elle y souligne une forte influence des formes imposées par les juristes du *lus comune*.

Notons toutefois un regret : le travail repose sur un fonds d'archives important et des travaux contemporains de valeur, mais il se réfère trop peu, de notre point de vue, à des ouvrages français récents et importants consacrés à l'histoire administrative, et surtout judiciaire, médiévale. Cela n'enlève évidemment pas son intérêt à cette thèse dont la publication est à saluer et qui témoigne, comme les autres études dont nous faisons le compte rendu, de la riche activité de recherche du séminaire de recherche sur l'histoire du droit catalan. Discipline qui gagne à s'ouvrir plus encore aux travaux extérieurs comparatifs, dans un ensemble de projet sur les droits historiques et l'autogouvernement des peuples d'Espagne. Question politique débattue à laquelle tous les historiens du droit doivent évidemment participer. [Recibido el 25 de octubre de 2010].

Gérard D. Guyon

[II]. María Teresa Tatjer Prat, *La Audiencia Real en la Corona de Aragón. Orígenes y primera etapa de su actuación (s. XIII y XIV)*, Col·lecció d'estudis d'història del dret, "Seminari permanent i universitari d'història del dret català Josep M. Font Rius", Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2009, 263 págs.

ABSTRACT: La recientemente creada colección de estudios de Historia del Derecho promovida por el Seminario permanente e interuniversitario al que da su nombre Josep Maria Font i Rius, a iniciativa de Tomas de Montagut i Estragués, está publicando magníficas monografías, que al menos tres de ellas tienen su origen en memorias doctorales, una de ellas difícilísima de hacer, otra monumental y esta tercera sugerente y bien construida. La tesis de Tatjer i Prat hacía falta que se pudiera ver en papel impreso, aunque en realidad mucha gente ya la conocía a través de sus artículos y en forma electrónica. Acierto doble del editor y de la autora porque ahora ya podemos leer las conclusiones sumamente claras a que llegó Teresa Tatjer.

PALABRAS CLAVE: Teresa Tatjer Prat, Derecho público catalán, Baja Edad Media, Audiencia Real de Cataluña, Leyes palatinas de Mallorca, Alfonso el Benigno, Pedro el Ceremonioso, Tomás de Montagut, Josep Maria Font i Rius.

Publicado en septiembre de 2009, como tercer título de la “Col·lecció d’Estudis d’Història del Dret del Seminari Permanent i Interuniversitari d’Historia del Dret Català Josep M. Font Rius” de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona<sup>1</sup>, aparece un nuevo estudio científico de María Teresa Tatjer Prat, profesora titular jubilada de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Barcelona, con toda seguridad la “mejor conocedora”<sup>2</sup> hoy en día de la institución analizada –la Audiencia Real– en territorio aragonés durante los siglos XIII y XIV. Se trata dicha monografía en realidad de su tesis doctoral leída en la Universidad de Barcelona en 1986, en la que obtendrá la máxima calificación –“apto cum laude”–<sup>3</sup>, aunque ya publicada en microfichas con idéntico título [*La Audiencia Real en la Corona de Aragón. Orígenes y primera etapa de su actuación (s. XIII y XIV)*, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1987, 536 pp.] y al margen de la edición impresa, accesible en la actualidad a través de internet con una simple indicación en google.

Teresa Tatjer Prat es de sobra conocida en el ámbito científico de la Historia del Derecho, sobre todo, si nos centramos en el campo de la Historia jurídico catalano-aragonesa; así, entre su producción científica podemos destacar los siguientes estudios: 1) “Constituciones de Cataluña y comentarios de juristas catalanes relativos al fideicomiso”, en *Revista Jurídica de Catalunya*, vol. 77, núm. 4 (1978), pp. 815-826. 2) “Survivance du ius commune dans le droit des successions en Catalogne. Une institution concrète: le fidèicomis”, en *Revue Internationale des droits de l’Antiquité*, XL (1993), pp. 427-446. 3) “La potestad judicial del rey. El Consejo del rey en su función de administrar justicia (s. XIII y XIV)”, en *Actas del XV Congreso de la Historia de la Corona de Aragón: El poder real de la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI)*, tomo I, vol. 2 (1996), pp. 377-388. 4) “L’Administració de justícia segons el dret d’Orta”, en *Actes de les Jornades d’estudi dels Costums d’Orta*, Horta de Sant Joan, 1996, pp. 103-119. 5) “La jurisdicció a Catalunya”, en *Actes de les Jornades sobre el territori i les seves institucions històriques*, vol. I, Barcelona, 1999, pp. 293-333. 6) “La Administración de Justicia real en la Corona de Aragón”, en *Rudimentos Legales*, I (1999), pp. 89-115. 7) “Les cartes de població de Tortosa i el Baix Aragó”, en *Actes de les Jornades d’Estudi commemoratives del 850é aniversari de la concessió de les Cartes de Població cristiana i de Seguretat de jueus i sarraïns de Tortosa (1148/1149)*, Barcelona, 2000, pp. 225-231. 8) “El Dret criminal en els Costums de Miravet”, en *Actes de les Jornades d’estudi dels Costums de Miravet*, T. Montagut i Estragués y J. Serrano Daura (coords.), Jornades d’Estudi sobre els Costums de la batllia de Miravet en commemoració del 680é aniversari de la seva concessió (Gandesa, 1319/Arles, 1320 – 1999/2000. Actes Gandesa, 16, 17 i 18 de juny de 2000), Gandesa, 2002, pp. 191-198. 9) “Notas sobre la jurisdicción civil del Veguer de Barcelona (siglo XIV)”, en *El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta: XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó*,

<sup>1</sup> Una pequeña muestra de la prolífica producción de dicho Seminario lo podemos comprobar en Manuel J. Peláez, “Seminarios de 2009 de Historia del Derecho y de las Instituciones, de Derecho Romano y de Derecho Histórico Comparado en la Universitat Pompeu Fabra (Seminario permanente “Josep Maria Font Rius)”, dentro de la Sección “Noticias” de la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXXI (2009), pp. 553-557.

<sup>2</sup> Jesús Fernández Viladrich, “Serrano Daura, Josep, y Montagut i Estragués, Tomàs, editores de *El Territori i les seves Institucions Històriques*, Fundació Noguera, Estudis, 19 y 2, II volúmenes, Barcelona, 1999, 996 pp.”, en *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, XXII (2000), pp. 651-662.

<sup>3</sup> Leída el 18.X.1986 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, ante un Tribunal compuesto por Joaquín Cerdá Ruiz-Funes (quien actuó como Presidente), Tomàs de Montagut Estragués (Secretario), y los Vocales: Salvador Claramunt, Benjamín González Alonso (Director actualmente del *Anuario de Historia del Derecho Español*) y Aquilino Iglesia Ferreirós.

Barcelona. Poblet. Lleida, 7-12 de diciembre de 2000 (Actes), coord. por S. Claramunt Rodríguez, Vol. 3, 2003, pp. 943-952.

Además destacamos su autoría en la redacción de las siguientes voces: “Audiencia Reial”, “Consell del Rei”, “Jutge de la Cort Reial”, “Oidor”, “Ordinacions de 1344”, “Promovedor”, “Relator”, “Regent de l’Audiència”, dentro del *Diccionari d’Història de Catalunya*, Barcelona, 1992 [pp. 75-76, 289, 599, 750, 760, 854, 902 y 904 (respectivamente)].

La “Presentación” a dicha monografía (pp. 15 y 16) corre a cargo de Tomàs de Montagut Estragués, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Pompeu Fabra y Director del “Seminario permanente e interuniversitario de Historia del Derecho Catalán *Josep Maria Font i Rius*”.

Como es público, y ya puse de manifiesto en otro foro científico<sup>4</sup>, el Área de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, adscrita a su Departamento de Derecho, ha dado ya importantes aportaciones a la historia de nuestro Derecho, así, y entre otras, destacamos las siguientes: 1) *Actes de les Jornades d’Estudi: 1296-1996: 700 anys dels Costums d’Orta*, Diputació de Tarragona i l’Ajuntament d’Horta de Sant Joan, 1996. 2) *Història del pensament jurídic*. Curs 1996-97 dedicat a la memoria del professor Francisco Tomás y Valiente, edició a cura de T. de Montagut, Col·lecció Àgora, n. 2, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 1999. 3) *Actes de les Jornades d’estudi sobre els costums de la Batllia de Miravet, 1319/1320 – 1999/2000* (Jornades d’Estudi sobre els Costums de la Batllia de Miravet Gandesa, 16-18 de juny de 2000), Diputació de Tarragona i Consell Comarcal de la Terra Alta, 2002.

Y, dentro de la citada Colección de Estudios de Historia del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, los siguientes trabajos<sup>5</sup>: 1) Núm. 1 de la Colección: J. Ribalta i Haro, edició a cura de T. de Montagut, *Dret urbanístic medieval de la Mediterrània*, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2005<sup>6</sup>. 2) Núm. 2 de la Colección: S. Solé i Cot, *El gobierno del Principado de Cataluña por el Capitán General y la Real Audiencia –el Real Acuerdo– bajo el régimen de Nueva Planta (1716-1808). Una aportación al estudio del procedimiento gubernativo a finales del Antiguo Régimen*, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, primera ed., diciembre 2008<sup>7</sup>. 3) Núm. 4 de la Colección: M. Bajet Royo, *El jurament i el seu significat jurídic al Principat segons el Dret General de Catalunya (segles XIII-XVIII)*, edició de la “Forma i pràctica de celebrar els juraments i les eleccions a la ciutat de Barcelona en el segle XV”, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2009<sup>8</sup>.

Pues bien, en la mencionada Introducción, T. Montagut muestra su satisfacción por la publicación del libro de T. Tatjer, tanto por ser un trabajo de investigación dirigido en su día por el maestro Font i Rius, como por abordar una de las instituciones básicas del Derecho público de la Monarquía catalano-aragonesa: «una institució de dret públic dotada de jurisdicció que s’estén fins allà on arriba la del monarca». Es de destacar que dicha publicación no hubiera sido posible sin la ayuda y esfuerzo de la propia Universidad Pompeu Fabra, contando además con la

<sup>4</sup> Tomo XXXII de la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de Valparaíso* (Chile); vid. nota núm. 7.

<sup>5</sup> Monografías jurídicas cuyo contenido –completo– es accesible a través de la web:

<http://www.upf.edu/historiadeldret/publicacions/>

<sup>6</sup> [http://www.upf.edu/historiadeldret/\\_pdf/lilibre.pdf](http://www.upf.edu/historiadeldret/_pdf/lilibre.pdf)

<sup>7</sup> [http://www.upf.edu/historiadeldret/\\_pdf/El\\_gobierno\\_del\\_principado\\_de\\_Cataluxa.pdf](http://www.upf.edu/historiadeldret/_pdf/El_gobierno_del_principado_de_Cataluxa.pdf)

A esta importante aportación del Solé i Cot le he dedicado una elogiosa recensión en el núm. XXXII (2010) de la prestigiosa *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, pp. 497-506.

<sup>8</sup> [http://www.upf.edu/historiadeldret/\\_pdf/El\\_jurament\\_i\\_el\\_seu\\_significat.pdf](http://www.upf.edu/historiadeldret/_pdf/El_jurament_i_el_seu_significat.pdf)

pertinente subvención de los Proyectos de Investigación: “Els drets històrics i l'autogovern dels pobles de’Espanya” y “El derecho histórico en los pueblos de España: ámbitos público y privado (s. XII-XXI)”, a los que por ser de justicia hemos de nombrar. El Prólogo de la obra (pp. 17 y 18) corresponde a J. M. Font i Rius, maestro de una larga saga de historiadores del Derecho y figura central y cumbre de la historiografía jurídica española y europea del periodo actual<sup>9</sup>; él fue, además, el director de la tesis doctoral de la autora leída en 1986, ahora revisada y actualizada en la presente edición.

En el mismo, el *viejo maestro* muestra su satisfacción por la publicación de la obra, haciendo un recorrido *sentimental* de su preparación tres décadas antes, y adentrando al lector en los entresijos básicos de la institución analizada de forma exhaustiva por la autora de la obra.

Se inicia el contenido del trabajo con la preceptiva y lógica “Introducción” (pp. 21-27), en la que Tatjer Prat aprovecha para agradecer a su maestro, el mencionado Font i Rius, el “constante apoyo y magisterio” a lo largo de su carrera académica, docente e investigadora. En dicha Introducción se procede a la limitación tanto del objeto del estudio –el origen y primera etapa de actuación de la Audiencia Real en la Corona de Aragón desde su orígenes hasta 1387, año en que Juan I promulga la primera disposición descentralizadora de poder a favor de los reinos: la designación de los tres Vicecancilleres, o lo que es lo mismo, hasta que los Oficiales del monarca ya no serán únicos e idénticos para todos los “reinos” de la Corona aragonesa–, como el método seguido –el propio de los estudios instituciones, tal y como reconoce la autora, en el que el plan cronológico comparte protagonismo con el plan sistemático–. Asimismo, se indican las fuentes utilizadas para la redacción del estudio:

- Fuentes normativas: entre las que destacamos, al margen de los preceptivos Ordenamientos de Cortes de los “reinos” de la Corona de Aragón, el *Ordenamiento de Huesca* (1286), *Ordinacions* (1288, 1291 y 1308), *Leges Palatinae* de Jaime II de Mallorca (1337), *Ordinacions* de Pedro el Ceremonioso (1344), y otra serie de fuentes no publicadas como las *Ordinacions* de 1356, 1368, 1372, 1374, 1377, 1378, 1380, 1381, 1383 y 1436, así como las más conocidas *Constitucions y altres Drets de Catalunya*, los *Fori Regni Valentiae* o los *Fueros* de Aragón.

- Fuentes documentales: principalmente de las Secciones “Cancillería Real” y “Real Audiencia” del Archivo de la Corona de Aragón, algunas de las cuales se hallan publicadas en el Apéndice Documental final.

- Literatura Jurídica: destacando las obras de Bosch, Mieres, Fontanella y Antonio de la Oliba.

- Y otro tipo de fuentes: como *Las cuatro grandes crónicas catalanas* y los *Anales de la Corona de Aragón*.

A esta Introducción le sigue un necesario “Estado de la cuestión” (pp. 24-27), en el que la autora resalta la novedad del estudio confeccionado tanto en su redacción primera y original de 1986 como en la actual de 2009, en su edición revisada y actualizada, pues como ella misma reconoce, no existe hoy en día «ningún estudio

<sup>9</sup> Puede verse una interesantísima entrevista a Josep Maria Font i Rius a cargo de Tomás Montagut (29 de abril de 2010) en “Portal Iberoamericano de Historia del Derecho” [portal iushistórico digital patrocinado por las Universidades de Girona y Pompeu Fabra de Barcelona, en línea: <http://www.udg.edu/Default.aspx?alias=www.udg.edu/pihd>].

Sección “Entrevistas”: <http://www.udg.edu/pihd/PIHD/Entrevistes/tabid/14144/EntryId/121/Entrevista-al-Dr-Jose-Maria-Font-i-Rius.aspx>.

concreto sobre este tema comparable a los varios trabajos que sobre la misma institución y durante la misma época se han realizado para el reino de Castilla», aunque habría que matizar en este sentido, no sólo para el reino castellano, sino *para –toda– la Corona de Castilla*, teniendo en cuenta la bibliografía citada (nota núm. 5 de p. 25).

A pesar de dicha laguna historiográfica, T. Tatjer nos enuncia algunas de las obras de referencia en relación con la temática aparecidas tanto en la fecha de lectura de la tesis doctoral –resaltando entre otros a Bosc, Capmany i de Montpalau, Klüpfel, Schwarz, Rovira y Virgili, Duran Cañameras, García de Valdeavellano, Valls i Taberner, F. Soldevila, Gibert y Sánchez de la Vega, Lalinde Abadía, Font i Rius, o Sobrequés Vidal–, como en la actualidad, así como aquellas otras obras a las que ha servido la presente monografía.

La estructura del estudio se divide en dos grandes partes:

Primera Parte. Génesis, establecimiento y evolución histórica:

I.- Fundamento jurídico de la Audiencia del Rey en la doctrina medieval (pp. 31-38).

II.- Génesis de la Audiencia del Rey en la Corona de Aragón (pp. 39-49).

III.- Establecimiento de la Audiencia. Su evolución hasta el reinado de Alfonso el Benigno (1299-1336) (pp. 51-60).

IV.- Estructuración de la Audiencia (pp. 61-70).

V.- La evolución de la Audiencia hasta la reforma de 1387 (pp. 71-81).

Segunda Parte. Estructura jurídica pública de la Audiencia:

VI.- Naturaleza e integración en los organismos de la Corte (pp. 85-96).

VII.- El elemento personal (pp. 97-159).

VIII.- La competencia de la Audiencia (pp. 161-177).

IX.- Funcionamiento de la Audiencia (pp. 179-194).

En *Fundamento jurídico de la Audiencia del Rey en la doctrina medieval*, T. Tatjer Prat analiza el fundamento jurídico e ideológico de la Audiencia del Rey en la doctrina medieval, exponiendo previamente la terminología y acepciones del término “Audiencia”, incluso en la actualidad, y “Audiencia del Rey”.

Así, en el periodo medieval por “Audiencia del Rey” o “Audiencia Real” –siguiendo entre otros a García-Gallo y de Diego, Font i Rius, o Sánchez Arcilla– podemos entender el acto por el cual el rey personalmente, sólo o asistido por los miembros de su curia o corte, escucha y entiende las súplicas o peticiones judiciales o no, de los individuos que están sometidos bajo su jurisdicción (pp. 32-33), sosteniéndose esta relación en la visión teocrática de la propia monarquía, en la cual Dios delegará la administración e impartición de la Justicia en el rey; como señala la autora: «El poder procedía de Dios, y a través del rey se transmitía a los rangos inferiores mediante un acto de concesión» (p. 36)<sup>10</sup>.

Pero, ¿cuál es la génesis de la Audiencia del Rey en Aragón? En este punto, la autora analiza los fundamentos sociales y jurídicos en la relación Rey-súbditos. Entendiendo que el titular del ente denominado “Corona de Aragón” –vicario de Dios en *su tierra*–, al igual que el resto de monarcas medievales del entorno participa de la idea teocrática, pero con la peculiaridad respecto de otros territorios (caso de la

<sup>10</sup> Entre otros, consideramos interesantes los estudios de Manuel García Pelayo, *El reino de Dios, arquetipo político (Estudio sobre las formas políticas de la Alta Edad Media)*, Madrid, 1959, y *Del mito y de la razón en la Historia del pensamiento político*, Madrid, 1968 (especialmente: “La ideal medieval del Derecho”, pp. 65-140); o, por ejemplo, los estudios de Walther Ullmann, *Principios de Gobierno y Política en la Edad Media*, traducción castellana, Madrid, 1971, e *Historia del pensamiento político en la Edad Media*, traducción, Barcelona, 1983.

Corona de Castilla, aunque con matices dicha afirmación) de que los habitantes de la Corona aragonesa forman parte de diferentes territorios, cada uno con su propia cultura y ordenamiento jurídico peculiar (Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca). Los inicios y origen de la Corona de Aragón datan del reinado de Alfonso II, primogénito de Ramón Berenguer IV, cuando se produce la unión ya personal de Aragón y de Cataluña; más adelante, se unirán a dicha “empresa” los reinos de Valencia y Mallorca. Respecto a Cataluña, el primer texto en el que se puede reflejar los fundamentos jurídicos de la relación monarca-súbditos, siguiendo a Tomás Mieres (Girona, 1400 – Barcelona, 1474)<sup>11</sup>, es el Usatge *Alium namque* (nota 75 de p. 43): Usatge 124: «Alium namque supradicti principes nobilem, honestum et utilem miserunt usaticum quod illi tenuerunt et successoribus suis tenere in perpetuum mandaverunt: scilicet ut tenerent curiam et magnam familiam, et facerent conductum, et darent soldatas, et facerent emendas, et tenerent justiciam et judicarent per directum, et manutenerent oppressum, et occurrerent obsesso; et quando vellent edere, facerent cornare ut nobiles et ignobiles venirent prandere, et ibi distribuerent palias quas hab[er]ent in magnatibus et in eorum familia, et ibi mandarent hostes cum quibus irent ad destruendam Yspaniam, et facerent novellos milites»<sup>12</sup>.

Respecto al reino de Valencia, la base jurídica la constituye el *Fur* dictado por Jaime I, en base al cual los súbditos pueden ser escuchados por el monarca en la Corte<sup>13</sup>: «Nós e la cort devem, denant tots los altres, mantenir, sens tota defuita, en son dret, pubils, vides, hòmens vells e dèbils, e aquels als quals naturalment deu hom haver mercè quan seran venguts a pobrea o a debilitat per cas d’aventura; car no deu ésser departiment, a nós ne a la cort, de persones ne de guardons. E axí la cort oyrà lo poch com lo gran, el pobre com lo rich».

Según Tatjer, la Audiencia del Rey adquiere “categoría jurídica” durante el reinado de Alfonso el Liberal [o el Franc (1285-1291), Alfonso III de Aragón, Alfonso II de Cataluña, Alfonso I de Valencia], concretamente en el *Ordenamiento de Huesca* de 1286 [formado por catorce Capítulos no numerados] en el que se estructura de forma orgánica toda la Corte del rey de la Corona de Aragón: la Audiencia, el Consejo, la Escribanía, los jueces de la Curia y las fianzas. Aunque será en los reinados sucesivos de Jaime II el Justo y Pedro el Ceremonioso [*Ordinacions* – normas procedentes de la actividad personal e individual del rey– de 1344] cuando dicho organismo quede establecido de forma definitiva.

En Cataluña, Aragón y Valencia el “Derecho de los reinos”, esto es, de las normas “paccionadas” entre el monarca y los diversos estamentos de los reinos reunidos en Cortes –que gozan de preeminencia respecto de las normas emanadas exclusivamente de la soberanía del monarca<sup>14</sup>–, hacen referencia a la Audiencia del Rey –según la autora como “órgano de la Administración Central”–, que conocerá de las “peticiones, demandas y agravios” que le presenten cualesquiera personas o entidades de la Corona de Aragón, pues su jurisdicción se extiende a todo su

<sup>11</sup> *Apparatus super constitutionibus curiarum generalium Cathaloniae*, 2 vols., Barcinonae, 1621.

<sup>12</sup> Al respecto, debemos destacar: P. Nolasco Vives y Cebrià, *Traducción al castellano de los Usages y demás derechos de Cataluña que no están derogados o no son notoriamente inútiles, con indicación del contenido de éstos y de las disposiciones por las que han venido a serlo, ilustrada con notas sacadas de los más clásicos autores del Principado*, vol. I (segunda edición corregida y aumentada, Barcelona, 1861), Textos Jurídics Catalans, Parlament de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 2ª ed. facsimilar, Barcelona, 2010.

<sup>13</sup> *Fori Regni Valentiae*, Valencia, 1547, parte primera, Libro I, rúbrica III, Fur CXII, f. 23v.

<sup>14</sup> Recordemos que tanto “el Derecho de los reinos de Aragón, Cataluña y Valencia” como “el Derecho procedente de la actividad personal del Rey” forman el “Derecho regio” de cada uno de dichos territorios.

ámbito; así: 1º) En Cataluña, las Cortes de Barcelona de 1299: «Nos, e los successors nostres, en qualque Ciutat siam, o Vila de la nostra terra, cada semana en lo Divendres tingam personalment Audientia a las nostras gents, per tenir lurs dret, de ço que exposaran devant nos. E si lo Divendres noy podiem entendre, e queu façam lo endema». 2º) En Aragón, las Cortes de Zaragoza de 1300: «Que el senyor rey todos los viernes sia en consistorio et tinga audiencia publicament las puertas abiertas et oya los querellantes et reciba las peticiones de aquellos. E si por ventura algun dia viernes aquesto fer no podra el sigüent dia sabado que sia en audiencia assi como devia estar el viernes». 3º) En Valencia, las Cortes de Valencia de 1301: «Item que nós e los nostres successors, en la ciutat de València, o en qualque vila del regne siam, cascuna vegada, en lo divendres, tingam personalment audiencia a les nostres gens, per tenir lur dret de ço que.ns possaran davant. E si lo divendres no.y podiem entendre, que.y entenam e que façam l'endemà».

Una característica común es la obligación de que el monarca, con independencia del territorio en que se halle (Cataluña, Aragón o Valencia)<sup>15</sup>, deba constituirse personalmente en Audiencia todos los viernes (se citan, además, otros casos). Además, como dice la autora: «Por el contenido de las mismas, se refleja que el monarca tiene un acentuado interés en que la producción legislativa de las Cortes de los reinos que componen la Corona de Aragón, referente a la regulación y control de las instituciones de la Administración central, sea lo más unificada posible» (p. 58). Será durante el reinado de Pedro el Ceremonioso cuando se promulguen las *Ordinacions* de 1344 (objeto de estudio respecto de su composición y estructura en las pp. 62-70), normas capitales respecto del afianzamiento de la Audiencia, y copia traducida al catalán de las *Leges Palatinae* de Jaime III de Mallorca<sup>16</sup>.

En el último Capítulo de la primera parte del presente estudio, Tatjer, estudia la evolución de la Audiencia hasta la trascendente reforma de 1387, analizando la abundante y variada legislación del periodo entre 1344 a 1387, tanto del considerado ya como “Derecho de los reinos”, como de la “legislación personal del rey”.

Respecto de la legislación de las Cortes de Aragón, Cataluña y Valencia, tenemos: 1º) Aragón: Fuero “*Quod Iudices...*” de las Cortes de 1362, confirmado por la Declaración del Privilegio General de Jaime II de 1365. 2º) Cataluña: Cortes de Perpiñán de 1350, Cortes de Monzón de 1363 y Capítol de Cort de las Cortes de Barcelona de 1365. 3º) Valencia: Cortes de Valencia de 1371.

Respecto de la legislación personal del rey, contamos con las *Ordinacions* de 1368, 1372, 1377 y 1383. Todo ello hasta la reforma de 1387 que afectará, como no podía ser menos, a la Audiencia del Rey, en el que por primera vez nos encontramos con el principio de la pluralidad de Vicecancillerías en la Corona de Aragón; existe una Cancillería única pero subdividida en tres Vicecancillerías: «la primera, instituida en los regnes de Mallorques, de Serdenya e de Corcega e en lo principat de Cathalunya, otra en el reino de Aragón, y la tercera en el de Valencia». Ésta será la primera norma descentralizadora a favor de los reinos, resultado de la «constante lucha por el poder entre el rey y los reinos». Afectando, como ya hemos adelantado, a la estructura de la propia Audiencia del Rey en la Corona de Aragón,

<sup>15</sup> En Cataluña sólo puede celebrar Audiencia cuando se encuentre en una ciudad o villa, cuestión diferente, por ejemplo, en Aragón, donde la autonomía y libertad es absoluta.

<sup>16</sup> Así, Tomás Montagut, *El Mestre racional a la Corona d'Aragó (1283-1419)*, tomo I, Barcelona, 1987, esp. p. 193: «Les Ordinacions del 1344 són la traducció gairebé literal al català de les Leges Palatinae, promulgades per Jaume III de Mallorca el 1337, amb algunes omissions, variants i afegiments». Respecto de las “*Leges Palatinae*”, vid. <http://germazope.uni-trier.de:8080/Projekte/LP>.

pues a partir de ahora comienza, como señala la autora, un «largo y difícil camino hacia las Audiencias propias de cada reino».

La “estructura jurídica pública” de la Audiencia es el objeto de análisis de la segunda parte del estudio, con el estudio de su naturaleza, elemento personal, competencia y su funcionamiento. Partiendo (Font i Rius) de que la Audiencia es la actuación judicial del rey ejercida personalmente o asistido por los miembros de su Curia o Corte, esta idea cambiará, evolucionando a lo largo del siglo XIV, como un órgano colegiado y técnico de la administración de justicia ante la dificultad del monarca de administrarla personalmente (p. 85).

La autora, a continuación, hace un breve estudio historiográfico, y relativo a la literatura jurídica –Tomás Mieres, *Apparatus super constitutionibus curiarum generalium Cathaloniae*– sobre su naturaleza (pp. 85-88) y de la relación con otros órganos de la Corte [los *iudices curiae* –juristas– y el Consejo Real –la suprema autoridad en el gobierno de la Corona de Aragón (pp. 88-96)], recalcando que siempre actúa en nombre del rey, pues su jurisdicción es una jurisdicción que deriva y emana del propio monarca, Presidente nato de la Audiencia, aunque auxiliado de otros cargos: Canciller y Vicecanciller, que la podrán presidir en determinados casos. Dicho en palabras de T. Tatjer: «la Audiencia por su naturaleza es el Órgano de la jurisdicción real por antonomasia» (p. 87).

El estudio del elemento personal ocupa el grueso de esta segunda parte de la monografía (pp. 97-159), primero con el análisis del Rey como Presidente nato de la Audiencia, aunque a medida que se va complicando la vida política a lo largo del s. XIV, delegará en otros oficiales como el Canciller, la figura más importante en el ámbito cortesano después del rey, que como norma general tenía las órdenes eclesiásticas. El Presidente tenía un papel directivo pues dirigía las deliberaciones, como órgano colegiado que era la Audiencia, sancionando además las resoluciones dadas a los asuntos tratados.

Otros Oficiales de la Corte que asumían la presidencia de la Audiencia eran: 1) En ausencia del Canciller, el Vicecanciller –Doctor en leyes sin recibir órdenes sagradas–. 2) Un Oidor –existían dos clases: los militares y los juristas–, siendo necesaria la delegación regia. 3) Un Promovedor de la Corte del rey –existen cuatro: dos caballeros y dos Doctores en Derecho Civil–. 4) o, incluso, por el Regente de la Cancillería.

La Audiencia estaba compuesta de la siguiente manera: Presidente, oidores, escribanos, porteros y los “verguers”. Las *Ordinacions* de 1344 contemplan el número y clase de oidores: «Laudable es loffici dels oydors per lo qual les demandes dels supplicants acabaments covinables reeben e axí per ministeri daquell offici alcunes vegades les coses passades per adjutori de justicia son corregides e moltes vegades als dignes gracias son atribuydes. Emperamor daço disposam ab aquest edicte que en nostre cort sien *tres cavaylers e dos savis experts en dret civil e un altre en dret canonich erudit...*». Así visto, el número de oidores era seis, de los cuales tres eran caballeros, dos eran juristas especialistas en Derecho civil y otro era jurista especialista en Derecho Canónico –así, el tema de los *Estudios Generales* o Universidades cobra especial importancia, sobre todo, con la creación de la Universidad de Lérida, la primera de la Corona de Aragón<sup>17</sup>. Su nombramiento (pp. 125-126), juramento y posesión (p. 126), el sello del oficio (pp. 126-127), sus derechos (pp. 127-129) y sus obligaciones (pp. 130-139), entre las que, como no podía ser de otro modo, figura “la obediencia al rey”, así como el control de su

<sup>17</sup> Respecto del análisis de los juristas y las Universidades, pp. 118-125.



responsabilidad y la extinción del cargo (pp. 140-143), son tratados con la suficiente claridad y precisión para comprender la trascendencia del oficio de un cargo que puede llegar a presidir de forma ocasional e incidental la propia Audiencia, uno de los más trascendentes órganos de la Corona de Aragón.

El oficio de los “escribanos” adscritos específicamente y por un periodo concreto y determinado a la Audiencia (pues forman parte del cuerpo general de escribanos de la Cancillería) como oficiales más importantes de dicha institución, es tratado a continuación en las pp. 143-153, resaltando su deber de obediencia al Canciller, Vicecanciller, protonotario, oidores y a la propia Audiencia<sup>18</sup>.

Asimismo, T. Tatjer estudia otros Oficiales subalternos de la Audiencia, como los porteros (pp. 153-157) y los verguers o mensajeros (pp. 157-159).

La competencia y el funcionamiento de la Audiencia ocupan también un lugar destacado en la última parte de la exposición de Teresa Tatjer (pp. 161-177 y 179-194, respectivamente).

La competencia de la Audiencia abarca cuestiones de índole gubernativo y de índole judicial; así: 1) Respecto de las cuestiones gubernativas, la Audiencia conocerá de los actos de gobierno cuyas consecuencias afecten a una comunidad determinada –sea por ejemplo, un municipio o el caso de un grupo étnico minoritario–, a personas particulares y referentes al control de los oficiales regios. 2) cuestiones judiciales, tales como: nombramiento de jueces para que conozcan una determinada causa, la designación de los órganos colaboradores en el ejercicio de la administración de justicia, la avocación –o facultad del juez o tribunal superior de conocer una causa que correspondía a una instancia inferior–, conocimiento de casos en primera y única instancia, la Audiencia como tribunal de apelación y el conocimiento del recurso de suplicación respecto de las sentencias dictadas por ella misma.

Ya por último, respecto del funcionamiento de la Audiencia, se detallan sus reuniones (plenarias o reducidas), sus acuerdos (por mayoría de votos o unanimidad) y su forma “itinerante” resultado de la característica común de las Monarquías medievales, de carácter itinerante.

El proceso: con las fases de “inicio” –a instancia de parte, de oficio o por avocación real–, “deliberación” o debate, “resolución”, “notificación” de la sentencia a las partes del proceso, y la “ejecución” de dicha resolución. Y el expediente, como procedimiento más habitual para el despacho de los negocios debido, fundamentalmente, a su extraordinaria sencillez, con las fases de “inicio”, “deliberación” y “resolución”.

Las “Conclusiones” ocupan las pp. 195-196, en las cuales la autora refleja su conocimiento y comprensión de la materia tratada, defendiendo su tesis en torno a la existencia de una Audiencia del Rey en Aragón, que adquirirá categoría jurídica a lo largo del siglo XIII hasta que en el último tercio del siglo XIV se produce la primera disposición descentralizadora a favor de los reinos, iniciándose así un camino diferente con el establecimiento de las Audiencias propias y específicas de cada uno de los reinos conformadores del otro gran pilar básico de la Monarquía hispana: la Corona de Aragón.

<sup>18</sup> *Ordinacions* de 1344: «Per tal quel offici dels oydors per lo qual als clamants justicia promptament es e deu esser exhibida per injuria de ministres triga en lo seu spatxament no reeba: ordonam que dos escrivans aptes e sufficientes e experts sien assignats qui per lo mati al loch diputat en lo nostre hostel per la audiencia tenir venguen...».

La obra finaliza con el apartado de las Fuentes –manuscritas e impresas– (pp. 197-201) y la –amplia– Bibliografía utilizada (pp. 201-232) para su confección.

En último lugar, un Apéndice Documental (pp. 233-263), con la publicación de un total de catorce Documentos: 1.- 1323 octubre 28. Barcelona. Actuación de oficio de la Audiencia, mediante la cual prohíbe al asesor del batlle de Cervera recibir salarios indebidos. 2.- 1324 marzo 1. Valencia. La Audiencia concede una ampliación en los plazos de devolución en la deuda existente, entre los judíos Mosse Alenafia y su hijo Aaron y unos cristianos. 3.- 1326 octubre 24. Barcelona. La Audiencia ordena que sea observada en la villa de Monzón la ordinación dada en Lérida en 1322, referente a los notarios. 4.- 1327 junio 26. Barcelona. La Audiencia encarga al jurista de Zaragoza Luppo de Aysa el conocimiento de dos causas de apelación. 5.- 1370 diciembre 18. Montblanc. Sentencia pronunciada por la Audiencia en causa de apelación a un pleito tramitado ante la curia del veguer de Montblanc. 6.- 1371 febrero 11. Tortosa. Sentencia pronunciada por la Audiencia en primera y única instancia. 7.- 1372 abril 10. Zaragoza. Sentencia pronunciada por la Audiencia en causa de apelación a la sentencia dada por un juez comisario nombrado por el rey. 8.- 1372 abril 13. Zaragoza. Sentencia pronunciada por la Audiencia en causa de apelación a la sentencia dada por un juez comisario nombrado por el primogénito o gobernador general. 9.- 1372 abril 24. Zaragoza. Provisión mediante la cual ordena que se ejecute la sentencia anterior. 10.- 1372 abril 27. Zaragoza. Sentencia pronunciada por la Audiencia en causa de avocación de un pleito tramitado ante la curia del Justicia Mayor de Aragón. 11.- 1372 mayo 8. Zaragoza. Provisión mediante la cual se ordena al sobrejuntero de Huesca y Jaca que ejecute la sentencia anterior. 12.- 1372 abril 27. Zaragoza. Sentencia pronunciada por la Audiencia en causa de apelación a la sentencia pronunciada por el Justicia Mayor de Aragón. 13.- 1372 abril 28. Zaragoza. Sentencia pronunciada por la Audiencia en un proceso de “iuris firma” que había sido tramitado en la curia del Justicia Mayor de Aragón. 14.- 1372 mayo 7. Zaragoza. Sentencia pronunciada por la Audiencia en recurso de suplicación a una sentencia dada por la misma Audiencia.

Nos encontramos ante una obra científica impresa al alcance de todos los investigadores, además de necesaria en referencia a la institución de la Audiencia del Rey en la Corona de Aragón durante los siglos XIII y XIV, implantada como tal desde el Ordenamiento de Huesca de 1286, y que seguramente, como afirma la autora se ha convertido en la institución «más controvertida, discutida y cuestionada» del territorio de una de las dos grandes Coronas peninsulares, y que con la aparición de la monografía de María Teresa Tatjer Prat, a la que felicitamos por el trabajo realizado, será, ya lo es a tenor de lo publicado, un punto no ya de partida, pero sí de inflexión y de discusión científica importante en el ámbito histórico-jurídico. [*Recibido el 20 de enero de 2011*].

Alejandro Martínez Dhier

Marek Tracz-Tryniecki, *Myśl Polityczna i Prawna Alexisa de Tocqueville*, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2009, 440 págs.

ABSTRACT: Efforts by historians of political thought, political theorists and philosophers of democracy critical studies of the literary output of Alexis de Tocqueville's going through recent years, a renaissance of interests. However, many of issues taken by mentioned political thinker still remains less well known, forgotten or even pushed to margins of scientific activity. Remember that, taken by Tocqueville's reflection on the concept of punishment or the nature of the penal system constituted a significant portion of its literature (this issue runs through the numbers in more than 11 volumes of his correspondence). Published in 2009 Marek Tracz-Tryniecki's work is the first on the Polish literature compendium of pretending to take their full range of Alexis de Tocqueville political and legal thought. Therefore complements in more recent studies in political science with elements of particular value to historians and theorists of the state regimes or legal doctrines.

KEYWORDS: Alexis de Tocqueville, Marek Tracz-Tryniecki, Political philosophy, Liberalism, Democracy.

Godność, wolność i cnota- te właśnie uniwersalne dla paradygmatu liberalnego wartości wydają się z perspektywy czasu kluczowymi kategoriami piśmiennictwa politycznego i prawnego Alexisa de Tocqueville. O ile jednak poglądy polityczne autora *O demokracji w Ameryce* wydają się nam dobrze znane i trwale zakorzenione w tradycji europejskich rozważań filozofii polityki nasza wiedza o wielu innych płaszczyznach jego refleksji (na przykład koncepcjach prawa naturalnego, rozważaniach w przedmiocie kary, itp.) wydaje się już zdecydowanie bardziej pobieżna, wyrywkowa, czasami wręcz w ogóle nie znana. Pomimo istnienia wielu publikacji w przedmiocie poglądów Tocqueville'a na problemy demokracji, rewolucji czy praw i wolności jednostek, jak dotychczas zdecydowanie brakowało w polskim piśmiennictwie naukowym spójnego opracowania, w poszerzony, a zarazem syntetyczny sposób prezentującego całościowy dorobek myśli politycznej i prawnej autora. Wydana ostatnio praca Marka Tracz-Trynieckiego wychodzi zatem naprzeciw oczekiwaniom licznej grupy badaczy i studentów, pragnących poszerzyć niepełny zazwyczaj obraz piśmiennictwa Tocqueville'a, prezentowany w ramach podręczników historii myśli politycznej i prawnej, bądź innych opracowań o podobnej tematyce. W ostatnich latach obserwować możemy prawdziwy renesans zainteresowania myślą Tocqueville'a. Powstaje coraz więcej opracowań, dających nam pogłębiony obraz coraz bardziej szczegółowych elementów jego piśmiennictwa. Do najbardziej znaczących publikacji wydanych w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat zaliczyć możemy prace autorów takich jak: B. Allen (2005), M.J. Mancini (2006), H. Brogan (2008), J. Epstein (2008) czy B. Dannoff (2010). Wydana w Polsce praca dobrze wpisuje się w nurt całościowych rozważań nad myślą Tocqueville'a. Każda próba ujęcia tematu wyłącznie w oparciu o lekturę najbardziej znanych prac autora nie daje nam bowiem pełnego obrazu jego poglądów, utrudniając często całościowe zrozumienie opisywanych przez niego kategorii.

Prezentowane w pracy ujęcie myśli Tocqueville'a bazuje na dogłębnej analizie jego dorobku pisarskiego (także mniej znanych jego części, na przykład listów czy notatek z podróży) oraz powstałej w tym zakresie bogatej literatury przedmiotu. Otwierające książkę pogłębione studium biograficzne pozwala nam lepiej zrozumieć kontekst historyczny w którym powstały jego najważniejsze dzieła, w szczególności

zaś charakterystyczną dla Tocqueville`a metodę pracy badawczej. Szczególną wagę przykładął on bowiem do obserwacji zastanej rzeczywistości społeczno-politycznej, prowadzonych równolegle wywiadów (z przedstawicielami różnych warstw społecznych), a także elementów analizy porównawczej ustrojów państwowych. To dzięki wspomnianym elementom wydany w 1835 roku pierwszy tom *O demokracji w Ameryce* stał się przełomową, jak na owe czasy, próbą całościowego omówienia rzeczywistości politycznej danego państwa.

Do trzech zasadniczych wartości myśli tocquevillowskiej autor opracowania zalicza godność, wolność i cnotę. Szczególnie dużo miejsca poświęcone zostaje kluczowej dla myśli Tocqueville`a kategorii wolności. Przedmiotem podjętych w pracy analiz staje się zatem zarówno teoretyczne ujęcie koncepcji wolności jak i jej praktyczna realizacja przez władzę polityczną. Interesujące dla czytelnika wydają się zwłaszcza rozważania dotyczące relacji pomiędzy wolnością a religią, oraz zróżnicowanego charakteru wolności jako fenomenu politycznego. Przypomnijmy bowiem, że w pochodzącym z 1836 roku eseju "Stan społeczny i polityczny Francji przed rokiem 1789" (fr. L'Etat social et politique de la France avant et depuis 1789) Tocqueville rozróżnia dwie zasadnicze kategorie wolności: arystokratyczną i demokratyczną. Podkreślić warto, że wolność w ujęciu Tocqueville`a nie charakteru permissywnego. Podstawową przesłanką ograniczenia wolności wydaje się zatem każdorazowo potrzeba utrzymania ładu społecznego. Równie istotne stają się rozważania autora w przedmiocie tocquevillowskiej koncepcji cnoty. Autor omawia między innymi charakterystyczny dla Tocqueville`a podział cnót na publiczne i prywatne a także mniej znaną klasyfikację na cnoty arystokratyczne i demokratyczne. Jak zauważa, specyfikę amerykańskiego modelu cnoty wiąże Tocqueville z innym niż w Europie pojmowaniem honoru oraz stosunkiem jednostki do aktywności gospodarczej. To właśnie hierarchia poszczególnych rodzajów cnoty stanowi jeden z zasadniczych czynników, odróżniających społeczności państw europejskich od mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Kolejny rozdział pracy koncentruje się na najbardziej kluczowym dla całej myśli Tocqueville`a problemie- zagadnieniu demokracji. Zważywszy na znaczącą ilość publikacji podejmujących wspomniane zagadnienie już wcześniej, trudno uznać prezentowane w tym zakresie rozważania za specjalnie odkrywcze. Jego niewątpliwą zaletę stanowi jednak uporządkowanie i omówienie nie zawsze zrozumiałe przedstawionych w podręcznikach z zakresu historii doktryn politycznych centralnych elementów koncepcji Tocqueville`a. Szczególnie istotną częścią rozdziału wydają się rozważania autora na temat podstawowych wolności jednostki i służących ich ochronie środków. To w obyczajach upatruje Tocqueville podstawowych gwarantów zachowania wolności jednostki w społeczeństwach demokratycznych (wszelkie rozwiązania instytucjonalno-prawne odgrywają zatem w tym przedmiocie rolę drugorzędną). Jak zauważa autor, do podstawowych instrumentów ochrony indywidualnej wolności, obok wspomnianych już obyczajów, Tocqueville zalicza także doktrynę dobrze pojętego interesu oraz religię. Równie istotne znaczenie w tym względzie przypisywać możemy także współdziałaniu obywateli, w tym zwłaszcza instytucjom opinii publicznej. Tocqueville wyróżnia bowiem trzy płaszczyzny działalności publicznej (stanowiące konsekwencję zasady suwerenności ludu): aktywność obywateli, gmin oraz państwa (por. s. 267). Istotne wydają się także podjęte w kolejnej części rozdziału rozważania na temat kształtu instytucjonalnego ustroju państw demokratycznych. Pamiętajmy bowiem, że dzieła Tocqueville`a stanowią dla politologów niezwykle barwne połączenie sfery idei i praxis. Podejmując dalsze rozważania w przedmiocie znaczenia demokracji w myśli Tocqueville`a warto

zapoznać się zwłaszcza z wydaną nieco ponad dwadzieścia lat temu pracą J-C Lambertiego *Tocqueville and the Two Democracies*.

Zdecydowanie mniej znanym czytelnikom zagadnieniem wydaje się poruszony w rozdziale czwartym stosunek Tocqueville'a do rewolucji. Temat ten podjęty został przez Tocqueville'a już w 1848 roku, a zatem na osiem lat przed publikacją jego najbardziej znanego dzieła w tym zakresie – *Dawnego ustroju i rewolucji* (fr. *L'Ancien Régime et la Révolution*). Jak zauważa autor, Tocqueville wyróżnił dwa zasadnicze znaczenia terminu "rewolucja". Może ona zatem stanowić zarówno krótkotrwałe zjawisko jak i wieloletni proces (coś na kształt współcześnie rozumianych transformacji). Szczególnie istotna wydaje się w tym miejscu podjęta przez autora analiza leżących u podłoża rewolucji przyczyn a także jej pozytywnych i negatywnych następstw jako procesu społecznego. Autor przywołuje także kluczowe dla tocquevillońskiego ujęcia prezentowanego tematu mechanizmy rewolucji demokratycznej. Wspomniany rodzaj rewolucji stanowi dla autora *Demokracji w Ameryce* swoiście rozumiany "pochód równości", za pośrednictwem którego odbywa się przejście ze społeczeństwa arystokratycznego do demokratycznej formy rządów. Autor opracowania podkreśla wreszcie wielokrotnie wyrażany w piśmiennictwie Tocqueville'a negatywny stosunek do socjalizmu.

Najbardziej interesującym dla czytelnika fragmentem opracowania wydają się przedstawione w rozdziale piątym poglądy Tocqueville'a na prawo, w tym zwłaszcza na ideę prawa natury. Elementy wspomnianej koncepcji znaleźć możemy na przykład w zawartej w pracy *O demokracji w Ameryce* definicji sprawiedliwości. Sporo miejsca poświęcił także autor analizie prezentowanej przez Tocqueville'a liberalnej koncepcji praw człowieka (por. s. 342) oraz wzajemnemu oddziaływaniu kategorii prawa, obyczaju oraz układu społecznego. Istotny walor poznawczy cechują także szerokie odniesienia do prezentowanych w *O demokracji w Ameryce* poglądów Tocqueville'a na amerykański wymiar sprawiedliwości. Pamiętajmy bowiem o zdecydowanej odmienności wspomnianego systemu prawa od realiów kontynentalnej Europy pierwszej połowy XIX stulecia. Ciekawa także wydaje się prezentacja poglądów Tocqueville'a na amerykański system penitencjarny. Zagadnieniu temu coraz więcej miejsca poświęcają także wydawane w ostatnich latach publikacje anglojęzyczne (por. np. G.W. Pierson, 1993; S.S. Wolin, 2003; R. Boesche, 2006).

Podsumowując chciałbym zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów stanowiących o kompleksowości, oryginalności i aktualności wspomnianej monografii oraz zawartych w niej rozważań. Prezentowana rozprawa ukazuje bowiem, że pomimo istnienia ogromnej wprost literatury przedmiotu w tym zakresie, pewne elementy piśmiennictwa Tocqueville'a w dalszym ciągu pozostają mało znane, sam temat zaś może być potraktowany w twórczy i interesujący dla odbiorcy sposób.

Szczególnie wartościowe stały się bogate odwołania źródłowe do mniej znanych czytelnikom fragmentów piśmiennictwa Tocqueville'a, zwłaszcza zaś jego esejów i korespondencji. Wydana w dziesięciu tomach korespondencja autora stanowi bowiem niezwykle cenne źródło wiedzy, pomagające nam dużo lepiej zrozumieć poglądy Tocqueville'a na otaczającą go rzeczywistość. Wydaje się jednak, że w dalszym ciągu nie zostały one należycie uwzględnione w ramach dostępnego piśmiennictwa naukowego. Autorowi udało się ponadto zachować daleko idącą równowagę pomiędzy krytycznymi ocenami własnymi a odwołaniami do poglądów innych badaczy, co nie zawsze cechuje opracowania z kręgu historii myśli politycznej. Pamiętajmy wreszcie, że publikacja stanowi pierwszą w polskim piśmiennictwie naukowym próbę całościowego przedstawienia myśli politycznej i prawnej Tocqueville'a. Jej walory dydaktyczne i poznawcze wydają się zatem trudne

do przecenienia. Praca z powodzeniem może służyć studentom kierunków politologicznych i prawnych, jak również stanowić dobry wstęp dla dalszych rozważań własnych w przedmiocie historii myśli politycznej, czy rozumienia demokracji jako zmieniającej się czasie formy rządów i organizacji życia społecznego. [Recibido el 15 de enero de 2011].

Bogumil Maria Terminski-Mrowiec

Andrzej Wierzbicki, *Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku*, Centrum Europejskie Natolin-Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, 267 págs.

ABSTRACT: Opublikowana w 2009 roku książka prof. Andrzeja Wierzbickiego stanowi kolejną już publikację autora podejmującą zagadnienie historycznych przesłanek miejsca zajmowanego przez Polskę na politycznej i społecznej (w szczególności jednak ideologicznej, obyczajowej, kulturowej i świadomościowej) mapie naszego kontynentu. Kształtowane przez różnorodne czynniki dzieje naszego narodu na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci odcisnęły niezwykle piętno na oryginalnym i specyficznym kształcie koncepcji historyków, filozofów czy myślicieli politycznych. Szczególnie istotnym poznawczo elementem pracy wydaje się zatem ewolucja polskiego piśmiennictwa politycznego na tle zmieniających się uwarunkowań politycznych i geopolitycznych ostatnich wieków (co szczególnie cechuje zaprezentowane przez autora podejście historiograficzne). Lektura opracowania wydaje się także cenną inspiracją dla przemyśleń nad współczesnym kształtem kultury politycznej, polskiej mitologii narodowej czy świadomości zbiorowej.

KEY WORDS: Andrzej Wierzbicki, Historia polityczna, Rozbiory Polski, Historiografia, Wieczny pokój.

Rosnąca skala instytucjonalnej, społecznej czy kulturowej unifikacji kontynentu europejskiego coraz częściej utrudnia nam dogłębne zrozumienie procesu kształtowania się świadomości wspólnoty i jedności w okresach poprzedzających obecny wymiar integracji europejskiej. Brakuje także szerokich odniesień do ideowego, historycznego czy społeczno-kulturowego wymiaru tożsamości europejskiej w ramach dostępnych publikacji z zakresu nauk politycznych, stosunków międzynarodowych czy studiów europejskich. Poszukiwanie korzeni wspólnej, zbiorowej świadomości przy równoczesnym odkrywaniu cechującej odrębne struktury państwowe i narody tożsamości wydaje się obecnie szczególnie istotnym nurtem refleksji, podejmowanym zarówno przez badaczy, jak również praktyków życia politycznego, na forach takich instytucji jak choćby Parlament Europejski. Podejmowane w ostatnich latach prace nad wspólną nam, Europejczykom, Konstytucją z całą mocą uzmyskowiły bowiem jak różna wydaje się świadomość cechujących mimo wszystko nasz krąg kulturowy wspólnych i uniwersalnych wartości, w poszczególnych regionach kontynentu. Istotne zatem staje się zrozumienie zmieniających się na przestrzeni ostatnich trzech stuleci koncepcji polskiej obecności w Europie, także współcześnie mających wpływ na kształtowany w tym zakresie dyskurs publicystyczny, polityczny czy naukowy.

Zarówno wyobrażenia Polaków o naszej obecności i roli w Europie jak i stosunek innych narodów do nas samych znacząco zmieniał się na przestrzeni dziejów.

Tworzone z lubością koncepcje uzasadniające doniosłą rolę Polski w ramach ewoluującego na przestrzeni dziejów porządku międzynarodowego nie zawsze pozostawały w zgodzie z przekonaniem innych grup narodowych o realnym znaczeniu naszego kraju, najpierw jako bufora przed rosnącym ekspansjonizmem tureckim czy rosyjskim, później jako stabilizatora europejskiego porządku i równowagi, czy wreszcie-historycznie udręczonego odkupiciela i mesjasza narodów. Jak zatem kształtowało się poczucie europejskości w polskiej świadomości narodowej?, czy stosunek innych nacji do Polaków podlegał w ostatnich dwóch stuleciach szczególnie istotnym zmianom?, w jaki sposób myśliciele polityczni próbowali uzasadnić znaczenie Polski dla funkcjonowania Europy czy samą jej obecność na mapie politycznej w XIX wieku?. Odpowiedź na postawione w tym miejscu pytania stanowi przedmiot wydanej ostatnio rozprawy Andrzeja Wierzbickiego *Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku*.

Jej autor, badacz dziejów Polskiej historiografii, w niezwykle syntetyczny sposób przedstawił zmieniającą się panoramę uwarunkowań polskiej myśli politycznej i historycznej dotyczącej naszej przynależności do szerszego otoczenia międzynarodowego, podlegającego w omawianym okresie zdecydowanie większej niż obecnie dynamice zmian. Całość pracy zawiera bogate odniesienia źródłowe, przytacza także najbardziej istotne pozycje fundamentalnych dla polskich badań historycznych autorów (J. Szujskiego, J. Tazbira, H. Samsonowicza, A. Walickiego czy S. Kalembki). Pomimo przyjęcia zdecydowanie polskiej perspektywy analizy praca bogato odnosi się także do dorobku europejskiej i światowej myśli historycznej i politycznej, zwłaszcza w warstwie tworzonych już od średniowiecza (Pierre Dubois) projektów ustanowienia wiecznego pokoju, wspólnoty europejskiej, czy innych form instytucjonalnej współpracy państw kontynentu, mających za zadanie eliminację zjawiska wojny.

Przedmiot analizy podjętej przez autora w pierwszym rozdziale pracy stanowiło oddziaływanie kultury europejskiej oraz jej instytucji politycznych na polskie tradycje polityczne oraz wzorce kulturowe, od wczesnego reneansu po koniec XVIII wieku. Szczególna istotna wydaje się w tym miejscu analiza ewolucji znaczenia politycznej i kulturalnej roli odgrywanej przez Rzeczpospolitą, a także percepcja jej obywateli w innych państwach europejskich (panująca wówczas w Polsce moda ubioru na modłę turecką stanowiła nierzadko źródło zdziwienia na królewskich i bardziej znacznych dworach europejskich). Jak zauważa autor (za Januszem Tazbirem) przekonanie Polskich Panów o szczególnym znaczeniu naszego kraju dla ówczesnego porządku europejskiego opierało się na kilku podstawowych elementach; miała zatem Polska bronić Europy, zapewniać jej żywność (często przywoływana później koncepcja Polski-spiczlerza Europy), miała posiadać także najdoskonalszy ze wszystkich republikański i wolnościowy ustrój polityczny. Panujące w Polsce wzorce kultury cechował w tamtym okresie silny eklektyzm oraz zauważalna dychotomia pomiędzy sygnalizowanymi już wpływami orientalnymi (obserwowanymi w modzie, zdobnictwie, najbardziej zaś w charakterującym polską szlachtę przepychu) a recepcją wzorców zachodnich (w zakresie nauki, architektury i sztuki). Rzeczywistość światopoglądowo-ideologiczna przedrozbiorowej Polski opierała się zatem, jak pisze autor, na przeciwstawieniu ze sobą trudnych we wzajemnym pogodzeniu kategorii (swoistości i obcości, okcydentalizmu i etnocentryzmu, patriotyzmu i kosmopolityzmu, itp.).

Sporo miejsca poświęcił także autor zagadnieniu regionalizmu w XVIII wiecznym dyskursie politycznym. Podziały regionalne, a zatem percepcja poszczególnych fragmentów Europy, miała wówczas zupełnie inny niż obecnie charakter. Pojęcie

"Europy" do XVIII wieku utożsamiane było raczej z kategorią chrześcijaństwa aniżeli abstrakcyjnego katalogu wspólnych wartości, zaś jej mieszkańcom obcy był tak popularny obecnie podział kontynentu na wschód i zachód. W użyciu pozostawał raczej podział Europy na obejmujące dawne obszary romańskie południe oraz słowiańską i germańską północ.

Rozdział drugi pracy analizuje formowanie się oraz główne kierunki polskiej myśli politycznej na tle burzliwego okresu utraty niepodległości, wojen napoleońskich oraz następujących w ich wyniku zmian na mapie Europy. Utrata niepodległości zmusiła Polaków do konieczności bezprecedensowej dotychczas redefinicji poglądów na kształt przyszłego ładu międzynarodowego. Dominująca przez większą połowę XVIII wieku kontestacja prób znaczących zmian politycznych (zgodnie z koncepcjami wolności szlacheckiej, pozytywnych następstw rywalizacji wielkich dworów w naszym kraju, czy słabej Polski jako stabilizatora prawidłowo funkcjonującego porządku międzynarodowego) ustąpić musiała miejsca innym rozwiązaniom. Jedyna droga do zmiany zastałego po 1795 roku układu politycznego wiązała się zatem z zanegowaniem ówczesnej sytuacji międzynarodowej. Duży fragment podjętych w ramach rozdziału rozważań koncentruje autor na bogato powstających w początku XIX wieku polskich koncepcjach ładu międzynarodowego, wspólnoty państw czy zachowania wiecznego pokoju. Przywołuje w tym celu szczególnie ważne dla polskiej refleksji historycznej i politologicznej projekty pióra Adama Jerzego Czartoryskiego, Hugona Kołłątaja, Józefa Wybickiego, Stanisława Staszica, Józefa Hoene-Wrońskiego czy Wojciecha Bogumiła Jastrzębowski. W sposób szczegółowy analizuje on zarówno zmienność i ewolucję głoszonych przez poszczególnych autorów (zwłaszcza Czartoryskiego i Staszica) koncepcji jak również zestawia polskie projekty z bogatym dorobkiem zachodnioeuropejskiej myśli politycznej w tym zakresie (Charles-Irénée Castel, abbé de Saint-Pierre czy Jean Jacques Rousseau).

Przedmiot rozdział trzeciego książki stanowi analiza postaw politycznych Polaków wobec państw europejskich, obserwowanych w rezultacie następstw Powstania Listopadowego, wielkiej emigracji oraz zmian społecznych lat późniejszych. Szczególnie istotny fragment rozważań poświęca autor narodzinom oraz ekspansji postaw słowianofilskich w Europie pierwszej połowy XIX wieku. Ekspansję idei słowiańszczyzny wiąże on przede wszystkim z wpływami romantyzmu na kulturę i piśmiennictwo polityczne (przywołuje w tym miejscu między innymi Mickiewicza, Towiańskiego, Cieszkowskiego czy Herdera). Narody słowiańszczyzny, jako młody, pozbawiony znaczącego dorobku kulturalnego i jawiący się w kategoriach wspólnoty quasi-plemiennej żywiół, odegrać miały zatem znaczącą rolę dla naszego kontynentu i pchnąć go w stronę pokoju i współpracy.

W kolejnym fragmencie pracy autor przywołuje poglądy licznych mniej znanych, lecz równie istotnych dla rozwoju polskiej myśli politycznej XIX wieku autorów na znaczenie Polski w panoramie przyszłego porządku międzynarodowego. Szczególne miejsce wśród nich zajmują poglądy najwybitniejszego historyka polskiego pierwszej połowy XIX wieku- Joachima Lelewela (1786-1861). Za jeden z centralnych elementów piśmiennictwa historycznego i politycznego wspomnianego autora uznać możemy przekonanie o swoiście rozumianym dualizmie rozwoju zachodniego i wschodniego obszaru Europy, zwłaszcza w zakresie rozwiązań politycznych oraz dominujących stosunków ekonomiczno-społecznych. Jak zauważa Lelewel, wschód stanowi zdecydowanie młodszy, a zatem w pewnym sensie bardziej pierwotny żywiół, aniżeli silnie ukształtowane już politycznie, kulturowo i społecznie obszary Europy Zachodniej. Autor przedstawia także koncepcje głoszone przez mniej



znanych przedstawicieli myśli politycznej i historycznej tamtego okresu, między innymi Henryka Kamieńskiego, Zygmunta E. Gordaszewskiego czy Stefana Buszczyńskiego. Projekty wszystkich wspomnianych powyżej autorów łączyło dążenie do ustanowienia szerokiej i zdolnej do współpracy federacji państw. Cechowało je jednak odmienne podejście, zarówno co do kształtu przyszłego ładu europejskiego, struktury organizacyjnej i instytucjonalnej proponowanej konfederacji państw, jak również (a może nawet przede wszystkim) jej składu członkowskiego (w tym zwłaszcza środka ciężkości i przywództwa) oraz znaczenia w niej Polski.

W rozdziale piątym autor koncentruje się na przeciwstawieniu sobie poglądów najbardziej reprezentatywnych dla drugiej połowy XIX wieku myślicieli politycznych i historyków. Znajdziemy w nim zatem odniesienia do przedstawicieli krakowskiej szkoły historycznej (ks. Walerian Kalinka, Józef Szujski), myśli Władysława Hoffmana, Kazimierza Waliszewskiego czy Michała Bobrzyńskiego. Całość fragmentu utrzymuje autor w wyraźnym nurcie polemicznym, przybliżając nam stanowiska poszczególnych autorów i środowisk naukowych poprzez wyeksponowanie szczególnie istotnych dla nich przeciwieństw. Wspomniani autorzy w różny sposób interpretowali przyczyny upadku państwowości polskiej. Sporo miejsca zajmowały w ówczesnej myśli politycznej interpretacje historyczne o *stricte* organicystycznym charakterze (wywodzenie rozbiórów Polski z anomalii ustrojowej, niedołęstwa narodu, czy cytując Szujskiego "paraliżu bezwładności politycznej"). Wspomnieć warto, że za jednego z prekursorów tego nurtu rozważań nad historią polskiej państwowości uznać można wybitnego filozofa niemieckiego XVIII wieku Immanuela Kanta. Jak pisał w rozprawie *O Porzekadle* "Polaków opisuje się jako lekkomyślnych, niestałych ludzi (...) czynią długi, nie myśląc o zapłacie (...) niewiele mają kultury tak w aspekcie sztuk, jak i nauk (...) samozawiniona niedojrzałość". Twierdził on również, że biorąc pod uwagę kształt i funkcjonowanie polskich instytucji politycznych XVIII wieku właściwszym miejscem dla jej położenia byłyby azjatyckie stepy aniżeli środek cywilizowanej Europy.

Kolejny fragment pracy analizuje wizje znaczenia Polski w porządku międzynarodowym okresu międzywojennego. Na uwagę zwracają niezwykle interesujące odwołania literackie, między innymi do Stanisława I. Witkiewicza. Autor analizuje jednak przede wszystkim koncepcje czołowych ówczesnych historyków, często zaangażowanych politycznie (Romana Dmowskiego, Euegeniusza Tymienieckiego czy Oskara Haleckiego). Szczególnie ostatniemu spośród wymienionych tu historyków przypisać należy zasługi dla badań w zakresie regionalizmu, czy społeczno-kulturowych podziałów naszego kontynentu. Bogate nawiązania czyni także autor do rozwijającego się w Europie lat dwudziestych ubiegłego stulecia ruchu paneuropejskiego. Recepcja wspomnianej idei na gruncie polskiej myśli politycznej przyjmowała rozmaite kierunki i kształty (od wizji *Pax Americana* hr. Aleksandra Skrzyńskiego po różnorodne koncepcje federacji regionalnych czy subregionalnych autorstwa Władysława Sikorskiego, Adama Ciołkosza i licznych innych autorów). Za pewien mankament pracy uznać jednak można brak w niej odwołania do modnych w okresie międzywojennym koncepcji determinizmu geograficznego położenia Polski (autorstwa Eugeniusza Romera czy Wacława Nałkowskiego).

Ostatni fragment książki poświęcony został apologetom i krytykom charakteru naszej obecności w Europie, w kształcie narzuconym współczesnym stosunkom międzynarodowym przez układ z Jałty. Analizując piśmiennictwo wspomnianego okresu autor zwraca uwagę na kategoriaalne rozbieżności występujące w rozumieniu pojęcia europejskości przez środowiska emigracyjne i krajowe. Pamiętajmy bowiem,

że jeszcze niewiele ponad kilkanaście lat temu słowa "Europa" czy "Zachód" miały w krajowym obiegu politycznym i dyskursie publicystycznym zdecydowanie pejoratywny wydźwięk. Ewolucji podlegało nie tylko powojenne rozumienie świata zachodniego, lecz także znaczenie przypisywane cywilizacji wschodu (w tym akurat kontekście historycznym utożsamianej z blokiem państw demokracji ludowej). Końcowym akordem utrzymania *de facto* wiernopoddańczych i wasalnych relacji Polska-reszta bloku wschodniego stać się miała propagowana przez Andrzeja Wasilewskiego w ostatnich latach PRL koncepcja tzw. "dobrowolnego sojuszu", tudzież "oparcia się o wschód". Zapowiadające szybki upadek imperium wschodniego fantasmagorie nie uwzględniały jednak podstawowego elementu każdego dobrowolnego sojuszu-równości, oraz pełnej i całkowitej suwerenności każdego z jego ewentualnych członków.

Podsumowując warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, z uwagi na które książkę Andrzeja Wierzbickiego uznać można za pionierskie, a pod pewnymi względami nawet przełomowe studium zmieniającej się w ostatnich trzech wiekach polskiej myśli politycznej wobec Europy.

Po pierwsze praca bardzo szeroko odnosi się do mniej obecnie znanych odbiorcom wątków z zakresu polskiej myśli politycznej. Dogłębnie przedstawia autor na przykład rzadko obecnie prezentowane koncepcje ładu europejskiego z początku XIX wieku czy zapomniane trochę (przynajmniej dla politologów) stanowiska środowisk historycznych połowy XIX wieku. Nasza wiedza we wspomnianym zakresie ma zazwyczaj charakter pobieżny i wyrywkowy, znamy co prawda nazwiska poszczególnych autorów, lecz zdecydowanie rzadziej jesteśmy w stanie określić jakie założenia stanowią elementy charakterystyczne ich poszczególnych koncepcji a także co je od siebie odróżnia.

Po drugie zwraca uwagę dążenie autora do syntezy oraz wyeksponowania najbardziej reprezentatywnych (i interesujących poznawczo) wątków myślenia politycznego tamtego okresu. Omówienie na niewielu ponad dwustu stronach prawie trzech wieków rozwoju myśli "europejskiej" w Polsce stanowi nie lada wyczyn, zważywszy zwłaszcza na liczbę analizowanych źródeł, zmieniający się kontekst historyczny, a nawet ewolucję poglądów poszczególnych autorów (na przykład Adama Jerzego Czartoryskiego czy Stanisława Staszica).

Po trzecie wreszcie, na szczególną uwagę zasługują odniesienia autora do zmieniającej się percepcji poszczególnych regionów Europy (kręgów cywilizacyjnych; północy-południa, wschodu-zachodu, żywiołu słowiańskiego, państw germańskich i romańskich, itp.), a co za tym idzie także świadomości oraz poczucia tożsamości mieszkańców poszczególnych obszarów naszego kontynentu. To niezwykle interesujące zagadnienie szczegółowo poruszał już autor w wydanej w 1984 roku pracy *Wschód-Zachód w koncepcjach dziejów Polski*. Wydaje się jednak, że uniwersalne dla wszystkich mieszkańców Europy poszukiwanie własnej tożsamości, przy świadomości istnienia jednolitych dla każdego z nas korzeni kulturowych czy religijnych nabrało od tamtego okresu zdecydowanie większej aktualności. Mam nadzieję, że wyeksponowane tutaj elementy stanowiąc będą dla czytelnika wystarczającą zachętę do zapoznania się z tą niezwykle interesującą książką. [Recibido el 3 de noviembre de 2010].

Bogumil Maria Terminski-Mrowiec

Rectificación de Guillermo Hierrezuelo Conde a la recensión del libro de Juan Francisco Baltar Rodríguez, *El Protonotario de Aragón. 1472-1707. La Cancillería aragonesa en la Edad Moderna*, Zaragoza, colección “El Justicia de Aragón”, 2001, 415 págs.

ABSTRACT: En 2002 publicó Guillermo Hierrezuelo Conde, una recensión de un libro de Juan Francisco Baltar Rodríguez editado por el Justicia de Aragón en 2001 y dedicado al Protonotario de Aragón. Hacía en la citada recensión grandes elogios de Baltar. Hace poco se tuvo conocimiento del error en que había incurrido pues había plagios flagrantes en dicha obra. Rectifica aquí lo publicado en su momento y señala el conjunto de plagios de Baltar hechos a una tesis doctoral inédita de José Solís de 1999, que todavía no se ha publicado, y cuyo contenido Baltar conocía por haber sido miembro suplente de la Comisión llamada a evaluar dicha memoria sobre la que emitió un informe positivo. El asunto es mayormente grave cuando el plagio se hace de algo que es inédito, pero que goza de la protección y publicidad de haber sido defendido ante un tribunal y además con el abuso de confianza que conlleva que Baltar, conociéndolo por su oficio, lo plagie.

PALABRAS CLAVE: Protonotario de Aragón, Juan Francisco Baltar, Rectificación, Copias, Plagios.

En este texto se recoge una rectificación nuestra (Guillermo Hierrezuelo Conde) a la recensión del libro de Juan Francisco Baltar Rodríguez, profesor titular de Historia del derecho y de las instituciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, publicada en la *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, de Valparaíso, vol. XXIV (2002), pp. 433-434, donde hacíamos afirmaciones elogiosas de Baltar que no podemos mantener tras el descubrimiento de cuestiones que ignorábamos en su momento. Esperamos igualmente que Miguel Ángel Chamocho Cantudo, que publicó también recensión elogiosa del libro de Baltar en *Rudimentos legales. Revista de Historia del Derecho*, nº 3 (2001), publique una rectificación de lo que dijo, pues de lo contrario su credibilidad científica queda en entredicho, como estaba la mía hasta el día de la fecha, el 28 de diciembre de 2010.

Este libro del año 2001 contiene, en el texto y en las notas a pie de página del capítulo 5 y del capítulo 6 de la parte dedicada al “Desarrollo histórico” de la Protonotaría de Aragón, numerosos párrafos copiados literalmente de la tesis doctoral inédita de José Solís, así como muchas citas bibliográficas y referencias de documentos del Archivo Histórico Nacional tomadas y copiadas por Baltar –dándolas y haciéndolas pasar como aportaciones propias– de dicha tesis doctoral inédita de Solís, del año 1999 y titulada *La Administración española del archiduque Carlos. Consejos y Juntas en la Monarquía de Carlos de Austria de España*. Semejante actividad de “copión” o “copista” de la obra ajena –lo cual presuntamente era “plagio” en el año 2001 y que en la actualidad se encuentra ya prescrito como tal delito por haber transcurrido 5 años desde su ejecución– Juan Francisco Baltar trataba de encubrirla o disimularla torpemente, por medio de la nota 449 de la p. 183 de este libro, nota referida únicamente al capítulo 6 y que no dice nada sobre el capítulo 5. La citada nota 449 del libro de Juan Francisco Baltar constituye, en realidad, un reconocimiento o una confesión de parte, puesto que no consigue otro efecto que reconocer y proclamar el presunto “plagio” o la “copia” que ha realizado. No llega ni a citar el nombre del autor copiado, como no indica tampoco en ninguna parte el título ni la fecha de la tesis doctoral inédita copiada, que no se incluye, por cierto, en

la abundante y no siempre utilizada “bibliografía” de este libro. La verdad es que el profesor Solís (según precisa advertencia que nos ha sido hecha por su parte) en ningún caso, ni en ningún momento, “ha tenido la amabilidad” de facilitar al profesor Baltar “esta información sobre el protonotario”, en contra de lo que se afirma en la nota 449 del libro. Lo “plagiado” o “copiado” por Baltar no es “información”, sino pura y simple copia literal del texto de la tesis doctoral de Solís y apropiación indebida de las fuentes tanto manuscritas o documentales como impresas o bibliográficas utilizadas por Solís.

Tan sólo falta añadir el “pequeño detalle” de que Juan Francisco Baltar formó parte como miembro suplente –y en tal concepto emitió y firmó el informe preceptivo (naturalmente favorable)– del tribunal encargado de juzgar, apenas dos años antes de la publicación de este libro, la tesis doctoral de José Solís, quien tuvo que esperar hasta el año 2008 para ser profesor titular de Historia del derecho y de las instituciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

En el capítulo 5 de la parte dedicada al “Desarrollo histórico” de la Protonotaría de Aragón, capítulo titulado “Los últimos protonotarios” (pp. 171-182), el “plagio” o la “copia” de la tesis doctoral inédita de José Solís realizada en este libro de Juan Francisco Baltar ha consistido en lo siguiente:

1º) En el texto de las pp. 171-172, Baltar ha incluido un párrafo de diez líneas copiado literalmente de las pp. 315-316 de la tesis doctoral de José Solís.

2º) En la nota 410 de la p. 171 (una nota de siete líneas), Baltar ha copiado literalmente la nota 942 de la tesis doctoral de Solís, haciendo pasar como propias las referencias bibliográficas indicadas en dicha nota 942 de la tesis doctoral de Solís, entre las cuales se incluyen las *Constitucions, capitols y actes de Cort* publicados en Barcelona en los años 1702 y 1704.

3º) En el texto de las pp. 172-173, Baltar ha incluido un párrafo de seis líneas copiado literalmente de la p. 315 de la tesis doctoral de Solís.

4º) En la nota 411 de la p. 172, Baltar ha copiado literalmente la nota 943 de la tesis doctoral de Solís, haciendo pasar como propia la referencia bibliográfica indicada en dicha nota 943 de la tesis doctoral de Solís.

5º) En la nota 414 de la p. 172, Baltar ha copiado literalmente la nota 939 de la tesis doctoral de Solís, haciendo pasar como propia la referencia bibliográfica indicada en dicha nota 939 de la tesis doctoral de Solís.

6º) En la nota 415 de la p. 173, Baltar ha copiado literalmente la nota 940 de la tesis doctoral de Solís, haciendo pasar como propia la referencia indicada en dicha nota 940 de la tesis doctoral de Solís, que son las *Constitucions, capitols y actes de Cort* publicados en Barcelona en el año 1706.

7º) En la nota 416 de la p. 173, Baltar ha copiado literalmente la nota 941 de la tesis doctoral de Solís, haciendo pasar como propia la referencia bibliográfica indicada en dicha nota 941 de la tesis doctoral de Solís.

En el capítulo 6 de la parte dedicada al “Desarrollo histórico” de la Protonotaría de Aragón, capítulo titulado “La Protonotaría con el archiduque Carlos” (pp. 183-187), el “plagio” o la “copia” de la tesis doctoral inédita de José Solís realizada en este libro de Juan Francisco Baltar ha consistido en lo siguiente:

1º) En el texto de la p. 183, Baltar ha incluido un párrafo de diez líneas copiado – literalmente o con alguna paráfrasis inconfundible– de las pp. 313-314 y de la nota 934 de la tesis doctoral de Solís.

2º) En la nota 450 de las pp. 183-184 (una nota de diez líneas), Baltar ha copiado literalmente del texto de la p. 316 y el contenido de la nota 944 de la tesis doctoral

de Solís, haciendo pasar como propias las referencias bibliográficas indicadas en dicha nota 944 de la tesis doctoral de Solís.

3º) En el texto de la p. 184, Baltar ha incluido un párrafo de diecinueve líneas copiado literalmente de la p. 314 de la tesis doctoral de Solís.

4º) En la nota 451 de la p. 184, Baltar ha incluido una frase copiada literalmente del texto de las pp. 314-315 de la tesis doctoral de Solís, dando además como suya la referencia bibliográfica contenida en la nota 935 de la tesis doctoral de Solís.

5º) En la nota 452 de la p. 184, Baltar ha incluido como suyas las referencias bibliográficas contenidas en las notas 936, 937 y 938 de la tesis doctoral de Solís.

6º) En el texto de la p.184, Baltar ha incluido también un párrafo de dos líneas y media copiado literalmente de la p. 316 de la tesis doctoral de Solís.

7º) El “copieteo” de la nota 453 de la p. 184 de este libro de Baltar consiste en haber copiado literalmente de la p. 316 de la tesis doctoral de Solís.

8º) En el texto de la p. 185, Baltar ha incluido un párrafo de tres líneas copiado literalmente de la p. 311 de la tesis doctoral de Solís.

9º) En el texto de la p. 185, Baltar ha incluido también un párrafo de once líneas copiado literalmente de las pp. 188-189 de la tesis doctoral de Solís.

10º) El contenido de la nota 454 de la p. 185 de este libro de Baltar ha sido copiado literalmente de la p. 189 de la tesis doctoral de Solís, haciendo pasar además como aportación propia la referencia del Archivo Histórico Nacional indicada en la nota 489 de la tesis doctoral de Solís.

11º) El contenido de la nota 455 de la p. 185 de este libro de Baltar ha sido copiado literalmente del párrafo segundo de la nota 965 de la tesis doctoral de Solís, haciendo pasar además como aportación propia las dos referencias bibliográficas indicadas en dicho párrafo segundo de la nota 965 de la tesis doctoral de Solís.

12º) En el texto de la p. 185, Baltar ha incluido asimismo un párrafo de seis líneas copiado literalmente de la p. 321 de la tesis doctoral de Solís.

13º) En el contenido de la nota 456 de la p. 185 de este libro, Baltar ha hecho pasar como aportación propia la referencia documental del Archivo Histórico Nacional indicada en la nota 956 de la tesis doctoral de Solís.

14º) En el texto de las pp. 185-186, Baltar ha incluido un párrafo de cinco líneas copiado literalmente de la p. 321 de la tesis doctoral de Solís.

15º) El contenido de la nota 457 de la p. 186 de este libro de Juan Francisco Baltar ha sido copiado literalmente de la p. 321 de la tesis doctoral de Solís, haciendo pasar además como aportación propia las dos referencias documentales del Archivo Histórico Nacional indicadas en las notas 957 y 958 de la tesis doctoral de Solís.

16º) En el texto de la p. 186, Baltar ha incluido un párrafo de cuatro líneas copiado literalmente de la p. 322 de la tesis doctoral de Solís.

17º) El contenido de la nota 458 de la p. 186 de este libro de Baltar, ha sido copiado literalmente de la p. 322 de la tesis doctoral de Solís, haciendo pasar además como aportación propia las dos referencias documentales del Archivo Histórico Nacional indicadas en las notas 959 y 960 de la tesis doctoral de José Solís.

18º) En el texto de la p. 186, Baltar ha incluido también un párrafo de nueve líneas copiado literalmente en las pp. 322 y 323 de la tesis doctoral de Solís.

19º) El contenido de la nota 459 de la p. 186 de este libro de Baltar está copiado literalmente del párrafo tercero de la nota 965 de la tesis doctoral de Solís, haciendo pasar además como aportación propia la referencia bibliográfica indicada en dicho párrafo tercero de la nota 965 de la tesis doctoral de Solís.

20º) En el texto de la p. 186, Baltar ha incluido asimismo un párrafo de otras dos líneas copiado literalmente de las pp. 323-324 de la tesis doctoral de Solís.

21º) En la nota 460 de la p. 186 de este libro, Juan Francisco Baltar ha copiado literalmente y ha hecho pasar como aportación propia la referencia documental del Archivo Histórico Nacional indicada en la nota 968 de la tesis doctoral de Solís.

22º) En el texto de las pp. 186-187, Baltar ha incluido un párrafo de ocho líneas copiado literalmente de la p. 324 de la tesis doctoral de Solís.

23º) El contenido de la nota 461 de la p. 187 de este libro de Baltar está copiado literalmente de la p. 325 de la tesis doctoral de Solís, haciendo pasar además como aportación propia de Baltar la referencia documental del Archivo Histórico Nacional indicada en la nota 972 de la tesis doctoral de Solís.

24º) En el texto de la p. 187 Baltar ha incluido un párrafo de doce líneas copiado – literalmente o de forma parafraseada– de las pp. 345 y 346 de la tesis doctoral de Solís.

25º) En la nota 462 de la p. 187 de este libro, Baltar ha dado y ha hecho pasar como aportación suya la referencia del manuscrito de las *Narraciones históricas* de Francisco de Castellví indicada en la nota 1070 de la tesis doctoral de Solís.

Pero a los ojos de la comunidad científica no pueden pasar ocultos otros misterios sobre la actividad de Juan Francisco Baltar, como se patentiza en el seguimiento minucioso que debe hacerse de cómo Baltar copia a Jesús Morales Arrizabalaga. Ver en concreto Baltar, en *La Capitanía general de Aragón (1711-1808)*, Colección El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2009, y Morales, *La derogación de los Fueros de Aragón (1707-1711)*, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Zaragoza, 1986, sin cita en pp. del primero 39, 40, 41, 338, 339, 340, 341, 348, 362, 379, 393, y del segundo pp. 82, 86, 87, 88, 90, 91, 96 y 98.

Cita Baltar en *La capitanía general de Aragón* la obra monumental de Alfonso García-Gallo, que recoge varios trabajos suyos, titulada *Los orígenes españoles de las instituciones americanas. Estudios de derecho indiano*, pero hay varias ocasiones en que Baltar copia a Don Alfonso García-Gallo, sin citarlo, párrafo por aquí, párrafo por allá, cita indirecta por aquí, cita indirecta o directa por allá (Baltar, p. 21 de García-Gallo, p. 958 y 959: cita otros trabajos de García-Gallo, pero no aquel del que copia y el “copieteo” está en nota y texto; Baltar, p. 24 y García-Gallo, p. 980, sin citarlo; Baltar, p. 42 toma de García Gallo, pp. 967 y 975, sin citarlo; Baltar, p. 43 usufructúa algo de García Gallo, p. 962, sin mencionar el estudio de García Gallo que está manejando, quien a su vez tomaba el dato de José de Viera y Clavijo, citándolo; Baltar, p. 43 toma de García-Gallo, p. 980, sin citarlo; Baltar, p. 50 sigue a García-Gallo, p. 975, sin citarlo; Baltar, p. 198 y García-Gallo, p. 980, sin citarlo; Baltar, p. 206 de Don Alfonso García-Gallo y de Diego, p. 980, sin citarlo; Baltar, p. 207 y García-Gallo, p. 980, sin citarlo; Baltar, p. 331 y García-Gallo, p. 964, sin citarlo, del que toma la referencia de Juan de Solórzano Pereyra; Baltar, p. 332 toma de García-Gallo, pp. 964 y 980, sin citarlo; Baltar, p. 352 toma de García-Gallo, p. 980, sin citarlo).

Además, Juan Francisco Baltar ha usufructuado muchos datos en sus trabajos de la monumental obra de Ernst Schäfer sobre *El Consejo Real y Supremo de las Indias*, Sevilla, 1935 y 1947, y reimp. de 1975, citándolo en algunas ocasiones y copiándolo sin cita en otras, dando como propias afirmaciones de Schäfer y, por supuesto, sin comillas. Veamos tres ejemplos en que Baltar no cita a Schäfer. ¿Es posible que la coincidencia entre ambos sea tan precisa o que Baltar redacte tan igual a Schäfer?:

«...del Lic. Gasca de Salazar, Presidente interino de Indias, de Don Francés de Alava, Consejero de Guerra y de los dos Secretarios Delgado y Antonio de Eraso... Indif. Gral. 1887» (Ernesto Schäfer, 1935, reimp. 1975, p. 170).

«...el licenciado Gasca de Salazar, Presidente interino de Indias, y Francés de Alava, consejero del de Guerra, y los secretarios Delgado y Antonio de Eraso... Indif. Gral., leg. 1887» [Juan Francisco Baltar, *Las Juntas de Gobierno en la Monarquía hispánica (siglos XVI-XVII)*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, p. 497, sin citar a E. Schäfer en este caso).

«...el nombramiento... del Gobernador y Capitán General de la Isla de San Martín y San Bartolomé, que era cargo de jurisdicción mixta, se hallan asimismo dos Consultas... la Junta y la Cámara... Consultas de 9 y 10-VI-1644... Indif. Gral. 763» (Ernesto Schäfer, 1935, reimp. 1975, p. 214).

«...el nombramiento... del Gobernador y Capitán General de la Isla de San Martín y San Bartolomé, que era un cargo de jurisdicción mixta, se dan dos consultas, una por la Junta y otra por la Cámara... Consultas del 9 y 10 de junio de 1644... Indif. Gral., leg. 763» (Juan Francisco Baltar, 1998, p. 513, por supuesto sin citar a E. Schäfer y dándolo como consultado por el propio Baltar).

«...su derecho de consultar... como la Cámara antigua de Indias, todos los asuntos de oficios y mercedes, mientras que para la Junta de Guerra debiesen quedar sólo las cosas militares de gobierno, guerra y justicia, y los despachos de las flotas. A lo sumo quería conceder que en provisiones militares de plazas y mercedes asistiesen a la Cámara los miembros actuales de la Junta, que eran Consejeros de Indias, y previamente citados tres Consejeros de Guerra, aunque con esto se aumentaría indebidamente el número de los miembros de la Cámara... Indif. Gral. 763, Consulta de a Cámara de Indias, de 10-V-1644» (Ernesto Schäfer, 1935, reimp. 1975, p. 213).

«...su derecho... de consultar todos los asuntos de plazas militares, oficios y mercedes en Indias, como lo había hecho la antigua Cámara, a lo más se permitía que asistieran en las provisiones de plazas y mercedes los miembros de la Junta pertenecientes al Consejo de Indias, y tres del de Guerra, previamente citados... , aunque esta solución aumentaría... el número de miembros de la Cámara. Mientras que para la *Junta de Guerra* quedarían únicamente los temas militares de gobierno, guerra y justicia... y despacho de las flotas... Consulta de la Cámara de Indias de 10 de mayo de 1664... Indif. Gral., leg. 763» (Juan Francisco Baltar, 1998, p. 514; son demasiadas coincidencias para no citar a Schäfer y, por supuesto, no poner comillas sino dar como propio ese párrafo y esa consulta).

Agradezco a la redacción de la *Revista europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas* el que me hayan permitido publicar, para tranquilidad de mi conciencia, esta rectificación de lo que escribí en su momento. Si Juan Francisco Baltar o cualquiera de sus allegados respondiera a estas anotaciones, solicitaría de la redacción de esta publicación periódica poder incluir a doble columna un cotejo minucioso de esta enojosa actividad llevada a cabo por el copión. También desearía, con un sistema a doble columna (a la izquierda el autor plagiado, con su texto plagiado y la fecha y página y a la derecha el copión, copista o plagión con las circunstancias indicadas), poder editar una amplia relación de cotejos

plagiarios<sup>1</sup> descubiertos por mí de autores que han sido objeto de copias vergonzosas.

Los copiados son Francesco Calasso, Celestino Pardo, Alfonso Otero, Rodríguez Mourullo, Rafael Gibert y Sánchez de la Vega, José A. Escudero, Ricardo Gómez Rivero, Carmen Sevilla, Luis Antonio Ribot García, Jesús Morales Arrizabalaga (profesor titular de Historia del derecho y de las instituciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza), Alfonso García-Gallo y Ernst Schäfer, entre otros.

En cualquier caso vamos a tener una buena oportunidad con ocasión de la aparición del homenaje a José Antonio Escudero López. Él sabe perfectamente quienes son los 8 plagiarios (descubiertos hasta ahora, pues hay quienes afirman que el número es casi el doble) próximos o ya alejados de su escuela, desde la baronesa de Franckenau y señora de las cuatro villas encartadas de Copyotero, Copycalasso, Copypardo y Copymourullo, pasando por los que copiaron proyectos docentes, uno de ellos 143 páginas (no 160, que ya se sabe que eran 143; previamente el suyo escrito por él era de 5 y media páginas, no de 16), limpiamente sin modificaciones sacadas de un disquette y dadas como propias para ganar un concurso de profesor contratado para subir los puntos que le hacían falta desplazando a otro que le superaba y luego además volvió a presentar dicho proyecto en una habilitación con escasos añadidos, hasta aquél que viajaba de Jerusalén a Roma y de Roma a Jerusalén hablando alemán, italiano, francés, latín e inglés y luego en 2005 y 2006 solo hablaba y escribía en castellano, o que fue de Bilbao a Toledo ciento setenta y cuatro veces sin pasar por Simancas antes del 1 de noviembre de 2007.

Si aparecen allí en el citado homenaje al maestro Escudero, al comentar sus colaboraciones, solamente haremos referencia a sus actividades copísticas, dando el mayor número de detalles donde localizarlas y describiendo en qué consisten, no ocupándonos del contenido de su artículo. No creemos que a ellos les interese, ni Escudero salga beneficiado en su homenaje con semejante acompañamiento de copistas, plagiones y plagiarios. Y para ello, al estilo de los clásicos, me ceñiré de

---

<sup>1</sup> La presente publicación periódica, como es obligado, debe publicar la rectificación que pueda presentar Juan Francisco Baltar, si lo considera oportuno, y consecuentemente la dúplica con cotejo de Guillermo Hierrezuelo, si la ve necesaria este último, pero como Vicesecretaria de redacción y responsable de la edición, a mi modesto juicio, pretender el Dr. Hierrezuelo que se le publiquen unos cotejos que nada tienen que ver con su rectificación sobrepasa enormemente el objetivo de su propia rectificación que hemos acogido benevolentemente y con espíritu de tolerancia, pues de hacerlo estaríamos expuestos a publicar interminables rectificaciones, y esta revista no se puede remonter al Barón de Franckenau, ni mucho menos a la manzana de Eva. Debe buscar otras sedes para sus deseos o propósitos. Debe igualmente tener en cuenta que esta revista solo cuenta con sección de artículos y de recensiones, no de noticias, ni de debates, ni de discusiones doctrinales, ni mucho menos tribales. Sin que ello suponga, como todo el mundo sabe, que los plagios son una actividad científica completamente deleznable, tipificada en el Código penal y en la Ley de propiedad intelectual. Por otro lado, los plagios de que nos podemos hacer eco sólo serían sobre las materias específicas de nuestra revista indicadas en la página web, dentro de las normas de publicación, es decir quedan excluidos, entre otros, el Derecho privado romano, el Derecho común, la Historia del derecho privado, penal, procesal, concursal, laboral y agrario, y también la Historia del pensamiento económico y la Historia de las doctrinas exclusivamente sociales, carentes de contenido político. Igualmente, dado que *Rudimentos legales* es una revista cerrada, podemos acoger la rectificación del Dr. Chamocho Cantudo si la viera necesaria o conveniente sobre el libro del protonotario de F. Baltar. No obstante, estos son criterios que puede modificar el Consejo de redacción de la revista y a los que he de atenerme en todo caso, aunque lógicamente lo que no debe ser, no puede ser, por muchas razones que asistan al Dr. Hierrezuelo. [*Miriam Seghiri*, 11 de enero de 2011].



fortaleza y no se me caerán las alas del corazón a la hora de decir la verdad, porque “Neukommen willkommen”. Si no aparecen en el homenaje no habrá necesidad de comentar nada al respecto y nos ahorraremos el correspondiente sepancuantos.

No quisiera terminar mi rectificación sin ofrecer dos botones de muestra sobre dos personajes sugestivos al máximo, finísimos donde los hubiera, Felipe Gallart y Juan Francisco de Verneda.

José Solís escribió literalmente de ellos en 1999, en su tesis entonces inédita y ahora ya no tanto porque la vamos conociendo a través del copión. Baltar no da la impresión de que haya sido besado ni por las Musas ni por las Gracias para tener semejantes coincidencias con Solís:

«Establecida desde entonces la Secretaría de Cataluña, figuraron como Oficiales de la misma... Juan Francisco de Verneda, Felipe Gallart, Juan Rusiñol y Agustín Pedrosa. El primero de ellos, Juan Francisco de Verneda, será más adelante... Secretario de la Negociación de Cataluña y Lugarteniente de protonotario de la Corona de Aragón; por su parte, también los otros tres oficiales mencionados continuarían en la Secretaría de Cataluña de este Consejo de Aragón del Archiduque» (Solís, 1999, p. 316).

«Establecida desde entonces la secretaría de Cataluña, figuraron como Oficiales de la misma Juan Francisco de Verneda, Felipe Gallart, Juan Rusiñol y Agustín Pedrosa. El primero de ellos, Juan Francisco de Verneda, será más adelante secretario de la negociación de Cataluña y lugarteniente de protonotario de la Corona de Aragón; por su parte, también los otros tres oficiales mencionados continuarían en la secretaría de Cataluña de este Consejo de Aragón del archiduque...» (Baltar, 2001, nota 450, naturalmente sin citar a Solís).

«Consta que Felipe Gallart se mantenía en este empleo en marzo de 1713, cargo al que unía entonces el de Oficial Mayor de la Secretaría de la Orden de Montesa, “sirviendo sendos empleos con muy moderado salario”... En la designación de Felipe Gallart como Oficial primero de la Protonotaría del Archiduque Carlos no siguió de manera estricta la recomendación de la Junta Política, en cuya terna aparecía en primer lugar el aragonés Joaquín López de Cenedo. Éste recibió, en cambio, el nombramiento de Oficial segundo de la Protonotaría, empleo para el que, al igual que en los anteriores, “pueden concurrir los de los tres reynos” de la Corona de Aragón» (Solís, 1999, p. 322).

«Consta que Felipe Gallart se mantenía en este empleo en marzo de 1713, cargo al que unía entonces el de Oficial Mayor de la Secretaría de la Orden de Montesa, “sirviendo sendos empleos con muy moderado salario”... En la designación de Felipe Gallart como Oficial primero de la Protonotaría del Archiduque Carlos no siguió de manera estricta la recomendación de la Junta Política, en cuya terna aparecía en primer lugar el aragonés Joaquín López de Cenedo. Éste recibió, en cambio, el nombramiento de Oficial segundo de la Protonotaría, empleo para el que, al igual que en los anteriores, “pueden concurrir los de los tres reynos” de la Corona de Aragón» (Baltar, 2001, nota 458, por supuesto sin citar a Solís).

Creo que resulta sumamente expresivo. A buen entendedor pocas palabras bastan. No es un problema ni de intertextualidad, ni mucho menos de intersexualidad, ni de superposición planetaria, sino un caso fehaciente en el que se observa la acción y el efecto de plagiar, es decir hacer propio lo que en realidad fue escrito por otro y sin citarlo, ni poner comillas. [*Recibido el 28 de diciembre de 2010*].

Guillermo Hierrezuelo Conde